



# **Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

Dirección General de Estudios de Posgrado  
Facultad de Derecho y Ciencia Política  
Unidad de Posgrado

## **Discriminación contra la mujer en el Perú. causas, consecuencias jurídicas y propuestas legislativas**

### **TESIS**

Para optar el Grado Académico de Magíster en Derecho con  
mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos

### **AUTOR**

Francisco Alberto GÓMEZ SÁNCHEZ TORREALVA

Lima, Perú

2010



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

## Referencia bibliográfica

---

Gómez, F. (2010). *Discriminación contra la mujer en el Perú. causas, consecuencias jurídicas y propuestas legislativas*. Tesis para optar grado de Magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Unidad de Posgrado, Facultad de Derecho y Ciencia Política, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

---

Esta investigación está dedicada a mi madre,  
Mirtha María Torrealva Idiáquez,  
y a mi padre,  
Ángel Francisco Gómez Sánchez Costa,  
quienes me enseñaron  
que las diferencias constituyen brechas salvable  
si se toma en consideración al otro  
como un ser humano  
valioso en su identidad e irrepetibilidad.

Asimismo, dedico esta investigación a mi esposa,  
Silvana Lorena Armas Diéguez,  
quien desde su comprensión  
supo tolerar días y noches de alejamiento  
en este frenesí de luchar contra la corriente  
y de construir respuestas frente a preguntas  
que durante más de veinticinco años rondaron mi mente.

Finalmente, debo agradecer a las mujeres,  
quienes han servido para comprender este mundo  
que aún me presenta incógnitas,  
pero que revela en los esbozos de respuestas  
las razones que me hacen creer que estoy en lo cierto:  
Son ellas discriminadas por la misma razón que lo soy yo.

# ÍNDICE

	<b>Página</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>13</b>
<b>1. <u>TEMA DE INVESTIGACIÓN</u></b>	<b>18</b>
<b>2. <u>PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA</u></b>	<b>18</b>
2.1. <u>DIAGNÓSTICO SITUACIONAL</u>	18
2.1.1. <u>Discriminación contra la mujer en el acceso a la salud</u>	18
2.1.1.1. Líneas generales sobre la eficacia en las prestaciones de salud	19
2.1.1.2. Discriminación contra la mujer en el acceso a prestaciones de salud física	24
2.1.1.3. Discriminación contra la mujer en el acceso a prestaciones de salud mental	41
2.1.2. <u>Discriminación contra la mujer en el acceso a la educación</u>	47
2.1.2.1. Lineamientos generales sobre la educación	48
2.1.2.2. Discriminación contra la mujer en el acceso a la alfabetización	50
2.1.2.3. Discriminación contra la mujer en el acceso a los diferentes niveles de educación	57
2.1.3. <u>Discriminación contra la salud en el ámbito laboral</u>	67
2.1.3.1. Lineamientos generales sobre el trabajo	67
2.1.3.2. Discriminación a la mujer en la remuneración	70
2.1.3.3. El trabajo invisible del “ama de casa”	72
2.2. <u>PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN</u>	89
2.2.1. Preguntas generales	89
2.2.2. Preguntas específicas	92

	<b>Página</b>
2.3. <u>OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN</u>	94
2.3.1. Objetivos generales	94
2.3.2. Objetivos específicos	97
2.4. <u>JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN</u>	101
2.5. <u>DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN</u>	102
<b>3. <u>MARCO TEÓRICO</u></b>	103
3.1. <u>MARCO HISTÓRICO</u>	103
3.1.1. La mujer en el Perú prehispánico	104
3.1.2. La mujer en el Virreinato	107
3.1.3. Influencia de la Revolución Francesa en el rol de la mujer	110
3.1.4. Las mujeres en el proceso independentista	112
3.1.5. La mujer en el Perú republicano del siglo XIX	115
3.1.6. La mujer en el Perú del siglo XX	116
3.2. <u>MARCO LEGISLATIVO</u>	134
3.2.1. <u>Legislación peruana</u>	134
3.2.1.1. <u>Legislación del siglo XIX</u>	134
a. Constituciones Políticas	134
b. Código Civil de 1852	135
c. Código de Comercio de 1852	138
3.2.1.2. <u>Legislación del siglo XX</u>	139
a. Código de Procedimientos Civiles de 1911	139
b. Constitución Política de 1920	140

	<b>Página</b>
c. Constitución Política de 1933	140
d. Código Civil de 1936	142
e. Ley N° 12391: Concesión del voto femenino en las elecciones generales	144
f. Constitución Política de 1979	146
g. Código Civil de 1984	150
h. Constitución Política de 1993	154
i. Ley de protección frente a la violencia familiar	156
j. Ley de igualdad de oportunidades (Ley N° 28983)	156
 3.2.2. <u>Instrumentos internacionales de protección de la mujer suscritos por Perú</u>	 159
 3.2.2.1. <u>Instrumentos de alcance general</u>	 161
a. Declaración Universal de los Derechos Humanos	161
b. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	162
c. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	162
d. Convención Interamericana sobre Derechos Humanos	163
 3.2.2.2. <u>Instrumentos de alcance particular</u>	 163
a. Convención sobre los derechos políticos de la mujer	163
b. Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer	164
c. Protocolo Facultativo a la Convención para eliminar todas las formas de discriminación de la mujer	166
d. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem do Pará”)	167
 3.3. <u>MARCO JURISPRUDENCIAL</u>	 168
a. Concepto de igualdad	168
b. La igualdad como principio	169
c. La igualdad como derecho	170
d. Igualdad formal	170

	<b>Página</b>
e. Igualdad ante la ley	171
f. Igualdad en la aplicación de la ley	172
g. Igualdad material	173
h. Igualdad de trato	174
i. Derecho a la igualdad entre mujeres y varones	175
j. Relación de la igualdad con otros derechos fundamentales	175
k. Relación de la igualdad con el derecho a la dignidad	176
l. Concepto de diferenciación	177
m. Concepto de discriminación	178
n. Proscripción de la distinción por razones sexuales	179
ñ. Discriminación en el ámbito laboral	180
o. Discriminación directa en el trabajo	181
p. Discriminación indirecta en el trabajo	181
q. Discriminación por embarazo en el trabajo	170
r. Discriminación por embarazo en las Escuelas de las Fuerzas Armadas	182
t. Acciones positivas	185
 3.4. <u>LEGISLACIÓN COMPARADA</u>	 186
 3.4.1. <u>América Latina</u>	 186
3.4.1.1. Colombia	186
3.4.1.2. Bolivia	188
3.4.1.3. Venezuela	190
3.4.1.4. Paraguay	194
3.4.1.5. Costa Rica	195
 3.4.2. <u>Europa</u>	 197
3.4.2.1. España	197
3.4.2.2. Polonia	199
3.4.2.3. Francia	200



	<b>Página</b>
3.5. <u>MARCO TEÓRICO EN SENTIDO ESTRICTO</u>	201
3.5.1. <u>La igualdad</u>	201
3.5.1.1. <u>Dimensiones de la igualdad</u>	206
a. Principio de igualdad	206
b. Derecho fundamental a la igualdad	208
3.5.1.2. <u>Clases de igualdad</u>	210
3.5.1.2.1. <u>Igualdad jurídica entre el varón y la mujer</u>	210
a. La igualdad de la mujer ante la ley	211
b. La igualdad de la mujer en la ley	213
c. La igualdad de la mujer en la aplicación de la ley	215
3.5.1.3.2. <u>Igualdad material de la mujer</u>	220
a. Igualdad de trato a favor de la mujer	221
b. Igualdad de oportunidades a favor de la mujer	224
3.5.1.3. <u>Perspectiva de género como mecanismo para concretar la igualdad material de la mujer</u>	226
a. Evolución del enfoque de género	227
b. Dimensión de género como guía para comprender la realidad	228
c. Perspectiva de género como mecanismo para conseguir la equidad	228
3.5.2. <u>Discriminación contra la mujer</u>	231
3.5.2.1. <u>La cultura como condicionante de la discriminación contra la mujer</u>	236
a. Concepto de cultura	236
b. Identidad cultural	238
c. La otredad como oposición a la cultura	239
d. Proceso interno de discriminación	241
3.5.2.2. <u>Clases de discriminación</u>	244

	<b>Página</b>
a. Discriminación directa	244
b. Discriminación indirecta	245
c. Discriminación inconsciente	247
d. Discriminación consciente	249
e. Discriminación interseccional	250
 3.5.3. <u>Manifestaciones de discriminación contra la mujer</u>	 254
3.5.3.1. Discriminación de la mujer por la mujer	254
3.5.3.2. Violencia contra la mujer	267
 3.5.4. <u>Diferenciación</u>	 291
3.5.4.1. Características de las medidas diferenciadoras	295
3.5.4.2. Acciones positivas como medidas diferenciadoras	298
3.5.4.3. Clasificación de las acciones positivas	302
3.5.4.4. Acciones positivas a favor de la mujer	304
 3.5.5. <u>Proceso de amparo como mecanismo de tutela de la igualdad de la mujer</u>	 305
3.5.5.1. Proceso de amparo	306
3.5.5.2. Medida cautelar	329
 3.6. <u>MARCO CONCEPTUAL</u>	 335
 3.6.1. <u>La igualdad</u>	 335
3.6.1.1. Dimensiones de la igualdad	336
3.6.1.2. Clases de igualdad	337
3.6.1.2.1. Igualdad jurídica entre el varón y la mujer	337
3.6.1.2.2. Igualdad material de la mujer	338
 3.6.2. <u>Discriminación contra la mujer</u>	 339
3.6.2.1. Clases de discriminación	339

	<b>Página</b>
3.6.2.2. Machismo como causa de la discriminación contra la mujer	341
3.6.3. <u>Diferenciación</u>	341
3.6.3.1. Acciones positivas como medidas diferenciadoras	342
<b>4. <u>HIPÓTESIS</u></b>	342
4.1. <u>HIPÓTESIS GENERAL</u>	342
4.2. <u>HIPÓTESIS ESPECÍFICAS</u>	354
4.2.1. Primera hipótesis específica	354
4.2.2. Segunda hipótesis específica	365
<b>5. <u>TIPO DE INVESTIGACIÓN</u></b>	375
5.1. Investigación descriptiva	375
5.2. Investigación correlacional	375
5.3. Investigación exploratoria	376
5.4. Investigación explicativa	376
<b>6. <u>DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN</u></b>	377
<b>7. <u>UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN. SELECCIÓN DE MUESTRA. UNIDAD DE ANÁLISIS</u></b>	378
7.1. UNIVERSO (N)	378
7.2. UNIDAD DE ANÁLISIS (n)	378
7.3. SELECCIÓN DE MUESTRA	378
<b>8. <u>TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS</u></b>	381

	<b>Página</b>
8.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	381
8.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	383
<b>9. <u>CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS</u></b>	383
<b>10. <u>ORDENAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS</u></b>	384
10.1. <u>ORDENAMIENTO DE LOS DATOS</u>	384
10.2. <u>ANÁLISIS DE LOS DATOS</u>	386
10.2.1. <u>Aplicación de fórmula estadística</u>	386
10.2.1.1. <u>Relación entre machismo y discriminación</u>	387
10.2.1.1.1. El sexo como condicionante de la relación machismo y discriminación	390
10.2.1.1.1.1. Relación entre machismo y discriminación en las mujeres	390
10.2.1.1.1.2. Relación entre machismo y discriminación en los varones	393
10.2.1.2. <u>Relación entre sexo y discriminación</u>	396
10.2.1.2.1. Relación entre sexo y discriminación en las mujeres	398
10.2.1.2.2. Relación entre sexo y discriminación en los varones	401
10.2.1.3. <u>Relación entre estereotipos y discriminación</u>	404
10.2.1.3.1. El sexo como condicionante de la relación estereotipos y discriminación	406
10.2.1.3.1.1. Relación entre estereotipos y discriminación en las mujeres	406
10.2.1.3.1.2. Relación entre estereotipos y discriminación en los varones	409
10.2.1.4. <u>Relación entre edad y discriminación</u>	412
10.2.1.4.1. Relación con la discriminación de acuerdo a la clasificación de la edad	414
10.2.1.4.1.1. Relación entre juventud y discriminación	414

	<b>Página</b>
10.2.1.4.1.2. Relación entre adultez y discriminación	417
10.2.1.4.2. El sexo como condicionante de la relación edad y discriminación	420
10.2.1.4.2.1. Relación entre edad y discriminación en las mujeres	420
10.2.1.4.2.1.1. Relación entre juventud y discriminación en las mujeres	420
10.2.1.4.2.1.2. Relación entre adultez y discriminación en las mujeres	423
10.2.1.4.2.2. Relación entre edad y discriminación en los varones	425
10.2.1.4.2.2.1. Relación entre juventud y discriminación en los varones	425
10.2.1.4.2.2.2. Relación entre adultez y discriminación en los varones	428
 10.2.1.5. <u>Relación entre nivel educativo y discriminación</u>	 431
10.2.1.5.1. Relación con la discriminación de acuerdo al nivel educativo	433
10.2.1.5.1.1. Relación entre nivel educativo básico y discriminación	434
10.2.1.5.1.2. Relación entre nivel educativo superior y discriminación	436
10.2.1.5.2. El sexo como condicionante de la relación nivel educativo y discriminación	439
10.2.1.5.2.1. Relación entre nivel educativo y discriminación en las mujeres	441
10.2.1.5.2.1.1. Relación entre nivel educativo básico y discriminación en las mujeres	441
10.2.1.5.2.1.2. Relación entre nivel educativo superior y discriminación en las mujeres	444
10.2.1.5.2.2. Relación entre nivel educativo y discriminación en los varones	447
10.2.1.5.2.2.1. Relación entre nivel educativo básico y discriminación en los varones	449
10.2.1.5.2.2.2. Relación entre nivel educativo superior y discriminación en los varones	452
 <b>11. <u>ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL</u></b>	 454
11.1. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LA DOCTRINA	455
11.2. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LA LEGISLACIÓN	458
11.3. ANTEPROYECTO DE LEY	461
 <b>12. <u>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</u></b>	 481
12.1. CONCLUSIONES	481

	<b>Página</b>
12.2. RECOMENDACIONES	484
<b><u>BIBLIOGRAFÍA</u></b>	496
<b><u>ANEXOS</u></b>	510
I. Análisis porcentual	511

## INTRODUCCIÓN

La igualdad entre todos los seres humanos es una falacia que muchas veces ha pretendido fundarse en la cláusula contenida en el artículo 2° inciso 2 de la Constitución Política. En efecto, la comunidad jurídica ha prescindido tomar a la realidad como referente de toda premisa que pretenda ser incorporada al ordenamiento legal o que sustente la interpretación de los dispositivos legales, a efectos de tornarlos normas jurídicas que respondan a problemas identificados en la realidad y que nos permitan partir del presupuesto que existen diversos colectivos que han sido relegados del pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

Uno de ellos lo constituyen **las mujeres, quienes a pesar de no ser minoría cuantitativamente, lo son en términos cualitativos**, apreciados a través de indicadores como la mayor propensión al analfabetismo<sup>1</sup>, menor acceso a la educación<sup>2</sup> y menor remuneración<sup>3</sup> en comparación a los varones.

**Este panorama es resultado de un proceso histórico** que ha implicado profundas transformaciones sociales recogidas por historiadoras como María Rostworowski<sup>4</sup> -en lo que al estudio de la mujer prehispánica obedece-, pasando por el rol preeminentemente servil durante la colonia<sup>5</sup> -apuntado por Patrucco-, el invisible en el proceso independentista<sup>6</sup>, el contestatario durante la república decimonónica<sup>7</sup> y el libertario de mediados del siglo pasado<sup>8</sup>, configurado a partir de su visibilización.

---

<sup>1</sup> ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA. "Iberoamérica: territorio libre de analfabetismo. Plan iberoamericano de alfabetización y educación básica de personas jóvenes y adultas 2007-2015. Documento base". Montevideo, 2006, p. 13.

<sup>2</sup> INEI. "Perfil sociodemográfico del Perú". INEI, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y PNUD. Lima, 2008, p. 89.

<sup>3</sup> VELAZCO PORTOCARRERO, Tatiana (Coordinadora). "La mujer en el mercado laboral peruano. Informe anual 2005". Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Lima, 2006, p. 31.

<sup>4</sup> ROSTWOROWSKI, María. "La mujer en el Perú prehispánico". Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Lima, 1995, pp. 5 y sgts.

<sup>5</sup> PATRUCCO, Sandro. "El Perú virreinal. Sociedad, economía y arte". Editores Lexus. Barcelona, 2000, p. 19.

<sup>6</sup> VALDIVIESO, Magdalena. "Las mujeres y la política a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX en Venezuela". En: *Otras miradas*. Volumen 7, N°1. Universidad de los Andes. Caracas, 2007, pp. 197-198.

A lo largo de los últimos cien años, nuestro ordenamiento jurídico ha incorporado una serie de cuerpos normativos dirigidos a tutelar la igualdad formal de la mujer. Así, por ejemplo, tenemos la Ley N° 4526, del 19 de septiembre de 1924 (que permitió la participación de la mujer en las Sociedades de Beneficencia Pública), la Ley N° 12391, del 7 de septiembre de 1955 (que modificó los artículos 84° y 86° de la Constitución de 1933, concediendo el voto a las mujeres en las elecciones generales), el Decreto Ley N° 21208, del 8 de julio de 1975 (que determina la igualdad remunerativa de la mujer), la Constitución Política de 1979 (artículo 2° inciso 2), la Ley N° 24975, del 28 de diciembre de 1988 (que permite el acceso de las mujeres a la Escuela de Oficiales), la Constitución Política de 1979 (artículo 2° inciso 2), la Ley N° 26260, del 22 de diciembre de 1993 (Ley de Protección frente a la Violencia Familiar), la Ley N° 26730, del 30 de diciembre de 1996 (que crea el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano) y la Ley N° 28983, del 16 de marzo de 2007 (Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres), entre otras.

De igual manera, contamos con instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (ratificadas las tres últimas por el Estado peruano el 28 de abril de 1978), en lo que instrumentos de alcance general se refiere. Respecto a instrumentos internacionales de carácter particular, nuestro Estado es parte de la Convención sobre los derechos políticos de la mujer (aprobada y ratificada el 11 de junio de 1975 por el Perú), la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer (ratificada por nuestro país el 3 de septiembre de 1982), el Protocolo Facultativo a la Convención para eliminar todas las formas de discriminación de la mujer (ratificado por nuestro país el 9 de abril de 2001) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (también

---

<sup>7</sup> VARGAS LLOSA, Mario. “Prólogo. Flora Tristán y Paul Gauguin”. En: *Peregrinaciones de una paria*. Flora Tristán. Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 2003, p. 17.

<sup>8</sup> VILLANUEVA CHÁVEZ, Victoria y HERRERA GARCÍA, Elizabeth. “50 años del voto de las mujeres”. Manuela Ramos. Lima, 2005, p. 9.



conocida como “Convención de Belem do Pará”, ratificada por el Estado peruano el 4 de junio de 1996).

**Sin embargo, la incorporación de estos cuerpos a nuestro ordenamiento no ha permitido alcanzar la igualdad material de la mujer en el ejercicio de sus derechos fundamentales**, pues las mujeres ven restringido el acceso a diversos derechos como son la educación y el trabajo, a la que se debe sumar el acceso a la salud en diversas modalidades como son la atención prenatal<sup>9</sup> o a las prestaciones de salud mental<sup>10</sup>.

**Esta situación nos lleva a plantearnos si los contenidos jurídicos insertos en la igualdad son o no adecuados**, para lo cual deberán descartarse proposiciones erradas como aquellas que propugnan que las mujeres y los varones son iguales, ya que las singulares características de ambos sexos y la situación en la que ambos grupos se encuentran en la realidad los hacen distintos. Las diferencias entre varones y mujeres no constituyen presupuestos objetivos que sustenten el trato privilegiado a favor de uno de los grupos, sino –todo lo contrario-, determina la obligación de asumir un análisis sobre los datos objetivos que permitan identificar los rasgos comunes que estos comparten, como su titularidad de derechos fundamentales, para sustentar que ambos merecen disfrutar igualmente de ellos. En tal sentido, el término de comparación se hace necesario para advertir que los dispositivos legales no encuentran eficacia en la realidad y que se requiere la implementación de medidas que respondan a los problemas identificados en la realidad en lo que respecta a las mujeres.

**Por tal motivo, el objeto de la presente investigación se dirige a determinar las causas de la discriminación contra la mujer, a efectos que sirvan de criterios orientadores para que las legisladoras y los legisladores partan de presupuestos fácticos que permitirán orientar la construcción de cláusulas normativas eficaces destinadas a**

---

<sup>9</sup> BRAVO BARJA, Rosa. “Presupuesto por resultados. Indicadores de género: educación, salud y programa juntos”. Manuela Ramos. Lima, 2007, p. 21.

<sup>10</sup> DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE DEPENDENCE. “*Gender disparities in mental health*”. Organización Mundial de la Salud, p. 2. Disponible en: [http://www.who.int/mental\\_health/media/en/242.pdf](http://www.who.int/mental_health/media/en/242.pdf). Revisado el 28 de julio de 2009/ DEFENSORÍA DEL PUEBLO. “Salud mental y derechos humanos: La situación de los derechos de las personas internadas en establecimientos de salud mental”. Informe Defensorial N° 102. Lima, 2005, p. 141.

**revertir el panorama antes expuesto y que aseguren la consecución de la igualdad material de la mujer en nuestro país.**

**En tal sentido, el autor de esta tesis acudirá a otras ciencias sociales como la sociología que nos permitirán comprender categorías en las cuales se identifica a los varones como actores del mundo público y a las mujeres del mundo privado,** constituyendo una interesante construcción que adquiere relevancia jurídica cuando la distinción propicia tratos vejatorios, sustentados en una falsa idea de superioridad que mengua la integridad de aquellas que han sido denominadas diferentes.

**Recurrir a estas construcciones sociales es trascendente, pues constituyen la cimiento de la discriminación ejercida en contra de la mujer,** puesto que lo alterno a lo reconocido como propio por la cultura quebranta el orden establecido por ella. Esto determina que cuando una mujer realiza un acto contrario al que las construcciones culturales han establecido como propios del varón, se conciba tal acto como alterno a lo correcto, determinándose la necesidad de imponer cierto freno a efectos de obstaculizar su continuidad, ya que ello amenazaría las bases mismas que la cultura ha construido y establecido sobre el referido colectivo humano.

Sobre la base de las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, el investigador desarrollará una tesis que iniciará el estudio con el planteamiento del problema, en el cual se abordará el diagnóstico de la situación de la mujer en Perú a partir del ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales, para plantearse preguntas y objetivos de investigación que regirán el desarrollo del trabajo y que, a su vez, permitirán justificarlo y delimitarlo. A continuación expondremos el marco teórico, compuesto por lineamientos históricos, legislativo nacional y comparado, jurisprudencial y teórico en sentido estricto en el que se expondrán contenidos sobre la igualdad, discriminación, diferenciación y procesales a través del proceso de amparo como mecanismo de tutela de la igualdad de la mujer.

Este marco será adecuado para formular las hipótesis como presuntas respuestas frente al problema, las cuales se derivan de las corrientes doctrinarias que abordan el fenómeno, pero que serán contrastadas con los datos obtenidos en la realidad, lo que define a esta investigación como una empírica y que permitirá determinar las relaciones entre diversas variables –como sexo, machismo, estereotipos, nivel educativo y edad- y la discriminación, a efectos de establecer sus causas y consecuencias jurídicas, con lo cual podremos formular propuestas legislativas destinadas a revertir este fenómeno social y trazar estrategias de desarrollo, que permiten el empoderamiento al involucrar a varones y mujeres como agentes decisores de su propio desarrollo.

## **1. TEMA DE INVESTIGACIÓN**

El tema sobre el que versa mi tesis es la **discriminación contra la mujer en Perú**, en la cual se identificarán los factores que condicionan tal práctica vejatoria, tomando como referente la doctrina y el desarrollo legislativo erigido en torno a los derechos de la mujer, que servirá de sustento para el planteamiento de las hipótesis que nos permitirán explicar este fenómeno, las cuales serán contrastadas a través de un estudio de campo que nos permitirá obtener datos que servirán de sustento para el aporte a la doctrina y a la normativa sobre la igualdad y proscripción de la discriminación

## **2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

El planteamiento de la presente investigación se realizará sobre la base de los siguientes planos en los que se acredita la discriminación en contra de la mujer en Perú.

### **2.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL**

A continuación, expondremos la situación de la mujer en el Perú a través del estudio de su acceso a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), precisamente en lo que a salud, educación y trabajo atañe.

#### **2.1.1. DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER EN EL ACCESO A LA SALUD**

La salud es un derecho consagrado en el artículo 7° de la Constitución Política del Estado bajo el precepto de que *“todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa”* (las cursivas son nuestras).

Sin embargo, son numerosas las ocasiones en que hemos sido testigos de denuncias en relación a la omisión en la atención o a la ineficacia en las prestaciones de salud brindadas a las mujeres. En muchas oportunidades, estas referencias no son observadas desde la

perspectiva de género<sup>11</sup> debido a que la problemática generalizada en la salud pública peruana termina por englobar la serie de dificultades que afectan a diversos grupos, sin asumir una perspectiva de estudio en relación a cada uno de ellos.

A través del presente estudio asumimos la discriminación contra las mujeres en la salud debido a que sus particulares condiciones fisiológicas determinan que sólo ellas sean objeto de ciertas prestaciones (como las prenatales, del parto y postnatales), del suministro de determinados métodos anticonceptivos que serán aplicados de manera distinta a la que lo son en relación al varón (como es el caso del diafragma), entre otros supuestos que inciden sobre su salud física y mental.

#### **2.1.1.1. Líneas generales sobre la eficacia en las prestaciones de salud**

Debe precisarse que si bien las mujeres son objeto de discriminación en el ámbito médico, estas comparten determinados rasgos de vejación en cuanto a las prestaciones de salud con el resto de grupos, pues la falta de previsión y de implementación de medidas adecuadas para la tutela de este derecho en el limitado presupuesto asignado al sector salud genera el resquebrajo de los fines del Estado social y democrático de Derecho, responsable de asegurar que la satisfacción de las necesidades básicas de la población se de en condiciones dignas, a efectos de promover una mejor calidad de vida.

##### **a. Salud pública**

La salud pública, definida por Winslow, es “la ciencia y el arte de: primero, impedir las enfermedades; segundo, prolongar la vida, y, tercero, fomentar la salud y la eficiencia mediante el esfuerzo realizado de la comunidad para el saneamiento del medio; el control de las enfermedades transmisibles; la educación de los individuos en higiene personal; la organización de los servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico temprano y el

---

<sup>11</sup> Sin perjuicio del desarrollo que se realice sobre este tema, cabe precisar que la perspectiva de género abarca la política destinada al cambio de los patrones sociales que pretenden explicar el rol femenino a través de la constatación de la realidad, la planificación de políticas, su ejecución y posterior evaluación, a fin de acreditar el cumplimiento de los objetivos propuestos: un sistema equitativo, justo y solidario.

tratamiento preventivo de las enfermedades, y el desarrollo de un mecanismo social que asegure a cada uno un nivel de vida adecuado para la conservación de la salud, organizando estos beneficios de modo que cada ciudadano se encuentre en términos de gozar de su derecho natural a la salud y a la longevidad”<sup>12</sup>.

Lo señalado por el autor nos remite al artículo 9º de la Constitución que desarrolla la política nacional de salud, la que, a decir del Tribunal Constitucional, “nace de obligaciones objetivas concretas que tienen como finalidad primordial el resguardo de derechos tomando como base el respeto a la dignidad de la persona”<sup>13</sup>.

En efecto, al ser la salud un bien jurídico directamente relacionado con la vida y la integridad personal, el Estado debe planificar políticas de salud fundamentadas en un estudio previo que determine la realidad de la salud en nuestro país para que, sobre la base de tal estudio, oriente el desarrollo de los planes públicos en torno a la satisfacción de las necesidades actuales, como también a la prevención de males que podrían acarrear el detrimento físico o mental de gran parte de nuestra población.

## **b. Resguardo de la integridad personal**

La preservación de la integridad personal constituye el objetivo a ser preservado a través de la eficacia en las prestaciones de salud. Este atributo, reconocido en el artículo 2º inciso 1 de la carta, abarca, en opinión de Garza Rodríguez, “el cuerpo humano con todos sus componentes, desde las moléculas que forman sus genes, incluyendo por tanto la integridad genética, hasta su anatomía y apariencia, así como las potencialidades intelectuales y sensoriales, incluidas las que tienen que ver con la capacidad de experimentar dolor físico o padecimiento psicológico o moral”<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> GONZÁLEZ MORÁN, Luis. “Protección de la salud y la seguridad de los consumidores y usuarios”. En: *Derechos de los consumidores y usuarios*. DE LEÓN, Alicia y GARCÍA GARCÍA, María (Coordinadores). Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, 2000, p. 679.

<sup>13</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02949-2003-AA, Fundamento Jurídico N°18.

<sup>14</sup> GARZA RODRÍGUEZ, José Luis. “El derecho a la integridad personal”. En: *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*. N° 120. Universidad Autónoma de México (UNAM). México D.F., 2007, p. 975.

Esta definición es importante en la configuración de uno de los elementos que enmarca su contenido: *la abstención de conductas u omisiones que pongan en peligro la salud física y mental*. Evidentemente, si la salud es definida como el “[c]onjunto de condiciones físicas, psíquicas y sociales que permit[en] a la persona desarrollar y ejercer todas sus facultades en armonía y relación su propio entorno”<sup>15</sup>, se desprende que su contenido protege al individuo de todo agravio o amenaza contra la salud, pues, de suceder, se atentaría contra la vida. Ello condiciona que “el derecho a la salud impon[ga] a los poderes públicos y a los particulares la prohibición de desarrollar cualquier conducta que cause daño a la salud o integridad física de otro”<sup>16</sup>.

### **c. Prestaciones de salud**

El contenido del derecho a la salud no debe ser entendido como el mero cumplimiento de una obligación establecida en determinada ley. Su contenido está determinado tanto por las facultades de las que somos todos titulares, como por las obligaciones que el Estado tiene a fin de conseguir la vigencia plena del derecho a la salud.

Por lo tanto, ambas dimensiones del contenido esencial de este derecho son expresadas a través de lo que denominamos el acceso a “prestaciones adecuadas de salud”, es decir, *específicas actuaciones estatales que consigan la finalidad perseguida por los programas estatales destinados a la protección de la salud*.

Para ello debe apuntarse al establecimiento de un conjunto de prestaciones, es decir, a “un instrumento fundamental de regulación para la fijación de prioridades y para otros objetivos de política de salud. Los objetivos últimos a los que puede contribuir la delimitación de los servicios pueden ser la mejora de la efectividad, la eficiencia y la equidad del sistema y el aumento de la garantía jurídica de los derechos de los asegurados. Dichos objetivos se

---

<sup>15</sup> PEREA QUESADA, Rogelio, “La educación para la salud, reto de nuestro tiempo”. En: *Educación XXI: Revista de la Facultad de Educación*. Nº 4. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Madrid, 2002, p. 26.

<sup>16</sup> ARBELÁEZ, Mónica, “La protección constitucional del derecho a la salud: la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana”. En: *Derecho y salud*. Nº 2. Asociación Juristas de la Salud. Madrid, 2006, p. 213.

persiguen, a menudo, de forma simultánea y es difícil fijar la prioridad que cada uno de ellos deba tener o pueda haber tenido en la configuración final del contenido de un conjunto de prestaciones”<sup>17</sup>.

Se supone que la precisión contenida en el término “adecuadas” debería ser obviada, pero debido a los innumerables casos en los que los programas estatales de salud vienen presentando ineficiencia, es razonable que la alusión sea mantenida hasta que la política nacional de salud finalmente decida dar muestra del cumplimiento de los fines que en teoría orientan su acción.

#### **d. Obligaciones estatales respecto a las prestaciones de salud**

La salud –como derecho contemplado en la denominada categoría de derechos económicos, sociales y culturales (DESC)- es erróneamente concebida como un “derecho programático”, cuando *lo programático es la naturaleza de los programas que habrán de implementarse para coadyuvar a la maximización del derecho*. Hablar de la salud como un “derechos programático” es suprimir parte de la esencia de los derechos fundamentales, pues implicaría asumir a la salud como un derecho que ha de ser satisfecho paulatinamente y no de un derecho que al ser fundamental requiere de la urgente protección por parte del Estado.

Ello, como ha señalado el Tribunal Constitucional, se justifica en la eficacia inmediata de los derechos sociales, al decir que “[s]i bien es cierto que la efectividad de los derechos sociales requiere un mínimo de actuación del Estado a través del establecimiento de servicios públicos, (...) estos derivan en obligaciones concretas por cumplir, por lo que los Estados deben adoptar medidas constantes y eficaces para lograr progresivamente la plena efectividad de los mismos en igualdad de condiciones para la totalidad de la población”<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> ANTOÑANZAS, Fernando, RODRÍGUEZ MONGUIÓ, Rosa y ROVIRA, Joan. “Conjunto de prestaciones de salud. Objetivos, diseños y aplicación”. Organización Panamericana de la Salud. Washington D.C., 2003, p. 3.

<sup>18</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02945-2003-AA, Fundamento Jurídico N° 12.



De esta manera, el colegiado delinea la obligación estatal de atender plenamente las demandas derivadas de los derechos sociales, más aún si incide en la *obligación económica del Estado* “a invertir los recursos indispensables para desarrollar las tareas necesarias que le permitan cumplir con el encargo social de garantizar el derecho a la vida”<sup>19</sup>.

Sin embargo, estas líneas de orientación han sido pasadas por alto en lo que se refiere a las prestaciones de salud física y mental que deben ser brindadas a las mujeres en nuestro país, conforme expondremos a continuación.

#### **e. Ley General de Salud**

A través de la Ley N° 268242 se aprobó la Ley General de Salud, la cual contiene algunos lineamientos que deben tomarse en consideración para la implementación de políticas dirigidas a tutelar el acceso de las mujeres a prestaciones de salud.

El artículo II de su Título Preliminar establece que “toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable”, lo cual determina que a través del artículo VI se considere que “es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o institución que los provea”, siendo “responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad”. Ello conduce, a su vez, a que el artículo XIV determine que “la información en salud es de interés público”.

Por tal motivo, el artículo 1° de la ley establece que “toda persona tiene el derecho al libre acceso a prestaciones de salud” y, de acuerdo al artículo 2°, “a exigir que los bienes destinados a la atención de su salud correspondan a las características y atributos indicados en su presentación y a todas aquellas que se acreditaron para su autorización”.

---

<sup>19</sup> Ibídem, Fundamento Jurídico N° 26.

En lo que corresponde a la salud de la mujer, su artículo V determina que “es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y atender (...) los problemas de salud (...) de la madre (...) en situación de abandono social”. Asimismo, su artículo VI, establece que “el Estado interviene en la provisión de servicios de atención médica con arreglo a principios de equidad”. De igual manera, el artículo 15°.<sup>d</sup> establece que “toda persona, usuaria de los servicios de salud, tiene derecho: (...) a no ser discriminado en razón de cualquier enfermedad o padecimiento que le afectare”.

#### **2.1.1.2. Discriminación contra la mujer en el acceso a prestaciones de salud física**

A continuación, analizaremos algunos ámbitos en los cuales se evidencia la discriminación contra la mujer en el acceso a prestaciones de salud física.

##### **a. Ejercicio de derechos reproductivos**

El desarrollo de este punto se desarrollará sobre la base del concepto de los derechos reproductivos de la mujer y la exposición de la restricción que esta ha tenido en el acceso a los métodos anticonceptivos, tomando como referente el anticonceptivo oral de emergencia (AOE).

##### **a.1. Concepto de derechos reproductivos**

Recogiendo la opinión de Pimentel<sup>20</sup>, la Defensoría del Pueblo señala que los derechos reproductivos fueron originalmente definidos como aquellos destinados a “reivindicar y proteger el derecho de las mujeres a decidir sobre su capacidad reproductiva, es decir, el derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener, a escoger el método anticonceptivo de su preferencia, así como a gozar de la información y medios adecuados para lograr ese fin, contando con programas adecuados de salud reproductiva y planificación familiar”<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> PIMENTEL, Silvia. “Derechos reproductivos. Fragmentos de reflexiones”. En: *Derechos sexuales, derechos reproductivos, derechos humanos*. III Seminario Regional. CLADEM. Lima, 2002, pp. 155-159.

<sup>21</sup> ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER. “Anticoncepción oral de emergencia. Informe Defensorial N° 78”. Defensoría del Pueblo. Lima, 2004, p. 13.

Sin embargo, esta visión ha sido superada, pues contenía un sesgo al asumir que sólo las mujeres serían titulares de este derecho, lo que por contrapartida generaría un efecto adverso, pues al asumir que sólo la mujer estaba vinculada a este derecho a, ella sería la única obligada al acceso a su información como a su empleo, dejando al varón exento de cualquier tipo de responsabilidad en torno a la decisión sobre la reproducción.

Por tal motivo, los derechos reproductivos han abandonado tal perspectiva, constituyéndose en un mecanismo que permite que tanto mujeres como varones puedan acceder a información y a métodos de anticoncepción que les permitirán decidir sobre su uso y sobre el número de hijos que desean tener. Por ello, el ejercicio de los derechos reproductivos constituye una manifestación de la libertad personal y asegura el pleno desarrollo del ser humano debido a que le proporciona las herramientas dirigidas a planificar tanto su vida como su relación de pareja.

En tal sentido, la Defensoría del Pueblo, tomando en consideración el pronunciamiento de Manuela Ramos<sup>22</sup>, afirma que “los derechos reproductivos están vinculados a un conjunto de derechos humanos universalmente reconocidos como el derecho a la libertad y seguridad personales, a la atención y protección de la salud, a la igualdad y no discriminación, a casarse y fundar una familia, a la libertad de pensamiento y de religión, a gozar de los beneficios del progreso científico así como a la información y educación”<sup>23</sup>.

De igual manera, Schilling ha señalado que “la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, entre otros, el acceso a la planificación familiar, ha aumentado y diversificado sus oportunidades, permitiendo que las mujeres opten o adopten diversos estilos de vida, ya no

---

<sup>22</sup> MANUELA RAMOS. “Derechos Humanos relacionados con los Derechos Sexuales y Reproductivos”. En: *El Cuarto Femenino*. Año 3, N° 10. Lima, 2001, pp. 26-27.

<sup>23</sup> ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER. “Anticoncepción oral de emergencia. Informe Defensorial N° 78”. Op. cit., p. 13.

limitándose sólo a la maternidad y cuidado de los hijos, sino que ejecuten múltiples roles, integrándose al mundo laboral, académico, artístico, deportivo de alto rendimiento, etc”<sup>24</sup>.

Como veremos a continuación, nuestra política de salud ha desconocido la importancia de los derechos reproductivos, generando la afectación de los derechos de la mujer en el acceso a la anticoncepción oral de emergencia (AOE), afectación que incide sobre la mujer en la medida que ella es quien se suministra tal medicamento para prevenir un embarazo no deseado.

## **a.2. Anticonceptivo oral de emergencia (AOE)**

De acuerdo al Protocolo de la AOE anexo a la Resolución Ministerial N°399-2001-SA/DM, “las Normas del Programa Nacional de Planificación Familiar reconocen como método anticonceptivo la anticoncepción oral de emergencia (AOE), esto es, el uso de píldoras anticonceptivas en dosis hormonales altas para prevenir el embarazo en un período no mayor de tres días después del coito no protegido, de una falla del método o de la violación sexual de una mujer”<sup>25</sup>.

### **a.2.1. Negativa del Ministerio de Salud de distribuir el AOE en los hospitales públicos**

Como señala la Defensoría del Pueblo, “mediante Carta SA-DM-N° 0467-2003, de 24 de enero de 2003, el doctor Fernando Carbone Campoverde, entonces Ministro de Salud, informó al congresista José Luis Risco que la anticoncepción oral de emergencia (AOE) no sería incorporada a los métodos de planificación familiar que distribuye el Ministerio de Salud, en tanto no se encontraran claros los mecanismos de acción y los efectos secundarios y peligros que este método representa a la vida humana”<sup>26</sup>, a pesar de que la Resolución

---

<sup>24</sup> SCHILLING, Andrea. “Experiencia chilena con el uso de un anticonceptivo oral combinado de acetato de clormadinona/etinilestradiol: estudio no intervencional”. En: *Revista chilena de obstetricia ginecológica*. Volumen 73, N° 5. Santiago de Chile, 2008, p. 294.

<sup>25</sup> ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER. “Anticoncepción oral de emergencia. Informe Defensorial N° 78”. Op. cit., p. 23.

<sup>26</sup> *Ibidem*, p. 12.

Ministerial N° 399-2001-SA/DM (del 13 de julio de 2001) mantenía sus efectos<sup>27</sup>, con lo cual se podía vender los AOE en farmacias, generándose una situación de discriminación en contra de las mujeres de menores recursos, quienes no podían acceder ni a información ni a las píldoras en los centros de salud del Estado.

Tal perspectiva desconocería los fines de los métodos anticonceptivos, pues como señala Bravo Barja, “el acceso y capacidad de decidir de las mujeres sobre el uso de métodos anticonceptivos modernos es una causa subyacente de la fecundidad no deseada, de la mortalidad materna y el aborto”<sup>28</sup>, pero, sobre todo, el contenido del artículo 6° de la Ley General de Salud, el cual establece que “toda persona tiene el derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia, incluyendo los naturales, y a recibir, con carácter previo a la prescripción o aplicación de cualquier método anticonceptivo, información adecuada sobre los métodos disponibles, sus riesgos, contraindicaciones, precauciones, advertencias y efectos físicos, fisiológicos o psicológicos que su uso o aplicación puede ocasionar”.

### **a.2.2. Carácter no abortivo del AOE**

Si, conforme señala la Defensoría del Pueblo, el AOE se utilizan dentro de las setenta y dos (72) horas de producido el acto sexual<sup>29</sup>, dicho mecanismo de anticoncepción no sería abortivo, ya que como afirma la OMS, “la ciencia médica considera que el embarazo ha comenzado cuando la implantación de un huevo fertilizado en el endometrio del útero de una mujer se ha completado”<sup>30</sup>, proceso que debe comprenderse sobre el presupuesto de que “el transporte del cigoto hacia el útero a través de la trompa de falopio requiere de 3 a 4

---

<sup>27</sup> Más aún si el Consejo Nacional del Colegio Médico recomendó la ejecución de dicha resolución el 9 de febrero de 2003.

<sup>28</sup> BRAVO BARJA, Rosa. “Presupuesto por resultados. Indicadores de género: educación, salud y programa juntos”. Manuela Ramos. Lima, 2007, p. 24.

<sup>29</sup> ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER. “Anticoncepción oral de emergencia. Informe Defensorial N° 78”. Op. cit., pp. 22- 25.

<sup>30</sup> “*Medical science considers that pregnancy has begun when the implantation of a fertilized egg in the lining of a woman's uterus is complete*” (la traducción es nuestra). ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). “Improving methods of emergency contraception”. En: *Progress in reproductive health research*. N° 51. 1999. Disponible en: [http://www.who.int/reproductive-health/hrp/progress/51/news51\\_1.en.html](http://www.who.int/reproductive-health/hrp/progress/51/news51_1.en.html) (Revisado el 27 de abril de 2009).

días adicionales posteriores a la fecundación. Una vez en el útero, el cigoto continuará desarrollándose hasta llegar al estado de blastocisto. En el sétimo día de desarrollo, el blastocisto deberá implantarse en la capa interna del útero (endometrio) a fin de que empiece a formarse el embrión”<sup>31</sup>. En tal sentido, si la implantación del cigoto en el endometrio se da al séptimo día, el AOE no constituiría un mecanismo abortivo<sup>32</sup>.

Tal posición es amparada por nuestra legislación, ya que conforme se aprecia en el artículo 114° del Código Penal, Hurtado Pozo señala que “si el embarazo sólo comienza con la implantación del óvulo fecundado en el útero, antes de este momento no puede hablarse de aborto pues el embarazo es un presupuesto indispensable”<sup>33</sup>, lo que es corroborado por Bramont Arias y García Cantizano al precisar que “todo medio que impida la anidación del óvulo fecundado en el útero de la mujer será considerado un método anticonceptivo”<sup>34</sup>, mientras que “todo medio que se utilice con posterioridad a la anidación podrá ser considerado abortivo”<sup>35</sup>.

### **a.2.3. Demanda de cumplimiento interpuesta para que se distribuya el AOE (Expediente N° 07435-2006-AC)**

Al corroborar el carácter no abortivo del AOE, la restricción en su distribución en los hospitales públicos determinaba que aquellas mujeres de menores recursos vieran restringidos sus derechos a ser beneficiarias de la política nacional de salud y al ejercicio de la maternidad responsable (artículo 6° de la Constitución), a la salud (artículo 7°), a la vida e integridad (artículo 2°.1) y a no ser discriminadas (artículo 2°.2), en tanto se condicionaba su acceso al AOE a adquirirlo en farmacias o boticas, pese a que a través de las

---

<sup>31</sup> ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER. “Anticoncepción oral de emergencia. Informe Defensorial N° 78”. Op. cit., pp. 30-31.

<sup>32</sup> Sin perjuicio de lo señalado, **el autor de esta tesis considera que la vida se inicia desde el momento en que el espermatozoide penetra al óvulo**, lo cual configura el primer estadio de vida. No obstante, la inclusión de la restricción al AOE como ejemplo de discriminación se realiza sobre el presupuesto de la permisión de su venta y la restricción de su distribución gratuita, ya que de haber sido declarado abortivo por el Estado, su venta debió estar prescrita. **Quien suscribe la presente tesis considera que las dudas razonables sobre el carácter abortivo del AOE constituyen óbice suficiente para impedir su venta.**

<sup>33</sup> HURTADO POZO, José. “Manual de Derecho Penal. Parte Especial”. Idemsa. Lima, 1994, p. 59.

<sup>34</sup> BRAMONT-ARIAS, Luis y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. “Manual de Derecho penal. Parte especial”. Editorial San Marcos. 4° edición. Lima, 1998, p. 36.

<sup>35</sup> Ibídem, p. 84.

dependencias públicas de salud podrían obtenerlos de manera gratuita, al ser un mecanismo propio de la política nacional de salud.

Conscientes de esta política que discriminaba a las mujeres de menores recursos, Susana Chávez Alvarado y otras representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) interpusieron el 18 de septiembre de 2002 una demanda de cumplimiento, solicitando que el Ministerio de Salud (MINSA) diera cumplimiento a las Resoluciones Ministeriales N° 465-99-SA/DM y 399-2001-SA/DM, pues su falta de implementación tenía consecuencias discriminatorias, pues “aquellas mujeres con recursos económicos suficientes pueden acceder a ella acudiendo a un servicio de salud privado. Sin embargo, este método disponible para algunas mujeres se les niega a aquellas que no pueden pagar un servicio privado de salud y se ven obligadas a acudir a los servicios públicos de salud”<sup>36</sup>.

Una vez emplazado, el MINSA sostuvo que la píldora “no había sido implementada porque existe incertidumbre científica respecto a los mecanismos de acción del mismo”<sup>37</sup>; sin embargo, el tema en discusión no era el presunto carácter abortivo de la píldora, sino que el Estado prohibiera su entrega y difusión de información en las dependencias públicas de salud y permitiera su distribución en farmacias y boticas.

Si bien la sentencia de primera instancia fue favorable a las recurrentes, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró sustracción de la materia y, sin pronunciarse sobre el fondo, dispuso el archivamiento de la causa, sin tener en cuenta que, a pesar que las resoluciones recurridas habían sido derogadas, la Resolución Ministerial N° 536-2005-MINSA mantenía el mismo mandato.

Interpuesto el recurso de agravio contra la sentencia de segunda instancia, la demanda llegó a conocimiento del Tribunal Constitucional, que lejos de abordar el tema desde el fondo – discriminación de las mujeres de menores recursos a métodos anticonceptivos-, se pronunció respecto a la sustracción de la materia y a la obligación del Estado de dar

---

<sup>36</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 07435-2006-AC, fundamentos de la demanda.

<sup>37</sup> Loc. cit., contestación de la demanda.

cumplimiento a la distribución gratuita y difusión de información sobre la píldora en atención al cumplimiento de la vigente Resolución Ministerial N° 536-2005-MINSA. Si bien el colegiado se limitó a expedir justicia sobre la base de lo solicitado, consideramos que el Tribunal desperdició una importante ocasión para pronunciarse respecto al contenido del derecho a ser beneficiario de la política de salud y a la paternidad y maternidad responsables.

Sin embargo, el fundamento de voto del magistrado Carlos Mesía Ramírez aborda la entrega y difusión de información del AOE desde las perspectivas del derecho a la igualdad, a recibir información, a la vida y a la integridad de la mujer y a la salud. Aunque considera que no se ha vulnerado el derecho a la igualdad de las mujeres de escasos recursos, precisa que la restricción del AOE en los centros públicos de salud y su permisión en centros privados de salud, farmacias y boticas denota un grado de inequidad. Asimismo, resulta interesante cuando aborda la distribución de la AOE desde la perspectiva del derecho a la autodeterminación reproductiva, señalando que “[l]a autorización o no del AOE no es un asunto de libertad de conciencia, situación ante la cual el Estado no puede intervenir”<sup>38</sup>.

La discriminación se constata en que a través de la prohibición de distribución del AOE en las dependencias públicas de salud, se vulnera la concepción del Estado social, pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional, “un Estado social solo puede ser compatible con una concepción del derecho a la salud como un derecho constitucional indiscutible y, como tal, generador de acciones positivas por parte de los poderes públicos, pues resulta inobjetable que allí donde se ha reconocido la condición fundamental de dicho derecho, deben promoverse, desde el Estado, condiciones que lo garanticen de modo progresivo, y que se le dispense protección adecuada a quienes ya gocen del mismo”<sup>39</sup>.

La prohibición de la distribución gratuita de la píldora y de la difusión de información sobre su uso y efectos en las dependencias públicas de salud constituye un ejemplo de

---

<sup>38</sup> Loc. cit., Fundamento Jurídico N° 4 del voto del magistrado Carlos Mesía Ramírez.

<sup>39</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 01711-2005-HC, Fundamento Jurídico N° 9.



discriminación contra las mujeres de menores recursos, pues más allá de una discusión médico y moral, su permisión en centros de salud privados y farmacia marca un tratamiento discriminatorio, pues no existen razones objetivas por las cuales se permita su distribución en un sector y su prohibición en otro.

#### **a.2.4. Demanda de amparo interpuesta para que se distribuya el AOE (Expediente N° 02005-2009-AA)**

En octubre de 2009, el Tribunal Constitucional expidió sentencia en la causa tramitada en el Expediente N° 2005-2009-AA, originada por la demanda interpuesta por la ONG “Acción de Lucha Anticorrupción” en contra del Ministerio de Salud.

El petitorio de la demanda se enfocaba en el inicio del programa de distribución del AOE en todas las entidades públicas, asistenciales, policlínicos y demás centros hospitalarios de alcance gratuito.

Siendo que el resultado del proceso fue cuestionado en primera y en segunda instancia, la causa fue conocida por el Tribunal Constitucional, que declaró fundada la demanda; ordenando al Ministerio de Salud se abstenga de desarrollar como política pública la distribución gratuita a nivel nacional de la denominada “Píldora del Día Siguiente” debido a que no quedaba claro el momento en el que se iniciaba la vida. Asimismo, se ordenó que los laboratorios que producen, comercializan y distribuyen el AOE incluyan la advertencia de que dicho producto podría inhibir la implantación del óvulo fecundado.

Esta sentencia del Tribunal Constitucional fue muy cuestionada debido a que se basaba en criterios que han sido rebatidos por la ONU y la OMS, sustentándose en criterios conservadores y fundamentalistas, con lo cual se produciría una situación que generaría la discriminación contra las mujeres más pobres que carecen de recursos para contar con este mecanismo anticonceptivo. No obstante, y conforme se expusiera en relación a la sentencia emitida por el colegiado en 2007 en una causa similar, el tesista remite sus consideraciones a lo expuesto sobre ella.

## **b. Atención prenatal**

Como señala Bravo Barja, “la atención de la salud de la mujer durante el embarazo es (...) un derecho fundamental que debe ser garantizado para todas las mujeres, cualquiera sea su situación socioeconómica y lugar de residencia Sin embargo, existen restricciones de distinta naturaleza para que ese derecho no sea equitativo, entre ellas situaciones de contexto relativas a la pobreza y al déficit o mala calidad de la infraestructura médica, y situaciones personales de la mujeres que viven en pobreza tales como bajos niveles educativos y escasa posibilidad de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos”<sup>40</sup>.

Esta situación determina que el Estado adopte medidas destinadas a superar las distintas situaciones de inequidad en la que se encontrarían las mujeres, a efectos de acceder a atención especializada durante la gestación, ya que como reconoce Bravo Barja, “el control médico permanente durante el embarazo es fundamental para evitar riesgos que ponen en peligro la salud de la madre y del hijo. Durante él se le aplican pruebas de presión arterial y anemia, que suelen ser los principales factores de riesgo, así como también se vacuna a la madre con toxoide tetánico para evitar el tétano neonatal”<sup>41</sup>.

A través de dichas medidas corroboramos el acceso a efectivas prestaciones de salud prenatal que permitirán garantizar la vida, la salud y la integridad de la madre como del feto, lo cual reflejará un rol activo por parte del Estado en resguardo de los derechos fundamentales.

### **b.1. La capacidad económica como factor que mengua el acceso a las prestaciones de salud prenatales**

El acceso de las mujeres al control médico durante el embarazo decrece en la medida que su capacidad económica no sea la más óptima. Ello determina que, de acuerdo a la encuesta

---

<sup>40</sup> BRAVO BARJA, Rosa. “Presupuesto por resultados. Indicadores de género: educación, salud y programa juntos”. Op. cit, p. 21.

<sup>41</sup> Loc. cit.

demográfica y de salud familiar realizada por el INEI en 2004, “**en el quintil más pobre el 12% de las mujeres no se practicó control médico durante el embarazo y el 13% recibió control de personas con menor calificación.** En el extremo opuesto, todas las mujeres recibieron atención y de personal calificado”<sup>42</sup> (el sombreado es nuestro).

Esta situación revela la inacción del Estado en relación a aquellas poblaciones más vulnerables, lo que a su vez genera la alta probabilidad de mortandad de las gestantes como de los fetos y de los niños al poco tiempo de nacidos, ya que la ausencia del adecuado control prenatal incide considerablemente en la calidad de vida de la madre y de su hijo, ya que le permite tomar conocimiento sobre la evolución del feto y de las medidas médicas a ser adoptadas para solucionar cualquier contratiempo que pueda ocasionarse durante el embarazo, el parto y después de este.

## **b.2. La ubicación geográfica como factor que mengua el acceso a las prestaciones de salud prenatales**

En cuanto a la distribución de nuestra población, se acreditó que “**en las zonas urbanas el 93% de las embarazadas tuvo cuatro o más controles prenatales y en las zonas rurales la relación baja a 79%**”<sup>43</sup> (el sombreado es nuestro). La explicación a este fenómeno no sólo debe ceñirse al acceso a determinados ámbitos rurales, sino a la marginación que esta población recibe por parte de las autoridades, concentradas en las áreas urbanas, quienes excluyen a estos grupos del acceso a programas de salud pública.

## **c. Atención durante y después del parto**

A continuación analizaremos el acceso de las mujeres a la atención médica durante el parto y la realización del procedimiento del parto vertical sobre las mujeres de determinadas zonas del país.

---

<sup>42</sup> Loc. cit.

<sup>43</sup> Ibídem, p. 22.

### **c.1. Acceso a atención durante el parto**

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo ha señalado que “una de las medidas que los Estados deben adoptar con el propósito de reducir las muertes maternas, la necesidad de garantizar a las mujeres gestantes el acceso a servicios de atención prenatal, partos sin riesgos y atención después del parto, en particular para la lactancia materna y la atención de la salud materno–infantil. Los servicios de maternidad de atención primaria deben estar fundamentados en el concepto de la elección basada en una información correcta, así como incluir educación sobre una maternidad sin riesgo, cuidados prenatales coordinados y eficaces, programas de nutrición materna, servicios de remisión en los casos de complicaciones en el embarazo, el parto, la atención prenatal y planificación de la familia, la asistencia de personas capacitadas, entre otros”<sup>44</sup>.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha revelado que existe un alto porcentaje de mujeres que no accede a los servicios de salud al momento de parto, tendencia que se profundiza si es que la mujer se encuentra en el ámbito rural. “Así, si la madre vive en área urbana o rural, la cifra de partos realizados en establecimientos salud es de 91% y 45%, respectivamente. En esa línea, el parto en un servicio de salud es tres veces más si se trata de madres que pertenecen al quintil de riqueza superior frente a las que se encuentran en el quintil inferior”<sup>45</sup>.

En tal sentido, “es notorio y significativo el número de mujeres cuyo parto ha tenido lugar fuera de un establecimiento de salud, lo que incrementa las posibilidades de que no cuenten con asistencia profesional para su adecuado desarrollo. Cabe precisar que, según las cifras, este grupo de mujeres está conformado, en su mayoría, por gestantes que viven en zonas rurales y pertenecen al quintil inferior de riqueza”<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup>ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER. “Derecho a una maternidad segura: Supervisión nacional a los servicios de ginecología y obstetricia del MINSA”. Informe Defensorial N° 138. Defensoría del Pueblo. Lima, 2009, p. 8.

<sup>45</sup>Ibidem, p. 52.

<sup>46</sup>Loc. cit.

En efecto, vemos que la relación entre las variables género y pobreza hacen a las mujeres que poseen estas características ser más vulnerables a cualquier tipo de contratiempo por no acceder al servicio de profesionales de la salud durante la atención del parto. No obstante, debemos precisar que resulta alarmante que exista un 9% de mujeres de zonas urbanas que no acceden a dichos servicios, panorama que se evidencia en las zonas marginales de las grandes urbes, donde por desconocimiento y pobreza las personas no pueden acceder a estos servicios.

Esta situación genera la elevación de la **tasa de mortandad de las madres**, ya que como expresa la Defensoría del Pueblo, “el 48% de las muertes maternas ocurrió en el puerperio, el 32% en el embarazo y el 20% durante el parto. Al sumar los porcentajes de mortalidad materna ocurridas durante el parto y el puerperio, se obtiene el 68% del total. Este resultado permite formular una hipótesis que relaciona la muerte materna con una atención inadecuada. Es importante precisar, al respecto, que los daños identificados están estrechamente ligados con la capacidad resolutive y la demora en acceder a los establecimientos de salud”<sup>47</sup>.

A su vez, cabe destacar que “entre las mujeres que no dieron a luz en un establecimiento de salud, el 62% no tuvo un control post-natal. Esta cifra disminuye a 48 % en el área urbana, pero se eleva a niveles de 69% o más entre las mujeres que solo cuentan con educación primaria, en aquellas que integran el quintil inferior de riqueza y las que viven en La Libertad, Loreto, Cajamarca, Piura, Amazonas, o la Selva. En general, tal situación es en extremo riesgosa, considerando que una alta proporción de las muertes maternas ocurren en el período post-parto. Todo evidencia que es sumamente importante que el MINSA promueva la implementación del protocolo de atención del puerperio establecido en las Guías Nacionales”<sup>48</sup>.

Por ello, debe concluirse en que la simple atención durante el parto no constituye un mecanismo adecuado que asegure la efectividad de la prestación, pues esta sólo constituye

---

<sup>47</sup>Ibidem, p. 14.

<sup>48</sup>Ibidem, p. 54.

una etapa dentro del **plan de parto**, definido por el Ministerio de Salud como “una herramienta efectiva que busca organizar y movilizar los recursos familiares y comunitarios para la atención oportuna de la gestante, la puérpera y el recién nacido. El plan debe consignar la información precisa que permita organizar el proceso de atención de la gestante, relevando los aspectos del parto y la referencia de ser necesaria. El plan facilita la información para que las gestantes y sus familiares sepan a donde llegar, ante la presencia de señales de parto o de algún signo de alarma”<sup>49</sup>.

## **c.2. Parto vertical**

A su vez, cabe señalar que la atención durante el parto debe tomar en consideración las especiales características de la mujer que recibe la atención. Esto se fundamenta en que al ser nuestro país uno en el que converge una pluralidad de etnias, el servicio médico debe realizarse tomando en consideración la cultura de las mujeres que serán beneficiarias de las prestaciones de salud.

Al respecto, cabe señalar que el propio Ministerio de Salud ha reconocido que el personal médico ha sido entrenado para realizar el parto de manera horizontal, es decir, con la paciente echada sobre la camilla. Sin embargo, este procedimiento no responde a las prácticas culturales de las mujeres de diversas zonas del país, quienes dan a luz de cuclillas, sentadas o arrodilladas, las cuales constituyen modalidades del parto vertical, definido como “aquel en el que la gestante se coloca en posición vertical (de pie, sentada, apoyando una o dos rodillas o de cuclillas), mientras que el personal de salud que atiende el parto se coloca delante o detrás de la gestante, espera y atiende el parto. Esta posición permite al producto que actúa como vector final resultante de las fuerzas del expulsivo, orientarse principalmente al canal del parto y de esta manera facilita el nacimiento, disminuyendo los traumatismos en el recién nacido”<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup>DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS. “Norma técnica para la atención del parto vertical con adecuación intercultural. NT N° 033-MINSA/DGSP-V.01”. Ministerio de Salud. Lima, 2005, p. 16.

<sup>50</sup>DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS. “Norma técnica para la atención del parto vertical con adecuación intercultural. NT N° 033-MINSA/DGSP-V.01”. Op. cit., p. 16.

Como señala el Ministerio de Salud, “una de las prácticas culturales en relación a la atención del parto es la posición que adopta la mujer en el momento de dar a luz. La gran mayoría de las mujeres andinas y amazónicas prefieren la posición vertical, ya sea en cuclillas, sentada, arrodillada, entre otras (parto tradicional). El personal de salud ha sido entrenado para atender el parto en posición horizontal (acostada). Estas dos prácticas totalmente diferentes ocasionan un desencuentro cultural entre el personal que atiende y las mujeres rurales que muchas veces prefieren abstenerse de acudir a los establecimientos, poniendo en riesgo la salud y la vida tanto de ella como la del/la niño a por nacer en el caso que se presenten complicaciones”<sup>51</sup>.

En efecto, al desconocerse los rasgos de la cultura del lugar donde se presta el servicio médico se genera un conflicto con las potenciales beneficiarias del mismo, debido a que ambas partes no llegan a un acuerdo sobre la prestación del servicio, lo cual determina que las mujeres de estas comunidades se vean privadas al acceso a prestaciones de salud médica durante el parto.

Esta situación se debe a que “la influencia de la ciencia de la cultura occidental y urbana también ignora cuáles son las prioridades y las necesidades de las mujeres en general y en particular de las mujeres rurales al momento del parto, en tanto que ellas lo conciben como un evento natural que no requiere de intervenciones que varíen las formas tradicionales de atención del parto”<sup>52</sup>.

Ahora bien, la realización del parto vertical no sólo se sustenta en la preservación de una manifestación cultural de las poblaciones originarias de nuestro país, sino también en que dicha modalidad de parto es médicamente viable, conforme ha corroborado el Ministerio de Salud al señalar los siguientes beneficios derivados de ella:

“- En la posición vertical el útero de la gestante, al no comprimir los grandes vasos, la aorta ni la vena cava, no ocasiona alteraciones en la circulación materna, ni en la irrigación de la

---

<sup>51</sup>Ibídem, p. 8.

<sup>52</sup> Ibídem, p. 12.

placenta, y por ende no afecta la cantidad de oxígeno que recibe el feto. Existe un mejor equilibrio ácido base fetal durante el período de dilatación, como en el expulsivo, facilitando la transición feto-natal.

- Los miembros inferiores al estar apoyados constituyen un punto de apoyo e indirectamente ayudan al nacimiento del producto de la concepción.
- Hay aumento de los diámetros del canal del parto: 2 cm. en sentido ántero posterior y 1 cm. en transverso.
- La posición vertical determina que el ángulo de encaje (*'dive angle'* para la bibliografía anglosajona) sea menos agudo (más abierto) favoreciendo el encaje y la progresión del feto.
- La acción positiva de las fuerzas de la gravedad también favorecen el encaje y el descenso del feto.
- Se estima que la madre gana entre 30-40 milímetros de Hg. en valores de presión intrauterina cuando adopta la posición vertical.
- Asimismo, la acción contráctil de la prensa abdominal y las contracciones uterinas favorecidas en esta posición impulsan al feto hacia la abertura vulvar, como única salida.
- Mayor eficiencia de las contracciones uterinas durante el trabajo de parto y el período expulsivo, que se suceden con menor frecuencia pero con más intensidad, lo que provoca menos intervenciones obstétricas, menor uso de oxitocina y menos riesgo de alteraciones de latidos cardíacos fetales.
- **El trabajo de parto en la posición vertical, como resultado de las razones expuestas, se acorta sensiblemente.**
- **El parto vertical proporciona beneficios psicoafectivos con menos dolor (o ausencia del mismo), sensación de libertad y mayor satisfacción luego del parto.**
- **Se permite a la mujer una mayor participación en el nacimiento de su hijo, motivándola a pujar en forma más efectiva, al margen de permitir un mayor control de la situación**” (el sombreado es nuestro)<sup>53</sup>.

Cabe precisar que si bien son las mujeres de las comunidades rurales las beneficiarias del parto vertical, las autoridades de salud no deben restringir su aplicación a dichas zonas, ya que en las zonas urbanas existe un gran porcentaje de población que ha migrado de dichas

---

<sup>53</sup> Ibídem, pp. 15-16.



áreas en pos de conseguir un nivel más óptimo de vida. Sin embargo, ello no determina que tales personas hayan dejado de lado sus prácticas culturales, entre las que se encontraría la realización del parto vertical.

La implementación del parto vertical ha sido evaluada por la Defensoría del Pueblo, la cual ha señalado que “este programa no cuenta con fondos propios para el desarrollo de sus acciones de promoción y depende enteramente del apoyo de la cooperación internacional. A partir de entrevistas que realizó personal de la Defensoría del Pueblo a personal responsable de la implementación de la norma, se ha tomado conocimiento de que el programa de parto vertical se está impulsando, principalmente, en Amazonas, Cusco, Huancavelica, Puno y San Martín”<sup>54</sup>.

Sin embargo, somos de la opinión que el debate sobre esta modalidad de parto constituye un aspecto positivo en el camino a su efectiva implementación debido a que, como se ha corroborado, el parto vertical resulta médicamente viable y, a su vez, permite resguardar la identidad cultural de la madre y su aproximación a las prestaciones de salud durante la gestación y el parto.

#### **d. Esterilizaciones masivas**

El Ministerio de Salud, en el marco del Programa de Salud reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, llevó a cabo una política de esterilizaciones que se identificó por las siguientes características: “falta de garantías para la libre elección, campañas destinadas exclusivamente a la ligadura de trompas y, en menor medida, a la vasectomía, metas establecidas como cantidades de mujeres que necesariamente deben utilizar determinados métodos anticonceptivos, falta de seguimiento posterior a la intervención quirúrgica y tendencia compulsiva en la aplicación del programa”<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup>ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER. “Derecho a una maternidad segura: Supervisión nacional a los servicios de ginecología y obstetricia del MINSA”. Op. cit., p. 57.

<sup>55</sup> DEFENSORÍA DEL PUEBLO. “Anticoncepción quirúrgica voluntaria I. Casos investigados por la Defensoría del Pueblo”. Informe Defensorial N° 7. Lima, 1998, p. 3.

Sin embargo, dicha política estatal colisionaba con el contenido del artículo 4° de la Ley General de Salud, el cual establece que “ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin su consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere o estuviere impedida de hacerlo. Se exceptúa de este requisito las intervenciones de emergencia. La negativa a recibir tratamiento médico o quirúrgico exime de responsabilidad al médico tratante y al establecimiento de salud, en su caso”.

Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo se permitió recomendar al Ministerio de Salud, mediante Resolución Defensorial N° 01-98 del 26 de enero de 1998, la implementación de las siguientes medidas:

“1. Sustituir las campañas destinadas a promover exclusivamente la ligadura de trompas y la vasectomía, por otras en las que se difundan todos los métodos anticonceptivos sin privilegiar ninguno. 2. Reformular las metas del programa, reemplazando las referidas a un determinado número de personas captadas, por otras de carácter programático basadas en estimaciones de la demandada de cada uno de los métodos anticonceptivos. 3. Modificar el objetivo del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que pretende que el 100% de las pacientes con atención institucional de parto o aborto egresen iniciando algún método anticonceptivo, por otro que establezca que dicho porcentaje debe egresar habiendo sido debidamente informado de todos los métodos de planificación familiar. 4. Adoptar nuevas metas cuantitativas en términos de cobertura de información sobre todos los métodos anticonceptivos, tanto para hombres como para mujeres. 5. Modificar el Manual de Normas y Procedimientos para Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, a fin de que se fije un plazo razonable entre la fecha en que se firma la autorización y el día en que se realiza la intervención quirúrgica, que permita la reflexión y el ejercicio consciente de la libre elección”<sup>56</sup>.

Si bien dichas recomendaciones fueron formuladas en atención a las esterilizaciones realizadas sin acceso de información y sin el consentimiento de la mujer, el Ministerio de Salud trastocó su contenido, pues conforme revela la Defensoría del Pueblo a través de un

---

<sup>56</sup> *Ibíd.*, p. 4.

estudio realizado durante 2002, se presentaron casos de usuarias que, informadas del procedimiento de esterilización, fueron impedidas de ser beneficiarias de tal procedimiento por parte de autoridades sanitarias, tal como lo corroboran los 60 casos presentados en el Hospital de Chulucanas<sup>57</sup>.

### **2.1.1.3. Discriminación contra la mujer en el acceso a prestaciones de salud mental**

#### **a. Concepto de salud mental**

Si bien hemos abordado las prestaciones de salud física a favor de las mujeres en Perú, consideramos pertinente desarrollar el derecho a la salud mental porque existe una variedad de casos en los que esta dimensión de la salud de las mujeres no es atendida debidamente.

La tutela de la salud mental de las mujeres encuentra su fundamento en el artículo 7° de la Constitución, el cual establece que “[l]a persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad” (las cursivas son nuestras).

En efecto, tal mandato nos otorga mayores luces en cuanto a la configuración del contenido del derecho a la salud mental que si bien es similar al de la salud física, dista de este en la medida que la afectación corresponde a una dimensión distinta de la integridad física, que requiere de acciones especializadas, a fin de asegurar la plena vigencia de esta faz de la salud humana.

Como reconoce Seoane, “[e]l tratamiento jurídico de la salud mental ha pasado por diversas etapas, diferenciadas en atención a la actitud de la sociedad ante las personas con trastorno

---

<sup>57</sup> ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER. “La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos III Casos investigados por la Defensoría del Pueblo”. Informe N° 69. Defensoría del Pueblo. Lima, 2002, p. 137.

mental y a su posición en el contexto social”<sup>58</sup>, pues “[d]e un enfoque basado en la patología (la enfermedad o el trastorno mental) y la subsiguiente respuesta (tratamiento, curación, recuperación) [se ha pasado] a un enfoque positivo e integral: promoción de la salud mental, como capacidad básica para la vida y el bienestar personal y social de todos los ciudadanos”<sup>59</sup>.

De lo dicho en el párrafo anterior, surgen dos conceptos que muchas veces tienden a ser confundidos: salud y enfermedad mental. Como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), “[l]a salud mental es un componente [...] de la [integridad], por medio de la cual una persona aprovecha su potencial cognitivo y afectivo, así como su capacidad para relacionarse, [pues a través de] [u]na actitud mental equilibrada permite afrontar de manera más eficaz al estrés, realizar un trabajo fructífero y efectuar un aporte positivo a la comunidad”<sup>60</sup>. Asimismo, considera que incluye el “bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente”<sup>61</sup>.

Al abordar el estudio de las prestaciones de salud mental a favor de la mujer, no podemos pasar por alto el análisis de las enfermedades mentales, debido a que ellas originan las mencionadas prestaciones. La enfermedad mental es definida por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) como “un síndrome o patrón psicológico o conductual clínicamente significativos que aparece en una persona y que se asocia con un malestar (un síntoma doloroso) o discapacidad presente (deterioro en una o más áreas importantes de funcionamiento) o con un riesgo significativamente mayor de muerte, dolor, discapacidad o una pérdida importante de libertad”<sup>62</sup>. Considerando que la persona que padece de una

---

<sup>58</sup> SEOANE, José Antonio. “Derecho y salud mental. Capacidades, derechos, justicia”. En: *Cuadernos de psiquiatría comunitaria*. Nº 1. Asociación asturiana de neuropsiquiatría y salud mental. Oviedo, 2006, p. 22.

<sup>59</sup> *Ibidem*, p. 23.

<sup>60</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). “Por la salud mental en el mundo. Sí a la atención, no a la exclusión”. Ginebra, 2001. Disponible en: [www.who.int/mental\\_health/media/en/391.pdf](http://www.who.int/mental_health/media/en/391.pdf) (Revisado el 25 de abril de 2009).

<sup>61</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). “Invertir en salud mental”. Ginebra, 2004, p. 7. Disponible en: [http://www.who.int/mental\\_health/advocacy/en/spanish\\_final.pdf](http://www.who.int/mental_health/advocacy/en/spanish_final.pdf) (Revisado el 25 de abril de 2009).

<sup>62</sup> DÍAZ DE LA CRUZ, Francisco. “Salud mental en la isla de Tenerife: un estudio epidemiológico”. Universidad de La Laguna. Tenerife, 2001, p. 47.

enfermedad mental es “un individuo vulnerable y dependiente del mundo exterior y los demás, que desarrolla su proyecto vital desde sí mismo, plasmando sus potencialidades de razón práctica y sociabilidad en diálogo y cooperación con los otros, con la comunidad”<sup>63</sup>, se hace imprescindible la prestación de servicios médicos dirigidos a brindar una atención adecuada y permanente, máxime si es que algunas de estas enfermedades son degenerativas y sus cuidados solo pueden ser dados por profesionales de la salud.

## **b. Panorama de la salud mental de la mujer en Perú**

La Ley General de Salud contiene dispositivos que inciden sobre el resguardo de la salud mental de la mujer. Ello lo podemos corroborar en su artículo 9°, el cual establece que “toda persona que adolece de discapacidad física, mental o sensorial tiene derecho al tratamiento y rehabilitación”, debiendo ser interpretado conjuntamente con su artículo 11° al precisarse que “toda persona tiene derecho a la recuperación, rehabilitación y promoción de su salud mental. El alcoholismo, la farmacodependencia, los trastornos psiquiátricos y los de violencia familiar se consideran problemas de salud mental. La atención de la salud mental es responsabilidad primaria de la familia y del Estado”.

Sin embargo, el resguardo de la salud mental de la mujer es un asunto sumamente complicado porque, como señala la OMS, “el género se erige en determinante estructural de la salud mental y de la enfermedad mental”<sup>64</sup>, pues aunque no se haya determinado la mayor incidencia de enfermos mentales en uno de los sexos, existe una tendencia en brindar un trato discriminatorio a la mujer, lo cual se revela en las condiciones en las que se brindan las prestaciones de salud mental a su favor.

### **b.1. Situación de las internas en los hospitales de salud mental**

---

<sup>63</sup> SEOANE, José Antonio. “Derecho y salud mental. Capacidades, derechos, justicia”. Op. cit., p. 24.

<sup>64</sup> “*Gender is conceptualized as a structural determinant of mental health and mental illness that runs like a fault line*” (DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE DEPENDENCE. “Gender disparities in mental health”. Organización Mundial de la Salud, p. 2. Disponible en: [http://www.who.int/mental\\_health/media/en/242.pdf](http://www.who.int/mental_health/media/en/242.pdf) (Revisado el 28 de abril de 2009).

La Defensoría del Pueblo ha revelado una serie de casos de vulneraciones de los derechos de las pacientes que se encuentran internas en los hospitales de salud mental. Así, durante una visita realizada al Hospital Víctor Larco Herrera en 2004 se determinó que las internas no recibían toallas higiénicas durante su período menstrual<sup>65</sup>, encontrándose la mayoría de las internas del pabellón 5 en estado de abandono<sup>66</sup>; asimismo, se corroboró que de los pacientes que cometieron actos delictivos, los varones “no tienen mayores restricciones en el tratamiento que reciben o en las actividades que pueden realizar”<sup>67</sup>, mientras que las mujeres se encuentran alojadas en una pequeña habitación de aislamiento, pues “el establecimiento no cuenta con un ambiente especial para pacientes mujeres que hayan cometido actos delictivos”<sup>68</sup>, pernoctando la paciente en compañía de dos custodios, de los cuales uno es varón. También “se informó que cuando las mujeres en abandono son hospitalizadas en estado de gravidez, dan a luz en un hospital general y sus hijos son transferidos a albergues. Esta situación habría generado que muchas mujeres hayan perdido contacto permanente con sus hijos/as menores de edad”<sup>69</sup>.

De igual manera, esta entidad reveló que en el Hospital Honorio Noguchi “las historias clínicas de las mujeres en fase aguda se encontraban en un patio al que tenían acceso los/las pacientes institucionalizados/as”<sup>70</sup>. Por su parte, en el Hospital Hermilio Valdizán “se constató la presencia de dos pacientes mujeres con discapacidad física que se encontraban en situación de abandono”<sup>71</sup>.

Este panorama repercute de manera negativa sobre la salud mental de las internas en los establecimientos de salud, generando dificultades para su recuperación, la cual se torna aún más complicada si, conforme expresaron las enfermeras de dichas entidades a la Defensoría

---

<sup>65</sup> DEFENSORÍA DEL PUEBLO. “Salud mental y derechos humanos: La situación de los de las en establecimientos de derechos personas internadas salud mental”. Informe Defensorial N° 102. Lima, 2005, p. 85.

<sup>66</sup> *Ibidem*, p. 86.

<sup>67</sup> *Ibidem*, p. 150.

<sup>68</sup> *Ibidem*, p. 151.

<sup>69</sup> *Ibidem*, p. 172.

<sup>70</sup> *Ibidem*, p. 125.

<sup>71</sup> *Ibidem*, p. 154.

del Pueblo, existe una mayor incidencia del abandono de las pacientes por sus parejas o esposos que en el caso de los pacientes por sus parejas o esposas<sup>72</sup>.

Esta situación le permitió a la Defensoría del Pueblo constatar “que las mujeres internadas en dichos establecimientos afrontan problemas particulares como consecuencia de diferencias de género y de su condición de discapacidad. La situación de especial vulnerabilidad que afrontan las mujeres con discapacidad por enfermedad mental, origina que se presenten restricciones a derechos fundamentales como el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho al cuidado de la salud reproductiva, incluida la planificación familiar, el derecho al cuidado de los hijos menores de edad, entre otros”<sup>73</sup>.

## **b.2. Recomendaciones de la OMS en torno al resguardo de la salud mental de la mujer**

Frente al marco descrito, la OMS recomienda que “para reducir las disparidades del género en el tratamiento de la salud mental, los servicios que tienen en cuenta el factor de igualdad son esenciales. Si las mujeres tienen poder de acceso al tratamiento en todos los niveles primarios al cuidado del especialista y de hospitalización, así como a instalaciones del paciente no internado, los servicios se deben adaptar para cubrir sus necesidades”<sup>74</sup> desde una perspectiva correspondiente al sexo de la paciente.

Como hemos visto, las recomendaciones formuladas por la OMS en torno a la salud mental de las mujeres deben de hacerse efectivas en Perú a través de un especial desarrollo debido a que son pocos los mecanismos con los que se cuentan para brindar una atención que resulte efectiva.

---

<sup>72</sup> Ibidem, p. 144.

<sup>73</sup> Ibidem, p. 141.

<sup>74</sup> “To reduce gender disparities in mental health treatment, gender sensitive services are essential. If women are to be able to access treatment at all levels from primary to specialist care and inpatient as well as outpatient facilities, services must be tailored to meet their needs. To ensure that the assistance available is also meaningful to those seeking treatment, the full range of patients’ psychosocial and mental health needs must be addressed” ((DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE DEPENDENCE. “Gender disparities in mental health”. Op. cit, p. 10).

Por tal motivo, se debe orientar la actuación estatal sobre la base del documento de la OMS Mental Health Care Law: *Ten Basic Principles*, que enumera diez **principios básicos para la atención mental por parte del Derecho**: “1. Promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales. 2. Acceso a los cuidados básicos de salud mental. 3. Evaluación de la salud mental conforme a principios aceptados internacionalmente. 4. Disponibilidad del tipo menos restrictivo posible de cuidados de salud mental. 5. Autodeterminación. 6. Derecho a recibir asistencia en el ejercicio de la autodeterminación. 7. Disponibilidad de un procedimiento de revisión. 8. Mecanismos automáticos de revisión periódica. 9. Responsables de las tomas de decisiones cualificados. 10. Respeto del imperio de la ley”<sup>75</sup>.

Estos principios dotan de contenido al derecho a la salud mental, ya que identifican las acciones que deben de ser adoptadas a fin de garantizar este componente de la integridad personal de las mujeres y, a su vez, hacen posible la identificación de aquello que la persona puede exigir al Estado en resguardo de la referida dimensión de la salud.

La finalidad de tales principios es la *construcción del acceso equitativo de las pacientes al adecuado tratamiento de su salud mental*, pues “[e]n atención a la disparidad de capacidades y aptitudes personales, una respuesta jurídica adecuada requiere reconocer y remediar, de forma justificada y razonable, las desigualdades o desemejanzas que pueden derivarse de trastornos mentales, en la medida en que supongan un detrimento o perjuicio en sus relaciones con las demás personas. Por tanto, constituye un deber de justicia compensar ciertos desequilibrios derivados de las condiciones de salud mental que impidan el desarrollo personal. La igualdad es aquí la expresión normativa de una exigencia: la desaparición de discriminaciones injustas o arbitrarias”<sup>76</sup>.

Debemos precisar que el derecho a la salud mental de las mujeres no solo incide sobre la persona que adolece de un mal que afecta su psique, sino que *se proyecta sobre el núcleo familiar de la paciente*, ya que como reconoce la OMS, “[l]os miembros de la familia son, con frecuencia, los cuidadores primarios de las personas con trastornos mentales. Como tal,

---

<sup>75</sup> SEOANE, José Antonio. “Derecho y salud mental. Capacidades, derechos, justicia”. Op. cit., p. 22.

<sup>76</sup> *Ibíd*em, p. 27.



ellos proveen apoyo emocional e instrumental, y con no menor influencia deben afrontar los costos financieros asociados con el tratamiento y la atención. (...) El fracaso de la sociedad en cuanto no reconoce la carga de los trastornos mentales en las familias implica que poco es el apoyo que estas reciben. Los gastos acarreados por el tratamiento de los trastornos mentales son frecuentemente solventados por las familias, toda vez que el Estado o los seguros de salud no cubren esa atención sea parcial, sea completamente. La familia también necesita invertir una cantidad significativa de tiempo para la atención del miembro afectado”<sup>77</sup>.

De igual manera, podemos señalar que la plena satisfacción de la salud mental de las mujeres a través de efectivas políticas de salud constituirá un importante elemento en la consecución del desarrollo de la sociedad en su conjunto, ya que si tenemos en cuenta “que los trastornos mentales generan costos por concepto de tratamiento de largo alcance y de productividad perdida, se puede argüir que esos trastornos contribuyen considerablemente a la pobreza”<sup>78</sup>. Esto se vislumbra en las pérdidas que representa no contar con la productividad laboral de estas personas, que, en vista de no haber sido beneficiadas con la prestación de esta clase de servicios, ven obstaculizada su reinserción social y, por lo tanto, se privan de la generación de recursos destinados a satisfacer sus más elementales necesidades.

### **2.1.2. DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN**

La educación constituye un mecanismo que permite la superación del ser humano, pues no sólo implica la mera acumulación de información, sino que le otorga a su beneficiario una perspectiva más amplia sobre las cosas. Sin embargo, se constata que existe una serie de casos en los que se corrobora que las mujeres del Perú se ven restringidas al acceso a prestaciones educativas, conforme se expondrá a continuación.

---

<sup>77</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). “Invertir en salud mental”. Op. cit., p. 12.

<sup>78</sup> *Ibíd*em, p. 25.

### 2.1.2.1. Lineamientos generales sobre la educación

La Constitución Política reconoce en su artículo 13° que *“la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana”*, pues conforme precisa el artículo 14° *“promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad”* (las cursivas son nuestras).

La educación ha sido definida por el Tribunal Constitucional como un servicio público —es decir, de una “prestación pública que explicita una de las funciones-fines del Estado, de ejecución per se o por terceros bajo fiscalización estatal”<sup>79</sup>— que tiene por finalidad “desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, enmarcada en una visión latinoamericana y universal”<sup>80</sup>.

Sobre la base de lo expuesto, el Tribunal Constitucional recuerda que la educación es un derecho prestacional, ya que “[e]l Estado la asume como función indeclinable y está obligado a invertir en todos sus niveles y modalidades. (...) [L]a dimensión prestacional, [es aquella] en cuya virtud el Estado debe procurar la mayor efectividad del derecho a la educación”<sup>81</sup>. Tal afirmación surge de la necesidad del Estado de tutelar que se cumpla adecuadamente con la impartición de educación, ya que ello asegura el desarrollo del ser humano, pues como ha considerado el colegiado, “la educación implica un proceso de incentivación del despliegue de las múltiples potencialidades humanas cuyo fin es la capacitación del hombre para la realización de una vida existencial y coexistencial genuina

---

<sup>79</sup> Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 04232-2004-AA, Fundamento Jurídico N° 11.

<sup>80</sup> Ibídem, Fundamento Jurídico N° 10.

<sup>81</sup> Loc. cit.

y verdaderamente humana; y, en su horizonte, permitir la cristalización de un ‘proyecto de vida’”<sup>82</sup>.

Vemos que el contenido de los extractos glosados se concatenan a encaminar a la educación hacia el desarrollo del ser humano, con lo cual se estaría cumpliendo con uno de los fines del Estado, determinados por los artículos 3º y 51º de la Constitución Política; nos referimos a la vida en dignidad, la cual es asegurada siempre y cuando el individuo pueda realizarse eficazmente y acceda a condiciones decorosas de existencia en la medida que su nivel educativo le permita satisfacer las exigencias que nuestra sociedad le impone para incorporarse como elemento productivo de ella.

Si bien la Constitución Política no reconoce expresamente a la educación como derecho fundamental, negar su naturaleza sería pasar por alto que el desarrollo del ser humano está condicionado a su acceso a adecuadas prestaciones educativas. En efecto, la educación nos proporciona una serie de invalorable herramientas que resultan ser pertinentes en la medida que amplían nuestra visión del mundo, pues nos permiten comprender con mayor amplitud la serie de fenómenos que configuran nuestra particular realidad y la identidad de los fenómenos que trazan el espectro social por el que discurre nuestra existencia.

Así las cosas, la educación se erige como un instrumento que será efectivo en la medida que esté orientado por principios que reconozcan determinados elementos propios de los individuos que integran nuestra realidad, de los factores culturales que condicionan el avance o que obstaculizan el desarrollo y de las alternativas que la política educativa propone para maximizar los siempre escasos recursos a fin que encuentren consonancia en la satisfacción de las necesidades de una sociedad que, en su constante cambio, exige el aporte de cada ser humano no solo para su desarrollo individual, sino para el colectivo.

Siendo, pues, nuestra heterogénea realidad el universo de análisis que determinará la implementación de una serie de cánones que regirán la política educativa, la Constitución Política ha planteado en siete artículos una serie de consideraciones que orientarán la

---

<sup>82</sup> Loc. cit.

política nacional de educación. No obstante, creemos pertinente destacar que tales propósitos carecerán de razón de ser si es que su implementación no se rige por la eficacia, es decir, por la identificación de problemas, el planteamiento de soluciones y la adopción de medidas destinadas a la consecución de metas reales, las cuales estarán guiadas por la progresividad en la obtención de resultados.

#### **2.1.2.2. Discriminación contra la mujer en el acceso a la alfabetización**

Recogiendo la definición de Venezky, Braslavsky define a la alfabetización como “una de esas clases de términos autopositivos, como ‘libertad’, ‘justicia’, ‘felicidad’, que asumimos por su contenido y cualidades necesarias y sus deseables atributos en nuestra cultura. Pero que bajo una indagación más profunda se hace vastamente más compleja y a menudo elusiva sin producir una caracterización simple o una definición”<sup>83</sup>.

A través de la alfabetización se consolida el propósito recogido en el extremo final del artículo 17° de la Constitución Política, el cual establece que “[e]l Estado garantiza la erradicación del analfabetismo” y que no debe ser comprendido exclusivamente a través de su inicial faz relativa al aprendizaje de la escritura y de la lectura, sino que debe comprender “habilidades de leer, niveles de lectura y escritura, niveles de comprensión, dimensiones funcionales sociales y culturales, la extensión del término para nuevas competencias y más aún, como estrategia de liberación en la ‘capacidad de leer el mundo’”<sup>84</sup>.

Sin embargo, una serie de factores como la pobreza inciden para que no se concrete el objetivo contenido en el artículo 17° de la Carta Política, ya que se constata la menor tendencia de que una pluralidad de grupos, entre los que se encuentran las mujeres, accedan a programas de alfabetización, conforme se demuestra los siguientes datos sobre el **acceso a la alfabetización de la mujer en el mundo**: “Un dato muy importante, dada sus consecuencias, es el de las diferencias de género en el analfabetismo, tanto en los países

---

<sup>83</sup> BRASLAVSKY, Bertha. “¿Qué se entiende por alfabetización?”. En: *Lectura y vida. Revista latinoamericana de lectura*. Año 24, N° 2. Asociación internacional de lectura. Buenos Aires, 2003, p. 3.

<sup>84</sup> *Ibíd*em, p. 4.

centrales como en los periféricos. En los totales, en los países desarrollados se enmascara esa diferencia, ya que **la tasa promedio de los analfabetos de género masculino y femenino es, respectivamente, del 19.4% y del 33.6%**. Por su parte, en los países emergentes la diferencia promedio es del 25.1% para los hombres y 45% para las mujeres, pero se distribuye de manera diferente según las regiones. Con excepción de Latinoamérica y el Caribe, la tasa femenina de analfabetismo es más del 50% mayor que la masculina. Entre los países donde el analfabetismo femenino es el 80% más alto se cuentan: Afganistán, Benin, Burkina Faso, Chad, Gambia, Nepal, Níger, Sierra Leona, Sudán”<sup>85</sup> (el sombreado es nuestro).

Esta situación revela la existencia de un problema que hace inviable la alfabetización de las mujeres; nos referimos al **analfabetismo**, concebido como un “fenómeno donde el analfabeto (persona que no sabe leer) lo es por circunstancias de no haber precisado de la lectura (sociedades orales) y en otras por habersele negado el derecho de leer, representa la cara injusta, la de las consecuencias negativas y constituye un problema ético, social y político”<sup>86</sup>.

Por ello, Jiménez del Castillo considera que “ser analfabeto es pertenecer a una cultura letrada y no dominar las técnicas de escribir y leer (...). De ahí que este concepto de analfabeto no tendría sentido en sociedades con culturas orales. El analfabetismo constituye, como problema político, una injusticia social y en este sentido directamente nos adentra en el tema de los derechos humanos como fundamento de reclamo axiológico y de denuncia política mundial para su erradicación”<sup>87</sup>.

Conscientes de esta realidad, los líderes de nuestro continente tomaron como motivo la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada entre el 3 y el 5 de noviembre de 2006 en Montevideo para llegar al consenso de que “el analfabetismo es una de las expresiones más graves del proceso de exclusión y marginación social y, por ello, la

---

<sup>85</sup> *Ibíd*em, p. 8.

<sup>86</sup> JIMÉNEZ DEL CASTILLO, Juan. “Redefinición del analfabetismo: El analfabetismo funcional”. En: *Revista de educación*. N° 338. Instituto de Evaluación. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Madrid, 2005, p. 282.

<sup>87</sup> *Ibíd*em, p. 287.

alfabetización es un requisito imprescindible en cualquier estrategia de equidad e inclusión social”<sup>88</sup>, ya que “la alfabetización es un componente imprescindible en los programas de desarrollo económico y social que se proponen satisfacer necesidades de grupos de población que sufren pobreza o exclusión, especialmente las mujeres”<sup>89</sup>.

#### **a. Tasa femenina de analfabetismo en Perú según la OEI**

La Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura (OEI) ha señalado que **en Perú existen 2’211,093 de personas analfabetas**<sup>90</sup>. Sin embargo, la diferencia en la tasa de analfabetismo es abismal si es que tomamos como referentes a los varones y a las mujeres. Así, se corrobora que mientras **la tasa de analfabetismo masculina es de 6.5%, la tasa de analfabetismo femenina es de 17.8%**, es decir, que la diferencia de 11.4% *revela una clara situación de inequidad en el acceso de las mujeres a los programas básicos de educación que les permitirían el aprendizaje de la lectura y de la escritura*<sup>91</sup>.

#### **b. Tasa femenina de analfabetismo en Perú según la Defensoría del Pueblo**

Con motivo de la presentación del segundo reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y varones, dicha entidad expresó en abril de 2009 que “En el ámbito de la educación, las tasas más altas de analfabetismo prosiguen manteniendo una mayor incidencia en las mujeres con una tasa de 10, 6% y, en el caso de los hombres, de 3, 6%. Se debe tomar en cuenta que los promedios esconden brechas más amplias entre hombres y mujeres. Así, cuando se revisan las cifras por departamentos con mayor población femenina analfabeta, los porcentajes se incrementan: Apurímac (32, 2%), Huancavelica (30, 0%) y Ayacucho (26, 9%). Estas cifras

---

<sup>88</sup> ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA. “Iberoamérica: territorio libre de analfabetismo. Plan iberoamericano de alfabetización y educación básica de personas jóvenes y adultas 2007-2015. Documento base”. Montevideo, 2006, p. 3.

<sup>89</sup> *Ibidem*, p. 4.

<sup>90</sup> Para superar esta situación hasta 2015 se requerirían aproximadamente de US \$ 265’331,160 (*Ibidem*, p. 20).

<sup>91</sup> *Ibidem*, p. 13.

advierten la necesidad de incidir en políticas públicas para erradicar el analfabetismo con un enfoque de género”<sup>92</sup>.

### **c. Tasa femenina de analfabetismo en Perú según el INEI**

A continuación analizaremos la tasa femenina de analfabetismo en el Perú de acuerdo a dos estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) sobre dos grupos de nuestra población: las personas mayores de 15 años de edad y la comprendida entre los 15 y 24 años.

#### **c.1. Población mayor de 15 años**

Si bien la información a la OEI ha sido tomada de las fuentes oficiales proporcionadas por el Estado peruano, esta dista de las difundidas por el INEI<sup>93</sup> en 2008, la cual refleja que a nivel nacional existe una **tasa de analfabetismo de 3.6% de los varones y 10.6% de las mujeres**.

No obstante, señala el INEI, “en el período intercensal de 1993-2007, la tasa de analfabetismo femenino es la que más disminuye, al pasar de 18,3% a 10,6%, lo que significa una disminución de 7,7 puntos porcentuales, en tanto que la tasa de analfabetismo masculino lo hizo en 3,5 puntos porcentuales (pasa de 7,1% a 3,6%)”<sup>94</sup>.

La tasa de analfabetismo femenino no es igual en todos los departamentos del país, lo cual se corrobora en los siguientes índices expresados por el INEI: “Apurímac (32,2%), Huancavelica (30,0%), Ayacucho (26,9%), Cajamarca (25,5%), Huánuco (23,8%), Cusco (21,0%), Puno (19,0%), Áncash (18,6%) y Amazonas (17,8%). En cambio, en los departamentos de Ica (4,2%), Tumbes (4,0%), Lima (3,3%) y en la Provincia

---

<sup>92</sup> ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER. “Segundo reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (enero-diciembre 2008)”. Informe N° 001-2009-DP/ADDM. Defensoría del Pueblo. Lima, 2009, pp. 5-6.

<sup>93</sup> INEI. “Perfil sociodemográfico del Perú”. INEI, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y PNUD. Lima, 2008, p. 99.

<sup>94</sup> Loc. cit.

Constitucional del Callao (2,4%), la incidencia del analfabetismo en la población femenina es en menor proporción”<sup>95</sup>.

Estos datos son útiles debido a que revelan que las mujeres de las zonas andinas son más propensas al analfabetismo que las mujeres de la región costera; ello es útil porque exhibe un mapa de exclusión en nuestro país, de negación de derechos hacia determinadas poblaciones del Perú, que ven restringido el acceso a los programas de alfabetismo.

### **c.2. Población entre 15 y 24 años**

De igual manera, el INEI<sup>96</sup>, realizó un estudio en 2006 sobre la población comprendida entre los 15 y 24 años de edad, revelándose que de dicho grupo **el 4.3% de hombres y el 7.0% de mujeres son analfabetos/as**.

A diferencia de lo que sucede con el estudio realizado con la población mayor de 15 años, vemos que existe una menor tasa de analfabetismo, lo cual se justificaría en que las personas comprendidas entre 15 y 24 años constituyen un grupo que ha accedido a programas educativos erigidos sobre la base de nuevas políticas que se regirían sobre el objetivo de alcanzar la equidad entre los distintos colectivos de nuestra sociedad.

No obstante, y conforme se aprecia en el cuadro expuesto a continuación<sup>97</sup>, debe trabajarse con mayor énfasis los programas de alfabetización desde una perspectiva de género en determinados departamentos del país, como Huancavelica, que tiene la tasa más baja de alfabetización de mujeres comprendidas entre 15 y 24 años de edad, es decir, 85.6% en relación al 95.5% en el caso de los varones. Similar situación se observa en Cajamarca, de cuya población comprendida entre 15 y 24 años de edad, se constata que el 82.4% de mujeres han accedido a programas de alfabetización, mientras que el 90.8% de los varones también lo han hecho. Similar situación se observa en Huánuco, en el que mientras el

---

<sup>95</sup> Ibídem, p. 101.

<sup>96</sup> RIVERA ARAUJO, Genara (Coordinadora) “Situación de los indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio Perú, 2006. Primer semestre”. INEI. Lima, 2006, p. 12.

<sup>97</sup> Loc. cit.



80.3% de mujeres comprendidas entre 15 y 24 años han accedido a la alfabetización, existe una diferencia de 9.2% a favor de los varones, al establecerse que el 89.5% de dicho universo han accedido a tal programa.

En el resto de departamentos del Perú se observa un margen favorable a los varones comprendidos entre los 15 y 24 años de edad en relación a las mujeres de la misma edad de 0.3% en Lima metropolitana y en las provincias de Lima, 0.6% en el Callao, 0.5% en Tacna, 0.6% en Moquegua, 4.4% en Arequipa, 0.9% en Puno, 2.2% en Junín, 1.1% en Pasco, 2.3% en Lambayeque, 2.5% en Ucayali, 5.6% en Apurímac, 6.4% en Cusco, 5.2% en Ancash, 4.1% en Ayacucho, 3.5% en San Martín, 2.9% en La Libertad, 2.0% en Loreto, 2.4% en Piura y 4.7% en Amazonas.

Sin embargo, esta tendencia no se da en dos departamentos del país, ya que se corrobora que existe un margen favorable a las mujeres comprendidas entre 15 y 24 años de edad de 0.9% en Madre de Dios y de 1.7% en Tumbes en relación a los varones de la misma edad.

**Indicador 4: Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años de edad**

**Primer semestre del 2006**

Departamento	Tasa de alfabetización		
	Ambos sexos	Hombre	Mujer
<b>Total</b>	<b>94,6</b>	<b>95,7</b>	<b>93,4</b>
Lima Metropolitana	98,2	98,4	98,1
Resto país	93,0	94,6	91,3
Prov. Const. Callao	98,6	98,9	98,3
Tacna	98,6	98,9	98,3
Moquegua	98,3	98,0	98,6
Arequipa	98,2	98,4	98,0
Lima	98,1	98,3	98,0
Ica	98,1	97,9	98,2
Puno	97,8	98,7	96,8
Madre de Dios	96,4	96,0	96,9
Junin	96,4	97,4	95,2
Tumbes	95,8	95,0	96,7
Pasco	94,7	95,3	94,2
Lambayeque	93,7	94,9	92,6
Ucayali	93,5	94,2	92,7
Apurimac	93,4	96,1	90,5
Cusco	93,3	96,0	90,4
Áncash	92,6	95,0	90,2
Ayacucho	92,0	94,0	89,9
San Martín	91,5	93,1	89,6
La Libertad	91,3	92,7	89,8
Loreto	91,1	92,1	90,1
Piura	91,0	92,2	89,8
Huancavelica	90,7	95,5	85,6
Amazonas	87,7	89,9	85,2
Cajamarca	86,7	90,8	82,4
Huánuco	85,1	89,5	80,3

**Nota:** Para calcular la condición de alfabeto de la población de 15 a 24 años de edad, se ha utilizado las recomendaciones de la UNESCO, considerándose como población alfabeto a aquella con 5 ó más años de estudios aprobados.

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Continua-ENCO.

Estos datos nos permiten identificar un problema de relevancia jurídica, pues se constata las restricciones a las que la mujer es sometida para acceder a la alfabetización. Sin embargo, esta situación de discriminación contra la mujer debe ser estudiada a partir de otras perspectivas, pues, como señala el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas, existe “una coincidencia casi directa del mapa del analfabetismo con el mapa de la pobreza y de las inequidades sociales, étnicas y de género, obliga a la lucha por la alfabetización a extender su contenido y a tomar como parte de su batalla no sólo metas educativas sino también de justicia social, dignidad humana y empoderamiento de las personas”<sup>98</sup>.

<sup>98</sup> FORO LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS. “Día internacional de la alfabetización”. N° 37. 2007. Disponible en: [http://www.foro-latino.org/info\\_flape/info\\_pdf/info-flape\\_37.pdf](http://www.foro-latino.org/info_flape/info_pdf/info-flape_37.pdf) (Revisado el 29 de abril de 2009).

El acceso de la mujer a la alfabetización radica en que a través de ella, podrá acceder plenamente a los conocimientos impartidos en las diferentes etapas de nuestro sistema educativo, lo cual incidirá directamente en el goce de sus demás derechos, ya que sólo a través de ella tomará conciencia de su lugar en el mundo y del ejercicio de sus derechos.

### **2.1.2.3. Discriminación contra la mujer en el acceso a los diferentes niveles de educación**

De acuerdo al artículo 29° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, el sistema educativo está conformado por dos etapas: básica y superior.

De acuerdo al inciso a del mencionado artículo, la educación básica “está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad. Con un carácter inclusivo atiende las demandas de personas con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje”. Cabe informar que la educación básica está conformada por tres niveles: inicial, primaria y secundaria.

Por su parte, el inciso b del artículo 29 define a la educación superior como aquella “destinada a la investigación, creación y difusión de conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país”. A diferencia de lo que ocurre con la educación básica, la superior no está conformada por niveles, aunque sí por dos tipos: técnica y universitaria.

A continuación, realizaremos un análisis sobre el acceso a la educación de varones y de mujeres, a fin de corroborar si es que existe equidad en el acceso a ella.

#### **a. Mujeres que no han accedido a la educación**

De acuerdo al censo realizado por INEI durante 2007, de la población comprendida entre 15 y 24 años, se “muestra que **el 10,8% de las mujeres no tiene ningún nivel de educación, siendo tres veces mayor que lo observado en los hombres (3,9%)**. En el Censo de 1993 las mujeres sin nivel de educación representaban el 17,6% y los hombres el 6,7%”<sup>99</sup>.

Es decir, nos encontramos con un total de 1'050,828 de mujeres y de 362,509 varones comprendidos entre los 15 y 24 años de edad que no han accedido a nivel educativo alguno, lo cual denota un serio problema que debe ser objeto de estudio y de atención por parte de nuestras autoridades educativas, ya que se deja en el más completo abandono a un amplio grupo de mujeres, especialmente aquellas provenientes de las regiones andina, conforme revela el INEI a continuación:

“La población femenina, que no logró estudiar nivel alguno de educación se encuentra en mayor proporción en los departamentos de Apurímac (30,4%), Huancavelica (28,1%), Ayacucho (25,4%), Cajamarca (24,2%), Huánuco (22,1%) y Áncash (20,1%). En cambio, en el departamento de Tumbes y la Provincia Constitucional del Callao, el 3,6% y 3,4% respectivamente, de la población femenina de 15 y más años, no tiene ningún nivel educativo”<sup>100</sup>.

#### **b. Mujeres que han accedido a la educación inicial**

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, “el porcentaje de población de tres a cinco años que asistió a Programas de Educación Inicial, al 2005, según sexo era el **57.2% en el caso de las niñas y el 57.7% en el de los niños**”<sup>101</sup>.

Si bien el margen de diferencia de 0.5% es favorable a los varones en cuanto a su acceso a la educación inicial, consideramos que dicho resultado reflejaría los avances de la cada vez

---

<sup>99</sup> INEI. “Perfil sociodemográfico del Perú”. Op. cit., p. 89.

<sup>100</sup> Ibidem, p. 91.

<sup>101</sup> ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER. “Segundo reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (enero-diciembre 2008)”. Op. cit., p. 202.

mayor política de inclusión de la mujer en las prestaciones otorgadas en la educación inicial.

#### **c. Mujeres que han accedido a la educación primaria**

Conforme ha señalado el INEI, de la población comprendida entre 15 y 24 años de edad, el **22.1% de varones han accedido a la educación primaria, en comparación del 24.3% de mujeres** que también ha accedido a dicha educación. Ello determinaría un total de 2'069,330 varones y de 2'353,518 mujeres<sup>102</sup>.

Aunque vemos que existe una diferencia de 2.1% a favor de las mujeres, nos preocupa la situación de los varones en cuanto al acceso a la educación primaria, lo cual determina la necesidad de identificar las causas de este fenómeno, a fin de adoptar medidas que resulten eficaces en aras de la integración masculina a la educación primaria.

#### **d. Mujeres que han accedido a la educación secundaria**

De acuerdo al INEI, de la población comprendida entre 15 y 24 años de edad, **el 41.9% de varones y el 34.6% de mujeres** han accedido a la educación secundaria. Ello determinaría un total de 3'926,159 varones y de 3'348,738 mujeres<sup>103</sup>.

A diferencia de los resultados expuestos en el acceso a la educación inicial y primaria, constatamos con preocupación un margen de 7.3% de desigualdad en el acceso de la mujer a la educación secundaria.

Este panorama se justifica en que subsiste la idea de que no es necesario que la mujer acceda a niveles más avanzados de educación, pues bastaría sólo con su acceso a la alfabetización y a la educación primaria para contar con las herramientas necesarias para desarrollarse dentro del ámbito familiar. Sin embargo, quienes sustentan estas afirmaciones

---

<sup>102</sup> INEI. "Perfil sociodemográfico del Perú". Op. cit., p. 89.

<sup>103</sup> Loc. cit.

no son conscientes de la importancia de la educación secundaria, ya que esta constituye un escalafón en el desarrollo de la mujer, proveyéndola de conocimientos que le permitirán apreciar con mayor claridad la serie de fenómenos que se presentan en la realidad y ejercer plenamente sus derechos.

#### **e. Mujeres que han accedido a la educación superior**

De acuerdo al INEI, de la población comprendida entre 15 y 24 años de edad, **el 32.0% de varones y el 30.2% de mujeres** han accedido a la educación secundaria. Ello determinaría un total de 2'996,418 varones y de 2'926,256 mujeres<sup>104</sup>.

A diferencia de los datos revelados con motivo del censo de 1993, encontramos que se ha incrementado el número de varones y de mujeres que acceden a la educación superior (1'448,395 y 1'344,940, respectivamente). Sin embargo, expresamos nuestra preocupación debido a que no se alcanza la equidad en cuanto al acceso a este nivel educativo, lo cual determina la existencia de ciertos problemas que deberán ser identificados en pos de alcanzar la ansiada equidad de oportunidades.

#### **2.1.2.4. El rol de la mujer en los contenidos educativos**

El acceso de la mujer a los diferentes niveles educativos no constituye el único referente para determinar la discriminación de la que podría ser objeto. En efecto, existen otros rubros que podemos asociar al sistema educativo para determinar que la mujer es objeto de discriminación; uno de ellos está representado en los diferentes contenidos educativos que podemos identificar.

Si bien en el caso peruano no existen muchos referentes, debemos señalar que en 1983 la Cooperación Peruana de Cooperación con la Unesco realizó una investigación en torno al contenido de la educación peruana, revelándose que el trato brindado por los/as docentes al alumnado era el adecuado cuando se trataba de varones y antipedagógico cuando se trataba

---

<sup>104</sup> Loc. cit.

de mujeres. Al respecto, Michel destaca que en dicha investigación se determinó que **los/as profesores pasan por alto el contenido sexista de los textos de enseñanza**, ya que “aunque son conscientes de que los estereotipos sexistas de los manuales escolares no corresponden a la realidad, los/las enseñantes entrevistados/as consideran que el problema no es grave pues, en su opinión, es tarea de/la profesor/a explicar a sus alumnos y alumnas que las niñas pueden hacer lo mismo que los niños”<sup>105</sup>.

De igual manera, se constató la tendencia de **no cuestionar la imposición de roles a las mujeres**, pues “si bien casi la totalidad condena el ‘machismo’ o la concepción arrogante que tiene el hombre de su identidad con respecto a la mujer, muchos/as temen que poner en entredicho los roles tradicionales de los sexos pueda socavar los valores éticos, que asocian a una concepción tradicional de la familia y de la mujer, considerada como ‘el puntal del hogar’”<sup>106</sup>.

Ello se corrobora en el **carácter discriminador de los libros de enseñanza escolar**, ya que en ellos “las características propias de cada sexo también se presentan de forma estereotipada: a los hombres se los describe principalmente como valientes, inteligentes, patriotas, dotados del sentido de mutua colaboración; a las mujeres como obedientes y sacrificadas”<sup>107</sup>. Por otro lado, dentro del hogar, “se presenta a las mujeres ocupadas lavando, cocinando, cuidando a los/as niños/as, mientras los hombres descansan y ayudan a los/as niños/as a hacer los deberes. Se describe la casa como el lugar de las mujeres por excelencia; así, de 100 textos que describen una casa, 70 representan a mujeres y 30 a hombres”<sup>108</sup>.

Asimismo, se corroboró que **los/as docentes prestan menor atención a las alumnas**, ya que como señala Michel, “los/las enseñantes prestan mayor atención a los niños y son más severos/as con las niñas, aunque estas no hagan más barullo que los niños”<sup>109</sup>.

---

<sup>105</sup> MICHEL, Andrée. “Los estereotipos sexistas en la escuela y en los manuales escolares”. En: *Educere*. Año 5, N° 12. Universidad de los Andes. Mérida, 2001, p. 69.

<sup>106</sup> Loc. cit.

<sup>107</sup> Ibidem, p. 72.

<sup>108</sup> Loc. cit..

<sup>109</sup> Ibidem, p. 69.

Si bien la investigación mencionada fue realizada en 1983, se acredita que dicha situación no ha cambiado mucho, ya que la Defensoría del Pueblo ha recomendado “como objetivos generales la eliminación de los patrones culturales y de los estereotipos basados en la inferioridad de alguno de los sexos en las metodologías de enseñanza; la eliminación de las funciones que se asignan tradicionalmente a mujeres y hombres en los textos, publicaciones y planes de estudio; así como la capacitación del personal docente respecto a la identificación de prácticas que coadyuvan a prevenir cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres”<sup>110</sup>, lo cual revela la subsistencia de la discriminación contra la mujer en esta esfera.

#### **2.1.2.5. Relación entre el nivel educativo de la mujer y la salud**

Si bien la presente investigación aborda el estudio del acceso de la mujer a las prestaciones de salud, consideramos necesario detenernos a estudiar la relación entre su nivel educativo y la satisfacción de sus necesidades de salud, debido a que el acceso a prestaciones que preserven su integridad y su vida muchas veces se ve condicionado al nivel educativo que estas mujeres hayan alcanzado, siendo lo más preocupante que –como tendremos oportunidad de apreciar- dicho nivel incide de manera determinante en el acceso que estas mujeres tienen a métodos anticonceptivos, como también incide sobre la tasa de mortandad y de desnutrición infantil

##### **a. Relación entre nivel educativo de la mujer y el acceso a métodos anticonceptivos**

De acuerdo a Bravo Barja<sup>111</sup>, se comprueba la relación entre la educación y el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos, pues cuando menor sea el nivel educativo alcanzado, mayor será la prescindencia en el empleo de dichos métodos.

---

<sup>110</sup> ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER. “Segundo reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (enero-diciembre 2008)”. Op. cit., p. 39.

<sup>111</sup> BRAVO BARJA, Rosa. “Presupuesto por resultados. Indicadores de género: educación, salud y programa juntos”. Op. cit., p. 24.



Tal afirmación se sustenta en el estudio realizado por el INEI durante 2004, el cual revela lo siguiente:

- En cuanto a las **mujeres que no han accedido a la educación**, se comprueba que el 24% utiliza métodos modernos anticonceptivos, mientras que el 25% métodos tradicionales. Sin embargo, el 49% *no utiliza método anticonceptivo alguno*.
- En relación a las **mujeres que han accedido a la educación primaria**, se comprueba que el 38% utiliza métodos modernos anticonceptivos, mientras que el 28% métodos tradicionales. Sin embargo, el 33% *no utiliza método anticonceptivo alguno*.
- En cuanto a las **mujeres que han accedido a la educación secundaria**, se comprueba que el 52% utiliza métodos modernos anticonceptivos, mientras que el 21% métodos tradicionales. Sin embargo, el 26% *no utiliza método anticonceptivo alguno*.
- En relación a las **mujeres que han accedido a la educación superior**, se comprueba que el 57% utiliza métodos modernos anticonceptivos, mientras que el 18% métodos tradicionales. Sin embargo, el 25% *no utiliza método anticonceptivo alguno*.

#### **b. Relación entre el nivel educativo de la mujer y la tasa de mortalidad infantil**

De acuerdo a Bravo Barja, “la educación de la madre y el orden de nacimiento son factores asociados a los diferenciales de mortalidad infantil y en la niñez. A pesar de que ambos factores son manifestaciones de la pobreza, es posible que políticas tendientes a mejorar las oportunidades de educación de las mujeres y a fomentar su capacidad para ejercer los derechos sexuales y reproductivos generen avances en materia de género, que no solo

benefician a las mujeres sino que a la vez permiten disminuir la mortalidad infantil y en la niñez, entre otras consecuencias de la pobreza”<sup>112</sup>.

Esta situación se evidencia si es que disgregamos la tasa de mortalidad infantil tomando en consideración el nivel educativo de la madre, para lo cual nos valdremos de los datos acuñados por la autora, los cuales fueron obtenidos del estudio realizado por INEI durante 2004:

- En cuanto a las **mujeres que no han accedido a la educación**, se comprueba que la *tasa de 76% mortandad infantil*.
- En relación a las **mujeres que han accedido a la educación primaria**, se comprueba que la *tasa de 54% mortandad infantil*.
- En cuanto a las **mujeres que han accedido a la educación secundaria**, se comprueba que la *tasa de 30% mortandad infantil*.
- En relación a las **mujeres que han accedido a la educación superior**, se comprueba que la *tasa de 20% mortandad infantil*.

### **c. Relación entre el nivel educativo de la mujer y la tasa de desnutrición infantil**

Como señala Bravo Barja, “la malnutrición infantil sigue siendo un problema común en los países en desarrollo, llegando a abarcar aproximadamente a la tercera parte de los niños menores de cinco años a nivel mundial. En el Perú 25.4% de los niños menores de cinco años es afectado por la desnutrición crónica. Por otro lado, diversas evidencias muestran que entre un tercio y la mitad de la mortalidad infantil puede ser atribuida a la malnutrición. Asimismo, está ampliamente aceptado que las enfermedades infecciosas son parte de las

---

<sup>112</sup> BRAVO BARJA, Rosa. “Presupuesto por resultados. Indicadores de género: educación, salud y programa juntos”. Op. cit., p. 24.

causas inmediatas de la malnutrición, junto con una alimentación inadecuada y la consecuente carencia de energía y nutrientes”<sup>113</sup>.

Sin embargo, la desnutrición de los niños se encuentra íntimamente vinculada al nivel educativo de la madre, pues al no acceder a niveles más sofisticados de educación, esta desconoce una serie de factores que inciden en contra de la adecuada nutrición de sus hijos. Ello puede ser constatado, conforme señala la mencionada autora, en el siguiente estudio de INEI, efectuado durante 2004, el cual denota la mayor tasa de desnutrición infantil en aquellos menores de edad que son hijos de mujeres que no han accedido a la educación o que lo han hecho a los niveles básicos.

### **c.1. Desnutrición crónica**

En cuanto a desnutrición crónica<sup>114</sup> se observa lo siguiente:

- En cuanto a los **hijos de mujeres que no han accedido a la educación**, se comprueba que el 51.6% posee desnutrición crónica. Sin embargo, el 22.5% *sufre de desnutrición crónica severa*.
- En cuanto a los **hijos de mujeres que han accedido a la educación primaria**, se comprueba que el 37.4% posee desnutrición crónica. Sin embargo, el 12.0% *sufre de desnutrición crónica severa*.
- En cuanto a los **hijos de mujeres que han accedido a la educación secundaria**, se comprueba que el 15.0% posee desnutrición crónica. Sin embargo, el 2.7% *sufre de desnutrición crónica severa*.

---

<sup>113</sup> Ibídem, p. 26.

<sup>114</sup> La cual es determinada de acuerdo a la talla por edad.

- En cuanto a los **hijos de mujeres que han accedido a la educación superior**, se comprueba que el 6.9% posee desnutrición crónica. Sin embargo, el *0.9% sufre de desnutrición crónica severa*.

## c.2. Desnutrición aguda

En cuanto a desnutrición aguda<sup>115</sup> se observa lo siguiente:

- En cuanto a los **hijos de mujeres que no han accedido a la educación**, se comprueba que el 2.2% posee desnutrición aguda. Sin embargo, el *0.3% sufre de desnutrición aguda severa*.
- En cuanto a los **hijos de mujeres que han accedido a la educación primaria**, se comprueba que el 1.1% posee desnutrición aguda. Sin embargo, el *0.3% sufre de desnutrición aguda severa*.
- En cuanto a los **hijos de mujeres que han accedido a la educación secundaria**, se comprueba que el 0.6% posee desnutrición aguda. Sin embargo, el *0.1% sufre de desnutrición aguda severa*.
- En cuanto a los **hijos de mujeres que han accedido a la educación superior**, se comprueba que el 0.5% posee desnutrición aguda. Sin embargo, el *0.2% sufre de desnutrición aguda severa*.

## c.3. Desnutrición global

En cuanto a desnutrición global<sup>116</sup> se observa lo siguiente:

---

<sup>115</sup> La cual es determinada de acuerdo al peso por talla.

<sup>116</sup> La cual es determinada de acuerdo al peso para la edad.

- En cuanto a los **hijos de mujeres que no han accedido a la educación**, se comprueba que el 16.5% posee desnutrición global. Sin embargo, el 3.3% *sufre de desnutrición global severa*.
- En cuanto a los **hijos de mujeres que han accedido a la educación primaria**, se comprueba que el 10.9% posee desnutrición global. Sin embargo, el 1.3% *sufre de desnutrición global severa*.
- En cuanto a los **hijos de mujeres que han accedido a la educación secundaria**, se comprueba que el 3.3% posee desnutrición global. Sin embargo, el 0.2% *sufre de desnutrición global severa*.
- En cuanto a los **hijos de mujeres que han accedido a la educación superior**, se comprueba que el 1.6% posee desnutrición global. Sin embargo, el 0.0% *sufre de desnutrición global severa*.

### **2.1.3. DISCRIMINACIÓN CONTRA LA SALUD EN EL ÁMBITO LABORAL**

#### **2.1.3.1. Lineamientos generales sobre el trabajo**

A continuación apreciaremos los lineamientos generales sobre el trabajo a partir de la normativa vigente, de la clasificación de la población económicamente activa y de la jornada de trabajo en nuestro país.

##### **a. Marco legal vigente**

El trabajo ha sido consagrado en nuestra Constitución a través de diversos dispositivos que reconocen el derecho a trabajar libremente (artículo 2°.15), el rol promotor del Estado (artículo 23°), los derechos del trabajador (artículo 24°), la jornada ordinaria de trabajo (artículo 25°), los principios que regulan la relación laboral (artículo 26°), la protección del

trabajador frente al despido arbitrario (artículo 27°), los derechos colectivos del trabajador (artículo 29°) y la participación en las utilidades (artículo 29°).

De igual manera, y como resultado de la interpretación sistemática del artículo 55° y de la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política, resultan aplicables los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscritos por nuestro país, tales como los Convenios N° 100, 111, 122, 156 y la Recomendación N° 165<sup>117</sup>, los cuales reconocen la implementación de mecanismos dirigidos a asegurar la igualdad de oportunidades al trabajo de los diferentes grupos que subyacen en nuestra realidad, formulando algunas disposiciones específicas en torno a los derechos de la mujer, como se puede apreciar en el reconocimiento del acceso a remuneraciones equitativas entre el varón y la mujer.

#### **b. Clasificación de la Población Económicamente Activa (PEA)**

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA) ha clasificado a nuestra población a partir de dos categorías. Una de ellas es la **población en edad de trabajar (PET)**, definida como el “[c]onjunto de personas que están aptas en cuanto a edad para el ejercicio de funciones productivas. (...) En el Perú, se considera a toda la población de 14 años y más como [PET]”<sup>118</sup>. La otra categoría corresponde a la **población económicamente activa (PEA)**, que comprende a “todas las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia se encontraban trabajando (ocupados) o buscando efectivamente trabajo (desocupados)”<sup>119</sup>. En lo que concierne a este estudio, se abordará la discriminación a la mujer tomando como referente a la PEA.

La **PEA** se clasifica en **ocupada**<sup>120</sup> (a. trabajo independiente o dependiente; b. en las FF.AA., PNP o en el clero; c. remunerado; d. con derechos laborales, como vacaciones,

---

<sup>117</sup> Aprobados mediante Resoluciones Legislativas N° 13284 del 1 de Febrero de 1960, 17687 del 10 de Agosto de 1970, 16388 del 27 de Julio de 1967 y 24508 del 23 de Mayo de 1986, respectivamente.

<sup>118</sup> VELAZCO PORTOCARRERO, Tatiana (Coordinadora). “La mujer en el mercado laboral peruano. Informe anual 2005”. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Lima, 2006, p. 50.

<sup>119</sup> Ibidem.

<sup>120</sup> Ibidem.

licencia, huelga y seguridad social) y **subempleada**<sup>121</sup> (la ocupación no se adecua a las normas laborales, siendo clasificados en subempleados por horas e ingresos).

### **c. Acceso al empleo de mujeres y de varones**

Conforme señala el INEI, según el censo de 2007 “la población femenina se incrementa en el período intercensal en 2 millones 697 mil 536 mujeres, este crecimiento es diferenciado por grupos de edad, particularmente en el grupo de edad productiva (15-64 años) que ha pasado de 58,9% (6’536,851 mujeres) en 1993 a 63,6% (8’771,834 mujeres) en el 2007, asimismo, se observa que el grupo de mujeres de 65 y más años de edad se ha incrementado de 4,9% (538,960) en 1993 a 6,7% (919,744) en el 2007.

En el mismo período la población masculina creció en 2 millones 666 mil 265 personas, siendo el grupo de 15 a 64 años el que presenta el mayor crecimiento, pasando de 57,8% (6’330,010 hombres) en 1993 a 62,5% (8’518,103 hombres) en el año 2007, de igual manera el grupo de 65 y más años de edad, pasó de 4,4% (487,159) en 1993 a 6,2% (844,943) en el 2007”<sup>122</sup>.

De ello se determina que tanto varones como mujeres tienen igual acceso al mercado laboral; sin embargo, esto no determina necesariamente que las condiciones de trabajo sean similares, punto que resultará estudiado posteriormente y que acreditará la situación de inequidad a la que se encuentra sometida la mujer en Perú.

### **d. Jornada de trabajo**

Como señala la OIT, “el tiempo que la mujer dedica al hogar y a las responsabilidades domésticas restringe su disponibilidad para el trabajo remunerado”, lo cual condiciona que “exista una clara ‘brecha de género’ en cuanto a las horas de trabajo en el mundo entero:

---

<sup>121</sup> Ibidem.

<sup>122</sup> INEI. “Perfil sociodemográfico del Perú”. Op. cit., p. 42.

los hombres tienden a horas de trabajo largas, mientras que las horas más cortas son generalmente para la mujer”<sup>123</sup>.

En efecto, el sexo “es también una variante clave que afecta las horas de trabajo por cuenta propia en los países en desarrollo. Mientras que los hombres trabajadores por cuenta propia trabajan horas muy largas o muy cortas, debido sobre todo al subempleo, las horas cortas son comúnmente para las mujeres que trabajan por cuenta propia. Las mujeres usan el trabajo por cuenta propia para lograr el trabajo a tiempo parcial o de menos horas, lo que no es posible lograr en la economía formal. Esto les permite ganar algo de dinero mientras cumplen con sus responsabilidades familiares”<sup>124</sup>.

Lamentablemente, la tendencia revelada por la OIT se hace presente en Perú, ya que del estudio realizado por esta entidad, se constata que del universo de los países en los que se trabaja más de 48 horas semanales, Perú es el que ocupa el primer lugar, con un índice de 50% de su población laboral, superando ampliamente a países como Reino Unido, Suiza, Mauricio, Estados Unidos, Japón, Estonia, Hungría, Países Bajos, Tanzania y Tailandia, entre otros<sup>125</sup>, a pesar de que nuestra Constitución Política establece en su artículo 25° que “la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo”.

#### **2.1.3.2. Discriminación a la mujer en la remuneración**

En muchos casos y sin que medie causa objetiva, las mujeres son objeto de una arbitraria diferenciación en su remuneración respecto a los varones que cuentan con su mismo nivel educativo.

##### **a. Remuneración de las mujeres con estudios primarios**

---

<sup>123</sup> PROGRAMA SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DEL EMPLEO. “Working Time Around the World: Principales hallazgos e implicaciones para las políticas”. En: *Hoja Informativa*. N° 20. OIT. Ginebra, 2007, p.1.

<sup>124</sup> *Ibidem*, p.2.

<sup>125</sup> *Loc. cit.*



Sólo el 25.7% de personas con estudios primarios<sup>126</sup> se encuentran dentro de la PEA ocupada o subempleada. Disgregado por géneros, 26.2% de varones y 25.0% de mujeres con estudios primarios conforman la PEA. Sin embargo, este reducido margen no se refleja en la remuneración; así, **mientras los varones con estudios primarios perciben un promedio de S/. 606, las mujeres con su mismo nivel educativo reciben una retribución de S/. 445**, es decir, una diferencia de S/. 161.

#### **b. Remuneración de las mujeres con estudios secundarios**

De otro lado, 39.7% de personas con estudios secundarios<sup>127</sup> conforman la PEA. De ella, 43.1% son varones y 35.7%, mujeres. A diferencia de lo que ocurre con las personas con estudios primarios, existe una brecha mayor de integración al mercado laboral en perjuicio de la mujer de 7.4%, **mientras los varones con educación secundaria perciben en promedio S/. 863, las mujeres S/. 546**, casi 40% menos que sus compañeros hombres.

#### **c. Remuneración de las mujeres con estudios superiores no universitarios**

Por su parte, sólo el 10.9% de personas con estudios superiores no universitarios<sup>128</sup> integran la PEA, disgregado en 9.2% de varones y 12.1% de varones. Sin embargo, estos indicadores no se traducen en la remuneración, ya que **mientras el ingreso promedio de los varones asciende a S/. 1,062, el de las mujeres a S/. 863**, es decir, 19% menos.

#### **c. Remuneración de las mujeres con estudios superiores universitarios**

En cuanto a las personas con estudios superiores universitarios<sup>129</sup>, sólo el 11.0% participan dentro de la PEA: 11.8%, varones y 10.0%, mujeres. Sin embargo, el reducido margen no se refleja en los ingresos económicos, pues **mientras los varones perciben en promedio**

---

<sup>126</sup> VELAZCO PORTOCARRERO, Tatiana (Coordinadora). “La mujer en el mercado laboral peruano. Informe anual 2005”. Op. cit., p. 31.

<sup>127</sup> Loc. cit.

<sup>128</sup> Loc. cit.

<sup>129</sup> Loc. cit.

**S/. 3,193, las mujeres tan sólo S/. 1,401**, es decir S/. 1,792 menos, el índice más bajo en relación al nivel educativo alcanzado.

Estos datos nos permiten comprender que la formación profesional, lejos de cifrar expectativas en cuanto a la retribución económica, se encuentra lejana de marcar el desarrollo de la mujer en el mercado laboral. Como vemos, en muchos casos, la pertenencia al género femenino determina un trato discriminatorio, debido a la *inexistencia de razones objetivas que expliquen por qué las mujeres deban ganar S/. 161, S/. 317, S/. 199 y S/. 1,792 menos que los varones con su misma formación.*

### **2.1.3.3. El trabajo invisible del “ama de casa”**

A través de las ideas expuestas hemos revelado un panorama de inequidad de la mujer en el ámbito laboral. Sin embargo, esta situación se agrava cuando enfocamos nuestra atención al *trabajo familiar no remunerado.*

Como refiere Macassi León, **en el Perú, casi la tercera parte de las mujeres que conforman la PEA (29.0%) realizan labores domésticas sin retribución económica alguna**<sup>130</sup>, lo cual es avalado por nuestra sociedad al clasificarlas en la categoría de “amas de casas”, que responde a la clásica imagen de la mujer dentro de la esfera privada, destinada a la crianza de los hijos, al cuidado del hogar y a la realización de otras labores en el plano doméstico sin recibir contraprestación alguna.

Como señala el Director General de la OIT, “el trabajo doméstico suele ser ‘invisible’, no se valora como se debiera, y carece de protección. **Se realiza en hogares que no se consideran lugares de trabajo**, para particulares que no tienen la consideración de empleadores, y por trabajadores que tampoco son considerados como tales. Al estimarse que esa actividad es una extensión de las obligaciones domésticas y de las

---

<sup>130</sup> MACASSI LEÓN, Ivonne (Coordinadora). “Informe alternativo al sexto informe periódico del Estado Peruano al Comité de la CEDAW”. Op. cit., p. 148.

responsabilidades familiares tradicionales no remuneradas de la mujer, se le otorga un valor pecuniario escaso. Esto explica por qué la legislación nacional suele conceder a esta categoría de trabajadores un trato diferenciado e inferior al otorgado a los demás empleados. Además, en estos casos no se suele velar lo suficiente por el cumplimiento efectivo de la legislación aplicable”<sup>131</sup> (el sombreado es nuestro).

Como veremos a continuación existen dos factores que impiden el reconocimiento legal del trabajo de la mujer en el hogar; nos referimos a la percepción del rol de la mujer y a la interpretación restrictiva de los dispositivos legales de los que se derivan sus derechos laborales.

#### **a. Percepción sobre el rol de la mujer y del varón**

Como adelantáramos en uno de los primeros pies de página de esta investigación, el **género** constituye la percepción que se tiene sobre los roles de las mujeres y de los varones en la sociedad, mientras que el **sexo** obedece a consideraciones fisiológicas. Es decir, mientras el género puede ser masculino o femenino, a través del sexo se corrobora la identificación como varón o mujer.

Sin perjuicio del desarrollo que se realizará sobre este tema, debemos señalar que **la mujer ha sido concebida a partir del espacio privado**, es decir, del espacio doméstico, en el cual se encuentra bajo la sujeción del **varón, a quien corresponde la actuación dentro del espacio público**, de aquel externo al doméstico, donde puede desarrollarse y obtener el reconocimiento de terceros, en cuanto a su capacidad intelectual y del pago de la remuneración, por citar algunos ejemplos.

##### **a.1. Percepción sobre el rol de la mujer**

---

<sup>131</sup> DIRECTOR GENERAL DE LA OIT. “La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean”. OIT, Ginebra, 2007, p. 122.

Sobre la base de tal perspectiva, se asume que **la mujer es un ser que, “por las condiciones de su sexo”, delicada y frágil, tiene mayor predisposición a realizar determinadas actividades**, como son aquellas **que involucran el cuidado del hogar**, la crianza de los hijos y fungir como elemento vinculante en la familia debido a su carácter desprendido, proveedor de amor y de comprensión que la hacen capaz de erigirse en el ser “moralmente” más elevado del hogar, que unifica a los integrantes de la misma.

Por ello es que Marín Hernández señala que “las representaciones femeninas se encuentran íntimamente ligadas a los discursos monocentros patriarcales, a sus procesos de existencia y a las consecuencias acarreadas por la implicación de la idea de la mujer dentro de conceptos como la fragilidad o la belleza femenina, al igual que el reciclaje o la reivindicación de su memoria por medio de los oficios permitidos, todo esto unido a la perentoria necesidad de ubicar su pensamiento en el cómo entender su posición dentro de espacios marginales, privados y lejanos de la acción pública”<sup>132</sup>.

Martínez justifica esta situación como el producto de un proceso en el que “una de las claves para entender el papel secundario de la mujer en la sociedad según el análisis feminista, era su reclusión en el seno de la familia causada por la división sexual del trabajo que le adjudicaba lo doméstico o interior, mientras que a los hombres se les adjudicaba lo social o exterior”<sup>133</sup>

En tal sentido, **la realización de tales labores constituye una obligación sustentada en su género femenino** y, en tal sentido, respondería a una obligación “inherente a toda mujer”, razonamiento inclusive aplicado sobre las mujeres que laboran en el ámbito público, ya que al retornar al hogar, tendrían la “obligación” de hacerse cargo de las responsabilidades domésticas y del cuidado de su prole.

---

<sup>132</sup> MARÍN HERNÁNDEZ, Elizabeth. “Pensar en femenino: la mujer y su aparecer en la modernidad: Teresa de la Parra, Tarsila do Amaral, Frida Kahlo, Amalia Peláez”. En: *Presente y Pasado. Revista de Historia*. Año 11, N° 22. Facultad de Humanidades y Educación Universidad de Los Andes. Mérida, 2006, p. 142.

<sup>133</sup> MARTÍNEZ, Remedios. “Trabajo, cultura y género”. En: *La difusión del conocimiento en los estudios de las mujeres. Actas del II Congreso Internacional del Audem*. Universitat d’ Alicante. Alicante, 2001, p. 336.

Al respecto, el Director General de la OIT señala que *“como en la mayoría de las sociedades las mujeres siguen cargando con la mayor parte de la responsabilidad familiar, éstas son fuente de desigualdad en términos de género*. Las tensiones que surgen entre la vida laboral y la familia limitan las opciones que tienen las mujeres entre no trabajar y trabajar y, en este caso, entre dónde y qué tipos de trabajos puedan tomar. Ello afecta a su vez a su experiencia y antigüedad laborales, así como a su formación y sus perspectivas de carrera, y contribuye a que sus ingresos no aumenten. Ahora bien, incluso las mujeres con responsabilidades familiares que logran mantenerse y progresar en el mercado de trabajo y ocupar altos cargos siguen ganando menos que los hombres que ocupan puestos análogos, lo cual denota que hay discriminación en materia de remuneración. En consecuencia, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo presupone que se arbitren, tanto a corto como a largo plazo, políticas para abordar conjuntamente todas las cuestiones mencionadas”<sup>134</sup> (las cursivas son nuestras).

## **a.2. Percepción sobre el rol del varón**

Por su parte, la construcción del rol del **varón** se concibe a través de su **“inherente” fortaleza**, *la cual le proporciona los mecanismos necesarios para cumplir con su “obligación” de insertarse en ella, ya que en el ámbito público tendrá acceso a los recursos destinados para cumplir con su rol protector y proveedor de los sujetos más débiles de la familia, como serían los/as hijos/as y la esposa*.

Por tal motivo, el varón está obligado a salir del ámbito doméstico e incorporarse al público para luchar por su posicionamiento en este, sea a través del estudio o de su participación en el “mercado laboral no doméstico”. A través de ellos, el varón realizará actividades que si bien serían físicas, serían por sobre todo intelectuales, lo cual implicaría un proceso de razonamiento y justificación sobre las acciones adoptadas en el ámbito público, en pos de alcanzar la acreditación de cierto nivel educativo e insertarse en el mercado laboral, para que el reconocimiento por el desempeño profesional se traduzca en la remuneración, la que

---

<sup>134</sup> DIRECTOR GENERAL DE LA OIT. “La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean”. Op. cit., p. 82.

—considerada como un mecanismo para satisfacer las necesidades esenciales- le permitirá al varón —como ser fuerte- obtenerla a través de su esfuerzo para cumplir con su rol protector y proveedor para satisfacer las necesidades de los seres más débiles de la estructura familiar.

Por ello es que el Director General de la OIT apunta que “para comprender los alcances de un tema como el de la conciliación de la vida familiar y profesional, es preciso comenzar haciendo un análisis de los diferentes roles asignados por la sociedad, eminentemente patriarcal, a hombres y mujeres. En esta división, conocida como **‘división sexual del trabajo’**, a las mujeres se les ha asignado, de manera casi exclusiva, la responsabilidad de la vida doméstica, esto es, la responsabilidad de garantizar que los miembros de su familia tengan las condiciones que hagan posible una vida sana y digna. Es decir, *se relegó a las mujeres al ámbito privado, al de lo doméstico, mientras que el rol previsto para los varones es el de proveedores adscritos, básicamente, al mundo de lo público*. Este modelo funcionó durante el tiempo en que no existieron coyunturas externas que obligasen a cambiarlo”<sup>135</sup> (el sombreado y las cursivas son nuestras).

## **b. Panorama del “ama de casa”**

Como señala De Miguel, las mujeres que realizan labores domésticas constituyen un colectivo que trabaja “una media de entre seis y nueve horas diarias durante la mayor parte de los días del año, y realizan 33 actividades diferentes para desempeñar su labor, aunque, a cambio, no reciben ninguna contraprestación monetaria”<sup>136</sup>.

Así, pues “en términos generales, las mujeres mayores de 45/50 años pertenecen a distintas generaciones a las que se educó para que se dedicaran preferentemente a la familia. Las actividades que realizan son muy variadas y se pueden dividir en: aprovisionamiento del hogar, cuidado de los niños, limpieza, costura, preparación de alimentos, cuidado de

---

<sup>135</sup> Ibidem, p. 13.

<sup>136</sup> DE MIGUEL, Elvira. “El ama de casa, ‘La mal pagá’”. En: *El Mundo*. Semanario de economía familiar, consumo y empleo. N° 29. Madrid, 5 de mayo de 1996.

enfermos y ancianos, transporte familiar, reparaciones caseras y representación familiar”<sup>137</sup>. Por tal motivo, un grupo significativo de ellas no se considera merecedoras de un sueldo o afirma que cuidar de su familia constituye parte de su responsabilidad.

De igual manera, Juan Manuel Ramos, presidente de la Asociación de la Familia y Familia Numerosa de Castellón (FANUCAS) considera que el ama de casa “es una figura desprestigiada y desprotegida, a pesar de que realiza una función social primordial y ahorra mucho dinero a las arcas del Estado. Su presencia en casa permite ahorrar a la administración muchas plazas de guardería y de residencias; a cambio de ello, no recibe ninguna compensación”<sup>138</sup>.

Este panorama sirve de referente para que el Grupo Temática Nacional de Igualdades de España llegue a la conclusión de que “**el trabajo doméstico no es valorado y no tiene asignado un precio**; es decir, por su realización las mujeres no reciben ingresos. Esto tiene, al menos, **dos consecuencias**: una es que, a pesar de la gran cantidad de tiempo y de esfuerzo invertidos en esta clase de trabajo, las mujeres **no reciben ingresos** y por ello tienen menos dinero para intercambiar por bienes y servicios en el mercado. *Las mujeres nunca han recibido ingresos por algo que ha sido siempre su responsabilidad y que sí es trabajo*. La otra consecuencia es que, al no tener un precio asignado, no tiene un valor de mercado y, por ello, **la economía no contabiliza en las cifras sobre la riqueza (PIB) el aporte económico** que hacen las mujeres con su trabajo doméstico”<sup>139</sup> (las cursivas, el sombreado y el subrayado son nuestros).

Por tal motivo, el Parlamento Europeo y Naciones Unidas han instado a los gobiernos “a que adopten una serie de medidas jurídicas y económicas, como su inclusión en el PIB (valorando su trabajo a precio de mercado, esto es: lo que significaría conseguir esos bienes y servicios si hubiera que pagarlos), apoyo al reciclaje profesional que permita la

---

<sup>137</sup> Loc. cit.

<sup>138</sup> ASOCIACIÓN FANUCAS. “Las madres que trabajan en casa, discriminadas”. En: *Forum Libertas*. Madrid, 2005. Disponible en: [http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id\\_noticia=4225](http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=4225) (Revisado el 06 de mayo de 2009).

<sup>139</sup> GRUPO TEMÁTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. “Análisis de las Buenas Prácticas”. GTN-IO. Madrid, 2003, p. 14.

reanudación de una actividad lucrativa, y la individualización de los derechos de la Seguridad Social (lo que les posibilitaría recibir una pensión a título propio)”<sup>140</sup>.

### **c. Fundamento del reconocimiento del trabajo del ama de casa**

A continuación fundamentaremos que las labores realizadas por el ama de casa son susceptibles de ser reconocidas como propias de una relación laboral.

#### **c.1. Legislación civil**

El reconocimiento del trabajo del ama de casa es perfectamente viable en nuestro país, pues aunque el artículo 291° del Código Civil contenga una ambigua redacción en el sentido de que “si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos, la obligación de sostener a la familia recae sobre el otro”, debe comprenderse que el sostén de la familia no se da exclusivamente a través de los referentes económicos, sino también del trabajo doméstico, ya que la permanente estancia en dicho lugar y la realización de labores a favor del resto de integrantes de la familia le permiten a su ejecutor/a identificar las necesidades de estos en el día a día y adoptar decisiones concretas a fin de satisfacerlas, con lo cual se da un sostén material y emocional a la familia en su conjunto.

A su vez, nuestro argumento no se encuentra desvirtuado por el artículo 288° del Código Civil, el cual establece que “los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia”, pues, como señala Monge Talavera, “no debe confundirse con el deber específico de colaboración inherente a los esposos de trabajar, juntos o en forma separada, por la prosperidad económica del hogar. El deber de asistencia debe entenderse como la necesaria colaboración entre los esposos en la vida cotidiana”<sup>141</sup>.

#### **c.2. Legislación laboral**

---

<sup>140</sup> DE MIGUEL, Elvira. “El ama de casa, ‘La mal pagá’”. Op. cit.

<sup>141</sup> MONGE TALAVERA, Luz. “Deber de fidelidad y asistencia”. En: *Código Civil comentado*. Tomo II. Gaceta Jurídica. Lima, 2007, p. 161.



A través del Decreto Legislativo N° 003-97-TR (Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral) se establecen los parámetros que configuran a las relaciones laborales.

#### **c.2.1. Prestación de servicios**

De acuerdo al artículo 5° del Decreto Legislativo N° 003-97-TR, “**los servicios para ser de naturaleza laboral, deben ser prestados en forma personal y directa sólo por el trabajador como persona natural.** No invalida esta condición que el trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores” (el sombreado es nuestro).

En el caso en cuestión se acredita que la mujer presta los servicios de manera personal y directa en su hogar como persona natural. Por lo tanto, podemos decir que dicho elemento se encuentra verificado en el trabajo doméstico desempeñado por la mujer.

#### **c.2.2. Subordinación**

De acuerdo al artículo 9° del Decreto Legislativo N° 003-97-TR, “por la subordinación, **el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador,** el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro **de los límites de la razonabilidad,** cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo” (el sombreado es nuestro).

Este elemento de la relación laboral constituye el punto más débil y, a su vez, más fuerte para argumentar que la mujer que realiza labores domésticas de manera permanente en el hogar se encuentra dentro de una relación laboral.

En efecto, es el punto más débil de nuestra posición debido a que desde una perspectiva formalista no se podría acreditar que uno o varios miembros de la familia se conviertan en empleadores de la mujer que de manera permanente realiza labores domésticas en su hogar a favor de los integrantes de la familia, ya que formalmente no existen dispositivos que la sometan a estos.

Sin embargo, este punto constituye el más fuerte de nuestra posición de reconocimiento del trabajo doméstico realizado por la mujer que de manera permanente presta servicios en el hogar pues nos deriva a la observación de nuestra particular realidad.

Así, pues, si somos conscientes de que la división del trabajo ha determinado el reconocimiento del servicio externo y la invisibilidad del doméstico, esto ha originado que se piense que aquellas personas que no laboran externamente y, por lo tanto, no acceden a remuneración, se encuentran obligadas de por sí a prestar servicios domésticos para el mantenimiento de la casa. Esto implica una **subordinación de hecho de la mujer que habitualmente presta servicios domésticos en su hogar frente a las personas que proveen de recursos materiales al sostenimiento del hogar.**

En tal sentido, la subordinación de estas mujeres se adecua al contenido del artículo 9° del Decreto Legislativo N° 003-97-TR, ya que se corrobora en la realidad la sujeción de estas al proveedor, lo que nos lleva a reforzar nuestra posición a través del **principio de primacía de la realidad**, el cual ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional al señalar que “significa que *en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos*”<sup>142</sup> (las cursivas son nuestra). Por lo tanto, “el contrato de

---

<sup>142</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 01944-2002-AA, Fundamento Jurídico N° 3.

trabajo presupone el establecimiento de una relación laboral permanente entre *el empleador* y el trabajador, en virtud de la cual éste *se obliga a prestar servicios en beneficio de aquél de manera diaria, continua y permanente, cumpliendo un horario de trabajo*”<sup>143</sup> (las cursivas son nuestras).

De ello se deriva que las labores domésticas realizadas de manera permanente por la mujer constituyen un trabajo subordinado a la voluntad de quien provee de recursos económicos, máxime si es que se constata que tales proveedores tienen la percepción de que tales mujeres se encuentran en la “obligación” de realizar dichas labores.

### **c.2.3. Remuneración**

De acuerdo al artículo 6° del Decreto Legislativo N° 003-97-TR, “constituye remuneración para todo efecto legal **el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición**. Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. No constituye remuneración computable para efecto de cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto” (el sombreado es nuestro).

Este constituye un punto interesante, pues de las conversaciones tenidas con algunos varones que son proveedores económicos, estos señalan que sus esposas son quienes administran tales recursos. Bien podría decirse que a través de tal comportamiento se estaría satisfaciendo la necesidad de estas mujeres de contar con una remuneración; sin embargo, consideramos errada tal perspectiva, pues se le otorgaría una función adicional a la prestada en el ámbito doméstico, cual es la de administradora de los ingresos, que si bien

---

<sup>143</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 01944-2002-AA, Fundamento Jurídico N° 3.

podrían ser dispuestos de acuerdo al buen juicio de la mujer, no responderían directamente al pago de una remuneración por el trabajo realizado. Igual perspectiva se daría en el caso de aquellos proveedores que les otorgan bienes a las amas de casa, los cuales no podrían ser considerados como conceptos propios de la relación laboral, ya que son otorgados en calidad de dádiva, mas no de contraprestación por el servicio doméstico realizado.

### **c.3. Legislación constitucional**

El sustento del reconocimiento al trabajo del ama de casa lo encontramos en el artículo 26° de la Constitución de 1993, el cual establece tres principios de suma importancia para tal tarea.

Sin embargo, antes de abordarlos es necesario precisar que el Tribunal Constitucional ha definido a los **principios laborales** como “aquellas reglas rectoras que informan la elaboración de las normas de carácter laboral, amén de servir de fuente de inspiración directa o indirecta en la solución de conflictos, sea mediante la interpretación, aplicación o integración normativas”<sup>144</sup>. Hecha esta precisión, damos paso al análisis del tema que concita nuestra atención.

#### **c.3.1. Principio de igualdad de oportunidades laborales**

Este principio, consagrado en el artículo 26° inciso 1 de la Carta Política, ha sido definido por el Tribunal Constitucional al señalarse que la igualdad de oportunidades laborales “se encuentra resguardada cuando se acredita la existencia de los dos requisitos siguientes: a) paridad, uniformidad y exactitud de otorgamiento o reconocimiento de derechos ante hechos, supuestos o acontecimientos semejantes, y b) paridad, uniformidad y exactitud de trato o relación intersubjetiva para las personas sujetas a idénticas circunstancias y condiciones. En buena cuenta, la igualdad se configura como un derecho fundamental de la persona a no sufrir discriminación jurídica alguna; esto es, **a no ser tratada de manera**

---

<sup>144</sup> Ibidem, Fundamento Jurídico N° 2.

**dispar respecto a quienes se encuentren en una misma situación**, salvo que exista una justificación objetiva y razonable para esa diferencia de trato”<sup>145</sup> (el sombreado es nuestro).

Lo expresado por el colegiado es pertinente para el reconocimiento del trabajo doméstico permanente del ama de casa, pues el principio de igualdad de oportunidades laborales es aplicado en la medida que **existe un término de comparación; nos referimos a las trabajadoras del hogar (“empleadas domésticas”)**.

En efecto, si el trabajo doméstico del ama de casa es el mismo que el realizado por una empleada doméstica, el ama de casa es sujeto de derecho en cuanto a la titularidad del principio de igualdad de oportunidades laborales, ya que —como se comprueba— no es objeto de una remuneración, a pesar de que una tercera persona que realiza las mismas labores sí lo es.

### **c.3.2. Principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales**

Consagrado en el artículo 26° inciso 2 de la Carta Política, este principio ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional al señalar que “la irrenunciabilidad de los derechos laborales proviene y se sujeta al ámbito de las **normas taxativas** que, por tales, son de orden público y con vocación tuitiva a la parte más débil de la relación laboral. Es conveniente consignar que una norma jurídica puede contener dentro de su texto, partes taxativas y dispositivas”<sup>146</sup> (el sombreado es nuestro).

Ahora bien, ¿qué normas taxativas reconocerían los derechos laborales de las amas de casa? En nuestra opinión la encontramos en el **artículo 2° de la Ley N° 27986, Ley de los trabajadores del hogar**, el cual dispone que *“son trabajadores al servicio del hogar los que efectúan labores de aseo, cocina, lavado, asistencia, cuidado de niños y demás propias de la conservación de una residencia o casa-habitación y del desenvolvimiento de la vida*

---

<sup>145</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02510-2002-AA, Fundamento Jurídico N° 2.

<sup>146</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00008-2005-AI, Fundamento Jurídico N° 24.

*de un hogar, que no importen lucro o negocio para el empleador o sus familiares*” (las cursivas son nuestras). Cabe precisar que el **Decreto Supremo N° 015-2003-TR**, Reglamento de la mencionada ley, realiza en su artículo 1° la misma definición.

En tal sentido, se corrobora que ambos cuerpos normativos no hacen mención alguna a la exclusión de los miembros del hogar como trabajadores domésticos, por lo cual la mujer se encontraría como beneficiaria de la Ley N° 27986 y de su Reglamento, es decir, de su calidad de trabajadora del hogar.

### **c.3.3. Principio *in dubio pro operario***

El artículo 26° inciso 3 de la Constitución Política consagra la “interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma”. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional subrayó que “el principio *indubio pro operario* será aplicable **cuando exista un problema de asignación de significado de los alcances y contenido de una norma**. Ergo, nace de un conflicto de interpretación, mas no de integración normativa. La noción de ‘norma’ abarca a la misma Constitución, los tratados, leyes, los reglamentos, los convenios colectivos de trabajo, los contratos de trabajo, etc”<sup>147</sup> (el sombreado es nuestro).

Sin embargo, hemos visto que la legislación peruana no presenta tipo alguno de antinomia que represente un reto al intérprete al momento de comprender que el ama de casa realiza una actividad laboral al desempeñarse en el cuidado del hogar, ya que esa misma función es la que realiza una persona que es contratada para tales fines.

No obstante, cabe señalar que frente a un negado conflicto entre dispositivos legales, este sería resuelto a través de la interpretación, proceso a través del cual el operador deberá de proveerse de una visión constitucional, dirigida a la satisfacción de objetivos tutelados por

---

<sup>147</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00008-2005-AI, Fundamento Jurídico N° 24.

nuestra Carta Política, como son el resguardo de la cláusula de igualdad y de dignidad, como también de la libre realización del ser humano a través del trabajo.

#### **d. Consecuencias del reconocimiento del trabajo doméstico del ama de casa**

A continuación expondremos las consecuencias del trabajo realizado por el ama de casa.

##### **d.1. Reconocimiento de la realización de un trabajo**

Aunque implícita, la labor doméstica del ama de casa constituye la prestación de un servicio de carácter laboral, puesto que realiza las labores propias de cualquier persona que debe de hacerse cargo del mantenimiento del hogar.

Por tal motivo, debemos evolucionar y centrar nuestro razonamiento sobre la base de una perspectiva que trascienda la mirada invisible en torno al trabajo doméstico del ama de casa, a efectos de reconocer en ella a una trabajadora que no cumple horario, que no es objeto de beneficios laborales, ni de prestaciones de salud ni mucho menos de una pensión que le permita gozar de los beneficios derivados de la realización de un trabajo que se extiende durante los 365 días del año.

En efecto, la realización de las labores domésticas es considerada como una función “natural” de la mujer o que correspondería en aras de mantener el equilibrio del hogar como “obligación” frente a aquella que “no contribuye” a través de un trabajo externo que es remunerado.

Sin embargo, las ideas expuestas a lo largo de estas líneas nos permiten apreciar con claridad que si bien determinados/as integrantes de la familia realizan un trabajo no doméstico que es remunerado y, a su vez, susceptible de reconocimiento, el ama de casa –y cualquier otro miembro de la familia- que realiza labores domésticas de manera permanente contribuye al mantenimiento de la casa, al resguardar por los intereses de los demás

miembros de la familia, al lavar, cocinar, planchar, realizar diligencias relativas al pago de los servicios, etc.

Esto nos permite sustentar nuestra posición, más aún si es que frente a las siguientes interrogantes se revela el trabajo prestado por el ama de casa: Si una tercera persona realiza labores domésticas en un hogar ajeno, ¿por qué a ella se le reconoce el trabajo y se le paga? ¿Será acaso porque, aunque sea trabajo doméstico, lo presta en un espacio ajeno al doméstico de la trabajadora? Y frente a ello nos preguntamos si no será un trato carente de razonabilidad distinguir a la mujer que presta servicios domésticos en una casa que no es de su familia a la que lo hace en su casa, a efectos de reconocer el trabajo de la primera y dejar en el olvido al realizado por la segunda.

Por tales consideraciones, reafirmamos nuestro reconocimiento en torno al trabajo doméstico realizado por el ama de casa, ya que a través de tal se permite enaltecer a quien durante siglos se ha mantenido en la oscuridad del desamparo y de la ignorancia en torno a la importante función que presta en resguardo de los miembros de la familia.

#### **d.2. Remuneración al ama de casa**

La Constitución establece en su artículo 24° que “el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure para él y su familia, el bienestar material y espiritual”. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que “las remuneraciones de los trabajadores (...) son irrenunciables e intangibles”<sup>148</sup>, configurándose únicamente “cuando se ha producido la contraprestación efectiva de un servicio o labor”<sup>149</sup>.

Habiéndose demostrado que las labores prestadas por el ama de casa corresponden a las propias de una relación laboral, el pago de su remuneración correspondería, de manera

---

<sup>148</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00818-2005-AA, Fundamento Jurídico N° 6.

<sup>149</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00029-2001-AA, Fundamento Jurídico N° 2.



equitativa, a todos/as los/as integrantes de la familia que tienen ingresos económicos y que se benefician de los servicios prestados por ella.

Sin embargo, el hecho de que el Estado haya establecido que la remuneración mínima vital no supere siquiera los doscientos dólares estadounidenses nos lleva a reflexionar sobre la viabilidad de la remuneración al ama de casa. Frente a esta situación, nos ponemos en un escenario que se dirige a implementar una política que deberá lidiar con los exiguos ingresos de los integrantes de la familia, pero que –a su vez- no deberá ampararse en tal situación para desconocer el derecho del ama de casa a recibir una remuneración por el trabajo desempeñado.

Por tal motivo, consideramos pertinente que se estudie la posibilidad de que el Estado subsidie en parte la remuneración del ama de casa, tal como se realiza en España a través de la bonificación de 100 euros otorgadas a las madres solteras, conforme se expondrá en el siguiente punto que aborda el análisis de las experiencias extranjeras en torno al trabajo doméstico de la mujer.

No obstante, debe precisarse que si el Estado no se encuentra en la posibilidad de subsidiar directamente el pago de cierta cantidad de dinero, se podrían implementar otros tipos de mecanismos dirigidos a que la mujer pueda acceder a prestaciones diversas, para lo cual el Estado podría coordinar con diversas entidades públicas y privadas el acceso del ama de casa a una serie de servicios, los cuales serían cuantificados, permitiéndole de esa manera ser beneficiaria de las consecuencias derivadas del trabajo prestado.

#### **e. Experiencias extranjeras**

En **España** se asigna un bono de 100 euros a las madres solteras, la cual ha sido criticada por colectivos como la Asociación de la Familia y Familia Numerosa de Castellón, FANUCAS, que solicitó extender este pago a las amas de casa al gobierno de Castellón en 2005. En ese mismo año, el Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, y por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera criticaron la discriminación de las

amas de casa al excluirlas de dicho pago, manifestando su voluntad de hacerla beneficiaria. Como señala FANUCAS, “Caldera se mostró partidario de modificar el concepto de esta deducción para que fuese más una ayuda familiar, un apoyo para el cuidado de los hijos, que una prestación ligada a la situación laboral de la mujer, lo que fue aplaudido en su día por todas las asociaciones de Familias Numerosas”<sup>150</sup>.

A pesar que dicha propuesta aun no ha encontrado asidero, se destaca que cada 09 de octubre se celebra el **Día Nacional del Ama de Casa**, lo cual constituye un indicador positivo de que nos encontramos dando uno de los primeros pasos en el reconocimiento de las labores desempeñadas por esta mujer<sup>151</sup>.

Cabe destacar que la sociedad civil española también se ha pronunciado sobre el reconocimiento del trabajo del ama de casa. Al respecto, “el Foro de la Familia de Castilla y León defiende la necesidad de remunerar el trabajo de la mujer en el hogar, ya sea de forma directa o indirecta, a través de desgravaciones fiscales. Y es que son muchos los beneficios que este trabajo reporta a la sociedad por la dedicación a la educación integral de los hijos -el capital humano del mañana- y la contribución que, en términos sociales y económicos, representa, tanto por el cuidado de esos hijos, como por el hecho de que el otro cónyuge pueda cumplir de manera más satisfactoria sus obligaciones laborales. Asimismo, este colectivo exige la plena consolidación de la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, con el fin de lograr que la mujer pueda ejercer libremente su maternidad y dedicar mayor tiempo a sus hijos y marido, sin perjudicar sus opciones de carrera profesional. A juicio de la organización, ‘sólo a través de estas políticas y prácticas de conciliación, verdaderamente adaptadas a las circunstancias individuales de cada mujer en las diferentes etapas de su vida, podrá conseguirse la plena igualdad de oportunidades de la mujer en el mundo profesional y, a la vez, una humanización de los entornos laborales y profesionales que redundará en el mayor rendimiento de las empresas y en el avance de la cohesión social’, informa Ical. Insustituible labor El Foro añade la necesidad de que la

---

<sup>150</sup> ASOCIACIÓN FANUCAS. “Las madres que trabajan en casa, discriminadas”. Op. cit.

<sup>151</sup> TOTANA ONLINE. “Las amas de casa conmemoran el día nacional de este colectivo con numerosos actos celebrados en el centro sociocultural ‘La cárcel’”. Murcia, 2007. Disponible en: <http://www.totanaonline.com/totana-noticia.asp?id=6522> (Revisado el 7 de mayo de 2009).

mujer no renuncie a su feminidad por los avances en la sociedad. ‘Dada su importante e insustituible labor en la familia y en la sociedad como madre, esposa, educadora y trabajadora es de justicia reconocer a la mujer, no sólo su dignidad como persona -en igualdad al varón-, sino además su diferencia biológica y psíquica que también debe ser protegida, con el objetivo de evitar discriminaciones o presiones sociales que la priven o dificulten de su derecho a formar un hogar y a tener cuanto hijos libremente desee, sin que cuestiones económicas, laborales o de cualquier otra índole se lo impidan’. Las conclusiones del Congreso incluyen la importancia de considerar ‘fundamental y necesaria la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, como primer e inalienable derecho de todo ser humano que no puede ser conculcado y que debe contar con la debida protección legislativa’”<sup>152</sup>.

En relación a otros países europeos, De Miguel destaca que “en **Francia** existe ya un Estatuto Social del ama de casa y de la madre que regula su situación, además de dar una ayuda económica al tercer hijo. En Suiza se les proporciona una pensión de jubilación y viudedad y <<bonos educativos>> o pensión por cuidado de niños. En **Alemania** se tienen en cuenta los periodos de educación de los hijos para el cálculo del seguro de la vejez, e incluso en el País Vasco existe una desgravación fiscal para las amas de casa. También han surgido algunas líneas de pensamiento entre estos colectivos reclamando un salario para el ama de casa”<sup>153</sup>.

## **2.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN**

Las preguntas que orientarán la investigación son las siguientes:

### **2.2.1. PREGUNTAS GENERALES**

#### **2.2.1.1. ¿Cuáles son los factores que determinan la discriminación contra la mujer?**

---

<sup>152</sup> FORO DE LA FAMILIA DE CASTILLA Y LEÓN. “El Foro de la Familia exige remunerar el trabajo de la mujer dentro del hogar”. Valladolid, 25 de abril de 2009. Disponible en: <http://www.larazon.es/noticia/el-foro-de-la-familia-exige-remunerar-el-trabajo-de-la-mujer-dentro-del-hogar> (Revisado el 3 de mayo de 2009).

<sup>153</sup> DE MIGUEL, Elvira. “El ama de casa, ‘La mal pagá’”. Op.cit.

La exposición del diagnóstico situacional de los DESC de la mujer en el Perú nos conduce a identificar los factores que condicionan su discriminación.

A efectos de absolver la interrogante planteada, se profundizará en el estudio de los diversos fenómenos identificados en la realidad, con el propósito de encontrar categorías en las cuales subsumirlos y posteriormente verificar si tales categorías han sido tomadas en consideración tanto por la doctrina jurídica como por la legislación, ya que a través de dicha contrastación se determinará si los planteamos de ambas son pertinentes y eficaces para la solución de problemas identificados en la realidad.

Sin perjuicio de la exposición que se realizará en los objetivos de la investigación, consideramos que los factores que determinan la discriminación contra la mujer son, a grandes rasgos, la idiosincrasia y la cultura, y, de manera específica, el machismo.

#### **2.2.1.2. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que origina la discriminación contra la mujer?**

Una vez que se determinen los factores que originan la discriminación contra la mujer, será necesario traducir dichos resultados a categorías jurídicas, tomando como referentes los conceptos de igualdad, diferenciación, proscripción de la arbitrariedad y discriminación, a efectos de determinar las consecuencias jurídicas que se desprenden del diagnóstico situacional de la mujer en nuestro país.

Las diferentes situaciones expuestas acreditan que nos encontramos frente a un problema social que debe ser abordado por las ciencias jurídicas a través de la investigación y del establecimiento de medidas legales destinadas a disminuir la incidencia de este flagelo.

Más allá de la consagración de la igualdad de todos los seres humanos ante la ley, concebida desde la Constitución de 1979, nuestro Estado ha procurado establecer mecanismos legales dirigidos a maximizar el ejercicio de los derechos de las mujeres en

igualdad de condiciones que los varones. Así, estos esfuerzos se han focalizado a partir de dos mecanismos: el **reconocimiento de la igualdad formal de la mujer**, como la operada a través de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, aprobada a través de la *Ley N° 28983*<sup>154</sup> y el **establecimiento de acciones positivas**, como la consagrada a través de la *Ley N° 28094*<sup>155</sup> que establece las cuotas de género en las elecciones de cargos directivos y en las elecciones internas para la postulación de listas a cargos de elección popular.

A pesar que nuestro Estado procura expedir leyes que buscan asegurar el ejercicio de los derechos de la mujer, sus consecuencias (como se ha visto en el acceso a la justicia y administración de esta a las víctimas del conflicto armado) no son del todo efectivas, pues prevén mecanismos ciertamente dificultosos para que las mujeres puedan obtener la resolución de los conflictos de las que han sido víctimas. Esto nos lleva a comprender que las consecuencias jurídicas del tratamiento legal que se ha dado a la mujer no han sido hasta el momento efectivas, puesto que las causas que originan la discriminación todavía imperan sobre las medidas legales asumidas por el Estado peruano.

### **2.2.1.3. ¿Cuáles son las medidas legales que pueden establecerse a efectos de concretar la plena igualdad material de la mujer?**

Identificados los planos en los que la mujer es objeto de conductas discriminadoras y corroboradas las causas que originan este fenómeno, el investigador deberá proponer determinadas medidas legales destinadas a combatir y a prevenir la configuración de la discriminación contra la mujer.

Para ello, se deberá valer de las propuestas derivadas de distintas perspectivas, como la sociológica, a efectos de engazarlos con la perspectiva de género en la educación, ya que la acción conjunta de estas dos disciplinas permitirá la construcción de fórmulas legislativas

---

<sup>154</sup> EL PERUANO. “Normas Legales”. (Sección Poder Legislativo), p. 341606.

<sup>155</sup> EL PERUANO. “Normas Legales”. (Sección Poder Legislativo), p. 254241.

que tomen a la realidad como sustento de su discurso que pretende ser incorporado en el ámbito normativo.

## **2.2.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS**

### **2.2.2.1. ¿Es el machismo la principal causa de discriminación contra la mujer?**

El diagnóstico situacional de los DESC de las mujeres en el Perú evidencia que existen patrones culturales expresados a través de ciertas manifestaciones que se subsumen en la categoría de machismo. No obstante, la presente investigación se dirige a comprobar si el machismo constituye el principal factor que determina la configuración de este fenómeno social.

Situaciones como el no reconocimiento del trabajo doméstico realizado por el 29% de la PEA femenina nos inducen a pensar que la asignación de roles de género y la respuesta arbitraria frente al quebrantamiento de tal orden se derivan del machismo, presunta matriz de la discriminación contra la mujer en Perú.

### **2.2.2.2. ¿Cómo inciden los estereotipos en la configuración de conductas machistas?**

A través de los antecedentes expuestos, surge una cuestión de suma importancia para la investigación. Existe un patrón de restricción de la mujer a las prestaciones derivadas de los DESC, lo cual podría obedecer a determinados rasgos que son considerados como propios de la mujer y que determinarían su exclusión de tales prestaciones.

Por tal motivo, se abordará el estudio de los estereotipos, definidos por la RAE como aquella “imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”<sup>156</sup>. En caso de acreditarse que la restricción a las mencionadas prestaciones se debe a la configuración de conductas o de omisiones sustentadas en estereotipos, se contará

---

<sup>156</sup> RAE. Disponible en: [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=estereotipos](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=estereotipos) (Revisado el 29 de mayo de 2009).

con una valiosa información que será concatenada con los demás resultados obtenidos de la presente investigación.

#### **2.2.2.3. ¿El nivel educativo desvirtúa la discriminación contra la mujer?**

Una de las preguntas que guiarán el desarrollo de la presente investigación será la concerniente a determinar si el nivel educativo condiciona la producción de la discriminación contra la mujer en nuestro país.

La formulación de esta interrogante obedece a que somos testigos de la continua propagación de información periodística que revela la deficiente educación que se imparte en los colegios y en las universidades nacionales y particulares, lo cual constituye un indicio que nos lleva a presumir que tal situación hace proclive a la mujer a ser discriminada en la medida que no ha sido beneficiaria de adecuadas prestaciones educativas que la hagan consciente de su calidad como titular de derechos fundamentales.

#### **2.2.2.4. ¿Incide la edad en la configuración de la discriminación contra la mujer?**

Esta pregunta de investigación se sustenta en la corriente de la interseccionalidad, como aquella que sostiene que las diferentes identidades de un ser humano confluyen de manera distinta en la configuración de la discriminación.

A través de esta interrogante, el investigador determinará si las mujeres de menor edad son menor, igual o mayormente discriminadas que las mujeres de mayor edad. El resultado de la verificación de la incidencia de esta variable en el referido fenómeno servirá para explicar si las nuevas políticas educativas, de las que son beneficiarias las poblaciones más jóvenes, son efectivas para la disminución de la tasa de discriminación en contra de la mujer en nuestro país.

#### **2.2.2.5. ¿La discriminación contra la mujer genera la vulneración de otro derecho distinto a la igualdad?**

Ciertamente esta es una interrogante interesante debido a que generalmente se considera que la consecuencia jurídica de la discriminación contra la mujer es la vulneración de su derecho a la igualdad.

Sin embargo, consideramos que siendo el ser humano una entidad compleja, la igualdad constituye el derecho inmediatamente vulnerado, pero no el único, ya que las diferentes formas de discriminación repercuten de manera particular sobre diversos atributos que conforman los derechos fundamentales.

#### **2.2.2.6. ¿La dación de una ley antidiscriminatoria contra la mujer será la medida legal que deberá aplicarse para disminuir la producción de este fenómeno?**

Debido a que la presente constituye una tesis de Derecho, el investigador se pregunta si un cuerpo normativo que proscriba las conductas discriminadoras en contra de la mujer será la medida legal adecuada para enfrentar este flagelo.

Desde la perspectiva estrictamente jurídica resultaría adecuada su dación; no obstante, se considera que del trabajo de campo se apreciarán los factores que condicionan su producción, determinándose así las causas, sus consecuencias jurídicas y la proposición de medidas legales adecuadas para afrontarla.

### **2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN**

La presente investigación se dirige a la consecución de siete objetivos:

#### **2.3.1. OBJETIVOS GENERALES**

##### **2.3.1.1. Determinar las causas de la discriminación contra la mujer**



Conforme se hubiese adelantado en las preguntas de investigación, el estudio de la situación de los DESC de las mujeres en el Perú nos condujo a identificar tres causas de su discriminación, las cuales serán abordadas a continuación.

#### **a. Cultura**

Ciertamente, hablar de una causa o abordar varias de manera separada no servirá de mucho en los resultados que se pretenden alcanzar a través del estudio. Como se ha visto en los antecedentes, factores como la restricción en el acceso a prestaciones de salud, educación y remuneración constituyen indicadores que nos permiten identificar que el problema se encuentra inserto en nuestra idiosincrasia, definida por la Real Academia Española de la Lengua (RAE) como los “rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de un individuo o de una colectividad”<sup>157</sup>.

Sin embargo, el concepto otorgado por la RAE a idiosincrasia nos remite a un grupo humano (población peruana) que está definido por determinados rasgos, los cuales estarían serían producto de nuestra **cultura**, la que si bien puede ser contemplada como “causa madre”, resulta difusa para explicar la discriminación contra la mujer. Sin embargo, es necesario tomar a la cultura como una de las causas de este fenómeno ya que es definida como el “conjunto de modos de vida y costumbres (...) en (...) grupo social”<sup>158</sup>, rasgo que consideramos inmerso en la configuración de la discriminación contra la mujer pues estos modos de vidas imponen patrones de comportamiento considerados como “propios” de los varones y de las mujeres.

#### **b. Machismo**

Como se ha mencionado, los patrones de comportamiento justifican conductas destinadas a reprimir lo contrario a lo “propio” o “normal”, por lo cual se hace necesario el

---

<sup>157</sup> RAE. Disponible en: [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=idiosincrasia](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=idiosincrasia) (Revisado el 28 de mayo de 2009).

<sup>158</sup> RAE. Disponible en: [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=cultura](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura) (Revisado el 28 de mayo de 2009).

establecimiento de discursos que repriman aquello que perturbe el orden social. Es así que nuestra cultura se vale del **machismo** como mecanismo destinado a preservar el orden de las cosas en la sociedad, al enarbolar discursos fundamentalistas, carentes de razón que resguarden el rol de género de las mujeres y de los varones. Ello se acredita en que el machismo constituye “un modo particular de concebir el rol masculino, modo que surge de la rigidez de la mayor parte de las sociedades del mundo contemporáneo, para establecer y agudizar las diferencias de género entre sus miembros”<sup>159</sup>, proyectando dichas restricciones sobre las mujeres en cuanto se refiere a la “invasión” de los terrenos “masculinos” como serían el trabajo externo y la toma de decisiones como expresiones de fortaleza y de dominio.

La discriminación contra la mujer encuentra en el machismo a su matriz, pues como señala Ana Aguado en “la articulación de la esfera pública y su ‘necesario’ correlato, la esfera privada, como dos realidades dicotómicas y diferentes; pero sobre todo, connotadas genéricamente, de tal manera que lo ‘público’ –la política, la ciudadanía, el poder, las formas más ‘prestigiadas’ de sociabilidad y de cultura- se vinculará ‘naturalmente’ –es decir, por entendido por ‘naturaleza’- a la identidad social masculina; en tanto lo ‘privado’ –entendido como ‘doméstico’ y no ‘civilizado’ ni civil en el caso de las mujeres- iba a identificarse con lo femenino”<sup>160</sup>.

Esta construcción evidencia la imposición del machismo en los roles de género que reducen a la mujer al ámbito doméstico, en tanto su naturaleza restringe su desarrollo como persona, modo de pensar que si bien no es expresado abiertamente, en muchos de los casos se erige en respaldo a actitudes arbitrarias que directamente restringen los derechos de las mujeres, como la percepción de una menor retribución que el varón frente a obligaciones similares.

### **2.3.1.2. Establecer las consecuencias jurídicas de la discriminación contra la mujer**

---

<sup>159</sup> RODRÍGUEZ KAUTH, Ángel, MARÍN DE MAGALLANES, Leticia y LEONE DE QUINTANA, María. “El machismo en el imaginario social”. En: *Revista latinoamericana de psicología*. Volumen 25, N° 2. Fundación Universitaria Honrad Lorenz. Bogotá, 1993, p. 276.

<sup>160</sup> AGUADO, Ana. “Ciudadanía, mujeres y democracia”. En: *Historia Constitucional*. N° 6. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2005, p. 13.

Una vez establecidas las causas de la discriminación contra la mujer se determinará su incidencia sobre los derechos fundamentales, a partir de las ilegítimas restricciones en su ejercicio y de las medidas legislativas que deberán ser adoptadas a fin de superar dicho panorama.

Ello hace prever al investigador que la configuración de conductas discriminadoras en contra de la mujer repercute sobre su derecho a la igualdad, a la integridad y a la dignidad, presupuestos de los cuales se sustentan las afectaciones a otros derechos fundamentales como serían la salud, la educación y el trabajo, por señalar algunos en los cuales hemos podido corroborar la ilegal distinción a la que es sometida la mujer en nuestro país.

#### **2.3.1.3. Identificar las medidas legales que pueden establecerse a efectos de concretar la plena igualdad material de la mujer**

Una vez contrastadas las hipótesis con los resultados obtenidos de la realización de la encuesta, el investigador deberá evaluar la pertinencia de las corrientes doctrinarias expuestas a lo largo de la tesis, a efectos de determinar si es que sus proposiciones son adecuadas para la lucha y la prevención de la configuración de conductas discriminadoras en contra de la mujer en nuestro país.

Realizado esto, el investigador se valdrá del auxilio de la sociología y de la perspectiva de género con el propósito de establecer las medidas a ser realizadas, las cuales serán viabilizadas a través de las propuestas legislativas que se incorporarán en el ordenamiento jurídico nacional, las que a su vez serán evaluadas cada cierto tiempo con el propósito de corroborar si es que, a su vez, son efectivas para combatir y prevenir este fenómeno social que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la mujer.

### **2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

#### **2.3.2.1. Establecer si el machismo constituye la principal causa de discriminación contra la mujer**

La explicación del trato arbitrario que pretende excluir a la mujer de la esfera pública o de la asunción de roles preponderantes dentro de ella no es otra que el **machismo**, definido por la Real Academia Española de la Lengua como la “[a]ctitud de prepotencia de los varones hacia las mujeres”<sup>161</sup>. El machismo se ejemplifica en situaciones tan comunes como el siguiente testimonio de una mujer líder de Acobamba, Huancavelica, en agosto de 2006:

*“Allí en mi pueblo hay todavía lo que llaman discriminación. En el centro Poblado Huanacopampa del distrito de Paucará (...) Nosotros queremos, como los hombres, organizarnos, organizándonos el local de nuestro comedor popular hasta donde podemos hacernos, digo en nuestras reuniones. Y otros esposos nos dicen: ‘ustedes han sido varones ¿qué cosa?, toda la vida reunión, reunión, esas mujeres que caminan de noche ¿son acaso buenas mujeres?’ nos dicen (...) En la reunión aprobamos para hacer nuestro local, cada socia vamos a jalar 50 adobes, eso aprobamos en nuestra acta, hasta eso nos rechazan”*<sup>162</sup>.

El machismo es la matriz de las diversas manifestaciones de la discriminación contra la mujer, pues se encuentra presente tanto en el trato que los particulares damos a las mujeres, como dentro de nuestro sistema legal que la sujetaba a las decisiones del esposo o, que en el presente, le otorga un trato diferente que no se encuentra sustentado en causas objetivas. La importancia del estudio de las causas de la discriminación a la luz del machismo reside en que nos permitirá abordar su estudio a partir de nuestra particular realidad y, además, permitirá identificar cada una de las causas, las cuales deben ser estudiadas conjuntamente, a fin de obtener una visión integral de esta problemática.

#### **2.3.2.2. Determinar si los estereotipos inciden en la configuración de conductas machistas**

---

<sup>161</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). “Diccionario de la Lengua Española”. 22º edición. Disponible en: [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=machismo](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=machismo) (Revisado el 14 de abril de 2009).

<sup>162</sup> MACASSI LEÓN, Ivonne (Coordinadora). “Informe alternativo al sexto informe periódico del Estado Peruano al Comité de la CEDAW”. Op. cit., p. 127.

Como señalan Gila y Guil, “los estereotipos sociales sobre las mujeres enfatizan la idea de que éstas están dotadas por la naturaleza de diferentes aptitudes que los varones, por lo tanto, siguiendo con esta creencia, lo ‘natural’ es que ellas realicen trabajos y tengan responsabilidades distintas a ellos”<sup>163</sup>.

Esto, por ejemplo, se aprecia en lo que respecta a la salud, ya que la restricción a los métodos de anticoncepción obedecería a la imagen que se tiene de la mujer como ser cuya sexualidad ha sido sacralizada en la medida que esta se encuentra reservada para el esposo, por lo cual constituiría un despropósito su acceso a métodos anticonceptivos ya que a través del ejercicio de su sexualidad dentro del matrimonio, la mujer podrá realizarse como madre.

Como vemos, la asunción de roles naturales o inherentes a las mujeres imponen patrones de comportamiento que inciden sobre aquellas mujeres que los “quebrantan” al realizar conductas que son consideradas como “propias” del varón o que serían “ajenas” a la naturaleza femenina. Por tal motivo, resulta importante abordar el estudio de los estereotipos a efectos de establecer si inciden o no en la configuración de conductas discriminadoras en contra de la mujer.

#### **2.3.2.3. Establecer si el nivel educativo desvirtúa la discriminación contra la mujer**

Conforme se ha podido acreditar en el diagnóstico de la mujer en el Perú, existe una serie de circunstancias de las cuales se desprendería que el nivel educativo tendría directa incidencia en la discriminación contra la mujer. Uno de ellos es el concerniente al acceso a prestaciones de salud y a la relación entre el nivel educativo de la madre y de la salud del hijo recién nacido.

Estas circunstancias nos llevan a la conclusión que el nivel educativo juega un importante rol en la configuración de la discriminación contra la mujer debido a que aquella mujer que

---

<sup>163</sup> GILA, Juana y GUIL, Ana. “La mujer actual en los medios: estereotipos cinematográficos”. En: *Comunicar*. N° 12. Grupo Comunicar. Huelva, 1999, p. 90.

no haya accedido a una adecuada educación desconocerá sus derechos y, por lo tanto, esto acarreará consecuencias en lo que respecta al ejercicio de los mismos, ya que su desconocimiento la llevará a aceptar las mencionadas circunstancias de ilegal diferenciación.

#### **2.3.2.4. Determinar si la edad incide en la configuración de la discriminación contra la mujer**

A través de la presente investigación se desea determinar la incidencia de la edad en la producción de conductas discriminadoras en contra de la mujer. Para corroborar o descartar tal premisa, el investigador se ha valido de una encuesta realizada a las personas que asistieron a un curso de Derecho, en la cual se precisó a los encuestados que incorporaran su edad en la ficha, a efectos de establecer si la edad incidía o no en la configuración del mencionado fenómeno social.

Si el resultado determina que las personas más jóvenes han sido objeto de discriminación por su sexo, ello significaría que las actuales políticas de educación no son eficientes en lo que a la incorporación de género y prevención de la discriminación concierne, ya que el autor parte de la presunción de que la paulatina incorporación de políticas educativas regidas por tales aspectos prevendría la configuración de conductas discriminadoras en contra de la mujer en Perú.

#### **2.3.2.5. Establecer si la discriminación contra la mujer genera la vulneración de otro derecho distinto a la igualdad**

El artículo 1° de la Constitución Política establece que el ser humano es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Este parámetro nos plantea un serio reto, ya que podemos apreciar que en la realidad no se encuentra su correlato adecuadamente cumplido.

En tal sentido, aunque la igualdad y su relación con la discriminación constituya el principal tema de investigación de esta tesis, consideramos que la propia naturaleza humana

y la relación inexorable entre los derechos fundamentales configuran una concatenación innegable en la que la vulneración de un derecho repercute sobre otro. Por tal motivo, el tesista es de la opinión que la discriminación contra la mujer repercute sobre otros derechos fundamentales, como son la salud, educación y el trabajo, por citar algunos.

#### **2.3.2.6. Determinar si la dación de una ley antidiscriminatoria contra la mujer será la medida legal que deberá aplicarse para disminuir la producción de este fenómeno**

Cierto es que los cuerpos normativos permiten contar con parámetros que reglan la convivencia. Si bien el artículo 2° inciso 2 de la Constitución proscribe la discriminación, podemos apreciar que no es eficaz en la realidad, ya que cierto sector de la población femenina es sometida a tratos diferenciados que no se encuentran amparados en sustento objetivo alguno.

Por tal motivo, la dación de una ley antidiscriminatoria contra la mujer podría constituir la medida legal más adecuada para revertir esta situación. No obstante, la determinación de esta medida como propicia lo será sobre la base de los resultados que se obtenga en el trabajo de campo.

### **2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**

La presente investigación se justifica por dos razones:

#### **2.4.1. Justificación social**

La presente investigación tiene una doble justificación. En un primer momento, **la social**, enfocada en establecer por qué el rol de la mujer es clasificado en categorías tan rígidas como el desempeño de labores domésticas y –a partir de tal identidad, calificada en muchos casos como “propia a su naturaleza”- vislumbrar las restricciones derivadas de tal construcción, como son en el acceso a los diferentes niveles educativos, a prestaciones de salud (especialmente las relacionadas a programas de salud sexual y reproductiva), a

puestos de trabajo no asociados a la realización de labores domésticas –o erróneamente denominadas “femeninas”, como cocina, bordado o enfermería-, al trabajo invisible (no remunerado) del ama de casa y a sueldos equitativos en razón a similares labores prestadas por los varones.

#### **2.4.2. Justificación jurídica**

En un segundo momento, la investigación es justificada a través del **plano jurídico**, debido a que los resultados traerán como consecuencia la evaluación de los dispositivos legales y su posterior clasificación como eficaces, ineficaces o generadores de la arbitraria diferenciación. Cualquiera fuese la categoría, los resultados de la investigación empírica se enlazarán a los conceptos desarrollados en el marco teórico y doctrinario, ya sea para reforzar el contenido de los dispositivos legales eficaces, subsanar las omisiones o defectos del planteamiento de los dispositivos clasificados como ineficaces o desarrollar nuevos enunciados legales que reemplacen a los vigentes, los cuales, sobre la base de criterios subjetivos o lejanos a la realidad, constituyen barreras para el pleno ejercicio de los derechos de este sector de la población peruana.

### **2.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**

#### **2.5.1. Delimitación disciplinaria**

La investigación estará delimitada a través del enfoque jurídico proporcionado por el **Derecho Constitucional**. La importancia de abordar la discriminación contra la mujer desde la óptica del Derecho Constitucional se debe a que esta disciplina brinda una mirada integral al tema, en cuanto enfoca su estudio a partir de la constatación de situaciones ilegalmente diferenciadoras, como a las causas mismas que pueden radicar en la ineficacia de las normas o en la inconstitucionalidad de estas. Estas implicancias revelan la importancia del Derecho Constitucional no sólo dentro de la esfera pública, sino dentro del Derecho en general, ya que al evaluar la legalidad de las actuaciones, omisiones y regulaciones, esta disciplina sirve de baremo para sustentar la legitimidad de la



disposiciones emanadas de las demás ramas de las ciencias jurídicas. Así, “[e]l Derecho Constitucional es el único Derecho que contempla los dos polos indispensables para que el Derecho exista en cuanto tal y no en sus diversas formas de manifestación. Es el único cuyo objeto de estudio es exclusivamente el ciudadano y sus derechos y el Estado y sus poderes. El objetivo del Derecho Constitucional es el estudio de aquello que hace que los individuos sean ciudadanos y de aquello que hace que el poder político sea el Estado, así como de las relaciones entre ambos polos en los que la existencia del Derecho descansa”<sup>164</sup>.

### **2.5.2. Delimitación espacial**

La delimitación especial de la investigación está restringida al **Perú**, ya que los datos incorporados a la tesis provienen de investigaciones realizadas en nuestro país. Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que para la contrastación de las hipótesis, se ha realizado un trabajo de campo consiste en 43 encuestas formuladas a varones y a mujeres de diversas edades en El Callao, en relación a la incidencia de conductas relacionadas al machismo, discriminación, estereotipos y nivel educativo.

### **2.5.3. Delimitación temporal**

La investigación realizada comprende el **decenio 2000-2010**, ya que como se desprende de los datos incorporados en la tesis, estos provienen de investigaciones realizadas en el mencionado período.

## **3. MARCO TEÓRICO**

El marco teórico está compuesto por el análisis histórico y doctrinario relativo a la discriminación ejercida en contra de la mujer.

### **3.1. MARCO HISTÓRICO**

---

<sup>164</sup> PÉREZ ROYO, Javier. “Curso de Derecho Constitucional”. 10ª edición. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 2005, p. 18.

A efectos de comprender la evolución de la igualdad de la mujer ante la ley en nuestro país, es necesario determinar cuáles han sido las situaciones que determinaron el clásico relego de la mujer peruana.

### 3.1.1. La mujer en el Perú prehispánico

Conforme señala María Rostworowski<sup>165</sup>, es necesario recurrir a la cosmovisión<sup>166</sup> prehispánica a efectos de transitar luego por los usos y costumbres relativos a la mujer en esta etapa.

#### 3.1.1.1. Divinidades y mitos

En cuanto a las **divinidades**, se observa la distinción entre las masculinas y las femeninas, pues mientras las primeras se representan a través de fenómenos naturales (como sismos y tormentas) que deben ser aplacados a través de ofrendas, las divinidades femeninas son *proveedoras frente a las necesidades humanas*, como la Pachamama (tierra fecunda) o Mama Cocha (mar).

En lo que respecta a los **mitos**, se aprecia una equidad en cuanto a las funciones por género. *No hay indicios de subordinación de la mujer frente al varón*, dado que no se distingue la presencia de figuras paternas en el desarrollo de los mitos. Tal es el caso de los Ayar, compuestos por cuatro hermanos y cuatro hermanas que persiguen la fundación de un nuevo orden político. Esta equidad, que sustenta el origen de la civilización incaica, se evidencia en el mito de Manco Capac y Mama Ocllo, narración a la que, de acuerdo a Rostworowski, habría que agregar una tercera partícipe, Mama Huaco, hermana y esposa del fundador. Aquí se propone una *dualidad de la participación de la mujer en el Imperio*: mientras Mama Ocllo representa a la compañera sentimental, soporte del futuro soberano,

---

<sup>165</sup> ROSTWOROWSKI, María. “La mujer en el Perú prehispánico”. Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Lima, 1995, pp. 5 y sgts.

<sup>166</sup> Expresada en sus divinidades y mitos.

*Mama Huaco encarna a la mujer guerrera, libre y osada que ostenta don de mando en el ejército en el poder.*

### **3.1.1.2. Disposición de la mujer para el matrimonio**

Si bien Rostworowski refiere que la mujer gozó de libertad sexual debido a los ritos destinados a obtener la fecundidad de la tierra<sup>167</sup>, Garcilaso de la Vega señala que la virginidad de la mujer incaica era preservada a efectos de otorgarla a un varón para que contraiga nupcias.

#### **a. Acreditación de la virginidad de la novia**

Al respecto, señala que “las madres guardaban a las hijas con gran recato y cuando concertaban de casarlas las sacaban en público y, en presencia de los parientes que se habían hallado al otorgo, con sus propias manos las desfloraban mostrando a todos el testimonio de su buena guardia”<sup>168</sup>.

Al recaer sobre la mujer la obligación de preservar su virginidad para acceder al matrimonio, observamos una práctica discriminatoria, pues, más allá de que dicha práctica no haya sido exigida a los varones, se afectaba la reputación de la mujer que no lo demostrara, ya que era objeto de una condena moral. Iguales consideraciones podemos expresar sobre la publicidad del acto en que se acreditaba la virginidad de la joven, ya que estaba pasando por manos de los parientes quienes debían desflorarla para acreditar su virginidad.

#### **b. Entrega de la mujer al esposo**

---

<sup>167</sup> ROSTWOROWSKI, María. “La mujer en el Perú prehispánico”. Op. cit., pp. 5 y sgts.

<sup>168</sup> DE LA VEGA, Garcilaso. “Comentarios reales de los Incas”. Tomo I. Fondo de Cultura Económica. Lima, 1991, p. 37.

En relación a las mujeres del pueblo, Rostworowski señala que las autoridades podían disponer de ellas para *entregarlas en matrimonio*, especialmente a los viudos, ya que de esta manera se propiciaba la concepción de futuros vasallos del Imperio<sup>169</sup>.

Sobre las mujeres de la nobleza, Garcilaso de la Vega expresa que “los incas daban mujeres de su mano a las personas beneméritas en su servicio, como curacas y capitanes y otros semejantes. (...) Que en las mercedes que el Inca hacía no se estimaba tanto la dádiva, por grande que fuese, como el haber sido de mano de la majestad del Inca, porque se tenía por merced divina y no humana”<sup>170</sup>.

De ello se desprende que no se tomaba en consideración la voluntad de la mujer para concertar el matrimonio, puesto que lo relevante era la entrega realizada por el Inca, lo cual era tomado como un acto de benevolencia divina, lo cual refleja la cosificación de la que fue objeto la mujer durante dicha etapa de nuestra historia.

### **3.1.1.3. Participación de la mujer en la sociedad**

Por otro lado, no podemos alejar nuestro análisis de la participación de la mujer en la sociedad incaica que, de cierta manera, *contravenía la equidad planteada en su cosmovisión*. Así, se distinguen dos clases de mujeres: la de los hatun runa y las de clase alta.

#### **a. Mujeres del pueblo**

Las mujeres del pueblo se encontraban ceñidas a *labores domésticas*<sup>171</sup>, a la crianza de niños y a la faena agrícola. Al respecto, Garcilaso de la Vega menciona que “la vida de las mujeres casadas en común era con perpetua asistencia de sus casas”<sup>172</sup>; no obstante, precisa

---

<sup>169</sup> ROSTWOROWSKI, María. “La mujer en el Perú prehispánico”. Op. cit., pp. 16 y sgts.

<sup>170</sup> DE LA VEGA, Garcilaso. “Comentarios reales de los Incas”. Tomo I. Op. cit., p. 214.

<sup>171</sup> ROSTWOROWSKI, María. “La mujer en el Perú prehispánico”. Op. cit., pp. 16 y sgts.

<sup>172</sup> DE LA VEGA, Garcilaso. “Comentarios reales de los Incas”. Tomo I. Op. cit., p. 225.

que compartían la realización de las labores del campo con los hombres, lo cual denota cierto nivel de cooperación en pro del beneficio de la familia.

## **b. Mujeres de la clase alta**

En la mujer de la alta sociedad destacan las destinadas al Aclla Huasi, tanto como vírgenes del Sol o a la preparación de concubinas a los nobles. Por otro lado, resulta singular que paralelo al Imperio, **el mando de pequeños señoríos estuvo a cargo de mujeres**, consagradas como Jefas de Señoríos. Tal es el caso de las *Capullanas*, aguerridas jefas de la actual Piura que aparte de ostentar el poder sobre su señorío, tenían la *potestad de desechar a su esposo y casarse nuevamente con otro*.

### **3.1.2. La mujer en el Virreinato**

En esta etapa de nuestro desarrollo histórico, la capacidad de decisión, el ejercicio de derechos y la participación en la vida pública estaba restringida al varón. Sin perjuicio de ello, la situación de las mujeres no fue uniforme, ya que algunas resultaron más discriminadas que otras.

#### **3.1.2.1. Las mujeres indígenas**

En relación a la mujer indígena, Patrucco destaca su **rol preeminentemente servil** en beneficio de las familias españolas. Sin embargo, el autor destaca que a pesar de ser destinadas al servicio del hogar, “muchas veces se convertían en queridas o amantes de los españoles, hasta que llegara la esperada mujer del patrón desde la lejana metrópoli, o mientras el panorama de un provechoso matrimonio no se le presentara al amo” <sup>173</sup>. A través de este caso vemos que la mujer andina fue cosificada, es decir, rebajada a la calidad de objeto destinado a la satisfacción de un deseo masculino, sin que mediara su previa autorización para ello.

---

<sup>173</sup> PATRUCCO, Sandro. “El Perú virreinal. Sociedad, economía y arte”. Editores Lexus. Barcelona, 2000, p. 19.

Asimismo, precisa que cuando el patrón español deseaba deshacerse de la indígena, la dejaba a cargo de un indígena o negro quien la tomaba por esposa o le dejaba una propiedad o renta para no dejarla desamparada<sup>174</sup>.

### 3.1.2.2. Las mujeres españolas y criollas

Si bien las mujeres españolas y las criollas tuvieron un status más elevado que el de las indígenas, se vieron restringidas en el ejercicio de sus derechos.

Al respecto, tomamos lo señalado por López Hernández, que si bien responde a la situación de la mujer española durante el virreinato en México, lo consideramos pertinente en la medida que el tratamiento jurídico de la mujer en la América virreinal es uniforme debido a la sujeción de dicho continente al poderío de la corona española:

#### a. Status legal

“De acuerdo con la legislación vigente en esa época, la española casada tenía en el matrimonio la **categoría de menor de edad**, y aunque podía heredar propiedades, títulos y negocios, sus atributos jurídicos quedaban subsumidos en el vínculo, pues el marido era el administrador de los bienes. Antes del matrimonio ellas dependían del padre o tutor. La mayoría de edad, a los veinticinco años, sólo significó para las mujeres una libertad relativa. Sólo la viudez permitía el ejercicio cabal de la personalidad jurídica femenina, pues tenía entonces, incluso, el derecho de patria potestad sobre sus hijos, y llevar sus negocios”<sup>175</sup>.

La mujer se encontraba excluida a perpetuidad de la esfera pública, pues siendo su propia “naturaleza” la que le impedía –a diferencia de los varones que alcanzaban la libertad o

---

<sup>174</sup> Loc. cit.

<sup>175</sup> LÓPEZ HERNÁNDEZ, Lilia Julieta. “Historia de la mujer en México”. En: *Mujeres, derecho y sociedad*. Año 3, N° 5. Federación Mexicana de Universitarias. México D.F., 2007, p. 4.

cierto nivel económico o social- abandonar su carácter “ajeno” a la racionalidad, se tornaban dependientes y subyugadas a la facultad de decisión masculina.

## **b. Acceso a la educación**

En relación a la **educación de la mujer**, esta “mucho según la clase social, pero eran elemento común los principios religiosos y morales que regían el comportamiento en las familias. Se consideraba que la mujer española encargada de su casa no necesitaba mayores conocimientos: su función era producir una prole abundante, basta el buen funcionamiento de las hormonas, una resistencia física suficiente y una salud favorable para soportar esta vida”<sup>176</sup>. Esta referencia evidencia la separación del espacio privado del público, pues el fundamento para impedir el acceso a la educación de la mujer española y criolla era su prescindencia debido a que esta realizaría labores propias del espacio doméstico, es decir, del espacio privado.

Sin perjuicio de lo señalado, debe precisarse que los conventos constituyeron un espacio en el cual las mujeres pudieron acceder a la educación. En efecto, “fue en los conventos donde la educación femenina logró sus más importantes avances durante la colonia, pues las religiosas debían aprender a leer para poder rezar el Divino Oficio. Hasta fines del siglo XVIII, el propósito de dichas comunidades religiosas era la vida contemplativa y devota, no la educación o la asistencia social; situación que apenas varió al terminar el siglo XVIII, pero principalmente durante el siglo XIX”<sup>177</sup>.

## **c. Ejercicio de la propiedad**

Ello se evidenció en el ejercicio de la **propiedad**, pues para transmitir la herencia se requería contar con descendientes varones legítimos. Si la heredera era esposa, Patrucco señala que “debía casarse pronto y los allegados del desaparecido esposo intentaban unirla

---

<sup>176</sup> Ibidem, p. 5.

<sup>177</sup> LONDOÑO VEGA, Patricia. “Educación de la mujer durante la época colonial”. En: *Boletín Cultural y Bibliográfico*. N° 37, Volumen XXXI. Banco de la República de Colombia. Bogotá, 1994. Disponible en: [http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/bol37/rese2\\_1.htm](http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/bol37/rese2_1.htm) (Revisado el 19 de abril de 2008).

con alguien del mismo grupo para no perder la encomienda”<sup>178</sup>. Asimismo precisa que “algunas viudas lograron a lo largo de cuatro matrimonios validar su calidad de dueñas de la encomienda, de los negocios y de los bienes del primer esposo, situación favorecida por el alto riesgo de muerte que corría la población masculina y la relativa tranquilidad de la que gozaban las mujeres”<sup>179</sup>.

### **3.1.3. Influencia de la Revolución Francesa en el rol de la mujer**

Si bien este acápite del estudio es dedicado al rol de la mujer peruana a lo largo de la historia, no podemos pasar por alto la influencia que tuvo la revolución francesa en las mujeres de nuestro país de finales y comienzos de los siglos XVIII y XIX, especialmente en aquellas que participaron en el proceso de independización.

Por ello, resulta necesario dedicar un breve repaso a la lucha de la igualdad de la mujer durante el Antiguo Régimen y, especialmente, la Revolución Francesa, a efectos de comprender su impacto en los últimos años de dominio español y primeros de independencia.

#### **a. Antecedentes**

Contrario a lo que pudiese pensarse, la restricción a la participación femenina en la esfera pública no era exclusiva en los dominios españoles en las Américas. Un claro ejemplo es la querrela de la francesa María de Gournay (1565-1645) en su “Agravio de damas”, de 1626:

“Feliz tú, lector, si no perteneces a ese sexo al que se niegan todos los bienes al privarle de libertad, de la misma manera que se le niegan también las virtudes, apartándolo de los cargos, los oficios y funciones públicas, en una palabra excluyéndolo del poder en cuya moderación se forman la mayor parte de las virtudes; para concederle como única felicidad, como virtudes soberanas y únicas, la ignorancia, la servidumbre y la facultad de hacer el

---

<sup>178</sup> PATRUCCO, Sandro. “El Perú virreinal. Sociedad, economía y arte”. Op. cit, p. 29.

<sup>179</sup> Loc. cit.



tonto si este juego le place. Feliz también el que puede ser sabio sin crimen: tu condición de hombre te concede, por la misma razón que se les priva a las mujeres, cualquier acción de alto destino, cualquier juicio sublime y cualquier discurso de exquisita especulación”<sup>180</sup>.

## **b. Olive de Gouges y la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana**

Este antecedente resultaba ser una de las diferentes formas en las que no sólo el derecho a la igualdad de las mujeres se veía restringido, sino el de la mayoría de franceses. Este y otros factores propiciaron la Revolución Francesa de 1789, que tuvo como más brillante instrumento de resquebrajamiento del Antiguo Régimen a la dación de la “Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano”. Sin embargo, pese a que tal Texto reconoce la igualdad entre los franceses, tal concepto está restringido al de ciudadanos, de los cuales se hallaban excluidas las mujeres y los varones analfabetos, sin propiedad o sin profesión, entre otros.

Frente a la exclusión de la mujer en el ejercicio de la igualdad consagrado por el Texto, mujeres valientes como Olympe de Gouges alzaron su voz de protesta para redactar la “Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana” de 1791 que apela a la igualdad a modo de contrato social entre varones y mujeres, cuestionando que el reconocimiento de derechos se realice en redacción masculina y reclamando la participación de la mujer en el cuerpo social (esfera pública).

Sin embargo, el pensamiento de la época impidió que la concretización de la igualdad entre el varón y la mujer se llevara adelante. Para muestra, el pensamiento de Rousseau en “El Emilio”:

“Cultivar en la mujer las cualidades del hombre, y descuidar las que le son propias, es trabajar en detrimento suyo (...) Hacedme caso, madres juiciosas, no hagáis a vuestra hija un hombre de bien, que es desmentir a la naturaleza. Hacedla mujer de bien y así podréis

---

<sup>180</sup> MINISTERIO DE IGUALDAD DE ESPAÑA. “Mujeres en el mundo”. Gobierno de España. Madrid, 2004, p. 88.

estar seguros de que será útil para nosotros y para sí misma (...) Por la misma razón que deben tener poca libertad, se extralimitan en el uso de la que le dejan”<sup>181</sup>.

Sin embargo, este pensamiento fue palideciendo en la medida que las mujeres de Latinoamérica paulatinamente fueron alzando sus voces y participando activamente en el proceso independentista.

### **3.1.4. Las mujeres en el proceso independentista**

Los ideales de libertad expresados a través de la revolución francesa llegaron a nuestro continente y las mujeres tuvieron especial participación en dicho proceso.

Como reconoce Valdivieso, las mujeres de nuestro continente (entre ellas, las peruanas) tuvieron un rol importante en esta etapa. En efecto, “las incidencias del proceso independentista penetraron, pues, todos los aspectos de la sociedad colonial y las mujeres no pudieron estar al margen de los acontecimientos que trastocaron la vida: La mujer criolla, directa e indirectamente, va a ser factor importante tanto en los prolegómenos como en la propia gesta emancipadora, ya que desde finales de la época colonial se ve involucrada en ciertas actividades de hondo contenido patriótico”<sup>182</sup>.

La participación de la mujer durante el proceso independentista se corrobora en la realización de labores como “la preparación de alimentos para la población que se hallaba en armas, el acondicionamiento de esas armas; algunas de ellas sustituyeron en sus trabajos a los que habían sido llamados a colaborar; en el ejército ejercieron labores de enfermería en casas y hospitales”<sup>183</sup>.

Valdivieso señala que “numerosos testimonios en cartas e informes, dan cuenta de la diversidad de la participación de las mujeres en la política, colaborando en las actividades

---

<sup>181</sup> ROSSEAU, Jean Jacques. “El Emilio”.

<sup>182</sup> VALDIVIESO, Magdalena. “Las mujeres y la política a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX en Venezuela”. En: Otras miradas. Volumen 7, N°1. Universidad de los Andes. Caracas, 2007, pp. 197-198.

<sup>183</sup> Ibidem, p.198.

conspirativas, organizando reuniones, entregando donativos en joyas y dinero, preparando pertrechos, actuando como correos y acompañando a los hombres en las acciones bélicas. La presencia de mujeres en los campamentos militares y en los campos de batalla fue común en todo el continente (troperas, guarichas, soldaduras) iban con las tropas, preparaban los campamentos, atendían enfermos, tomaban las armas, y en fin, vivían las mismas condiciones de los hombres”<sup>184</sup>.

Por tal motivo, **se institucionaliza la participación de la mujer en la guerra de independencia**. Ello se evidencia en una carta remitida el 10 de diciembre de 1824 por Antonio José de Sucre a Simón Bolívar tras la Batalla de Ayacucho, al solicitar se le otorgue el grado de Coronel del Ejército a doña Manuela Sáenz, conforme se desprende del siguiente texto:

*“Frente de Batalla. Diciembre 10 de 1824*

*A su Excelencia, el Libertador de Colombia*

*Simón Bolívar*

*Mi general:*

*Tengo la satisfacción de participar a S.E. de los combates librados en Ayacucho, que han servido para engrandecer las glorias de las armas colombianas. Se ha destacado particularmente doña Manuela Sáenz por su valentía; incorporándose desde el primer momento a la división de ‘húsares’ y luego a la de ‘vencedores’, organizando y proporcionando el avituallamiento a las tropas, atendiendo a los soldados heridos, batiéndose a tiro limpio bajo los fuegos enemigos; rescatando a los heridos. La providencia nos ha favorecido demasiadamente en estos combates. Doña Manuela merece un homenaje en particular por su conducta; por lo que ruego a S.E. le otorgue el Grado de Coronel del Ejército Colombiano.*

*Dios Guarde a su Excelencia,*

---

<sup>184</sup> Loc. cit.

Antonio José de Sucre”<sup>185</sup>.

Este panorama nos permite apreciar la paulatina incorporación de la mujer en la esfera pública; sin embargo, debe precisarse que la permisión sobre su participación se debió a un estado de necesidad, el cual una vez superado sirvió de óbice para reconocer sólo el rol protagónico del varón, dejando de lado la participación de la mujer como una de las diversas protagonistas del proceso de independización.

Lo dicho se acredita en las propias palabras de **Simón Bolívar** quien si bien reconoce el rol de la mujer, no lo considera como obligatorio, a diferencia del rol del varón, quien por su “naturaleza” habría estado obligado a luchar por la independencia:

*“A la mujer nuestros antepasados la consideraban inferior al hombre, y nosotros la consideramos nuestra igual. Unos y otros estamos grandemente equivocados, porque la mujer nos es muy superior. Dios la ha dotado de gran perspicacia y sensibilidad, y ha puesto en su corazón fibras delicadísimas, cuerdas muy sensibles a todo lo noble y elevado. El patriotismo, la admiración y el amor hacen vibrar esas cuerdas, y de ahí resultan la caridad, la abnegación y el sacrificio ante cuya caridad y abnegación me descubro con respeto, no habrían podido realizar el milagro que han hecho y que todos palpamos. Henchidas por dos sentimientos a cual más noble y elevado, la caridad y el patriotismo, han vestido al desnudo, saciado al hambriento, aliviado al adolorido y fortalecido al falleciente. **Los patriotas se han comportado a maravilla, pero este era su deber.** Pero sobre todo esto brilla el caluroso sentimiento patriótico de las señoras, con el cual han devuelto a un montón de hombres descorazonados y vacilantes su antiguo brío, su impetuoso valor y sus muertas energías; y todavía más: les han devuelto la fe. Sin este milagro los españoles nos habrían arreado como a un rebaño de corderos. Pero no sucederá eso: una causa que cuenta con tales sostenes, es incontrastable, y un ejército impulsado por tales estímulos, es invencible”*<sup>186</sup> (el sombreado es nuestro).

---

<sup>185</sup> Ibidem, p.213.

<sup>186</sup> Ibidem, p. 211.

### 3.1.5. La mujer en el Perú republicano del siglo XIX

Nuestra vida republicana se inicia en la década de 1820 y trae consigo una etapa en la que la mujer peruana paulatinamente sale de lo privado para incorporarse al mundo público, a pesar de que como señala Del Amo, “a lo largo del siglo XIX se construyó un discurso con múltiples facetas: filosófica, moral, ‘científica’ etc., en virtud del cual se establecía que el destino último de las mujeres era el matrimonio”<sup>187</sup>.

#### a. Discursos que pretendieron alejar a la mujer del ámbito público

Sin perjuicio de los avances que hemos encontrado, merece señalarse que durante el siglo XIX existieron una serie de discursos filosóficos, religiosos y científicos que pretendieron preservar el estado de reclusión de la mujer en el ámbito privado y opacar la paulatina incorporación al mundo público.

A través del **discurso filosófico** se hizo énfasis en el rol de la mujer dentro de la familia. Ello lo apreciamos con claridad en Augusto Comte, quien considera que “las mujeres se encuentran en un estado infantil radical. La vida doméstica se fundamenta en la jerarquía de los sexos. Las mujeres (el sexo afectivo) no son las iguales del hombre sino sus compañeras. Sea hija, hermana o madre, la mujer es un ‘ángel’ para el hombre, por lo que hace una apología del matrimonio. Piensa que las mujeres deben estar radicalmente excluidas de la vida pública a la que acceden sólo mediante una participación indirecta; por tanto, su educación ha de ser limitada”<sup>188</sup>.

Por su lado, el **discurso religioso**, se “proporcionaban los medios para controlar las pasiones femeninas, y aseguraba la virtud de las mujeres; la Virgen María se proclamaba como el ideal al que debían imitar todas las mujeres, como encarnación de las cualidades que un hombre puede desear para su bienestar; el culto mariano se desarrolló con gran

---

<sup>187</sup> DEL AMO DEL AMO, María Cruz. “La familia y el trabajo femenino en España durante la segunda mitad del siglo XIX”. Tesis para optar el grado de doctor en la Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2008, p. 97.

<sup>188</sup> Ibidem, p. 105.

intensidad tras la proclamación en diciembre de 1854 del dogma de La Inmaculada Concepción”<sup>189</sup>.

Tal percepción se puede acreditar en Francisco Díaz Carmona, quien en *“Influencia del cristianismo en el porvenir de la mujer”* señala lo siguiente:

*“La mujer no necesita emanciparse porque ya está emancipada; no necesita educarse, porque ya el catolicismo se encargó de educarla; no necesita libertad porque (...) ha levantado su frente regenerada por el bautismo, para ostentarla ceñida con la corona de reina (...) Hay, pues, en la familia una autoridad que legisla, el padre; unos súbditos que obedecen, los hijos y un poder intermedio que les inclina a esa obediencia, es decir, que les ‘educa’: la madre(..). La mujer está llamada a desempeñar dentro de la familia el ministerio augusto de la educación cristiana”*<sup>190</sup>.

Sin embargo, la más ridícula de las argumentaciones la encontramos en el **discurso científico**, a través del cual se pretendió justificar el deseo de liberación de la mujer en la histeria que padecían aquellas que no habían contraído matrimonio o que habían renunciado a sus obligaciones matrimoniales.

En efecto, se decía que “la histeria amenazaba casi exclusivamente a las mujeres de las clases medias urbanas de ‘pueblos civilizados’; más en concreto, se presentaba con mucha frecuencia en aquellas mujeres que abandonaban sus deberes matrimoniales y familiares, entregadas a visitas sociales, bailes, espectáculos y ‘lecturas peligrosas’. La vida ociosa predisponía a la histeria, más frecuente en aquellas mujeres que rechazaban el modelo de esposas procreadoras y educadoras de su progenie”<sup>191</sup>. De igual manera, “otros médicos creían que la histeria empezaba en la pubertad y llegaba hasta los 25 años, edad del matrimonio. Las mujeres que no se casaban o que enviudaban tempranamente corrían el peligro de caer en la ‘locura histérica’ (manías, delirio, melancolía)”<sup>192</sup>.

---

<sup>189</sup> Ibidem, p. 110.

<sup>190</sup> Ibidem, p. 111.

<sup>191</sup> Ibidem, pp. 113-114.

<sup>192</sup> Ibidem, p. 114.

## **b. Flora Tristán y el pensamiento sobre el rol de la mujer peruana**

Para la Constitución Política de 1834, la ciudadanía constituía un privilegio<sup>193</sup>, debido a que determinados sujetos –entre los cuales no se encontraban las mujeres- podían ejercer una serie de derechos que les permitían desarrollarse libremente en la sociedad de la época.

Durante dicho período, una huérfana francesa arriba a nuestro país a reclamar el patrimonio de su extinto padre que le había sido negado por su hermano; nos referimos a Flora Tristán, quien ha dejado data de las dificultades que sortearon las mujeres en aquellos tiempos.

Su estancia en el Perú, durante 1833 y 1834, no fue la más plácida, pues como apunta Roland Forgues, “los problemas de identidad de género, los fenómenos de discriminación, marginación y exclusión a la vez sexuales y sociales de la mujer que se dan en las sociedades modernas dominadas por los hombres, y reclamar sin tregua ni descanso la igualdad absoluta entre varón y hembra”<sup>194</sup>.

Estas amargas experiencias las plasmó en el libro “Peregrinaciones de una paria”, que, como señala Vargas Llosa, constituye una obra que “no sólo se limita a referir su viaje al Perú, sus aventuras peruanas, sino que cuenta su vida con una libertad de palabra insólita, asumiendo su condición de hija ilegítima, de mujer bastarda a la que esta ‘falta’ de nacimiento condena en la vida a una suerte de marginalidad. Cuenta el horror que significó para ella el matrimonio y cómo a través del matrimonio descubrió la condición de servidumbre, de ciudadana de segunda clase, que era la condición de la mujer, la absoluta

---

<sup>193</sup> Artículo 3.- Son ciudadanos de la nación peruana: 1.- Todos los hombres libres nacidos en el territorio de la República; 2.- Los hijos de padre peruano o de madre peruana nacidos fuera del territorio, desde que se inscriban en el registro cívico en cualquier provincia; 3.- Los extranjeros que hayan servido en el ejército o en la armada de la República; 4.- Los extranjeros casados con peruana que profesen alguna ciencia, arte o industria y hayan residido dos años en la República; 5.- Los extranjeros que obtengan carta de ciudadanía.

<sup>194</sup> FORGUES, Roland. “Apuntes sobre el discurso ‘feminista’ de Flora Tristán”. En: *Libro virtual: Historia de las mujeres*. Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina (CEMHAL). 1997. Disponible en: [http://webserver.rcp.net.pe/ceahal/capitulo5.html#\\_ftnref11](http://webserver.rcp.net.pe/ceahal/capitulo5.html#_ftnref11) (Revisado el 20 de abril de 2009).

falta de protección legal en que se encontraba y su inferioridad, desde todo punto de vista, frente al hombre”<sup>195</sup>.

De acuerdo a Denegri<sup>196</sup>, las desventuras familiares y el panorama de injusticia que padecía la mujer de su época hicieron que Flora concibiera la idea de unirse a la causa de la Unión Obrera, lo cual estaría justificado por Vargas Llosa en que Tristán concebía a las mujeres y a los obreros como dos de los eslabones más débiles de la sociedad, los cuales unidos tomarían cierta fuerza que respaldaría su discurso, propiciando que los detentores del poder prestaran atención a sus necesidades. Por tal motivo, Flora propone la unión de ambos grupos, sustentándose en lo siguiente:

*“En realidad nosotras las mujeres, luchando solas, nunca vamos a transformar la sociedad. Vamos a ser atajadas, frenadas, reprimidas, y nuestra lucha será un sacrificio inútil. Hay que unir a las mujeres con las otras víctimas de la sociedad, que son los obreros, los trabajadores explotados. (...) Con eso vamos a crear una fuerza irresistible que va a transformar profundamente la legislación y que va a hacer de la libertad, por fin, un derecho al alcance de todos los seres humanos sin excepción”*<sup>197</sup>.

Sin perjuicio de esta propuesta de lucha conjunta, Flora no deja de lado la penosa realidad a la que se vio sometida bajo el imperio de la Constitución de 1834 –la cual le negó la ciudadanía y la sometió a la discriminación–, pues conforme expresó, la condición de los seres humanos que nacieron mujeres durante dicha época, constituía razón más que suficiente para luchar para la concreción de su igualdad formal y material, al declarar lo siguiente:

*“Reclamo derechos para la mujer porque estoy convencida de que todas las desgracias del mundo proceden de este olvido y desprecio que hasta ahora se ha hecho de los derechos*

---

<sup>195</sup> VARGAS LLOSA, Mario. “Prólogo. Flora Tristán y Paul Gaugin”. En: *Peregrinaciones de una paria*. Flora Tristán. Fondo editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 2003, p. 17.

<sup>196</sup> DENEGRÍ, Francesca. “Estudio introductorio. La insurrección comienza con una confesión”. En: *Peregrinaciones de una paria*. Op. cit., p. 46.

<sup>197</sup> VARGAS LLOSA, Mario. “Prólogo. Flora Tristán y Paul Gaugin”. En: *Peregrinaciones de una paria*. Op. cit., p. 20.



*naturales e imprescriptibles del ser mujer. Reclamo derechos para la mujer porque es el único medio para que se tome en consideración su educación y porque de la educación de la mujer depende la del hombre en general, y particularmente la del hombre del pueblo. Reclamo derechos para la mujer porque es el único medio de conseguir su rehabilitación ante la Iglesia, ante la ley y ante la sociedad y porque es necesaria esta previa rehabilitación para que los propios obreros sean rehabilitados”*<sup>198</sup>.

Flora Tristán no debe ser asumida como una luchadora solitaria, ajena a las expectativas de otras mujeres, pues las mujeres de otras latitudes reclamaban lo mismo que la franco-peruana. Esto se evidencia en la **Declaración de Séneca Falls**, suscitada en Estados Unidos en 1848, que constituye la “primera declaración sistemática de los derechos de las mujeres entre los que se contempla ya el sufragio, pero también algunos de enorme modernidad como la igualdad laboral, el derecho a la propiedad, el derecho a la autoestima, a una imagen positiva, etc”<sup>199</sup>.

### **c. Incorporación de la mujer al trabajo periodístico**

Conforme se desprende de lo hasta ahora mencionado, la mujer durante el siglo XIX ocupó un sitio dentro de la esfera doméstica. Sin embargo, la insatisfacción de las clases menos pudientes obligó a que las mujeres se incorporaran paulatinamente al ámbito laboral.

Sin embargo, la condición de las mujeres constituyó un pretexto para que los empleadores abusaran de estas al someterlas a largas jornadas de trabajo y a remuneraciones menores a las percibidas por los varones que realizaban las mismas labores. Por tal motivo, es importante rescatar que “el 8 de marzo de 1857 cientos de obreras de una industria textil de Nueva York se rebelaron contra las malas condiciones y la explotación a la que eran sometidas en su trabajo y realizaron una gran marcha”<sup>200</sup>.

---

<sup>198</sup> FORGUES, Roland. “Apuntes sobre el discurso ‘feminista’ de Flora Tristán”. Op. cit.

<sup>199</sup> AGUADO, Ana. “Ciudadanía, mujeres y democracia”. En: *Historia Constitucional*. Op. cit., p. 24.

<sup>200</sup> MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL. “Día Internacional de la Mujer”. Gobierno del Perú. Lima, 2009, p. 2.

Esta situación trascendió las fronteras de Estados Unidos, instando a las mujeres de diversos lugares a tomar conciencia de su rol en el ámbito laboral. Nuestro país no fue la excepción, dándose el caso de mujeres que incursionaron en el ejercicio del **periodismo**.

Como señala Cornejo Quesada, a mediados “del siglo XIX, muchas mujeres de las élites limeñas y provincianas asumieron con agrado su producción intelectual y buscaron espacios periodísticos para su publicación y circulación en la comunidad cultural. Es así como estas mujeres eran reconocidas como escritoras o reafirmaban su prestigio en una ‘sociedad escrituraria’ al publicar sus libros o artículos en algún periódico u otro. Su continuidad le permitía ser cada vez más conocida por el público que signábale el nombre de ‘periodista’”<sup>201</sup>.

Entre las mujeres que destacaron en el periodismo de aquella época encontramos a “la distinguida arequipeña Manuela Ureta de Madueño, viuda de Diego Madueño. Ella fundó y dirigió ‘*El Restaurador*’ en 1865 en Lima, a favor de la revolución que lideraba el coronel Mariano Ignacio Prado contra el general Antonio Pezet”<sup>202</sup>. Por ello, Cornejo señala que “puede afirmarse que doña Manuela Ureta de Madueño es la primera mujer periodista que funda y dirige un periódico en el Perú, contribuyendo con el ambiente femenino para la apertura de nuevos periódicos de género”<sup>203</sup>.

Los pasos de esta notable mujer fueron seguidos por otras que incursionaron en el periodismo. Así, por ejemplo, tenemos a la poetiza y compositora Manuela Antonia Márquez en la revista de literatura y costumbre *El Cosmorama* (1867), Clorinda Matto de Turner con su periódico “*Los Andes*”, Carolina Freyre de Jaimes en el diario “*La Patria*”, como también a las escritoras Juana Manuela Villarán de Plasencia, Leonor Saury, Adelaida Rivero, Rosa del Campo en el periódico dominical “*La Bella Limeña*”, fundado el 7 de abril de 1872. De igual manera, debe destacarse el rol de Varonesa de Wilson, seudónimo de Emilia Serrano García del Tornel, fundadora y directora de “*El Semanario*

---

<sup>201</sup> CORNEJO QUESADA, Carlos. “Presencia e imagen del periodismo femenino en el siglo XIX”. Asociación Peruana de Facultades de Comunicación Social. Lima, p. 12. Disponible en: [http://www.apfacom.org/articulos\\_pdf/las\\_mujeres\\_periodistas.pdf](http://www.apfacom.org/articulos_pdf/las_mujeres_periodistas.pdf) (Revisado el 20 de abril de 2009).

<sup>202</sup> *Ibidem*, p. 13.

<sup>203</sup> *Ibidem*, p. 14.

del Pacífico", periódico femenino literario, como el de Juana Manuela Gorriti y Carolina Freyre de Jaimes, fundadoras y directoras de "El Álbum", que funcionó durante 1874 y 1875<sup>204</sup>.

La participación de la mujer en el periodismo permitió que alzaran su voz sobre la discriminación de la que eran objeto. Testimonio de ello ha dejado Mercedes Cabello, quien en su ensayo periodístico "La Influencia de la Mujer en la Civilización Moderna" manifestó la desigualdad a la que se hallaba sometida la mujer en el acceso a la educación, por lo que instó a los varones a lo siguiente: "*Educad a la mujer, ilustrad su inteligencia, tendréis en ella un néctar poderoso y universal para el progreso y civilización del mundo, una columna fuerte e inamovible en que aumente la moral y las virtudes de las generaciones venideras*"<sup>205</sup>. Como señala Cornejo Quesada, este discurso obedeció a la candidatura de Manuel Pardo, quien compartía las inquietudes de Cabello, por lo cual aprovechó la oportunidad sabiendo "la importancia que tenía el periódico como medio de expresión para exponer y defender las ideas acerca de los deberes y derechos públicos y civiles que debía tener la mujer"<sup>206</sup>.

#### **d. Acceso de la mujer a la educación universitaria**

Conforme señalamos en el acápite anterior, la paulatina incorporación de la mujer a la esfera laboral propició el interés de ciertas mujeres de acceder a la educación superior. Sin embargo, tal empresa fue ciertamente complicada, ya que "para poder ingresar a una universidad tenían que hacerlo con una resolución oficial y generalmente lo hacían en las profesiones de Obstetricia, Odontología y Farmacia. Pocas eran las mujeres que iniciaban estudios de Ciencias, Letras y Medicina. Recién a partir del 7 de noviembre de 1908, con la Ley N°801<sup>207</sup>, las peruanas pudieron matricularse sin observaciones en las universidades"<sup>208</sup>.

---

<sup>204</sup> Ibidem, pp. 14-21.

<sup>205</sup> Ibidem, p. 26.

<sup>206</sup> Loc cit.

<sup>207</sup> Su artículo único expresaba: "Las mujeres que reúnan los requisitos que la ley exige para el ingreso a las universidades de la República, serán matriculadas en ellas cuando así lo soliciten, pudiendo optar los grados

A continuación analizaremos los casos de Trinidad María Enríquez y de Laura Esther Rodríguez Dulanto, dos de las primeras mujeres en cursar estudios universitarios en nuestro país.

#### **d.1. Trinidad María Enríquez**

Durante la vigencia de la Constitución de 1860 se suscitó un hecho de suma importancia para el ejercicio de los derechos de la mujer. En Cusco, la joven Trinidad María Enríquez tomó la determinación de estudiar la carrera de Jurisprudencia en la Universidad del Cusco. El hecho no hubiera tomado notoriedad de no ser porque *antes de Trinidad ninguna mujer había estudiado en una universidad peruana*.

Trinidad María Enríquez no fue beneficiaria de la igualdad que gozaban los varones en el acceso a una carrera universitaria, sino que, todo lo contrario, tuvo que gestionar los trámites que le permitiesen cursar sus estudios en la Universidad del Cusco. Finalmente, a través de una Resolución Suprema de 1875 fue autorizada por el gobierno a estudiar en la Facultad de Jurisprudencia, de la cual se graduó de Bachiller en 1878 tras la expedición de una Ley por Andrés Avelino Cáceres que le permitió sustentar su tesis<sup>209</sup>.

La obtención del grado de Bachiller despertó el interés de la prensa, que alabó su logro profesional. Concitado el interés, Trinidad aprovechó la ocasión para dar un discurso en el que evidenció la situación de la mujer de finales del siglo XIX:

*“La manera como vine al mundo, mi prematura orfandad y las consiguientes dificultades para procurarme una educación siquiera mediana, concurrieron a que viera de cerca la*

---

académicos y ejercer la profesión a que se dediquen” (Anuario de la Legislación peruana. Edición Oficial. Tomo III. Legislatura de 1908. Talleres tipográficos de “la revista”. Lima, 1909, p. 31).

<sup>208</sup> PAMO-REYNA, Óscar. “Una visión histórica de la participación femenina en la profesión médica”. En: *Revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna*. Volumen 20, N° 3. Sociedad Peruana de Medicina Interna. Lima, 2007, p. 114.

<sup>209</sup> GLAVE, Luis Miguel. “Dama de sociedad. Trinidad María Enríquez, Cusco 1846-1891. En: *Libro virtual: Historia de las mujeres*. Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina (CEMHAL). 1997. Disponible en: [http://webserver.rcp.net.pe/cemhal/capitulo5.html#\\_ftnref11](http://webserver.rcp.net.pe/cemhal/capitulo5.html#_ftnref11) (Revisado el 21 de abril de 2009).

*triste condición de la mujer, cuyo destino en nuestra sociedad no corresponde ni a la mitad del que asume el altanero y erguido hombre, constituido en árbitro de cuanto le rodea por su cultivada inteligencia y su fuerza (...) ¡El eterno pupilaje que pesa sobre la mujer, me pareció una desigualdad indigna, pero sancionada por los hábitos y la ley! Desde los primeros albores de mi razón concebí pues la idea de ser la primera en mi patria que se abriera paso en la noble carrera del foro, contribuyendo así a que dejara de ser una utopía el brillante porvenir que alcanzaría con su completa emancipación la mujer”<sup>210</sup>.*

El largo camino recorrido por Trinidad confirma la restricción de la mujer en el ejercicio de sus derechos, lo cual refuerza la idea que durante el siglo XIX la mujer no pudo ser beneficiaria de la anhelada igualdad ante la ley.

#### **d.2. Laura Esther Rodríguez Dulanto**

Después del logro de Trinidad María Enríquez, el acceso de la mujer a la educación superior fue propagándose en nuestro medio. En esta corriente encontramos a Laura Esther Rodríguez Dulanto, quien fuera la primera mujer en estudiar Medicina, precisamente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Esta mujer nacida en Supe durante 1872, ingresó a la Decana de América en 1892. Sin embargo, su formación académica se vio limitada por algunas restricciones que son anotadas por Díaz, al señalar que “para sus trabajos de anatomía, por entonces con severas restricciones para las mujeres, debió estar detrás de un biombo. A veces preguntaba, y se la comparaba como la de un ciego que quiere reconocer una realidad que no ve”<sup>211</sup>. No obstante, el esfuerzo y dedicación de esta joven revirtió el panorama al que se la sometía, ya que “a la vez que cursaba el tercer año, tuvo una autorización especial del Decano de la Facultad de Medicina para realizar disecciones anatómicas en sala separada, en compañía

---

<sup>210</sup> Ibidem.

<sup>211</sup> DÍAZ, Héctor. “Primera médica peruana, Dra. Laura Esther Rodríguez Dulanto (1872 – 1919)”. En: *Anales de la Facultad de Medicina*. Volumen 68, N° 2. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 2007, p. 183.

de su hermano Abraham. Tales circunstancias representaron un enorme adelanto y superación para su tiempo”<sup>212</sup>.

Laura se tituló de médico cirujano en 1899 a través de la tesis titulada “Empleo del ictiol en las inflamaciones pelvianas”. Como señala Alva León, “la aprobación de este trabajo era una muestra de amplitud y tolerancia del grupo de profesores de ese momento, si se tiene en cuentas que, cuando la primera mujer médica graduada en los Estados Unidos regresó a su nativa Inglaterra, se le permitió trabajar en todos los pabellones, excepto en el de enfermedades de las mujeres, pues el profesor de ginecología no podía aceptar que una mujer estudiara o practicara esta especialidad”<sup>213</sup>.

y ejerció activamente la profesión, fundando la Primera Escuela de Enfermería del Perú, donde ejerció la docencia. De igual manera, participó en el Hospital Militar y organizó la “Unión patriótica de señoras”, durante el conflicto con Ecuador (1910), como también ejerciendo el rol de ponente en el V Congreso Médico Latinoamericano con la formulación de políticas públicas en torno a la tuberculosis (1913)<sup>214</sup>.

#### **e. Participación de la mujer en la literatura**

Mujeres como Juana Manuela Gorriti (1838-1892), Clorinda Matto de Turner (1852-1909), Mercedes Cabello de Carbonera (1845-1909) y Teresa González de Fanning (1836-1903) dieron paso “desde las letras a la discusión sobre los derechos de la mujer en el espacio público, espacio por excelencia de la masculinidad. La exigencia respondía a una necesidad: la pérdida de los maridos. En los casos de Teresa González y Lastenia Larriva, ellos murieron en combate durante la Guerra del Pacífico (1879); mientras que Mercedes

---

<sup>212</sup> Loc. cit.

<sup>213</sup> ALVA LEÓN, Verna. “Intervención de la mujer en la medicina”. En: *Historia de la medicina peruana en el siglo XX*. Tomo II. DELGADO MATAALLANA, Gustavo (Compilador). Fondo editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 2000, p. 1279.

<sup>214</sup> DÍAZ, Héctor. “Primera médica peruana, Dra. Laura Esther Rodríguez Dulanto (1872 – 1919)”. Op. cit., p. 184.

Cabello y Clorinda Matto enviudaron muy jóvenes. En cambio, Juana Manuela Gorriti y Margarita Práxedes se divorciaron”<sup>215</sup>.

De tales autoras, cabe destacar a Mercedes Cabello, quien en 1886 ganó el primer premio del concurso literario convocado por El Ateneo de Lima. Como señala Gherzi, “su libro *Sacrificio y recompensa* es una propuesta moralista que destaca con un tono romántico los conceptos de heroína y prostituta. Aparentemente, critica el matrimonio por conveniencia como una forma de prostituirse, la cual era una práctica social obligada en aquellos tiempos”<sup>216</sup>.

#### **f. Preocupación de juristas peruanos por la situación de la mujer**

Aunque la realidad del siglo XIX presentó retos a la realización de la mujer, un grupo de juristas varones se preocuparon por su rol en nuestra sociedad. Así, por ejemplo, **Nicanor Cano**, quien en 1873 sustentó su tesis de bachiller “*La igualdad fundamental de la especie humana implica igualdad de derechos entre el varón y la mujer*”, como en la de **César Cordero** para optar por el título de licenciado en jurisprudencia de 1874, titulada “*La emancipación social y civil de la mujer*”<sup>217</sup>.

De igual manera, **Anselmo Barreto** sustentó en 1885 su tesis de bachiller titulada “*Condición civil de la mujer peruana*”, en la que disertación que “no estaba exenta de una visión teñida de iusnaturalismo, que el empirismo positivista servía para confirmar. El tesista, en efecto, considera que Dios ha establecido un régimen simétrico, una ‘igualdad fundamental entre hombres y mujeres’, prefijada por la ley natural y que se fundaría en la atenta observación de la naturaleza”<sup>218</sup>.

---

<sup>215</sup> GHERSI, Ericka. “Las otras voces del siglo XIX. Mujeres intelectuales”. En: *Identidades*. N° 47. Editora Perú. Lima, 20 de octubre de 2003, p. 10.

<sup>216</sup> Ibidem, p. 11.

<sup>217</sup> RAMOS NÚÑEZ, Carlos Augusto. “Historia del Derecho civil peruano: Siglos XIX y XX”. Tomo V. Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2005, pp. 494-495.

<sup>218</sup> Ibidem, p. 496.

Posteriormente, **Manuel Aranibar** sustenta en 1897 su tesis de bachiller “*La mujer casada no debe necesitar autorización de su marido para enajenar y disponer de sus bienes parafernales*”, como también lo haría **Máximo Cisneros** en su tesis sustentada en 1898 “*¿Puede testar la mujer casada menor de 18 años?*” y **Aurelio León** en su tesis de ese mismo año titulada “*Observaciones a las disposiciones legales que prohíben a la mujer desempeñar la guarda y ser testigo en testamento*”<sup>219</sup>.

### 3.1.6. La mujer en el Perú del siglo XX

Los avances conseguidos durante el siglo XIX permitieron que en las primeras décadas del siglo XX las mujeres alcanzaran mayores logros. De ello se puede dar fe, incluso durante la primera década del siglo, ya que conforme se expresa en el discurso de Juan José del Pino, la mujer comienza a ser concebida como un ser independiente, al expresar lo siguiente:

“Ya no le basta a la mujer ser esposa para subsistir, ni le es tan fácil encontrar marido. La mujer casada tiene que trabajar como el varón para que la familia no perezca y la soltera o viuda tiene que atender por sí a sus necesidades. Ciertamente que tal situación es la de la mujer pobre; la que tiene más de lo indispensable, con matrimonio o sin él, no se ve obligada a buscar recursos. Y ¿quiénes sino las clases desheredadas son siempre la mayoría en la sociedad? ¿Qué importa entonces que una tercera parte de las mujeres disfruten de su holgada posición, cuando las otras dos terceras partes piden ansiosas una manera de ganar el sustento diario?”<sup>220</sup>.

#### a. Participación de la mujer en la vida pública

Las medidas dirigidas a construir la igualdad de la mujer ante la ley no resultaron suficientes, propiciando la mayor participación de la mujer en la vida pública. Por tal motivo, diversas figuras femeninas salieron a la escena pública a reclamar sus derechos; un ejemplo es **María Jesús Alvarado**, quien expuso en “*El Feminismo*” (1911) la necesidad

---

<sup>219</sup> Ibidem, p. 498.

<sup>220</sup> Ibidem, p. 501.



de otorgar derechos civiles y políticos a las mujeres, la amplitud del derecho a la educación, el acceso a empleos públicos y profesiones “liberales”, y la independencia de la mujer casada. De la misma manera, María hace llegar en 1913, a través de algunos congresistas, un proyecto de ley que demandaba la participación de la mujer en los cargos públicos<sup>221</sup>.

La participación de la mujer en la vida pública –precisamente en el ejercicio de un puesto en una entidad gubernamental- es posible a través de la Ley N° 4526, del 19 de septiembre de 1924 que permite la **participación de la mujer en las Sociedades de Beneficencia Pública**. Sin embargo, dicha permisión estaba sometida a odiosas condiciones como la edad de la mujer<sup>222</sup> o la autorización marital<sup>223</sup>. Sin embargo, como señalan Victoria Villanueva y Elizabeth Herrera, “si bien no eran instancias donde se definía la política nacional, constituía una puerta de entrada para los primeros debates en relación con el ingreso de la mujer a la política por la vía formal”<sup>224</sup>.

Estos logros alcanzados durante la vigencia de la Constitución de 1920 no son más que el reflejo del cambio de visión de nuestra sociedad respecto a la participación de la mujer en la esfera pública. Tal es el pensamiento de **José Carlos Mariátegui**, plasmado en su artículo “La Mujer y la Política” publicado el 15 de marzo de 1924 en la revista “Vanidades”:

*“Uno de los acontecimientos sustantivos del siglo veinte es la adquisición por la mujer de los derechos políticos del hombre. Gradualmente hemos llegado a la igualdad política y jurídica de ambos sexos. La mujer ha ingresado en la política, en el parlamento y en el*

---

<sup>221</sup> UNIVERSIDAD DE CHILE. “Perú”. Blog de la Universidad de Chile. Disponible en: [http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/filosofia\\_y\\_humanidades/vitale/obras/sys/fmu/b/c10.pdf](http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/filosofia_y_humanidades/vitale/obras/sys/fmu/b/c10.pdf) (Revisado el 22 de abril de 2009).

<sup>222</sup> Artículo 1° de la Ley N° 4526.- “Las mujeres mayores de 30 años pueden formar parte de las sociedades públicas de beneficencia, rigiendo también para ellas todas las disposiciones legales y reglamentarias referentes a los miembros de dichas instituciones”.

<sup>223</sup> Artículo 2° de la Ley N° 4526.- “La autorización marital para que las mujeres casadas puedan ejercer los cargos a que se refiere el artículo anterior, se hará constar suscribiendo el marido, conjuntamente con su esposa, la nota de aceptación del nombramiento recaído en ésta”.

<sup>224</sup> VILLANUEVA CHÁVEZ, Victoria y HERRERA GARCÍA, Elizabeth. “50 años del voto de las mujeres”. Manuela Ramos. Lima, 2005, p. 10.

*gobierno. Su participación en los negocios públicos ha dejado de ser excepcional y extraordinaria”*<sup>225</sup>.

De igual manera, debemos señalar que la participación de la mujer se evidenció a través de **Dora Mayer**, intelectual que en las décadas de 1920 y 1930 expuso una serie de ideas audaces en torno al divorcio y al matrimonio, como a la situación de los indígenas. Como señala Bustamante, “Dora Mayer no fue comprendida por sus contemporáneos que se vieron excedidos por la audacia de sus percepciones. Detestó el fanatismo y se opuso a los dirigentes. Sus observaciones sobre las personalidades políticas de su tiempo fueron descarnadas. Igualmente sobre los dirigentes de la Iglesia Católica y su papel en la vida de la comunidad. Sus opiniones despertaron contra ella también el desprestigio personal, una cerrada censura y desaparición de su obra”<sup>226</sup>.

Asimismo, podemos referir a **Magda Portal**, quien en su obra “*La mujer nueva*” de 1933 “habla de nuestro sistema social como basado en la más flagrante desigualdad en que la mujer sufre ‘el despotismo, la humillación’ y reconoce su impotencia para comprender su propia esclavitud a causa de su incultura, en medio de la que trata de ‘sustituir el conocimiento con la intuición natural y la razón con la fantasía’”<sup>227</sup>, lo que si bien se justificaría en el limitado acceso a la educación básica y superior, sería revertida paulatinamente como veremos en los siguientes acápites de este estudio.

No obstante, pensadores como **Sebastián Salazar Bondy** se encargaron de restar todo mérito a la mujer peruana, conforme se aprecia en su obra “*Lima, la horrible*” de 1975 al señalar que “*El progreso social (...) se ha visto con frecuencia... detenido o desviado por el capricho femenino, ya que la limeña no obstante la licenciosa fama de la tapada, ha sido y continúa siendo el más sólido bastión del conservadorismo y la más terca columna, en consecuencia, del mito virreinal (...). Su belleza e inteligencia están relacionadas a una aguda frivolidad (...) en el campo de la inteligencia (...) nunca fue educada para que su*

---

<sup>225</sup> Ibidem, p. 9.

<sup>226</sup> BUSTAMANTE, Cecilia. “Intelectuales peruanas de la generación de José Carlos Mariátegui” Colección Ensayo. Editorial Letralia. Lima, 2005, p. 19.

<sup>227</sup> Ibidem, p. 22.

*disposición intelectual se aplicara al arte o a la ciencia. Semianalfabeta durante el coloniaje, sumariamente formada hoy mismo por la docencia improvisada católica, adorno de la casa (...). Las dotes de inteligencia de la mujer (...) son pues una vasta riqueza que algún día será convenientemente pulida y aprovechada”*<sup>228</sup>.

## **b. Posiciones sobre el voto universal de la mujer**

Como señala un estudio del Congreso de la República, “desde los años veinte del siglo pasado el movimiento feminista se extiende por América, formándose diversas instituciones como el Comité de Acción Internacional del Partido Nacional de Mujeres de los Estados Unidos, la Federación Nacional de Asociaciones Femeninas de Cuba y el Partido Nacional de Mujeres de Puerto Rico. Éstas asociaciones hicieron una gestión –por intermedio de la delegación de Guatemala– ante la Quinta Conferencia Americana –reunida en Chile– para que se incluyese en la agenda de la Sexta Conferencia Americana –que se reuniría en La Habana– su pedido concerniente a los derechos civiles y políticos de la mujer. En la VIII Conferencia Panamericana –realizada en Lima, en el Palacio Legislativo, la delegación norteamericana presentó el proyecto para otorgar el derecho a sufragio a las mujeres del continente. En la sesión cuarta, realizada el 20 de diciembre de 1938, la VIII Conferencia Americana acordó invitar a todos los Estados de América para que así lo hicieran”<sup>229</sup>.

Esta situación permitió que existieran una serie de posiciones en torno al voto femenino que fueron expuestas durante los debates para la expedición de la Constitución de 1933, las cuales serán expuestas a continuación:

### **b.1. Posición contraria a la concesión del voto femenino**

Contrario al voto femenino, Manuel J. Bustamente de la Fuente, representante por Arequipa del Partido Descentralista, defendía su opinión al considerar que ninguno de los

---

<sup>228</sup> SALAZAR BONDY, Sebastián. “Lima, la horrible”. Peisa. Lima, 1975, pp. 79-80.

<sup>229</sup> CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. “Las primeras parlamentarias peruanas”. Lima, 2004, p. 4.

congresistas a favor del voto femenino desearía *“encontrar, al regresar a su hogar, cansado de la lucha cotidiana, en vez de la paz y tranquilidad que necesita, del halago suave y sedentario de una mujer cariñosa y femenina, un ambiente caldeado por la lucha y las pasiones políticas”*<sup>230</sup> (el sombreado y las cursivas son nuestras).

Si bien la opinión de dicho legislador responde al pensamiento imperante de la época, constituye un claro ejemplo de la reafirmación del rol de género de la mujer, enclaustrada en el ámbito doméstico. A través de la restricción del derecho al voto universal (y por lo tanto, a la ciudadanía) se protegía la estructura “natural” de la familia -protegiendo la virtud de la mujer protegida dentro de la seguridad del hogar conducido por la voluntad del padre o del esposo- y, en consecuencia, de la sociedad misma.

## **b.2. Posición favorable a la concesión del voto restringido femenino**

De la misma manera, existía la opinión a favor del voto restringido que, en palabras del representante de Amazonas, Ricardo Feijóo, expresaba que **la mujer debía alcanzar el voto una vez cumplido los 25 años de edad**, al tener en cuenta *“la influencia decisiva de las monjas y en el momento de las elecciones, no sabría por quién votar y lo haría por recomendación de las religiosas o lo haría tal vez, por las súplicas del novio o por la imposición del confesor”*<sup>231</sup> (las cursivas son nuestras).

No obstante, esta opinión que podría considerarse “un tanto avanzada para la época” termina cayendo en el mismo pozo que la anterior, debido a que, si bien no restringen a la mujer a la esfera doméstica, toma como referente su naturaleza que las convierte en seres carentes de expectativas y de su incapacidad de generar opiniones y convicciones propias que alimentaran el debate de la vida nacional.

## **b.3. Posición favorable a la concesión del voto universal femenino**

---

<sup>230</sup> VILLANUEVA CHÁVEZ, Victoria y HERRERA GARCÍA, Elizabeth. “50 años del voto de las mujeres”. Op. cit., p. 2.

<sup>231</sup> Ibidem, p. 15.

El representante de Arequipa, Víctor Andrés Belaunde, se expresaba a favor del voto universal para todas las mujeres, sosteniendo que *“no importaba si el voto de la mujer iba a las filas de la izquierda, eso no importaba, si **se trataba de justicia** por eso el sufragio debía ser general irrestricto y obligatorio. **No podemos concederlo como un favor, una gracia o un privilegio del que se pueda usar.** Estamos embarcados en la lógica inflexible de la democracia integral. Puede ser que ella envuelva un riesgo, pero corrámoslo con ánimo optimista y exaltado”*<sup>232</sup> (el sombreado y las cursivas son nuestras).

Asimismo, al refutarse el acceso al voto a las mujeres que no habían recibido instrucción pública, Belaunde afirmaba que en el *“hogar de nuestra clase media, el hogar de los españoles y mestizos, aun en poblaciones modestas del Perú”*<sup>233</sup> se había cultivado la educación. Otros congresistas como Luciano Castillo Coloma e Hildebrando Castro Pozo, representantes de Piura por el Partido Socialista del Perú, se adhirieron a la posición del voto universal.

Esta posición finalmente fue amparada mediante la Ley N° 12391, del 7 de septiembre de 1955, que concedió el voto a las mujeres en las elecciones generales. Ello representaría para Francisco Pastor, representante de Puno en el Congreso, un acto de trascendental magnitud, conforme se aprecia en el siguiente discurso:

*“Asistimos incuestionablemente a uno de esos momentos de una trascendencia excepcional que tienen que afrontar instituciones como el Parlamento, de una trascendencia similar a los hechos de la naturaleza que transforman o modifican la evolución de la vida o esa trascendencia que implica la germinación de la vida, la trascendencia que existe y que vibra cuando una especie de simiente va a originar con el decurso de los tiempos consecuencias promisorias, grandes y modificantes de un organismo que en este caso es nuestra patria. El Parlamento con su sabiduría y el país pendiente en estos momentos, saben la importancia que implica este debate. Constituye la dación de esta ley un verdadero jalón en los fastos de nuestra historia. Futuramente, cuando se haga una historia política del Perú, se podrá dividir tal vez la historia republicana en algunas*

---

<sup>232</sup> Ibidem, p 17.

<sup>233</sup> Loc. cit.

*etapas. Puede ser una etapa aquella que se inicia con la independencia del Perú, con los brillantes fastos de nuestra emancipación; etapa que podría ser jalonada hasta aquella en que aquel estadista eximio, cuyo año nos cobija, el Mariscal Castilla, dictará la liberación de los esclavos , la redención del indio; desde esa etapa de avance en las ideas democráticas y libertarias, habrá que decir por los historiadores de esa época: el año en que se dictó por el Parlamento del Perú la liberación cívica y política de la mujer”<sup>234</sup>.*

### **c. Acceso de la mujer a la justicia**

El acceso a la justicia es “el conjunto de atribuciones que asisten a toda persona, sin ningún tipo de distinción, a fin de que pueda contar con asesoría legal, asistencia letrada a lo largo de todo el proceso judicial, extrajudicial o administrativo en el que sea parte o en el que tenga legítimo interés, así como a todos los recursos necesarios para lograr una tutela judicial efectiva de sus derechos, además de una defensa justa”<sup>235</sup>.

Sin embargo, los mecanismos establecidos en nuestra legislación dificultan que las mujeres accedan plenamente a la justicia. Esto se verifica en que existen determinadas materias que por la propia naturaleza del conflicto hacen de la mujer el sujeto que tiende a solicitar a la justicia la declaración de determinado derecho.

Tal es el caso del **juicio por alimentos**<sup>236</sup>, simplificado por la Ley N° 28439 a la sola presentación de un formulario de demanda, prescindiendo de la firma de abogado. Sin embargo, la tecnicidad del formulario hace prácticamente imposible que las recurrentes puedan realizarlo por sí mismas, debiendo procurar el auxilio de un letrado a fin de interponer la demanda.

---

<sup>234</sup> CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. “Las primeras parlamentarias peruanas”. Op. cit., p. 4.

<sup>235</sup> SCHIAPPA-PIETRA, Óscar. “El problema del acceso a la justicia en el Perú”. En: *Acceso a la justicia*. Poder Judicial. Lima, 1997, p. 20.

<sup>236</sup> MACASSI LEÓN, Ivonne (Coordinadora). “Informe alternativo al sexto informe periódico del Estado Peruano al Comité de la CEDAW”. Flora Tristán. Lima, 2006, p. 52.

Otro caso es el **proceso judicial de filiación de paternidad extramatrimonial**<sup>237</sup>, que si bien fue objeto de simplificación a través de la Ley N° 28457, es ineficiente frente a la oposición del demandado, pues el costo de la prueba de ADN es asumido por la demandante<sup>238</sup>. Esta Ley no ha tenido en cuenta nuestra realidad, pues, al ascender la remuneración mínima vital a 500 nuevos soles y el costo de la prueba de ADN a 500 dólares, se dificulta el reconocimiento de la paternidad. Por un lado, se limita el acceso a la justicia de las madres, al no contar con la suma para realizar el examen, y por otro, el derecho de los menores a su identidad y al resto de derechos derivados como la propiedad (anticipo de legítima o herencia).

El análisis de estos procesos revela que los legisladores no toman en consideración la realidad de la mujer peruana al expedir leyes que directamente inciden sobre ellas. Esta situación no sólo determina que la mujer vea restringido el acceso a la justicia, sino también a perpetuar la situación de desamparo en que se encontraba al recurrir a los órganos de administración de justicia.

#### **d. Consecuencias del conflicto armado 1980-2000 sobre la mujer**

Como señala “Hatun Willakuy”, no fue casual que el conflicto armado, suscitado entre 1980 y 2000, cobrara mayor fuerza en las regiones de marcada exclusión social, como son la sierra y la selva central del país<sup>239</sup>. Parte de las víctimas fueron niñas y mujeres sometidas a violencia sexual, tal como lo demuestra este testimonio de Huancavelica “(...) yo diría señorita que también a mí psicológicamente, y todo de mi estudio, todo [la violación] me ha hecho perdición, y tenía pa que se vaya a la cárcel así señorita, porque yo era menor de edad, aunque yo decía antes con mi propia voluntad no era, a malas me ha agarrao él, cuando estoy gritando me ha agarrao mi boca, me ha tapao, entonces no va a pasar nada, un ratito nomás me dijo, yo no podía hablar me tapó mi boca” (M. Manta)<sup>240</sup>.

---

<sup>237</sup> Ibidem, p. 53.

<sup>238</sup> Artículo 2° de la Ley N° 28457.

<sup>239</sup> REÁTEGUI CARRILLO, Félix (Coordinador). “Hatun Willakuy. Versión abreviada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional.” Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima, 2004, pp. 20-27.

<sup>240</sup> MACASSI LEÓN, Ivonne (Coordinadora). “Informe alternativo al sexto informe periódico del Estado Peruano al Comité de la CEDAW”. Op. cit., p. 83.

Sin embargo, la inacción estatal es evidente. A un año del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), de los 47 casos presentados por ella, 13 se encontraban en el Poder Judicial, mientras que los 34 restantes en investigación preliminar<sup>241</sup>. Este marco se proyecta al caso de las mujeres víctimas de violencia sexual por parte de efectivos militares o terroristas, pues la inacción del Ministerio Público y del Poder Judicial muchas veces se sustenta en el olvido de estos crímenes cometidos de manera sistemática contra este sector de la población.

Más grave aún, las víctimas de abuso sexual durante el conflicto han visto restringido su derecho a la tutela procesal efectiva a través del Decreto Supremo N° 061-2006-PCM<sup>242</sup>, publicado el 22 de septiembre de 2006, por el que el Estado garantiza la defensa de militares y policías denunciados, por considerar que estos actos fueron cometidos como consecuencia de la política adoptada para la lucha antiterrorista. No obstante, esa lucha no justifica el abuso que afrontaron las mujeres (pertenecientes o no a grupos terroristas) para la consecución del plan gubernamental de erradicación del terrorismo.

### **3.2. MARCO LEGISLATIVO**

El marco legislativo será desarrollado sobre la base del tratamiento que nuestra legislación ha dado a la mujer, comprendiendo su estudio el período 1823-2009.

#### **3.2.1. LEGISLACIÓN PERUANA**

##### **3.2.1.1. Legislación del siglo XIX**

###### **a. Constituciones Políticas**

---

<sup>241</sup> VILLANUEVA, Rocío (Coordinadora) “A un año de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Defensorial N° 86”. Defensoría del Pueblo. Lima, 2004, pp. 40-41.

<sup>242</sup> Normas Legales de “El Peruano”, p. 328712.



Las Constituciones Políticas de 1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856 y 1860 realizaron una clara distinción de las personas a través de la **ciudadanía**, categoría en la cual no se encontraban incluidas las mujeres, ya que ciudadanos eran los varones alfabetizados con propiedades, lo que marcaba una clara discriminación ya que les impedía el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Un ejemplo de ello lo encontramos en el artículo 17° de la Constitución de 1823, al prescribir las condiciones para ser ciudadano: “1.- Ser peruano. 2.- Ser casado, o mayor de veinticinco años. 3.- Saber leer y escribir, cuya calidad no se exigirá hasta después del año de 1840. 4.- Tener una propiedad, o ejercer cualquiera profesión, o arte con título público, u ocuparse en alguna industria útil, sin sujeción a otro en clase de sirviente o jornalero”<sup>243</sup>.

## **b. Código Civil de 1852**

Los dispositivos de este cuerpo, que rigió hasta 1924, contienen una tendencia claramente discriminadora en contra de la mujer. En efecto, el Código de 1852 **considera a la mujer como una clase innominada de incapaz**, puesto que a diferencia de los varones menores de edad, no puede abandonar esta calidad debido a su naturaleza misma. Esta situación la coloca en un limbo jurídico, es decir, en un plano difuso entre el incapaz –al ser objeto de protección de los padres o del esposo- y el ciudadano –al ser destinataria de obligaciones frente a la sociedad conyugal que, de incumplirlas, traían consecuencias de naturaleza legal.

Se puede observar en el Título “De los varones y mujeres”, que su artículo 10° precisa que el término “hombre” comprende al varón y a la mujer, lo cual es reafirmado por el artículo 11°, al establecer que “[l]os varones y las mujeres gozan de los derechos civiles y están sujetos a las obligaciones que establece este Código”<sup>244</sup>. Ello, a decir de Cornejo significa que el varón y la mujer deben encontrar en la ley “las condiciones necesarias para un más

---

<sup>243</sup> BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES. “Constitución de 1823”. Fundación Cervantes Virtual. Madrid, 2007. Información que se halla disponible en: <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01482074789055978540035/index.htm>. (Disponible el 18 de abril de 2009).

<sup>244</sup> CORNEJO, Gustavo. “Comentarios al Código Civil de 1852”. Tomo I. Dionisio Mendoza, Librería y Casa Editorial. Chiclayo, 1921, p. 10.

amplio desarrollo de las facultades propias de su sexo, de cuya combinación resulta el progreso de la familia y el adelanto social”<sup>245</sup>; es decir, que cada sexo tenía un rol (género), valga la redundancia, propio de su “naturaleza” que era indispensable para el progreso en la esfera privada y pública.

### **b.1. Sujeción de la mujer al esposo**

Sin embargo, la discriminación contra la mujer se evidencia en su **artículo 28°** al prescribir “Están bajo la potestad de otros: 1. Las mujeres casadas que dependen de sus maridos”<sup>246</sup>, además de los menores, los incapaces y los esclavos. Dicho texto generó una situación de dependencia de la mujer casada frente a su esposo en ámbitos tan amplios como las relaciones civiles de orden personal entre cónyuges, los actos civiles prohibidos y permitidos a la mujer casada, como a sus derechos y acciones permitidas por la legislación civil<sup>247</sup>.

Abordar la totalidad de dispositivos de este Código es una labor exhaustiva. Sin embargo, nos restringiremos a la **discriminación en el ejercicio de derechos y al sometimiento en deberes provenientes del matrimonio**. Ello, se justificaría —en palabras de Cornejo— debido a que el Código lo único que hace es recoger una situación fáctica, por lo que sus disposiciones obedecen a la realidad, lo cual implica que el Código “[no puede] abordar las relaciones naturales y morales que origina la unión conyugal, [en tanto] la ley [carece de] medios eficaces para asegurar su perfecto cumplimiento, pues son, por propia índole, de naturaleza coercible”<sup>248</sup>.

Lo dicho implicaría que se parte de un orden anterior al jurídico que, si bien debe encuadrarse a este último, debe interpretarse como que el jurídico de 1852 se adecuó al primero. Esto se traduce en que “el marido (...) toma posesión de los bienes que corresponden a su consorte; puede pedir la división de los bienes en que sea propietaria

---

<sup>245</sup> Ibidem, pp. 10-11.

<sup>246</sup> Ibidem; p. 26.

<sup>247</sup> Loc. cit.

<sup>248</sup> Ibidem, p. 225.

pro-indiviso; tiene derecho a reclamar el depósito hecho por su mujer (...); el marido en general ejerce, en juicio, la representación de la mujer”<sup>249</sup>.

## **b.2. Castigo de la infidelidad femenina**

Dentro de los deberes que nacen del matrimonio, el artículo 174<sup>o250</sup> regula la fidelidad. Si bien su texto no hace referencia al cumplimiento de este deber, Cornejo precisa que existía un trato diferenciado que **castigaba con mayor severidad la infidelidad de la mujer**, puesto que “su falta origina consecuencias morales y materiales mucho más graves que el adulterio del marido”<sup>251</sup> en tanto existía la presunción de paternidad de los hijos nacidos dentro del matrimonio, que de quebrantarse originaría la ruptura del vínculo matrimonial y, en consecuencia, el escándalo. Sin embargo, el adulterio del esposo sólo sería punible cuando generase escándalo.

## **b.3. Obediencia al esposo**

Por otro lado, el artículo 175<sup>o</sup> establecía que “[e]l marido debe proteger a la mujer y la mujer obedecer al marido”<sup>252</sup>. Esta cláusula parte del “**orden natural**” de las cosas que se traduce en los siguientes artículos: “Artículo 176<sup>o</sup>: La mujer está obligada a habitar con el marido, y a seguirle donde él tenga por conveniente residir”<sup>253</sup> y “Artículo 177<sup>o</sup>: El marido está obligado a tener en su casa a la mujer, y a suministrarle todo lo preciso para las necesidades de la vida, según sus facultades y situación”<sup>254</sup>.

Estos artículos demuestran una notoria discriminación contra la mujer, puesto que reafirman su sujeción frente al esposo y su exclusión de la vida pública, al restringirla a la casa. La mujer era, pues, un ser con una voluntad limitada, que tan sólo podía alzar su voz de protesta frente a las injusticias “intolerables” para la época y que, traían consigo la

---

<sup>249</sup> Ibidem, p. 226.

<sup>250</sup> Ibidem, p. 233.

<sup>251</sup> Ibidem, p. 234.

<sup>252</sup> Ibidem, p. 236.

<sup>253</sup> Ibidem; p. 238.

<sup>254</sup> Loc. cit.

disolución del vínculo matrimonial; pero recuérdese el contexto en que la desaprobación social era tan fuerte, lo que haría difícil la extinción del matrimonio, más aún si es que se tiene en cuenta la gran probabilidad que la mujer fuese culpada de la ruptura como consecuencia del “incumplimiento de sus deberes como esposa”, es decir, del sometimiento que su naturaleza le obligaba frente al esposo.

Esta situación no hace más que corroborar que el estatus de la mujer en la legislación del siglo XIX no era más que la consecuencia misma de la estructura de la sociedad de dicha época, en el que el espacio público creado fue el espacio de los ‘iguales’. De los que se reconocen como tales por su ‘naturaleza’ o ‘capacidades’ –autonomía personal- como ciudadanos u ‘hombres públicos’, en tanto que las mujeres son la alteridad, ‘lo diferente’, ‘lo otro’, supuestamente opuesto pero complementario y subordinado; y no podía haber igualdad entre quienes no son ‘iguales’ –bien por voluntad divina, bien por voluntad de la naturaleza o de la razón-. De esta manera, el género marca un punto de partida y traza una línea divisoria insalvable entre quienes pueden participar de la igualdad y ser incluidos o no en la ciudadanía<sup>255</sup>.

### **c. Código de Comercio de 1852**

Por ley del 10 de enero de 1852, el Congreso resolvió adoptar un modelo similar al Código de Comercio español de 1829, el cual entró en vigencia a partir del 15 de junio de 1853<sup>256</sup>. Este cuerpo normativo no es ajeno al establecimiento de tratos diferenciadores en contra de la mujer dentro del ejercicio de la actividad comercial.

Así, por ejemplo, tenemos al artículo 6º, el cual establece que “[t]ienen capacidad para ejercer el comercio, todos los que la tienen para contratar conforme a las leyes comunes”<sup>257</sup>. Sin embargo, su interpretación a la luz del artículo 175º del Código Civil de 1852 (“la

---

<sup>255</sup> SÁNCHEZ MUÑOZ, Cristina. “La difícil alianza entre ciudadanía y género”. En PÉREZ CANTÓ, Pilar (Coordinadora). *También somos ciudadanas*. Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2000. pp. 3-25.

<sup>256</sup> DE LA LAMA, Miguel Antonio. “Código de Comercio del Perú”. Librería, imprenta y encuadernación Gil. Lima, 1897, p. 8.

<sup>257</sup> *Ibidem*, p. 12.

mujer [debe] obedecer al marido”) nos indica que esta requería la autorización del cónyuge para realizar una actividad comercial.

Asimismo, el Código **condiciona el ejercicio del comercio de la mujer a la voluntad del esposo**, lo cual se desprende de la interpretación sistemática de los artículos 8° y 9°. Mientras el artículo 8° dispone que “la mujer casada puede ejercer el comercio, con autorización del marido o sin ella, estando separada legalmente de su cohabitación”, el artículo 9° precisa que “en el primer caso, están obligados todos los bienes de la mujer y los comunes o de la sociedad, a las resultas del tráfico. En el segundo lo están solamente los bienes propios de la mujer”<sup>258</sup>. Como se ha podido apreciar, la regulación de este cuerpo refleja la situación de dependencia de la mujer en el siglo XIX.

### **3.2.1.2. Legislación del siglo XX**

#### **a. Código de Procedimientos Civiles de 1911**

Este cuerpo normativo repite buena parte de los artículos que restringían los derechos de las mujeres. Así por ejemplo, tenemos el artículo 20° que establece “el marido ejerce en juicio la representación de la mujer”<sup>259</sup>, mientras el artículo 23° contempla que “la mujer necesita licencia del marido para comparecer en juicio y, en defecto de ella, autorización concedida por el juez”<sup>260</sup>.

Los textos de estos artículos contemplan una regulación discriminadora de la mujer, pues pretenden sostener el orden social sobre la base de la restricción de la mitad de la población. Esta restricción se sustentaba en los papeles naturales a cada sexo: mientras que el varón, representado por la fuerza, tenía la capacidad y la obligación de liderar a la familia, la mujer, expresada en su fragilidad, debía guardar virtud y decoro, extensible en su calidad de esposa al respeto de la voluntad del patriarca. Pensar en un orden distinto sería

---

<sup>258</sup> Ibidem; p. 13.

<sup>259</sup> ESCUDERO GONZALES, Luis. “Código de Procedimientos Civiles”. EDDILI editores. Lima, 1992, p. 13.

<sup>260</sup> Ibidem, p. 14.

resquebrajar la unidad de la familia, íntimamente vinculado a la esfera religiosa que, irremediablemente, condenaba no sólo moralmente a la mujer que se atreviera a pasar por alto aquella estructura, sino a excluirla y a marginarla dentro de su encasillamiento en categorías nada prestigiosas.

## **b. Constitución Política de 1920**

Sin embargo, esta situación de inequidad fue paulatinamente cambiando, conforme se aprecia en las Cartas Políticas de dicho siglo. Así, por ejemplo, la Constitución de 1920 reconoce en su artículo 53° que *“la enseñanza primaria es obligatoria en su grado elemental para los varones y las mujeres desde los seis años de edad”*, lo cual constituye un gran avance debido a que permite la inclusión de la mujer en los programas de educación, la cual le permitirá acceder a conocimientos que serán imprescindibles para su participación en la esfera laboral y política del país.

## **c. Constitución Política de 1933**

Tras el derrocamiento de Leguía, Sánchez Cerro convocó a una Asamblea Constituyente para la dación de un nuevo Texto. Cabe precisar que el anterior, de 1920, si bien consagró de manera expresa el primer derecho a favor de las mujeres (educación primaria para las niñas de seis años)<sup>261</sup>, no mostró mayor interés en la concesión de derechos civiles y políticos. Sin embargo, esta omisión sirvió de sustento para que en los debates de la Asamblea se pusiera en discusión la **concesión del voto universal a la mujer**. Cabe precisar que aunque no se discutió directamente el otorgamiento de la ciudadanía, la concesión de tal derecho implicaba el goce de tal atributo.

De las cuatro fuerzas políticas instaladas en el Congreso Constituyente, se definieron tres posiciones: “a) Partido Descentralista del Perú: Se declararon en contra del sufragio

---

<sup>261</sup> Artículo 53°.- **La enseñanza primaria es obligatoria en su grado elemental para los varones y las mujeres desde los seis años de edad.** La Nación garantiza su difusión gratuita. Habrá por lo menos una escuela de enseñanza primaria elemental para varones y otra para mujeres en cada capital de distrito, y una escuela de segundo grado para cada sexo en las capitales de provincia (el sombreado y subrayado es nuestro).

femenino. b) Partido Aprista: Defendieron el sufragio calificado o restringido. c) Unión Revolucionaria: Defendieron el voto irrestricto o amplio de la mujer. d) Partido Socialista del Perú e independientes: Distribuidos en las tres posiciones”<sup>262</sup>.

Como señalamos en el análisis histórico relativo a la concesión del voto femenino, existieron posiciones encontradas, las cuales determinaron la realización de una serie de debates de los cuales se concluyó por la alternativa de la **concesión del voto femenino restringido a los procesos electorales municipales**, respaldada por el congresista M. Arévalo, representante de San Martín por el Partido Unión Revolucionaria, la cual buscaba una conciliación “entre el principio y la realidad nacional”, proponiendo el voto municipal de la siguiente manera:

*“Tienen también derecho a sufragio, en elecciones municipales, las mujeres peruanas mayores de veinte años, las casadas o que lo hayan estado y las madres de familia, aún antes de esta edad, cuando sepan leer y escribir”*<sup>263</sup> (el sombreado y las cursivas son nuestras).

Esta propuesta fue sometida a voto y tras ser modificada, fue aprobada a través del siguiente texto:

**“Artículo 86°.- Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir; y en elecciones municipales, las mujeres peruanas mayores de edad, las casadas o las que lo hayan estado y las madres de familia, aunque no hayan llegado a su mayoría”**<sup>264</sup>.

Asimismo, **se negó la ciudadanía a la mujer**:

---

<sup>262</sup> VILLANUEVA CHÁVEZ, Victoria y HERRERA GARCÍA, Elizabeth. “50 años del voto de las mujeres”. Op. cit., pp. 11-12.

<sup>263</sup> Ibidem, p. 12.

<sup>264</sup> Loc. cit..

**“Artículo 84°.- Son ciudadanos los peruanos varones mayores de edad, los casados mayores de dieciocho años y los emancipados”**<sup>265</sup>.

Estos textos repitieron la línea de nuestras anteriores Constituciones que reconocían el “orden natural de las cosas”, en tanto consagraban a favor del varón la titularidad de los derechos civiles y políticos, mientras que restringían el acceso de las mujeres a ellos. Esto pues, demuestra que incluso la consecución de la igualdad formal distaba, más aún si es que tenemos en cuenta la ausencia de una cláusula que consagrara la igualdad entre todas las personas en nuestro país.

#### **d. Código Civil de 1936**

Contrario a lo que pudiese pensarse, la nefasta sombra del Código Civil de 1852 se extiende sobre el texto de 1936 como un recordatorio de la “naturaleza inferior” de la mujer que la relegaba a un deshonoroso plano de sujeción frente al varón.

En efecto, el artículo 5° establecía que “[l]os varones y las mujeres gozan de los mismos derechos civiles, salvo las restricciones establecidas respecto de las mujeres casadas”<sup>266</sup>. Esta disposición dispone un trato diferenciado entre varones y mujeres; sin embargo, no establece cuál es el parámetro de diferenciación ni el objetivo constitucional a ser alcanzado a través de esta.

##### **d.1. Obligación de llevar el apellido del esposo**

Este artículo es el sustento de otra serie de dispositivos del mismo Código que le dan un trato discriminatorio a la mujer. Por ejemplo, el artículo 171° establecía que “la mujer lleva el apellido del marido, agregado al suyo, y lo conserva mientras no contraiga nuevo matrimonio”<sup>267</sup>. La finalidad de este dispositivo es reforzar la idea de sujeción y obediencia

---

<sup>265</sup> BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES. “Constitución de 1933” Op. cit. (Disponible al 14 de abril de 2009).

<sup>266</sup> BALAREZO GAMARRA, Manuel. “Código civil peruano”. Editorial Juris. Lima, 1974, p. 21.

<sup>267</sup> Ibidem, p. 49.



que la mujer debía al esposo. Pensar de manera contraria en aquellos tiempos determinaría poner en duda el orden natural de la familia, a la luz de la prédica moral y religiosa que influía notablemente en las relaciones sociales<sup>268</sup>.

#### **d.2. Respeto al esposo y obligación de atender el hogar**

Asimismo, el artículo 24° establecía que “[l]a mujer casada tiene por domicilio el de su marido”<sup>269</sup>, lo que se traducía en la regulación del artículo 161° al señalar que “[e]l marido dirige la sociedad conyugal. La mujer debe al marido ayuda y consejo para la prosperidad común tiene el derecho y el deber de atender personalmente el hogar”<sup>270</sup>.

#### **d.3. Rol proveedor del esposo**

Dicho tratamiento, que a la luz del presente resulta evidentemente discriminador, redundaba en el rol que el legislador le da al esposo, ya que como se desprende del artículo 164°, “el marido está obligado a suministrar a la mujer, y en general a la familia, todo lo necesario para la vida, según sus facultades y situación”<sup>271</sup>.

#### **d.4. Patria potestad**

De igual manera, esta situación se hace extensiva al caso de la patria potestad, pues si bien se ejercía conjuntamente por ambos, el artículo 391° establecía que “[e]n caso de disenso prevalecerá la opinión del padre”<sup>272</sup>.

Estos artículos se centran en la conservación de la estructura del hogar conyugal, dirigido por el esposo, lo cual no es más que el resultado del asumido “orden natural de las cosas”,

---

<sup>268</sup> Aunque el Código Civil de 1984 ya no propugna la obligatoriedad, desgraciadamente persiste la costumbre de nombrar a una mujer tomando como referente el apellido del esposo y, lo que es peor, algunas mujeres aún se identifican con el apellido de su esposo, lo cual refleja que todavía nuestra sociedad toma esta práctica como natural.

<sup>269</sup> BALAREZO GAMARRA, Manuel. “Código civil peruano”. Op. cit., p. 24.

<sup>270</sup> Ibidem, p. 48.

<sup>271</sup> Loc. cit.

<sup>272</sup> Ibidem, p. 78.

que sitúa a la mujer en la esfera doméstica, mientras que al varón (dentro de una visión sobreprotectora e igualmente discriminadora) como el encargado de sostener económicamente a la mujer y a la familia.

Este orden familiar se extiende a las **relaciones públicas**, en tanto el artículo 168° consagra al “**marido (...) [como] el representante de la sociedad conyugal**”<sup>273</sup>, lo que, de acuerdo al artículo 188°<sup>274</sup>, lo autorizaba a administrar los bienes comunes y restringía a la mujer disponer libremente de ellos, conforme lo señalaba el artículo 190°<sup>275</sup>. Asimismo, la mujer veía restringida su realización como ser humano, al requerir la **autorización del esposo para el desarrollo de alguna actividad comercial o estudio**, conforme lo establecía el artículo 173°<sup>276</sup>.

#### **e. Ley N° 12391: Concesión del voto femenino en las elecciones generales**

A pesar de que la Constitución de 1933 había dispuesto que la mujer no era titular de la ciudadanía y restringido su derecho al voto universal, a partir de los años 1940 en el debate público se hacía cada vez más notoria la necesidad de hacer a la mujer titular de estos derechos. Ello se aprecia en el discurso de José Antonio Encinas Franco durante el debate del proyecto de la Ley de Elecciones Municipales, en el Senado de 1946. Aquí un fragmento:

“La Constitución, al declarar el voto obligatorio de los varones, se refiere al voto político, y el hecho de que hubiera concedido voto a la mujer en las elecciones municipales, sin ninguna taxativa, indica la necesidad de interpretar que ese voto sea obligatorio. Excluir la de esa obligación significaría mermarla, en cierta forma, el derecho que la Constitución le confiere”<sup>277</sup> (el subrayado es nuestro).

---

<sup>273</sup> Ibidem, p. 49.

<sup>274</sup> Ibidem, p. 52.

<sup>275</sup> Loc. cit.

<sup>276</sup> Ibidem, p. 49.

<sup>277</sup> VILLANUEVA CHÁVEZ, Victoria y HERRERA GARCÍA, Elizabeth. “50 años del voto de las mujeres”. Op. cit., p. 18.

Dentro de este contexto, el Poder Ejecutivo anunció en 1954 su intención de conceder el derecho al sufragio a las mujeres, lo que originó un debate al interior de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, del que nos permitimos reproducir el dictamen sustentado por los diputados Manuel Sánchez Palacios, Erasmo Roca, Roberto N. Paredes, J. Teodosio Salcedo, y J. Guillermo Zúa y Solórzano:

“No puede decirse que aquí ha prevalecido el criterio de la inferioridad intelectual del sexo femenino, porque con orgullo podemos afirmar los peruanos, que las mujeres que nos dieron el ser y nos formaron espiritualmente, para ser lo que somos, pueden colocarse en parangón, sin mengua alguna, con las mujeres de cualquier otro país. (...) En forma especial queremos referirnos con este motivo, a las maestras, a esas mujeres abnegadas y dignas que en gran mayoría, sin tener en cuenta la exigua retribución económica que se les asigna, van a las haciendas y aldeas de la costa, a los caseríos de la sierra, o a los puestos solitarios y aislados de la montaña, exponiendo su salud y su vida, para realizar la máxima obra de bien que se puede hacer a un país: la preparación de las futuras madres de familia y de los futuros ciudadanos”<sup>278</sup> (el subrayado es nuestro).

Estas brillantes intervenciones determinaron la adopción de la Ley N° 12391<sup>279</sup>, del 7 de septiembre de 1955, en cuyo artículo único se disponía la modificación de los artículos 84°, 86° y 88° de la Constitución Política, los cuales respondían al anhelo de la mujer de ejercer sus derechos civiles y políticos.

### **e.1. Otorgamiento de la ciudadanía a la mujer**

Así, el nuevo texto del artículo 84° disponía, “Son **ciudadanos** los peruanos varones y **mujeres mayores de edad**, los casados mayores de 18 años y los emancipados”.

La modificación del artículo 84° significó un paso trascendental en la construcción de la igualdad de la mujer ante la ley, debido a que a través de su consagración como ciudadana,

---

<sup>278</sup> CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. “Las primeras parlamentarias peruanas”. Op. cit., p. 4.

<sup>279</sup> Loc. cit.

pudo ejercer no sólo el derecho al sufragio, sino a ser objeto de elección, a ostentar cargos públicos y demás derechos que hasta la fecha habían sido privilegios exclusivos del varón.

## **e.2. Derecho al sufragio**

Por otro lado, y en consonancia con el nuevo texto, se modificó el artículo 86° de la Constitución, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la mujer, sin tener en cuenta que tal texto se contraponía al ejercicio de la ciudadanía, ya que el sufragio fue restringido a los analfabetos. La nueva redacción fue la siguiente: “Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir”.

Al ostentar la mujer la calidad de ciudadana, se veía habilitada por el nuevo texto del artículo 84° a postular a la Cámara de Diputados y de Senadores, dentro de los alcances del artículo 98° de la Constitución<sup>280</sup>. Convocadas las elecciones en 1956, los partidos políticos presentaron a mujeres dentro de sus listas parlamentarias, de las cuales las siguientes fueron elegidas como las primeras mujeres congresistas de nuestra historia: *Irene Silva Linares de Santolalla; en la Cámara de Diputados Manuela C. Billinghamurst López, Alicia Blanco Montesinos de Salinas, Lola Blanco Montesinos de La Rosa Sánchez, María Mercedes Colina Lozano de Gotuzzo, Matilde Pérez Palacio Carranza, Carlota Ramos de Santolaya, María Eleonora Silva y Silva, y Juana Ubilluz de Palacios*<sup>281</sup>.

El reconocimiento de la ciudadanía a favor de la mujer representa el primer paso significativo en la construcción de la igualdad ante la ley. Sin embargo, aún se encontraba lejana la implementación de medidas destinadas a la consecución de la igualdad material.

## **f. Constitución Política de 1979**

---

<sup>280</sup> Artículo 98°.- Para ser Diputado se requiere ser peruano de nacimiento, gozar del derecho de sufragio, haber cumplido veinticinco años de edad y ser natural del Departamento a que pertenece la respectiva circunscripción electoral o tener en él tres años de residencia continua.

Para ser Senador se requiere ser peruano de nacimiento, gozar del derecho de sufragio y haber cumplido treinta y cinco años de edad.

<sup>281</sup> CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. “Las primeras parlamentarias peruanas”. Op. cit., pp. 6-14.

La construcción de la **igualdad de la mujer ante la ley** se concreta con la Constitución de 1979. Debe precisarse que el 4 de octubre de 1979 se dictó el Decreto Ley N° 21949<sup>282</sup>, convocando a una Asamblea Constituyente, con el propósito de dar una nueva Carta Política que guiara los destinos de la República en su retorno a la democracia.

Producto de los debates de la Asamblea, se adoptó la Constitución Política de 1979. Esta Carta, nominalmente aventajaba a sus antecesoras, pues partía de un **Preámbulo** lleno de matices sociales, fundados en la **igualdad universal de todos los seres humanos**, reflejado en los siguientes fragmentos de la declaración:

*“Creyentes en la primacía de la persona humana y en que todos los hombres, iguales en dignidad, tienen derechos de validez universal, anteriores y superiores al Estado; (...) Decididos a promover la creación de una sociedad justa, libre y culta, sin explotados ni explotadores, **exenta de toda discriminación por razones de sexo**, raza, credo o condición social, donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía; una sociedad abierta a formas superiores de convivencia y apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución científica, tecnológica, económica y social que transforma el mundo”<sup>283</sup> (el sombreado y subrayado es nuestro).*

El Preámbulo, al resumir en sus breves líneas el espíritu de la Carta, nos entrega aquello que hemos buscado a lo largo de las Constituciones de nuestra vida republicana: la igualdad de la mujer ante la ley. Piénsese pues, en una Constitución que tomando como referente su Preámbulo, parte del reconocimiento de la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado<sup>284</sup>, lo que a su vez habilita el derecho de ejercer esta cláusula frente a cualquier arbitrariedad y la obligación de someterse a ella en pos de alcanzar tan noble finalidad.

---

<sup>282</sup> TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Sala Primera. Expediente N° 03308-2005-HC/TC.

<sup>283</sup> BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES... Op. cit; <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01361608624573615977680/index.htm>; 9 de julio de 2007.

<sup>284</sup> Artículo 1.- La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla.

Teniendo como soporte la declaración del Preámbulo y la consagración del ser humano como fin del Estado y de la sociedad, la Carta reconoce expresamente en su artículo 2º.2 la igualdad ante la ley, formulada posteriormente en la jurisprudencia comparada como “un límite puesto al ejercicio del poder legislativo”<sup>285</sup>, al equiparar a todas las personas sin factor alguno de discriminación que impida el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales.

El artículo en cuestión expresa el siguiente texto:

*“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:*

*2. A la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, opinión e idioma. El varón y la mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades. La ley reconoce a la mujer derechos no menores que al varón.”* (el sombreado y subrayado es nuestro)

El reconocimiento de la igualdad de la mujer en la Carta de 1979 es importante por las siguientes razones:

### **f.1. Reconoce la igualdad entre todos los seres humanos ante la ley**

Como hemos visto, el reconocimiento de la igualdad formal de la mujer ha sido producto de un tránsito accidentado que, tras el reconocimiento de la ciudadanía, tomó a 1979 como la oportunidad para reivindicar la igualdad de las mujeres en el mismo concepto que la ley había trazado a favor de los varones.

### **f.2. El varón y la mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades**

Determinándose la igualdad de las personas ante la ley, cada ser humano representaba a la vez la condición de titular de derechos y obligado de responsabilidades. Así, todo ser humano se haya situado en un mismo plano dentro del cual su condición como varón o

---

<sup>285</sup> STC Español Nº 49/182. 14 de julio de 1982. FJ. 2.

mujer resultaba indiferente para el ordenamiento jurídico al momento de establecer exigencias o preferencias en torno a su identidad.

### **f.3. La ley reconoce a la mujer derechos no menores que al varón**

La igualdad de todos los seres humanos ante la ley determina que todos somos igualmente titulares de derechos, pasando por alto la identificación del sexo para determinar si se es titular del derecho.

Sin embargo, dicho mandato encuentra su antecedente en el Decreto Ley N° 21208<sup>286</sup>, expedido en 1975, el cual había derogado el literal d) del artículo 15° del Decreto Ley N° 14222 que preveía la determinación de remuneraciones inferiores a las mujeres por razón de su rendimiento, medida adoptada por el Gobierno para *“eliminar todo trato discriminatorio que limite las oportunidades o afecte los derechos y dignidad de la mujer”*.

### **f.4. Construcción de la igualdad de la mujer ante la ley**

La construcción de la igualdad de la mujer ante la ley se vio reforzada a través del resto de dispositivos de aquella Constitución. Como ejemplo, podemos citar el artículo 5° que, a partir de la protección del matrimonio y de la familia, sirvió de sustento al artículo 7° al reconocer que “[l]a madre tiene derecho a la protección del Estado y a su asistencia en caso de desamparo”, redacción que es producto de la constatación en nuestra realidad de un alto número de madres en estado de indefensión.

Asimismo, la proyección de la igualdad de la mujer ante la ley se reflejó en la consagración del acceso igualitario a los servicios de salud (artículo 16°), a la educación y a la cultura como prestaciones para el desarrollo del ser humano (artículo 21°), el derecho de ambos padres de participar en el proceso educativo de sus hijos (artículo 22°) y del acceso a las garantías constitucionales (artículo 295°).

---

<sup>286</sup> DERECHOS, INVESTIGACIÓN Y ABOGACÍA EN SALUD, SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN (DIASSERE). “The World’s Women 2000: Trends and Statistics”. Disponible en: <http://www.diassere.org.pe/nuevo/genero7.htm> (Revisado el 19 de abril de 2009).

En el ámbito laboral, se estableció la obligación estatal de asegurar a todos los habitantes la oportunidad de un puesto de trabajo (artículo 42°), se aseguró el goce del derecho de todo trabajador y trabajadora a una remuneración igual por el trabajo idéntico ante el mismo empleador (artículo 43°)<sup>287</sup>, la obligación legal de determinar las condiciones de trabajo de menores y mujeres (artículo 44°) y de las medidas que adoptarán las leyes para la protección a la madre trabajadora (artículo 45°).

En líneas generales, la importancia de la Constitución de 1979 reside en la consagración de la igualdad de todos los seres humanos ante la ley, formulación que desde luego se orientó en la consecución de la igualdad a favor de la mujer.

#### **g. Código Civil de 1984**

A través del Decreto Legislativo N° 295 se promulgó el nuevo Código Civil, que entró en vigencia a partir del 14 de noviembre de 1984.

##### **g.1. Capacidad de goce y ejercicio de los derechos civiles a favor de la mujer**

La proyección de la reciente Constitución –en cuanto a la igualdad ante la ley, consagrada en su Preámbulo- se hace presente en ciertos artículos del Código de 1984. Esto se evidencia en su artículo 4° al establecer la **igualdad de capacidad de goce y de ejercicio de los derechos civiles de varones y mujeres**, situación que supera al artículo 5 del Código de 1936 que restringía el goce de tales derechos a las restricciones que su texto pudiese precisar. Al consagrar la igualdad entre varón y mujer, el Código se adecuó al espíritu de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación

---

<sup>287</sup> Artículo 43°.- “El trabajador tiene derecho a una remuneración justa que procure para él y su familia el bienestar material y el desarrollo espiritual. El trabajador, varón o mujer tiene derecho a igual remuneración por igual trabajo prestado en idénticas condiciones al mismo empleador”.



contra la Mujer, firmado por nuestro país el 23 de julio de 1981 y ratificado el 13 de septiembre del año siguiente<sup>288</sup>.

## **g.2. Igualdad entre los cónyuges**

De la misma manera, la igualdad ante la ley se traduce en el artículo 234° que establece la igualdad entre los cónyuges.

Sin embargo, dicha regulación no es tomada como necesaria por todos. Así, por ejemplo tenemos la opinión de Planiol y Ripert, citados por Echecopar, al considerar que la igualdad entre esposos podría generar problemas de anarquía doméstica, bajo el razonamiento que “por muy perfecta que sea su unión, pueden subsistir diferencias de opinión y conviene que una de ellas tenga la preponderancia. El error que ha determinado la reacción feminista ha sido considerar esta autoridad como una prerrogativa ejercida por el marido en su propio interés, cuando las razones que la justifican hacen de ella una función que el marido debe cumplir en bien de la familia”<sup>289</sup>.

Esta opinión nos demuestra el arraigo de patrones que, sobre la base del conocimiento, pretenden minimizar el reclamo de las mujeres para la consecución de su igualdad plena. La opinión de los autores se sustenta en que la queja de la mujer desconoce la intención del esposo de cumplir con sus deberes con la familia; sin embargo, no toman en consideración que muchas mujeres aún se encuentran sometidas a la voluntad del esposo, por causa de la propia ignorancia o falta de estima en sí mismas.

## **g.3. El “derecho” de llevar el apellido del esposo**

El Código consagra en su artículo 24° una situación ciertamente polémica: el “derecho” de la mujer de llevar el apellido del esposo. Si bien este artículo dista de la obligación de llevar

---

<sup>288</sup> GUTIERREZ CAMACHO, Walter (Coordinador). “Código Civil Comentado”. Tomo I. Gaceta Jurídica. Lima, 2003, p. 118.

<sup>289</sup> *Ibidem*. Tomo II, p. 31.

el apellido del esposo (Código Civil de 1936), este “derecho” es cuestionable en tanto **atenta contra la individualidad de la mujer**.

En efecto, relacionar a la mujer sobre la base de la relación –que por más que genere consecuencias jurídicas- al otro miembro de esta, significa **aceptar y perpetuar la sujeción de la mujer como pertenencia del hombre, como ente sin voluntad, sin razón, al considerarla “parte de”**.

Ahora bien, si se tratara de un derecho, **este debió hacerse extensivo al caso de los varones**, a efectos de que pudieran acceder al uso y al reconocimiento legal de su nueva identidad. ¿Qué hubiese sucedido de implementarse esta propuesta? Evidentemente, ella no habría calado en la voluntad popular que escandalizada la habría rechazado, bien “porque iría contra nuestras costumbres” o porque, disfrazada bajo cualquier argumentación, resquebrajaría la noción de familia como la conocemos.

#### **g.4. Restricciones sobre el matrimonio de viudas y divorciadas**

El artículo 243°.3 del Código Civil limita a las viudas y a las divorciadas casarse dentro de los trescientos días de fallecido el cónyuge o de producido el divorcio, pues como este obedece a “la finalidad de evitar la *perturbatio sarenguinis* o *turbado sanguinis*, la que conduce a la incertidumbre sobre la paternidad de la persona que pueda nacer (...). La finalidad de esta prohibición temporal busca evitar una posible confusión de la filiación de los hijos que vayan a nacer del segundo matrimonio de una viuda celebrado inmediatamente después de su viudez [y de la nuevamente casada, después de su divorcio]”<sup>290</sup>.

Estas restricciones son absurdas debido a que la presunción de paternidad del antiguo cónyuge o del esposo fallecido fácilmente son desvirtuadas a través de un examen de ADN. Vemos, pues, el razonamiento simplista del legislador al condicionar la libre realización de

---

<sup>290</sup> Ibidem, p. 71.

la mujer a una extinta relación que mantuvo con un varón, lo cual deslegitima todo tipo de fundamento en pro de la familia y de la identidad de quien habrá de nacer.

#### **g.5. Restricciones para que la mujer declare que la paternidad de su hijo pertenece a un hombre que no es su esposo**

El artículo 396° del Código Civil limita el derecho de la mujer a reconocer como padre de su hijo a varón distinto a su esposo, al establecer que “[e]l hijo de mujer casada no puede ser reconocido sino después de que el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable”. De igual manera, el artículo 404° secunda esta postura al establecer que “[s]i la madre estaba casada en la época de la concepción, sólo puede admitirse la acción en caso que el marido hubiera contestado su paternidad y obtenido sentencia favorable”.

Estas cláusulas obedecen a la sobreprotección de la familia como célula básica de la sociedad, pasando por alto la complejidad de la vida familiar. A través de esta cláusula el legislador discrimina a la mujer pues limita la autonomía de su voluntad a la expresión del esposo, quien por resguardar su mal entendido “honor”, puede negarse a declarar que no es el padre. Sin embargo, ello no garantiza que la identidad subjetiva del menor se vea satisfecha, pues el padre impuesto por esta absurda cláusula, simplemente lo es en un documento, mas no así en los actos a través de los que se construye la relación paterno filial.

Por otro lado, *“la situación de las parejas no debe ponerse al mismo nivel que el matrimonio debidamente contraído, no debe ni puede perjudicar el derecho de toda persona a conocer a sus padres. Distinto es, pues, la fuente y el contenido del vínculo jurídico familia que se deriva del matrimonio del que nace de la filiación”*<sup>291</sup>.

En efecto, condenar a una mujer o al padre biológico —e incluso al menor— a la voluntad del “ofendido” de negarlo, es a la luz de nuestros tiempos, absurdo, pues se pretende sustentar dicha opción legislativa sobre la base de la unión de la familia y demás razones de índole

---

<sup>291</sup> Ibidem; p. 808.

estrictamente moral que, en buena cuenta, conciernen exclusivamente a los actores involucrados en ella.

Así pues, vemos que aún nuestra legislación civil guarda algunos rezagos de sus antecesoras. Se requiere una inmediata reforma de estos artículos, pues no se puede someter a la mujer a un trato diferenciado que, aunque pretenda sustentarse en la defensa de la familia y del orden social, termina por restringir el pleno ejercicio de sus derechos y libertades.

#### **h. Constitución Política de 1993**

Por su parte la Constitución de 1993, repitió en su artículo 2º inciso 1 el reconocimiento de la cláusula de igualdad ante la ley de todo ser humano, de lo que se desprende que la igualdad de la mujer se encuentra reconocida en dicha Carta Política.

Sin perjuicio del desarrollo que se expondrá en su oportunidad, la igualdad constituye un concepto complejo debido a que no se restringe a la igualdad jurídica o formal, sino que trasciende esta a efectos de expresarse en la igualdad material o de hecho.

La Constitución Política de 1993 reconoce la igualdad ante la ley, cláusula que debe ser interpretada desde la perspectiva de que todos los seres humanos somos igualmente titulares de derechos humanos, lo cual revela el reconocimiento implícito de esta Carta de la titularidad de derechos a favor de la mujer.

#### **i. Ley de protección frente a la violencia familiar.**

A través de la Ley N° 26260 se aprobó la Ley de protección frente a la violencia familiar, la cual fue complementada por el Decreto Supremo N° 006-97-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260. Cabe precisar que dicha ley fue modificada por la Ley N° 26763. Cabe precisar que

Entre los aspectos más importantes de la Ley y de su TUO encontramos los siguientes:

#### **a. Definición de violencia familiar**

Conforme señala Cerna Morillas<sup>292</sup>, dichos cuerpos normativos contemplan a la violencia familiar como el maltrato psicológico (daños corporales), psicológico (daños psíquicos), sin lesión (afectación sin evidencia de daño: omisión de asistencia familiar), amenaza grave y/o reiterada (expresiones de que se causará un mal), coacción grave y/o reiterada (obligar a un hacer u omitir en contra de la voluntad) y violencia sexual (acto que atenta contra la libertad sexual).

#### **b. Sujetos comprendidos en la violencia familiar**

Estas clases de maltrato comprende como agresores y víctimas a los cónyuges y ex cónyuges, convivientes y ex convivientes, ascendientes y descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, personas que habitan en el mismo hogar, pero no por relaciones contractuales o laborales y personas que hayan procreado hijos en común, así no convivan al producirse la violencia<sup>293</sup>.

#### **c. Denuncia por violencia familiar**

Cerna Morillas señala que las víctimas o terceros pueden interponer denuncia por violencia familiar ante cualquier dependencia policial, como ante la Fiscalía Provincial de Familia o ante el Juzgado Mixto o de Familia de turno. La autora precisa que no es posible la conciliación en conflictos originados por violencia familiar<sup>294</sup>.

#### **d. Trámite de la denuncia por violencia familiar**

---

<sup>292</sup> CERNA MORILLAS, Dora. “Protección frente a la violencia familiar”. Diapositivas de la Defensoría del Pueblo. Lima, 2008, p. 2.

<sup>293</sup> *Ibidem*, p. 3.

<sup>294</sup> *Ibidem*, p. 4.

De presentarse la denuncia **ante la Policía**, la víctima debe pasar por reconocimiento médico legal, siendo citadas las partes para rendir su manifestación. Realizados estos actos, se deberá remitir el informe policial a la Fiscalía Provincial de Familia en el plazo de quince días. En caso que la lesión constituya falta, se remitirá el informe al Juzgado de Paz Letrado; de constituir delito, al Juzgado Penal<sup>295</sup>.

**Ante la Fiscalía Provincial de Familia**, se abre la investigación, debiéndose realizar el reconocimiento médico legal, citándose a las partes para su declaración. En caso de interponerse demanda por violencia familiar, esta se tramitará **ante el Juzgado Mixto o de Familia**, cuyos titulares expedirán auto admisorio en caso de cumplir el escrito de la demanda con los requisitos establecidos en los artículos 424°, 425° y 427° del Código Procesal Civil. De suceder ello, se iniciará el proceso, programándose fecha para la audiencia, pudiéndose dictar medidas de protección a favor de la víctima<sup>296</sup>.

#### **e. Medidas de protección**

Las medidas de protección pueden ser dictadas por el fiscal o por el juez, siendo estas relativas al retiro del agresor del domicilio, impedimento de acoso a la víctima, suspensión temporal de visitas, inventario sobre sus bienes u otro tipo de medidas de protección inmediata que garanticen la integridad de la víctima<sup>297</sup>.

#### **j. Ley de igualdad de oportunidades (Ley N° 28983)**

El 16 de marzo de 2006 se publicó la Ley N° 28983, “Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”<sup>298</sup>. Esta ley se plantea la consecución de la **igualdad material** de varones y mujeres a través del establecimiento de un marco normativo, institucional y de políticas dirigidas a garantizar el libre desarrollo digno sin discriminación.

---

<sup>295</sup> Ibidem, p. 5.

<sup>296</sup> Ibidem, p. 6.

<sup>297</sup> Ibidem, p. 7.

<sup>298</sup> EL PERUANO. “Normas Legales” (Sección Poder Legislativo), p. 341606-341608.

Su artículo 2° define a la discriminación como “cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad entre la mujer y el hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política del Perú y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Peruana”.

Dicho artículo no restringe su concepto a una conducta que simplemente se ciña a la diferenciación, sino que al considerar a la exclusión y restricción hace énfasis en conductas que apartan a los seres humanos del goce pleno de sus derechos; actitudes que serán ilegítimas en tanto su finalidad calce en aquella categoría, al pretender socavar las libertades y derechos inherentes a la persona, por considerar que su pertenencia a un sexo los haga “impropios” de tales atributos.

Más allá de las políticas específicas planteadas por esta ley, cabe destacar que **su planteamiento se sostiene en tres principios rectores: igualdad, libertad y dignidad**. Si bien la igualdad es el referente para identificar la discriminación, no menos importantes son los demás. En efecto, la libertad es un principio de conocida importancia, pues dota al ser humano de un atributo que le proporciona la facultad de realizar su particular plan de vida, objetivo que se enlaza con la dignidad, en tanto este principio sostiene su esencia misma como ser humano, al dotarlo de aquello tan inherente a su naturaleza que responde a la finalidad de la proscripción de todo trato discriminatorio: el goce pleno de sus derechos y libertades.

**j. Decreto Supremo N° 004-2008-MIMDES (Precisan que los estatutos de todas las formas de organización jurídica sin fines de lucro deben adecuarse a las normas de la Constitución Política y de la Ley relativa a la igualdad jurídica de la mujer y el varón)**

Publicado en abril de 2009, este Decreto establece que las organizaciones jurídicas sin fines de lucro deberán de adecuar sus estatutos a la tutela de la cláusula de igualdad entre varones

y mujeres. Tal mandato ha originado un sinfín de opiniones encontradas: por un lado, quienes consideran que tal dispositivo no es más que la puesta en marcha de la cláusula de igualdad, constituyendo un logro significativo para la consecución de la igualdad de hecho, expresada a través de la igualdad de trato y de oportunidades a favor de varones y de mujeres. Por otro lado, se encuentran los detractores del Decreto, quienes circunscriben su crítica a que tal dispositivo limita la libertad de asociación al obligar a las organizaciones jurídicas sin fines de lucro a modificar sus estatutos al tenor del Decreto en cuestión.

Sobre la base de lo dicho, ¿estamos frente a un caso de colisión entre derechos? Hay quienes consideran que sí, pues cuando el artículo 1º del Decreto Supremo N° 004-2008-MIMDES establece que las organizaciones jurídicas sin fines de lucro deben de adecuar sus estatutos a la defensa de la igualdad jurídica entre el varón y la mujer, se está limitando el ejercicio del derecho de asociación, al condicionar su propia organización en pos de tutelar la igualdad entre varones y mujeres. Tal razonamiento conlleva a pensar en un conflicto entre la igualdad y la asociación, en el que la primera prevalece sobre la segunda. Nada más falso.

Si partimos de la afirmación de que la igualdad y la asociación son derechos fundamentales, podemos concatenar una serie de ideas que serán útiles para demostrar la inexistencia del conflicto. En esa línea, podemos señalar que un derecho fundamental no puede primar sobre otro de similar naturaleza debido a que al ser inherentes al ser humano, constituyen atributos connaturales a su esencia y, por lo tanto, todos los derechos fundamentales en su conjunto definen a la persona, por lo que mal puede hablarse de la primacía de uno sobre otro, debido a que todos son importantes en la medida que inciden sobre una unidad: el ser humano.

Así, por ejemplo, tenemos que la libertad es tan importante como la vida, en atención a que la imposición de una arbitrariedad sobre la primera incide sobre la integridad física y psíquica del afectado, con lo cual se pone en riesgo la salud corporal y emocional del agraviado, situación que conlleva a la amenaza de la vida. Vemos, pues, que la situación en la que originalmente se colocaban dos derechos desembocó en el análisis de dos derechos



fundamentales más; ello se debió a que la afectación de un derecho origina la afectación de los demás, panorama que pone en evidencia la complementariedad y concatenación entre los derechos fundamentales, debido a que finalmente inciden sobre el ser humano.

En cuanto al Decreto analizado, debemos de señalar que no existe primacía de la igualdad, ni afectación de la asociación, debido a que el dispositivo en cuestión no hace más que expresar las consecuencias mismas del principio de supremacía de la Constitución, es decir, que los principios y derechos contenidos en ella se expanden y prevalecen sobre todo ámbito. En otras palabras, este Decreto es redundante, porque de acuerdo a tal principio, “una vez expresada la voluntad del Poder Constituyente con la creación de la Constitución del Estado, en el orden formal y sustantivo presidido por ella no existen soberanos, poderes absolutos o autarquías”<sup>299</sup>, precepto que, como es evidente, se extiende sobre todo ámbito.

En tal sentido, este Decreto tan solo es un recordatorio de la cláusula de igualdad que, de ningún modo, afecta el derecho de asociación, pues no impone requisitos que invadan el libre ejercicio de este derecho, sino que tan solo recuerda que su ejercicio no puede ser desproporcionado, de tal manera que vulnere la igualdad entre las mujeres y los varones.

Sin perjuicio de lo señalado, resulta curioso todo el revuelo generado en torno a este tema, ya que se lo asumía exclusivamente a partir del ingreso de mujeres como socias de clubes que reservaban solo la afiliación para varones y, por otro lado, la indignación expresada en ciertos sectores por la presunta invasión en la potestad de las asociaciones de reglamentar quiénes podían o no conformar parte de ellas. Como hemos visto, esta discusión es absurda, pues con el afán de generar debate se ha analizado este asunto desde la forma, mas no desde el fondo, que es la supremacía de la Constitución y, por ende, la expansión de los principios y derechos consagrados en ella.

### **3.2.2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LA MUJER SUSCRITOS POR PERÚ**

---

<sup>299</sup> Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 05854-2005-AA/TC, F.J. 3.

La interpretación sistemática del artículo 55° y de la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución determina el rango constitucional de los tratados de derechos humanos y su empleo en la interpretación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha ahondado, reinterpretando tales dispositivos al ampliar su campo de acción a la jurisprudencia emanada de órganos internacionales, bajo la consideración de que “el contenido constitucionalmente protegido de los derechos reconocidos por la ley fundamental no solo ha de extraerse a partir de la disposición constitucional que lo reconoce; de la interpretación de esta disposición con otras disposiciones constitucionales con las cuales pueda estar relacionada (principio de unidad de la Constitución), sino también bajo los alcances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”<sup>300</sup>.

Al respecto, agrega que “tras el criterio de interpretación de los derechos fundamentales conforme con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, [...] este [...] no se restringe solo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado peruano sea parte (IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución), sino que comprende también a la jurisprudencia que sobre esos instrumentos internacionales se pueda haber expedido por los órganos de protección de los derechos humanos (artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional)”<sup>301</sup>.

En lo que concierne a los derechos de la mujer, nuestro país ha ratificado determinados instrumentos de suma importancia. Por tal motivo, nos permitimos realizar un análisis de dichos documentos, clasificándolos en instrumentos de alcance general (es decir, documentos que si bien no tienen por objeto la defensa de los derechos de la mujer, de su contenido se desprende el propósito de la defensa de la igualdad y de la proscripción de la discriminación) y en instrumentos de alcance particular (es decir, documentos dirigidos a tutelar expresamente los derechos de la mujer).

---

<sup>300</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 04587-2004-AA, fundamento jurídico N° 44.

<sup>301</sup> Loc. cit.

### **3.2.2.1. Instrumentos de alcance general**

Entre los instrumentos de derechos humanos de alcance general que protegen a la mujer encontramos los siguientes:

#### **a. Declaración Universal de los Derechos Humanos**

Aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esta Declaración inicia su desarrollo con el reconocimiento en su Preámbulo de la igualdad de todos los seres humanos al reconocer que los derechos “tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

Posteriormente, el Preámbulo reconoce la igualdad entre el varón y la mujer al expresar que “considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”, lo cual es abordado posteriormente a través de los artículos 1° y 7° que reconocen la igualdad de las personas como titulares de derechos y la igualdad ante la ley, proscribiéndose todo tipo de discriminación, respectivamente.

Asimismo, el artículo 16° reconoce el derecho de las mujeres de formar una familia, decisión que estará sustentada en el consentimiento de los contrayentes. La igualdad trasciende el ámbito doméstico y repercute en el derecho de la mujer de participar en el gobierno de su país en igualdad de condiciones que el varón, ya sea a través del ejercicio de un cargo público o derivado de su derecho al voto (artículo 21°), como también a acceder al trabajo y a no ser sometido a discriminación en el ámbito remunerativo (artículo 23°). Para ello jugará un especial rol la educación, ya que se reconoce su alcance universal, siendo, por lo tanto, beneficiar la mujer (artículo 26°).

## **b. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966, dicho Pacto entró en vigor el 23 de marzo de 1976, la cual fue ratificada por el Estado peruano el 28 de abril de 1978.

Dicho Pacto contiene el reconocimiento de determinadas cláusulas de igualdad que son aplicables a la mujer, como son el caso de su artículo 3°, el cual establece que “los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el Pacto”. De igual manera, el artículo 23° reconoce los derechos de la mujer a contraer matrimonio de manera voluntaria y a la igualdad de derechos y de responsabilidades dentro del matrimonio, como en la disolución del mismo.

Cabe señalar que el Pacto reconoce, como lo hiciera la Declaración Universal de Derechos Humanos, la igualdad de todas las personas ante la ley en cuanto al sufragio y al acceso a cargos públicos. Sin embargo, uno de los mayores aportes lo encontramos en su artículo 26° al establecer que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de (...) sexo”.

## **c. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales**

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966, dicho Pacto entró en vigor el 3 de enero de 1976, la cual fue ratificada por el Estado peruano el 28 de abril de 1978.

Si bien el Preámbulo de este instrumento reconoce la igualdad entre todos los seres humanos, su artículo 3° expresa que “los Estados Partes (...) se comprometen a asegurar a

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el (...) Pacto”. Asimismo, su artículo 7° asegura la igualdad de oportunidades, de condiciones de trabajo y de salario para la mujer, al establecer el derecho a “un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual”.

#### **d. Convención Interamericana sobre Derechos Humanos**

Suscrita el 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica y ratificada por nuestro país el 28 de julio de 1978, su artículo 17° reconoce el derecho de la mujer a contraer nupcias como resultado de su libre manifestación de voluntad e insta a los Estados Partes a asegurar la igualdad de derechos y de obligaciones entre cónyuges, al establecer que “los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo”. De igual manera, su artículo 23° reconoce el derecho de toda persona de acceder, en igualdad de condiciones, a los cargos públicos y al sufragio.

Sin embargo, la cláusula de mayor protección a la mujer que encontramos en este cuerpo normativo supranacional es el contenido en su artículo 24° al enunciar que “todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

#### **3.2.2.2. Instrumentos de alcance particular**

Sin perjuicio de los mencionados instrumentos de derechos humanos, a continuación analizaremos aquellos que se dirigen expresa y específicamente a la defensa de los derechos de la mujer.

##### **a. Convención sobre los derechos políticos de la mujer**

Emitida con motivo de la Resolución N° 640 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del 20 de diciembre de 1952, este instrumento entró en vigor a partir del 7 de julio de 1954, de conformidad con el artículo VI, siendo aprobado y ratificado por el Perú a través del Decreto Ley N° 21177, publicado el 11 de junio de 1975 en el Diario Oficial El Peruano.

Este instrumento se sustenta en el reconocimiento del principio de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, contenido en la Carta de Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como en el derecho de todo ser humano de participar en el gobierno de su país (ya sea a través del ejercicio de un cargo público derivado de elección popular o a través del derecho a voto), lo cual genera la necesidad de que cada ordenamiento nacional reconozca la igualdad de oportunidades de ingreso al servicio público de la nación.

Este cuerpo normativo está compuesto por once artículos, los cuales parten del parámetro de igualdad de condiciones entre el varón y la mujer, el cual se evidenciará en cada uno de sus artículos. Así, por ejemplo, se reconoce el derecho de la mujer a participar en los procesos electorales en igualdad de condiciones (artículo 1°), a ser elegidas para el ejercicio de los cargos públicos (artículo 2°) y a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional (artículo 3°). Los artículos siguientes hacen referencia al procedimiento que deberán realizar los Estados a efectos de hacer suyos el contenido de los dispositivos contemplados en la mencionada Convención.

#### **b. Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer**

Esta Convención fue adoptada por la Organización de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigencia a partir del 3 de septiembre de 1981. Sin embargo, cabe anotar que dicho instrumento fue ratificado por nuestro país el 3 de septiembre de 1982.

Cabe señalar que la Convención constituye un instrumento de suma importancia para la tutela efectiva de los derechos de la mujer, pues el espíritu de dicho documento se ampara en los objetivos de las Naciones Unidas al reafirmar conceptos de suma importancia como son el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales, la dignidad de la mujer como persona humana y la igualdad de derechos entre las mujeres y varones hombres. Sin embargo, los aspectos más trascendentes de esta Convención es que no sólo define el concepto de igualdad, sino que establece los mecanismos a través de los cuales esta se materializa, excediendo el carácter de una declaración internacional de derechos para la mujer, ya que se erige en un programa de acción para que los Estados Partes garanticen la plena tutela y eficacia de estos atributos connaturales de la mujer.

Esta Convención se encuentra compuesta por el preámbulo y 30 artículos, los cuales son distribuidos en seis secciones; la primera de ella relativa al estudio de la discriminación contra la mujer (artículo 1°), medidas de política (artículo 2°), garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales (artículo 3°), medidas especiales (artículo 4°), funciones estereotipadas y prejuicios (artículo 5°) y prostitución (artículo 6°). Por su parte, la segunda sección de este instrumento abarca la participación de la mujer en la vida política y pública (artículo 7°), su representación (artículo 8°) y su derecho a la nacionalidad (artículo 9°). De igual manera, la tercera sección de este cuerpo normativo abarca los derechos a la educación (artículo 10), empleo (artículo 11°), salud (artículo 12°), prestaciones económicas y sociales (artículo 13°) y la mujer rural (artículo 14°).

La cuarta sección de la Convención contiene un punto de suma trascendencia como es la igualdad de la mujer ante la ley (artículo 15°) y su estatus dentro del matrimonio y familia (artículo 16°). Por su parte, la quinta sección de este instrumento prevé las funciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (artículo 17°), la remisión de informes nacionales (artículo 18°), el contenido del Reglamento de la Convención (artículo 19°), la realización de las reuniones del Comité (artículo 20), los informes que emita el Comité (artículo 21°) y el papel de los organismos especializados en la defensa de los derechos de la mujer (artículo 22°). La Convención concluye con la sexta sección, la cual establece sus efectos sobre otros tratados (artículo 23), el compromiso de los Estados

Partes en la defensa de los derechos de la mujer (artículo 24°) y la administración de la Convención (artículos 25°-30°).

### **c. Protocolo Facultativo a la Convención para eliminar todas las formas de discriminación de la mujer**

A través de la Resolución A/54/4 adoptada por la Asamblea General de la ONU, del 6 de octubre de 1999, se aprobó el Protocolo Facultativo a la Convención para eliminar todas las formas de discriminación de la mujer, el cual fue ratificado por nuestro país el 9 de abril de 2001.

Dicho Protocolo guarda relación con la Convención, lo cual se observa en el contenido de su Preámbulo, al señalar que “observando que en la Carta de las Naciones Unidas se reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, (...) y reafirmando su decisión de asegurar a la mujer el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales y de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades”, se adopta dicho Protocolo.

Lo importante del Protocolo es que, a través de su ratificación, el Estado peruano reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para evaluar las denuncias de vulneración de los derechos de la mujer cometidos por agentes estatales (artículo 1°).

Dicho parámetro de actuación permite establecer el mecanismo a través del cual se formularán las denuncias, ya sea por pedido expreso de la agraviada o de instituciones de la sociedad civil, quienes formularán sus alegatos, debiendo evaluar el Comité la admisión de esta; una vez que ello se produzca, correrá traslado al Estado denunciado para que formule sus descargos, con lo cual el Comité evaluará los argumentos de ambas partes, formulando sus observaciones y recomendaciones al Estado parte, el cual tendrá un término de 6 meses para absolverlas, debiendo informar, asimismo, sobre la ejecución de las medidas



destinadas a superar la situación de discriminación o de atentado en contra de los derechos de las mujeres originadas por agentes estatales.

**d. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem do Pará”)**

Adoptada el 9 de junio de 1994 y ratificada por el Estado peruano el 4 de junio de 1996, la Convención de Belem do Pará constituye un instrumento de suma importancia para la tutela de los derechos de la mujer a nivel regional debido a que, como se desprende de su Preámbulo, rechaza toda manifestación de violencia en contra de la mujer, ya que los suscribientes llegan al acuerdo “de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, y (...) de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas”.

Lo interesante de esta Convención es que parte de la definición y clasificación de violencia infringida en contra de la mujer (artículos 1º y 2º), para luego enumerar una lista de derechos de la cual es titular, tales como el derecho a que se respete su vida; el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; el derecho a la libertad y a la seguridad personales; el derecho a no ser sometida a torturas; el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; el derecho a libertad de asociación; el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones (artículo 4º).

Asimismo, el Capítulo III de la Convención describe las obligaciones de los Estados a efectos de instaurar políticas eficaces de tutela de los derechos de la mujer, con el objeto de prevenir y de sancionar todo tipo de manifestación de violencia en contra de este grupo poblacional, conforme se desprende de sus artículos 7° al 9°. Igualmente, el Capítulo IV describe los mecanismos supranacionales de alcance regional de protección de los derechos de la mujer, los cuales se concretan a través de la recurrencia a la Comisión Interamericana de los Derechos de la Mujer, tal como describen los artículos 10° al 12°.

### **3.3. MARCO JURISPRUDENCIAL**

La jurisprudencia nacional ha obviado pronunciarse expresamente sobre la discriminación contra la mujer, tanto en su calidad de fenómeno social como respecto a sus consecuencias jurídicas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha establecido conceptos relativos a la igualdad, diferenciación, discriminación y acciones positivas que son útiles para construir conceptos jurídicos en torno a este fenómeno.

#### **a. Concepto de igualdad**

*“[L]a cláusula de igualdad, del inciso 2) del artículo 2 de la Constitución, no contiene un mandato de trato igual a todos, no importando las circunstancias en la que se encuentren, sino una exigencia de trato igualitario si se encuentra en una situación análoga, y de trato desigualitario si no se está en igualdad de condiciones”<sup>302</sup>.*

#### **Comentario**

Como hemos expuesto, son distintas las acepciones que se pueden otorgar a este concepto. Sin embargo, el colegiado excluye las construcciones sobre casos concretos y señala los parámetros del trato igualitario y diferenciador. Aplicado al tema en discusión, el concepto de igualdad partirá que la realidad no ha situado a la mujer y al varón en igualdad de

---

<sup>302</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03360-2004-AA/TC, Fundamento Jurídico 14.

condiciones para el ejercicio de sus derechos, lo cual legitimará el trato desigual en tanto no se encuentran en igualdad de condiciones. De esta manera, se condicionará la igualdad de oportunidades de la mujer frente al varón, lo que coadyuvará a la construcción de una cultura de equidad entre todos los seres humanos.

## **b. La igualdad como principio**

*“Como [principio, la igualdad] (...) comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables”<sup>303</sup>.*

## **Comentario**

La igualdad puede ser definida como principio y como derecho. En su primera vertiente, este concepto se erige en una suerte de proyección de uno de los fines del Estado social y democrático de derecho que procura que tanto varones y mujeres disfruten de sus derechos y libertades de manera equitativa. Así, el principio de igualdad alberga una serie de valores que se proyectan sobre el ordenamiento jurídico –al tentar la igualdad entre las personas de los distintos sexos- y en las relaciones humanas –al procurar la igualdad de oportunidades al varón y a la mujer-. La aplicación del principio de igualdad significa dotar a las normas jurídicas de una lectura a la luz de los valores supremos del Estado, como la dignidad y la equidad, que propugnan el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas; de la misma manera, la aplicación del principio de igualdad es de suma importancia al momento de contrastar normas que aparentemente legitiman un trato desproporcionalmente diferenciador en detrimento de la mujer, debido a que a través de la fuerza expansiva de

---

<sup>303</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00048-2004-AI/TC, Fundamento Jurídico 61.

este principio, aquellas normas sucumbirán frente a las exigencias que la igualdad requiere a las autoridades como a los particulares.

### **c. La igualdad como derecho**

*“[E]l derecho a la igualdad se constituye, prima facie, en aquel derecho que obliga, tanto a los poderes públicos como a los particulares, a encontrar un actuar paritario con respecto a las personas que se encuentran en las mismas condiciones o situaciones, así como a tratar de manera desigual a las personas que estén en situaciones desiguales, debiendo dicho trato dispar tener un fin legítimo, el mismo que debe ser conseguido mediante la adopción de la medida más idónea, necesaria y proporcional”<sup>304</sup>.*

### **Comentario**

La igualdad como derecho es el atributo que dotará a las mujeres de la potestad de exigir el respeto de su dignidad, el acceso a oportunidades equitativas y el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, cuando se encuentre frente a determinada situación en la que aprecie la existencia de conductas u omisiones que pretenden perturbar el ejercicio de sus atributos que tiene garantizado en razón de su condición de ser humano. A efectos de garantizar la tutela de este derecho, la mujer tiene garantizada la posibilidad de interponer una demanda de amparo, solicitando el cese de la amenaza o la reposición del derecho cuando una norma o la actuación de un funcionario o particular pretendan socavar el ejercicio pleno de este derecho, debido a su sola pertenencia al sexo femenino.

### **d. Igualdad formal**

*“En su dimensión formal, [la igualdad] impone una exigencia al legislador para que este no realice diferencias injustificadas; pero también a la administración pública y aun a los*

---

<sup>304</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00004-2006-AI/TC, Fundamento Jurídico 118.

*órganos de la jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse en forma desigual frente a supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la ley)”<sup>305</sup>.*

## **Comentario**

Hemos visto a la igualdad como principio y derecho. Sin embargo, es tan amplio el espectro de este concepto que nos permite clasificarlo en igualdad formal e igualdad material. La primera restringe su ámbito a la consagración del derecho y del principio al trato equitativo tanto en cuerpos normativos como en la administración de justicia; sin embargo, su construcción no es ajena a la realidad, pues considera a través de la igualdad en la ley que los hechos han determinado que el varón y la mujer no se encuentran en condiciones similares, lo cual implica tomar este indicador como referente a efectos de establecer medidas que, si bien le otorguen un trato positivamente diferenciado a ellas, obedezca a la consecución de igualdad de oportunidades y del ejercicio de sus derechos.

### **e. Igualdad ante la ley**

*“La (...) igualdad (...) [ante] la ley constituye un límite para el Legislador, en tanto la actividad de legislar deberá estar encaminada a respetar la igualdad, encontrándose vedado establecer diferenciaciones basadas en criterios irrazonables y desproporcionados. En otros términos, el actuar del legislador tiene como límite el principio de igualdad, en tanto que dicho principio le exige que las relaciones y situaciones jurídicas determinadas que vayan a determinar deban garantizar un trato igual y sin discriminaciones”<sup>306</sup>.*

## **Comentario**

La igualdad ante la ley es una de las manifestaciones de la igualdad formal que restringe su campo de acción a la consagración de este derecho y principio a favor de todos los seres

---

<sup>305</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00606-2004-AI/TC, Fundamento Jurídico 10.

<sup>306</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00004-2006-AI/TC, Fundamento Jurídico 123.

humanos. Esto se constata en el artículo 2.2 de la Constitución como en la reciente Ley de oportunidades, esta última que focaliza el problema a través de la aceptación de una realidad dispar que determina el género asignado a los varones y a las mujeres en nuestra realidad. De esta manera, la igualdad ante la ley corresponderá a la efectivización del principio de igualdad en tanto su fuerza expansiva determinará la consagración de dispositivos legales que procuren otorgar un trato equitativo a varones y mujeres; asimismo, la igualdad ante la ley se dirigirá a establecer medidas que garanticen el ejercicio pleno del derecho de igualdad de las mujeres, con el propósito que cuenten con los mecanismos legales que amparen el ejercicio de este derecho frente a cualquier conducta u omisión discriminadora que pretenda limitarlas.

#### **f. Igualdad en la aplicación de la ley**

*“[La igualdad en la ley] implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable”<sup>307</sup>.*

#### **Comentario**

Esta manifestación de la igualdad formal centra su espectro en la administración de justicia. En efecto, bien es sabido que los artículos 138, 139.1 y 139.2 de la Constitución consagran atributos de la función jurisdiccional como la independencia y la imparcialidad, entre otros. Sin embargo, estos atributos se convierten en obligaciones de los administradores de justicia cuando tanto el Estado como los particulares requieren que estos impartan justicia con Derecho. Trasladado este concepto a lo señalado en el extracto jurisprudencial, comprenderemos que la igualdad en la aplicación de la ley determina la obligación de los magistrados y órganos colegiados de impartir justicia sin tomar al género como referente

---

<sup>307</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00048-2004-AI/TC, Fundamento Jurídico 60.

para otorgar un trato que ilegalmente menoscabe el acceso a la justicia y la tutela procesal efectiva de las mujeres.

Por otro lado, esta cita es pertinente, en tanto el Tribunal Constitucional parte del criterio que frente a la resolución de conflictos jurídicos similares, los jueces u órganos colegiados deberán resolver de manera similar que en casos anteriores. Sin embargo, bien es sabido que incluso los casos “idénticos” pueden distinguirse entre sí por especiales características que los hacen únicos. Esta circunstancia se aprecia con nitidez en el caso de la mujer. En efecto, puede que en términos comparativos, un caso se asemeje a uno anterior; sin embargo, como hemos señalado, la propia realidad es la causante del trato diferenciador en menoscabo de la mujer. Cabe precisar que dicha actuación se verá amparada en la legalidad, en tanto queda salvaguardado el derecho del administrador de justicia de apartarse del criterio establecido en un caso semejante e, incluso, de un precedente vinculante, siempre y cuando sustente su resolución en fundamentos lógicos y jurídicos.

#### **g. Igualdad material**

*“En su dimensión material, el derecho de igualdad supone no sólo una exigencia negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, además, una exigencia positiva por parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de los mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per se, desiguales. Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pues, no se traduce en el derecho a ser objeto del mismo trato, con independencia del contexto o las circunstancias en las que un sujeto se encuentre, sino a que se realice un tratamiento diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran en una situación igual. Por tanto, el problema es determinar qué tratos diferenciados son constitucionalmente admisibles, lo que deberá de analizarse en cada caso concreto conforme al test de razonabilidad y proporcionalidad”<sup>308</sup>.*

#### **Comentario**

---

<sup>308</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00606-2004-AA/TC, Fundamento Jurídico 11.

Una segunda vertiente de este concepto es la igualdad material. Son muchas las ocasiones en las que nos encontramos frente al divorcio entre lo legal y la realidad. Esto obedece a la falta de previsión del legislador respecto a las especiales circunstancias que restringen el ejercicio pleno de los derechos y libertades de las mujeres en la realidad. Por ello, es necesario que se tenga en cuenta un enfoque de género que visualice esta realidad, a efectos de garantizar que el marco normativo que pretende amparar los derechos de las mujeres repercuta positivamente en la realidad. De esta manera se garantizará que las mujeres consigan la tan anhelada igualdad de trato y de oportunidades, este último, objetivo mismo de la cláusula consagrada en el artículo 2.1 de la Constitución de 1993, en tanto se constatará la congruencia entre los supuestos normativos y el paulatino descenso de los índices de discriminación contra la mujer en las diferentes esferas de la vida pública.

#### **h. Igualdad de trato**

*“[E]l derecho a ser tratado igual ante la ley, consiste en evitar que a una persona se le limite cualquier otro de sus derechos (...) de manera injustificada, mientras que el derecho a la igualdad en la aplicación o interpretación de la ley implica que un mismo órgano (jurisdiccional o administrativo) no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, a menos que considere que debe apartarse de sus precedentes, para lo cual debe ofrecer una fundamentación suficiente y razonable que lo justifique”<sup>309</sup>.*

#### **Comentario**

Resulta importante el criterio expuesto por el Tribunal Constitucional, ya que permite definir la necesidad de incorporar presupuestos objetivos para sustentar un trato diferenciado. De igual manera, la remisión hacia la igualdad en la aplicación de la ley es importante, ya que ella constituye una importante labor asignada al operador de justicia en

---

<sup>309</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05652-2007-AA/TC, Fundamento Jurídico 16.



el conocimiento de causas en las que se deben proveer de todas las garantías destinadas a la protección de los derechos fundamentales.

#### **i. Derecho a la igualdad entre mujeres y varones**

*“[E]n el Derecho Internacional de los Derechos Humanos existe una cláusula general de igualdad de derechos de hombres y mujeres, y una cláusula que contiene la prohibición de una serie de motivos concretos de discriminación lo que constituye una explícita interdicción de determinadas diferencias históricamente muy arraigadas y que han situado a grupos de la población en posiciones, no sólo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona humana”<sup>310</sup>.*

#### **Comentario**

Las diferencias entre varones y mujeres no constituyen óbice para un trato diferenciador sustentado en criterios subjetivos, carentes de fundamento razonable alguno que pretendan privilegiar a uno en desmedro de otro. Por tal motivo, es adecuada la remisión que el Tribunal Constitucional realiza al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en relación a la igualdad entre varones y mujeres, ya que permite consolidar la cláusula de igualdad material.

#### **j. Relación de la igualdad con otros derechos fundamentales**

*“[E]l principio-derecho de igualdad se constituye en un presupuesto indispensable para el ejercicio de los derechos fundamentales. Posee además una naturaleza relacional, es decir, que funciona en la medida en que se encuentre relacionada con el resto de derechos, facultades y atribuciones constitucionales y legales. Dicho carácter relacional sólo opera*

---

<sup>310</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05652-2007-AA/TC, Fundamento Jurídico 13.

*vinculativamente para asegurar el goce real, efectivo y pleno del plexo de derechos que la Constitución y las leyes reconocen y garantizan”<sup>311</sup>.*

## **Comentario**

Esta relación es explicada a través de la proyección del principio de igualdad sobre cada uno de los dispositivos de la Constitución y de los diferentes cuerpos normativos. Sin embargo, este ensayo ha evidenciado la subsistencia de normas en nuestro Código Civil que convalidan aún la sujeción de la mujer frente al varón o que restringen el pleno ejercicio de sus derechos. Sin embargo, la aplicación de este principio constituye un instrumento de suma importancia al momento de realizar la lectura de dispositivos aparentemente contradictorios. Así pues, frente a estas circunstancias, la aplicación del principio de igualdad se superpone frente a mandatos legales y expresos que discriminan a la mujer, ya que por medio de este principio se procura que cada dispositivo guarde coherencia con el espíritu de la Carta Política que, en este caso, es garantizar la igualdad entre varones y mujeres.

## **k. Relación de la igualdad con el derecho a la dignidad**

*“[E]l derecho a la igualdad, como el conjunto de derechos consagrados en nuestra Constitución, encuentra su fundamento último en la dignidad de la persona. Así, cuando el artículo 1, de la Constitución establece que ‘La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado’, está reconociendo una igualdad esencial de todas las personas, por lo que exige que tanto la sociedad como el Estado deban tener como principal objetivo la vigencia de la dignidad humana”<sup>312</sup>.*

## **Comentario**

---

<sup>311</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00004-2006-AI/TC, Fundamento Jurídico 121.

<sup>312</sup> Ibidem.

La dignidad es el atributo que mejor define al ser humano, ya que se erige como el eslabón que identifica a la especie humana, más allá de las diferencias de orden racial, sexual e incluso político sobre las cuales hemos construido absurdas diferencias en pos de reconocer a unos como superiores y a otros en relación de sujeción. En cuanto a su relación con la igualdad de la mujer, la dignidad extiende su manto sobre la obligación del legislador de consagrar cláusulas que procuren tal fin, pues por medio de ellas no sólo se garantizará el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades, sino además el desarrollo de la mujer en las diferentes esferas que componen su especial proyecto de vida; realización que, sin lugar a dudas, coadyuvará a la consolidación de su dignidad como ser humano.

## **I. Concepto de diferenciación**

*“El principio de igualdad no impide al operador del derecho determinar, entre las personas, distinciones que expresamente obedezcan a las diferencias que las mismas circunstancias prácticas establecen de manera indubitable (...) La diferenciación implica una relación efectiva entre el trato desigual que se establece, el supuesto de hecho y la finalidad que se persigue alcanzar (...) La diferenciación debe perseguir una intencionalidad legítima, determinada, concreta y específica, cuyo fin sea la consecución o aseguramiento de un bien o valor constitucional, o de un bien o valor constitucionalmente aceptable. Es decir, deberá sentarse en una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con certeros juicios de valores generalmente aceptados. En ese sentido, no cabe hablar válidamente de un proceso diferenciador de trato, cuando este se basa en supuestos de hecho o en situaciones subjetivas”<sup>313</sup>.*

## **Comentario**

Se ha señalado que no todo trato distinto es ilegítimo. En efecto, cuando se establece una medida legislativa que tiende a beneficiar a determinado sector de la población, se deberá evaluar su legalidad sobre la base de ciertos parámetros. En primer lugar, que la medida

---

<sup>313</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00261-2003-AA/TC, Fundamento Jurídico 3.2.

esté destinada a la consecución de un objetivo constitucional, como sería promover la participación de la mujer en los cargos de elección pública. En segundo lugar, si bien el trato perjudicará a otro sector de la población, debe tenerse en cuenta que las razones que legitiman el trato diferenciado se sustentan en la exclusión o restricción histórica que el grupo beneficiado ha tenido a lo largo de siglos. Esta idea nos ayuda a comprender que la diferenciación no se dirige a privilegiar a ciertos grupos sobre la base de la exclusión o restricción de la que han sido objeto, sino en establecer mecanismos legales que procuren que tanto aquellos que siempre han tenido garantizado su acceso a las oportunidades como aquellos que no, accedan a estas en igualdad de condiciones.

### **m. Concepto de discriminación**

*“La discriminación es (...) el trato diferenciado que se da a una persona por determinadas cuestiones, lo que imposibilita su acceso a oportunidades esenciales a las que otros, en su misma condición tienen derecho”<sup>314</sup>.*

### **Comentario**

Como se ha señalado, el trato diferenciado se justifica cuando responda a la consecución de un objetivo constitucional, como la igualdad de oportunidades de la mujer. Sin embargo, somos conscientes que esta vertiente del trato diferenciado resulta ser la excepción frente a la infinidad de dispositivos jurídicos que marginan a la mujer o restringen sus derechos, los cuales no guardan una fundamentación acorde al derecho, pero sí acorde a los patrones que asumimos como naturales a cada género; es decir, muchas veces las construcciones jurídicas que ilegalmente desplazan a las mujeres se sustentan en lo que asumimos como propio de la mujer, lo cual nos revela que este tratamiento parte de la misma realidad, de la que parten los tratos diferenciadores que socavan su dignidad. Así, estos actos y disposiciones legales son discriminadores debido a que establecen diferenciaciones sobre la base de criterios netamente subjetivos, es decir, tomando como referente la identidad y la

---

<sup>314</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00090-2004-AA/TC, Fundamento Jurídico 43.

construcción del género que asignamos a las mujeres dentro de nuestra sociedad. Evidentemente, este trato es ilegal y, por lo tanto, resquebraja uno de los fines esenciales del Estado social y democrático de derecho, como es la defensa de la persona humana, consagrada en el artículo 1 de la Constitución Política de 1993.

#### **n. Proscripción de la distinción por razones sexuales**

*“[El] artículo 1 de la Constitución [señala que] la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En ese sentido, el respeto por la persona se convierte en el leit motiv que debe informar toda actuación estatal. Para tales efectos, la Constitución peruana no distingue a las personas por su opción y preferencias sexuales; tampoco en función del sexo que pudieran tener. Se respeta la dignidad de la persona”<sup>315</sup>.*

*“Tanto la prohibición de discriminación como el derecho a la igualdad ante la ley pueden implicar tratos diferenciados, siempre que posean justificación objetiva y razonable, es decir, que el tratamiento desigual no conduzca a un resultado injusto, irrazonable o arbitrario. El derecho a la igualdad no impone que todos los sujetos de derecho o todos los destinatarios de las normas tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es decir, no todo trato desigual constituye una discriminación constitucionalmente prohibida, sino sólo aquella que no está razonablemente justificada”<sup>316</sup>.*

#### **Comentario**

El sustento de estas citas descansa en la interpretación sistemática de los artículos 1, 2.1 y 103 de la Constitución. Como se ha señalado, la dignidad es un atributo connatural al ser humano que se enlaza a la igualdad para dotarla de contenido, a fin de exigir –tanto a particulares como a las autoridades estatales- el pleno ejercicio de los derechos. El párrafo

---

<sup>315</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02868-2004-AA/TC, Fundamento Jurídico 23.

<sup>316</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05652-2007-AA/TC, Fundamento Jurídico 19.

final del artículo 103 de la Constitución entra a tallar en este punto, debido a que proporciona un elemento imprescindible a la construcción de este concepto, a efectos de garantizar la igualdad entre todas las personas: la proscripción de la arbitrariedad, es decir, de todo trato producido en razón del abuso del derecho, que, como resulta evidente, no se encuentra sustentado en criterios de objetividad ni proporcionalidad. Así pues, si una norma jurídica o una persona otorgan un trato diferenciado a un individuo o a un colectivo por razones sexuales (tanto de género como de orientación sexual), estos se encuadrarán en el concepto de arbitrariedad debido a que asignan el trato en razón a un concepto que define la identidad de la persona o del grupo.

## **ñ. Discriminación en el ámbito laboral**

*“La discriminación en el entorno laboral es un fenómeno social cotidiano y universal que provoca desigualdades entre las personas y genera desventajas sociales y económicas que debilitan la cohesión y la solidaridad sociales. Por ello, la erradicación de la discriminación laboral tiene por finalidad promover la igualdad de oportunidades a fin de que tanto hombres como mujeres disfruten de un trabajo decente, sin perjuicio de su origen, sexo, raza, color, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole.*

*En este contexto, la discriminación laboral se produce cada vez que se escoge o rechaza a un trabajador por razón de su origen, sexo, raza, color, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma o de cualquier otra índole. En buena cuenta, la discriminación en el entorno laboral supone dispensar un trato distinto a las personas atendiendo a ciertas características, como pueden ser la raza, el color o el sexo, lo cual entraña un menoscabo de derecho a la igualdad de oportunidades y de trato y a la libertad de trabajo, debido a que la libertad del ser humano para elegir y desarrollar sus aspiraciones profesionales y personales se ve restringida”<sup>317</sup>.*

---

<sup>317</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05652-2007-AA/TC, Fundamentos Jurídicos 36 y 37.

## **Comentario**

Si bien la discriminación se produce en diferentes ámbitos, cobra especial notoriedad aquella que se produce en el sector laboral. En efecto, se constata que las mujeres tienen mayores dificultades para ascender o para acceder a una remuneración equitativa respecto a varones que realizan las mismas labores. Por tal motivo es imprescindible la actuación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para superar esta situación que limita el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en nuestro país.

### **o. Discriminación directa en el trabajo**

*“[La discriminación e]s directa cuando las normas jurídicas, las políticas y los actos del empleador, excluyen, desfavorecen o dan preferencia explícitamente a ciertos trabajadores atendiendo a características como la opinión política, el estado civil, el sexo, la nacionalidad, el color de la piel o la orientación sexual, entre otros motivos, sin tomar en cuenta sus cualificaciones y experiencia laboral. Por ejemplo, los anuncios de ofertas de empleo en los que se excluye a los aspirantes mayores de cierta edad, o de determinado color de piel o complexión física, es una forma de discriminación directa”<sup>318</sup>.*

## **Comentario**

La discriminación directa es aquella cuyo objetivo se dirige a propiciar un trato diferenciado carente de objetividad. En el caso peruano, esta situación es más que evidente, dado el alto grado de carencia de fundamentación en las decisiones adoptadas, que pretenden fundarse en la autonomía de la voluntad, a pesar que esta no es irrestricta, ya que ello atentaría contra el extremo final del artículo 103° de la Constitución Política.

### **p. Discriminación indirecta en el trabajo**

---

<sup>318</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05652-2007-AA/TC, Fundamento Jurídico 44.

*“[L]a discriminación es indirecta cuando ciertas normas jurídicas, políticas y actos del empleador de carácter aparentemente imparcial o neutro tienen efectos desproporcionadamente perjudiciales en gran número de integrantes de un colectivo determinado, sin justificación alguna e independientemente de que éstos cumplan o no los requisitos exigidos para ocupar el puesto de trabajo de que se trate, pues la aplicación de una misma condición, un mismo trato o una misma exigencia no se les exige a todos por igual. Por ejemplo, el supeditar la obtención de un puesto de trabajo al dominio de un idioma en particular cuando la capacidad lingüística no es requisito indispensable para su desempeño es una forma de discriminación indirecta por razón de la nacionalidad o la etnia de origen”<sup>319</sup>.*

## **Comentario**

Consideramos adecuada la cita del Tribunal Constitucional debido a que expone una situación que escapa a las formalidades jurídicas y que se entraña en nuestra realidad misma, ya que existen circunstancias en las que la discriminación contra la mujer es invisible, es decir, no es percibida, configurándose de esta manera la discriminación indirecta que, como expresa el colegiado, también se produce en la esfera laboral.

### **q. Discriminación por embarazo en el trabajo**

*“La discriminación por razón de sexo comprende aquellos tratamientos peyorativos que se fundan no sólo en la pura y simple constatación del sexo de la víctima, sino también en la concurrencia de razones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una conexión directa e inequívoca. Es decir, que la discriminación laboral por razón de sexo comprende no sólo los tratamientos peyorativos fundados en la constatación directa del sexo, sino también aquellos que se basen en circunstancias que tengan una directa conexión con el sexo.*

---

<sup>319</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05652-2007-AA/TC, Fundamento Jurídico 45.



*Tal sucede con el embarazo, elemento o factor diferencial que, por razones obvias, incide de forma exclusiva sobre las mujeres. Las decisiones extintivas basadas en el embarazo, al afectar exclusivamente a la mujer, constituye, indudablemente, una discriminación por razón de sexo proscrita por el inciso 2) del Art. 2 de la Constitución Política.*

*La protección de la mujer no se limita a la de su condición biológica durante el embarazo y después de éste, ni a las relaciones entre la madre y el hijo durante el período que sigue al embarazo y al parto, sino también se extiende al ámbito estricto del desarrollo y a las vicisitudes de la relación laboral, razón por la cual condiciona las potestades organizativas y disciplinarias del empleador. Por ello, el Art. 23 de la Constitución Política prescribe que el Estado protege especialmente a la madre que trabaja.*

*Por ello, el despido de una trabajadora por razón de su embarazo constituye una discriminación directa basada en el sexo, como también lo es la negativa a contratar a una mujer embarazada, o cuando una trabajadora percibe una remuneración inferior al de un trabajador por un mismo trabajo. Son manifestaciones de discriminación directa porque excluyen la posibilidad de justificar, objetivamente, la razonabilidad y proporcionalidad de la medida”<sup>320</sup>.*

## **Comentario**

Resulta lamentable que la mujer vea condicionada su continuidad laboral en relación con su embarazo. Esta situación manifiesta un panorama de discriminación en contra de las mujeres embarazadas, quienes ven limitado el ejercicio de sus derechos laborales con motivo de una condición fisiológica transitoria que no menoscaba su capacidad intelectual para la continuidad de la relación laboral una vez que concluya el período de lactancia.

## **r. Discriminación por embarazo en las Escuelas de las Fuerzas Armadas**

---

<sup>320</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05652-2007-AA/TC, Fundamentos Jurídicos 49 al 52..

*“[E]l embarazo de una alumna, cadete o estudiante no es un hecho que pueda limitar o restringir su derecho a la educación. Por ello, ningún manual o reglamento interno de ningún colegio, instituto, universidad o escuela pública o privada, puede, ni explícita, ni implícitamente, tipificar como infracción, falta o causal de mala conducta, el embarazo de una alumna, estudiante o cadete. Dicho de otro modo, ninguna autoridad pública o particular puede impedirle a una mujer estudiar normalmente por su estado de embarazo.*

*En este sentido, cualquier norma que se ocupe de tipificar la maternidad como causal de infracción o falta en el ámbito educativo debe ser inaplicada por los jueces en virtud de la facultad conferida por el artículo 138.º de la Constitución, por ser contraria a los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad”<sup>321</sup>.*

## **Comentario**

Nos remitimos al comentario anterior (discriminación por embarazo en el trabajo).

### **s. Relación entre la no discriminación y la igualdad de trato**

*“Cabe destacar que la no discriminación y la igualdad de trato son complementarias, siendo el reconocimiento de la igualdad el fundamento para que no haya un trato discriminatorio. De esta forma, la igualdad de las personas incluye: (i) el principio de no discriminación, mediante el cual se prohíbe diferencias que no se pueda justificar con criterios razonables y objetivos; y (ii) el principio de protección, que se satisface mediante acciones especiales dirigidas a la consecución de la igualdad real o positiva”<sup>322</sup>.*

## **Comentario**

---

<sup>321</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05527-2008-HC/TC, Fundamento Jurídico 22.

<sup>322</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05652-2007-AA/TC, Fundamento Jurídico 18.

Evidente resulta la relación entre ambas, ya que la proscripción de toda conducta carente de razonabilidad se sustenta en la igualdad de trato, ya que esta permite medir con parámetros objetivos situaciones en las que se debe prodigar un trato equitativo a aquellas personas que se encuentran en iguales planos. Sin perjuicio de ello, el reconocimiento de la realidad dispar lleva a la formulación e implementación de medidas diferenciadoras sustentadas en parámetros objetivos, dando lugar a las acciones positivas que permiten el pleno ejercicio de los derechos de las personas que componen las poblaciones excluidas.

#### **t. Acciones positivas**

*“[E]l Estado en algunas oportunidades promueve el trato diferenciado de un determinado grupo social, otorgándoles ventajas, incentivos o, en general, tratamientos más favorables. Esto es lo que en doctrina constitucional se conoce como ‘discriminación positiva o acción positiva –affirmative action-’. La finalidad de esta acción afirmativa no es otra que compensar jurídicamente a grupos marginados económica, social o culturalmente; persigue, pues, que dichos grupos puedan superar la inferioridad real en la que se encuentran con acciones concretas del Estado”<sup>323</sup>.*

#### **Comentario**

Dentro de la construcción de la igualdad material de la mujer, las acciones positivas desempeñan un rol sumamente importante. En efecto, estas acciones propugnan la consecución de objetivos constitucionales, que las habilita para establecer medidas diferenciadoras en beneficio de la población femenina de nuestro país. Contrario a lo que pudiese pensarse, estas acciones no discriminan a la población masculina, pues aunque limiten mínimamente sus oportunidades, este grupo tiene un puesto preponderante dentro en la sociedad, lo que le permite contar con una amplia gama de oportunidades para su desarrollo. Sin embargo, las acciones positivas son trascendentales para las mujeres en tanto parten del establecimiento de medidas que permiten su mayor participación en la vida

---

<sup>323</sup> Sentencia Del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00048-2004-AI/TC, Fundamento Jurídico 63.

pública, garantizándose la equidad en el ejercicio de derechos y en el acceso a oportunidades.

### **3.4. LEGISLACIÓN COMPARADA**

A continuación se expondrá cómo las legislaciones latinoamericanas y europeas abordan el tema de la discriminación contra la mujer, ya sea a través de la consagración de la igualdad formal o del establecimiento de acciones positivas, e incluso, por medio de cuestionables dispositivos que refuerzan la restricción de la mujer en el ejercicio de sus derechos y libertades.

#### **3.4.1. AMÉRICA LATINA**

##### **3.4.1.1. Colombia**

La legislación colombiana propone interesantes medidas destinadas a la consecución de la igualdad material de la mujer y del varón. Esta tendencia se aprecia desde fines del siglo XIX (**Ley N° 8 de 1892** que *permite a la mujer ser testigo en las mismas condiciones que el varón*<sup>324</sup>), como en el siglo XX (**Ley N° 28 de 1932** que suprimió la potestad suprema del marido y *le otorgó a la mujer casada la capacidad civil que perdía por el matrimonio, logrando condiciones de igualdad con el hombre para la adquisición, administración y disposición de los bienes*; **Acto legislativo N° 03 de 1954** que *reconoció a la mujer el derecho al sufragio* y el **Decreto N° 2820 de 1974** que *otorgó iguales derechos a las mujeres y varones*, entre otros<sup>325</sup>), reafirmandose a través de la **Constitución Política de 1991**.

En efecto, la Constitución consagra una serie de dispositivos destinados a la igualdad. Así tenemos el artículo 5° que establece “[e]l Estado reconoce, *sin discriminación alguna*, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución

---

<sup>324</sup> VÁSQUEZ ZAWADSKY, Martha Lucía (Coordinadora). “Mujeres constructoras de paz y desarrollo”. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Bogotá, 2007, p. 88.

<sup>325</sup> Ibidem, pp. 88-90.

básica de la sociedad”<sup>326</sup>. De la misma manera, el artículo 40 señala que “[l]as autoridades garantizarán la adecuada y efectiva *participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública*”<sup>327</sup>, medida que no sólo se limita en la simple participación, sino a propiciar el acceso de la mujer a cargos que impliquen la toma de decisiones.

Por otro lado, el artículo 43° consagra “[l]a mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”<sup>328</sup>. De la misma forma que nuestro anterior Texto, el legislador colombiano fue consciente de la desigualdad material de la mujer y optó por consagrar expresamente la proscripción de la discriminación contra ella. Esta fórmula ha originado una revolución en el ordenamiento colombiano, pues cada vez son mayores los esfuerzos del legislativo por afianzar dicho mandato constitucional. Ello se constata en la Ley N° 115 de 1994 que consagra el principio de respeto a la equidad como fin de la educación<sup>329</sup>, como en las Leyes N° 181 y 182 de 1995 que erigen a este principio como rector de las actividades deportiva y televisiva<sup>330</sup>, respectivamente.

En cuanto a instituciones estatales destinadas a la protección de la mujer y a la consecución de su igualdad, en 1990 se creó la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, dirigida a dar cumplimiento a la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Posteriormente, en julio de 1995 se creó la Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres que, a través del Decreto N° 1182 de junio de 1999, se transformó en la Dirección Presidencial para la Equidad de la Mujer, la misma que, por medio del Decreto N° 519 del 5 de marzo de 2003, asumió el nombre de *Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer*<sup>331</sup>.

La Consejería ha diseñado un plan de alcance nacional, que tiene como objetivos generales “[e]structurar la política nacional para las mujeres [y] transversalizar esta política en la

---

<sup>326</sup> Ibidem; p. 79.

<sup>327</sup> Loc. cit.

<sup>328</sup> Loc. cit.

<sup>329</sup> Ibidem, p. 93.

<sup>330</sup> Loc. cit.

<sup>331</sup> Ibidem, pp. 12-13.

Administración Pública”<sup>332</sup>, es decir que, a partir de una visión global de la mujer, dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 40°, en cuanto procura su participación en la toma de decisiones dentro de las altas esferas estatales. Estos objetivos se llevarán a cabo a través de un *enfoque de género en la política*, orientado al desarrollo democrático de la construcción de la igualdad y el impulso a la igualdad de oportunidades, regidos a través de los principios de equidad, igualdad, participación, respeto a los derechos de las mujeres y al Derecho Internacional Humanitario.

Como vemos, el interés de la legislación colombiana por brindar un trato equitativo a la mujer no es producto de esfuerzos recientes, sino que ha venido desarrollándose a lo largo del tiempo, lo cual acredita la existencia de una política que sistemáticamente ha venido implementando mecanismos en pos de la consecución de la anhelada igualdad material.

#### **3.4.1.2. Bolivia**

Distante de la realidad colombiana, Bolivia constituye un reto en la abolición de todo tipo de discriminación contra la mujer. Como señala Ivonne Farah, “[l]as condiciones de vida de las bolivianas se encuentran entre las más deprimidas de América Latina. Su nivel educativo ha mejorado lentamente y se encuentra todavía por debajo del de los hombres, situación que las diferencia claramente de las mujeres de la gran mayoría de los países latinoamericanos, donde ese nivel se elevó sustancialmente en las dos últimas décadas. Los indicadores de salud también se sitúan entre los peores de la región (...). La alta mortalidad infantil y materna se corresponden con una escasa cobertura de sistemas de salud reproductiva, en un país donde destaca el bajo uso de medios eficaces de control de la fecundidad al lado del nivel más alto de América Latina en cuanto a natalidad no deseada”<sup>333</sup>.

---

<sup>332</sup> Ibidem, p. 14.

<sup>333</sup> FARAH, Ivonne. “La mujer en Bolivia”. Disponible en: <http://www.prodiversitas.bioetica.org/mujerbolivia.htm> (Revisado el 31 de mayo de 2009).

Estos indicadores son referentes directos de la discriminación de género por la legislación boliviana. Un claro ejemplo es la Constitución de 1995 que, hasta 2004, consagraba el siguiente texto:

**“Artículo 38°.-** *La mujer boliviana casada con extranjero no pierde su nacionalidad. La mujer extranjera casada con boliviano adquiere la nacionalidad de su marido*, siempre que resida en el país y manifieste su conformidad, y no la pierde aún en los casos de viudez o de divorcio” (las cursivas son nuestras).

Sorprende que a albores del siglo XXI un texto constitucional considere expresamente a la mujer en relación de sujeción frente al esposo. La ilegalidad de este texto se constata en que de la revisión de la Carta, no se aprecia la regulación de este artículo en sentido inverso, lo que revela la tremenda carga que el rol de género tiene en Bolivia, al punto que aquello considerado como “natural” es consagrado en el cuerpo normativo que rige la vida de la nación. Consciente de esta situación, el 20 de febrero de 2004 se dio una Ley de Reforma Constitucional que modificó dicho artículo para consagrarlo desde la fórmula: “[l]os bolivianos, hombres y mujeres, casados con extranjeros (...)”<sup>334</sup>.

De la misma manera, hasta 2003 subsistió en el Código de Familia un dispositivo que claramente discriminaba a la mujer. Nos referimos al artículo 99° que disponía: “*el marido puede obtener que se restrinja o no se permita a la mujer el ejercicio de cierta profesión u oficio, por razones de moralidad*”<sup>335</sup> (las cursivas son nuestras). Es curiosa esta norma, pues habla del derecho del esposo de restringir el libre desarrollo de la mujer por cuestiones de moralidad. Pero, ¿qué es moralidad? ¿Acaso el legislador está en capacidad de definirla? Evidentemente no. Esta redacción ambigua es peligrosa, en tanto corroborar una actitud inmoral de la esposa quedaba a criterio de su cónyuge que podía en denunciarla dicha frente a un juez, quien tendría un amplio campo de discrecionalidad para evaluar la acción.

---

<sup>334</sup> CONSULADO DE BOLIVIA EN BILBAO. “Nueva Constitución Política del Estado”. Disponible en: <http://gregor.padep.org.bo/documentos/BolNuevcons.htm> (Revisado el 31 de mayo de 2009).

<sup>335</sup> HAYES, María Yamile. “Constituciones Políticas y género. Análisis comparado en América Latina”. CEPAL. Santa Cruz de la Sierra, 2005, p. 9.

Esta inequidad ha generado la preocupación del Consejo Económico y Social de la ONU que en su Observación E/C.12.1/Add.60 ha señalado que “[l]a discriminación de facto de la mujer en la sociedad [boliviana] queda especialmente de manifiesto en el bajo nivel de representación de las mujeres en los cargos públicos, las altas tasas de analfabetismo femenino, la desigualdad de remuneración por igual trabajo y la elevada proporción de mujeres que trabajan en condiciones inadecuadas en el sector no estructurado o como empleadas domésticas. (...) El Comité exhorta al Estado Parte a que adopte medidas eficaces para combatir la discriminación contra la mujer en la vida pública, económica y social”<sup>336</sup>.

Existe una tarea pendiente con las mujeres bolivianas. Las condiciones de desigualdad a las que se están sometidas y la ausencia de una adecuada legislación que permita implementar políticas nacionales son los dos principales flagelos que deben ser asumidos como retos para la construcción de una sociedad en la que varones y mujeres puedan ejercer sus derechos de manera equitativa.

### **3.4.1.3. Venezuela**

Venezuela es uno de los países latinoamericanos en que la proscripción de la discriminación contra la mujer ha operado de manera efectiva. Así, desde inicios del siglo XX, la mujer venezolana procuró la equidad a través de su acceso a los estudios universitarios en 1915 y en la creación de la primera Sociedad Patriótica de Mujeres en 1928<sup>337</sup>. A la par, su legislación fue incorporando reformas en el Código Civil sobre la administración de la patria potestad, el seguro social a la maternidad y los bienes de la sociedad conyugal en 1942<sup>338</sup>, acentuadas a través de la reforma de 1982 que estableció la igualdad entre los esposos<sup>339</sup>.

---

<sup>336</sup> CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ONU. “Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Bolivia 21/05/2001. E/C.12/1/Add.60”.

<sup>337</sup> LEÓN, María (Coordinadora) “Plan de igualdad para las mujeres. Venezuela 2004-2009”. Instituto Nacional de la Mujer. Caracas, 2004, p. 11.

<sup>338</sup> Loc. cit.

<sup>339</sup> Ibidem, p. 12.



Un avance en la construcción de la igualdad de la mujer venezolana lo observamos en la **Ley de igualdad de oportunidades para la mujer**<sup>340</sup>, publicada el 26 de octubre de 1999 a través de la Gaceta Oficial N° 5,398. Este cuerpo se fundamenta en la Ley aprobatoria de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y, conforme señala su artículo 2, “[su] objeto (...) es garantizar a la mujer el pleno ejercicio de sus derechos, el desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades”<sup>341</sup>. Este enunciado muestra una visión integral de la mujer como ser humano, ya que al enfocarse en su desarrollo pleno no hace más que procurar el ejercicio del derecho de las mujeres al libre desarrollo.

Por otro lado, es interesante la concepción asignada por el artículo 6° a la discriminación contra la mujer: “a) La existencia de leyes, reglamentos, resoluciones [o] cualquier acto jurídico, cuyo espíritu, *contenido o efectos* contengan preeminencia de ventajas o privilegios del hombre sobre la mujer. b) La existencia de circunstancias o situaciones fácticas que desmejoren la condición de la mujer y, *aunque amparadas por el derecho, sean producto del medio, la tradición o la idiosincrasia individual o colectiva*. c) *El vacío o deficiencia legal y reglamentaria*, de un determinado sector donde intervenga la mujer, que obstruya o niegue sus derechos”<sup>342</sup> (las cursivas son nuestras). *La amplitud del concepto de discriminación contra la mujer excede al planteado por la legislación peruana, debido a que esta ley no se restringe al simple enunciado, sino que evalúa la ilegalidad del dispositivo tomando como referente las consecuencias negativas que su aplicación traerá contra la mujer. Sin embargo, lo más resaltante lo es el mea culpa expresado en que la legislación muchas veces se ampara en la idiosincrasia machista que excluye a la mujer.* De esta manera, la Ley de igualdad de oportunidades para la mujer venezolana representa un nuevo enfoque que otorga la legislación latinoamericana a la identificación de las causas de la discriminación contra la mujer.

---

<sup>340</sup> MINISTERIO DE TRABAJO DE VENEZUELA. “Ley de igualdad de oportunidades para la mujer”. Disponible en: <http://www.mintra.gov.ve/legal/leyesordinarias/loportunidadesparalamujer.html> (Revisado el 31 de mayo de 2009).

<sup>341</sup> Loc. cit.

<sup>342</sup> Loc. cit.

No podíamos pasar por alto la revisión de la **Constitución venezolana de 1999**, pues es una de las más avanzadas en cuanto a equidad entre géneros corresponde. Esto se constata al ser la única Constitución latinoamericana que excluye un lenguaje estereotipado, pues obvia la mención de la persona en masculino y opta por referirse “[a] los funcionarios y las funcionarias, el niño y la niña, electores y electoras, ciudadano y ciudadana, en suma, hombre y mujer, constituyendo esta Constitución el referente en cuanto a la utilización de un lenguaje que efectivamente se asienta en la visión de equidad de género”<sup>343</sup>.

El artículo 2° de la Constitución consagra a Venezuela como un Estado que propugna la igualdad<sup>344</sup>, que trasladada a las relaciones familiares se expresa en la “igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges”<sup>345</sup> (artículo 77°). Sin embargo, la cláusula que llamó nuestra atención fue el artículo 88°: “El Estado reconocerá el *trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley*”<sup>346</sup> (las cursivas son nuestras). A través de este artículo, la Constitución venezolana no se conforma con el mero reconocimiento de la igualdad de la mujer ante la ley, sino que toma un indicador de la realidad para legislarlo. En efecto, bien es sabido que dentro de los hogares latinoamericanos, existe un alto número de mujeres dedicadas a las labores domésticas; sin embargo, ni los textos constitucionales ni el resto de cuerpos normativos de nuestros países aceptan la importancia del trabajo de los varones y de las mujeres en el seno del hogar. Por medio de este artículo, se reconoce la importancia de las labores domésticas, en cuanto componen parte del equilibrio que cada uno de los integrantes de la familia aportan al hogar, lo cual hace factible la exigibilidad de una retribución dineraria por los servicios realizados. Esto se desprende del reconocimiento del derecho a la seguridad social de las amas de casa, la que sólo es posible en tanto realizan una actividad que debe ser considerada como económica y que contribuye a la riqueza y al bienestar social.

---

<sup>343</sup> HAYES, María Yamile. “Constituciones Políticas y género. Análisis comparado en América Latina”. Op. cit, p. 2.

<sup>344</sup> INAMUJER. “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)”. Disponible en: <http://www.inamujer.gov.ve/documentos/constitucion.pdf> (Revisado el 31 de mayo de 2009).

<sup>345</sup> Loc. cit.

<sup>346</sup> Loc. cit.

A pesar que la Constitución y la Ley de igualdad de oportunidades para la mujer propugnan la equidad entre varones y mujeres, la reforma parcial al Código Penal de 2005 ha establecido un trato discriminador en la tipificación del delito de adulterio:

“**Artículo 394°.** *La mujer adúltera será castigada con prisión de seis meses a tres años. La misma pena es aplicable al coautor del adulterio.*

**Artículo 395°.** El marido que mantenga concubina en la casa conyugal o también fuera de ella, *si el hecho es notorio*, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses. La condena produce de derecho la pérdida del *poder marital*. La concubina será penada con tres meses a un año”<sup>347</sup> (las cursivas son nuestras).

Esta modificación socava el principio de igualdad ante la ley, ya que retorna al punto de partida de la inequidad: el rol de géneros. Es decir, *la actitud de la mujer es más reprochable y, por lo tanto, objeto de una mayor punición en tanto se presume que de acuerdo a su estado natural, la mujer posterga su identidad sexual para reafirmar su virtud y el cuidado de su casa*, lo que la hace objeto del **castigo**; mientras que, por otro lado, *el estado natural determina la identidad sexual como inherente al varón, que lo hace proclive al adulterio*. Sin embargo, *su adulterio sólo será sancionado si el hecho es notorio, es decir, si causa escándalo hasta el punto que haga zozobrar el orden social que se encuentra sustentado en la esfera familiar*. De lo contrario, tal conducta no será objeto de pena ni de **castigo**, término empleado sólo en el caso del adulterio cometido por la mujer, lo que revela que tal castigo es la consecuencia del reproche de la sociedad por el resquebrajamiento del orden. Asimismo, se pretende dar un matiz de equidad al señalar que el adulterio notorio del esposo conduce a la pérdida de su **poder marital**. Pero, ¿de qué poder marital estamos hablando, si es que el artículo 77° de la Constitución establece que el matrimonio es la unión en la que existe la *igualdad absoluta* de derechos y deberes?

---

<sup>347</sup> WEBLOG VENEZOLANO. “Hasta 3 años de prisión para ‘la mujer adúltera’ en Venezuela”. Disponible en: <http://www.venezolano.web.ve/archives/523-Hasta-2anos-de-prision-para-la-mujer-adultera-en-Venezuela.html> (Revisado el 31 de mayo de 2009).

Más allá de este traspié, consideramos que la legislación venezolana ha reflejado la construcción de la igualdad formal y material de la ley en normas (como la Constitución y la Ley de igualdad de oportunidades) que han tomado a la realidad como referente para establecer mecanismos que procuren la plena igualdad de las venezolanas.

#### **3.4.1.4. Paraguay**

La discriminación contra la mujer en Paraguay es un flagelo que perjudica a gran parte de su población. En efecto, el Comité de Derechos Humanos en el 85º período de sesiones (2005) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el 32º período de sesiones (2006) han señalado las falencias normativas y económicas de las instituciones dirigidas a la lucha contra la discriminación de género. Asimismo, señalan que el Estado debe adoptar políticas dirigidas a aumentar la participación pública de la mujer e invita al gobierno “a educar a la población (...) sobre la necesidad de respetar los derechos y la dignidad de las mujeres”<sup>348</sup>. De igual forma, ambos Comités han señalado que la mujer enfrenta un desamparo legal en lo que respecta al tráfico de personas para la explotación sexual, en tanto su legislación y las políticas institucionales destinados a combatir los actos que socavan la libertad individual y sexual de las mujeres paraguayas no son efectivas<sup>349</sup>.

La opinión de las Comisiones se debe a que Paraguay ha limitado sus esfuerzos sólo a garantizar la igualdad jurídica de la mujer. Esto se aprecia en la **Constitución de 1992** que consagra en su artículo 46º la igualdad en dignidad, en derechos de las personas y la prohibición de la discriminación. Este artículo consagra constitucionalmente la procedencia de acciones positivas en tanto “[e]l Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que (...) mantengan [las discriminaciones] o las propicien”. En el mismo sentido, el artículo 47 reconoce la igualdad formal y material, traducida en el artículo 48º de la siguiente manera: “[e]l hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos

---

<sup>348</sup> UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA). “Paraguay: Information by country: Human Rights”. Disponible en: [http://www.unfpa.org/derechos/paraguay\\_eng.htm](http://www.unfpa.org/derechos/paraguay_eng.htm) (Revisado el 31 de mayo de 2009).

<sup>349</sup> Loc. cit.

que impidan o dificulten su ejercicio y *facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional*<sup>350</sup> (las cursivas son nuestras). Esta cláusula es semejante al artículo 2.2 de la Constitución peruana de 1979, pues parte del reconocimiento del desequilibrio entre el varón y la mujer, que justifica la promoción de su participación en la vida nacional a través de acciones positivas.

De la misma manera otros cuerpos normativos procuran la igualdad. La *Ley N° 496/95 modificó el Código Laboral*, estableciendo la igualdad de derechos y obligaciones (artículo 128°), la protección especial para la maternidad y descansos extraordinarios por lactancia (artículos 129° al 135° y 134°), la *proscripción de discriminación salarial por sexo* (artículo 229°) y la *nulidad de los contratos que establezcan diferencia salarial por el sexo* (artículo 47°)<sup>351</sup>. Asimismo, la *Ley N° 834/96 que aprobó el Código Electoral* establece una cuota de género de 20% y sanciones para los partidos políticos que no cumplan con esta disposición, como también el acceso preferente de las embarazadas al momento de ejercer el voto y la *prohibición de contenidos discriminatorios por razón de sexo en las propagandas políticas y electorales*<sup>352</sup>.

Sin embargo, estos avances no se condicen con las opiniones de las Comisiones de la ONU; ello se debe a que Paraguay aún no ha adoptado políticas gubernamentales suficientemente efectivas para procurar la igualdad material de la mujer.

#### 3.4.1.5. Costa Rica

El tratamiento legal de la mujer no ha sido la excepción en esta república caracterizada por ser paradigma del respeto de los derechos humanos en el continente. La **Constitución de 1949** reconoce la igualdad de todos los seres humanos ante la ley (artículo 33°) y la

---

<sup>350</sup> Loc. cit.

<sup>351</sup> SECRETARÍA DE LA MUJER DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY. “Igualdad y derechos entre mujeres y hombres”. Disponible en: [http://www.mujer.gov.py/uploads/areasaccion/I\\_igualdad\\_de\\_derechos\\_entre\\_mujeres\\_y\\_hombres.pdf](http://www.mujer.gov.py/uploads/areasaccion/I_igualdad_de_derechos_entre_mujeres_y_hombres.pdf) (Revisado el 31 de mayo de 2009).

<sup>352</sup> Loc. cit.

prohibición de los actos discriminatorios que atenten contra la dignidad, otorgando a la mujer protección especial por parte del Estado (artículo 51°)<sup>353</sup>.

No obstante, el texto de su artículo 14°.5 pareciera resquebrajar la armonía de la Constitución al establecer que “[l]a mujer extranjera que al casar con costarricense (...)”<sup>354</sup>.

Lo que en un primer momento es la manifestación de la discriminación contra la mujer, terminó siendo nefasta para los varones extranjeros casados con costarricenses a efectos de adquirir dicha nacionalidad. Tan es así que en la década de 1990 un extranjero interpuso una demanda de amparo debido a que la lectura aislada del artículo 14°.5 vulneraba su derecho a obtener la ciudadanía en igualdad de condiciones que las mujeres extranjeras. La Sala Constitucional de la Corte Suprema, a través de la Sentencia N° 3435-92 aprovechó la oportunidad para señalar lo siguiente: “La norma cuestionada [artículo 14.5] contiene una disposición inaplicable por ser contraria a los valores de la Carta Magna, en cuanto a igualdad jurídica y su complemento de no discriminación, tutelados por normas internacionales (...) El beneficio concedido exclusivamente a la mujer extranjera casada con costarricense, constituye un perjuicio del hombre extranjero casado con una costarricense, lo que conlleva a una desventaja porque sustrae beneficios por razones de género, contraviniendo los principios de igualdad y no discriminación”<sup>355</sup>.

Sin embargo, el aspecto más importante de la Sentencia N° 3435-92 es que la Sala Constitucional aprovechó la ocasión para precisar que “*cuando en la legislación se utilicen los términos ‘hombre’ o ‘mujer’, deberán entenderse como sinónimos de ‘persona’, a efecto de eliminar toda posible discriminación ‘legal’ por razones de género, corrección que deben aplicar todos los funcionarios públicos*”<sup>356</sup> (las cursivas son nuestras). Esta cita pone de manifiesto la trascendencia de la lectura sistemática de los dispositivos legales.

---

<sup>353</sup> GEORGETOWN UNIVERSITY, Political Database of the Americas. “Constitución Política de la República de Costa Rica (1949)”. En: <http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Costa/costarica49.html> (Disponible el 15 de mayo de 2009).

<sup>354</sup> Ibidem.

<sup>355</sup> INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER DE COSTA RICA (INAMU). “Derechos de las mujeres. Votos constitucionales y otras sentencias constitucionales”. San José, 2007, p. 6. En: <http://www.inamu.go.cr/derechos-de-las-mujeres/votos.php> (Disponible al 15 de mayo de 2009).

<sup>356</sup> Ibidem.

*Sobre la base de este razonamiento, la Sala Constitucional sentó un precedente útil en la reafirmación de la igualdad formal de la mujer costarricense, debido a que aclaró cualquier norma que tendiera a discriminar a la mujer o a favorecer al varón.*

El esfuerzo del legislador costarricense en la consecución de la referida equidad se refleja en la **Ley N° 7142, Ley de promoción de la igualdad social de la mujer**. Más allá de establecer la obligación del Estado de velar por el respeto de la igualdad de la mujer y de la implementación de medidas, reformó varios cuerpos normativos cuyos artículos discriminaban a la mujer, como el Código de Familia, en lo concerniente a la afectación del inmueble familiar (artículos 42°, 43°, 47° y 138°); Código de Procedimientos Penales, respecto a la denuncia por delitos sexuales o lesiones (artículo 152°); el Código Civil, sobre los derechos y obligaciones en las uniones de hecho (artículo 31°); y Código de Trabajo, relativo a la estabilidad de las gestantes y a su reposición en caso de despido arbitrario (artículos 87° y 94°)<sup>357</sup>.

En líneas generales, la legislación de Costa Rica ha consagrado dispositivos legales destinados a la proscripción de la discriminación contra la mujer, lo que significa el avance en la ruta de la construcción de la igualdad material entre todos los seres humanos.

### **3.4.2. EUROPA**

#### **3.4.2.1. España**

Si bien nuestra realidad no responde a la española, es sabido que se ha incorporado un alto número de sus dispositivos en nuestro ordenamiento.

Si nos remontamos a un análisis histórico, caeremos en cuenta que la legislación española se erigió sobre “un sistema de dominación, muy jerárquico, [que] actuó en dos niveles: “1. Una legislación basada en la discriminación de la mujer: los Códigos Civil (1889), Penal

---

<sup>357</sup> INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER DE COSTA RICA (INAMU). “Ley de promoción de la igualdad social de la mujer”. En: <http://www.inamu.go.cr/derechos/leyes/ley7142.doc> (Disponible el 31 de mayo de 2009).

(1870) y de Comercio (1885). 2. Un control social informal mucho más sutil y, por consecuencia, más eficaz”<sup>358</sup>. Sin embargo, la situación de la mujer en España cambió paulatinamente a lo largo del siglo XIX. Así por ejemplo, la Constitución de 1931 reconoció a través de sus artículos 23º y 36º la proscripción de privilegios jurídicos en razón del sexo y la consagración de la ciudadanía a favor de ambos sexos, respectivamente. De esta manera, “[l]a Constitución republicana no sólo concedió el sufragio a las mujeres sino que todo lo relacionado con la familia fue legislado desde una perspectiva de igualdad de libertad e igualdad: matrimonio basado en la igualdad de los cónyuges, derecho al divorcio, obligaciones de los padres con los hijos”<sup>359</sup>. Sin embargo, la asunción de Franco al poder trajo consigo la reafirmación de los patrones culturales tradicionales españoles, lo que impidió el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

Con el fallecimiento del dictador se restauró el orden anterior a la República, convocándose a una Asamblea para establecer una nueva Carta. En este contexto nace la **Constitución de 1978**, cuyo artículo 1º parte del reconocimiento del Estado inspirado en valores superiores como la dignidad humana y la igualdad de los individuos, reconocida por el artículo 9º como derecho que debe ser tutelado por el Estado. La consagración de la igualdad formal se consigue a través del artículo 14º que a la letra establece: “[l]os españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (el sombreado es nuestro). La adopción de esta cláusula expresa la intención del constituyente de dotar al Texto de una visión de equidad que garantizara a todos los seres humanos la igualdad de trato y de oportunidades como consecuencia del reconocimiento de la anhelada igualdad. La fuerza expansiva del artículo tiene cabida en la igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos, al igual que en el matrimonio y en el trabajo. Sin embargo, existe una tarea pendiente en torno a la sucesión de la Corona mientras se mantenga vigente el texto del artículo 57 que prefiere al varón antes que la mujer como titular de la Corona.

---

<sup>358</sup> PROYECTO CLÍO. “Sufragismo y feminismo: la lucha por los derechos de la mujer (1789-1945)”. Disponible en: <http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/femeespana2.htm> (Revisado el 31 de mayo de 2009).

<sup>359</sup> Loc. cit.



### 3.4.2.2. Polonia

Tras el fin del bloque socialista, el panorama social y económico decayó en Europa oriental. Esta situación se hizo extensiva a países como Polonia en los que ya existía una cultura de exclusión de la mujer en la esfera pública, tal como señala la Organización Mundial contra la Tortura: “[e]l estatus de la mujer en Polonia viene condicionado por un gran número de creencias tradicionales, sociales y culturales que continúan reforzando la idea del rol primario de la mujer, es decir como esposa y madre. La ONG ‘La Strada’ advierte que esta percepción de la mujer se ve reforzada por las leyes polacas y la política del gobierno que prácticamente niega a las mujeres un control de su sexualidad, a causa de la falta de educación sexual en las escuelas, el difícil acceso a la anticoncepción (...) [y] la discriminación en el mercado de trabajo (...) [que se demuestra en] salarios más bajos por un mismo trabajo, pocas oportunidades para ascender o progresar, y (...) [el sometimiento de] las candidatas a un puesto de trabajo [a] que firmen un contrato de ‘no-maternidad’ o de hacerse un test de maternidad antes de ser contratadas”<sup>360</sup>.

Esta situación de inequidad ha sido confirmada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en el 29º período de sesiones (2002), al señalar el sometimiento de la mujer a condiciones dispares de trabajo, en las que es objeto de tratos vejatorios, remuneraciones menores al varón y objeto de acoso sexual<sup>361</sup>.

Sin embargo, esta situación contrasta incluso con la **Constitución de 1952** que reconocía la igualdad de los derechos de la mujer (artículo 78º), al establecer que “[l]a república de Polonia consolidará la posición de las mujeres en la sociedad, especialmente de las madres y de las mujeres empleadas”<sup>362</sup>. En ese mismo tenor, la Carta de 1997 establece en su artículo 30º que “[l]a dignidad, inherente e inalienable a la persona, constituirá una fuente

---

<sup>360</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA (OMCT). “Polonia. Informe presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Disponible en: [http://www.omct.org/pdf/VAW/Publications/2002/ESP\\_2002\\_04\\_Polonia.pdf](http://www.omct.org/pdf/VAW/Publications/2002/ESP_2002_04_Polonia.pdf) (Revisado el 31 de mayo de 2009).

<sup>361</sup> Loc. cit.

<sup>362</sup> INTERNATIONAL CONSTITUTIONAL LAW. « Poland- Constitution 1952 (Extracts) ». Disponible en : [http://www.servat.unibe.ch/law/icl/pl01000\\_.html](http://www.servat.unibe.ch/law/icl/pl01000_.html) (Revisado el 31 de mayo de 2009).

de derechos de las personas”<sup>363</sup>, siendo complementado a través de la consagración del carácter irrestricto de los derechos fundamentales, los cuales cederán sólo frente a situaciones de orden público, conforme expresa el artículo 31<sup>o</sup><sup>364</sup>. A partir del artículo 33<sup>o</sup> que se consagra la igualdad de los varones y mujeres en el ejercicio de sus derechos tanto en la vida familiar, política, social y económica<sup>365</sup>; sin embargo, como se ha señalado, la situación de la mujer en Polonia dista mucho del espíritu de equidad establecido en su Constitución.

### **3.4.2.3. Francia**

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 influyó notablemente en la construcción de los derechos humanos. Sin embargo, durante la revolución, la triada “igualdad, fraternidad y solidaridad” sólo alcanzó a los ciudadanos, es decir, varones franceses letrados y titulares de propiedad. Excluida, la mujer se organizó en movimientos que propugnaban la igualdad de la mujer ante la ley, como el de Olympe de Gouges y su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791.

Sin embargo, esta situación persiste de manera asolapada en Francia. Como señaló la representante francesa al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 1993, “la mentalidad francesa (...) [sigue] estando influenciada por el código napoleónico, que había asignado a las mujeres una posición inferior en la sociedad”<sup>366</sup>. Agregó que si bien “se habían realizado considerables adelantos, (...) la mujer seguía sufriendo a causa de esa herencia”<sup>367</sup>.

La Constitución de 1958 consagra la igualdad de todos los seres humanos en su Preámbulo, asegurando a través de su artículo 2<sup>o</sup> “la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin

---

<sup>363</sup> Loc. cit.

<sup>364</sup> Loc. cit.

<sup>365</sup> Loc. cit.

<sup>366</sup> Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. “Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: France. 27/01/93”. Disponible en: [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/A.48.38,paras.327-358.Sp?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.48.38,paras.327-358.Sp?Opendocument) (Revisado el 31 de mayo de 2009).

<sup>367</sup> Loc. cit.

distinción de origen, raza o religión”<sup>368</sup>. Sin embargo, no se refiere a la originada en el sexo, aunque tal omisión es subsanada a través del artículo 3.4 que consagra la igualdad en el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Vemos que la actual Constitución Política de Francia parte del reconocimiento de la igualdad de todos los seres humanos ante la ley y de la proscripción de la discriminación; no obstante, Francia carece de dispositivos que expresamente se refieran a la consagración de acciones positivas destinadas a superar las brechas que aún existen para las mujeres en la sociedad francesa.

### **3.5. MARCO TEÓRICO EN SENTIDO ESTRICTO**

#### **3.5.1. La igualdad**

Definir la igualdad resulta una tarea ciertamente compleja, pues dicho término –más allá del concebido por la RAE como “[c]onformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad”<sup>369</sup>- engloba una naturaleza dual, como principio y derecho. *En su primera acepción, la igualdad es una calidad abstracta que se proyecta sobre una serie indeterminada de bienes que debe garantizar y proteger, mientras que como derecho fundamental es un mecanismo utilizado para exigir un trato equitativo ante la ley*<sup>370</sup>.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado señalando que “la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual *es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad*. No es admisible crear

---

<sup>368</sup> ASSEMBLEE NATIONALE FRANÇAISE. « Constitution of 4 October 1958 ». Disponible en : <http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp> (Revisado el 31 de mayo de 2009).

<sup>369</sup> RAE. Op. cit. Disponible en: [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=igualdad](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=igualdad) (Revisado el 19 de mayo de 2009).

<sup>370</sup> GUTIERREZ CAMACHO, Walter (Coordinador). “La Constitución comentada”. Tomo I. Gaceta Jurídica. Lima, 2006, pp.48-49.

diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza”<sup>371</sup> (las cursivas son nuestras).

El último extremo de la anterior cita refiere un tema de suma importancia si consideramos que ningún ser humano es igual a otro. Asumir que las mujeres y los varones son iguales constituye una falacia debido a que las singulares características de ambos sexos y la situación en la que ambos grupos se encuentran en la realidad los hacen distintos; sin embargo, esa diferencia no constituye óbice para sustentar un trato discriminatorio en contra de alguno de ellos o para negar la ejecución de medidas destinadas a equiparar a ambos colectivos en el pleno ejercicio de sus derechos.

Al respecto, Pietro Sanchís considera que “como primera aproximación que mediante la igualdad *‘se describe, se instaure o se prescribe una relación comparativa entre dos o más sujetos u objetos que poseen al menos una característica relevante en común’*. Por consiguiente, el juicio de igualdad excluye tanto la identidad como la mera semejanza. Excluye la identidad porque parte de la diversidad, esto es, parte de dos sujetos distintos, pero respecto de los cuales se hace abstracción de las diferencias para subrayar su igualdad en atención a una característica común”<sup>372</sup> (las cursivas son nuestras).

Sobre el particular, Pérez Luño considera que la producción de la identidad está condicionada a “cuando dos o más objetos tienen en común todos sus elementos o características”<sup>373</sup>, panorama distinto a la configuración de la igualdad, la cual “supone una identidad parcial, es decir, la coincidencia de dos o más objetos en unos elementos o características desde un determinado punto de vista y haciendo abstracción de los demás”<sup>374</sup>.

---

<sup>371</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. “Opinión Consultiva OC-4/84, del 19 de enero de 1984. Propuesta de modificación a la Constitución política de Costa Rica relacionada con la naturalización”. San José de Costa Rica, 1984, párrafo 57. Disponible en: [http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_04\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf) (Revisado el 11 de mayo de 2009).

<sup>372</sup> PIETRO SANCHÍS, Luis. “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”. En: *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*. CEP. N° 25. Madrid, 1995, p. 23.

<sup>373</sup> PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. “Sobre la igualdad en la Constitución española”. En: *Anuario de Filosofía del Derecho*. N° IV. Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política. Madrid, 1987, p. 134.

<sup>374</sup> Loc. cit.

En efecto, de la comparación entre los varones y las mujeres se concluirá que aunque no comparten la misma identidad, ello no constituye óbice para que determinado colectivo goza plenamente de sus derechos, mientras que el otro se encuentra restringido en el mismo, lo cual revela que unos son privilegiados y los otros discriminados. En tal sentido, el término de comparación se hace necesario para advertir que los dispositivos legales no encuentran eficacia en la realidad y que se requiere la implementación de medidas que respondan a los problemas identificados en la realidad en lo que respecta a las mujeres.

Por su parte, Cantón afirma que “la igualdad como idea guía, rectora de la convivencia humana implica para los seres humanos pretensiones de bienes y derechos, armonía y progreso social. En pocas palabras, la igualdad, desde esta óptica, encierra en sí misma una promesa de *libertad para todos* los miembros de la especie humana”<sup>375</sup>. Esta perspectiva es útil pues nos permite construir el objetivo a ser alcanzado a través de la igualdad: la convivencia armónica entre los diferentes grupos que conforman nuestra sociedad, dentro de los que destaca el de las mujeres, que históricamente se han visto privado del pleno ejercicio de sus derechos.

Asimismo, Pérez Portilla considera que “el término ‘igualdad’ (griego, *isotes*; latín, *aequitas*, *aequalitas*; francés, *égalité*; alemán, *Gleichheit*; inglés, *equality*) se refiere a una relación cualitativa. *La igualdad significa correspondencia entre un grupo de diferentes objetos, personas, procesos o circunstancias que tienen las mismas cualidades en por lo menos algún aspecto*, pero no en todos, es decir, debe considerarse alguna característica en específico. Por tanto, debe distinguirse entre igualdad e ‘identidad’. Esta última significa que un y el mismo objeto corresponde a sí mismo en todas las características: nombre y descripción, por ejemplo. Asimismo, debe distinguirse entre identidad y ‘similitud’, dado que este último concepto se refiere a una mera aproximación en algún sentido. Por tanto,

---

<sup>375</sup> CANTÓN, Octavio. “Igualdad, necesidades y derechos”. En: DE LA TORRE MARTÍNEZ, Carlos (Coordinador). *Derecho a la no discriminación*. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México D.F., 2006, p. 19.

decir que ‘los hombres son iguales’ no significa que sean idénticos”<sup>376</sup> (las cursivas son nuestras).

Lo anotado por dicho autor es sumamente interesante, pues aborda el estudio de la igualdad sobre las cualidades comunes que comparten los grupos, las que en el caso de las mujeres y de los varones es su titularidad de derechos fundamentales, presupuesto del cual se reconoce que ambos deben contar con mecanismos efectivos que garanticen el disfrute de los mismos.

No obstante, Pérez Portilla considera que “un juicio sobre la igualdad presume una diferencia entre las cosas que se comparan. (...). La igualdad consiste esencialmente en una relación tripartita entre dos o más objetos o personas y una o varias cualidades. Es decir, dos objetos *a* y *b* son iguales porque comparten cierto aspecto. Mediante la igualdad se describe, se instauro o se prescribe una relación comparativa entre dos o más sujetos u objetos que poseen al menos una característica relevante en común”<sup>377</sup>.

En lo que respecta al tema de estudio, las diferencias fisiológicas de varones y de mujeres no constituye presupuesto objetivo que sustente un trato privilegiado a favor de uno de los grupos, sino –todo lo contrario–, determina la obligación de asumir un análisis sobre los datos objetivos que permitan identificar los rasgos comunes que estos comparten, como su titularidad de derechos fundamentales, para sustentar que ambos merecen disfrutar igualmente de ellos.

Por ello, “las diferencias (...) no son otra cosa que los rasgos específicos que diferencian y al mismo tiempo individualizan a las personas y que, en cuanto tales, son tutelados por los derechos fundamentales. (...) Las diferencias son tuteladas y valorizadas, frente a discriminaciones o privilegios, por el principio de *igualdad formal* en los derechos fundamentales de libertad. En tanto que las desigualdades, si no son completamente removidas, al menos se intentan reducir o compensar por aquellos niveles mínimos de

---

<sup>376</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México D.F., 2005, p. 5.

<sup>377</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., p. 6.

*igualdad material* que están asegurados por la satisfacción de los derechos fundamentales sociales”<sup>378</sup>.

En efecto, las diferencias son los rasgos que singularizan a varones y a mujeres, pero no constituyen argumentos suficientes que permitan distinguir a unos de otros en lo que respecta a su titularidad en cuanto a derechos fundamentales y al acceso de las prestaciones de los mismos se refiere.

Esto lleva a Cantón a considerar que “la igualdad entendida así, como valor rector de las relaciones humanas es, en términos generales, uno de los conceptos más maleables –si se nos permite el término-, dóciles e interpretables que podemos encontrar en ciencias sociales y por tanto uno de los que suscitan mayor polémica y confusión. Esta multiplicidad de interpretaciones y contenidos deviene principalmente de su estrecha relación con lo éticamente deseable y correcto, con lo que es o debiera de ser de todos, con lo justo. Podemos afirmar que –y en esto suelen coincidir prácticamente todas las posturas- la lucha ética que es también la lucha por la justicia ha ido siempre unida a la búsqueda de determinadas cuotas de igualdad”<sup>379</sup>. En tal sentido, “*la igualdad puede ser una exigencia ética ‘fuerte’ verdaderamente emancipadora*. La labor de quien apuesta a favor de la igualdad consistirá en tratar de hallar esa apta para establecer un orden social justo, entendiendo por este (...) ese capaz de erradicar las desigualdades minusvaloradas existentes entre los seres humanos –formal y materialmente hablando-, que impiden el ejercicio pacífico de la libertad”<sup>380</sup> (las cursivas son nuestras).

Vemos que Cantón aborda el análisis de la igualdad también desde una perspectiva valorativa, la cual no debe ser desdeñada, pues a pesar de contener elementos subjetivos, trasciende esta perspectiva al encontrar en referentes objetivos, como la interpretación, mecanismos que le permiten una suerte de positivización, al concretar tales anhelos en dispositivos legales dirigidos a resguardar la cláusula de igualdad, como es en el caso

---

<sup>378</sup> Ibidem, p. 16.

<sup>379</sup> CANTÓN, Octavio. “Igualdad, necesidades y derechos”. Op. cit., pp. 19-20.

<sup>380</sup> Ibidem, p. 22.

peruano el artículo 2° inciso 2 de la Constitución, del que se desprende la igualdad entre varones y mujeres.

### **3.5.1.1. Dimensiones de la igualdad**

#### **a. Principio de igualdad**

Una aproximación al concepto de principio jurídico lo encontramos en Zagrebelsky, quien expresa que los principios “dicen por un lado, de qué pasado se proviene, en qué líneas de continuidad el Derecho Constitucional actual quiere estar inmerso; por otro, dicen hacia qué futuro está abierta la constitución. Los principios son, al mismo tiempo, factores de conservación y de innovación, de una innovación que consiste en la realización siempre más completa y adecuada a las circunstancias del presente del germen primigenio que constituye el principio”<sup>381</sup>.

Estas consideraciones llevan a Alexy a pensar que “los principios son (...) mandatos de optimización que se caracterizan porque pueden ser cumplidos en diversos grados y porque la medida ordenada de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades fácticas, sino también de las posibilidades jurídicas”<sup>382</sup>. Ello determina que los principios sean conceptos abiertos y de gran fuerza expansiva que dejan la posibilidad de nuevos procesos de interpretación sobre la base de casos venideros que estarán configurados sobre la base de notas distintivas que deberán de ser tomadas en consideración por el operador al aplicarlos.

Siendo tal el concepto de principio, consideramos necesario abordar el estudio del principio de igualdad, ya que se constata su utilidad en la construcción de la igualdad material de la mujer.

La igualdad es un principio porque “marca el criterio que rige la conducta a seguir en determinadas situaciones y permea al ordenamiento jurídico en su conjunto cuando unifica

---

<sup>381</sup> ZAGREBELSKY, Gustavo. “Historia y constitución”. Trotta, Madrid, 2005, p. 89.

<sup>382</sup> ALEXY, Robert. “Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica”. En: *Doxa. Cuadernos de filosofía del Derecho*. Universidad de Alicante. Alicante, 1988, p. 143.



a los sujetos en la titularidad de aquellos derechos que –en cuanto reconocidos y garantizados a todos y en igual medida- son llamados ‘universales’ o ‘fundamentales’. *La igualdad jurídica es, entonces, un principio normativo sobre la forma universal de los derechos* que se ha convenido sean fundamentales: del derecho a la vida a los derechos de libertad y de los derechos políticos a los sociales”<sup>383</sup> (las cursivas son nuestras).

El principio de igualdad constituye un mecanismo de suma utilidad para que las mujeres arriben a la igualdad sustancial, ya que permite interpretar la serie de dispositivos y de protocolos de comportamiento establecidos por agentes estatales y particulares, a efectos de dotarlos de un contenido que garantice la igualdad en los hechos de este amplio sector de la población peruana.

Cabe anotar que Pacheco, Torres y Tojo refieren que “en cuanto al principio de igualdad, hay que señalar que la igualdad no se define a partir de un criterio de semejanza, sino de *justicia*: se otorga el mismo valor a personas diversas, integrantes de una sociedad. La igualdad es importante justamente entre diferentes, ya que se trata de una convención social, de un pacto, según el cual se reconoce como iguales a quienes pertenecen a distintos sexos, razas, etnias, clases sociales, etc. El principio de igualdad está estrechamente relacionado con el ejercicio de la tolerancia: el reconocimiento del otro o de la otra como igual, es decir, que siendo distinto o distinta a mí, tiene los mismos derechos y responsabilidades”<sup>384</sup> (las cursivas son nuestras).

Consideramos interesante la postura asumidas por las mencionadas autoras, pues nuevamente nos lleva a un plano subjetivo, como es el de la justicia. Sin embargo, ¿no es la igualdad sustancial de la mujer concreción de la justicia? La respuesta es afirmativa, lo cual permite abandonar el plano subjetivo para transitar por uno objetivo en el que la constatación de la equidad de trato y de oportunidades de la mujer se constituye en un resultado objeto de evaluación en cuanto a la aplicación del principio de igualdad en lo que

---

<sup>383</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., p. 15.

<sup>384</sup> PACHECO, Gilda, TORRES, Isabel y TOJO, Liliana (Coordinadoras). “Los derechos humanos de las mujeres: Fortaleciendo su promoción y protección internacional. De la formación a la acción”. Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos. San José de Costa Rica, 2004, p. 85.

se refiere a la implementación de medidas dirigidas a superar la situación de inequidad material.

Por ello, Pietro Sanchís afirma que “el principio de igualdad se traduce en una exigencia de fundamentación racional de los juicios de valor que son inexcusables a la hora de conectar determinada situación -con exclusión de otras situaciones- a una cierta consecuencia jurídica; la referencia a los criterios materiales (necesidades, méritos, etc.) a la razonabilidad y a la proporcionalidad es, por tanto, una remisión a la justificación racional de la decisión. Las igualdades y desigualdades de hecho no son más que el punto de partida para construir igualdades y desigualdades normativas, cuya justificación no puede apelar sólo a la mera facticidad”<sup>385</sup>.

## **b. Derecho fundamental a la igualdad**

Los derechos fundamentales son aquellos concebidos en la Constitución Política como propios de la persona humana. Ello determina que el primer rasgo formal de su concepción sea que los derechos fundamentales son el resultado de la positivización de los derechos humanos, es decir, de aquellos atributos connaturales al ser humano, cuyo reconocimiento unánime en la comunidad internacional ha determinado que el legislativo reconozca la necesidad de incorporarlos en la Carta Política.

En el caso de la igualdad, vemos que su inclusión como derecho fundamental ha sido realizado en la cláusula contenida en el artículo 2º inciso 2 de la Constitución Política, lo cual nos lleva a afirmar que, como todo ser humano, *la mujer es titular del derecho fundamental a la igualdad*.

La importancia del reconocimiento del derecho de la mujer a la igualdad la encontramos en Pérez Royo, quien sostiene que, como derecho fundamental, “puede abarcar las dos dimensiones en las que aparecen los derechos, sin incurrir en los reduccionismos

---

<sup>385</sup> PIETRO SANCHÍS, Luis. “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”. Op. cit., pp. 25-26.

iusnaturalista o positivista [debido a que] los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad (...) como una juridicidad básica”<sup>386</sup>.

Esta doble vertiente del derecho fundamental a la igualdad nos permite comprender la titularidad de la mujer de él, lo que resulta importante en la construcción de la ansiada igualdad de hecho, pues parte de un aspecto netamente subjetivo (como puede ser la moral) y se traslada a uno objetivo (como es el Derecho), permitiéndonos asegurar que frente a cualquier situación en la que no medie un parámetro debidamente justificado que establezca un razonamiento a una conducta diferenciadora, la mujer podrá valerse de su titularidad sobre el derecho a la igualdad para interponer una demanda de amparo por considerarse vulnerada en el ejercicio pleno de este derecho.

A fin de sustentar esta idea, recogemos un informe del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, el cual precisa que “el derecho a la igualdad y a la no discriminación están reconocidos en los instrumentos normativos generales y específicos sobre derechos humanos. (...) *El tipo de igualdad reconocida en los instrumentos generales sobre derechos humanos, tiene un fuerte contenido androcéntrico*”<sup>387</sup>. Es decir, fue pensada para equiparar a la mujer con el hombre, tomando a este como el parámetro genérico a igualar y sin grandes planteamientos acerca de que la igualdad para las mujeres no significa semejanza con los hombres”<sup>388</sup> (las cursivas son nuestras).

Lo expresado en la glosa anterior reviste singular importancia, puesto que revela que el estudio del derecho a la igualdad ha sido formulado tomando como referente al varón, entendido como sujeto concebido como actor en la esfera pública, mas no así a la mujer, debido a que su incorporación en dicho ámbito ha sido reciente y no ha permitido que se construya una concepción más amplia del derecho a la igualdad. No obstante, consideramos

---

<sup>386</sup> PÉREZ ROYO, Javier. “Curso de Derecho Constitucional”. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Barcelona, 2006, p. 28.

<sup>387</sup> “Se entiende por androcentrismo, la organización del mundo, sus estructuras económicas y socioculturales, a partir de la imagen del hombre: una percepción del mundo con base en el patrón masculino, donde el hombre ha sido considerado como parámetro y único protagonista de la historia y el desarrollo” (PACHECO, Gilda, TORRES, Isabel y TOJO, Liliana (Coordinadoras). “Los derechos humanos de las mujeres: Fortaleciendo su promoción y protección internacional. De la formación a la acción” Loc. cit., p. 92).

<sup>388</sup> Loc. cit.

que el conocimiento de una serie de casos en los que las mujeres revelan la ilegal diferenciación a la que son sometidas constituye un importante punto de partida para que la visión androcéntrica ceda a una más plural, consciente de una realidad en la que la mujer se rebela frente a la serie de injusticias de la que es víctima, exigiendo el pleno resguardo de su derecho a la igualdad.

Una muestra de la ampliación del concepto del derecho a la igualdad lo encontramos en el *Institut de Drets Humans de Catalunya* (Instituto de Derechos Humanos de Cataluña), el cual define al derecho a la igualdad de la mujer como aquel que “significa que las mujeres en todas las sociedades y de todo pueblo sin excepción tienen derecho a la igualdad de status jurídico, político, económico, social, laboral y cultural en relación con los hombres”<sup>389</sup>.

Este concepto es útil, pues no se restringe a reconocer el derecho de la mujer a la igualdad, sino que toma como referente los diversos planos en los que la mujer se ha incorporado, ya que de ellos brotan verdades materiales, como son la restricción en el acceso a puestos de trabajo, la remuneración menor en relación a los varones que desempeñan sus mismas funciones o el incumplimiento de las cuotas de género en las listas electorales, entre otros tópicos que constatan el desconocimiento del derecho de la mujer a la igualdad.

### **3.5.1.2. Clases de igualdad**

A continuación expondremos la igualdad a través de su dimensión jurídica y material, con el propósito de detallarla ampliamente.

#### **3.5.1.2.1. Igualdad jurídica entre el varón y la mujer**

La igualdad jurídica o formal corresponde a la primera fase de evolución del concepto de igualdad, ya que esta “*no pretende modificar la realidad sino incidir sobre la*

---

<sup>389</sup> INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA. “Orientación sexual e identidad de género. Los derechos menos entendidos”. Serie Carta de derechos humanos emergentes. N° 3. Cataluña, 2007, p. 4.

*regulación*”<sup>390</sup>, es decir que sus destinatarios sean tratados de manera equitativa. Sin embargo, como apunta Susana Mosquera, la concepción formal de la igualdad “puede provocar nuevas desigualdades pues cuando la ley establece el puro igualitarismo desatiende la existencia de situaciones o circunstancias que justifican un trato diferente”<sup>391</sup>, situación que ha tratado de ser superada, sin mayor éxito, a través del establecimiento de tres subcategorías dentro de la igualdad formal.

En tal sentido, la igualdad jurídica “no será otra cosa que la idéntica titularidad y garantía de los mismos derechos fundamentales independientemente del hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que los titulares son entre sí diferentes. En efecto, independientemente de la igualdad jurídica en la titularidad de los derechos fundamentales, todas las personas son de hecho diferentes unas de otras por diferencias de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas y condiciones personales y sociales, entre otras”<sup>392</sup>.

#### **a. La igualdad de la mujer ante la ley**

Consagrada en el artículo 2º.2 de la Constitución, esta subcategoría no responde a la realidad desigual, sino que *busca equiparar a todas las personas confiriéndoles los mismos derechos*; en consecuencia, se desprende la proscripción de toda clase de discriminación, incluida la originada en cuestiones de género, pues como señala Otoya Calle, “atendiendo a la igualdad ante la ley todos se someten por igual al ordenamiento jurídico, y de la misma manera, todos tienen igual derecho a recibir la protección a sus derechos que el ordenamiento les reconoce”<sup>393</sup>.

En sus orígenes la igualdad ante la ley era “un precepto rupturista con un pasado desigualitario de la sociedad estamental: se rechazaban privilegios y exenciones, y se

---

<sup>390</sup> *Ibidem*; p. 17.

<sup>391</sup> MOSQUERA MONELLOS, Susana (Coordinadora). “El derecho fundamental de igualdad”. Editorial Palestra. Lima, 2006, p. 21.

<sup>392</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. *Op. cit.*, p. 15.

<sup>393</sup> OTOYA CALLE, Johan. “Igualdad de oportunidades”. Organización Internacional del Trabajo. Lima, 2006, p. 17. Disponible en: <http://www.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/edob/agora/pdf/oportunidad1.pdf> (Revisado el 25 de mayo de 2009).

somete al conjunto de ciudadanos a un mismo ordenamiento jurídico igual para todos. La implantación de un sistema regulador de carácter igualitario, marca así el paso del privilegio al derecho”<sup>394</sup> a través de la generalidad de la ley, “definida como una regla social obligatoria establecida con carácter permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza”<sup>395</sup>.

En efecto, Álvarez señala que “hacia mediados siglo XVIII, el pensamiento ilustrado y gran parte de la filosofía política (...) [sostenía] que los hombres [eran] todos iguales ante la ley porque poseen características universales, (razón, dignidad). Este principio de igualdad se correspondía con la necesidad de desterrar la organización estamentaria de la sociedad, basada en los privilegiados de la monarquía”<sup>396</sup>.

*Sin embargo, el establecimiento de una subcategoría tan rígida no contribuye al desarrollo de la plena igualdad de todas las personas, debido a que es ajena a la realidad como escenario en que los preceptos constitucionales habrán de ser aplicados.*

Por ello es que Vivanco Martínez sostiene que “probablemente el gran tema de las sociedades pluralistas, y sobre todo de aquellas que han vivido previamente experiencias de pluralismo restringido (...), consiste en el alcance de la igualdad en cuanto a la participación y desenvolvimiento de grupos contrapuestos respecto de los valores y de las aspiraciones, es decir, a *la tolerancia que debe tener en razón de ellos el sistema para reconocerlos en virtud precisamente que sus miembros son iguales en dignidad y en derechos*, en relación de las demás personas que forman parte de la sociedad, garantizando ello a través de un ordenamiento jurídico acorde”<sup>397</sup> (las cursivas son nuestras).

Para mayor abundamiento, Mosquera considera que el planteamiento de la igualdad ante la ley “se presenta como un límite a la actuación de los poderes públicos que impide la

---

<sup>394</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., p. 48.

<sup>395</sup> Ibidem, p. 51.

<sup>396</sup> ÁLVAREZ, Luciana. “La igualdad ante la ley y el principio de nacionalidad”. En: *Revista telemática de filosofía del Derecho*. N° 9. Filosofía y Derecho. Madrid, 2005, p. 130.

<sup>397</sup> VIVANCO MARTÍNEZ, Ángela. “La garantía constitucional de la igualdad ante la ley: ¿De qué igualdad estamos exactamente hablando? En: *Revista chilena de Derecho*. Volumen 26, N° 1. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile, 1999, p. 177.

arbitrariedad, es decir, que impide tratar de modo desigual sin justificación o fundamento a personas que se encuentran en iguales condiciones”<sup>398</sup>, que, de acuerdo al contexto del artículo 2º.2, somos todas las personas, más allá de las particulares características que nos diferencian y que determinan que el resto de seres humanos reciban un trato diferenciado, sustentado en atributos meramente subjetivos.

Por tal motivo, la igualdad ante la ley “se extiende desde las legítimas exigencias que son parte de una sociedad respetuosa de los derechos de las personas, como por ejemplo no condicionar la contratación a elementos raciales, no discriminar a la hora de dar oportunidades de educación o de especialización entre hombres y mujeres, no hacer depender la participación política del nivel socioeconómico de la persona, no imponer exigencias adicionales respecto del ejercicio de los derechos y libertades fundadas en la pertenencia a cierto sector o estrato social, etc.”<sup>399</sup>.

#### **b. La igualdad de la mujer en la ley**

A diferencia de la anterior subcategoría, la igualdad en la ley aborda la desigualdad entre los diversos colectivos. Esta impone al legislador la obligación de identificar las circunstancias que dificultan el ejercicio pleno de los derechos de ciertos grupos (mujeres, afrodescendientes, etc.) a fin de *establecer diferenciaciones normativas amparadas en un fin válido y legítimo que permitan la superación del plano de inequidad*, con lo cual se tendrán patrones objetivos y razonables de justificación que sustenten la diferencia, pues de lo contrario se estaría incurriendo en la expedición de un dispositivo discriminatorio.

Por ello, Sánchez Gil considera que “el principio de igualdad en la ley se traduce para la autoridad legislativa en la obligación de tratar idénticamente situaciones análogas y sólo

---

<sup>398</sup> MOSQUERA MONELLOS, Susana (Coordinadora). “El derecho fundamental de igualdad”. Op. cit., p. 22.

<sup>399</sup> VIVANCO MARTÍNEZ, Ángela. “La garantía constitucional de la igualdad ante la ley: ¿De qué igualdad estamos exactamente hablando? Op. cit., p. 180.

hacerlo en forma diferente cuando no se asimilen; como ampliamente se sabe, lo expresa el apotegma ‘tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales’<sup>400</sup>.

Por su parte, Pérez Portilla señala que “se impone al legislador que respete (...) el principio de igualdad en el contenido de la norma y supone la posibilidad de que introduzca diferencias de trato cuando con ellas se alcance una igualdad en los hechos (...). La imposición de llevar la igualdad al contenido de la ley, dirigida al legislador, se realiza de la única manera en que se puede realizar: recogiendo el principio de igualdad en las Constituciones y estableciendo un control de constitucionalidad. Es, en términos generales, una ampliación de la igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley, a través de la exigencia de razonabilidad en el contenido de la ley”<sup>401</sup>.

Sánchez Gil ahonda sobre esta tema precisando que “las diferencias entre dos objetos cuya similitud se admita previamente, deben ser puestas de manifiesto y señaladas por quien busque su distinción; por ello, jurídicamente (normativamente) ‘la regla debe ser la igualdad [en el trato a situaciones análogas]; las desigualdades deben ser la excepción’, deduciendo de ello que ‘la igualdad no tiene necesidad de justificarse. *El deber de justificación pesa, en cambio, sobre las desviaciones de la igualdad*’”<sup>402</sup>.

Por tal motivo, “la igualdad en la ley se analiza así, como una conminación dirigida a aquellos que hacen el Derecho a no cometer desigualdades, lo cual puede tener dos implicancias diferentes. Una primera es que la ley debe tratar todas las situaciones de igual manera (...), en donde toda diferenciación o intervención específica supone una modificación a la igualdad abstracta establecida entre los ciudadanos. La segunda interpretación se refiere a que la ley no debe establecer en sí misma discriminaciones injustificadas. Las diferencias de tratamiento no están autorizadas a menos que sean razonables. Esta facultad dada al legislador de crear distinciones constituye un cierto progreso hacia una igualdad ya no sólo ante la ley o en su aplicación. Se trata de una forma

---

<sup>400</sup> SÁNCHEZ GIL, Rubén. “El principio de proporcionalidad”. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México D.F., 2007, p. 106.

<sup>401</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., p. 87.

<sup>402</sup> SÁNCHEZ GIL, Rubén. “El principio de proporcionalidad”. Op. cit., pp. 106-107.



más exigente del principio, con muchas aristas y varios riesgos, porque la igualdad puede devenir así un principio de voluntad política, un principio ambiguo que puede revertir múltiples facetas, dado que la selección de las propiedades a tomar en cuenta para determinar el alcance de la igualdad podría ser subjetivo y coyuntural”<sup>403</sup>.

Sin embargo, debe tenerse presente que por más que exista intención de superar la desigualdad formal de la mujer a través de la igualdad en la ley, *esta no prosperará mientras no exista una cultura de tolerancia y de igualdad entre todos los seres humanos*, que sirva como presupuesto de eficacia de las leyes que pretenden la igualdad material.

### **c. La igualdad de la mujer en la aplicación de la ley**

Como señala Pérez Portilla, “la igualdad ante la ley progresivamente será entendida como igualdad en la aplicación de la ley: ya no se trata solamente de que la ley sea general e impersonal, sino de que su aplicación por los poderes públicos encargados de esa tarea se haga ‘sin excepciones y sin consideraciones personales’. El principio de igualdad se interpreta así como ‘aplicación de la ley conforme a la ley’ como una aplicación regular, correcta, de las disposiciones legales, sin otras distinciones de supuestos o casos, que los determinados por la norma legal. Se rompería así la igualdad, no sólo si la ley por no ser norma general no contuviese una posibilidad igualdad, sino también si al aplicarse esa norma general, no se hiciera con abstracción de las personas concretas afectadas”<sup>404</sup>. Así, pues “se trata (...) de una prohibición general de arbitrariedad en donde el principio de igualdad es un instrumento que declarará su utilidad de una manera más precisa a través de la igualdad en el contenido de la norma”<sup>405</sup>.

En tal sentido, jurídicamente es inadmisibles la aplicación distinta de principios y de derechos en casos sustancialmente similares, ya que el desconocimiento de las líneas que los definen como tales, constituyen omisiones en la debida aplicación del Derecho y, en consecuencia, generan una seria deficiencia en lo que respecta a la aplicación de los

---

<sup>403</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., pp. 91-92.

<sup>404</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., pp. 61-62.

<sup>405</sup> Ibidem, p. 63.

dispositivos jurídicos por parte de los operadores del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Pérez Portilla ahonda señalando que “se aprecia (...) una manifestación mucho más clara del principio de igualdad como ‘igualdad en la aplicación de la ley’ en la actuación judicial, a través de la vinculación del Poder Judicial al principio de igualdad por medio de la creación de un sistema de precedentes obligatorios, los cuales obligan a los jueces inferiores a decidir casos que sean sustancialmente iguales o parecidos a otros resueltos con anterioridad, tomando en cuenta las razones consideradas en los primeros en el tiempo. Así, se vulnerará el principio de igualdad en la aplicación de la ley, cuando un mismo precepto se aplique en casos iguales con notoria desigualdad por motivaciones arbitrarias. La institución que realiza (...) la igualdad en la aplicación de la ley es la jurisprudencia”<sup>406</sup>.

La igualdad en la aplicación de la ley determina que los operadores judiciales se encuentran en la obligación de resolver de manera similar en casos similares; es decir, esto se aprecia con mayor claridad en lo que a los precedentes vinculantes respecta, ya que la regla establecida en ellos es de aplicación obligatoria en los casos que contengan supuestos fácticos de igual naturaleza a las del caso que sirvió como referente para su establecimiento.

Sin embargo, la igualdad en la aplicación de la ley no sólo se restringe a los precedentes vinculantes, sino que transita por todos los dispositivos de nuestro ordenamiento jurídico, en la medida que en ellos se expresan los presupuestos fácticos y las consecuencias jurídicas de las conductas y de las omisiones, por lo que resulta obvio que, por ejemplo, para todas las personas es igualmente aplicable la cláusula de la motivación de las resoluciones judiciales (contenida en el artículo 139° inciso 5 de la Constitución), como el reconocimiento de la pensión, al cumplir con los presupuestos establecidos en la Carta Política y en los cuerpos normativos que regulan la materia.

---

<sup>406</sup> Ibidem, p. 64.

Por ello, “dos datos deben destacarse en esta configuración de la igualdad: por un lado, la igualdad de situaciones (sustancialmente iguales) y la idea de arbitrariedad, y no razonabilidad (o motivación) de la diferencia de solución dada, de actuación de forma desigual en supuestos sustancialmente iguales. Sin embargo, la propia dinámica jurídica exige también una razonable evolución en la interpretación y aplicación de la legalidad concretada en un cambio de criterio que legitima las diferencias de tratamiento. (...) Es decir, no es el cambio de criterio, sino la injustificación del mismo, lo que vedaría el principio de igualdad y correspondería (...) la determinación de la existencia o inexistencia de justificación”<sup>407</sup>.

A través de la igualdad en la aplicación de la ley se procura la proscripción de todo trato discriminatorio al impartir el Derecho. Esto implica que los administradores de justicia no apliquen “de manera distinta una misma ley a personas que se encuentran en casos o situaciones similares”<sup>408</sup>, obligación jurisdiccional que encuentra asidero en la observancia del debido proceso, consagrada en el artículo 139°.3 de la Constitución Política y que forma parte del modelo constitucional del proceso, conforme ha establecido el Tribunal Constitucional:

“En lo que respecta al derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución, cabe señalar que dicho atributo fundamental forma parte del ‘modelo constitucional del proceso’, cuyas garantías mínimas deben ser respetadas para que el proceso pueda considerarse debido. En ese sentido, la exigencia de su efectivo respeto no sólo tiene que ver con la necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías mínimas cuando este participa en un proceso judicial, sino también con la propia validez de la configuración del proceso (...). De esta forma, el debido proceso no sólo es un derecho de connotación procesal que se traduce (...) en el respeto de determinados atributos, sino también una institución compleja que desborda el ámbito meramente jurisdiccional”<sup>409</sup>.

---

<sup>407</sup> Ibidem, pp. 70-72.

<sup>408</sup> OTOYA CALLE, Johan. “Igualdad de oportunidades”. Op. cit., p. 20.

<sup>409</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02521-2005-HC, Fundamento Jurídico N° 5.

Esta cita jurisprudencial incide en esta vertiente de la igualdad, pues determina la obligación de los operadores administrativos y jurisdiccionales de brindar un trato equitativo a los sujetos procesales, imponiéndoles examinar “con criterios objetivos la oportunidad de la medida o decisión adoptada”<sup>410</sup>, lo cual no obsta la aplicación de un trato diferenciado, siempre y cuando se ajuste a la consecución de un objetivo constitucionalmente válido, como el ejercicio de un derecho o la protección de un bien jurídico.

Al respecto, las palabras de Kelsen resultan esclarecedoras, al señalar que “la conocida frase que afirma que la justicia significa dar a cada uno lo suyo (...) ha sido aceptada por notables pensadores y especialmente por filósofos del Derecho. Es fácil demostrar que esta es una fórmula completamente vacía. La pregunta fundamental: ¿qué es lo que cada uno puede considerar realmente como ‘lo suyo’?, puede ser aplicable únicamente cuando se supone que esta cuestión está ya resuelta de antemano; y sólo puede estarlo mediante un orden social que la costumbre o el legislador han establecido como moral positiva y orden jurídico. Por esto, la fórmula ‘a cada uno lo suyo’ es en cada caso diferente. Esta posibilidad de defender cualquier orden social por ser justo –y lo es en cuanto esté de acuerdo con la fórmula ‘a cada uno lo suyo’- explica la aceptación general de esta fórmula y demuestra a la vez que es una definición de justicia totalmente insuficiente, ya que esta debe fijar un valor absoluto que no puede identificarse con los valores relativos que una moral positiva o un ordenamiento jurídico garantizan”<sup>411</sup>.

Por su parte, Pérez Portilla afirma que “la idea de justicia como la idea de igualdad es completamente formal. Requiere que las personas se les dé lo suyo pero no define qué es lo suyo de cada quien. Para dar justicia algún significado, tiene que mirarse más allá de la proposición de dar a cada quien lo suyo; tiene que irse hasta los estándares sustantivos (...) y jurídicos que determinan lo suyo de cada quien”<sup>412</sup>. Por ello, “igualdad y justicia significan lo mismo, encierran la idea de una comparación necesaria entre dos o más

---

<sup>410</sup> MOSQUERA MONELLOS, Susana (Coordinadora). “El derecho fundamental de igualdad”. Op. cit., p. 26.

<sup>411</sup> KELSEN, Hans. “¿Qué es la justicia?”. Fontamara. 7º edición. México D.F., 1997, pp. 45-46.

<sup>412</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., p. 13.

personas para determinar su igualdad o desigualdad. Esta comparación debe girar en torno a la posesión o carencia de algún criterio o rasgo que se considere relevante. El criterio debe estar plasmado en una norma para que entonces pueda argüirse que, en virtud de ubicarse en tal o cual supuesto, las personas que comparten el criterio relevante deben tratarse de manera igual o bien, que por la carencia del criterio relevante establecido en la norma, se debe ser tratado de manera desigual y, en ambos casos, se estará dando a cada quien lo suyo”<sup>413</sup>.

A efectos de exponer una serie de parámetros que delimiten el contenido de la igualdad en la aplicación de la ley, nos amparamos en la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional español y que es recogida por Moraga García a través de los siguientes lineamientos:

“a) *Que se trate de un mismo órgano judicial*: Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional desde su inicio que ‘el principio de igualdad en la aplicación de la ley sólo puede ser invocado en caso de que las resoluciones aducidas procedan del mismo órgano judicial’ (STC 2/1983 [...]).

b) *Que los supuestos de hecho sean idénticos*, ‘pues sólo si los casos son iguales entre sí puede efectivamente pretenderse que la solución dada para uno sea igual a la del otro’ (STC 140/2003 [...]).

c) *Que el cambio de un criterio en la aplicación de la norma se base en una fundamentación suficiente y razonable*: lo que no se permite es modificar el sentido de las decisiones de forma arbitraria, pero sí que se pueda variar el sentido de la resolución siempre y cuando se ofrezca una fundamentación suficiente y razonable en la que descansen dicho cambio de criterio [...] STC 142/1985”<sup>414</sup>.

---

<sup>413</sup> Ibidem, pp. 14-15.

<sup>414</sup> MORAGA GARCÍA, María Ángeles. “La igualdad entre mujeres y hombres en la Constitución española de 1978”. En: *Feminismo/s*. Nº 8. Centro de Estudios sobre la Mujer. Universitat d’ Alacant. Alicante, 2006, pp. 58-59.

### 3.5.1.3.2. Igualdad material de la mujer

Como se ha expuesto, las concepciones formales de la igualdad no han resultado óptimas para lograr la tan ansiada igualdad entre el varón y la mujer, ya sea porque no han partido de la concepción de la realidad como dispar, o porque formulándola, no ha existido intención política para llevar a cabo los mandatos de optimización.

Al respecto, Pietro Sanchís considera que el sentido de igualdad material apunta “no a defenderse ante cualquier discriminación normativa, sino a gozar de un régimen jurídico diferenciado o desigual en atención precisamente a una desigualdad de hecho que trata de ser limitada o superada”<sup>415</sup>.

Al respecto, Pérez Portilla señala que “el estadio más reciente en el recorrido de la igualdad a través del texto de las Constituciones más modernas se encuentra en el principio de igualdad sustancia, es decir, en el mandato para los poderes públicos de remover los obstáculos que impiden el logro de la *igualdad en los hechos*, lo que puede llegar a suponer o incluso a exigir, la implementación de medidas de acción positiva o de discriminación inversa. La igualdad material es el último escalón en la evolución del principio de igualdad en el constitucionalismo del siglo XX. Para las Constituciones contemporáneas ya no es suficiente con garantizar la igualdad formal en las leyes. El principio de igualdad material requiere del Estado la obligación de actuar en la sociedad para conseguir la igualdad real de los ciudadanos”<sup>416</sup>.

Cabe destacar que Pietro Sanchís identifica rasgos que diferencian a la igualdad de hecho de la jurídica, al señalar que “la construcción de igualdad de hecho sólo tiene presente al hombre concreto, que es el único que puede sufrir una desigualdad fáctica, pues si no fuera así, si tuviese presente al ‘hombre abstracto’ ninguna desigualdad jurídica podría justificarse; a su vez, la igualdad jurídica genera frente al poder un deber nítido de abstención o no discriminación, mientras que la igualdad de hecho genera obligaciones más

---

<sup>415</sup> PIETRO SANCHÍS, Luis. “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”. En: *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*. CEP. N° 25. Madrid, 1995, p. 17.

<sup>416</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., p. 136.

complejas, de organización, procedimiento y prestación; y, en fin, mientras que la igualdad jurídica se manifiesta en una posición subjetiva, la igualdad sustancial se vincula más bien al principio objetivo del Estado social y sólo muy costosamente permite diseñar posiciones subjetivas de desigualdad (jurídica)”<sup>417</sup>.

La viabilidad de la igualdad material se da en tres supuestos “primero, cuando la igualdad material viene apoyada por un derecho fundamental de naturaleza prestacional directamente exigible (...). El segundo supuesto tiene lugar cuando una pretensión de igualdad sustancial concurre con otro derecho fundamental, aun cuando no sea de naturaleza prestacional (...). Finalmente, el último supuesto se produce cuando una exigencia de igualdad material viene acompañada por una exigencia de igualdad formal”<sup>418</sup>.

Sin embargo, el rasgo más importante es que la igualdad material aparece “como una excepción a la igualdad formal y como un mandato a los poderes del Estado de intervención en la sociedad. La introducción de este principio no es un dato aislado; se ubica dentro de la serie de decisiones jurídicas y políticas que alumbran una nueva concepción de Estado: el Estado social y democrático de derecho”<sup>419</sup>.

Por ello, “queda claro pues que, en sociedades económicas y socialmente desiguales como las nuestras, garantizar determinado grado de igualdad material resulta absolutamente necesario para lograr el tan ansiado estado de libertad y paz entre los hombres [y las mujeres]. El desquebrajamiento social que produce la carencia material sufrida por los individuos en bienes considerados medio indispensable para mantener sus vidas en condiciones propicias para ejercer la libertad no deja la menor duda al respecto. En este sentido, ¿qué libertad tiene quien muere de hambre, quien no tiene acceso a la educación o quien padece hasta la muerte enfermedades curables?”<sup>420</sup>.

#### **a. Igualdad de trato a favor de la mujer**

---

<sup>417</sup> PIETRO SANCHÍS, Luis. “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”. Op. cit., p. 22.

<sup>418</sup> Ibidem, pp. 23-25.

<sup>419</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., pp. 136-137.

<sup>420</sup> CANTÓN, Octavio. “Igualdad, necesidades y derechos”. Op. cit., p. 23.

La igualdad de trato es una de las manifestaciones de la igualdad material que exige que frente a situaciones similares, el varón y la mujer reciban un trato equitativo. Como señala Neves Mujica, “el trato no puede ser desigual para los iguales ni igual para los desiguales”<sup>421</sup>.

La igualdad de trato parte de la ubicación de las personas dentro de una situación concreta. Así por ejemplo, aquellos y aquellas que realicen una misma labor deberán ser objeto de los mismos derechos y obligaciones, sin mediar un trato privilegiado o desfavorecedor sobre uno u otro, ya que las particularidades, que en otro plano pudieran individualizarlos, son irrelevantes.

No obstante, Pérez Portilla precisa que “así como no existen categorías naturales de personas iguales, tampoco existen categorías de tratamiento igual; **los tratamientos sólo pueden ser iguales en atención a alguna regla**. Así, decir que las personas iguales en algún aspecto deben ser tratadas igual, significa que deben ser tratadas igual, de acuerdo con la regla por la cual se determina su igualdad. Es decir, **los iguales deben ser tratados igual**, significa que las personas para quienes se prescribe cierto tratamiento en virtud de un estándar que determina su igualdad, tienen que recibir todas y cada una el mismo tratamiento prescrito por el estándar; o más sencillo, las personas que por una regla se consideran iguales, deben por esa misma regla, ser tratadas igual. (...) Es decir, tratar igual a los iguales no es más que una tautología en donde se habrá de tratar a los iguales de manera igual y los iguales son aquellos que deben ser tratados igual (dado que comparten una cierta característica)”<sup>422</sup> (el sombreado es nuestro).

Rodríguez Zepeda considera que la igualdad de trato “consiste en el derecho a una distribución igual de algún (...) recurso o carga. En ese sentido, la no discriminación es igualitaria porque obliga a no establecer diferencias de trato arbitrarias basadas en el prejuicio y el estigma. En este caso, no discriminar significa tratar de la misma manera a

---

<sup>421</sup> NEVES MUJICA, Javier. “Introducción al Derecho del Trabajo”. Ara Editores. Lima, 1997, p. 114.

<sup>422</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., p. 10.



todos: a un hombre y a una mujer (...). Esta forma de igualdad tiene un poderoso efecto antidiscriminatorio, pues actúa bajo el criterio de que ninguna excepción o arbitrariedad está justificada, pues la norma legal debe ser establecida y aplicada como si fuera ‘ciega a las diferencias’ entre las personas”<sup>423</sup>.

A su vez, lo complementa señalando que “la igualdad de trato equivale a la eliminación de las distinciones o exclusiones moralmente arbitrarias que están prohibidas por el principio llano de no discriminación. Obliga a dispensar a todos un trato similar o equivalente. La exigencia de igualdad de trato es necesaria para la vigencia social de la no discriminación, pero no es un criterio absoluto ni excluyente. Junto a esta idea de igualdad, es admisible otra forma de igualdad, capaz de admitir tratos diferenciados positivos o preferenciales, y que en ocasiones es tan necesaria que justifica la suspensión temporal del criterio de igualdad de trato”<sup>424</sup>.

De igual manera, Dworkin afirma que “el derecho a ser tratado como un igual es fundamental, y el derecho a un tratamiento igual es derivativo. En algunas circunstancias, el derecho a ser tratado como un igual puede implicar un derecho a un tratamiento igual, pero no en todas las circunstancias”<sup>425</sup>.

Por ello, Rodríguez Zepeda afirma que “la igualdad de trato, tiene un carácter formal; exige, en efecto, que todas las personas sean tratadas ‘de la misma manera’ y sin discriminación alguna, lo que supone una ‘protección igual y efectiva’ para todas ellas, ‘incluyendo’ en este trato a las personas tradicionalmente discriminadas por su pertenencia a un grupo estigmatizado. En este sentido, afirmar la no discriminación en el sentido formal de la igualdad se concreta en la exigencia de un trato igual para todas las personas”<sup>426</sup>.

---

<sup>423</sup> RODRÍGUEZ ZEPÉDA, Jesús. “Una idea teórica de la no discriminación”. En: DE LA TORRE MARTÍNEZ, Carlos (Coordinador). *Derecho a la no discriminación*. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México D.F., 2006, p. 52.

<sup>424</sup> RODRÍGUEZ ZEPÉDA, Jesús. “Construcción de un marco teórico sobre la discriminación: La discusión académica y la acción institucional”. Documento de Trabajo No. E-8-2005. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). México D.F., 2006, p. 45.

<sup>425</sup> DWORKIN, Ronald. “Taking rights seriously”. Duckworth. Londres, 1977, p. 227.

<sup>426</sup> RODRÍGUEZ ZEPÉDA, Jesús. “Construcción de un marco teórico sobre la discriminación: La discusión académica y la acción institucional”. Op. cit., p. 46.

Juan Eugenio Blanco vincula este principio con el derecho a no ser discriminado al considerar que “el tratamiento es arbitrario o injustificado en los casos en que la razón o la justicia exigen un tratamiento igual. Se viola el principio de igual tratamiento cuando no existe motivo razonable y atendible para un tratamiento desigual; igual conducta no debe ser valorada de manera diferente”<sup>427</sup>.

En efecto, la igualdad de trato nos demuestra su comunión con la igualdad formal, en tanto hace posible la exigencia del trato equitativo que, a su vez, no es otra que la anhelada igualdad de hecho.

### **b. Igualdad de oportunidades a favor de la mujer**

La igualdad de oportunidades es la consecución plena de la igualdad material, debido a que procura superar las inequidades con el propósito de colocar a todas las personas en una situación de igualdad frente a los hechos.

Por ello, Rodríguez Zepeda afirma que “la igualdad como meta social y como ideal de una sociedad democrática (es decir, como valor compartido y no sólo como definición formal del trato del sistema legal con los ciudadanos) supone tratar a las personas como iguales en dignidad, derechos y merecimiento de acceso a las oportunidades sociales disponibles”<sup>428</sup>.

Pérez Portilla apunta a que “la igualdad de oportunidades se ocupa de la redistribución del acceso a las distintas posiciones de la sociedad, pero no de la distribución de las posiciones mismas. El problema consiste, pues, en acoplar personas con dotes desiguales a posiciones que rinden una remuneración o un poder o un prestigio desiguales. La solución consiste en hacerlos accesibles a todos de acuerdo con una base competitiva. La hipótesis consiste en que, si todos tienen un punto de partida igual, la posición que ocupen al final dependerá

---

<sup>427</sup> BLANCO, Juan Eugenio. “La consideración igual de los iguales”. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1967, p. 89.

<sup>428</sup> RODRÍGUEZ ZEPÉDA, Jesús. “Construcción de un marco teórico sobre la discriminación: La discusión académica y la acción institucional”. Op. cit., p. 46.

exclusivamente de la velocidad con que hayan corrido y de la distancia alcanzada”<sup>429</sup>. “Así, cuando se habla de igualdad de oportunidades se hace referencia a la igualdad en el punto de partida, no en el reparto definitivo de los bienes sociales, el cual dependerá de los méritos de cada persona concreta. Por lo tanto, las acciones del Estado que tratan de concretar el principio de igualdad de oportunidades se encaminan principalmente al cambio de la educación, la superación de cargas familiares en el caso de las mujeres, la concientización de la sociedad, etc. Es decir, a todo aquello que, suponiendo un esfuerzo en la consecución de la igualdad material, no se traduce en una igualación automática de los resultados”<sup>430</sup>.

La búsqueda de la igualdad de oportunidades se sustenta en que “[l]a realidad nos demuestra pues que aún cuando se reconocen los mismos derechos a todos, algunos grupos tienen mayor posibilidad de ejercerlos libremente que otros. De esta manera, tenemos en la sociedad la asignación de roles o de determinados derechos sólo para determinados grupos. La igualdad de oportunidades, busca superar estas distinciones materiales y procura que todos efectivamente logren el ejercicio de sus derechos”<sup>431</sup>.

La igualdad de oportunidades a favor de la mujer constituye la concreción de la cláusula de igualdad debido a que les permite ejercer sus derechos desde un plano equitativo, lo cual dará cabida a la evaluación de las metas como consecuencia del esfuerzo, ya que al equilibrarse la situación que otrora privilegiara a cierto sector, las mujeres podrán alcanzar sus metas como resultado del pleno ejercicio de sus derechos.

Como señala Zúñiga Añasco, “la noción misma de igualdad de oportunidades procede de una estrategia de cambio social que abandona completamente la óptica de trato igualitario negativo para privilegiar una lógica diferente: la de igualación de las condiciones de partida dadas a los individuos en relación con la garantía de ciertos derechos. Este paso supone implícitamente que los azares de la estratificación social y de las relaciones asimétricas fundadas en el género no podrán alterar el juego de la concurrencia entre los individuos. En

---

<sup>429</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., p. 155.

<sup>430</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., pp. 155-156.

<sup>431</sup> BLANCO, Juan Eugenio. “La consideración igual de los iguales”. Op. cit., p. 89.

otras palabras, esta nueva lógica parte de la premisa de que el fenómeno discriminatorio (la opresión en la terminología de Young o la exclusión social tal como ha sido recogida por el derecho al desarrollo) obedece a causas que se superponen a la voluntad del colectivo objeto de discriminación y que se enraízan en factores socioculturales que se objetivan a través de una red estructural-institucional. Por tanto, el principio de igualdad no puede ceñirse a una única y excluyente medición en términos individuales intragrupal sino que, por el contrario, debe incorporar necesariamente la variable colectiva (igualdad intergrupal)”<sup>432</sup>.

### **3.5.1.3. Perspectiva de género como mecanismo para concretar la igualdad material de la mujer**

Contrario a lo que se pudiera pensar, género no es sinónimo de sexo. Así, mientras el sexo es definido como la “condición orgánica, masculina o femenina”<sup>433</sup> –es decir, una mera diferencia biológica-, el género “designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los sexos, es decir, se refiere a la construcción social del hecho de ser mujer y hombre, a la interrelación entre ambos y las diferentes relaciones de poder/subordinación en que estas se interrelaciones se presentan”<sup>434</sup>.

En pocas palabras, *género es la categoría que considera a varones y a mujeres sobre la base de una serie de comportamientos “propios o inherentes” a su naturaleza, es decir, “papeles, espacios, características e identidades (...) en razón de su sexo biológico”*<sup>435</sup> (las cursivas son nuestras).

Si bien el sexo es un factor preponderante para la asignación del género, la diferencia radica en que el sexo es inmutable, en tanto es una característica biológica, a diferencia del género

---

<sup>432</sup> ZÚÑIGA AÑASCO, Yanira. “El derecho al desarrollo desde la perspectiva de género”. Tesis doctoral en Derecho. Instituto Bartolomé de las Casas de Derechos Humanos. Programa de Derechos Fundamentales. Getafe, 2003, p. 350.

<sup>433</sup> RAE. Disponible en: [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=sexo](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sexo) (Revisado el 29 de mayo de 2009).

<sup>434</sup> DE LA CRUZ, Carmen. “Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo”. Emankude. Editorial Grafo. Navarra, 1998, p. 16.

<sup>435</sup> Loc. cit.

que es la construcción de identidades sociales que pueden cambiarse. Tal es el caso de la mujer, cuyo género en el siglo XV le impedía el ejercicio de un cargo público, mientras que en el siglo XX la perspectiva de género fue cambiando paulatinamente hasta implementarse mecanismos legales destinados a su inclusión en dichos cargos.

#### **a. Evolución del enfoque de género**

Como hemos precisado, la condición biológica dista de ser el contenido del Derecho de Género. Sin embargo, en sus inicios, por la década de 1970, se partió de la afirmación que el logro de la equidad debía sustentarse desde la perspectiva de las **“mujeres en el desarrollo”** (MED), propugnando que “el desarrollo necesita a las mujeres. Para esto pone énfasis en el *papel productivo de las mujeres* entendiendo subordinación por exclusión del mercado. Tiende a *considerar a las mujeres aisladamente*, buscando soluciones parciales y señalando sus necesidades a través de intervenciones específicas o en *proyectos con un ‘componente’ de mujer*”<sup>436</sup> (las cursivas son nuestras).

Sin embargo, esta visión no contiene objetivos, debido a que tan sólo se restringe a suponer que se conseguirá la equidad entre los géneros a través de acciones específicas en los rubros donde las mujeres son marginadas. Pero nos preguntamos, ¿de qué valen estos aparentes beneficios si es que dentro de la esfera doméstica aún subsiste la subordinación frente al varón?

Para sortear estas dificultades, “[c]omienza a incorporarse en el debate la importancia de las relaciones de poder, del conflicto y las relaciones de género para entender la subordinación de las mujeres [lo cual permite] pasar a una concepción de [*“género en el desarrollo”*] GED y definir herramientas y metodologías para la planificación”<sup>437</sup>.

En efecto, este enfoque –que será desarrollado a través de la “dimensión y perspectiva de género”- parte de la constatación de las relaciones entre varones y mujeres, a fin de

---

<sup>436</sup> Loc. cit.

<sup>437</sup> Loc. cit.

identificar sus carencias y procurar la paulatina inserción de estas en las esferas que tradicionalmente les estaban privadas, sin descuidar la construcción de nuevos roles dentro del ámbito doméstico, que permitan conquistar el desarrollo y la superación de desigualdades entre ambos grupos.

## **b. Dimensión de género como guía para comprender la realidad**

Esta dimensión parte del estudio de la realidad vigente, considerando “al *género como categoría de análisis* que sirve para conocer y evaluar un contexto, una realidad determinada, una experiencia o un proyecto concreto. Se puede utilizar y evaluar: [a] los efectos de las propuestas de intervención; [b] el cambio en la condición y posición de las mujeres; [c] o determinados aspectos en las relaciones de género”<sup>438</sup> (las cursivas son nuestras).

Efectivamente, la dimensión de género realiza su análisis sobre la base del rol de la mujer (identidad de género) y de su participación en las diversas esferas sociales (papel de género). Así, la dimensión de género enfoca su labor en los procesos de socialización que se sustentan en el orden patriarcal, en la división del trabajo y en el ejercicio de la ciudadanía. Como señala De La Cruz, “[a]nalizar una realidad desde este punto de vista, nos permite obtener información sobre las relaciones entre mujeres y hombres en un determinado contexto. De esta manera, el problema no son las mujeres en sí, sino la desigualdad en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Por lo tanto, las soluciones deben ser alcanzadas por ambos de manera que beneficie y transforme la sociedad en su total”<sup>439</sup>. Es precisamente en el último enunciado de esta cita que se desarrolla la perspectiva de género.

## **c. Perspectiva de género como mecanismo para conseguir la equidad**

---

<sup>438</sup> Ibidem, p. 18.

<sup>439</sup> Ibidem, p. 17.

La perspectiva de género representa un avance frente a la dimensión de género. Ello se corrobora en que mientras esta última se enfoca en constatar las condiciones materiales de la desigualdad, la perspectiva de género abarca la política destinada al cambio de los patrones sociales que componen el género femenino a través de la constatación de la realidad, la planificación de políticas, su ejecución y posterior evaluación, a fin de acreditar el cumplimiento de los objetivos propuestos: un sistema de género equitativo, justo y solidario<sup>440</sup>.

La implementación de esta política parte del hogar, “como unidad básica de intervención”<sup>441</sup>, para proyectarse en la comunidad a través del abandono de la posición de subordinación frente al hombre, lo cual conducirá a la consolidación del *empoderamiento*, es decir, de la “estrategia fundamental para generar y consolidar los procesos de emancipación, desarrollo, y crecimiento personal y colectivo”<sup>442</sup> de las mujeres como grupo (las cursivas son nuestras).

La importancia del empoderamiento radica en que coadyuva a la conquista de la mujer de tres tipos de poder:

“[a] Social: información, conocimientos, acceso a las redes sociales y a recursos financieros.

[b] Político: acceso a los procesos democráticos de toma de decisiones que les afectan.

[c] Psicológico: toma de conciencia del poder que individual y colectivamente tienen las mujeres. Se alcanza mediante la autoestima personal y la recuperación de la dignidad como personas”<sup>443</sup>.

---

<sup>440</sup> Ibidem, p. 18.

<sup>441</sup> Ibidem, p. 19.

<sup>442</sup> Loc. cit.

<sup>443</sup> Loc. cit.

Es precisamente en este último aspecto en que destacamos las bondades del empoderamiento, ya que a través de la conquista del poder psicológico, se reivindica la calidad de la mujer como ser humano, debido a que esta es consciente de su condición de ser digno, que le permite dirigir su destino y no encontrarse subordinada al mandato imperativo del varón. Sin embargo, cabe señalarse que el empoderamiento será posible en tanto exista el desarrollo de proyectos que impliquen el trabajo conjunto entre varones y mujeres, pues mantener al hombre alejado del empoderamiento de la mujer determinará que si bien esta vaya consiguiendo una mayor independencia a nivel social, esta no se traduzca en la esfera doméstica, en la cual el varón, aún dominante, decidirá, por ejemplo, el destino del sueldo de la mujer.

Ahora bien, como señala el Instituto Vasco de la Mujer, la perspectiva de género parte del enfoque diseñado por la dimensión de género, es decir, la constatación de la **situación en la realidad**, que si bien sustenta las relaciones de género de acuerdo al tiempo y al espacio, tienen como elementos comunes la posición de subordinación de la mujer dentro del imperante orden patriarcal, la división sexual del trabajo –en categorías como la productiva, comunitaria (asignadas al varón) y reproductiva-, diferente acceso y control sobre recursos y beneficios, y la exclusión de la mujer en la toma de decisiones.

Constatada la situación, se trazan **estrategias de desarrollo**, que permiten el **empoderamiento** al involucrar a varones y mujeres como agentes decisores de su propio desarrollo, incrementando su acceso a los recursos, opciones y poder político, es decir, **transformando las relaciones de género**, lo cual determina la consecución de la igualdad en el impacto del proyecto y en el beneficio obtenido. En tercer lugar se plantean las **acciones de desarrollo**, a través del análisis de género y de las relaciones de poder en la comunidad, las cuales se realizan por medio de consultas con varones y mujeres, a fin de identificar la condición, posición, necesidades prácticas e intereses de cada género para abordar los intereses estratégicos de la comunidad en pos de fortalecerla económica y políticamente. El desarrollo de estos tres pasos trae como consecuencia el **cumplimiento del objetivo**: *el desarrollo sostenible, equitativo y participativo de varones y mujeres*<sup>444</sup>.

---

<sup>444</sup> Ibidem, p. 42.



### 3.5.2. Discriminación contra la mujer

La proscripción de la discriminación emana del artículo 2° inciso 2 de la Constitución Política, al establecer que “[n]adie debe ser discriminado”. Sin embargo, la eficacia de esta cláusula resulta ciertamente complicada, debido a que la discriminación es un fenómeno que se enraiza en elementos propios de nuestra cultura y que hacen inviables la implementación de políticas destinadas a combatirlos. No obstante, consideramos pertinente iniciar el estudio de la discriminación a partir de las diferentes acepciones que alberga este término.

De acuerdo a Gross<sup>445</sup>, citado por Rodríguez Zepeda, existen cuatro acepciones de este vocablo, a saber:

“Transitivo: distinguir o diferenciar o establecer una diferencia entre personas o cosas. Transitivo: percibir, darse cuenta o distinguir, con la mente o los sentidos, de las diferencias entre cosas. Establecer una distinción o diferencia. Hacer una distinción adversa respecto a algo o a alguien”<sup>446</sup>.

Una primera acepción de discriminación la encontramos en el entendido de que “alguien discrimina cuando distingue una cosa de otra, sin que ello implique una conducta de exclusión o rechazo. Así, podemos discriminar objetos por tamaños, colores o formas, sin que esto implique que consideremos que algunos entre ellos son superiores o inferiores y sin que se trasluzca desprecio hacia el objeto por parte del sujeto que ejerce la acción de discriminar”<sup>447</sup>. No obstante debe añadirse a esta acepción lexicográfica un componente social y político para construir a la discriminación como una relación asimétrica de

---

<sup>445</sup> GROSS, Barry. “Discrimination in reverse. Is turnabout fair play?” New York University Press. New York, 1978, p. 7.

<sup>446</sup> RODRÍGUEZ ZEPÉDA, Jesús. “Una idea teórica de la no discriminación”. En: DE LA TORRE MARTÍNEZ, Carlos (Coordinador). *Derecho a la no discriminación*. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México D.F., 2006, p. 39.

<sup>447</sup> RODRÍGUEZ ZEPÉDA, Jesús. “Construcción de un marco teórico sobre la discriminación: La discusión académica y la acción institucional”. Documento de Trabajo No. E-8-2005. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). México D.F., 2006, pp. 10-11..

personas, la cual “posee un sentido axiológico negativo, pues la diferenciación a la que aquí se alude supone un elemento pretendidamente superior y uno pretendidamente inferior sobre la base de algún rasgo del este segundo elemento de la relación que no es bien visto o aceptado por el otro”<sup>448</sup>.

Ello permite construir el concepto de discriminación como “una conducta, culturalmente fundada, y sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja innecesaria, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales”<sup>449</sup>. Sobre la base de tal afirmación, el contenido del derecho a la no discriminación se formula como aquel “derecho de toda persona a ser tratada de manera homogénea, sin exclusión, distinción o restricción arbitraria, de tal modo que se le haga posible el aprovechamiento de sus derechos y libertades fundamentales y el libre acceso a las oportunidades socialmente disponibles; siempre y cuando un tratamiento preferencial temporal hacia ella o hacia su grupo de adscripción no sea necesario para reponer o compensar el daño histórico y la situación de debilidad y vulnerabilidad actuales causados por prácticas discriminatorias previas contra su grupo”<sup>450</sup>.

Pérez Portilla señala que “el significado tradicional de discriminar es: separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra, mientras que el sentido de discriminar en el lenguaje jurídico contiene una carga peyorativa; se traduce en dar un trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. Es decir, por aquellos motivos que se ha dado en llamar odiosos, críticos, prohibidos o vedados. En este sentido, la discriminación deja de tener un sentido neutro y los motivos que impulsan la discriminación ya sean características individuales o sociales, se califican como odiosos porque no tienen relación con los méritos, capacidades y en síntesis, con la dignidad del individuo, o bien, con la conducta concreta de la persona individual”<sup>451</sup>.

---

<sup>448</sup> Ibidem, p. 11.

<sup>449</sup> Ibidem, p. 18.

<sup>450</sup> Ibidem, pp. 23-24.

<sup>451</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., p. 112.

Por su parte, Salazar Carrión precisa que la discriminación no es un fenómeno reciente, ya que “ha existido desde tiempos remotos en todas las culturas y en todas las sociedades. (...) Aristóteles justificaba la discriminación y la subordinación de los bárbaros y de las mujeres, argumentando que estos grupos carecían del rasgo que vuelve verdaderamente humano al hombre, es decir, el uso pleno de la razón. Y los libros sagrados de todas las religiones han justificado igualmente discriminaciones distinguiendo entre fieles e infieles, entre poseedores y carentes de fe y, en consecuencia, entre normales y superiores y anormales e inferiores”<sup>452</sup>.

En consecuencia, “si el fenómeno es antiguo, la palabra discriminación y su contenido condenatorio son nuevos, porque presuponen justamente que tales distinciones o diferenciaciones carecen de todo sentido racional, esto es, se basan en prejuicios racionalmente insostenibles. O lo que es lo mismo, la noción de discriminación aparece como un problema de un largo aprendizaje moral de la humanidad: el de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos”<sup>453</sup>.

De acuerdo a Huerta Ochoa, “se entiende por discriminación en sentido amplio, toda infracción al principio general de igualdad motivado en una razón de clase o por la pertenencia a un grupo, y en sentido estricto, cuando concurre un criterio de diferenciación no permitido o prohibido expresamente por la ley. El derecho a la igualdad se manifiesta en el momento de establecer una diferenciación legal, mientras que el derecho a la no discriminación puede ejercitarse cuando se produce una diferenciación o inequidad no justificable”<sup>454</sup>.

Por su parte, Horbath Corredor considera que “la discriminación es un fenómeno social y cultural vinculado con la dinámica inclusión/exclusión que se expresa en prejuicio y

---

<sup>452</sup> SALAZAR CARRIÓN, Luis. “Democracia y discriminación”. Cuadernos de la igualdad. Consejo nacional para prevenir la discriminación. México D.F., 2005, p. 39.

<sup>453</sup> Ibidem, pp. 39-40.

<sup>454</sup> HUERTA OCHOA, Carla. “La estructura jurídica del derecho a la no discriminación”. En: DE LA TORRE MARTÍNEZ, Carlos (Coordinador). *Derecho a la no discriminación*. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México D.F., 2006, pp. 186-187.

estigma, definido éste, como un atributo significativamente desacreditador y que socialmente sirve para degradar a la persona que lo posee”<sup>455</sup>.

Por ello es que “el mandato de no discriminación, además de evitar diferencias de trato rechazables por su afectación a la dignidad humana, trata de proteger a grupos desfavorecidos y discriminados, para procurarles una igualdad efectiva (por protegerles en concreto). La paridad deviene ahora, un medio al servicio de la igualdad efectiva o real como fin que se trata de conseguir. Esa prohibición representa una explícita interdicción del mantenimiento de diferenciaciones históricamente muy arraigadas y que han situado a sectores de la población en posiciones no solamente desventajosas, sino abiertamente contrarias a la dignidad de la persona”<sup>456</sup>.

Rodríguez Zépeda concibe una segunda acepción a partir de la no discriminación, concibiéndola como “es el derecho de toda persona a ser tratada de manera homogénea, sin exclusión, distinción o restricción arbitraria, de tal modo que se le haga posible el aprovechamiento de sus derechos y libertades fundamentales y el libre acceso a las oportunidades socialmente disponibles, siempre y cuando un tratamiento preferencial temporal hacia ella o hacia su grupo de adscripción no sea necesario para reponer o compensar el daño histórico y la situación de debilidad y vulnerabilidad actuales causados por prácticas discriminatorias previas contra su grupo”<sup>457</sup>.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas define a la discriminación como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar

---

<sup>455</sup> HORBATH CORREDOR, Jorge Enrique. “Las percepciones de las diferencias físicas en la ciudad de México: La discriminación que vive la población obesa, con discapacidad, con cicatrices, tatuada, con perforaciones en la piel, darketos, punkeros y personas cuya apariencia indica pertenecía indígena o a grupo religiosos, entre otros”. Documento de Trabajo No. E-16-007. Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). México D.F., 2007, p. 10.

<sup>456</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., pp. 113-114.

<sup>457</sup> RODRÍGUEZ ZEPÉDA, Jesús. “Una idea teórica de la no discriminación”. Op. cit, p. 45.

el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”<sup>458</sup>.

Sin embargo, **no toda medida diferenciadora constituirá una manifestación de discriminación**, ya que como señala Pérez Portilla (citado por Ayala Sánchez), “practicar un tratamiento desigual que no resulta admisible, es decir, la discriminación no se equipara a cualquier trato desigual sino a una desigualdad que toma como base un criterio no razonable e incluso prejuicioso y estigmatizador”<sup>459</sup>.

Por ello es que “para identificar un trato discriminatorio, es necesario comprobar una diferencia en el trato entre personas que se encuentran en situaciones suficientemente análogas o comparables (...). Una situación determinada de discriminación va a implicar siempre una diferenciación de situaciones iguales o una igualación de situaciones diferentes. Cuando se identifica ese aspecto, el segundo elemento que debe demostrarse es que esta diferenciación no tenga una base objetiva y razonable”<sup>460</sup>.

En tal sentido, Ayala considera que “el contenido que podrá entonces tener el mandato de no discriminación se formularía así: a menos que exista una razón reconocida como relevante y suficiente, según algún criterio identificable y aceptado, *ninguna persona debe ser preferida a otra*”<sup>461</sup>.

La proscripción de la discriminación está íntimamente vinculada con el principio de igualdad, ya que este “ha operado en apoyo de otros derechos constitucionales, al entenderse que la misma protección de los derechos, base del principio de igualdad, no es sólo un derecho fundamental por sí mismo, sino además una condición de ejercicio de los demás derechos fundamentales. (...) Por otra parte, debe decirse que el concepto de no

---

<sup>458</sup> COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU. “Observación General N° 18, HRI/GEN/1Rev.2”. New York, 1989, párrs. 7 al 13 (Human Rights Library of the Minnesota University. Disponible en: <http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom18.html>. Revisado el 11 de mayo de 2009).

<sup>459</sup> AYALA SÁNCHEZ, Alfonso. “Igualdad y conciencia. Sesgos implícitos en constructores e intérpretes del derecho”. UNAM, México, 2008, p. 78.

<sup>460</sup> PACHECO, Gilda, TORRES, Isabel y TOJO, Liliana (Coordinadoras). “Los derechos humanos de las mujeres: Fortaleciendo su promoción y protección internacional. De la formación a la acción”. Op. cit., p. 98.

<sup>461</sup> AYALA SÁNCHEZ, Alfonso. “Igualdad y conciencia. Sesgos implícitos en constructores e intérpretes del derecho”. Op. cit., p. 78.

discriminación está fuertemente vinculado con el de igualdad, sin embargo, ambos no son idénticos sino más bien complementarios”<sup>462</sup>.

En consecuencia, Huerta Ochoa considera necesario reconocer el **derecho a la no discriminación**, entendido como una abstención, cuyo objetivo sería “evitar la distinción legal que produzca diferencias de trato que afecte a la persona en sus derechos, pero sobre todo en su dignidad, y proteger a los grupos desfavorecidos y discriminados para procurarles una igualdad efectiva. Es una forma de procurar una protección adicional que el sistema jurídico confiere, en virtud de ciertas circunstancias específicas que se consideran que lo ameritan”<sup>463</sup>. Por ello precisa que “el contenido de la obligación es no discriminar, no distinguir cuando la ley no lo prevé, así como de proteger al individuo frente a los actos de discriminación, combatir y erradicar la discriminación. Como obligación tiene un carácter activo y uno pasivo, en el primer caso se trata de que las autoridades emprendan acciones que procuren la igualdad, en el sentido pasivo, implica la abstención de realizar distinciones mediante las leyes, programas políticos o acciones que no se encuentren justificadas”<sup>464</sup>.

### **3.5.2.1. La cultura como condicionante de la discriminación contra la mujer**

El estudio de la cultura se abordará a través de su concepto, de la identidad cultural y de la otredad como aquello alterno a la cultura, aspecto este último donde se identificarán rasgos que condicionan la discriminación en contra de la mujer.

#### **a. Concepto de cultura**

Definir a la cultura es una tarea ciertamente compleja, pues es el resultado de un proceso evolutivo que nos ha permitido incorporar determinados elementos a efectos de configurar su contenido. Así, pues, en un inicio se entendía por cultura al cuidado y crecimiento de las cosechas y animales y, por analogía, el cultivo y desarrollo de la mente, el

---

<sup>462</sup> Loc. cit.

<sup>463</sup> HUERTA OCHOA, Carla. “La estructura jurídica del derecho a la no discriminación”. Op. cit., p. 188

<sup>464</sup> Ibidem, pp. 188-189.

perfeccionamiento de las facultades humanas. La ilustración empezó a agregarle nuevos significados. Así aparece el término ‘civilizar’ como la adquisición de refinamiento y orden en oposición a la barbarie y al oscurantismo”<sup>465</sup>.

Sin embargo, “hacia fines del siglo XIX se produce un cambio importante en el concepto, que se relaciona con el surgimiento de la antropología y que le da un carácter social”<sup>466</sup>. Ello permitió que “a mediados del siglo XX, bajo la influencia de nuevas tendencias antropológicas y lingüísticas, se empezara a constituir una concepción simbólica de la cultura que destaca el uso de símbolos como un rasgo definitivo de la vida humana: (...) En esta perspectiva simbólica, *la cultura vendría a ser el patrón de significados incorporados en formas simbólicas, incluyendo allí expresiones lingüísticas, acciones y objetos significativos, a través de los cuales los individuos se comunican y comparten experiencias*”<sup>467</sup> (las cursivas son nuestras).

El mencionado tránsito ha permitido que diferentes especialistas proporcionen nuevas luces en torno al concepto de cultura. Así, por ejemplo, Vallespir Soler sostiene que la cultura “comprende tanto los aspectos materiales como los espirituales y expresa la concepción del mundo y de la vida que todo grupo humano tiene, la cual ha ido configurándose a lo largo de su experiencia colectiva”<sup>468</sup>. A partir de estos conceptos, se define a la cultura como “el conjunto de prácticas, actitudes, valores, tradiciones, costumbres y comportamientos propios de una sociedad determinada [por lo que] se puede afirmar que [...] es lo que determina la denominada identidad cultural”<sup>469</sup>.

Esta afirmación nos permite apreciar que en la cultura subyacen elementos como un sistema dinámico que se erige sobre la base de un marco normativo como mecanismo de control social, constituido por elementos simbólicos que determinan la noción de unidad

---

<sup>465</sup> LARRAIN, Jorge. “El concepto de identidad”. En: *Famecos*. N° 21. Pontificia Universidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2003, p. 30.

<sup>466</sup> Ibidem, p. 31.

<sup>467</sup> Loc. cit.

<sup>468</sup> VALLESPÍR SOLER, Jordi. “Interculturalismo e identidad cultural”. En: *Revista interuniversitaria de formación del profesorado*. N° 36. Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP). Zaragoza, 1999, p. 46.

<sup>469</sup> Loc. cit.

que subyace en cada uno de sus integrantes en razón de aquella identidad que los congrega bajo aquellos elementos que, a su vez, los distinguen de otros colectivos humanos.

## **b. Identidad cultural**

Lo expresado en el punto anterior nos lleva a concebir a la cultura como un fenómeno en el que las identidades comunes de los miembros de una comunidad se conjugan.

Ello configura la identidad cultural, fenómeno que expresa “que la identidad es un constructo inherente al contexto sociohistórico, [pues la humanidad] es la única especie que la posee y que la manifiesta en la posibilidad que tiene el hombre de poder y saber adaptarse a un medio ambiente determinado, a la vez que es capaz de poder adaptar el medio a sus necesidades; lo que significa modificar profunda y significativamente su identidad. Así tenemos que en su evolución cultural el hombre conformó ciudades y configuró una organización propia manifiesta en la defensa mutua de sus bienes y de sus personas. Nace así la identidad cultural, dando por sentado el bien común como un todo solidario”<sup>470</sup>.

La identidad cultural constituye una manera de organización de aquellas nociones valorativas concebidas dentro de la noción de etnia, ya que permite organizar a dicho grupo a partir de normas que, en un primer momento, obedecen a las concepciones mitológicas y religiosas y que, en un segundo momento, son reformuladas en su interacción con la dinámica social que se desarrolla al interior del colectivo. Por ello, pues, se aprecia que el concepto de identidad cultural es más amplio que el de identidad étnica, ya que este último constituye la base de los elementos que unificarán al grupo y que permitirán, a partir de ellos, crear conceptos que confluirán en la noción de cultura como ente rector que establezca parámetros de permisión y prohibición en el ejercicio de las actividades diarias de sus integrantes.

---

<sup>470</sup> ROJAS DE ROJAS, Morelba. “Identidad y cultura”. En: *Educere*. Universidad Los Andes. Mérida, 2004, p. 490.



Ello nos lleva a contemplar a la identidad cultural como un fenómeno sustentado en la dimensión individual de la identidad, la cual “es la expresión de un conjunto de rasgos particulares que diferencian a un ser de todos los demás”<sup>471</sup>, lo cual quiere decir que “el ser humano posee características que lo identifican y lo hacen diferente al resto de los seres vivientes y, más aún, son características que lo hacen diferente individualmente, es decir, proveen al ser humano de una identidad física, psíquica, social y moral”<sup>472</sup>. Ello implica que la identidad individual se configura desde el yo y su distinción frente al resto que es asumido como diferente, lo cual permite al individuo identificar los rasgos que lo componen como un ser con características propias.

Sin embargo, la identidad cultural encuentra su configuración a través de la dimensión colectiva de la identidad, es decir, de “la percepción [grupal] de un ‘nosotros’ relativamente homogéneo (el grupo visto desde dentro) por oposición a ‘los otros’ (el grupo de fuera), en función del reconocimiento de caracteres, marcas y rasgos compartidos que funcionan también como signos y emblemas, así como de una memoria colectiva común”<sup>473</sup>. Es decir, existe una suerte de proyección del yo como parte de un colectivo que está compuesto por individuos que guardan atributos similares al del individuo que se siente parte de tal grupo; así, pues, la dimensión colectiva de la identidad se da, en primer lugar, en relación al núcleo familia, luego al sexo, posteriormente al género y finalmente, a la comunidad.

### **c. La otredad como oposición a la cultura**

Sin embargo, debe precisarse que la construcción de la cultura sería el resultado del contraste con aquellas distintas a las que se consideran propias o a las que el individuo califica como parte de su identidad colectiva. Este rasgo es destacado por Jameson, quien señala que la cultura “no es una sustancia o un fenómeno por derecho propio, es un espejismo objetivo que emerge de la relación entre dos grupos por lo menos. Esto es para decir que ningún grupo tiene una cultura por sí mismo: la cultura es la aureola percibida por

---

<sup>471</sup> Loc. cit.

<sup>472</sup> Loc. cit.

<sup>473</sup> FOSSAERT, Robert, citado por GALL, Olivia, “Identidad, exclusión y racismo: reflexiones teóricas y sobre México”. En: *Revista Mexicana de Sociología*. N° 4. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México D.F., 2004, p. 223.

un grupo cuando entra en contacto con y cuando observa a otro. Es la objetivación de todo lo ajeno y extraño acerca del grupo contactado”<sup>474</sup>.

En tal sentido, la cultura se construiría sobre la base de la otredad, que no es más que “el estadio interpersonal: el otro yo, el tú, esto es, la experiencia personal de la intersubjetividad”<sup>475</sup>, fenómeno que para Gall se complementa a la perfección con la identidad, constituyendo dos caras de la misma moneda, pues “ningún [ser ni] grupo humano se autopercebe y se autodefine más que por oposición a la manera como percibe y define a otro [ser y] grupo humano, al que considera diferente de sí”<sup>476</sup>.

Ello, en opinión de Ramírez, se configura cuando “los otros, la pluralidad, la comunidad humana, [el] ámbito donde de alguna manera se media la pura relación de exterioridad y exclusión entre el yo y el otro, entre la conciencia y el mundo”<sup>477</sup>, es advertida por el intérprete, situación que le permite crear categorías en las cuales identifica a los que califica como congéneres y a los que distingue a los individuos que considera como diferentes, constituyendo una interesante construcción para la sociología que adquiere relevancia jurídica cuando la diferenciación atribuida a la realidad propicia tratos vejatorios, sustentados en una falsa idea de superioridad que mengua la integridad de los que han sido denominados diferentes.

Precisamente la otredad constituye la cimiento de la discriminación en contra de la mujer, puesto que lo alterno a lo reconocido como propio por la cultura quebranta el orden establecido por ella. Esto justifica que cuando una mujer realiza un acto contrario al que las construcciones culturales han establecido como propios del varón, se conciba tal acto como alterno a lo correcto, determinándose la necesidad de imponer determinado freno a efectos de obstaculizar su continuidad, ya que ello amenazaría las bases mismas que la cultura ha construido y establecido sobre determinado colectivo humano.

---

<sup>474</sup> JAMESON, Frederic. “Conflictos interdisciplinarios en la investigación sobre cultural”. En: *Alteridades*. Volumen 3, N° 5. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Iztapalapa, 1993, p. 104.

<sup>475</sup> RAMÍREZ, Mario Teodoro. “Estudios de la otredad en la reflexión filosófica de Luis Villoro”. En: *Diánoia*. N° 58. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México, 2007, p. 144.

<sup>476</sup> GALL, Olivia, “Identidad, exclusión y racismo: reflexiones teóricas y sobre México”. Op. cit., p. 224.

<sup>477</sup> RAMÍREZ, Mario Teodoro. “Estudios de la otredad en la reflexión filosófica de Luis Villoro”. Op. cit., p. 144.

#### d. Proceso interno de discriminación

La concepción de la otredad coadyuva a la producción de la discriminación, ya que, conforme señala Ayala Sánchez, esta es un “fenómeno sistémico, a menudo intrínseco a las pautas de funcionamiento de [la sociedad] y arraigado en los valores y normas culturales y sociales dominantes”<sup>478</sup>, que “debe considerarse ilegítimo, siempre y cuando no sea justificado por razones específicas; se tiene así un término relacionado con la idea de trato que implica ya sea una situación de hacer o de no hacer en relación con una persona”<sup>479</sup>.

Por ello, Rodríguez Zepeda considera que la discriminación es “una conducta, culturalmente fundada, y sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja innecesaria, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales”<sup>480</sup>.

Sobre la base de lo afirmado por Bobbio, Salazar Carrión describe a la discriminación como un proceso orientado por los prejuicios que se constituye a través de **tres etapas**: “En la **primera** aparece la comprobación de una diferencia que distingue a un nosotros –los blancos, los varones, los católicos, los compatriotas, los acomodados, los heterosexuales, los jóvenes, etcétera- de los otros –los negros o morenos, las mujeres, los musulmanes, los extranjeros, los pobres, los homosexuales, los viejos, etcétera. Se trata hasta aquí simplemente de la constatación de una diferencia entre otras muchas basada en un rasgo físico o cultural”<sup>481</sup> (el sombreado es nuestro).

En la **segunda** etapa “surge algo más: la evaluación positiva de ese rasgo y, por ende, la evaluación negativa de los que carecen de él. Los otros son inferiores a nosotros porque, no

---

<sup>478</sup> DIRECTOR GENERAL DE LA OIT. “La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean”. Op. cit., p. 9.

<sup>479</sup> AYALA SÁNCHEZ, Alfonso. “Igualdad y conciencia. Sesgos implícitos en constructores e intérpretes del derecho”. Op. cit., p. 80.

<sup>480</sup> RODRÍGUEZ ZEPÉDA, Jesús. “Una idea teórica de la no discriminación”. Op. cit., p. 43.

<sup>481</sup> SALAZAR CARRIÓN, Luis. “Democracia y discriminación”. Op. cit., p. 49.

siendo blancos, varones, católicos, compatriotas, acomodados, heterosexuales, jóvenes, etcétera, carecen de un rasgo esencial para alcanzar el estatuto de hombres (seres humanos) superiores o verdaderos. Ahora bien, este sentimiento de superioridad todavía no tiene por qué generar discriminación en sentido estricto. Puede, por el contrario, promover conductas de ayuda o asistencia hacia los considerados inferiores. Reconocer en los niños o en los adultos mayores una inferioridad física respecto de los mayores de edad de hecho genera también actitudes de apoyo a los más débiles. Por eso hace falta una **tercera** etapa en la que el juicio de superioridad-inferioridad se transforma en legitimación del derecho de los superiores a dominar, someter, utilizar, maltratar y hasta exterminar a los pretendidamente inferiores”<sup>482</sup> (el sombreado es nuestro).

Salazar Carrión afirma que “de esta manera, pasamos de la comprobación de una diferencia, a la evaluación de dicha diferencia y al empleo de esta como justificación de una acción discriminatoria. En este sentido, vale la pena notar que ese tránsito requiere de dos condiciones más. La primera es que el rasgo diferenciador –el color de la piel, el sexo, la religión, la nacionalidad, la situación económica, la preferencia sexual, la edad- sea considerada esencial, decisiva y fundamental respecto de lo que en cada caso se reconoce como valioso para la vida humana, al extremo de convertirse en rasgo que identifica primordialmente a los individuos que les otorga una identidad justamente como superiores o inferiores. (...) La segunda condición vinculada con la importancia de ese rasgo definitivo, es que este dé lugar a una identidad no sólo individual sino colectiva, es decir, adscriba a las personas a grupos claramente diferentes y contrapuestos. Se trata de la formación de un *nosotros*, de un colectivo al que por naturaleza se *pertenece* esencialmente”<sup>483</sup>.

En consecuencia, “el rasgo distintivo es (...) la base de la constitución de un pretendido sujeto colectivo, de un actor supraindividual al que se pertenece y que otorga una identidad específica a sus miembros, en oposición a otros grupos, a otros sujetos colectivos”<sup>484</sup>. En tal sentido, se configuran “presuntos pueblos, razas, étnicas, es decir, sujetos colectivos

---

<sup>482</sup> Ibidem, pp. 49-50.

<sup>483</sup> Ibidem, p. 50.

<sup>484</sup> Loc. cit.

dotados de conciencia y voluntad, que se proponen determinados fines, actúan de una cierta forma y luchan contra otros sujetos colectivos igualmente abstractos. Se forman así los pueblos, las naciones, los fieles y los infieles, las razas, las minorías étnicas o religiosas, que para diferenciarse de otros grupos han de estereotiparse, homogeneizarse, asumir como eje supremo de su identidad el rasgo supuestamente esencial que les da su pertenencia y su parte de un todo, de un nosotros lógicamente anterior y axiológicamente superior a sus miembros. (...) Sobre decir que (...) todos estos sujetos colectivos se sustentan en diferencias artificiales o artificialmente elevadas a factor de asociación-disociación entre los seres humanos, como pretexto para incluir y excluir, dominar o resistir, fraternizar o discriminar, amar u odiar. Este curioso *realismo* metafísico es el que parece estar en la base de los prejuicios discriminatorios: se valora, ama, desprecia u odia no a individuos concretos de carne y hueso, sino a clases, grupos, pseudosujetos colectivos que aparecen como causa abstracta del bien y del mal que padecemos”<sup>485</sup>.

Ello le permite afirmar a Rodríguez Zepeda que “la discriminación se trata, en primer lugar, de una conducta con raíces culturales profundas y socialmente extendida. Esto implica que no puede reducirse a una mera suma de actos discretos o individuales ni a una cuestión de gustos personales o de libertad de opinión. Su lógica de funcionamiento se halla en la expresión sistemática de desprecio hacia determinados grupos a los que los prejuicios o los estigmas (ambos socialmente contruidos, pero no defendibles racionalmente) han individualizado, separado y señalado. Esta conducta de desprecio se ejerce de manera independiente a las acciones del grupo discriminado, por lo que decimos que la suya es una situación de desventaja inmerecida, ya que sus miembros nunca han hecho nada que justifique el maltrato y el desprecio en términos de justicia retributiva. Sus resultados son siempre la limitación de derechos y oportunidades fundamentales, aunque esta limitación se ejerza consciente y voluntariamente o se dé de manera inercial, involuntaria y hasta inconsciente”<sup>486</sup>.

---

<sup>485</sup> SALAZAR CARRIÓN, Luis. “Democracia y discriminación”. Op. cit., p. 51.

<sup>486</sup> RODRÍGUEZ ZEPEDA, Jesús. “Construcción de un marco teórico sobre la discriminación: La discusión académica y la acción institucional”. Op. cit., p. 19.

Esta situación se sustenta en los prejuicios, que “a diferencia de otros errores o de otras opiniones falsas, los prejuicios se caracterizan por oponer una fuerte resistencia no sólo a ser reconocidos como tales sino a modificarse cuando se muestra, con argumentos o con datos empíricos, su falsedad y su irracionalidad. Se trata en verdad de creencias bien atrincheradas, derivadas de las opiniones generalizadas en nuestro entorno, de experiencias singulares, falazmente generalizadas o, en el peor de los casos, del impacto de ideologías políticas y/o religiosas que apelan a la irracionalidad de los individuos para promover visiones maniqueas y explicaciones simplistas de los problemas. En todos los casos, sin embargo, su tenacidad –como señala Bobbio- sólo puede entenderse como consecuencia de los deseos, pasiones e intereses que satisfacen. De ahí que resulten tan difíciles de modificar, tan impermeables a los argumentos y a las pruebas empíricas, y que incluso deriven en acciones y actitudes ferozmente despectivas y crueles, es decir, en discriminaciones que humillan, oprimen, excluyen y hasta matan a seres humanos inocentes por el sólo hecho de *pertenecer* al grupo odiado”<sup>487</sup>.

### **3.5.2.2. Clases de discriminación**

Ahora bien, para lo que atañe a esta parte de la investigación, debe precisarse que cada vez que nos refiramos a discriminación lo estaremos haciendo respecto a una conducta u omisión que refleja un trato diferenciado y no sustentado en razones objetivas, sino subjetivas; es decir, que privilegiará a determinados sujetos por su pertenencia a un género, mientras que a otras las limitará en el ejercicio de sus derechos y libertades por serles propia la identidad femenina. Asimismo, cabe precisar que este trato diferenciado no trae consigo la consecución de finalidad constitucional alguna, lo cual lo torna en discriminatorio.

#### **a. Discriminación directa**

Pérez Portilla considera que la discriminación directa “rompe con la igualdad de trato efectuando diferenciaciones basadas en características definitorias de las personas

---

<sup>487</sup> SALAZAR CARRIÓN, Luis. “Democracia y discriminación”. Op. cit., p. 52.

pertenecientes a un grupo. Es decir, la discriminación es directa si los tratamientos que irrazonablemente desfavorecen, se efectúan explícitamente sobre las bases del criterio que define el tipo de persona que resulta discriminada. En términos generales, contempla el criterio formal de discriminación establecido en los mandatos de no discriminación. Suele identificarse con el *disparate treatment* del derecho anglosajón<sup>488</sup>.

Conforme señala Huerta Ochoa, la discriminación es directa “cuando se fundamenta expresamente en las características distintivas o definitorias de las personas que pertenecen a un grupo”<sup>489</sup>. La discriminación directa “se produce cuando la diferencia de trato se vincula expresamente al sexo. (...) [Es] discriminación directa el trato desfavorable dado a la mujer como consecuencia de una condición únicamente femenina, como por ejemplo, tratar de forma desfavorable el embarazo”<sup>490</sup>.

Este concepto se sustenta en un **trato menos favorable, prohibido y dirigido contra las personas que pertenecen a determinado grupo**. Su ocurrencia en el mundo normativo se ha visto disminuida, ya que la cláusula de igualdad ante la ley (artículo 2º inciso 2 de la Constitución) hace cada vez más difícil que los dispositivos amparen referentes lingüísticos que expresamente hagan alusión a la exclusión de la mujer en el ejercicio de sus derechos o en su participación en determinados ámbitos.

## **b. Discriminación indirecta**

En opinión de Miné, la discriminación indirecta se produce “cuando una disposición, un criterio o una práctica (una regla o un uso en vigor en la empresa o en el Estado) (...) aparentemente neutros (que hacen referencia a un criterio) (...) son susceptibles de implicar una desventaja particular para las personas que respondan a uno o más criterios o bien (...) [que] supondrían una desventaja particularmente para personas en función del sexo, en relación con las personas del otro sexo, (...) a menos que dicha disposición, dicho criterio o

---

<sup>488</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., p. 117.

<sup>489</sup> HUERTA OCHOA, Carla. “La estructura jurídica del derecho a la no discriminación”. Op. cit., p. 187.

<sup>490</sup> MORAGA GARCÍA, María Ángeles. “La igualdad entre mujeres y hombres en la Constitución española de 1978”. Op. cit., p. 61.

dicha práctica sean justificados objetivamente por un objetivo legítimo y los medios sean apropiados y necesarios”<sup>491</sup>.

De acuerdo a Huerta Ochoa, la discriminación es indirecta cuando “se produce a través de las normas, las políticas o de ciertas prácticas que aun cuando no constituyen actos discriminatorios, tienen por efecto causar un perjuicio o una cierta desventaja para un grupo de personas”<sup>492</sup>.

Por su parte, Pérez Portilla es de la opinión que “la discriminación indirecta surge en el caso de que la igualdad de trato se rompa, no a través de la disposición –que lingüísticamente, se presenta como indiferenciadora o neutra- sino como resultado de los efectos o consecuencias de la misma. Puede darse cuando se usa un criterio no prohibido que, sin embargo, tiene el efecto de desfavorecer al grupo en cuestión. De esta manera, sobre la base de la elección de criterios aparentemente neutros se llega, de hecho, a un resultado discriminatorio. En la discriminación indirecta reaparece el elemento colectivo de la discriminación, en cuanto que lo que aquí cuenta no es que en un caso concreto el criterio aparentemente neutro de distinción perjudique a un individuo de cierta raza, sexo, etc., sino que la aplicación de ese criterio incide perjudicialmente en los individuos de esas características y por ello, en el grupo al que pertenece ese individuo, habiéndose de considerar entonces a uno y otro como discriminador por el *disparate impact* o efectos desproporcionados que ese criterio aparentemente neutro tiene sobre los miembros de ese grupo”<sup>493</sup>.

En la discriminación indirecta “el trato desfavorable no aparece inmediatamente vinculado al sexo, pero en la práctica supone poner a la mujer en una posición desfavorable; como por ejemplo, que a efectos retributivos, se considere de menor valor aquel tipo de trabajo que es realizado por mujeres en forma casi totalmente exclusiva. Sirva como ejemplo la practica habitual de ofrecer una remuneración mayor a tareas realizadas por hombres, –como las de

---

<sup>491</sup> MINÉ, Michel. “Los conceptos de discriminación directa e indirecta”. Academy of European Law, pp. 7-8. Disponible en: [http://www.era.int/en/resources/5\\_1095\\_3386\\_file\\_en.4886.pdf](http://www.era.int/en/resources/5_1095_3386_file_en.4886.pdf) (Revisado el 28 de agosto de 2008).

<sup>492</sup> HUERTA OCHOA, Carla. “La estructura jurídica del derecho a la no discriminación”. Op. cit., p. 187.

<sup>493</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., p. 118..



vigilancia y seguridad—, que las consideradas tradicionalmente femeninas, —limpieza—, aun cuando la duración, esfuerzo y atención de esas tareas fueran equivalentes”<sup>494</sup>.

### **c. Discriminación inconsciente**

La discriminación inconsciente es definida por Barrère como un disfavor “casual o aleatorio”<sup>495</sup>, la discriminación inconsciente es una tendencia a retratar una sociedad uniforme que, como es evidente, no corresponde a la realidad.

Por su parte, Puyol González señala que existen “formas de discriminación que no se fundamentan en teorías elaboradas ni vienen precedidas de deliberaciones conscientes, sino que son el producto de procesos cognitivos inconscientes. En ese caso, se podría pensar que si no existe un propósito deliberado de discriminar, la discriminación no es mala por sí misma, sino en todo caso por sus efectos negativos, lo que parece que exculparía a los discriminadores de su actitud, aunque no impediría llevar a cabo acciones públicas contra la discriminación. Pero esa idea contraviene dos argumentos plausibles. En primer lugar, mantener un prejuicio por ignorancia no excluye la evaluación moral del prejuicio. Si éste es moralmente malo, lo sigue siendo tanto si su portador es consciente como si no. Y, en segundo lugar, la inconsciencia puede ser el producto de una inevitable irreflexión sobre las actitudes propias, como ocurre en los niños, pero también de una menos excusable falta de reflexión o de un sospechoso autoengaño, como ocurre con los adultos que hace mucho tiempo que ejercen la discriminación aun conociendo las teorías que la denuncian. En este último caso, la exculpación moral del discriminador es cuando menos discutible”<sup>496</sup>.

Esta discriminación parte de los roles asignados por la sociedad al varón y a la mujer, lo que determina la “pervivencia de un orden simbólico patriarcal que ‘naturaliza’ la relación de jerarquía entre el género masculino y el femenino y la desigual distribución de roles

---

<sup>494</sup> MORAGA GARCÍA, María Ángeles. “La igualdad entre mujeres y hombres en la Constitución española de 1978”. Op. cit., p. 61.

<sup>495</sup> BARRERE UNZUETA, María Ángeles. “Discriminación, derecho antidiscriminatorio y acción positiva a favor de las mujeres”. Editorial Civitas. Madrid, 1997, p. 25.

<sup>496</sup> PUYOL GONZÁLEZ, Ángel. “¿Qué hay de malo en la discriminación?”. En: *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*. N° 29. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2006, p. 83.

entre ellos”<sup>497</sup>. En pocas palabras, *es el resultado de las asociaciones que nuestra mente realiza sobre lo que identificamos como propio de cada género, en tanto este pensamiento proviene de la estructura misma de nuestra sociedad patriarcal.*

La discriminación inconsciente se manifiesta a través de *estereotipos*, es decir, “de esquemas cognitivos que estructuran sus percepciones y hábitos de conducta, a pesar de que ellas mismas desaprobaban tales representaciones si fuesen conscientes de su existencia. (...) Conducen a la discriminación cuando juzgamos a todos los miembros de un grupo a partir de los rasgos señalados por el estereotipo. (...) Los estereotipos se acaban convirtiendo en teorías implícitas, llenas de prejuicios en la manera como percibimos, interpretamos, descodificamos y retenemos la información que recibimos de los otros. Están más relacionados con los procesos cognitivos que con las motivaciones. Por esa razón, lo curioso de los estereotipos es que están presentes incluso entre quienes los rechazarían de ser conscientes de su posesión, lo que hace que se pueda discriminar a los otros sin desear hacerlo”<sup>498</sup>.

Estas consideraciones hacen posible la concreción de conductas que en un primer momento son tomadas como “naturales”, pero que en su seno albergan pautas discriminadoras que no son percibidas por sus autores ni por sus víctimas. Así, por ejemplo, Deere y León señalan que “en el caso de la reforma agraria de Nicaragua, la desigualdad en la extensión de la tierra otorgada en título a hombres y mujeres fue resultado de una ‘discriminación inconsciente’ con respecto a la división del trabajo por género: ‘Se presume que las mujeres no necesitan mayores extensiones de tierra de lo que se requiere para producir la seguridad alimenticia del hogar’ (...) Un sesgo de género similar puede operar en el mercado de tierras donde los dueños suponen que las mujeres necesitan menores extensiones de tierra que los hombres, unido al hecho de que las mujeres tienen recursos relativamente más limitados para adquirir tierra cuando está a la venta. Todos estos factores, en conjunto,

---

<sup>497</sup> PEREIRA PORTO, Cecilia. “A discriminación positiva no direito comunitario europeo e na jurisprudencia do Txue”. Universidad de la Coruña. La Coruña, 2006, p. 8.

<sup>498</sup> PUYOL GONZÁLEZ, Ángel. “¿Qué hay de malo en la discriminación?”. Op. cit., p. 84.

ayudan a explicar la desigualdad relativa en la extensión de la tierra que poseen los agricultores y las agricultoras”<sup>499</sup>.

Esta asunción “natural de roles” se materializa al momento que la mujer ve restringido el ejercicio de sus derechos, ya que su naturaleza se impone en condición para que reciba un trato diferenciado, muchas veces, en un afán sobreprotector que termina por limitar sus derechos.

#### **d. Discriminación consciente**

La discriminación consciente ha sido abordada en un informe del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, en el cual se ha precisado que “las conductas discriminatorias se sustentan en valoraciones negativas hacia determinados grupos o personas. Dicho de otro modo, **la discriminación se basa en la existencia de una percepción social que tiene como característica el desprestigio considerable de una persona o grupos de personas, ante los ojos de otras.** Estas percepciones negativas tienen consecuencias en el tratamiento hacia esas personas, en el modo de ver el mundo y de vivir las relaciones sociales en su conjunto. Todo ello influye en las oportunidades de las personas y por consiguiente, en el ejercicio de sus derechos y en la realización de sus capacidades. Es decir, la discriminación tiene un impacto en el ordenamiento y en las modalidades de funcionamiento de cada sociedad en particular”<sup>500</sup> (el sombreado es nuestro).

Cabe destacar que la psicología explica esta clase de discriminación a través del concepto de “consciencia”, para lo cual Lopera Echavarría destaca su relación con el acto de sentir, al señalar que “sentir es de alguna manera percatarse del mundo y, en esa medida, ser ‘consciente de’. Este ser consciente requiere, además de la percatación, un sistema de huellas mnémicas o memoria que sirva de referente y comparación con el mundo externo en el que se actúa, puesto que se trata de una percatación activa, no sólo reactiva. Así, esta

---

<sup>499</sup> DEERE, Carmen Diana y LEÓN, Magdalena. “La brecha de género en la propiedad de la tierra en América Latina”. En: Estudios sociológicos. Volumen XXIII, N° 02. El Colegio de México. México D.F., 2005, p. 430.

<sup>500</sup> PACHECO, Gilda, TORRES, Isabel y TOJO, Liliana (Coordinadoras). “Los derechos humanos de las mujeres: Fortaleciendo su promoción y protección internacional. De la formación a la acción”. Op. cit., p. 85.

consciencia otorga un saber al animal (una cualidad) acerca de la orientación y la naturaleza de los estímulos (internos y externos) y de su propio estado intencional, sin que tal animal – a excepción del ser humano- sea consciente en un sentido superior: no es consciente de que es consciente. No hay una especie de reflexión (reflexión en ambos sentidos: el de examinar detalladamente algo, y el de volver sobre sí, reflejarse, tomarse a sí mismo como objeto)”<sup>501</sup>.

Sin perjuicio de lo que señalaremos en el marco conceptual, la discriminación consciente es un fenómeno enraizado en nuestra sociedad en contra de la mujer, el cual se aprecia con claridad en el ámbito laboral, en la que el empleador discrimina a las candidatas a un puesto de trabajo que son madres o que están embarazadas. En este caso, la diferenciación se debe a una conducta machista del empleador que se sustenta en los roles que asigna como propios a la mujer: su restricción a la esfera doméstica.

De acuerdo a su pensamiento, por más que una mujer acceda a estudios e ingrese al mundo laboral, esta se encontrará inexorablemente vinculada a las labores domésticas, puesto que ese es el lugar que “naturalmente” le corresponde. Por lo tanto, aunque considera posible su participación en el mundo laboral, es “consciente” de sus “limitaciones”, las cuales desea evitar dentro de su negocio, debido a que tener a una mujer abogada significa atenerse a contar con una profesional que no asumirá sus labores de manera plena, como sí lo haría un varón (cuyo rol, “evidentemente” no lo involucra en tareas domésticas).

#### **e. Discriminación interseccional**

De acuerdo a Bix, la interseccionalidad –también denominada “**transversalidad**”- es “un concepto propuesto la mayoría de las veces dentro de la teoría crítica desde el punto de vista racial (...), que señala que algunos individuos pueden estar sujetos a una serie de formas de explotación convergentes o entremezcladas (p. ej. Basadas en la raza, el género, la clase, la religión, etcétera). Bajo tales circunstancias, los argumentos basados en una sola

---

<sup>501</sup> LOPERA ECHAVARRÍA, Juan Diego. “La consciencia: ¿Una realidad no algorítmica?”. En: *Acta colombiana de psicología*. Volumen 10, N° 02. Universidad Católica de Colombia. Bogotá, 2007, p. 159.

forma de explotación pueden ser inadecuados para comprender la situación. Por ejemplo, se ha argüido a veces que un análisis feminista que sólo presta atención a lo que es compartido por todas las mujeres puede ser de poca ayuda para comprender la situación de las mujeres afroamericanas y latinas”<sup>502</sup>.

A través de la interseccionalidad se abordará la discriminación contra la mujer a partir de sus múltiples identidades, entendida como su pertenencia “a más de una comunidad a la vez y pueden experimentar opresiones y privilegios de manera simultánea”<sup>503</sup>. Esto determina que “[e]l análisis interseccional tiene como objetivo revelar las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación de identidades. *Busca abordar las formas en las que el racismo, el patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas de discriminación crean desigualdades que estructuran posiciones relativas de las mujeres.* Toma en consideración los contextos históricos, sociales y políticos y también reconoce experiencias individuales únicas que resultan de la conjunción de diferentes tipos de identidad”<sup>504</sup> (las cursivas son nuestras).

La interseccionalidad nos dará una visión de la discriminación centrado en casos concretos, *ya que esta perspectiva toma en cuenta la interacción y la dinámica de las diferentes manifestaciones de la discriminación que recaen sobre la mujer* (por raza, origen, condición económica, etc), *abordándolas desde la unidad del fenómeno.* Esto implica superar las “categorías únicas” ya que “no refleja[n] la realidad de que todos tenemos identidades múltiples y, por ende, podemos enfrentar formas de discriminación entrecruzadas”<sup>505</sup>.

Así, por ejemplo, la interseccionalidad se revela en el cruce de las variables “sexo” y “raza”, ya que como señala Lugones, “la propia lógica de la opresión ha hecho posible que dominaciones culturales y de género se enmascaren a sí mismas tanto como multiculturales

---

<sup>502</sup> BIX, Brian. “Diccionario de teoría jurídica”. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México D.F., 2009, p. 141.

<sup>503</sup> SYMINGTON, Alison. “Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica”. Association for women’s rights in development (AWID). Toronto, 2004. Disponible en: [www.awid.org/publications/primers/intersectionality\\_sp.pdf](http://www.awid.org/publications/primers/intersectionality_sp.pdf) (Revisado el 29 de septiembre de 2007).

<sup>504</sup> Loc. cit.

<sup>505</sup> Loc. cit.

o como feministas”<sup>506</sup>. El desconocimiento de la intersección de las variables sexo y raza es descrito a través de lo que la autora denomina “máscaras”, es decir, visiones netamente multiculturales o feministas que no analizaron la discriminación de la que eran objeto determinadas mujeres por su color de piel o personas de determinado color de piel por ser mujeres.

Por ello, considera que “la máscara multicultural es una versión del multiculturalismo que podría llamarse ‘multiculturalismo ornamental’ (...). La máscara feminista es la que se opone a una versión de la femineidad que se ha atribuido típicamente a mujeres que, en términos de raza, clase y sexualidad, se han entendido como subordinadas sólo a los burgueses blancos. Este feminismo ha sido complaciente con la sumisión de todas las demás mujeres. Tanto la máscara multicultural como la feminista participan de una lógica de falsa universalización”<sup>507</sup>.

Sin embargo, para la autora esta situación tendría una matriz: nos referimos a la subordinación de la mujer al hombre de piel blanca, ya que “fue confundida con la subordinación de todas las mujeres. El desplazamiento que el multiculturalismo radical y los feminismos de las mujeres de color representan ha sido expresado vigorosamente (...) dentro de una lógica de la resistencia”<sup>508</sup>.

Frente a esta situación se propone la **educación transversal**, pues “los temas transversales, referidos a la educación en los valores, responden a realidades o a necesidades que tienen una muy especial relevancia para la vida de las personas y para la positiva y armónica construcción de la sociedad contemporánea. Los temas transversales son, en el fondo, una propuesta curricular concreta, que pretende responder al desafío de ese plan de acción educativa que hoy la sociedad nos está demandando, que ha de traducirse (...) en el gran

---

<sup>506</sup> LUGONES, María. “Multiculturalismo radical y feminismos de mujeres de color”. En: *Revista internacional de filosofía política*. N° 25. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Madrid, 2005, p. 61.

<sup>507</sup> *Ibidem*, pp. 61-62.

<sup>508</sup> *Ibidem*, p. 62.

reto del desarrollo del humanismo, es decir, en ser capaces de dotar de contenido humanista a la globalidad de nuestros proyectos educativos”<sup>509</sup>.

En efecto, su aplicación sobre la educación implica que “la transversalidad debe ser considerada como un paradigma de actuación didáctica o enfoque transdisciplinario. Según este planteamiento, la transversalidad puede comprometer de forma artificial la integración de conocimientos poco afines desde un punto de vista lógico. Por el contrario, la interdisciplinaridad pondría en diálogo a áreas de conocimiento que compartieran el mismo objeto de estudio, donde cada una afrontaría el mismo fenómeno desde diferentes puntos de vista”<sup>510</sup>.

Conforme señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Colombia, la implementación exitosa de la transversalidad de género contribuye a:

- “• Igual participación de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisiones para establecer las prioridades y asignar los recursos.
- Igual acceso y control de mujeres y hombres a las oportunidades, los recursos y los resultados del desarrollo.
- Igual reconocimiento y status para mujeres y hombres.
- Mujeres y hombres disfrutan igualmente los mismos derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que sustentan los valores de libertad, participación, igualdad, equidad y respeto por la diferencia y un desarrollo integral y sostenible.
- Igual mejoramiento para mujeres y hombres en los estándares de calidad de vida.
- Reducción de la pobreza para mujeres y hombres según se evidencie mediante indicadores, especialmente aquellos asociados con las áreas en las que las brechas de género son mas profundas.

---

<sup>509</sup> GONZÁLEZ LUCINI, Fernando. “Temas transversales y áreas curriculares”. Alauda. Madrid, 1994, p. 13.

<sup>510</sup> GUIJARRO OJEDA, Juan Ramón. “La transversalidad como paradigma estructurante de la acción didáctica en la enseñanza de lenguas extranjeras”. En: *Didáctica (Lengua y literatura)*. Volumen 18. Universidad Complutense. Madrid, 2006, p. 165.

- Mejoramiento eficaz y eficiente del crecimiento económico y desarrollo sostenido”<sup>511</sup>.

### **3.5.3. Manifestaciones de discriminación contra la mujer**

Sin perjuicio de las demás manifestaciones de este fenómeno, hemos considerado pertinente abordar dos que, en nuestra opinión, inciden de manera importante en nuestra sociedad. Nos referimos a la discriminación de la mujer por la mujer (autodiscriminación) y a la violencia ejercida en contra de esta.

#### **3.5.3.1. Discriminación de la mujer por la mujer**

Como hemos señalado, género y sexo no son sinónimos. De acuerdo a Patricia Ruiz Bravo López, “mientras que sexo alude a los aspectos físicos, biológicos y anatómicos que distinguen lo que es un macho y una hembra, el concepto de género nos remite a las características que social y culturalmente se adscriben a hombres y mujeres a partir de las diferencias biológicas, constituyendo así lo que se conoce como género masculino y género femenino”<sup>512</sup>.

El rol asignado a cada género ha determinado que la mujer se vea inmersa en la realización de labores domésticas y el varón, en aquellas desarrolladas en el ámbito público. Sin embargo, esta clasificación de las actividades “propias de cada género” constituye una manifestación de discriminación contra la mujer, pues en razón de la preponderante posición del varón, muchas veces se limita su desarrollo sobre la base de los roles que de acuerdo a “su naturaleza” les corresponden.

No obstante, esta clase de conductas y de omisiones que discriminan a este grupo poblacional no sólo son ejercidas por varones, sino también por las propias mujeres.

---

<sup>511</sup> MORO, Bruno (Coordinador). “Transversalidad de género en el desarrollo”. Módulo 1. Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). Bogotá, 2006, p. 5.

<sup>512</sup> VILLANUEVA, Rocío (Coordinadora) “A un año de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Defensorial N° 86”. Op. cit, p. 135.



### **3.5.3.1.1. Causas de la “discriminación de la mujer por la mujer”**

Resulta curioso pensar que una mujer puede discriminar a sus pares. Sin embargo, basta con observar algunas conductas que las féminas, entre ellas las madres, tienen respecto a otras al determinar la existencia de comportamientos “correctos” e “incorrectos” en torno a la mujer.

Si bien esta parte del análisis excede el campo jurídico, es imprescindible abordar el estudio de las causas de la discriminación de la mujer por la mujer, ya que a través de ellas podremos conocer cuáles son las conductas u omisiones que limitan los derechos fundamentales de este sector de la población peruana.

A efectos de exponer un desarrollo medianamente estructurado, se ha dividido su estudio a través de dos categorías: construcciones culturales y religiosas. No obstante estar la segunda inmersa en la primera categoría, resulta necesario estudiarla por separado, en tanto se constata la profunda raigambre que la fe católica tiene en nuestro país.

### **3.5.3.1.2. Construcciones culturales**

Como señala Ruiz Bravo López, “las categorías ‘mujer’ y ‘varón’ son productos culturales, construcciones sociales que las sociedades elaboran a fin de informar a sus miembros (mujeres y varones) sobre las formas de ser, sentir y hacer que les están asignadas, permitidas y son socialmente valoradas”<sup>513</sup>.

Esta premisa nos permite comprender que el comportamiento de la mujer se ve influenciado por construcciones observadas desde su más temprana infancia, las que son asumidas como “naturales” dentro de su desarrollo social y que determinan su aprobación o rechazo. *La asunción de lo “propio” se traslada al concepto que la mujer tiene del rol de su género*, expresado por la autora a través de las construcciones culturales:

---

<sup>513</sup> Ibidem, p. 136.

“a. El primero y más evidente son los **roles** que se atribuyen en razón del género. La mujer es madre-ama de casa, el varón es proveedor económico y jefe del hogar. Lo femenino es reproducción, lo masculino producción. (...) *Existe como patrón de identificación y guía para la acción. Los otros roles son negados, invisibilizados*”<sup>514</sup> (el sombreado y las cursivas son nuestras).

Esta situación se ejemplifica a través de las mujeres que “en razón de su género” deben compaginar su desarrollo profesional con el cuidado de sus hijos, en atención a que la construcción de su género ha sido sustentado sobre la imagen de la madre incorporada a la esfera doméstica, mientras que el padre muchas veces asume un rol ausente de mero proveedor que, en muestra de “buena voluntad”, podrá ayudar a su compañera en las labores domésticas, mas nunca obligado o determinado por la naturaleza de su género.

Como señala el Instituto de la Mujer, “[a] pesar de que muchas mujeres se han incorporado al mercado laboral, la dedicación a la familia no ha descendido para ellas, produciéndose, en muchos casos el fenómeno de la ‘*doble o triple jornada*’<sup>515</sup>. Esta doble o triple carga de obligaciones es la causa fundamental de la desigualdad en el uso del tiempo entre hombres y mujeres; una de las consecuencias directas de esta falta de tiempo de las mujeres es el descenso de su calidad de vida que afecta directamente a su salud física y psíquica por el exceso de responsabilidad y presión”<sup>516</sup> (las cursivas son nuestras).

*Las mujeres que asumen tal división de roles ejercen inconscientemente la discriminación contra su género, puesto que permiten su sometimiento a un orden que ha sido impuesto a lo largo de los siglos, sin ser conscientes que a través de tales actitudes están formando nuevas generaciones que asumirán lo que observan en casa como natural al varón y a la mujer. Lo dicho quiere reflejar que por más que la mujer tenga acceso a la educación y a un puesto de trabajo remunerado, será cómplice de la discriminación que otros y otras*

---

<sup>514</sup> Ibidem, p. 137.

<sup>515</sup> Al trabajo reproductivo (ámbito doméstico) se le suma el trabajo productivo (ámbito público) e incluso el trabajo comunitario.

<sup>516</sup> CASTAÑO DE LA CRUZ, Susana. “Guía de sensibilización y formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. Instituto de la Mujer/ Ministerio de Trabajo e Inmigraciones. Madrid. Disponible en: [http://www.mtas.es/mujer/publicaciones/docs/materiales\\_digital.pdf](http://www.mtas.es/mujer/publicaciones/docs/materiales_digital.pdf) (Revisado el 24 de octubre de 2007).

*ejercen contra ella en la medida que no sea consciente que asignar comportamientos propios a cada género constituye la semilla de una subjetiva diferenciación que atenta contra el libre desarrollo de todo ser humano, contra su reputación (identificar a las mujeres con múltiples parejas sexuales como “malas mujeres”, mas no así a los varones con similar comportamiento) y contra su dignidad.*

“b. El segundo se refiere a los **espacios**. Para actuar los roles, se identifican espacios masculinos y femeninos. La calle y la casa son un buen ejemplo de ello, pero no el único. Por lo general, lo público se identifica con lo masculino y lo privado con lo femenino”<sup>517</sup> (el sombreado es nuestro).

La discriminación de la mujer por la mujer se expresa a través de los espacios que ella asigna a cada género. Así por ejemplo, en muchas oportunidades hemos oído de boca de féminas, “el hombre es de la calle, la mujer de la casa”, que no es otra que una *manifestación del “orden natural” que determinadas mujeres pretenden perpetuar a efectos de tutelar la seguridad de sus pares. Sin embargo, tal concepción distorsiona la capacidad de la mujer, equiparándola a una suerte de ser incapaz, carente de discernimiento al momento de enfrentar retos o de encontrar soluciones frente a posibles situaciones de peligro.* Esto se constata en que “[n]o es difícil entonces comprender por qué algunas mujeres tienen temor de salir de la vivienda para asistir a cursos de capacitación, asambleas o actividades de algunas organizaciones”<sup>518</sup>.

La restricción impuesta por ciertas mujeres a sí mismas constituye una limitación a su desarrollo educativo, laboral y social, abandonando así el original rol de “mujer protectora de la integridad de sus pares” y convirtiéndose en agentes de restricción de las libertades connaturales a todo ser humano.

“c. El tercero alude a los **atributos o características de personalidad que se asocian a estos roles**. Lo femenino se asocia a la dulzura, la debilidad, la emoción, el sacrificio y la

---

<sup>517</sup> VILLANUEVA, Rocío (Coordinadora) “A un año de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Defensorial N° 86”. Op. cit, pp. 137-138.

<sup>518</sup> Ibidem, p. 138.

renuncia. Lo masculino a la agresividad, la fuerza, la competencia y la razón. Se asume así que hombres y mujeres tienen ‘naturaleza’ diferente”<sup>519</sup> (el sombreado es nuestro).

Este aspecto resulta trascendental para comprender por qué algunas mujeres se discriminan a sí mismas y privilegian el desarrollo de los varones en desmedro del propio. Así tenemos a las mujeres que recriminan que sus pares desarrollen actividades laborales “naturales” a la fuerza física del varón, tales como la construcción, o de liderazgo como presidenta de directorio, pues a su entender, estas funciones atentan contra su realización como mujeres, muchas veces asumidas a partir de la maternidad y del cuidado del hogar.

En efecto, como señala el Instituto de la Mujer, “[e]stos estereotipos y roles de género hacen que las *expectativas de futuro* de las personas, es decir *los planes de vida* (...) que la persona va construyendo, *se vean determinados por los modelos que nos imponen y no de los que seríamos capaces o muchas veces deseáramos*”<sup>520</sup> (las cursivas son nuestras).

Así se explica que un considerable número de mujeres vean relegado su desarrollo personal debido a las restricciones que sus propias madres u otras mujeres colocan en su camino, debido a que sus aspiraciones no se condicen con el rol que les corresponde en atención a su naturaleza. Esta situación no hace más que reforzar la tantas veces mencionada sujeción frente al varón, consentida por la mujer no sólo por su crianza, sino también por su escasa visión respecto a los roles que cumple en la familia y en la sociedad.

### **3.5.3.1.3. Construcciones religiosas**

En el acápite anterior hemos podido observar que existen ciertas construcciones culturales que determinan la discriminación de la mujer contra la mujer. Al ser interiorizados desde la más temprana edad, se asumen dichos presupuestos como naturales a los géneros, originándose a partir de tal asunción conductas u omisiones que determinan la existencia de la discriminación.

---

<sup>519</sup> Ibidem, p. 139.

<sup>520</sup> CASTAÑO DE LA CRUZ, Susana. “Guía de sensibilización y formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. Op. cit.

Sin embargo, tales patrones de comportamiento se encuentran sustentados sobre la base de una fuerza mayor, de una matriz que enlaza sus brazos hacia un componente común a nuestra población: nos referimos a las construcciones religiosas.

Una serie de indicadores corroboran que nuestro país es de tendencia marcadamente católica. En la construcción del catolicismo juega un importante papel la imagen del culto mariano, sustentado en el rol de la Virgen María como mujer que prioriza su rol de madre y antepone el ejercicio de otros roles que la realizarían. A efectos de comprender el vínculo entre la idealización de la madre a través del culto mariano y determinadas manifestaciones de discriminación de la mujer por la mujer, analicemos la maternidad desde un enfoque sociológico.

Como señala María Gabriela Rodríguez Arancibia, “la definición de mujer se sustenta esencialmente en el concepto de madre y de las actividades concomitantes, por cuanto bajo la perspectiva patriarcal se especializa a las mujeres en la maternidad. *En el imaginario social la feminidad está destinada a realizarse en y a través de la maternidad, real o simbólica*”<sup>521</sup> (las cursivas son nuestras). Esta afirmación encuentra asidero en la opinión de Moore, al considerar que en “la construcción simbólica de género, la unidad madre e hijo [es] como ‘naturalmente’ universal, [mientras que] la paternidad no es irrefutable como la maternidad, ésta es algo más natural (...), lo que ayuda a perpetuar la diferenciación público/privado”<sup>522</sup>.

Dentro de este contexto, destaca la imagen de la Virgen María como “el prototipo de la abnegación y la pureza, (...) [pues] la santidad más absoluta estriba en la maternidad virgen. La Virgen se convierte en el modelo de las mujeres. Escogida por Dios, madre de su hijo, dispuesta a todo sacrificio, mártir del dolor. *Así, el mito de la virginidad en nuestra*

---

<sup>521</sup> RODRÍGUEZ ARANCIBIA, María Gabriela. “La construcción de la identidad femenina adolescente: una encrucijada entre el culto mariano y el mundo público”. Tesis de Sociología. Universidad de Chile. Santiago de Chile, 2005, p. 24.

<sup>522</sup> Loc. cit.

*cultura, supedita y anula la vida sexual de la mujer, en pos de la maternidad*<sup>523</sup> (las cursivas son nuestras).

Vemos en el último extremo de la cita que tal construcción ocasiona un rol de género asignado a la mujer, que a su vez es fuente de realización de las mujeres que lo asumen como natural. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que nuestro país es profundamente católico, comprenderemos que gran parte de las mujeres peruanas interiorizan la imagen de la Virgen María como ejemplo a seguir en pos de su realización, que más allá de restringir su desarrollo a causa de corrientes fundamentalistas, determina que **sean las propias mujeres quienes discriminen a aquellas mujeres que asuman roles distintos al “natural”: nos referimos a la maternidad y a la relegación de la vida sexual en pos del discurso moral** recogido por la autora de un texto de Schmuckler:

“el discurso moral materno prepara a la mujer para entregar su vida a sus hijos y para el sacrificio personal en pos del bienestar de ellos. Las mujeres no deben reconocer el interés por sí mismas como personas, aceptando en exclusividad su rol maternal para garantizar la unidad familiar. Se define de esta forma la identidad femenina como altruista, en que sus deseos personales se invalidan frente al discurso moral materno. **La madre, así definida no puede discriminarse del grupo familiar con deseos o fines diferenciados, y menos aún reconocer que estos deseos o fines puedan estar en contraposición con el grupo**”<sup>524</sup> (el sombreado es nuestro).

Este último párrafo trae a colación que la discriminación de la mujer contra la mujer no sólo se exterioriza a través de la agresión que estas pueden ejercer sobre sus pares, sino también frente a sí mismas, en tanto el mentado “sacrificio” no es más que un indicador de subordinación frente al varón, hijos e hijas para la obtención de un fin: **estatus moral**. Ello se entiende a partir de la idea que *“las mujeres latinoamericanas (...) habrían desarrollado una ideología paralela al machismo masculino* (el marianismo como expresión de la creencia en la superioridad moral de la mujer que asocia a la Virgen María), *que revierte la*

---

<sup>523</sup> Ibidem, p. 30.

<sup>524</sup> Loc. cit.

*suposición de la superioridad masculina, y explica por qué las mujeres aceptan el machismo de los hombres y su supuesta situación subalterna. Al mismo tiempo les confiere el poder total del espacio doméstico y una gran influencia en la toma de decisiones. La autoridad dentro del hogar estaría, en realidad en manos de la madre. A su vez ella tendría un enorme peso en las decisiones políticas mediante su influencia moral*<sup>525</sup> (las cursivas son nuestras).

No obstante, estas conductas no hacen más que obstaculizar la realización de uno de los fines del Estado social y democrático de derecho: la igualdad entre los seres humanos, pues como se explicará en su oportunidad las distinciones que las mujeres realizan en relación a ciertas conductas u omisiones que consideran ajenas a su género y propias al masculino no se encuentran sustentadas sobre la base de criterios objetivos, convirtiéndose en manifestaciones de discriminación contra la mujer.

Observamos que la interiorización de roles “propios” de cada figura o institución dentro de un dogma constituyen causas de la discriminación, manifestadas a través de conductas u omisiones de las propias destinatarias de tales actos. Lo dicho no implica un ataque a los dogmas de la Iglesia Católica, puesto que la figura de la Virgen como madre representa a un ser dadivoso, lleno de amor y sacrificio pero que no puede ser trastocado en el intento de glorificar a la mujer, ya que es una simple mortal.

Es decir, la matriz de la discriminación de la mujer por la mujer no se encuentra en el dogma, sino en la interpretación que se le da. Desgraciadamente esta situación se ve avalada por una suerte de fundamentalismo religioso que pretende restringir la realización de la mujer a su rol de madre, dejando ausente al varón en el ejercicio de sus obligaciones como padre. Ello lo corroboramos a través del discurso de Juan Luis Cipriani, actual arzobispo de Lima, al señalar que “la fuerza moral de la mujer radica en que Dios le ha confiado la humanidad porque le ha entregado la custodia del don de la vida, que es el ser madre”, al considerar que “la mujer tiene el toque, el modo femenino que le brinda a la sociedad el complemento necesario, las mujeres tienen la ternura, la agudeza, el cariño, la

---

<sup>525</sup> Ibidem, p. 34.

fortaleza, el amor, la entrega, el sacrificio, la elegancia, la belleza, éste es el aporte -entre otros- que la mujer brinda a la humanidad entera”<sup>526</sup>.

Vemos pues que este discurso, lejos de abordar el desarrollo de la mujer como ser humano, la enclaustra en el rol doméstico. Se aprecia un discurso irresponsable, que no pondera sus efectos sobre una población devota, en tanto se mitifica la imagen de la madre, sin recalcar que el ejercicio de la maternidad debe ejercerse en consonancia con la paternidad responsable. De la misma manera, al restringir la realización de la mujer a través de la maternidad, el señor Cipriani deja de lado a aquellas mujeres que no han optado por la decisión de ser o no han podido ser madres, lo que trae como consecuencia desestimarlas como mujeres en tanto “no se han realizado como mujeres”.

Debemos recalcar que la pertinencia de la glosa se sustenta en la proyección que tienen las palabras del líder de la Iglesia sobre más de la población peruana, especialmente sobre las mujeres que las asumen como verdaderas en atención a la fuente de tal discurso. Dentro de esa lógica, tales palabras generan una nueva vertiente de discriminación de la mujer contra la mujer, al asimilar estas que sólo se realizarán como madres y que aquellas que no orienten su vida a tal acto, no son dignas de ser llamadas mujeres.

#### **3.5.3.1.4. Manifestaciones de la “discriminación de la mujer por la mujer”**

Tras haber explicado las causas que determinan la discriminación de la mujer por la mujer, consideramos necesario abordar sus manifestaciones a través de casos concretos.

##### **a. Al quebrantar las conductas propias del género femenino**

En efecto, tal como hemos referido, el género es “una construcción cultural, social e histórica, sobre la base biológica del sexo, determina normativamente lo masculino y lo femenino en una sociedad, y las identidades subjetivas y colectivas. Esta perspectiva va

---

<sup>526</sup> ACIPRENSA. “Cardenal Cipriani: Fuerza moral de la mujer radica en la maternidad”. Lima, 10 de mayo de 2004. Disponible en: <http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=4426> (Revisado el 31 de mayo de 2009).



articulando la serie de especificaciones que les corresponde a hombres y mujeres, por el hecho biológico de su sexo”<sup>527</sup>.

Siendo así, podemos establecer que la asunción de las mujeres de ciertos patrones como propios de su género justifica el “orden natural de las cosas”. Sin embargo, ¿qué sucede cuando ese orden se quebranta debido a que determinada mujer no asume el rol que le es “natural”? En nuestra opinión, se produce una disociación entre lo idealizado y la realidad, originando la ruptura de esa formalidad que fundamenta cierta parcela de los valores y principios de su titular, generándose disconformidad respecto a un comportamiento o a la ausencia de uno esperado por parte de una mujer.

Por lo tanto, **al observar que determinadas mujeres rompen tales esquemas del “orden natural”, se generan conductas u omisiones de agresión hacia sus pares, pues se quebranta la esencia de la feminidad construida sobre la base de ciertos patrones de comportamiento que en la mayoría de los casos han sido erigidos tomando como referentes el orden doméstico que tales mujeres padecieron desde su temprana infancia.**

Muchas de estas conductas se sustentan en un orden superior al racional, expresado a través del machismo, pues como afirma la sexóloga Pilar Cristóbal, “[e]l machismo consiste en sentir y actuar como si el hombre fuera superior a la mujer, y ésta es una actitud que se aprende en el seno de la familia. La madre permite y acepta el dominio de los varones del grupo y enseña a sus hijos e hijas a aceptar y valorar las ventajas de esta creencia. En todas las culturas en las que existe fuerte dominancia masculina, ésta se mantiene y es potenciada por las mujeres”<sup>528</sup>.

Este tipo de conductas se ven reflejadas en el hogar, a través de la madre machista, “donde (...) [suele] ponderarse (...) el bienestar de los hijos que de las hijas. Por ejemplo, en la

---

<sup>527</sup> RODRÍGUEZ ARANCIBIA, María Gabriela. “La construcción de la identidad femenina adolescente: una encrucijada entre el culto mariano y el mundo público”. Op. cit., p. 5.

<sup>528</sup> CRISTÓBAL, Pilar. “¿Y si olvido la píldora?” En: *20 minutos.es*. Madrid, 23 de enero de 2006. Disponible en: <http://www.20minutos.es/noticia/83962/0/consultorio/sexologico/pildora/> (Revisado el 31 de mayo de 2009).

función de bienestar social utilitarista (...) los hijos trabajarían poco –realizarían poco ‘trabajo social’- y sin embargo recibirían muchos recursos procedentes del trabajo social (las labores de la casa) que realizarían sus hermanas”<sup>529</sup>.

Consideramos que la imposición de roles tan parametrados se sustenta en la infravaloración de algunas mujeres y, en consecuencia, la sobrevaloración otorgada al varón, tomando como referente su aparente capacidad de decisión que, no es más que la consecuencia asignada a la aparente mayor fortaleza física de éste, lo que determina que ciertas mujeres se sientan incapaces de salir adelante sin el aval de contar con un varón en la familia. Por lo tanto, la exteriorización de reproches por el quebrantamiento de las funciones “naturales” de la mujer no sería más que un mecanismo de defensa de tales, debido a que a través de dichas actitudes buscan preservar y generalizar un orden que a pesar de menospreciarlas, les otorga una aparente “estabilidad” que no es cuestionada por la sociedad.

## **b. Las múltiples “identidades” de la mujer**

Antes de abordar una definición, consideramos pertinente exponer un ejemplo que puede suscitarse en cualquier país de nuestra región. El jueves 15 de febrero de 2007, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, el diario “Hoy” realizó una encuesta preguntando: “¿Has sufrido alguna discriminación a lo largo de tu vida por razones de sexo?”<sup>530</sup>.

Frente a esta interrogante, un sinnúmero de participantes contó sus casos. Sin embargo, resulta curioso que algunas de las respuestas expresan casos de discriminación contra mujeres cometidas por otras mujeres y, más aún, que no fueron cometidas tomando como referentes las conductas “propias” de su género. Veámoslo a través del caso de María Teresa:

“Mi experiencia personal es que soy limpiadora y mi jefa es una tirana, que trata bien a los t[í]os limpiadores que a las mujeres limpiadoras (sic), (...) *me considero discriminada por*

---

<sup>529</sup> GIMÉNEZ, Eduardo. “Teoría del equilibrio general”. Disponible en: <http://webs.uvigo.es/egimenez/egimenez/clases/micro-iii/Tema-6D.pdf> (Revisado el 31 de mayo de 2009).

<sup>530</sup> Blog del diario “Hoy”. “Igualdad de género”. Extremadura, 15 de febrero de 2007. Disponible en: [http://blogs.hoy.es/index.php/mujer/2007/02/15/igualdad\\_de\\_genero](http://blogs.hoy.es/index.php/mujer/2007/02/15/igualdad_de_genero) (Revisado el 31 de mayo de 2009).

*raz[ó]n de sexo en el trabajo, y quien me discrimina es otra (...). [J]am[á]s he sido tan discriminada por los hombres, sino por otras mujeres y la raz[ó]n principal creo es porque no tengo el modelo de mujer de t[í]a buena, es decir no me consideran una mujer, sino solo un elemento que trabaja y tiene que callar, se creen esas discriminadoras que no tenemos sentimientos ni que somos mujeres”*<sup>531</sup> (las cursivas son nuestras).

Del ejemplo se desprende que María Teresa recibe un trato denigrante por parte de otras mujeres que son sus superiores jerárquicas. Sin embargo, dicho comportamiento no está sustentado en las razones que hemos expuestos y que justificarían la existencia de la discriminación de la mujer por la mujer. No obstante, podemos asumir que el maltrato infringido no sólo se sustentó en su condición de subordinada, sino también en su identidad como mujer; dicha hipótesis se corroboraría al observar la conducta de las agresoras con varones que realizan las mismas labores que la ofendida.

Vamos acercándonos a una posible respuesta. Veamos el caso de Viki:

“Sí he sido discriminada muchas veces en mis 30 años de vida por ser mujer. *Y he sido discriminada por otras mujeres. ¿Por ser mujer gorda no soy mujer o soy una mujer rara? Por ser mujer gorda me eliminan para favorecer a una no gorda.* Por ser mujer gorda las chicas en el instituto han pasado de m[i] (sic). Por ser mujer gorda me miran las mujeres dependientas de mala manera al entrar en las tiendas de ropa, como diciendo qué hace esta mujer gorda aquí”<sup>532</sup> (las cursivas son nuestras).

En este caso, la frase resaltada nos es de suma utilidad, pues coloca a dos mujeres con diferentes características (contextura física) en una misma situación (selección por parte de una tercera mujer). Del contexto que se desprende esta cita, se asume que la elección de una de las mujeres, realizada por una tercera, no obedece a causas objetivas, es decir, a criterios establecidos sobre la base de presupuestos que no atenten contra la dignidad de las mujeres no seleccionadas y, que consecuentemente, tutelen la igualdad material.

---

<sup>531</sup> Loc. cit.

<sup>532</sup> Loc. cit.

Sin embargo, tal parámetro es ajeno a la decisión adoptada, puesto que Viki ha visto vulnerado su derecho a la dignidad al no haberse tomado referente objetivo alguno. No obstante, cabe preguntarnos si dicha acción constituye una manifestación de discriminación contra la mujer, más aún si es que había una pluralidad de candidatas mujeres y la elección fue realizada por una persona del mismo sexo.

Situaciones como estas son resueltas a través de la perspectiva de la transversalidad que nos dará una visión de la discriminación centrado en casos concretos, ya que esta perspectiva toma en cuenta la interacción y la dinámica de las diferentes manifestaciones de la discriminación que recaen sobre la mujer (por raza, origen, condición económica, etc), abordándolas desde la unidad del fenómeno.

Esta explicación sustenta de manera teórica nuestra hipótesis que las mujeres discriminan a sus pares sobre la base de ciertas características que son propias de su sexo o de su género. Póngase como ejemplo el origen étnico: las mujeres con criterios simplistas pueden discriminar tanto a varones como a mujeres de cierta etnia. Sin embargo, no exteriorizan su repudio contra los varones, pues sobre la base de un absurdo criterio de supremacía física consideran que su integridad podría verse afectada. No obstante, al encontrarse frente a mujeres de la misma etnia sí exteriorizan su agresión debido a que la condición de tales no determina un factor de peligro contra su integridad.

De esta manera se constata que la discriminación de la mujer contra la mujer puede sustentarse en las múltiples identidades de la agredida, lo que nos obliga a analizar las peculiaridades de esta clase de situaciones que aparentemente no constituyen una ilegal diferenciación en atención al sexo del agresor o de la víctima.

### **c. Al invadirse esferas “propias” de la feminidad**

Existe correspondencia entre esta manifestación de la discriminación de la mujer por parte de la mujer y la originada en el quiebre de los roles femeninos por parte de estas.

Veámosla a través del caso de Roberto en razón de la referida encuesta “¿Has sufrido alguna discriminación a lo largo de tu vida por razones de sexo?”:

*“[M]e siento totalmente discriminado en mi casa por mi mujer y mi querida suegra, a la que quiero mucho de verdad. Porque es que cada vez que me ven haciendo alguna labor de casa me llaman cocinilla, mariquita, que deje de hacer cosas de mujeres, que no me meta en sus quehaceres, y un largo etc[é]tera (...) Son dos perfectas machistas”<sup>533</sup> (las cursivas son nuestras).*

Al respecto, cabe cuestionarnos, ¿repercute esta situación en el varón? Podemos decir que no y que sí. No porque el varón se exonera de participar en labores que pueden resultar una carga. Sí porque aquellos varones son potenciales padres de hijas que en el futuro padecerán las consecuencias de su crianza y de la posible educación discriminadora de su pareja.

No obstante, debe precisarse que la atención brindada por una mujer a un varón en relación a determinadas labores domésticas no implica necesariamente la discriminación de esta por sí misma, puesto que tal conducta debe evaluarse de acuerdo al contexto. En el caso de Roberto, se evidencia la discriminación de la mujer por la mujer pues, como narra, se trata de una situación permanente que le impide la realización de ciertas labores porque las presuntas titulares del ámbito doméstico sienten que se invade una parcela de su dominio. Lamentablemente este último aspecto refleja que la discriminación contra la mujer –sea ejercida por el varón o por la propia mujer- conduce a que las agraviadas se refugien en construcciones carentes de razonabilidad (ejemplo: “la cocina, **MI** espacio”) y que no son útiles para conducir a un paulatino reconocimiento de los demás miembros de la familia y de la sociedad de sus labores realizadas tanto en el ámbito doméstico como en el público.

### **3.5.3.2. Violencia contra la mujer**

---

<sup>533</sup> Blog del diario “Hoy”. “Igualdad de género”. Op. cit.

Como señalan Patró Hernández y Limiñana Gras, de la Universidad de Murcia, “el término violencia familiar hace referencia a **cualquier forma de abuso**, ya sea físico, psicológico o sexual, que tiene lugar en la **relación entre los miembros de una familia**. Como todo abuso, implica un desequilibrio de poder, y es ejercido desde el más fuerte hacia el más débil **con el fin último de ejercer un control sobre la relación**”<sup>534</sup> (el sombreado es nuestro).

De lo expresado por las mencionadas especialistas, se descubre que la violencia familiar es un fenómeno social, cuyos actores –en un primer momento- son los integrantes de la familia<sup>535</sup>. No obstante, el rasgo más conmovedor de este fenómeno es que a través de su realización el agresor pretender reafirmar la sujeción de la víctima en relación suya, ya que –a pesar de no expresarlo- considera que la persona agredida se encuentra en una situación de subordinación que le permite utilizar la fuerza física o el insulto como mecanismo para retornar al plano de “normalidad” en el cual el victimario tiene el rol de mando.

Por tal motivo, la violencia familiar tiene un particular rostro, definido por las relaciones de género, de filiación y de utilidad social de los integrantes de la familia nuclear o extendida. Ello, porque “tradicionalmente, en nuestra sociedad, dentro de la estructura familiar jerárquica actualmente predominante, los dos principales ejes de desequilibrio los han constituido el género y la edad, siendo las mujeres, los niños y los ancianos las principales víctimas de la violencia dentro de la familia”<sup>536</sup>.

A través del presente acápite se abordará el estudio de la violencia familiar, haciendo especial énfasis en la situación de la mujer como víctima. Para ello se realizará el análisis de la violencia a través de su concepto y de su tipología, a efectos de engarzarlo con su modalidad dentro del ámbito familiar, para lo cual será relevante la exposición de los

---

<sup>534</sup> PATRÓ HERNÁNDEZ, Rosa y LIMIÑANA GRAS, Rosa María. “Víctimas de violencia familiar: Consecuencias psicológicas en hijos de mujeres maltratadas”. En: *Anales de psicología*. Vol. 21, N° 1. Universidad de Murcia. Murcia, 2005, p. 11.

<sup>535</sup> Sobre este último carácter, cabe precisar que como establece nuestra legislación, la violencia familiar no sólo comprende a los integrantes de la familia nuclear, sino que la amplía hacia otros sujetos que posteriormente serán objeto de mención.

<sup>536</sup> PATRÓ HERNÁNDEZ, Rosa y LIMIÑANA GRAS, Rosa María. “Víctimas de violencia familiar: Consecuencias psicológicas en hijos de mujeres maltratadas”. *Op. cit.*, p. 11.

diferentes tipos de familias, en razón de que estos constituyen el escenario donde este fenómeno se produce.

#### **3.5.3.2.1. Concepto**

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”<sup>537</sup>. Este concepto resulta pertinente en la medida de que se distingue la fuerza como elemento configurador de este fenómeno, el cual se expresa a través del acto o de la amenaza, cuyo propósito es producir agravio físico o psicológico en la víctima.

Por su parte, investigadores de la Organización Panamericana de la Salud consideran que “podría afirmarse que la violencia siempre ha formado parte de la experiencia humana. Sus efectos se pueden ver, bajo diversas formas, en todas partes del mundo. Cada año, más de 1,6 millones de personas pierden la vida y muchas más sufren lesiones no mortales como resultado de la violencia autoinfligida, interpersonal o colectiva”<sup>538</sup>. Como vemos, la alta cifra de víctimas de la violencia denota un fenómeno que lejos de desaparecer se entraña en nuestra sociedad, configurándose en uno producto del desequilibrio de poderes entre los agresores y los ofendidos, quienes, en muchas oportunidades, no son conscientes de sus derechos o no cuentan con mecanismos eficaces para detener su producción.

#### **3.5.3.2.2. Clases de violencia**

La violencia puede ser apreciada a través de una clasificación que alberga tres modalidades: nos referimos a la violencia psicológica, física y sexual.

---

<sup>537</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. “Global Consultation on Violence and Health. Violence: a public health priority”. Documento WHO/EHA/SPI.POA.2. Ginebra, 1996. Disponible en: [www.who.int/violence\\_injury\\_prevention/violence/world\\_report/en/introduction.pdf](http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/introduction.pdf) (Revisado el 21 de mayo de 2009).

<sup>538</sup> DAHLBERG, Linda, LOZANO, Rafael, KRUG, Etienne, MERCY, James y ZWI, Anthony. “Informe mundial sobre la violencia y la salud”. Organización Panamericana de la Salud. Washington, 2003, p. 3.

## **a. Violencia psicológica**

La violencia psicológica “se relaciona con la intensidad creciente de la violencia, en este primer aspecto es sutil, se relaciona con lesiones en la autoestima de la [víctima], ridiculizándola, agrediendo emocionalmente, ignorándola, riéndose de sus opiniones: las consecuencias de este tipo de violencia no son tan visibles, provocan en la víctima un debilitamiento de las defensas psicológicas, la víctima se vuelve introvertida, deprimida y se muestra débil”<sup>539</sup>.

Una visión más amplia de la violencia psicológica la encontramos en Elgueta Guerrero y Leiva Cornejo, quienes expresan que esta se produce a través de tres formas:

“- **Agresión verbal** utilizada para humillar, ridiculizar, amenazar o denigrar al agredido. Expresa el deterioro en las formas de comunicación.

- **Agresión que se expresa a través del lenguaje corporal:** manifestaciones exageradas y permanentes miradas de insatisfacción, de rechazo o burlescas; ausencia de expresiones afectivas, la exclusión y el aislamiento llegan a formar parte del lenguaje cotidiano como una forma de hostilidad y agresión emocional

- **Agresión que se expresa como chantaje emocional** que se ejerce en contra de otro. Aquí la violencia emocional se expresa en la negación a la libertad”<sup>540</sup> (el sombreado es nuestro).

Como señala Fuertes Martínez, “la mayoría de los casos de violencia psicológica, nos los cuentan tanto las personas afectadas, como otras terceras, centrando la narración en el núcleo duro de la enmarañada lista inacabable de actos agresivos. La propia víctima aporta un dato más: el daño sufrido, en curso, o sus consecuencias post traumáticas, difícilísimo de

---

<sup>539</sup> ANDRADE BORRERO, Lidia. “Violencia familiar: El caso de la provincia del Guayas-Ecuador”. En: *Universitas*. N° 2. Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Quito, 2002, p. 30.

<sup>540</sup> ELGUETA GUERRERO, Tatiana y LEIVA CORNEJO, Paola. “La violencia psicológica: Un impacto indeleble”. Tesina Postítulo de Psicodrama para la Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos de Chile. Centro de Estudios de Psicodrama. Santiago de Chile, 2007, p. 12.



comunicar, de que sus congéneres sintonicen empáticamente; pero también se suele concentrar en tal núcleo narrativo mezclado con sus vivencias. Encerrarse en tal bucle intemporal, sin principio ni final definible, es un daño añadido más que puede engullir todo el pasado y futuro de la víctima, y oscurecer el análisis, diagnóstico, pronóstico y soluciones posibles del problema”<sup>541</sup>.

## **b. Violencia física**

La violencia física es definida por Emankude (Instituto Vasco de la Mujer) como “aquellas acciones de carácter no accidental que conllevan riesgo o daño para la integridad física de la víctima. Incluye conductas como empujar, pegar, quemar o el uso de armas u otros objetos para agredir a la víctima”<sup>542</sup>.

Andrade Borrero añade que la violencia física “comienza con apretones, pellizcos, sigue con cachetadas hasta llegar a las trompadas y puntapiés. Luego (...) comienza a recurrir a objetos para provocarle daño (...). Esta escalada creciente puede terminar en homicidio o suicidio. La única manera de cortar con este ciclo de violencia creciente es a través de la intervención de alguna tercera persona”<sup>543</sup>.

## **c. Violencia sexual**

La violencia sexual constituye un trastorno sexual, ya que –como señala Villalba Quintana– se trata de una “alteración del deseo y/o de cualquier otra fase del ciclo de respuesta sexual que causa malestar subjetivamente importante y/o dificultades interpersonales [...] [ya que]

---

<sup>541</sup> FUERTES MARTÍNEZ, Francisco. “Incidentes críticos desencadenantes de la violencia psicológica institucional”. En: TORRES MANZANERA, Emilio y CARRO MENÉNDEZ, Mari Luz (Coords.), *Violencia de género: reflexiones sobre intervenciones sanitarias y judiciales*. Universidad de Oviedo. Oviedo, 2006, p. 128.

<sup>542</sup> EMANKUDE. “La violencia contra las mujeres”. Emankude. País Vasco, 2008, p. 5.

<sup>543</sup> ANDRADE BORRERO, Lidia. “Violencia familiar: El caso de la provincia del Guayas-Ecuador”. Op. cit., p. 30.

condiciona dificultad para llevar a cabo una relación sexual y como el individuo desearía”<sup>544</sup>, debido a la resistencia de la víctima en dicho acto.

Al respecto, Pereda Beltrán opina que “cuando se abusa sexualmente (...) no sólo hay un daño físico, sino que generalmente existe también una secuela psicológica. Debido a la ausencia, en numerosas ocasiones, de un daño físico visible, así como a la no existencia de un conjunto de síntomas psicológicos que permitan su detección y diagnóstico unívoco, el abuso [sexual] ha sido una tipología difícil de estudiar”<sup>545</sup>

Por ello es que resulta complicada la revelación del abuso sexual por parte de la víctima, pues como señalan Jiménez Cortés y Martín Alonso, “[c]uando [una persona] ha sido víctima de abuso sexual, puede experimentar miedo a revelar lo sucedido, sobre todo si el agresor lo ha coaccionado para que guarde silencio por temor a que cumpla sus amenazas (pegarle, matarlo, pegar a su madre, internarlo en un centro, etc.), o bien por temor a posibles represalias aun en caso de que no haya recibido amenazas directas. Con frecuencia su reserva obedece al temor a no ser creído o incluso a ser culpabilizado de su propia victimización. Asimismo, puede experimentar ansiedad y sentimientos de culpa si la actitud de la familia en vez de proporcionar apoyo actúa en ese sentido, o bien si la revelación del episodio supone la ruptura del pacto de silencio con el agresor en caso de que este haya llegado a establecerse, pacto que puede haberse configurado de forma tácita (el menor entiende que no debe hablar de ‘eso’) o expresa (el agresor conmina al menor a guardar silencio)”<sup>546</sup>.

### **3.5.3.2.3. Violencia familiar**

#### **a. Concepto**

---

<sup>544</sup> VILLALBA QUINTANA, Elena. “Clasificación de los trastornos o disfunciones sexuales”. Sociedad española de médicos de atención privada. Madrid, 2006, p. 13.

<sup>545</sup> PEREDA BELTRÁN, Noemí. “Malestar psicológico en estudiantes universitarios víctimas de abuso sexual infantil y otros estresores”. Tesis Doctoral. Facultad de Psicología de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 2006, p. 4.

<sup>546</sup> JIMENEZ CORTES, Carlos y MARTIN ALONSO, Carlos. “Valoración del testimonio en abuso sexual infantil”. En: *Cuadernos de medicina forense*. N° 43-44. Santiago de Chile, 2006, p. 90

**La familia** como institución “**se ha considerado, históricamente, un ámbito privado donde el comportamiento de sus miembros se situaba fuera del control social.** Las creencias y mitos culturales asociados al sistema patriarcal han legitimado desde tiempos remotos el poder y la dominación del marido hacia la mujer y los hijos, despojando a éstos de todo derecho legal, económico o social (...). Tanto la mujer como sus hijos carecían de individualidad, absorbidos por la del hombre cabeza de familia, a cargo de quien legalmente estaban y que tenía plenos derechos para usar las medidas que creyera convenientes para mantener el control sobre ellos”<sup>547</sup>.

Lo interesante de este concepto es la referencia a elementos como la ausencia de control social sobre los hechos suscitados en la familia, lo cual permitiría una suerte de anarquía en dicho ámbito, ya que el control de dicho ámbito estaría a cargo de una figura que tendría la potestad de asumir decisiones y realizar actos en resguardo del orden del hogar.

Precisamente dicha perspectiva es la que genera la violencia familiar o intrafamiliar, definida por Espinar Ruiz como aquella que, “en principio, se corresponde con aquella violencia cuyos protagonistas (agresores y víctimas) mantienen algún tipo de relación de parentesco (lazos de sangre –reales y supuestos- o matrimoniales). Algunos autores, reducen su significado y la identifican con la violencia que tiene lugar en el seno del hogar (entre personas que conviven). Otros, lo amplían para incluir a personas que, estrictamente, no son familiares, ni conviven con las víctimas, pero que son sentidas por estas como miembros de su intimidad; por ejemplo, la violencia ejercida por novios, ex-novios, y en general, ex-parejas”<sup>548</sup>.

## **b. La familia como escenario de violencia**

La Constitución Política reconoce en su artículo 4º la protección que el Estado brinda a la familia, reconociéndola como instituto natural y fundamental de la sociedad. Sin embargo,

---

<sup>547</sup> PATRÓ HERNÁNDEZ, Rosa y LIMINANA GRAS, Rosa María. “Víctimas de violencia familiar: Consecuencias psicológicas en hijos de mujeres maltratadas”. Op. cit., pp. 11-12.

<sup>548</sup> ESPINAR RUIZ, Eva. “Violencia de género y procesos de empobrecimiento: Estudio de la violencia contra las mujeres por parte de su pareja o ex pareja sentimental”. Tesis Doctoral de Sociología. Universidad de Alicante. Alicante, 2003, pp. 74-75.

el concepto de familia no es uniforme, debido a que la evolución que esta institución ha tenido a lo largo de las últimas décadas nos deriva a una variedad de grupos familiares, lo cual dificulta una definición general.

No obstante, la subsistencia de la idea de familia como el grupo compuesto por el padre, la madre y los/as hijos/as obedece, en opinión de Segalén en que “al contrario de lo que ocurre en otros terrenos en los cuales cada uno de nosotros reconoce no tener ninguna competencia, tenemos la sensación –justificada- de conocer el de la familia por haber nacido y por haber fundado una. Este saber empírico, sensible sobre la familia, hace que sea uno de los temas más cargados sobre el plano ideológico”<sup>549</sup>.

Esto se constata en que “las sociedades religiosas y civiles han legislado profundamente sobre el matrimonio y divorcio, la constitución y la disolución de la familia. Pero no lo han hecho, o si acaso muy poco, sobre la vida, las necesidades, las potencialidades, el desarrollo, el perfeccionamiento de la familia como tal”<sup>550</sup>.

Como se verá a continuación, existe una pluralidad de familias que se distinguen de las demás por rasgos constitutivos que las identifican, pero que revelan el constante cambio de esta unidad, pues como reconocen Luengo Rodríguez y Rodríguez Sumaza, “junto al papel hegemónico de la familia nuclear, se asiste también a una creciente diversificación de fórmulas alternativas de convivencia, como son, entre otras, los hogares unipersonales, los hogares sin núcleo familiar y los hogares que albergan un núcleo monoparental, todo ello a costa de una disminución en el número de hogares complejos”<sup>551</sup>.

### **b.1. Familia nuclear**

---

<sup>549</sup> SEGALÉN, Martine. “Antropología histórica de la familia”. Taurus Universitaria. Madrid, 1992, p. 19.

<sup>550</sup> VILLEGAS, Fabio. “La familia latinoamericana del nuevo milenio”. Ediciones Paulinas. Santa Fe de Bogotá, 1994, p. 15.

<sup>551</sup> LUENGO RODRÍGUEZ, Tomasa y RODRÍGUEZ SUMAZA, Carmen. “Un análisis del concepto de familia monoparental a partir de una investigación sobre núcleos familiares monoparentales”. En: *Papers: Revista de sociología*. N° 69. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 2003, p. 60.

Esteinou considera que “nuclear se refiere al conjunto familiar, denota una característica dinámica, procesual: las formas familiares tienden a un lento proceso de simplificación; formas de cohabitación entre más núcleos conyugales, o bien núcleos que incluyen ascendientes, colaterales y/o descendientes disminuyen desde un punto de vista cuantitativo; pierden centralidad la lealtad y la dependencia parental porque no es dentro del grupo parental que el sujeto encuentra seguridad, apoyo, recursos para la satisfacción de muchas de sus necesidades”<sup>552</sup>.

A su vez, Camacho Meléndez manifiesta que “en la sociedad occidental actual, (...) la familia nuclear formada por la pareja matrimonial y sus hijos (...) forman una entidad separada de otros parientes”<sup>553</sup>. Asimismo, señala que la familia nuclear es, a su vez, una familia monogámica, la cual “dio paso a la **familia monogámica patriarcal, jerarquizadora y politizada**”<sup>554</sup> (el sombreado es nuestro), rasgos que –como veremos– han condicionado la producción de la violencia familiar.

Sin embargo, la concepción de la familia nuclear como único modelo ha sido superada, pues los cambios sociales de los que somos testigos han propiciado la aparición de nuevas estructuras familiares, lo cual nos lleva al necesario estudio de otras formas como son las familias monoparentales, reconstituidas y de hecho.

## **b.2. Familia monoparental**

De acuerdo a Alberdi, la familia monoparental es aquella “encabezada por una sola persona adulta, hombre o mujer, y en la que hay más miembros que dependen económicamente y socialmente de ella”<sup>555</sup> y cuya configuración estaría, para Borrajo Iniesta, sustentada en el “fallecimiento en un matrimonio con hijos pequeños de uno de los cónyuges, la ruptura de

---

<sup>552</sup> ESTEINOU, Rosario. “El surgimiento de la familia nuclear en México”. En: *Estudios de historia novohispana*. N° 31. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México D.F., 2004, p. 103.

<sup>553</sup> CAMACHO MELÉNDEZ, Iris. “Nuevas tendencias en Derecho comparado de Derecho de familia: Concepto familia e intervención estatal”. En: *Anales de Jurisprudencia*. T. 267. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. México D.F., 2004, 218.

<sup>554</sup> Loc. cit.

<sup>555</sup> ALBERDI, Inés. “Las mujeres viudas y las familias monoparentales”. En: IGLESIAS DE USSEL, Julio (Ed.). *Las familias monoparentales*. Ministerio de Asuntos Sociales. Serie Debate, N° 51. Instituto de la Mujer, Madrid, 1988, p. 101.

la pareja con hijos menores por conflicto entre sus miembros, quedando los hijos en la custodia de uno de los padres o la madre soltera con uno o más hijos nacidos fuera del matrimonio”<sup>556</sup>.

Sin embargo, Luengo Rodríguez y Rodríguez Sumaza apuntan que “el fenómeno de la monoparentalidad es ciertamente complejo y poliédrico. Difícilmente se puede hablar así de la familia monoparental como un tipo posible de forma familiar, cuando en la realidad nos encontramos con diferentes tipos de familias monoparentales como consecuencia de que las personas acceden a la monoparentalidad por vías muy diversas, disponen de aprendizajes sociales diferentes, son distintas las situaciones sociales a las que a diario se enfrentan y es plural el significado que los hechos tienen para sus miembros”<sup>557</sup>.

### **b.3. Familia reconstituida**

El análisis de la familia reconstituida o ensamblada debe partir de consideraciones fácticas, expuestas por Bourdieu desde la perspectiva de que “las relaciones intrafamiliares se encuentran despojadas de eso que, en la experiencia ordinaria de la familia ordinaria, los caracteriza propiamente, es decir, las apariencias de la evidencia y lo *natural*. Todo lo que, en otro caso, puede ser abandonado a la espontaneidad de las disposiciones, debe ser explícitamente y expresamente pensado, pesado, cultivado, mantenido, hasta calculado y planificado (...), lo que es ordinariamente admitido como evidente, sin examen y sin discusión, se vuelve objeto de una deliberación y de una (cuasi) negociación”<sup>558</sup>.

Ello determina la concepción de nuevas modalidades de familia como son las abordadas en este punto del estudio. Por ello, Camacho Meléndez considera que “se entiende como familia ensamblada o reconstituida aquella compuesta por un matrimonio o pareja, cuyos

---

<sup>556</sup> BORRAJO INIESTA, Ignacio. “Ruptura matrimonial y formación de familias monoparentales en España”. En: IGLESIAS DE USSEL, Julio (Ed.). *Las familias monoparentales*. Op. cit., p. 43.

<sup>557</sup> LUENGO RODRÍGUEZ, Tomasa y RODRÍGUEZ SUMAZA, Carmen. “Un análisis del concepto de familia monoparental a partir de una investigación sobre núcleos familiares monoparentales”. Op. cit., p. 62.

<sup>558</sup> BOURDIEU, Pierre. “Des familles sans nom”. En: *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*. N° 113. Paris, 1996, pp. 3-4.

miembros han tenido uniones matrimoniales o extramatrimoniales anteriores, y que ahora comparten un nuevo hogar con niños de sus matrimonios anteriores”<sup>559</sup>.

Por su parte, Rivas Rivas precisa que la “construcción familiar diferente y particular, y no como una familia de sustitución que busca reproducir el esquema nuclear, como venía ocurriendo tradicionalmente, con el fallecimiento de uno de los dos progenitores y la convivencia del niño con un progenitor y un padrastro o madrastra. En las familias mixtas, la nueva pareja del padre o madre no ocupa el lugar de un progenitor desaparecido, sino el de un padre o madre existente, que no tiene por qué renunciar a seguir ejerciendo su derecho de paternidad o maternidad”<sup>560</sup>.

En lo que respecta a la experiencia nacional, el Tribunal Constitucional ha expresado algunas notas en relación a las familias reconstituidas, al señalar que “por su propia configuración estas familias tienen una dinámica diferente, presentándose una problemática que tiene diversas aristas, como son los vínculos, deberes y derechos entre los integrantes de la familia reconstituida, tema de especial relevancia en el presente caso, por lo que se procederá a revisarlo”<sup>561</sup>. A su vez, ha precisado que “la relación entre los padres afines y el hijastro tendrá que guardar ciertas características, tales como las de habitar y compartir vida de familia con cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento. Es decir, tiene que reconocerse una identidad familiar autónoma, sobre todo si se trata de menores de edad que dependen económicamente del padre o madre afín. De otro lado, si es que el padre o la madre biológica se encuentran con vida, cumpliendo con sus deberes inherentes, ello no implicará de ninguna manera la pérdida de la patria potestad suspendida”<sup>562</sup>.

Por lo tanto, “tanto el padrastro como el hijo afín, juntamente con los demás miembros de la nueva organización familiar, pasan a configurar una nueva identidad familiar. Cabe

---

<sup>559</sup> CAMACHO MELÉNDEZ, Iris. “Nuevas tendencias en Derecho comparado de Derecho de familia: Concepto familia e intervención estatal”. Op. cit., p. 219.

<sup>560</sup> RIVAS RIVAS, Ana María. “Las nuevas formas de vivir en familia: el caso de las familias reconstituidas”. En: *Cuadernos de Relaciones Laborales*. Vol. 26, N° 1. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2008, p. 184.

<sup>561</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 09332-2006-AA, Fundamento Jurídico N° 9.

<sup>562</sup> *Ibidem*, Fundamento Jurídico N° 12.

anotar que por las propias experiencias vividas por los integrantes de este nuevo núcleo familiar –divorcio o fallecimiento de uno de los progenitores– la nueva identidad familiar resulta ser más frágil y difícil de materializar. Es por ello que realizar una comparación entre el hijo afín y los hijos debilita la institución familiar, lo cual atenta contra lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución, según el cual la comunidad y el Estado protegen a la familia”<sup>563</sup>.

#### **b.4. Uniones de hecho**

Meil Landwerlin señala que “las uniones de hecho como forma de organización de la vida en común no son en absoluto un fenómeno históricamente nuevo, aunque con el proceso de modernización social y la emergencia de la sociedad moderna fueron haciéndose cada vez más singulares y propias de los grupos marginales. No será hasta la segunda modernización, o postmodernización social que se produce a partir de los años setenta del siglo XX, cuando, con un ritmo diferencial según los países, va emergiendo esta forma de convivencia como un modelo alternativo al matrimonio. Primero toleradas, rápidamente pasaron a ser socialmente aceptadas como una fórmula válida de organización de la convivencia y han pasado a convertirse en algunos países en una auténtica institución social”<sup>564</sup>.

Por su parte, Medina y Roitman sostienen que “la primera característica de la unión de hecho es la convivencia; de no existir ella, podrá tratarse de una mera relación de amistad, de compañerismo, o de amantes, pero no de una unión de hecho productora de efectos jurídicos”<sup>565</sup>. En tal sentido, “la convivencia también es conceptualizada como comunidad de vida y de lecho o cohabitación, e implica compartir conjuntamente un mismo domicilio, una relación de pareja y tener una organización económica común. Ello nos permite

---

<sup>563</sup> Ibidem, Fundamento Jurídico N° 14.

<sup>564</sup> MEIL LANDWERLIN, Gerardo. “Las uniones de hecho en España”. Centro de investigaciones sociológicas. Madrid, 2003, p. 247.

<sup>565</sup> MEDINA, Graciela y ROITMAN, Horacio. “Uniones de hecho homosexuales”. Rubinzal- Culzoni editores. Buenos Aires, 2001, p. 42.



descartar como unión de hecho aquellas parejas que comparten solamente los fines de semana o las vacaciones o encuentros casuales”<sup>566</sup>.

Este fenómeno “está condicionado, en primer término, por la experiencia previa de vida en pareja. La unión de hecho es la fórmula de inicio de la convivencia más generalizada cuando uno o ambos miembros de la pareja ya han pasado por una convivencia anterior que ha resultado insatisfactoria y que ha terminado disolviéndose. Así, al menos tres de cada cuatro personas que conviven por segunda vez, han iniciado su segundo proyecto de vida en común mediante un vínculo de hecho”<sup>567</sup>.

Nuestra legislación reconoce a las uniones de hecho, ya que conforme se desprende del artículo 5° de la Constitución Política, “la unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable”. Por su parte, el artículo 326° del Código Civil regula esta institución, al establecer que “la unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales, en cuanto le fuera aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos”.

#### **3.5.3.2.4. Relaciones familiares: Origen de la violencia**

Las relaciones familiares “incluyen las relaciones de autoridad y de afecto al interior de este grupo de corresidentes, los modos a través de los cuales éstos interactúan y se tratan, las emociones y los sentimientos que prueban el uno con el otro”<sup>568</sup>. Sin embargo, debe precisarse que los vínculos familiares se construyen biológica y jurídicamente: “los biológicos son reconocidos universalmente, y se consideran jurídicos aquellos que nacen

---

<sup>566</sup> Loc. cit.

<sup>567</sup> MEIL LANDWERLIN, Gerardo. “Las uniones de hecho en España”. Op. cit., p. 247.

<sup>568</sup> ESTEINOU, Rosario. “El surgimiento de la familia nuclear en México”. Op. cit., p. 100.

del matrimonio [, de las uniones de hecho] o de la adopción. Las relaciones por afinidad son las que surgen por motivo de matrimonio”<sup>569</sup>.

Sobre la base de estos presupuestos se expondrán algunas ideas en torno a las relaciones familiares y que serán, como en el caso de los distintos tipos de familia, pertinentes para comprender la violencia familiar infringida en contra de la mujer.

#### **a. Autoridad masculina y/o paternal**

Como señala Kovalevsky, “primitivamente, la autoridad paternal parecía ser una consecuencia natural de la autoridad marital. El que poseía una mujer pretendía ejercer derechos de propiedad sobre su producto, de la misma manera que los ejercía sobre los árboles frutales y su ganado. De aquí se deduce que para el ejercicio de los derechos paternos no era precisa la condición de padre: bastaba solamente poseer derechos maritales sobre la mujer que acababa de dar a luz”<sup>570</sup>.

No obstante, dicha situación nos es propia, pues la violencia física o psicológica infringida por determinadas figuras masculinas o paternas se sustenta en la idea de liderazgo de la familia y en la consecuente sujeción de la mujer y de los hijos. Ahora bien, debe resaltarse que este constituye uno de los presupuestos esenciales para la configuración de la violencia ejercida en contra de la mujer, pues el mal entendimiento de la autoridad se sustenta en la discriminación de la que es objeto la mujer, la cual parte del desconocimiento de esta como titular de derechos y a la presunta inferioridad física a la que esta se encuentra sometida en razón de un mal entendido concepto de su “sexo”.

#### **b. Subordinación de la mujer**

---

<sup>569</sup> CAMACHO MELÉNDEZ, Iris. “Nuevas tendencias en Derecho comparado de Derecho de familia: Concepto familia e intervención estatal”. Op. cit., p. 221.

<sup>570</sup> KOLVALEVSKY, Máximo. “Orígenes y evolución de la familia y la propiedad”. FERRER Y ROBERT, Antonio (Traductor). F. Granada y C. Editores. Barcelona, 1890, p. 135.

Esta situación es consecuencia de la inequidad entre varones y mujeres que sitúa a la mujer en un plano de desigualdad, alejado de la anhelada igualdad de trato y de oportunidades que concrete la cláusula de igualdad consagrada en el artículo 2º inciso 2 de la Constitución Política.

Lamentablemente, esto nos lleva a corroborar que subsiste el rol que tenía la mujer en Grecia y en Roma, ya que es común a nosotros aquello que lo era en dichas sociedades donde “el matrimonio constituía un acto religioso en el cual la mujer se separaba de su familia (...), para quedar bajo la protección de su marido, (...) quedando clara la prevalencia de tres aspectos fundamentales en estas sociedades: la propiedad, la mujer y los hijos como símbolo de poder”<sup>571</sup>.

Contrario a lo que podría pensarse, este panorama no se sustenta en la restricción en el acceso a prestaciones educativas, sino a factores culturales que no son enfrentados a través de una educación provista de perspectivas erigidas en torno a la realidad, concretamente, a la de género, que exhiban la situación de los varones y de las mujeres en nuestro país, a efectos de determinar las estrategias a ser asumidas en una política coherente con el resguardo de la dignidad de todos los seres humanos que propugne un paulatino cambio en las políticas educativas a través de la incorporación de conocimientos relativos a la igualdad, discriminación y diferenciación.

### **c. Relaciones de consanguinidad y afinidad**

Como señala Esteinou, este punto del estudio “se refiere a las relaciones existentes entre grupos distintos de corresidentes que tengan lazos de parentesco, la frecuencia con la cual éstos se ven, se ayudan, elaboran y persiguen estrategias comunes para acrecentar, o al menos para conservar, sus recursos económicos, su poder, su prestigio”<sup>572</sup>.

---

<sup>571</sup> HOYOS OTERO, Pablo. “Psicosociología de la familia e instituciones prematrimoniales”. Señal editores. Medellín, 1996, 23.

<sup>572</sup> ESTEINOU, Rosario. “El surgimiento de la familia nuclear en México”. Op. cit., p. 100.

A mayor abundamiento, la consanguinidad es definida como “la relación de sangre entre dos personas: los parientes consanguíneos son aquellos que comparten sangre por tener algún pariente común”<sup>573</sup>, mientras que la afinidad lo es sobre la base de que “los parientes no consanguíneos son aquellos que no presentan un vínculo de sangre, pero que son parientes por un vínculo legal (matrimonio). A esta otra relación de parentesco se le denomina afinidad”<sup>574</sup>.

Ambas clases de vínculo familiar son importantes en lo que al estudio de la violencia familiar de género se refiere, pues en muchas oportunidades, los funcionarios encargados de la evaluación de los casos relativos a dicha materia desconocen tales vínculos, siendo ubicados los casos de violencia familiar en categorías distintas a la que realmente corresponden.

#### **3.5.3.2.5. Violencia de género**

Existe una discusión en relación a la terminología que debe emplearse al referirse a la violencia de la que las mujeres son objeto. Para efectos del presente estudio, y tal como se detallará a continuación, consideramos pertinente emplear el término violencia de género por encontrar las raíces del fenómeno en conceptos culturales que superan la sola asignación de una persona como perteneciente al sexo femenino.

##### **a. Superando el concepto de violencia contra la mujer**

Habitualmente las agresiones de las que son objetos las mujeres son abordadas a través de la variable sexo. Sobre el particular, Espinar Ruiz señala que la violencia contra la mujer “hace referencia a las formas de violencia cuyas víctimas son mujeres. Su estudio se centra en la determinación del grado de extensión en la sociedad, sus causas, explicaciones y

---

<sup>573</sup> GEN ARGENTINA. “Consanguinidad y afinidad”. Disponible en: <http://genargentina.com.ar/glosario/consang.html> (Revisado el 20 de mayo de 2009).

<sup>574</sup> Loc. cit.

efectos. No todos los estudios que se realizan en este ámbito aplican un enfoque de género (es decir, no todos tienen en cuenta las definiciones, identidades y relaciones de género”<sup>575</sup>.

Como destaca la autora, asumir este fenómeno como violencia contra la mujer no nos permite adoptar una perspectiva plena sobre el asunto, en la medida que se prescinde del análisis de las relaciones en la sociedad y en la familia, razón que determina la necesidad de abordarla desde la variable género. La necesidad de realizar el estudio desde la mencionada perspectiva obedece a que la variable sexo obedece a las referencias biológicas que distinguen a varones y a mujeres, mientras que la relativa a género se enfoca en los constructos sociales erigidos en torno a los roles que les corresponderían asumir a los varones y a las mujeres.

Por tal motivo, consideramos que el presente estudio debe ser formulado a través de la categoría de “violencia de género”, ya que como apunta Espinar Ruiz, “el término *violencia de género* hace referencia a aquella violencia que hunde sus raíces en las definiciones y relaciones de género dominantes en una sociedad. Desde este enfoque se pueden analizar diferentes formas de violencia, incluidas algunas que no tienen como víctima directa a una mujer pero que pueden explicarse, más adecuadamente, desde consideraciones de género”<sup>576</sup>.

El origen de esta clase de violencia se sustenta, como afirma Maqueda Abreau, en “una manifestación más de la resistencia que existe a reconocer que la violencia contra las mujeres no es una cuestión biológica ni doméstica sino de género. Se trata de una variable teórica esencial para comprender que no es la diferencia entre sexos la razón del antagonismo, que no nos hallamos ante una forma de violencia individual que se ejerce en el ámbito familiar o de pareja por quien ostenta una posición de superioridad física (hombre) sobre el sexo más débil (mujer), sino que es consecuencia de una situación de

---

<sup>575</sup> ESPINAR RUIZ, Eva. “Violencia de género y procesos de empobrecimiento: Estudio de la violencia contra las mujeres por parte de su pareja o ex pareja sentimental”. Tesis Doctoral de Sociología. Universidad de Alicante. Alicante, 2003, pp. 37-38.

<sup>576</sup> Ibidem, p. 38.

discriminación intemporal que tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal”<sup>577</sup>.

## **b. Modelo sociocultural como fuente de la violencia**

Como señala Emankude, “el **modelo sociocultural** subraya la importancia de la propia estructura a través de la socialización en base al género y la tolerancia a la violencia. Lo extendido de la violencia contra las mujeres en la familia y su aceptabilidad han hecho que cada vez más especialistas hayan puesto más en tela en juicio la validez de las explicaciones que tengan que ver con características personales e individuales y sugieran una explicación social. En esta línea, los malos tratos que sufren las mujeres dentro del hogar tendrían su causa no tanto en factores que pueden ser desencadenantes de la agresión (alcohol, el paro, la pobreza), sino en la situación estructural de desigualdad real en la que se encuentran las mujeres en la sociedad”<sup>578</sup>.

De lo expresado se desprende que la violencia de género se sustenta en patrones culturales en los que colisionan el “ser” con el “deber ser”, es decir, las acciones de las mujeres destinadas a ejercer su derecho a la libre realización como ser humano con el rol de género que les impone la sociedad (inclusión en el ámbito privado y sujeción frente al varón). En tal sentido, cuando se quiebra la regla, el varón se siente en la obligación de retornar la cosa a su “estado natural”, lo que desde la perspectiva individual vendría a ser un acto producto de su “derecho” a resguardar su supremacía frente a aquella que por su naturaleza sería un ser incapaz.

Por ello es que Maqueda Abreau afirma que “fruto de ese aprendizaje cultural de signo machista, unos y otras exhiben los roles e identidades que le han sido asignados bajo la etiqueta del género. De ahí, la prepotencia de lo masculino y la subalternidad de lo

---

<sup>577</sup> MAQUEDA ABREAU, María Luisa. “La violencia de género: Entre el concepto jurídico y la realidad social”. En. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. Vol. 8, Nº 2. Universidad de Granada. Granada, 2006, p. 2. Disponible en: <http://criminnet.ugr.es/recpc/08/recpc08-02.pdf> (Revisado el 21 de mayo de 2009).

<sup>578</sup> EMANKUDE. “La violencia contra las mujeres”. Op. cit, p. 6.

femenino. Son los ingredientes esenciales de ese orden simbólico que define las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, origen de la violencia de género”<sup>579</sup>.

Tal situación ha llevado a construir la categoría de violencia de género “como forma de violencia presente en todo el mundo y producto de la desigualdad entre hombres y mujeres que ha caracterizado a nuestras sociedades hasta ahora, ha pasado de ser un drama familiar, sobre el que había de pasar de puntillas y en silencio, a ser considerado una clara violación de los derechos fundamentales de las mujeres: el derecho a la libertad, a la vida y a la integridad física”<sup>580</sup>.

### **c. Fases de la violencia de género**

La violencia de género se realiza a través de tres fases que, lamentablemente, son cíclicas.

#### **c.1. Acumulación de tensión**

En la acumulación de tensión “hay agresiones tanto psíquicas como golpes menores. Las mujeres niegan la realidad de la situación y los hombres incrementan la agresión, los celos y los sentimientos de posesión, creyendo que su conducta es legítima”<sup>581</sup>. Al respecto, Andrade Borrero agrega que “es la fase en la que se produce una sucesión de pequeños episodios que llevan a roces permanentes entre la pareja, con un incremento constante de ansiedad y hostilidad. Tanto el hombre y la mujer se encierran en un circuito en el que están mutuamente pendientes de sus reacciones”<sup>582</sup>.

#### **c.2. Fase aguda de golpes**

---

<sup>579</sup> Loc. cit.

<sup>580</sup> MURILLO DE LA VEGA, Soledad. “Violencia de género: de los planes de actuación a la Ley Orgánica”. En: *Cuadernos de Trabajo Social*. Vol. 18. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2005, p. 227.

<sup>581</sup> EMANKUDE. “La violencia contra las mujeres”. Op. cit, p. 12.

<sup>582</sup> ANDRADE BORRERO, Lidia. “Violencia familiar: El caso de la provincia del Guayas-Ecuador”. Op. cit., p. 29.

La segunda fase de la violencia de género es descrita como aquella en que “las tensiones que el maltratador ha ido generando en la primera fase, derivan en un comportamiento descontrolado y altamente agresivo y lesivo para las víctimas”<sup>583</sup>. En efecto, la fase aguda es aquella “donde la tensión alcanza su punto máximo: toda la tensión que se venía acumulando da lugar a una explosión de violencia, que puede variar en gravedad, oscilando desde un empujón hasta el homicidio. Se caracteriza por el descontrol y lo inevitable de los golpes. Las mujeres se muestran sorprendidas frente al hecho que se desencadena de manera imprevista, ante cualquier situación de la vida cotidiana”<sup>584</sup>.

### **c.3. Aparente calma**

Denominada como “calma amante” o “luna de miel”, en esta fase se dan “muestras de arrepentimiento y afecto del maltratador hacia la mujer y aceptación de esta que cree en su sinceridad idealizando la relación”<sup>585</sup>. En otras palabras, “es la fase donde se produce el arrepentimiento del agresor, con disculpas y promesas de que nunca más va a ocurrir; pero al tiempo vuelve a reaparecer los períodos de acumulación de tensión y a cumplirse el ciclo”<sup>586</sup>.

#### **3.5.3.2.6. Perfil del agresor**

Jiménez Serrano, citando a Garrido, señala que el perfil criminológico puede definirse “como una estimación acerca de las características biográficas y del estilo de vida del responsable de una serie de crímenes graves y que aún no se ha identificado”<sup>587</sup>.

La definición del perfil criminológico del agresor de mujeres es vital en el desarrollo de la investigación policial y fiscal, como en el proceso penal debido a que, como reconoce

---

<sup>583</sup> EMANKUDE. “La violencia contra las mujeres”. Op. cit, p. 12.

<sup>584</sup> ANDRADE BORRERO, Lidia. “Violencia familiar: El caso de la provincia del Guayas-Ecuador”. Op. cit, p. 30.

<sup>585</sup> EMANKUDE. “La violencia contra las mujeres”. Op. cit, p. 12.

<sup>586</sup> ANDRADE BORRERO, Lidia. “Violencia familiar: El caso de la provincia del Guayas-Ecuador”. Op. cit, p. 30.

<sup>587</sup> JIMÉNEZ SERRANO, Jorge. “Perfil psicológico criminal”. VII Curso de Criminología Psicosocial. Universidad Complutense. Madrid, 2007. Disponible en: <http://www.psicologia-online.com>.



Hernández Sánchez, “[u]n perfil criminológico proporciona ayuda a la investigación policial para capturar a un delincuente desconocido. Se basa en un estudio exhaustivo de todo lo que se sabe de él a través de las víctimas, y de todas las pistas dejadas en el lugar del crimen, con el fin de establecer unas hipótesis sobre la persona que los cometió. Con ese perfil se reduce el número de sospechosos a una cantidad más manejable para los agentes encargados de la investigación policial, y agiliza ésta. Así, se contribuye a un esclarecimiento más rápido, y se reduce el riesgo de futuras víctimas”<sup>588</sup>.

Sobre el particular, Turvey precisa que “no existe ninguna tipología universal aceptada para los ofensores [sexuales]. No hay un lenguaje común que utilicen las fuerzas de seguridad y la comunidad de salud mental para describir el comportamiento criminal violento, o para discutir motivo y medio”<sup>589</sup>.

No obstante, Jiménez Cortés y Martín Alonso identifican algunos factores que configuran el perfil criminológico del agresor, como “la actitud excesivamente celosa que con frecuencia muestra el perpetrador hacia las interacciones extrafamiliares (...) [de la víctima] (las relaciones extrafamiliares de la víctima suponen el riesgo de que las situaciones de abuso trasciendan el ámbito familiar o el secreto mantenido entre los dos, por lo que supone una pérdida del control sobre la situación) y la tendencia a considerar la familia como su propiedad”<sup>590</sup>.

Asimismo, los autores consideran que “una vez efectuada la denuncia, el perpetrador puede adoptar una actitud de aparente indiferencia hacia la misma y negar los hechos. Con frecuencia, estos sujetos carecen de sentimientos de culpa merced a un mecanismo de distorsión cognitiva que, al justificar su conducta, neutraliza las cogniciones autoinculpatorias (p.e. ‘a [las víctimas] les gusta’, ‘para que aprenda’, ‘no le hace mal’, ‘es

---

<sup>588</sup> HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, José Antonio. “Perfil de un violador en serie”. En: *Boletín criminológico*. Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Andalucía, 2002, p. 1.

<sup>589</sup> TURVEY, Brent E.” Una Directriz Objetiva para el Perfil de los Violadores Seriales Violentos”. En: *Criminalística*. México D.F., 2007. Disponible en: <http://www.criminalistica.com.mx/index.php/psicologia-y-psiquiatria/472-una-directriz-objetiva-para-el-perfil-de-los-violadores-seriales-violentos> (Revisado el 21 de mayo de 2009).

<sup>590</sup> JIMENEZ CORTES, Carlos y MARTIN ALONSO, Carlos. “Valoración del testimonio en abuso sexual infantil”. Op. cit., p. 85.

un juego', 'la culpa es suya', etc.), evitando así el malestar que podría desencadenar en ellos la conciencia de estos actos, por lo que no se esperan reacciones autoinculpatorias en estos agresores sexuales”<sup>591</sup>.

Sin embargo, será un rasgo ciertamente interesante el que describirá el perfil del agresor sexual. Jiménez Cortés y Martín Alonso señalan “el hecho de que estas conductas no suelen ir ligadas a trastorno mental, lo que supone un obstáculo para la identificación del agresor. No obstante, se detecta en muchos agresores rasgos como un acusado egocentrismo, tendencia a adaptar la realidad a las propias necesidades, ausencia de empatía, etc., obteniéndose de esta manera un perfil que únicamente tiene un carácter aproximativo, ya que los rasgos que suelen detectarse en estos sujetos no son privativos de este tipo de delito al poder advertirse también en otras personas, independientemente de que infrinjan o no las normas sociales en un momento determinado”<sup>592</sup>.

#### **3.5.3.2.7. Consecuencias de la violencia de género**

El marco descrito nos brinda una aproximación sobre la situación de las mujeres sometidas a las diferentes modalidades de violencia. Sin embargo, el estudio de las consecuencias de la violencia de género es ciertamente complejo, pues como afirman Patró Hernández y Limañana Gras, “las investigaciones sobre distintos tipos de víctimas han demostrado claramente que la violencia física, psicológica o sexual, ejercida sobre una persona, causa en ésta toda una serie de repercusiones negativas a nivel físico y psicológico. Además del posible daño físico, tras una experiencia traumática se produce una pérdida del sentimiento de invulnerabilidad, sentimiento bajo el cual funcionan la mayoría de los individuos y que constituye un componente de vital importancia para evitar que las personas se consuman y paralicen con el miedo a su propia vulnerabilidad”<sup>593</sup>.

---

<sup>591</sup> JIMENEZ CORTES, Carlos y MARTIN ALONSO, Carlos. “Valoración del testimonio en abuso sexual infantil”. Op. cit., p. 85.

<sup>592</sup> Loc, cit.

<sup>593</sup> PATRÓ HERNÁNDEZ, Rosa y LIMINANA GRAS, Rosa María. “Víctimas de violencia familiar: Consecuencias psicológicas en hijos de mujeres maltratadas”. Op. cit., p.12.

Sin perjuicio de las diferentes consecuencias que la violencia de género puede originar, resalta nuestra preocupación en torno a la afección que se causa sobre los niños que forman parte del círculo inmediato de la agredida, ya que “este tipo de situaciones constituye un modelo de aprendizaje de conductas violentas dentro del hogar, algo que junto a factores tales como los estilos de crianza punitivos, el abuso de sustancias y la presencia de trastornos de conducta en la adolescencia, han demostrado poseer un papel relevante en el riesgo de ejercer violencia contra la pareja en la edad adulta. (...) Con la repetición, esos patrones de interacción y de resolución coercitiva de los conflictos se generalizan y se aplicarán, posteriormente, a las relaciones familiares y de pareja en la edad adulta (...). A ello contribuye, por otro lado, las percepciones del carácter privado y relativamente impune del entorno familiar y la influencia de los estereotipos y creencias tradicionales acerca del uso y reparto del poder dentro de la familia”<sup>594</sup>. Ello porque “los niños aprenden a definirse a sí mismos, a entender el mundo y cómo relacionarse con él a partir de lo que observan en su entorno más próximo. De este modo, la familia es considerada como el primer agente socializador del niño y el más determinante a la hora de la instauración de modelos apropiados de funcionamiento social”<sup>595</sup>.

### 3.5.3.2.8. Violencia de género en Perú

Este panorama es propio de la realidad peruana, pues conforme señala un informe de Flora Tristán, “**la violencia familiar afecta a seis de cada diez mujeres en nuestro país**. El 41% de las mujeres alguna vez ha sido empujada, golpeada o agredida físicamente por su esposo o compañero. Del tipo de violencia sufrida, el 31% reporta haber atravesado por violencia psicológica, mientras que el 69% por violencia física a nivel nacional”<sup>596</sup> (el sombreado es nuestro). De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del INEI realizada en 2000, se constató que el 80% de mujeres víctimas de violencia familiar no buscaron ayuda, mientras que el 14.90% acudió a la comisaría, el 3.00% a juzgados, el 1.00% a fiscalías, el 1.00% a establecimientos de salud y el 0.30% al Mimdes.

---

<sup>594</sup> Ibidem, pp.14-15.

<sup>595</sup> Ibidem, p.14.

<sup>596</sup> MACASSI LEÓN, Ivonne (Coord.). “Violencia familiar, violencia sexual, aborto, derechos reproductivos”. Flora Tristán. Lima, 2003, p. 16.

Lo señalado confirma la posición de Maqueda Abreau, pues el origen de la violencia contra la mujer se encontraría en que la agresión tendría por objeto resguardar la posición hegemónica del varón, la cual “garantiza la continuidad de esas expectativas, en la familia o fuera de ella, y se hace valer a toda costa, a menudo con el recurso a la violencia. Esta no es, pues, una manifestación de la agresividad ambiental, ni de la conflictividad propia de las relaciones de pareja, ni de factores ocasionales como la ingestión de alcohol o drogas u otros como el paro o la pobreza, tal y como socialmente se quiere hacer creer, sino que es un medio de valor inestimable para garantizar en esos y otros escenarios la relación de dominio por parte del hombre”<sup>597</sup>. En efecto, el agresor considera que, al ser la familia un ámbito ajeno al control social, sus integrantes se encuentran subordinados a su voluntad, por lo que todo acto u omisión de las potenciales víctimas que resquebraje el “orden natural del hogar” debe ser deshecho a través de la imposición de la fuerza o de la agresión, ya que tales constituirían mecanismos de preservación del mencionado orden.

Cabe precisar que la Defensoría del Pueblo realizó en 2001 un estudio en el Callao sobre la incidencia de casos de violencia familiar cuyo componente es el género. Al respecto, señaló que de las 8708 denuncias presentadas en las diferentes comisarías durante 2000, 3132 correspondían a violencia familiar<sup>598</sup>. Sin embargo, el dato más preocupante es que de las 3132 denuncias por violencia familiar, 2921 fueron relativas a violencia ejercida en contra de la mujer, es decir que **durante 2000, el 93.20% de los casos de violencia familiar tuvieron componente de género**<sup>599</sup>.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo identificó indicadores de deficiencia en la actuación de las autoridades públicas en la tramitación de casos de violencia de género. En relación a la **Policía Nacional del Perú** se constataron irregularidades que propiciaron el archivamiento de las denuncias en la Comisaría de la Mujer; así, tenemos que del 100% de denuncias archivadas, 22.40% se debió a que no existió informe psicológico y 15.70% a

---

<sup>597</sup> MAQUEDA ABREAU, María Luisa. “La violencia de género: Entre el concepto jurídico y la realidad social”. Op. cit., p. 4.

<sup>598</sup> DEFENSORÍA DEL PUEBLO. “Violencia familiar contra la mujer en el Callao”. Informe Defensorial N° 61. 2° ed. Lima, 2004, p. 68.

<sup>599</sup> Ibidem, pp. 72-73.

que no existió reconocimiento médico legal<sup>600</sup>. Asimismo, se evaluó el desempeño de los **juzgados de familia**, revelándose que el 0% de las demandas sobre la materia contaba con sentencia, encontrándose un 38% pendiente de resolver y un alarmante 17% de demandas sin ubicar<sup>601</sup>.

#### **3.5.4. Diferenciación**

Como se ha expuesto, la discriminación es un problema multidisciplinario que engloba una serie de conductas y omisiones que tienen por finalidad privilegiar a determinado sector de la población sobre la marginación de otros.

Evidentemente, la característica más saltante de este problema es el trato diferenciado. Sin embargo, y como se propugna en esta investigación, todo análisis debe partir de la realidad. Basta con dar un vistazo por una avenida concurrida y apreciaremos la diversidad de etnias y de culturas que representa cada una de las personas que día a día transitan por ella. Esta apreciación nos trae a colación que, **si bien la Constitución reconoce la igualdad ante la ley, cada uno de nosotros somos diferentes.**

Ahora bien, cuando existe un número considerable de personas con características similares –sea el origen o el sexo-, estos factores servirán como elementos unificadores, es decir, constituyentes de una identidad que los diferenciará de los demás. Esto, sin embargo, no significa que un grupo sea superior o inferior a otro; sino tan sólo los dota de características particulares que son importantes para el Derecho en tanto identificará la existencia de varios grupos y verificará en la realidad si es que dichos grupos gozan del ejercicio pleno de sus derechos o, si es que los grupos más pudientes los limitan sobre la base de sus propios atributos.

Al respecto, Huerta Ochoa señala que “diferenciar no es sin embargo una acción negativa necesariamente, en virtud de lo cual es preciso distinguir las razones por las cuales se

---

<sup>600</sup> Ibidem, p. 87.

<sup>601</sup> Ibidem, p. 108.

produce la diferenciación. Para ello es necesario distinguir los motivos que pueden justificar una diferenciación válida, de las acciones que la llevan a cabo (distinciones, preferencias, privilegios, exclusión, restricciones), de los resultados de la discriminación (el detrimento, un impedimento, el menoscabo, el hecho de negar el derecho o su ejercicio, o la marginación, por ejemplo). Ya que cuando las acciones que producen una distinción se fundan correctamente, no debe producirse un efecto discriminatorio. La regulación de la discriminación tiene por objeto combatirla”<sup>602</sup>.

Por ello, Flores señala que “la cuestión es saber discriminar cuándo estamos ante algo negativo e injustificado –discriminación- y cuándo ante algo positivo y justificado –diferenciación o distinción- y para ello es imprescindible determinar si la causa es objetiva, razonable y proporcional o no lo es. Así, un restaurante abierto al público en general no se puede negar a dar un servicio a un comensal por su origen étnico o racial, en tanto que un club privado que solamente admite a sus miembros e invitados de estos –o el mismo restaurante alquilado para una fiesta particular- sí se lo puede negar: cierto es que no por su origen sino por no ser miembro o invitado”<sup>603</sup>.

Sobre el particular, Cantón ha considerado que “por ejemplo, si se propusiera una igualdad en libertades y derechos, nadie podría discutir que el modelo social así instituido es justo e igualitario formalmente hablando. Pero, si la sociedad fuera de hecho desigual, -como siempre sucede en mayor o menor medida-, dicho modelo sería, -dadas estas desigualdades fácticas que no atiende-, injusto y desigualitario en lo material. Inmersos en sistemas socioeconómicos dominados (económica y socialmente) por una minoría e intrínsecamente desigualitarios como los nuestros, frecuentemente es aceptada como suficiente una concepción ‘débil’ de igualdad. **Se opta por tutelar una igualdad abstracta**, a través de los derechos civiles, que suele acomodarse a los intereses de poder. La igualdad se inserta así en sistemas sociales que, a pesar de decirse igualitarios, -en mucho sólo por salvar el requisito ‘formal’ impuesto por la moral y la justicia al que hicimos referencia-,

---

<sup>602</sup> HUERTA OCHOA, Carla. “La estructura jurídica del derecho a la no discriminación”. Op. cit., p. 187.

<sup>603</sup> FLORES, Imer. “Igualdad, no discriminación (y políticas públicas); a propósito de la constitucionalidad o no del artículo 68° de la Ley General de Población”. En: DE LA TORRE MARTÍNEZ, Carlos (Coordinador). *Derecho a la no discriminación*. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México D.F., 2006, p. 275.

materialmente producen y perpetúan relaciones de desigualdad estigmatizante. De ahí que algunos autores más igualitarios en este sentido defiendan la necesidad insoslayable de establecer y garantizar una determinada igualdad material que contemple el citado modelo y que haga viable el tránsito de la justicia formal hacia la justicia material o de hecho”<sup>604</sup>.

En este último caso **será necesaria la participación del Estado a través de medidas legales destinadas a paralizar las conductas u omisiones que limitan el ejercicio de los derechos y libertades de los grupos marginados o “menos favorecidos”.**

Ello se justifica, en palabras de Cantón, en que “este empeño por lograr una determinada igualdad material entre los hombres [y las mujeres] es la que fundamentará en el Estado de derecho la implementación de los derechos sociales, derechos que tratarán de superar a través del trato diferenciado, es decir, del trato más favorable a quien menos posee – materialmente hablando-, la condición de dependencia en sociedades estructuralmente organizadas en torno al mercado”<sup>605</sup>.

Por tal motivo, Pietro Sanchís sostiene que “la igualdad presenta una doble faceta (tratar igual lo que es igual y desigual lo que es desigual), por lo que en buena lógica parece que necesitarían el mismo grado de justificación tanto las normas que establecen diferenciaciones como las regulaciones uniformes u homogeneizadoras, o, dicho de otro modo, que tan exigible sería el derecho a ser tratado igual como el derecho a la diferenciación. Lo cierto es que, seguramente por motivos pragmáticos, esa simetría entre ambas dimensiones se rompe en favor de la primera: ‘la igualdad no tiene necesidad, como tal, de justificación. El deber o de justificación pesa, en cambio, sobre las desviaciones de la igualdad’”<sup>606</sup>.

En consecuencia, “es como si se partiese de un ‘orden natural’ (y, por cierto, desigual) de las cosas, sobre el que operaría el Derecho estableciendo clasificaciones o diferencias ‘artificiales’, siendo estas últimas las que deben justificarse. Con todo, dicha presunción no

---

<sup>604</sup> CANTÓN, Octavio. “Igualdad, necesidades y derechos”. Op. cit., pp. 21-22.

<sup>605</sup> CANTÓN, Octavio. “Igualdad, necesidades y derechos”. Op. cit., p. 23.

<sup>606</sup> PIETRO SANCHÍS, Luis. “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”. Op. cit., p. 26.

carece de fundamento, pues si aceptarnos la hipótesis de que los mandatos del legislador persiguen fines valiosos y de que sus prohibiciones tratan de evitar resultados indeseables, entonces parece razonable que, en principio, deban vincular a todos los destinatarios del Derecho”<sup>607</sup>.

Cabe señalar que la diferenciación también ha sido abordada por Alexy, quien identifica su pertinencia sobre la base de los siguientes criterios: “si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual”<sup>608</sup>; “si hay una razón suficiente para ordenar un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento desigual”<sup>609</sup>. De ello se desprende la utilidad de la argumentación para sustentar la diferenciación, al ampararse en “la carga de la argumentación para los tratamientos desiguales”<sup>610</sup>.

Por ello, Pietro Sanchís considera que “cuando se persigue la igualdad sustancial ha de justificarse que efectivamente las medidas normativas de diferenciación serán capaces de apuntar hacia una igualación de hecho en el ámbito vital que se considere relevante. (...) El juicio de igualdad sustancial no puede dejar de considerar la razonabilidad, adecuación y proporcionalidad de la norma en relación con las situaciones de hecho y a la luz del fin perseguido, esto es, de limitar la desigualdad”<sup>611</sup>.

Ello determina que “ese trato diferente no puede ser exigido sólo como un imperativo de la segunda parte del principio de igualdad, es decir, de aquella que ordena tratar de forma desigual lo que es desigual. Por tanto, que lo desigual debe ser tratado de forma desigual supone tan sólo que pueden existir razones que permitan o que, valoradas todas las demás razones en pugna, impongan dicha desigualdad, no que exista algún criterio que siempre y en todo caso obligue a la diferenciación”<sup>612</sup>.

---

<sup>607</sup> Loc. cit..

<sup>608</sup> ALEXY, Robert. “Teoría de los derechos fundamentales”. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1993, pp. 395 y sgts.

<sup>609</sup> Loc. cit.

<sup>610</sup> Ibidem, p. 405.

<sup>611</sup> PIETRO SANCHÍS, Luis. “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”. Op. cit., p. 27.

<sup>612</sup> Ibidem, p. 29.



En tal sentido, “el logro de la igualdad real consiste precisamente en operar diferenciaciones de tratamiento normativo a fin de compensar por vía jurídica una previa desigualdad fáctica. Son modalidades tendencialmente contradictorias, pero que han de convivir en el plano constitucional, y de ahí que tampoco exista ninguna razón a priori que imponga siempre, como razón definitiva, un tratamiento desigual, y ello aunque sólo sea porque habrá de enfrentarse con las razones que avalen o apoyen la igualdad de iure”<sup>613</sup>.

Lo señalado en el párrafo precedente nos hace caer en cuenta que más allá de la igualdad formal y de que todos somos iguales en dignidad, la propia realidad nos demuestra que no todos los seres humanos somos iguales pues no tenemos las mismas posibilidades para titularizar nuestros derechos. Esto implica la necesidad de ser tratados de manera distinta por la ley, es decir, a través del trato diferenciado. Queda claro entonces que **no todo trato diferenciado implica uno discriminatorio**<sup>614</sup>.

Desde una perspectiva de género, las medidas diferenciadoras pueden perjudicar de cierta manera el ejercicio de los derechos de los varones. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que a través de estas medidas se propugna que la mujer, como grupo tradicionalmente marginado asuma paulatinamente mayor participación en la vida laboral y política.

#### **3.5.4.1. Características de las medidas diferenciadoras**

Así, para que una medida diferenciadora sea permitida por nuestro ordenamiento, esta debe estar justificada sobre la base del cumplimiento de ciertos requisitos. En opinión de Michel Miné<sup>615</sup> son las siguientes:

##### **a. Objetiva**

---

<sup>613</sup> Ibidem, p. 30.

<sup>614</sup> Antes de proseguir, debemos señalar que si bien el tema de la diferenciación se encuentra estrictamente comprendido dentro las acciones positivas, consideramos necesario introducir al lector a ideas preliminares que resultarán pertinentes a efectos de comprender el desarrollo de las referidas acciones.

<sup>615</sup> MINÉ, Michel. “Los conceptos de discriminación directa e indirecta”. Op. cit, p. 11.

A través de la objetividad, la medida diferenciadora parte de un elemento contrastable que es la situación de la mujer en la realidad. Aquí, podemos tomar como referente lo señalado por Carlos Mesía, en torno a la *desigualdad de los supuestos de hecho*<sup>616</sup>, que implica la existencia de situaciones de hecho que, por ser diferentes, admiten un trato también diferente. Es decir, no puede darse la violación del principio de igualdad entre quienes se hallan en situaciones diferentes; por lo tanto, el principio de igualdad sólo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales.

Un ejemplo de esta desigualdad la participación de la mujer peruana en los cargos de elección pública no llegaba siquiera a la mitad que la de los varones. Consciente de esta realidad, el legislador estableció en la Ley de Partidos Políticos que las agrupaciones deberían tener un porcentaje mínimo de participación de personas de cualquier sexo. Pese a que no se expresa que el referido porcentaje corresponde a las mujeres, la constatación de la desigualdad de los supuestos de hecho, resultó determinante para que el legislador comprendiese que un grupo de la población –establecido en relación al sexo- no contaba con la participación necesaria, por lo que se hizo necesario otorgarle un tratamiento especializado y diferenciador.

#### **b. Perseguir un objetivo legítimo**

Como hemos señalado, para que una medida diferenciadora se encuentre permitida por nuestra legislación, esta deberá perseguir un objetivo constitucional: la igualdad material de la mujer (en sentido estricto, la igualdad de oportunidades). Como señala Miné, “[e]l control de legitimidad del objetivo perseguido puede ser apreciado en su realidad y su adecuación en función de diferentes parámetros (...). Se trata de determinar si los motivos aducidos (...) pueden ser considerados como razones (...) objetivamente justificadas (...), así como investigar los móviles reales [que determinaron la diferenciación; es decir,] [l]a exigencia de un vínculo de causalidad directa entre la justificación y el objetivo”<sup>617</sup>. Mesía

---

<sup>616</sup> MESÍA RAMÍREZ, Carlos. “Derechos de la persona”. Fondo Editorial del Congreso del Perú. Lima, 2004, p. 104.

<sup>617</sup> MINÉ, Michel. “Los conceptos de discriminación directa e indirecta”. Op. cit, p. 11.

Ramírez aborda la consecución del objetivo a través de la *finalidad*<sup>618</sup>, al considerar que sólo se justifica la diferencia de trato si es que esta tiene un propósito que debe no debe ser abstracto, sino concreto. Por lo tanto, el tratamiento diferenciado que se otorga a título gratuito y que no obedece a un fin o a un valor constitucional no es objetivo ni razonable.

### **c. Medios necesarios y proporcionados**

Es decir, “[s]e trata de verificar la adecuación de los medios al objetivo perseguido y el carácter necesario de la medida. Los medios elegidos (...) deben responder a ‘una necesidad verdadera’, ‘ser aptos para alcanzar el objetivo perseguido’ y ‘necesarios a tal efecto’. (...) Por último, se examinará el carácter proporcionado de los medios, debiendo además ser el daño a la igualdad de trato lo más reducido posible. La justificación debe establecer un vínculo de causalidad con la diferencia de trato”<sup>619</sup>.

Como se verá en su oportunidad, la jurisprudencia nacional ha abordado esta secuencia que evalúa la legalidad de la diferenciación. Carlos Mesía esquematiza lo señalado por Miné a través de tres criterios que determinarán cuando una medida es diferenciadora.

En primer lugar, deberá guardar *razonabilidad*<sup>620</sup>, es decir, que el fin que se persigue no es uno cualquiera, sino que se trata de uno que se ajusta a los valores de la Constitución. Basta con que la finalidad que se busque sea constitucionalmente admisible y no contradiga los valores que la Ley Suprema propugna. Por otro lado, la medida deberá albergar un criterio de *racionalidad*<sup>621</sup>, el cual consiste en la adecuación de los medios a los fines perseguidos. En otras palabras, es necesario que exista un nexo entre el trato desigual que se impone, el supuesto de hecho que lo justifica y la finalidad que la persigue. Finalmente, esta deberá responder a la *proporcionalidad*<sup>622</sup>, es decir, que el trato diferenciado solo será constitucionalmente admisible si existe proporción entre las diferencias que se establecen y

---

<sup>618</sup> MESÍA RAMÍREZ, Carlos. “Derechos de la Persona”. Op. cit., p. 104.

<sup>619</sup> MINÉ, Michel. “Los conceptos de discriminación directa e indirecta”. Op. cit, p. 11.

<sup>620</sup> MESÍA RAMÍREZ, Carlos. “Derechos de la Persona”. Op. cit., p. 104.

<sup>621</sup> Loc. cit.

<sup>622</sup> Loc. cit.

la finalidad perseguida. Si concurren todos estos elementos el trato desigual será admisible; de lo contrario nos encontraremos frente una situación constitucionalmente reprochable.

### 3.5.4.2. Acciones positivas como medidas diferenciadoras

Como se ha señalado, nuestra Constitución no niega la posibilidad de un trato diferenciado, por lo que resulta posible establecer un trato diferenciado entre los seres humanos y grupos sociales, siempre que éste sea razonable y proporcional. En este contexto, encontramos a las *acciones afirmativas* o también llamadas *acciones positivas*.

Conocidas como “*affirmative action*”, estas tienen su origen en La India<sup>623</sup>. Por más de cinco mil años, la compleja realidad de este país se erigió sobre la base de un sistema de castas agrupadas en cinco grandes conjuntos: “1. Los Brahmanes (letrados) 2. Los Kshatryas (guerreros) 3. Los Vaishnas (comerciantes) (...) 4. Las castas bajas (shudras) Integrarían entre el 50% y el 54% de la población. 5. Los intocables (...) [que] [i]ntegran el 17% de la población”<sup>624</sup>. Una vez independizada, los padres de la nascente república consagraron en la Constitución de 1950 medidas como las establecidas en los artículos 331 y 333 que disponen que “el Presidente o Gobernador de cualquier Estado puede designar a miembros de la comunidad angloindia como representantes en el Parlamento y la Asamblea Legislativa, siempre que considere que esa comunidad no está suficientemente representada”<sup>625</sup>. De la misma manera, dicha Constitución ha incorporado “*medidas de discriminación positivas para ayudar a las castas y tribus reconocidas, que suelen ser las clases económicamente menos privilegiadas, a participar plenamente en la vida nacional y facilitar su mezcla con el resto de la población india*”<sup>626</sup> (las cursivas son nuestras).

---

<sup>623</sup> MINUTO DIGITAL. “La discriminación positiva en el mundo”. Disponible en: <http://www.minutodigital.com/blogs/libros/?p=112> (Revisado el 28 de mayo de 2009).

<sup>624</sup> JAFFRELOT, Christophe. “La démocratie per la caste. Histoire d’ une mutation socio-politique” citado por AGRAWAL, Purushottam. “Exclusividad del criterio de castas”. En: *Le monde diplomatique*. Edición peruana. N° 1. Grupo La República. Lima, 2007, p. 28.

<sup>625</sup> OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS. CERD/C/229/Add.3. Université de Fribourg. Fribourg. Disponible en: [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/CERD.C.299.Add.3.Sp?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CERD.C.299.Add.3.Sp?Opendocument) (Revisado el 28 de mayo de 2009).

<sup>626</sup> Loc. cit.

Este avance en la consagración de medidas destinadas a favorecer a aquellos sectores de la población tradicionalmente discriminados se desarrolló en occidente a partir de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (*Civil Rights Act*) en Estados Unidos que consagró medidas diferenciadoras a favor de poblaciones no caucásicas, abordándose el tema del sexo sólo en el ámbito laboral<sup>627</sup>. Esta expresión, que ha tomado especial fuerza desde 1960 en adelante, hace referencia *a todo trato formalmente desigual cuya finalidad es avanzar hacia la igualdad sustancial, en especial a favor de personas pertenecientes a grupos tradicionalmente preteridos*<sup>628</sup>.

El Instituto Vasco de la Mujer define a las acciones positivas como “todas aquellas medidas de impulso y promoción que tienen por objeto establecer la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo, mediante la eliminación de las desigualdades de hecho”<sup>629</sup>. Es decir, las acciones positivas son los mecanismos destinados a la consecución de la igualdad de oportunidades; situación de hecho que debe guiar el establecimiento de las políticas a nivel nacional y supranacional, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres.

Esquembre Valdés afirma “que el tratamiento jurídico diferenciado consistente en las denominadas medidas de igualación positiva o prestaciones diferenciadas se corresponderían con el objetivo de la eliminación de la discriminación intragrupal (dentro de grupo, pero entre individuos), mientras que el tratamiento jurídico diferenciado consiste en medidas de acción positiva se corresponderían con el objetivo de la eliminación de la discriminación intergrupala (entre grupos)”<sup>630</sup>.

Por su parte, Martín Vida considera que las medidas de acción positiva pueden definirse como “todas aquellas medidas, diversas en sus manifestaciones, que tienen como destinatarios directos a personas que están o han estado discriminadas o que se hallan en

---

<sup>627</sup> BARRERE UNZUETA, María Ángeles. “Discriminación, derecho antidiscriminatorio y acción positiva a favor de las mujeres”. Op. cit., p. 35.

<sup>628</sup> MOSQUERA MONELLOS, Susana (Coordinadora). “El derecho fundamental de igualdad”. Op. cit, p. 18.

<sup>629</sup> INSTITUTO VASCO DE LA MUJER (EMAKUNDE). “Base legal de la acción positiva”. País Vasco, 2006, p. 16.

<sup>630</sup> ESQUEMBRE VALDES, Mar. “Fundamentos de la discriminación positiva en Europa y España”. En: *Administración Pública*. Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante. Alicante, 2004, p. 6.

una situación de desventaja estructural como consecuencia de su pertenencia a un cierto colectivo, pertenencia determinadas por la posesión de algún rasgo completamente inmutable e íntimamente ligado, en tanto que definitorio de su identidad, a su dignidad como seres humanos, y que persiguen poner fin a esa situación de desventaja estructural, reducir los niveles de desigualdad entre dichos colectivos (y sus miembros) y el resto de la sociedad, y alcanzar mayores cuotas de igualdad real dentro de la comunidad”<sup>631</sup>.

Por ello, Moraga García señala que “en estos casos de discriminación, la acción positiva se legitima no en función de las características individuales de la persona beneficiaria, sino en función de su pertenencia a un colectivo discriminado: lo que persigue es suprimir aquellas circunstancias de carácter social general que llevan a que los componentes de un grupo determinado se encuentren, como regla general, sometidos a un trato social desfavorable”<sup>632</sup>.

Cabe precisar que el profesor Julio Faúndez al referirse a este tipo de acciones, sostiene que el término acción positiva es usado generalmente en dos sentidos. En un sentido amplio, como toda medida cuyo objetivo es asegurar igualdad de oportunidades, como lo es por ejemplo la construcción de rampas en las empresas para facilitar el acceso de trabajadores inválidos; y, en un sentido estricto, como sinónimo de trato preferencial (la “affirmative action” norteamericana). En este segundo sentido la acción positiva es pues cualquier forma de trato preferencial otorgado a los individuos pertenecientes a grupos determinados para lograr que ellos tengan acceso y obtengan puestos de trabajo en una empresa o servicio público determinado<sup>633</sup>.

En consecuencia, “para la consecución de la igualdad material, es posible establecer tratamientos jurídicos formalmente desiguales, lo que conecta con las llamadas medidas de acción positiva, utilizadas para paliar situaciones de desigualdad arraigadas en la sociedad.

---

<sup>631</sup> MARTÍN VIDA, M<sup>a</sup> Ángeles. “Fundamento y límites constitucionales de las medidas de acción positiva”. Civitas. Madrid, 2003, pp. 39-40.

<sup>632</sup> MORAGA GARCÍA, María Ángeles. “La igualdad entre hombres y mujeres en la Constitución española de 1978”. En *Feminismo* /s. N° 8. Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante. Alicante, Madrid, 2006, p. 64.

<sup>633</sup> FAÚNDEZ, Julio. “Acciones afirmativas en el empleo y la ocupación”. Defensoría del Pueblo. Lima, 2005, p. 15.

Aunque sin olvidar que no todos los tratamientos diferenciados orientados a la consecución de la igualdad real o material pueden catalogarse como acciones positivas, constituyendo éstas sólo una especie de aquéllos”<sup>634</sup>.

Como señala la OIT, “no todas las diferencias de trato son ilícitas; no lo son, por ejemplo, las que se justifican por las exigencias reales del empleo. El ser hombre o mujer puede considerarse un requisito legítimo para ocupar empleos que implican una proximidad física a otras personas o para trabajar en el ámbito de las artes escénicas. Las distinciones basadas en las destrezas o en los esfuerzos exigidos por el trabajo son justas y legítimas, como también lo son las disparidades en la remuneración en función del número de años de formación o de horas trabajadas”<sup>635</sup>.

Asimismo, precisa que “tampoco son discriminatorias las medidas especiales que conllevan un trato diferenciado para quienes tienen necesidades particulares por razones de género, de discapacidad mental, sensorial o física, o de extracción social. Poner en práctica el principio de la igualdad de oportunidades y de trato supone mucho más que portarse de la misma manera con todo el mundo: requiere además adoptar medidas especiales y adaptar el entorno a sus diferencias. La instalación de rampas de acceso en el lugar de trabajo para los trabajadores con discapacidades físicas es un ejemplo de esas medidas, como también lo es el garantizar protección a las trabajadoras durante el embarazo y el puerperio, que es esencial para asegurar una verdadera igualdad con respecto a los hombres en el mundo del trabajo”<sup>636</sup>.

Las medidas especiales de carácter temporal, señala, “también conocidas como políticas de acción positiva o afirmativa, pueden servir además para acelerar la mejora de la situación de los colectivos que tienen desventajas importantes debido a la discriminación de que han sido o son objeto. Se trata de una variedad de intervenciones ‘temporales’, que no tienen

---

<sup>634</sup> MORAGA GARCÍA, María Ángeles. “La igualdad entre hombres y mujeres en la Constitución española de 1978”. Op. cit., p. 62.

<sup>635</sup> DIRECTOR GENERAL DE LA OIT. “La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean”. OIT. Ginebra, 2007, p. 10.

<sup>636</sup> Loc. cit.

por qué ser ‘de corto plazo’, y pueden estar destinadas a distintos colectivos y justificarse atendiendo a diversos criterios”<sup>637</sup>

Ello determinaría que “esas intervenciones abarcan diferentes etapas y aspectos de la relación de empleo, y pueden vincularse al cumplimiento de metas relativas a la contratación, la formación, la promoción o los contingentes, mecanismo este que consiste en asignar cierta cuota de los puestos de trabajo a miembros de los colectivos insuficientemente representados. Cualesquiera sean estas variantes, todas las medidas de acción afirmativa estriban en el reconocimiento de que el mero hecho de poner coto a la discriminación no basta de por sí para nivelar completamente las condiciones de igualdad para aquellos colectivos cuyas privaciones han estado profundamente arraigadas durante largos períodos”<sup>638</sup>.

Cabe precisar que estas medidas “han suscitado múltiples debates y controversias, inclusive en los últimos tiempos, en el contexto de las reformas de la legislación laboral. Quienes las impugnan sostienen que su aplicación desfavorece indebidamente a los miembros de los colectivos no beneficiarios, estigmatiza aun más a los propios colectivos beneficiarios y provoca una disminución general de la eficiencia y la productividad. La experiencia muestra sin embargo que estas políticas pueden servir para alcanzar las metas deseadas, siempre y cuando se respeten ciertas condiciones”<sup>639</sup>.

#### **3.5.4.3. Clasificación de las acciones positivas**

A fin de determinar su admisibilidad en el ordenamiento jurídico es necesaria una clasificación de las medidas de acción positiva, Esquembre Valdés realiza la siguiente clasificación de las medidas de acción positiva:

##### **a. Las medidas de concienciación**

---

<sup>637</sup> Loc. cit.

<sup>638</sup> Loc. cit.

<sup>639</sup> Ibidem, p. 11.



Son “generalmente medidas de formación o de carácter publicitario que pretenden crear un estado de oposición o una sensibilización del problema. Por ejemplo: las campañas de publicidad para la igualdad sexual, el fomento de cursos de especialización, formación de agentes de igualdad de oportunidades, etc”<sup>640</sup>.

#### **b. Medidas de retribución, recompensa o sanción positiva**

Se trata de medidas “que se adoptan tras la realización de la acción querida, como por ejemplo: la asignación de un premio, como puede ser una mención distintiva a las empresas que adopten medidas tendentes a conseguir la igualdad real entre mujeres y hombre, o una exención fiscal, etc”<sup>641</sup>.

#### **c. Medidas de facilitación, de impulso o de promoción**

Son “las medidas previas tendentes a la consecución del fin pretendido, que no es otro que el de la eliminación de la discriminación estructural a fin de conseguir una efectiva igualdad real. Dentro de estas, se distingue:

a) *Medidas de incentivación*: para aumentar las oportunidades competitivas de las personas pertenecientes a colectivos tradicionalmente desfavorecidos; como por ejemplo: subvenciones, becas, etc.

b) *Medidas de discriminación inversa o positiva en sentido amplio*: se aplican en situaciones de particular escasez e indivisibilidad del bien que se pretende adjudicar. La determinación de la proporción de sujetos tradicionalmente marginados que van a beneficiarse de estas medidas puede hacerse por el sistema de cuotas o por el de objetivos numérico.

Dichas medidas pueden, a su vez, revestir diferentes modalidades tales como la de asignar una puntuación extra junto al mérito, a los miembros del colectivo desfavorecido, las medidas de desempate, o finalmente las medidas de trato diferencial”<sup>642</sup>.

---

<sup>640</sup> ESQUEMBRE VALDES, Mar. “Fundamentos de la discriminación positiva en Europa y España”. Op. cit., p. 61.

<sup>641</sup> Loc. cit.

<sup>642</sup> Loc. cit.

#### **3.5.4.4. Acciones positivas a favor de la mujer**

Si bien las mujeres no son una minoría en cuanto a su número, sí lo son como grupo tradicional y históricamente disminuido respecto al ejercicio de sus derechos frente a los hombres. En efecto, aún en el siglo XXI, el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de las mujeres no es equitativo en relación al de los varones.

Las causas de esta desigualdad y, por supuesto, discriminación frente al colectivo mujer son variadas y complejas –culturales, religiosas, ideológicas o educativas-, lo cual convierte a la discriminación contra las mujeres y al ejercicio de sus derechos no sólo en un problema social sino también en un problema para el Derecho.

Hoy en día, si bien es cierto la mujer ha conseguido importantes reivindicaciones –la mayoría gracias a la lucha de los movimientos feministas, con el fin de lograr la igualdad entre varón y mujer-, aún se hacen necesarias la adopción medidas destinadas a hacer realidad esta paridad y colocar a ambos géneros en un plano de igualdad.

Surge así el concepto de acciones positivas o afirmativas a favor de las mujeres, entendidas como el conjunto de medidas traducidas en normas o programas adoptados por el Estado con la finalidad de alcanzar la igualdad de géneros. Como señala Barrère, “[e]l punto de partida parece el mismo: la constatación de la desigualdad entre hombres y mujeres, pero resulta diferente el modo de ‘superar’ ese punto de partida: bien promoviendo o impulsando la igualdad (para el futuro), bien corrigiendo (o compensando) la desigualdad (en el presente)”<sup>643</sup>. En nuestra opinión, adoptar sólo una de las vías propuestas sería desvirtuar su finalidad, debido a que se limitaría su efectividad tal vez a menos del cincuenta por ciento de posibilidades.

---

<sup>643</sup> BARRERE UNZUETA, María Ángeles. “Discriminación, derecho antidiscriminatorio y acción positiva a favor de las mujeres”. Op. cit., p. 82.

Como hemos dicho, el origen de las acciones afirmativas se encuentra en los Estados Unidos; si bien su campo de acción se centró inicialmente en las minorías raciales, con el correr del tiempo se logró abarcar otros grupos como fueron las mujeres. Como ejemplo podemos citar la sentencia expedida por el Tribunal Supremo estadounidense en el caso Johnson vs. Transportation Agency<sup>644</sup>, “por el que se cuestiona la promoción de una candidata mujer que, habiendo quedado en un puesto ligeramente inferior a un candidato hombre, es seleccionada al amparo de un plan de acción positiva (...) que buscaba aumentar la representación de las mujeres en determinadas áreas”<sup>645</sup>.

En esta sentencia, el Tribunal sostuvo que el hecho de tomar en consideración el sexo estaba justificado por la existencia de un desequilibrio evidente reflejado en la infrarepresentación de las mujeres en categorías de empleo tradicionalmente ocupadas por hombres, así como por alentar a mujeres a ocupar un puesto no tradicional.

Es preciso señalar que las acciones positivas a favor de las mujeres no sólo tienen por finalidad promover la participación de estas en el campo laboral, sino además en otros ámbitos como en la educación y en la vida política, esta última dominada por género masculino.

En este contexto de medidas de acción positiva a favor de las mujeres se ha venido diferenciando, siguiendo a Luz Entrena Vázquez, especialmente desde la jurisprudencia constitucional, dos clases de medidas: a) *Medidas Equiparadoras*, las cuales tratan de eliminar las barreras discriminatorias que impide a las mujeres realizar determinadas actividades permitidas o exigidas a los hombres y se fundamentan en la prohibición de las discriminaciones directas e indirectas; y, b) *Medidas Correctoras*, que son aquellas que introducen un criterio discriminatorio para conceder a las mujeres ciertas ventajas o beneficios de los cuales se excluye a los hombres y su fundamento estaría más ligado al principio de igualdad material.

### **3.5.5. Proceso de amparo como mecanismo de tutela de la igualdad de la mujer**

---

<sup>644</sup> INSTITUTO VASCO DE LA MUJER (EMAKUNDE) “Base legal de la acción positiva”. Op. cit., p. 16.

<sup>645</sup> Ibidem, p. 11.

### 3.5.5.1. Proceso de amparo

A continuación expondremos el trámite del proceso de amparo, el cual servirá como mecanismo para que aquella mujer que considere haber sido objeto de discriminación recurra a la justicia, a efectos de tutelarse su derecho a la igualdad.

El desarrollo de este punto de la tesis se hará sobre la base de una narración general en torno al trámite del proceso de amparo, a efectos de concatenarlo con un detenido estudio de la interposición de la demanda, la contestación, el auto de saneamiento, la sentencia, la apelación, la sentencia de segunda instancia, el recurso de agravio constitucional y la sentencia del Tribunal Constitucional, entre otros.

#### 3.5.5.1.1. Trámite del proceso de amparo

La mujer que considera que ha sido objeto de discriminación se encuentra legitimada a interponer la **demanda de amparo**, conforme se desprende del artículo 37° inciso 1 del Código Procesal Constitucional (CPCo.), el cual establece que la demanda de amparo se interpone frente a la vulneración del derecho a la “igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole”.

La demanda de amparo será interpuesta dentro de los sesenta días siguientes a la producción del hecho discriminador, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda, conforme expresa el artículo 44° del CPCo. Si esto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento. Sin embargo, debe precisarse que la recurrente no estará sujeta a dicho plazo si es que se constata que la agresión se produce de manera continua. Cabe precisar que el inciso 3 del mencionado artículo establece que “si los actos que constituyen la afectación son continuados, el plazo se computa desde la fecha en que haya cesado totalmente su ejecución”.

Admitida a trámite la demanda, el juez concederá al emplazado el plazo de cinco días para que **conteste la demanda**. En caso que no se deduzcan excepciones o defensas previas y si es que no se solicita informe oral, el juez expedirá sentencia dentro de los cinco días siguientes a la contestación de la demanda; en el supuesto de solicitarse informe oral y de no deducirse excepciones y defensas previas, el juez expedirá sentencia dentro de los cinco días siguientes a la realización del referido informe. En caso que el demandado haya deducido excepciones y defensas previas o haya solicitado la nulidad del autoadmisorio, el juez dará traslado de ellas a la afectada, quien deberá de absolverlas dentro de los dos días siguientes de notificada.

Transcurrido este plazo, se dictará el **auto de saneamiento procesal**. En el supuesto que se **estimen las excepciones** de incompetencia, litispendencia, cosa juzgada y caducidad, el juez anulará lo actuado y dará por concluido el proceso. Frente a esta situación, la recurrente interpondrá recurso de apelación dentro de los tres días siguientes de notificada con la resolución que estima tales excepciones; en caso que se conceda la apelación, esta será con efecto suspensivo. En el supuesto que se **desestimen las excepciones** deducidas, la autoridad demandada apelará tal resolución; de ser concedida, lo será sin efecto suspensivo. En ambos casos, la apelación subirá a sala: si se estiman las excepciones, se declarará la nulidad de lo actuado, con lo cual concluirá el proceso; situación distinta se producirá si es que se desestiman las excepciones, ya que ello implicará la continuidad del proceso.

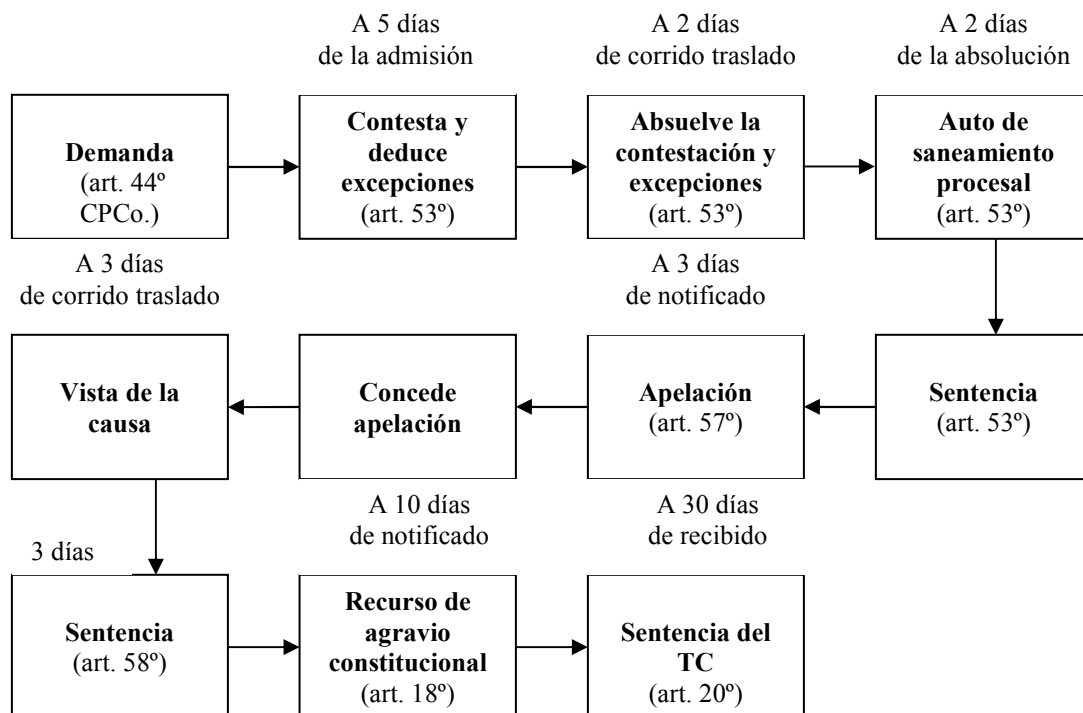
Una vez que el superior jerárquico se haya pronunciado sobre las excepciones, el juez se encontrará facultado para expedir **sentencia**, la cual podrá ser objeto de **apelación** dentro del tercer día de notificada (artículo 57° del CPCo.). Si la apelación es admitida a trámite, los actuados serán remitidos a la sala dentro de los tres días siguientes a la notificación de su concesión, tras los cuales concederá tres días al apelante para que exprese agravios (artículo 58°). Transcurrido este plazo, concederá traslado por tres días, fijando día y hora para la vista de la causa.

Cinco días después de la vista de la causa la sala expedirá **sentencia** (artículo 58°). Si se desestima la pretensión de la recurrente, ésta podrá interponer **recurso de agravio constitucional** dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución que le causa agravio (artículo 18°). En caso que la sala deniegue el recurso de agravio constitucional procederá el **recurso de queja** (artículo 19°), que deberá ser interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la denegatoria. Dicho recurso será resuelto por el Tribunal Constitucional dentro de los diez días de recibido; en caso que el colegiado estime la queja, conocerá del recurso de agravio constitucional, ordenando al superior el envío del expediente dentro del tercer día de oficiado.

Dentro de los treinta días de recibido el expediente, **el Tribunal Constitucional expedirá sentencia** (artículo 20°), la que de ser declarada fundada determinará el cese de la conducta discriminadora ejercida en contra de la recurrente.

Una vez estimada la pretensión, el Tribunal Constitucional devolverá los actuados al **juez de primera instancia**, a efectos de que se ejecute la sentencia en los términos establecidos por el colegiado (artículo 22°). En caso de que el obligado desconozca el mandato del Tribunal Constitucional, el juez podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e incluso disponer la destitución del responsable.

## TRÁMITE DEL PROCESO DE AMPARO



### 3.5.5.1.2. Demanda

Como señala Sagástegui Urteaga, la demanda es “el acto iniciador del proceso, que está en íntima relación con el concepto de acción o derecho a la jurisdicción, esto es, con el derecho fundamental a obtener tutela jurídica efectiva”<sup>646</sup>. De igual manera, Carrión Lugo señala que la demanda es “el medio procesal por el cual se ejercita la acción procesal solicitando la tutela jurisdiccional efectiva respecto a algún derecho subjetivo. Mediante ella se proponen, por el acto, sus pretensiones procesales cuya tutela jurisdiccional aspira”<sup>647</sup>.

<sup>646</sup> SAGÁSTEGUI URTEAGA, Pedro. “Exégesis y sistemática del Código Procesal Civil”. Volumen II. Grijley. Lima, 2004, p. 4.

<sup>647</sup> CARRIÓN LUGO, Jorge. “Tratado de Derecho Procesal Civil”. Tomo II. Grijley. Lima, 2000, pp. 420-421.

Asimismo, la Sala Civil de la Corte Suprema de la República ha definido a la demanda como el “acto procesal postulatorio que contiene la pretensión procesal, y aun cuando dicho acto requiere como requisito de admisibilidad que el petitorio (objeto de la pretensión) debe comprenderse la determinación clara y concreta de lo que se pide, [...] y como tal, las peticiones que se reclamen deben expresarse en el requisito acotado, ocurre que la demanda (como mero acto de iniciación procesal) y la pretensión principal (como objeto del proceso) constituyen un todo, que deben ser interpretados en conjunto, ya que básicamente esta última categoría procesal se compone de los siguientes elementos: sujetos (actor y demandado), objeto (petitorio) y causa (fundamentación fáctica y jurídica), de ahí que el juzgador debe examinar la existencia de la pretensión desde el contexto de sus elementos afirmados en la demanda a efectos de fallar congruentemente con ella”<sup>648</sup>.

Las definiciones expuestas resultan ser pertinentes debido a que exponen con claridad las notas que caracterizan a la demanda. Como resulta evidente, a través de ella se inicia la etapa postulatoria del proceso constitucional, ya que la mujer discriminada se valdrá de ella para expresar la presunta vulneración o amenaza de agravio en contra de sus derechos fundamentales.

#### **a. Contenido de la demanda**

La mujer que considere haber sido víctima de discriminación podrá interponer una demanda de amparo. Sin embargo, la formulación de dicho escrito deberá ceñirse a los parámetros establecidos en el artículo 42° del Código Procesal Constitucional que desarrolla los datos que deberá de contener la demanda de amparo, los cuales son aplicables de manera supletoria al proceso de amparo.

##### **a.1. Designación del juez ante quien se interpone la demanda**

---

<sup>648</sup> SALA CIVIL DE LA CORTE SUPREMA. Casación N° 379-99-Cono Norte. En TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Diccionario de Jurisprudencia Civil”. Grijley. Lima, 2008, p. 233.



El artículo 51° del Código establece que la mujer que ha sido presuntamente víctima de discriminación podrá interponer la demanda ante el juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho o ante el juez civil o mixto de la localidad donde se constituye el domicilio principal del presunto afectado.

#### **a.2. Nombre, identidad y domicilio procesal del demandante**

Sin perjuicio de que la mujer sea la víctima de conductas discriminadoras, debe precisarse que existe una pluralidad de sujetos que pueden interponer la demanda de amparo. Así tenemos que tanto la afectada, como cualquier persona natural y la Defensora del Pueblo – de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 67° del CPCo.– podrán interponer la demanda de amparo.

No obstante, el Código exige que quien interponga la demanda exprese su nombre – nombres y apellidos– y su identidad –es decir, que incorpore un documento del cual se desprenda de manera fehaciente el nombre del que dice ser titular.

De igual manera, se exige que se consigne el domicilio procesal de la demandante, a efectos de acreditar que la demanda ha sido interpuesta ante uno de los jueces consignados en el artículo 51° del Código, es decir, ante el juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho o ante el juez civil o mixto de la localidad donde se constituye el domicilio principal del presunto afectado.

#### **a.3. Nombre y domicilio del demandado**

El artículo 42° establece que en la demanda se consigne el nombre y domicilio del presunto agresor, para que sea notificado válidamente y para que pueda ejercer plenamente su derecho de defensa a través del escrito en el que contesta la demanda y deduce excepciones y defensas previas, dirigidas a desvirtuar los alegados del demandante.

#### **a.4. Narración de los hechos**

El inciso 4 del artículo 42° establece que la presunta víctima de discriminación deberá de enunciar los hechos que configuraron la vulneración de su derecho a la igualdad.

El fundamento de este requisito lo encontramos en que a través de la narración, la presunta afectada expondrá los hechos que serán evaluados por el juzgador de manera conjunta con los elementos probatorios incorporados, lo cual será útil en la medida que de la narración no se desprendan hechos cuya comprobación está supeditada a la actuación compleja de elementos probatorios, pues de suceder tal situación, la pretensión deberá de ser tramitada en el proceso contencioso administrativo.

#### **a.5. Exposición sobre la vulneración del derecho a la igualdad**

A través del escrito de demanda, la recurrente deberá valerse de los artículos 2° inciso 1 de la Constitución Política y 37° inciso 1 del CPCo., a efectos de contrastar los hechos con los dispositivos legales que consagran el derecho a la igualdad.

#### **a.6. El petitorio**

El inciso 6 del artículo 42° establece que el petitorio de la demanda debe de expresar la pretensión de manera clara y concreta. Consideramos que tales requisitos se materializan cuando la recurrente expone los hechos que generan la discriminación.

#### **a.7. Firma del demandante y de su abogado**

El inciso 7 del artículo 42° del CPCo. establece que la demanda deberá de ser firmada por la demandante –o su representante o apoderado– y por el abogado que la patrocina. Asimismo, precisa que “en ningún caso la demanda podrá ser rechazada por el personal administrativo del juzgado”.

La concurrencia de ambas firmas se sustenta en que la agraviada debe de expresar su consentimiento para recurrir a un proceso constitucional a través de la asesoría de un abogado que deberá de firmar el escrito en aras de garantizar que la recurrencia a dicho proceso se sustente en el estricto amparo de los parámetros exigidos por este proceso.

#### **a.8. Anexos**

La recurrente podrá incorporar elementos probatorios que cumplan con los cánones expresados en el artículo 9° del Código. Nos referimos a elementos probatorios que no requieran de actuación compleja, ya que, como se sabe, los procesos constitucionales carecen de estación probatoria. Sin embargo, podrán incorporarse elementos probatorios de los cuales emane una verdad fehaciente de la que se desprenda la amenaza o vulneración de los derechos alegados.

De acuerdo al artículo IX del CPCo., el Código Procesal Civil (CPC) puede ser aplicado supletoriamente a los procesos constitucionales siempre y cuando su aplicación no desvirtúe los fines de estos procesos. Por tal razón, los anexos a ser incorporados a la demanda de amparo serán la mayoría de los contemplados en el artículo 425°, tales como la copia legible del DNI de la demandante o de su representante o apoderado, el documento que contiene el poder, la prueba que acredite la representación procesal de la recurrente y los medios probatorios destinados a sustentar su petitorio –siempre y cuando no desvirtúen el contenido del artículo 9° del CPCo.

#### **3.5.5.1.3. Competencia para conocer del proceso**

El artículo 51° del CPCo. ha delimitado la competencia jurisdiccional para la interposición de la demanda de amparo. La mujer que considere haber sido víctima de discriminación tendrá dos alternativas para la interposición de su demanda de amparo. Sin perjuicio de lo que se mencionará a continuación, debemos dejar en claro que ambas alternativas son excluyentes, es decir, que el presunto afectado solo deberá de acudir a una de ellas.

#### **a. Juez civil o mixto de la localidad donde se afectó el derecho**

Esta alternativa, propuesta por la modificación realizada a través de la Ley N° 28946, resulta coherente debido a que resulta lógico atribuirle competencia al juzgador de la misma localidad donde determinada persona afectó el derecho a la igualdad de la mujer. En tal sentido, una vez que el afectado haya cumplido con los requisitos exigidos por el Título V del Código para la procedencia de la demanda, podrá interponerla ante el juez de la localidad donde se vulneró su derecho a la igualdad, en aras de reparar el agravio a su derecho.

#### **b. Juez civil o mixto de la localidad del domicilio del afectado**

Por otro lado, el CPCo. ofrece a la presunta afectada otra alternativa de la cual se valdrá para la interposición de la demanda de amparo. En caso que la víctima de discriminación considere que no resultará provechosa la interposición de su demanda ante el juez de la localidad donde se afectó el derecho (en la medida que exista una serie de factores que así lo determinen) tendrá abierta la posibilidad de interponerla ante el juez de la localidad en la que domicilia.

#### **3.5.5.1.4. Contestación**

La contestación de la demanda es el acto procesal a través del cual el emplazado ejerce su derecho de defensa, consagrado en el artículo 139° inciso 14 de la Constitución, puesto que “es un elemento (...) clave de la configuración de la tutela procesal efectiva, puesto que un proceso no puede considerarse como respetuoso de la persona si no se le permite la posibilidad de presentar sus argumentos, estrategias y elementos de respaldo jurídico necesarios. Así, la defensa también es un derecho-regla de la tutela procesal efectiva”<sup>649</sup>.

---

<sup>649</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 06712-2005-HC, Fundamento Jurídico N° 31.

Una vez que la demanda de amparo es admitida a trámite, el juez corre traslado de ella al emplazado, concediéndole el plazo de cinco días para que conteste la demanda. Cabe precisar que en caso que no se deduzcan excepciones o defensas previas y si es que no se solicita informe oral, el juez expedirá sentencia dentro de los cinco días siguientes a la contestación de la demanda; en el supuesto de solicitarse informe oral y de no deducirse excepciones y defensas previas, el juez expedirá sentencia dentro de los cinco días siguientes a la realización del referido informe.

#### **a. Contenido de la contestación**

Aplicando supletoriamente el artículo 442° del Código Procesal Civil (CPC), vemos que el emplazado deberá de cumplir con ciertos requisitos en el escrito de contestación de la demanda.

##### **a.1. Observancia de los requisitos previstos para la demanda**

Este requisito, contenido en el inciso 1 del artículo 442° del CPC, debe ser comprendido a la luz del proceso de amparo en que el demandado deberá de contestar la demanda en el término de los cinco días siguientes a la notificación de la demanda, conforme se desprende del artículo 53° del CPCo.

A través de la contestación de la demanda, el emplazado ejerce su derecho de defensa, el cual deberá materializarse a través de la exposición de argumentos que nieguen las afirmaciones expuestas por el demandante, con el propósito de causar certeza en el juzgador de que no se ha producido la conducta discriminatoria alegada por la recurrente.

Una vez que el emplazado se ha pronunciado sobre los hechos expuestos en la demanda de amparo, deberá de exponer los hechos en que funda su defensa en forma precisa, ordenada y clara, los cuales deberán de ser conjugados con los respectivos argumentos de derecho, a través de los cuales se orientará a constatar la inexistencia de obligación en el caso en cuestión.

## **a.2. Ofrecimiento de elementos probatorios**

Cabe precisar que en el proceso de amparo no pueden incorporarse elementos probatorios complejos, sino aquellos de los cuales brote una verdad evidente. Sin perjuicio de ello, el demandado podrá presentar elementos probatorios que no requieran de actuación compleja y de los que se desprenda de manera fehaciente la no producción de conductas discriminadoras en contra de la demandante.

A su vez, el emplazado tiene el derecho de formular excepciones y defensas previas. Sobre el particular, Couture, considera que la excepción es “el poder jurídico del demandado de oponerse a la pretensión que el actor ha aducido ante los órganos de la jurisdicción”<sup>650</sup>. Similar opinión la encontramos en Carrión Lugo, quien considera que la excepción es “toda defensa que el demandado opone contra la demanda del actor, unas veces cuestionando el aspecto formal del proceso en el que se hacen valer las pretensiones, es decir, impugnando la regularidad del procedimiento, y otras veces cuestionando el fondo mismo de la pretensión procesal, es decir, negando los hechos en que se apoya la pretensión o desconociendo el derecho que de ellos el actor pretende derivar”<sup>651</sup>.

Debe señalarse que además de las excepciones, el emplazado podrá deducir defensas previas, las cuales se tramitan de la misma manera que las excepciones dentro del proceso de amparo. Los alcances que sobre ellas pueden darse son las mismas que en su vertiente procesal civil, recordando a Guzmán Espiche al mencionar que “su fundamento (...) es de índole sustancial. [L]a objeción formulada por el demandado mediante una defensa previa se hace valer procesalmente de ahí que sean mencionadas y reguladas en sus efectos por el código adjetivo [civil], o en todo caso en leyes especiales de naturaleza material”<sup>652</sup>, como es el caso del CPCo., al permitir su interposición en lo dispuesto por el artículo 10°.

---

<sup>650</sup> COUTURE, Eduardo. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”. Desalma. Buenos Aires, 1973, p. 89.

<sup>651</sup> CARRIÓN LUGO, Jorge. “Tratado de Derecho Procesal Civil”. Tomo II. Op. cit., p. 465.

<sup>652</sup> GUZMÁN ESPICHE, Luis. “Las defensas previas en el Código Procesal Civil Peruano”. En: *Revista Jurídica Magistri Et Doctores*. N° 1. Lima, 1995, p. 79.

Tanto las excepciones como las defensas previas serán incorporadas en el escrito de contestación de demanda, que será trasladado por el juez al demandante para que las absuelva dentro del plazo de dos días contados desde el día siguiente de su notificación.

No obstante, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por la actual regulación de las excepciones y defensas previas en el proceso de amparo a través de las modificaciones incorporadas por la Ley N° 28946, pues la extinta tramitación de las excepciones y de las defensas previas –que permitía su evaluación al momento de sentenciar– se justificaba, en primer lugar, en la naturaleza expeditiva del proceso de amparo, lo que conducía, en segundo lugar, a la resolución de estos mecanismos de defensa en la sentencia, debido a que se daba prioridad a la presunta afectación del derecho a la igualdad denunciada a través del proceso de amparo, antes que a mecanismos de defensa que, si bien son manifestaciones del derecho de defensa, podían bien ser resueltos al momento de sentenciar, declarando improcedente la demanda en caso de amparar alguno de los mecanismos propuestos.

#### **3.5.5.1.5. Saneamiento procesal**

Sagástegui señala que “a fin de que la relación procesal se establezca correctamente, [se] trata de evitar las nulidades y que el proceso en general cuente con el menor número de actos procesales. Esto se consigue mediante el denominado despacho saneador, audiencia de saneamiento o simplemente saneamiento procesal”<sup>653</sup>. Sin embargo, consideramos que la existencia del auto de saneamiento procesal resquebraja la estructura del proceso de amparo, ya que las modificaciones incorporadas a través de la Ley N° 28946 se han sustentado en la regulación establecida en el CPC, sin tomar en consideración el mandato contenido en el artículo IX del CPCo.: “en caso de vacío o defecto de la presente ley, serán de aplicación supletoria los Códigos Procesales afines a la materia discutida, **siempre que no contradigan los fines de los procesos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo**”.

---

<sup>653</sup> SAGÁSTEGUI URTEAGA, Luis. “Exégesis y sistemática del Código Procesal Civil”. Volumen II. Op. cit., p. 53.

De acuerdo al modificado artículo 53°, de ampararse las excepciones de incompetencia, litispendencia, cosa juzgada o de caducidad, el juez anulará lo actuado en el proceso de amparo y dará por concluido el proceso, teniendo el demandante la posibilidad de apelar con efecto suspensivo tal resolución, mientras que la apelación de la resolución que desestima la excepción o la defensa previa es concedida sin efecto suspensivo. La anterior redacción del artículo 53° disponía que “si se presentan excepciones, defensas previas o pedidos de nulidad del auto admisorio, el Juez dará traslado al demandante por el plazo de dos días. Con la absolución o vencido el plazo para hacerlo, quedan los autos expeditos para ser sentenciados”.

Desde la perspectiva del legislador, las modificaciones operadas se justifican en la necesidad de “modificar el artículo 10° del [Código Procesal Constitucional], a fin de establecer que las excepciones se resolverán en el saneamiento procesal y no (...) [deberán] esperar a la sentencia, que como lo demuestra la práctica judicial y la carga que afronta demora largos meses, en los cuales Jueces incompetentes por razón del territorio retienen el proceso e incluso dictan audaces medidas cautelares”<sup>654</sup>. De acuerdo a tal propuesta, la finalidad sería la maximización de los derechos fundamentales, a través de la evaluación de las excepciones y de las defensas previas en el auto de saneamiento procesal, pero cabe preguntarse si tal estación contraviene la esencia del proceso de amparo.

Como se sabe, los procesos constitucionales son de naturaleza expeditiva, es decir, de tramitación breve, en atención a las especiales características de los derechos en conflicto. Esta naturaleza, inherente de todo proceso constitucional, no es más que manifestación del principio de economía procesal, pues “[p]or su propia naturaleza, los procesos constitucionales deben llevarse a cabo en el menor tiempo posible. Siempre es una de las partes la que tiene urgencia en la solución del conflicto mientras la otra desea que se alargue el mayor tiempo posible”<sup>655</sup>. Se supone entonces que ante la urgente tutela

---

<sup>654</sup> Exposición de Motivos del Proyecto de Ley N° 747/2006-PE que originó la modificación de diversos artículos del Código Procesal Constitucional.

<sup>655</sup> MESÍA RAMÍREZ, Carlos. “Exégesis del Código Procesal Constitucional”. Gaceta Jurídica. 2ª edición. Lima, 2005, p. 67.



inmediata que requiere la presunta afectación del derecho a la igualdad, el sistema judicial debe ofrecer una respuesta rápida expresada en la eficaz administración de justicia.

Al haber establecido un auto de saneamiento procesal, se instaura una estación que se encarga de dilatar en el tiempo la resolución de las demandas propuestas, pues si bien la estimación de las excepciones y de las defensas previas pueden ser apeladas con efecto suspensivo, la pérdida innecesaria de tiempo como consecuencia de tal procedimiento acarrea el latente peligro del menoscabo irreversible de los derechos fundamentales recurridos. En tal sentido, por más que la demanda resulte finalmente declarada fundada, de nada valdrá al recurrente contar con una sentencia que reconozca el cese de los efectos del acto agresor si es que como consecuencia del accionar de la administración de justicia, el proceso se dilató innecesariamente, conduciendo al perjuicio irreparable del derecho a la igualdad que debió de ser tutelado a través del proceso de amparo.

Sin perjuicio de considerar que el trámite instaurado por la mencionada modificación resquebraja la naturaleza expeditiva del proceso de amparo, debemos exponer el trámite previsto en la vigente redacción del artículo 53° del CPCo. Dicho dispositivo establece que transcurrido el plazo para que el demandante absuelva el escrito de contestación, las excepciones y las defensas previas, se dictará el auto de saneamiento procesal.

En el supuesto que se estimen las excepciones de incompetencia, litispendencia, cosa juzgada y caducidad, el juez anulará lo actuado y dará por concluido el proceso. Frente a esta situación, la demandante interpondrá recurso de apelación dentro de los tres días siguientes de notificada con la resolución que estima tales excepciones; en caso que se conceda la apelación, esta será con efecto suspensivo. En el supuesto que se desestimen las excepciones deducidas, la autoridad demandada apelará tal resolución; en caso que sea concedida, esta será sin efecto suspensivo. En ambos supuestos, la apelación subirá a sala: si se estiman las excepciones, se declarará la nulidad de lo actuado, con lo cual concluirá el proceso; situación distinta se producirá si es que se desestiman las excepciones, ya que ello implicará la continuidad del proceso.

### 3.5.5.1.6. Sentencia de primera instancia

Una vez que el superior jerárquico se haya pronunciado sobre las excepciones, el juez se encontrará facultado para expedir sentencia. Sagástegui advierte que “la sentencia tiene relación con la norma del derecho objetivo y no solo significa una aplicación fría de la ley positiva al caso particular, sino que constituye una norma individual, una creación del Derecho que realiza el juez, permitiendo que las normas del ordenamiento jurídico sean necesarias y esenciales para aplicar el caso que debe resolver”<sup>656</sup>.

La sentencia que se pronuncie sobre la pretensión expuesta a través del proceso de amparo podrá ser estimatoria o desestimatoria. El juez declarará fundada la demanda cuando constate que se ha producido una conducta discriminadora por parte del emplazado en contra de la recurrente.

Independientemente del contenido de la sentencia, esta debe tutelar el derecho a la motivación de resoluciones judiciales, contemplado en el inciso 5 del artículo 139° de la Constitución Política, a través del resguardo de los elementos que componen su contenido y que han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional a través de la siguiente glosa:

**“a) Fundamentación jurídica**, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación y justificación de por que tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas;

**b) Congruencia entre lo pedido y lo resuelto**, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y

**c) Que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada**, aun si esta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión”<sup>657</sup>.

---

<sup>656</sup> SAGÁSTEGUI URTEAGA, Luis. “Exégesis y sistemática del Código Procesal Civil”. Volumen I. Op. cit., p. 290.

<sup>657</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 04348-2005-AA, Fundamento Jurídico N° 2.

### **3.5.5.1.7. Apelación de sentencia**

Si alguna o ambas partes no están conformes con el pronunciamiento expedido por el juez civil o mixto, podrá interponer recurso de apelación dentro del tercer día de haber sido notificada con la sentencia.

La apelación de la sentencia expedida en el proceso de amparo constituye una manifestación del ejercicio de defensa, consagrado en el inciso 14 del artículo 139° de la Constitución, el cual “se proyecta a todas las etapas y articulaciones que pudiera comprender la articulación del proceso, las que indudablemente abarcan, por lo que importa resaltar, cuando se hace uso de los recursos”<sup>658</sup>. Sobre la base de este argumento, el Tribunal considera que “el derecho a los recursos forma parte, así, del contenido esencial del derecho a la pluralidad de instancias, no solo a título de una garantía institucional que posibilita su ejercicio, sino también como un elemento necesario e impostergable del contenido del debido proceso, en la medida en que promueve la revisión, por un superior jerárquico, de los errores de quienes se encuentran autorizaciones, en nombre del pueblo soberano, a administrar justicia”<sup>659</sup>.

El escrito de apelación de sentencia contendrá los errores advertidos en la sentencia expedida por el juez de primera instancia. Tras haber identificado el error, se deberá de desarrollar la fundamentación jurídica que acredite la pretensión de la parte, a efectos de que la sala evalúe adecuadamente estos argumentos y resuelva conforme a Derecho. Cabe señalar que si la apelación es admitida a trámite, el expediente será elevado a la sala dentro de los tres días siguientes a la notificación de su concesión.

### **3.5.5.1.8. Sentencia de segunda instancia**

El artículo 58° del CPCo. establece el trámite que seguirá el proceso de amparo en segunda instancia. Señala que “el superior concederá tres días al apelante para que exprese agravios.

---

<sup>658</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 01231-2002-HC, Fundamento Jurídico N° 2.

<sup>659</sup> Loc. cit.

Recibida la expresión de agravios o en su rebeldía, concederá traslado por tres días, fijando día y hora para la vista de la causa, en la misma resolución”. Agrega que “dentro de los tres días siguientes de recibida la notificación, las partes podrán solicitar que sus abogados informen oralmente a la vista de la causa. El superior expedirá sentencia dentro del plazo de cinco días posteriores a la vista de la causa, bajo responsabilidad”.

Al emitir pronunciamiento, los vocales deberán de tomar en consideración los argumentos expuestos por las partes en relación a la pretensión que originó el proceso de amparo y en cuanto a la sentencia de primera instancia, a efectos de emitir una sentencia acorde a Derecho. Tal objetivo se asegurará a través de una sentencia congruente, es decir, “aquella que adecua las peticiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito y la parte dispositiva de la resolución judicial”<sup>660</sup> y motivada, es decir, que exprese “las razones que el órgano jurisdiccional ha tenido en cuenta para decidir en el sentido en que lo haya hecho”<sup>661</sup>.

Asimismo, como apunta Castillo Córdova, “es de importancia que la sala sea bastante estricta en la exigencia de amparo de los plazos y pueda emitir una sentencia en un tiempo que no desnaturalice el carácter sumario del proceso”<sup>662</sup> de amparo.

#### **3.5.5.1.9. Recurso de agravio constitucional**

El recurso de agravio constitucional (RAC) está consagrado en el artículo 18° del CPCo., disponiendo que “contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada la resolución. Concedido el recurso, el Presidente de la Sala remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de tres días, más el término de la distancia bajo responsabilidad”.

---

<sup>660</sup> GÓMEZ POMAR, Fernando. “Hacer pagar al mensajero”. En *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*. N° 1. Universitat de Barcelona. Barcelona, 2003, p. 11.

<sup>661</sup> Loc. cit.

<sup>662</sup> CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “Comentarios al Código Procesal Constitucional”. Tomo II. Palestra. Lima, 2006, p. 957.

Como señala el mencionado artículo, el RAC es un recurso que, en principio, puede ser interpuesto por la demandante contra la resolución desestimatoria expedida por la segunda instancia en el proceso de amparo instaurado en contra de aquella persona que presuntamente haya cometido un acto discriminatorio.

El objeto de este recurso es que el Tribunal Constitucional conozca de la pretensión incorporada en el proceso de amparo y que no ha sido objeto de tutela en la resolución expedida en segunda instancia, por lo que se hace necesario que el órgano colegiado evalúe la renuencia o la omisión del funcionario público en la ejecución de un mandato derivado de una norma o de un acto administrativo.

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que “en el sistema judicial los recursos buscan a corto plazo una revisión de las cuestiones contenidas en una resolución, que puede ser firme o no, dependiendo de la naturaleza del recurso y la etapa procesal en que éste se encuentre, así como un examen de los trámites seguidos por el juzgador para su emisión. La impugnación tiende a corregir la falibilidad del juzgador y, de esta manera, lograr la eficiencia del acto jurisdiccional”<sup>663</sup>.

Ello ha servido para que dicho contenido sea “*traspolado* a una categoría como la del RAC, pero siempre tomando en cuenta lo que significa su introducción a los procesos constitucionales de libertad. En este esquema, si bien es cierto que un sistema procesal en el que no se permitiese a cada parte –en el caso de los procesos constitucionales, demandante o demandado–, recurrir las resoluciones judiciales, y así resolver las contiendas con tremenda rapidez, sería poco menos que inconcebible o injusto, no lo es menos que este servicio podría comprometer drásticamente el propio contenido de las resoluciones, sacrificando la justicia de la decisión a su prontitud”<sup>664</sup>.

---

<sup>663</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02877-2005-HC, Fundamento Jurídico N° 9.

<sup>664</sup> Loc. cit.

Ello nos permite afirmar que el objeto del RAC es que el Tribunal Constitucional evalúe los errores incurridos por las instancias previas en la evaluación de la demanda de amparo interpuesta por el afectado como consecuencia de la omisión o de la renuencia de un funcionario público en la ejecución de un mandato derivado de una norma o de un acto administrativo, a efectos de tutelar el derecho fundamental vulnerado como consecuencia de esta inconducta funcional.

Por tal motivo, el Tribunal Constitucional fundamentó el objeto del RAC al señalar que “la perturbación de un derecho fundamental o de una norma constitucional, a través de su amenaza o directa lesividad, altera el ordenamiento jurídico constitucional; para que vuelva a funcionar de modo armónico, es necesario reponer la situación a su estado anterior al de la vulneración o amenaza del orden constitucional. La reposición al correcto estado anterior puede lograrse a través del RAC [recurso de agravio constitucional]. Allí radica su importancia”<sup>665</sup>.

#### **3.5.5.1.10. Recurso de queja**

La queja es aquel recurso interpuesto ante el Tribunal en contra de la resolución denegatoria del RAC, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución, conforme se desprende del artículo 19° del CPCo. Este recurso es interpuesto en ejercicio del derecho de defensa, consagrado en el artículo 139° inciso 14 de la Constitución, debido a que frente a la injusta denegatoria del RAC, la parte queda en estado de indefensión, concebida por el Tribunal Constitucional como aquel estado “que se concibe constitucionalmente como la negación de la tutela judicial [el cual] ha de ser algo real, efectivo y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su víctima en una situación concreta que la produzca un perjuicio, sin que le sea equiparable cualquier expectativa de un peligro o riesgo”<sup>666</sup>.

---

<sup>665</sup> Ibidem, Fundamento Jurídico N° 5.

<sup>666</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 06712-2005-HC, Fundamento Jurídico N° 32.

Cabe señalar que al conocer este recurso, el Tribunal Constitucional está legitimado “para revisar las posibles irregularidades que pudieran conocerse al expedir el auto sobre la procedencia del recurso de agravio constitucional, no siendo *prima facie* de su competencia, dentro del mismo recurso, examinar las resoluciones emitidas en etapas previas ni posteriores a las antes señalada”<sup>667</sup>, pues su objeto consiste en “examinar que la denegatoria de éste último sea acorde al marco constitucional y legal vigente”<sup>668</sup>.

El recurso de queja debe de exponer la deficiente motivación contenida en la resolución que deniega el RAC, escrito al que deberá de anexarse la resolución recurrida y el RAC, a efectos de que el Tribunal Constitucional evalúe la pertinencia de dicho recurso, el que de ser estimado determinará que el colegiado evalúe la idoneidad del RAC interpuesto, conforme expresa el artículo 19° del CPCo.

#### **3.5.5.1.11. Sentencia del Tribunal Constitucional**

El proceso de amparo puede llegar a conocimiento del Tribunal Constitucional, órgano que deberá de expedir sentencia dentro de los treinta días siguientes de la recepción del expediente, conforme establece el artículo 20° del CPCo., la que de ser declarada fundada determinará que la declaración de la conducta como discriminadora y el cese de dicho agravio en contra de la recurrente.

Si bien a través de este acto concluye el proceso de amparo, consideramos necesario ir más allá de esta cuestión meramente formal y definir a la sentencia del Tribunal Constitucional como aquella que permite “cautelar la supremacía jerárquica de la Constitución y la vigencia plena de los derechos fundamentales de la persona. Por ende, rebasan con largueza la satisfacción de un interés particular o de beneficio de un grupo, ya que teleológicamente resguardan los principios y valores contenidos en la Constitución, que, por tales alcanzan a la totalidad de los miembros de la colectividad política”<sup>669</sup>.

---

<sup>667</sup> Resolución del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00168-2007-Q, Fundamento Jurídico N° 4.

<sup>668</sup> *Ibidem*, Fundamento Jurídico N° 3.

<sup>669</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00024-2003-AI, párrafo 3.

Tal definición nos permite establecer la función pacificadora de la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el proceso de amparo, ya que –como ha señalado el colegiado– “la función pacificadora de la jurisdicción constitucional obliga a este a comprender que nunca la pretendida corrección técnico-jurídica de una sentencia es capaz de legitimarla constitucionalmente, si de ella deriva la inseguridad, la incertidumbre y el caso social. De allí que sea deber, y no mera facultad del Tribunal Constitucional, ponderar las consecuencias de sus resoluciones, de modo tal que, sin perjuicio de aplicar la técnica y la metodología interpretativa que resulte conveniente a la litis planteada, logre verdaderamente pacificar la relación entre las partes, y contribuir a la certidumbre jurídico-constitucional e institucional de la sociedad toda”.<sup>670</sup>

#### **3.5.5.1.12. Ejecución de sentencia**

Tras haberse estimado la pretensión, el Tribunal Constitucional devolverá los actuados al **juez de primera instancia**, a efectos de que se ejecute la sentencia en los términos establecidos por el colegiado (artículo 22°). En caso de que el obligado desconozca el mandato del Tribunal Constitucional, el juez podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e incluso disponer la destitución del responsable.

El primer requisito para la ejecución de una sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en un proceso de amparo lo encontramos en su calidad de **cosa juzgada**, dentro de los parámetros establecidos por el artículo 139° inciso 13 de la Constitución Política. Ello “garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos

---

<sup>670</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00005-2005-CC, Fundamento Jurídico N° 59.



de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó”<sup>671</sup>.

La sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en un proceso de amparo es irrecurrible, debido a que existe la presunción de que sus pronunciamientos no pueden generar vulneración sobre los derechos fundamentales, puesto que el colegiado se erige como supremo intérprete de la Constitución, argumento harto discutible en la medida que no está exento de la posibilidad de cometer errores.

#### **3.5.5.1.13. Represión de actos homogéneos**

De lo expuesto en el punto anterior ha quedado claramente establecido que la ejecución de las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional constituye una manifestación de la tutela procesal efectiva, ya que, como ha señalado el colegiado, “supone la posibilidad de que la tutela ofrecida por el juez constitucional opere generando consecuencias fácticas en el ámbito de los derechos fundamentales de las personas. De ahí que sea acertado afirmar que la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela. Y es que la pronta y debida ejecución de las sentencias permite además dar efectividad al Estado democrático de Derecho, que implica, entre otras cosas, la sujeción de los ciudadanos y de la administración pública al ordenamiento jurídico y a las decisiones que adopta la jurisdicción, no sólo juzgando sino también ejecutando lo juzgado. Así pues, será inconstitucional todo aquel acto que prorrogue en forma indebida e indefinida el amparo de las sentencias”<sup>672</sup>.

Sin embargo, la experiencia profesional nos ha colocado frente a un sinnúmero de casos en los cuales la expedición de una sentencia estimatoria no ha encontrado un correlato en la realidad debido a la serie de circunstancias que imposibilitan su ejecución. Esta situación revela la presencia de actos homogéneos a los declarados lesivos en el proceso

---

<sup>671</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 04587-2004-AA, Fundamento Jurídico N° 38.

<sup>672</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 04909-2007-HC, Fundamento Jurídico N° 7.

constitucional instaurado y que restan eficacia a la sentencia expedida por el colegiado en la medida que resultan inejecutables mientras subsista el impedimento, expresado en la renuencia o, incluso, en la imposibilidad del demandado de dar amparo al mandato expedido por el Tribunal Constitucional.

Sobre la base de la constatación de su existencia, es necesario determinar cuándo nos encontramos frente a un acto homogéneo. Para ello, el colegiado ha considerado que “deberá prestar atención a determinados presupuestos, tales como la identidad material del acto considerado lesivo en la sentencia y el derecho lesionado con el acto sobreviniente. En ese sentido, el acto sobreviniente, que puede ser una acción o una omisión, debe tener la misma consecuencia gravosa en la esfera subjetiva de la persona, es decir, ocasionar la misma situación jurídica del acto lesivo originario”<sup>673</sup>.

Ello implica que el nuevo acto u omisión sea similar al que causó el agravio denunciado en el proceso constitucional, a efectos de que a partir de su denuncia pueda ser reprimido para dar cabal amparo al pronunciamiento del colegiado que resguarda el derecho a la igualdad de la recurrente, ya que mediante ella “se busca evitar que los justiciables se vean obligados a interponer una nueva demanda de amparo, en caso se configure un acto (u omisión) sustancialmente homogéneo al declarado lesivo de derechos fundamentales en un proceso de amparo. Asimismo, se pretende asegurar la plena eficacia de la cosa juzgada constitucional”<sup>674</sup>.

Cabe precisar que la represión de actos homogéneos no se dará a través de la interposición de una nueva demanda constitucional, ya que ello implicaría nuevamente recurrir a instancias judiciales para obtener un pronunciamiento que previamente ya había sido obtenido y que constataba la existencia de una situación ilegal semejante. Por ello es que el Tribunal sustenta que “carece de objeto interponer una nueva acción de tutela constitucional [...] sobre la base de actos sobrevinientes y sustancialmente homogéneos a los declarados lesivos en [otro] proceso [constitucional], por la sencilla y elemental razón

---

<sup>673</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 05033-2006-AA, Fundamento Jurídico Nº 4.

<sup>674</sup> Ibidem, Fundamento Jurídico Nº 5.

de que el juez constitucional competente para conocer de estos hechos es el juez de ejecución (el juez que conoció la demanda en primera instancia), y no un nuevo juez constitucional por vía de acción, ello a la luz de lo dispuesto por el artículo [60°] del Código Procesal Constitucional”<sup>675</sup>.

En efecto, agrega el colegiado que “el Código Procesal Constitucional, regula la etapa de ejecución del proceso bajo el epígrafe de ‘actuación de sentencia’ (artículo 22°). En él se establece que la sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa [...] por el juez de la demanda. En ese sentido, el ‘juez de ejecución’ viene a ser el juez que admitió la demanda y la resolvió en primer grado [ya que este es] el que con especial atención a la naturaleza del derecho fundamental tutelado por este tipo de proceso constitucional debe adoptar todas las medidas necesarias a fin que el acto declarado lesivo no vuelva a ocurrir, y que de ser el caso [estando debidamente acreditado], debe actuar de manera inmediata a efectos de que los justiciables sean debidamente repuestos en sus derechos constitucionales. En cualquier caso, la medida adoptada debe estar debidamente sustentada y motivada”<sup>676</sup>.

Frente a esta situación, el artículo 60° prevé que “si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un proceso de amparo [y de amparo], podrá ser denunciado por la parte interesada ante el juez de ejecución. Efectuado el reclamo, el juez resolverá este con previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. La decisión que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del amparo [y del proceso de amparo], incorporando y ordenando la represión del acto represivo sobreviniente”.

### **3.5.5.2. Medida cautelar**

---

<sup>675</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 04909-2007-HC, Fundamento Jurídico N° 11.

<sup>676</sup> Loc. cit.

El artículo 15° del CPCo. establece la posibilidad de que aquella mujer que considere haber sido víctima de discriminación interponga la respectiva medida cautelar dentro de un proceso de amparo.

#### **3.5.5.2.1. Trámite de la medida cautelar**

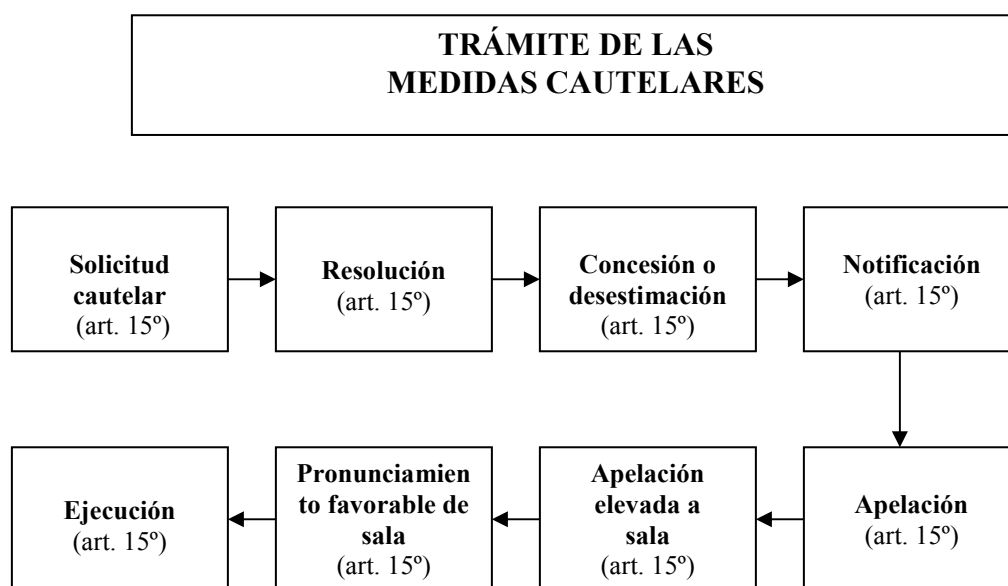
La medida cautelar será interpuesta de manera simultánea o posterior a la demanda de amparo dirigida a tutelar la igualdad de la mujer que ha sido víctima de discriminación. En tal sentido, al verificarse que el pedido cautelar se encuentra vinculado al de la demanda de amparo previamente interpuesta por la recurrente y a que dicho pedido expresa la apariencia del derecho, el peligro en la demora y la adecuación del pedido en relación al proceso que se ha instaurado, el juez correrá traslado de ella al emplazado por el término de tres días, acompañando copia certificada de la demanda y sus recaudos, así como de la resolución que la da por admitida, tramitando el incidente por cuerda separada, con intervención del Ministerio Público. Cabe precisar que, conforme expresa el tercer párrafo del artículo 15° del CPCo., con la contestación expresa o ficta, el juez resolverá dentro del plazo de tres días, bajo responsabilidad.

La resolución que se pronuncie sobre la medida cautelar será notificada a ambas partes; en caso de ser concedida lo será total o parcialmente y expresará los actos que deberán de ser ejecutados por el presunto infractor de la cláusula de igualdad. No obstante, existe la posibilidad que se desestime el pedido cautelar debido a que no se ha acreditado de manera indubitable la apariencia del derecho, el peligro en la demora y la adecuación del pedido en relación al proceso que se ha instaurado.

El artículo 15° del CPCo. expresa que en caso que alguna de las partes no se encuentre conforme con el contenido de la resolución que se pronuncia sobre el pedido cautelar, podrá interponer recurso de apelación dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. Así, pues, en caso que la resolución apelada haya concedido parcialmente el pedido cautelar, tanto la recurrente como el demandado podrán apelarla, ya que el objeto de la demandante será su concesión total, mientras que del emplazado, la denegatoria de

todos sus extremos. Por otro lado, en caso que la resolución haya concedida el pedido en todos sus extremos, quien la apelará será el emplazado, a fin de evitar que se ejecute el mandato contenido en la norma. De igual manera, en caso que la resolución desestime todos los extremos del pedido, quien la apelará será la recurrente, debido a que la inobservancia del juzgador respecto a los requisitos de apariencia del derecho, peligro en la demora y adecuación del pedido en relación al proceso que se ha instaurado le generan un agravio a su derecho a la igualdad.

De concederse la apelación, esta será sin efecto suspensivo, salvo en el caso de resoluciones de medidas cautelares que declaren la inaplicación de normas legales autoaplicativas, en cuyo caso la apelación es con efecto suspensivo. Cabe precisar que concluye el procedimiento con la resolución que se pronuncia sobre la apelación formulada. En caso de ser estimado el pedido a favor del demandante, la medida continuará hasta el término del proceso; caso contrario, deberá de aguardar hasta la expedición de la sentencia con la que concluye el proceso y en la que se reconoce la renuencia en la ejecución del mandato.



#### 3.5.5.2.2. Requisitos

Sobre los requisitos, el Código señala que deberán de concurrir tres requisitos como son la apariencia del derecho, el peligro en la demora y que el pedido sea adecuado para garantizar la eficacia de la pretensión. Tales requisitos se garantizarán siempre y cuando se cumplan con los siguientes presupuestos:

#### **a. Apariencia del derecho**

En el proceso de amparo, la apariencia del derecho se manifiesta a través de la existencia de una conducta u omisión de la que se desprenda la configuración de la discriminación ejercida en contra de la recurrente y que quebranten las cláusulas contenidas en los artículos 2º inciso 1 de la Constitución y 37º inciso 1 del CPCo.

#### **b. Peligro en la demora**

La estimación de la demanda no garantiza la reparación del daño infringido en contra de la recurrente en el ejercicio de su derecho a la igualdad, pues puede darse el supuesto que aun cuando se ha estimado la pretensión, su ejecución sea imposible en la medida que el daño sea irreparable. Para evitar estas circunstancias, el CPCo. hace factible la interposición de la medida cautelar, a fin de evitar que el daño causado por el agresor se torne irreparable. Por ello, quien interponga una medida cautelar deberá de acreditar el peligro que corre su pretensión si es que se aguarda hasta la expedición de una sentencia que ostente la calidad de cosa juzgada, por lo que se haría necesaria la concesión de una medida temporal que asegure el derecho mientras se expide la resolución con la que concluye el proceso.

#### **c. Adecuación del pedido**

La adecuación del pedido debe realizarse en relación a la pretensión del proceso principal, es decir, que las acciones a ser ejecutadas a través de la resolución que conceda la medida cautelar se dirijan a alcanzar los mismos objetivos que los planteados por la demanda: nos referimos a la tutela efectiva del derecho a la igualdad de la mujer que recurre al proceso de

amparo. De darse este supuesto, la medida cautelar será admitida a trámite y ejecutada, ya que su objeto se adecuará al de la pretensión contenida en la demanda.

#### **3.5.5.2.3. Interposición de la medida cautelar**

De acuerdo al extremo final del artículo 15° del CPCo., la medida cautelar no podrá ser interpuesta fuera del proceso. Ello obedece, en parte, al trámite sumario de los procesos constitucionales ya que, como es sabido, su objeto es la tutela de derechos fundamentales, lo cual obliga al juzgador a resolver el caso a la brevedad posible.

#### **3.5.5.2.4. Admisibilidad**

Una vez que el juez constate que previo a la presentación de la medida cautelar se ha interpuesto una demanda de amparo con el mismo petitorio, este deberá de verificar si es que el escrito cautelar expresa la apariencia del derecho, el peligro en la demora y la adecuación del pedido en relación al proceso que se ha instaurado y que tiene por objeto el amparo del derecho a la igualdad.

Cabe señalar que la admisibilidad de la medida cautelar no es notificada al funcionario renuente en el amparo del mandato, ya que este podría generar actos que obstaculicen la realización del pedido solicitado por el presunto afectado.

#### **3.5.5.2.5. Pronunciamiento**

Al verificar que el pedido cautelar se encuentra vinculado al de una demanda de amparo previamente interpuesta por el recurrente y a que dicho pedido expresa la apariencia del derecho, el peligro en la demora y la adecuación del pedido en relación al proceso que se ha instaurado, el juez concederá la medida cautelar en la misma resolución que declara su admisibilidad. Dicha concesión será total o parcial y expresará los actos que deberán de ser ejecutados por el presunto infractor de la cláusula de la igualdad. No obstante, existe la posibilidad que se desestime el pedido cautelar debido a que no se ha acreditado de manera

indubitable la apariencia del derecho, el peligro en la demora y la adecuación del pedido en relación al proceso que se ha instaurado.

Una vez expedida la resolución que se pronuncia sobre la admisibilidad y concesión del pedido cautelar, esta será notificadas a las partes a efectos de que tomen conocimiento y realicen las acciones relativas a la defensa de sus intereses.

#### **3.5.5.2.6. Apelación de la resolución**

El artículo 15° del CPCo. expresa que en caso que alguna de las partes no se encuentre conforme con el contenido de la resolución que se pronuncia sobre el pedido cautelar, podrá interponer recurso de apelación dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Así, pues, en caso que la resolución apelada haya concedido parcialmente el pedido cautelar, tanto la recurrente como el demandado podrán apelarla, ya que el objeto de la demandante será su concesión total, mientras que la del demandado, la denegatoria de todos sus extremos. Por otro, en caso que la resolución haya concedida el pedido en todos sus extremos, quien la apelará será el emplazado, a fin de evitar que se resguarde el derecho a la igualdad. Asimismo, en caso que la resolución desestime todos los extremos del pedido, quien la apelará será la recurrente, debido a que la inobservancia del juzgador respecto a los requisitos de apariencia del derecho, el peligro en la demora y la adecuación del pedido en relación al proceso que se ha instaurado le generan un agravio a su derecho a la igualdad.

#### **3.5.5.2.7. Concesión de la apelación**

Debe precisarse que la apelación será concedida sin efecto suspensivo, salvo en el caso de resoluciones de medidas cautelares que declaren la inaplicación de normas legales autoaplicativas, en cuyo caso la apelación es con efecto suspensivo. Cabe precisar que con la resolución que se pronuncia sobre la apelación formulada concluye este procedimiento. En caso de ser estimado el pedido a favor de la demandante, la medida continuará hasta el



término del proceso; caso contrario, deberá de aguardar hasta la expedición de la sentencia con la que concluye el proceso y en la que se reconoce la renuencia en la ejecución del mandato.

Cabe precisar que si alguna de las partes considera que la resolución de segunda instancia contiene vicios procesales, se encontrará legitimada para interponer una demanda de amparo debido a que al ser inimpugnable dicha resolución, el perjudicado se encontrará legitimado para cuestionarla dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación, conforme establece el artículo 44° del CPCo. y el criterio establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 01209-2006-AA, cuyo fundamento 12 expresa que “en el caso de las medidas cautelares, dicha firmeza se alcanza con la apelación y su confirmatoria por la sala, con lo cual, una vez emitida la resolución de segunda instancia queda habilitada la vía del amparo si es que la violación o amenaza continúa vigente. De lo contrario, se estaría creando zonas de intangibilidad, que no pueden ser controladas hasta que concluya el proceso judicial principal. Se dejaría de este modo al arbitrio judicial sin ningún mecanismo de control a través de los procesos constitucionales”.

#### **3.5.5.2.8. Extinción de la medida cautelar**

El CPCo. establece en su artículo 16° que la medida cautelar se extingue de pleno derecho cuando al resolución que concluye el proceso ha adquirido la autoridad de cosa juzgada. Ello implica que si la resolución final estima la demanda, la medida cautelar seguirá la misma suerte; sin embargo, advierte Castillo Córdova que en caso de desestimarse la pretensión, “se debe proceder a la liquidación de costas y costos que supuso el trámite de la medida cautelar y que tendrán que ser pagadas por quien fue beneficiario de la medida cautelar”<sup>677</sup>.

### **3.6. MARCO CONCEPTUAL**

#### **3.6.1. La igualdad**

---

<sup>677</sup> CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “Comentarios al Código Procesal Constitucional”. Tomo I. Op. cit., p. 426.

Pietro Sanchos considera que “mediante la igualdad *‘se describe, se instaure o se prescriba una relación comparativa entre dos o más sujetos u objetos que poseen al menos una característica relevante en común’*. Por consiguiente, el juicio de igualdad excluye tanto la identidad como la mera semejanza. Excluye la identidad porque parte de la diversidad, esto es, parte de dos sujetos distintos, pero respecto de los cuales se hace abstracción de las diferencias para subrayar su igualdad en atención a una característica común”<sup>678</sup> (las cursivas son nuestras).

### **3.6.1.1. Dimensiones de la igualdad**

#### **a. Principio de igualdad**

La igualdad es un principio porque “marca el criterio que rige la conducta a seguir en determinadas situaciones y permea al ordenamiento jurídico en su conjunto cuando unifica a los sujetos en la titularidad de aquellos derechos que —en cuanto reconocidos y garantizados a todos y en igual medida— son llamados ‘universales’ o ‘fundamentales’. *La igualdad jurídica es, entonces, un principio normativo sobre la forma universal de los derechos* que se ha convenido sean fundamentales: del derecho a la vida a los derechos de libertad y de los derechos políticos a los sociales”<sup>679</sup> (las cursivas son nuestras).

#### **b. Derecho fundamental a la igualdad**

El *Institut de Drets Humans de Catalunya* (Instituto de Derechos Humanos de Cataluña), el cual define al derecho a la igualdad de la mujer como aquel que “significa que las mujeres en todas las sociedades y de todo pueblo sin excepción tienen derecho a la igualdad de status jurídico, político, económico, social, laboral y cultural en relación con los hombres”<sup>680</sup>.

---

<sup>678</sup> PIETRO SANCHÍS, Luis. “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”. Op. cit., p. 23.

<sup>679</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., p. 15.

<sup>680</sup> INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA. “Orientación sexual e identidad de género. Los derechos menos entendidos”. Op. cit., p. 4.

### **3.6.1.2. Clases de igualdad**

#### **3.6.1.2.1. Igualdad jurídica entre el varón y la mujer**

La igualdad jurídica “no será otra cosa que la idéntica titularidad y garantía de los mismos derechos fundamentales independientemente del hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que los titulares son entre sí diferentes. En efecto, independientemente de la igualdad jurídica en la titularidad de los derechos fundamentales, todas las personas son de hecho diferentes unas de otras por diferencias de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas y condiciones personales y sociales, entre otras”<sup>681</sup>.

##### **a. La igualdad de la mujer ante la ley**

La igualdad ante la ley “se extiende desde las legítimas exigencias que son parte de una sociedad respetuosa de los derechos de las personas, como por ejemplo no condicionar la contratación a elementos raciales, no discriminar a la hora de dar oportunidades de educación o de especialización entre hombres y mujeres, no hacer depender la participación política del nivel socioeconómico de la persona, no imponer exigencias adicionales respecto del ejercicio de los derechos y libertades fundadas en la pertenencia a cierto sector o estrato social, etc.”<sup>682</sup>.

##### **b. La igualdad de la mujer en la ley**

La igualdad en la ley “se traduce para la autoridad legislativa en la obligación de tratar idénticamente situaciones análogas y sólo hacerlo en forma diferente cuando no se asimilen; como ampliamente se sabe, lo expresa el apotegma ‘tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales’”<sup>683</sup>.

---

<sup>681</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., p. 15.

<sup>682</sup> VIVANCO MARTÍNEZ, Ángela. “La garantía constitucional de la igualdad ante la ley: ¿De qué igualdad estamos exactamente hablando? Op. cit., p. 180.

<sup>683</sup> SÁNCHEZ GIL, Rubén. “El principio de proporcionalidad”. Op. cit., p. 106.

### **c. La igualdad de la mujer en la aplicación de la ley**

La igualdad en la aplicación de la ley “se interpreta así como ‘aplicación de la ley conforme a la ley’ como una aplicación regular, correcta, de las disposiciones legales, sin otras distinciones de supuestos o casos, que los determinados por la norma legal. Se rompería así la igualdad, no sólo si la ley por no ser norma general no contuviese una posibilidad igualdad, sino también si al aplicarse esa norma general, no se hiciera con abstracción de las personas concretas afectadas”<sup>684</sup>. Así, pues “se trata (...) de una prohibición general de arbitrariedad en donde el principio de igualdad es un instrumento que declarará su utilidad de una manera más precisa a través de la igualdad en el contenido de la norma”<sup>685</sup>.

#### **3.6.1.2.2. Igualdad material de la mujer**

Pietro Sanchís considera que el sentido de igualdad material apunta “no a defenderse ante cualquier discriminación normativa, sino a gozar de un régimen jurídico diferenciado o desigual en atención precisamente a una desigualdad de hecho que trata de ser limitada o superada”<sup>686</sup>.

#### **a. Igualdad de trato a favor de la mujer**

Rodríguez Zepeda considera que la igualdad de trato “consiste en el derecho a una distribución igual de algún (...) recurso o carga. En ese sentido, la no discriminación es igualitaria porque obliga a no establecer diferencias de trato arbitrarias basadas en el prejuicio y el estigma. En este caso, no discriminar significa tratar de la misma manera a todos: a un hombre y a una mujer (...). Esta forma de igualdad tiene un poderoso efecto antidiscriminatorio, pues actúa bajo el criterio de que ninguna excepción o arbitrariedad

---

<sup>684</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., pp. 61-62.

<sup>685</sup> Ibidem, p. 63.

<sup>686</sup> PIETRO SANCHÍS, Luis. “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”. Op. cit., p. 17.

está justificada, pues la norma legal debe ser establecida y aplicada como si fuera ‘ciega a las diferencias’ entre las personas”<sup>687</sup>.

## **b. Igualdad de oportunidades a favor de la mujer**

Pérez Portilla considera que “cuando se habla de igualdad de oportunidades se hace referencia a la igualdad en el punto de partida, no en el reparto definitivo de los bienes sociales, el cual dependerá de los méritos de cada persona concreta. Por lo tanto, las acciones del Estado que tratan de concretar el principio de igualdad de oportunidades se encaminan principalmente al cambio de la educación, la superación de cargas familiares en el caso de las mujeres, la concientización de la sociedad, etc. Es decir, a todo aquello que, suponiendo un esfuerzo en la consecución de la igualdad material, no se traduce en una igualación automática de los resultados”<sup>688</sup>.

### **3.6.2. Discriminación contra la mujer**

La discriminación es “una conducta, culturalmente fundada, y sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja innecesaria, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales”<sup>689</sup>.

#### **3.6.2.1. Clases de discriminación**

##### **a. Discriminación directa**

Conforme señala Huerta Ochoa, la discriminación es directa “cuando se fundamenta expresamente en las características distintivas o definitorias de las personas que pertenecen

---

<sup>687</sup> RODRÍGUEZ ZEPÉDA, Jesús. “Una idea teórica de la no discriminación”. Op. cit., p. 52.

<sup>688</sup> PÉREZ PORTILLA, Karla. “Principio de igualdad: alcances y perspectivas”. Op. cit., pp. 155-156.

<sup>689</sup> RODRÍGUEZ ZEPÉDA, Jesús. “Construcción de un marco teórico sobre la discriminación: La discusión académica y la acción institucional. Op. cit, p. 18.

a un grupo”<sup>690</sup>. La discriminación directa “se produce cuando la diferencia de trato se vincula expresamente al sexo. (...) [Es] discriminación directa el trato desfavorable dado a la mujer como consecuencia de una condición únicamente femenina, como por ejemplo, tratar de forma desfavorable el embarazo”<sup>691</sup>.

## **b. Discriminación indirecta**

De acuerdo a Huerta Ochoa, la discriminación es indirecta cuando “se produce a través de las normas, las políticas o de ciertas prácticas que aun cuando no constituyen actos discriminatorios, tienen por efecto causar un perjuicio o una cierta desventaja para un grupo de personas”<sup>692</sup>.

## **c. Discriminación inconsciente**

La discriminación inconsciente es definida por Barrère como un disfavor “casual o aleatorio”<sup>693</sup>. La discriminación inconsciente se manifiesta a través de *estereotipos*, es decir, “de esquemas cognitivos que estructuran sus percepciones y hábitos de conducta, a pesar de que ellas mismas desaprobaban tales representaciones si fuesen conscientes de su existencia. (...) Conducen a la discriminación cuando juzgamos a todos los miembros de un grupo a partir de los rasgos señalados por el estereotipo”<sup>694</sup>.

## **d. Discriminación consciente**

La discriminación consciente ha sido abordada en un informe del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, en el cual se ha precisado que “las conductas discriminatorias se sustentan en valoraciones negativas hacia determinados grupos o personas. Dicho de otro modo, la discriminación se basa en la existencia de una percepción social que tiene como

---

<sup>690</sup> HUERTA OCHOA, Carla. “La estructura jurídica del derecho a la no discriminación”. Op. cit., p. 187.

<sup>691</sup> MORAGA GARCÍA, María Ángeles. “La igualdad entre mujeres y hombres en la Constitución española de 1978”. Op. cit., p. 61.

<sup>692</sup> HUERTA OCHOA, Carla. “La estructura jurídica del derecho a la no discriminación”. Op. cit., p. 187.

<sup>693</sup> BARRERE UNZUETA, María Ángeles. “Discriminación, derecho antidiscriminatorio y acción positiva a favor de las mujeres”. Op. cit., p. 25.

<sup>694</sup> PUYOL GONZÁLEZ, Ángel. “¿Qué hay de malo en la discriminación?”. Op. cit., p. 84.

característica el desprestigio considerable de una persona o grupos de personas, ante los ojos de otras”<sup>695</sup>.

#### **e. Discriminación interseccional**

De acuerdo a Bix, la interseccionalidad –también denominada “transversalidad”- es “un concepto propuesto la mayoría de las veces dentro de la teoría crítica desde el punto de vista racial (...), que señala que algunos individuos pueden estar sujetos a una serie de formas de explotación convergentes o entremezcladas (p. ej. Basadas en la raza, el género, la clase, la religión, etcétera). Bajo tales circunstancias, los argumentos basados en una sola forma de explotación pueden ser inadecuados para comprender la situación. Por ejemplo, se ha argüido a veces que un análisis feminista que sólo presta atención a lo que es compartido por todas las mujeres puede ser de poca ayuda para comprender la situación de las mujeres afroamericanas y latinas”<sup>696</sup>.

#### **3.6.2.2. Machismo como causa de la discriminación contra la mujer**

El machismo es una construcción cultural que contempla “un modo particular de concebir el rol masculino, modo que surge de la rigidez de la mayor parte de las sociedades del mundo contemporáneo, para establecer y agudizar las diferencias de género entre sus miembros”<sup>697</sup>.

#### **3.6.3. Diferenciación**

Huerta Ochoa señala que “diferenciar no es sin embargo una acción negativa necesariamente, en virtud de lo cual es preciso distinguir las razones por las cuales se produce la diferenciación. Para ello es necesario distinguir los motivos que pueden justificar una diferenciación válida, de las acciones que la llevan a cabo (distinciones,

---

<sup>695</sup> PACHECO, Gilda, TORRES, Isabel y TOJO, Liliana (Coordinadoras). “Los derechos humanos de las mujeres: Fortaleciendo su promoción y protección internacional. De la formación a la acción”. Op. cit., p. 85.

<sup>696</sup> BIX, Brian. “Diccionario de teoría jurídica”. Op. cit., p. 141.

<sup>697</sup> RODRÍGUEZ KAUTH, Ángel, MARÍN DE MAGALLANES, Leticia y LEONE DE QUINTANA, María. “El machismo en el imaginario social”. Op. cit., p. 276.

preferencias, privilegios, exclusión, restricciones), de los resultados de la discriminación (el detrimento, un impedimento, el menoscabo, el hecho de negar el derecho o su ejercicio, o la marginación, por ejemplo). Ya que cuando las acciones que producen una distinción se fundan correctamente, no debe producirse un efecto discriminatorio. La regulación de la discriminación tiene por objeto combatirla”<sup>698</sup>.

### **3.6.3.1. Acciones positivas como medidas diferenciadoras**

El Instituto Vasco de la Mujer define a las acciones positivas como “todas aquellas medidas de impulso y promoción que tienen por objeto establecer la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo, mediante la eliminación de las desigualdades de hecho”<sup>699</sup>.

## **4. HIPÓTESIS**

Se han formulado tres hipótesis: una constituida como general y dos, especiales; las dos primeras son hipótesis explicativas y la última es una hipótesis nula. Cabe precisar que estas hipótesis brindan presuntas respuestas en torno a las causas de la discriminación, objetivo general de la investigación, que nos permitirá obtener datos que serán contrastados con las consecuencias jurídicas y medidas legislativas propuestas por la doctrina.

### **4.1. HIPÓTESIS GENERAL**

**4.1.1. “El machismo constituye el principal factor que determina la discriminación contra la mujer debido a que impone roles de género que limitan el pleno ejercicio de sus derecho”**

Rodríguez Kauth, Marín de Magallanes y Leone de Quintana definen al machismo como una construcción cultural que contempla “un modo particular de concebir el rol masculino, modo que surge de la rigidez de la mayor parte de las sociedades del mundo

---

<sup>698</sup> HUERTA OCHOA, Carla. “La estructura jurídica del derecho a la no discriminación”. Op. cit., p. 187.

<sup>699</sup> INSTITUTO VASCO DE LA MUJER (EMAKUNDE). “Base legal de la acción positiva”. Op. cit., p. 16.



contemporáneo, para establecer y agudizar las diferencias de género entre sus miembros”<sup>700</sup>.

El machismo constituye una práctica sustentada en los roles de género que son asumidos como naturales e inmutables en el comportamiento de varones y de mujeres. Así, por ejemplo, cuando a una mujer se le asigna la realización de labores domésticas y al varón se le restringe su realización debido a la expresión de frases tan simples como “las mujeres son de la casa y los hombres de la calle”, se están preservando patrones de comportamiento que limitan la realización de las labores diarias de cada persona y que generan un sentimiento de inferioridad por parte del hombre al realizarlas, ya que tales conductas estarían restringidas a las mujeres.

#### 4.1.1.1. Operacionalización de las variables

Antes de ingresar al desarrollo de la hipótesis, procederemos a operacionalizar las variables.

Variable independiente	Indicador	Sistema de medición	Categorías	Dato
<b>MACHISMO</b>	Existencia	Nominal	Sí No	(1) (2)

Variable dependiente	Indicador	Sistema de medición	Categorías	Dato
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Producción	Nominal	Sí No	(1) (2)

<sup>700</sup> RODRÍGUEZ KAUTH, Ángel, MARÍN DE MAGALLANES, Leticia y LEONE DE QUINTANA, María. “El machismo en el imaginario social”. En: *Revista latinoamericana de psicología*. Volumen 25, N° 2. Fundación Universitaria Honrad Lorenz. Bogotá, 1993, p. 276.

Variable interfiriente	Indicador	Sistema de medición	Categorías	Dato
SEXO	Clase	Nominal	Mujer Varón	(1) (2)

#### 4.1.1.2. Características del machismo

Sobre el particular, Duque y Montoya ahondan señalando que “el machismo es una **forma de masculinidad** usada para describir una actitud de superioridad y dominación por parte de los hombres, que es estimulada por las prácticas de educación y crianza de sociedades patriarcales y que en Latinoamérica, todo parece indicar que se origina con la introducción de la cultura Hispana durante la Conquista. Es una expresión de **hipermasculinidad**. A esta forma de masculinidad se le han atribuido típicamente connotaciones negativas que se han sintetizado en tres categorías: actitudes sexuales carentes de sensibilidad, el ejercicio de la violencia como expresión de masculinidad y el tener una gran excitación frente al peligro”<sup>701</sup> (el sombreado es nuestro).

##### a. Deformación de la masculinidad

A diferencia de lo que señalan los autores, consideramos que el machismo constituye una deformación de la masculinidad, pues es un discurso en el que subyacen roles “inherentes” al varón y a la mujer, desconociendo la naturaleza variable del ser humano y la realización de la persona a través de la realización de diversos actos destinados a la satisfacción de sus necesidades.

Sin embargo, el machismo deforma la percepción de la identidad no sólo masculina, sino también femenina frente a determinadas situaciones donde la trasgresión de los parámetros

---

<sup>701</sup> DUQUE, Luis. MONTOYA, Nilton. “Características de las personas: Actitudes machistas”. En: *Previva*. Serie de documentos de Información para la Acción para los Comités de Convivencia y Seguridad Ciudadana de los municipios del Valle de Aburrá. Documento N° 3. Universidad de Antioquia. Antioquia, 2006, p. 24.

de comportamiento constituye un acto de “socavación” de la estructura en la que apoyaría la sociedad, pues implicaría desconocer la distinta “naturaleza” de los varones y de las mujeres para colocar a dicho grupo de sujetos distintos en un plano de igualdad que, de acuerdo a dicho discurso, estaría “negado por la naturaleza”.

## **b. Manifestación de la hipermasculinización**

De igual manera, el machismo es una manifestación de hipermasculinización: es la representación del varón todopoderoso, fuerte e indestructible, ajeno a la fragilidad, a los sentimientos de compasión y de amor, pues tales constituirían sentimientos propios de la mujer. De seguir tal lógica, siendo el machismo una manifestación de la hipermasculinización, lo contrario sería negar la naturaleza masculina y caer en una conducta contraria a ella, es decir, femenina y, por lo tanto, débil, con lo cual se atentaría contra la esencia del varón.

Por tal motivo, a través del machismo “se generan expectativas de comportamiento en torno del varón que incluyen valores y actitudes, conformando así una concepción ideológica asentada en la superioridad del macho en relación con la hembra, superioridad que se ha pretendido fundamentar desde distintas perspectivas ideológicas. Ello se patentiza en una jerarquización cultural y social de las características masculinas en desmedro de las femeninas”<sup>702</sup>.

## **c. Autoritarismo**

El autoritarismo constituye uno de los rasgos más evidentes del machismo, pues, como expresan Rodríguez Kauth, Marín de Magallanes y Leone de Quintana, “en la base de las relaciones de tipo machistas (...) existe algún elemento de tipo autoritario. En este caso particular entendemos que lo que aparece como visible es la autoridad, instrumento necesario para marcar la superioridad de uno sobre el otro en la relación de pareja”<sup>703</sup>.

---

<sup>702</sup> RODRÍGUEZ KAUTH, Ángel, MARÍN DE MAGALLANES, Leticia y LEONE DE QUINTANA, María. “El machismo en el imaginario social”. Op. cit., p. 276.

<sup>703</sup> Ibidem, p. 278.

Sin embargo, los autores refieren un elemento particular del autoritarismo; nos referimos a la situación de privilegio del varón en relación de la mujer, pues a pesar de ser titular de derechos, cuando a la mujer se le priva de su plena realización, se la está discriminando, privilegiando ilegalmente al varón a través del reconocimiento “social” de sus derechos en razón de su “naturaleza” masculina. Por ello, señalan que “la autoridad es sin lugar a dudas un lugar de privilegio, o que por lo menos ofrece privilegios, y quien desee a estos y no tenga elementos que legitimen su autoridad recurre a expresarse autoritariamente”<sup>704</sup>.

#### **d. Repudio de lo femenino**

Si del pensamiento machista brota la dualidad “macho-fuerte”, “hembra-débil”, toda conducta relacionada a la fragilidad, a la expresión de los sentimientos o a la vulnerabilidad es descartada del patrón de comportamiento del varón. En tal sentido, se asume que la mujer es por “naturaleza” débil, frágil, sentimental y vulnerable, por lo cual se justifica que se emocione, compadezca, lamente o llore.

Sin embargo, el pensamiento machista prohíbe a los varones desde la más temprana edad todo tipo de manifestación de debilidad, ya que ello los despojaría de su identidad masculina, de esa hipermasculinización que los diferencia de lo femenino, es decir, de lo débil.

En tal sentido, “el machismo, como forma autoritaria de expresión del varón sobre la mujer, es una de las tantas formas que tiene el hombre para expresar las partes internas femeninas que le desagradan y que no tolera que pudiesen ser expresadas. Esto lo hace sobre lo femenino, despreciándolo, bastardeándolo y hasta por qué no también prostituyéndolo”<sup>705</sup>. Este comportamiento pasa desapercibido porque “a primera vista pareciera que no tolera algunas características del otro (en este caso la otra) y es cierto, pero también es cierto que esa intolerancia no empieza en el/la Otro/a sino que en todo caso es ese el lugar donde

---

<sup>704</sup> Loc. cit.

<sup>705</sup> Loc. cit.

culmina la intolerancia que se inicia dentro del propio individuo actor de la conducta o acción machista, quien, en última instancia, lo que no puede tolerar son los sentimientos ambivalentes que se producen a partir de las contradicciones que surgen entre el varón que es y que se quiere conservar como tal, con la parte femenina que no es tolerada en sus emergencias conscientes”<sup>706</sup>.

Por tal motivo, continuamente somos testigos de frases como “los hombres no lloran”, “pareces una niña” o “tan chismoso como una mujer”. En estos casos se revela la negación de todo referente de intelectualidad de la mujer, sumiéndola en un plano netamente emocional que vendría a complementar la racionalidad del varón al concretarse una pareja entre ambos, con lo cual se justificaría que las mujeres se dedicaran a los hijos y a brindar paz al hogar, mientras el varón se encargara de proveer de recursos a los miembros de la familia, ya que tales han sido obtenidos ya sea a través de su fortaleza física o de su intelecto, caracteres que la mujer no posee.

#### **4.1.1.3. Manifestaciones del pensamiento machista**

Sin embargo, estas consideraciones trascienden las concepciones meramente doctrinarias, siendo apreciadas a través de una serie de manifestaciones que pretenden perpetuar el discurso machista:

**“a) Una posición social de superioridad física y psicológica del varón con respecto a la mujer”<sup>707</sup>** (el sombreado es nuestro).

Sin que medie parámetro científico alguno, el pensamiento machista asigna un nivel intelectual y una fuerza física superior al varón, a través de lo cual se pretendería fundamentar la sujeción a la cual la mujer debería encontrarse en relación a él. No obstante, la falta de baremo alguno que determine la certeza de tales proposiciones hace caer dicho

---

<sup>706</sup> Loc. cit.

<sup>707</sup> Ibidem, p. 276.

paradigma en la categoría de lo subjetivo y de lo arbitrario, por lo que dicho argumento resulta fácilmente desacreditado.

**“b) Como complemento de lo anterior, una actitud de desvalorización de las capacidades de la mujer”<sup>708</sup>** (el sombreado es nuestro).

De lo expresado en el párrafo anterior se desprende que la presunta debilidad física y mental de la mujer determinaría la negación de todo lo femenino, lo cual permite construir la dualidad “débil-femenino”. Ello implica que al actuar el varón de manera contraria al paradigma de fortaleza, caería en lo débil, lo cual lo equipararía a lo femenino, es decir, a lo contrario al rol de género asignado en ese pensamiento que trasunta el círculo de la ignorancia.

**“c) Una actitud discriminante hacia la mujer en el plano social, laboral y jurídico. De esta manera la mujer ocupa un lugar subordinado y sirve a las necesidades domésticas y sexuales del varón”<sup>709</sup>** (el sombreado es nuestro).

Como señala Welsh, el machismo se fundamenta en que “la mayor parte de los hombres interpretamos y asumimos como natural nuestra superioridad biológica, intelectual y sexual y desarrollamos nuestras vidas haciendo todo lo posible para proyectar esta imagen en todos los ámbitos de la vida, para sentirnos verdaderamente hombres, fenómeno que influye muy negativamente en las vidas de las mujeres y la niñez pero también en nuestras propias vidas (por ejemplo nuestra salud física y mental, el deber de ser violento, etc.). Siempre hemos disfrutado de muchas ventajas, privilegios y derechos en la sociedad que están negados a las mujeres pero ahora empezamos a descubrir las desventajas y costos para nosotros, los cuales hay que revelar, criticar y cambiar, sin victimizarnos, para beneficio mutuo de mujeres y hombres”<sup>710</sup>.

---

<sup>708</sup> Loc. cit.

<sup>709</sup> Loc. cit.

<sup>710</sup> WELSH, Patricio. “Desaprendiendo el machismo: Un trabajo de género con y entre hombres en Nicaragua”. En: *Seminario de derechos sexuales y reproductivos*. Equidad de género. México D.F., p. 3. En: [www.equidad.org.mx/ddeser/seminario/internas/lecturas/lect-genero/desaprendiendoelmachismo.pdf](http://www.equidad.org.mx/ddeser/seminario/internas/lecturas/lect-genero/desaprendiendoelmachismo.pdf)

Sin embargo, el mencionado autor revela un factor que se encuentra inmerso en el machismo y que identifica una situación de temor en aquella persona que orienta su comportamiento en esta variable, ya que “aunque no nos es fácil admitirlo, existen muchos temores en nosotros los hombres. Hablar de género entre nosotros implica tocar asuntos, a través de la reflexión y el análisis crítico, de la vida personal e íntima de cada uno. En el mundo masculino casi no hay tales prácticas. Por ende, existe el temor de conocerse a sí mismo y al reto de ser hombres más auténticos, más completos, más plenos. Existe a la par el temor a un feminismo radical (y muchas veces sin haber entendido ni siquiera lo que es el feminismo) y a que ‘se voltee la tortilla’”<sup>711</sup>.

El machismo también se evidencia en el plano jurídico, pues como revela Graziosi, “la ciencia penalista de finales del siglo XVI (...) pareció querer dar cuerpo y fundamento a construcciones doctrinales hasta entonces poco articuladas y, sobre todo, poner el acento en la oportunidad de diferenciar la pena, o bien en la necesidad de excluir o atenuar en algunos casos la imputabilidad de las mujeres. Este es quizá el asunto teórico más significativo: considerar a las mujeres incapaces de ser plenamente imputables, por su debilidad global de cuerpo y mente. El concepto a que con más frecuencia se hace referencia para designar una genérica minoridad femenina que justifica también la oportunidad de una pena atenuada es el de infirmitas sexos, fragilitas o imbecillitas sexos: figuras al mismo tiempo vagas y omnicomprendivas, tomadas de la tradición jurídica romanista y utilizadas indiscriminadamente en los más variados supuestos”<sup>712</sup>.

Sin embargo, debe precisarse que el machismo no es un patrón de comportamiento exclusivo de los varones, pues como demostraron Duque y Montoya en una investigación realizada en el Valle de Aburra (Colombia), durante 2004, se observó que un considerable porcentaje de mujeres aceptaba una serie de conductas machistas que atentaban contra su dignidad. De acuerdo a los mencionados autores, en dicha investigación se corroboró que “la mayoría de los hombres y de las mujeres tiene una actitud que no se muestra de acuerdo con las actitudes machistas, pero las proporciones más altas de muy de acuerdo, algo de

---

<sup>711</sup> Loc. cit.

<sup>712</sup> GRAZIOSI, Marina. “En los orígenes del machismo jurídico: la idea de inferioridad en la mujer en la obra de Farinaccio”. En: *Jueces para la democracia*. N° 30. Jueces para la democracia. Madrid, 1997, p. 49.

acuerdo y algo en desacuerdo con dichas actitudes se encuentran entre los hombres y las proporciones más altas de muy en desacuerdo se hallan entre las mujeres, siendo la diferencia por sexo altamente significativa”<sup>713</sup>.

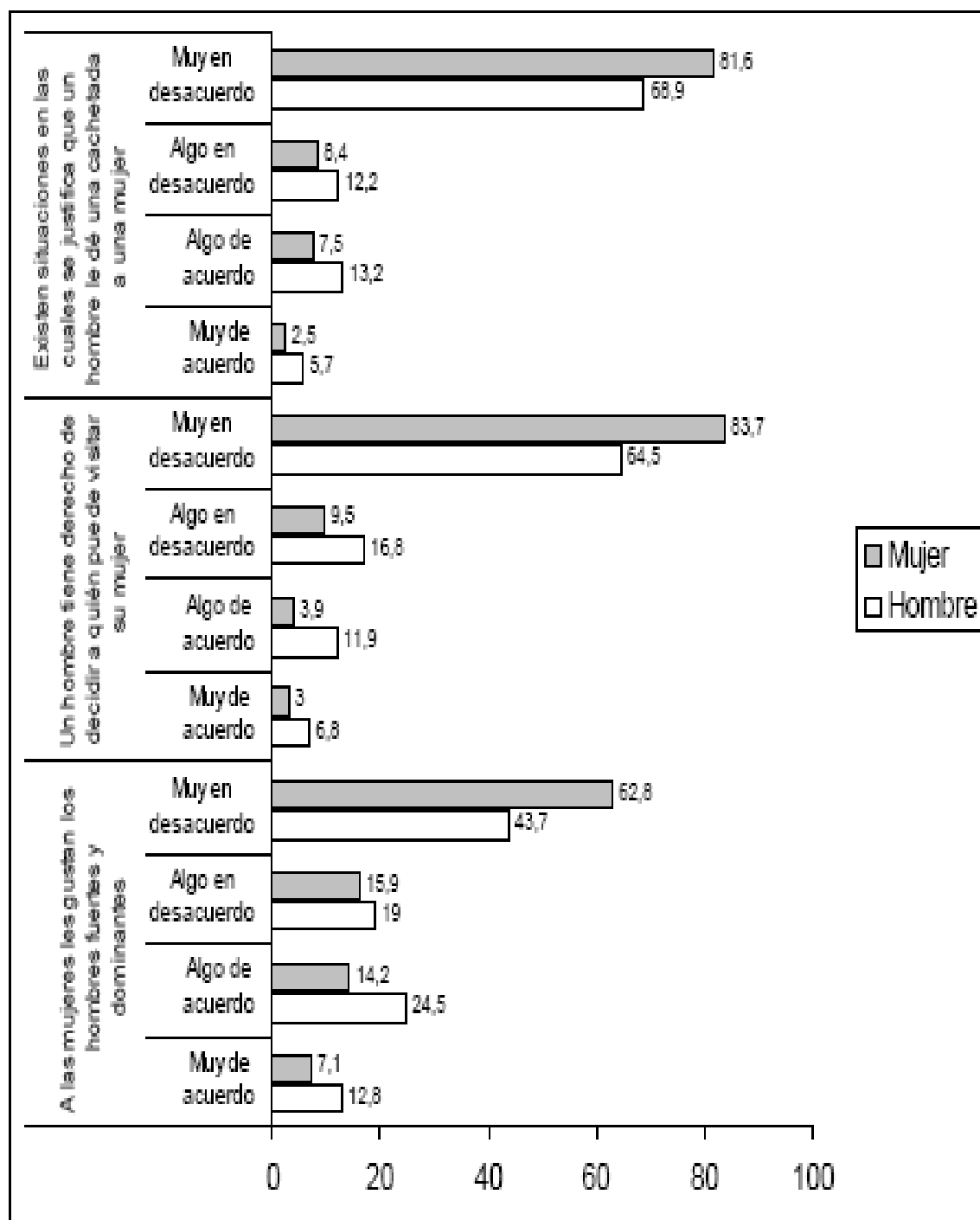
Lo referido se constata en el siguiente cuadro<sup>714</sup>:

---

<sup>713</sup> DUQUE, Luis. MONTROYA, Nilton. “Características de las personas: Actitudes machistas”. Op. cit., pp. 27-28.

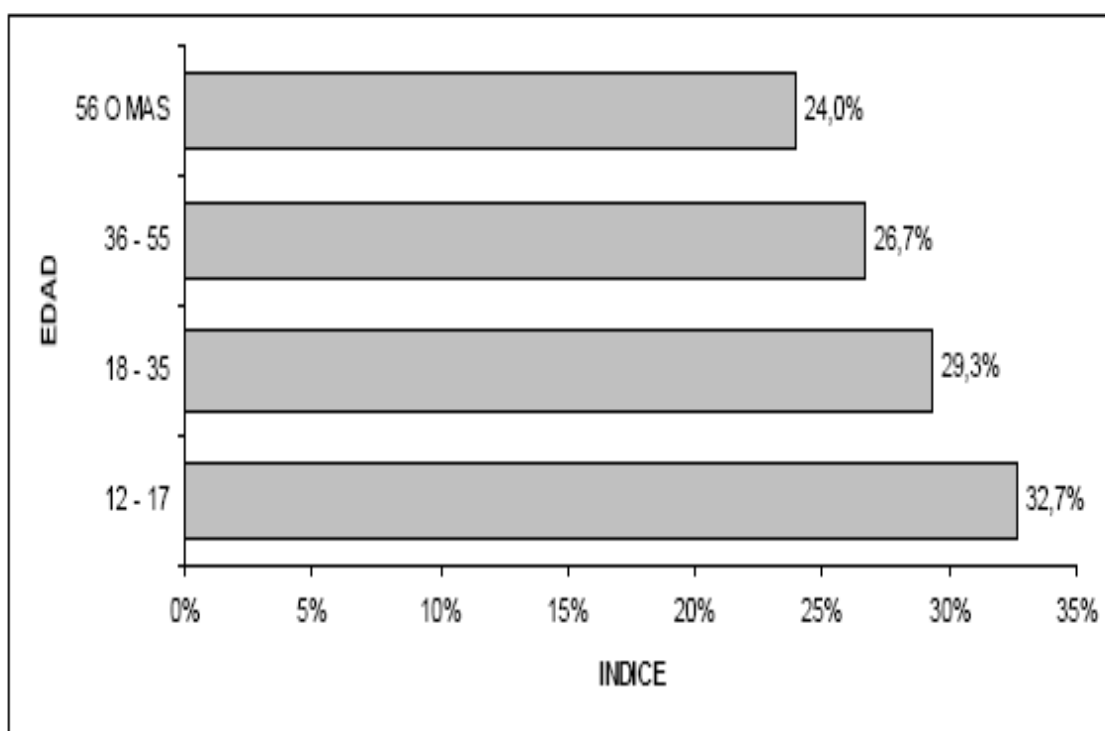
<sup>714</sup> Ibidem, p. 28.





Por otra parte, resulta interesante que los mencionados investigadores hayan enlazado el estudio del machismo a dos variables: edad y nivel educativo. En relación a la edad, los autores han demostrado que en la mencionada región de Colombia se acredita que existe un mayor índice de machismo en personas jóvenes, comprendidas entre 12 y 17 años, la cual

decrece conforme se analizan grupos con edades mayores; ello se explica en la medida que el paso de los años y el acceso a la educación superior permiten incorporar conocimientos y perspectivas más amplias sobre la realidad a los seres humanos, lo cual desencadena en la ruptura de estereotipos que eran asumidos como naturales durante los primeros años de vida, en los cuales la persona tenía una visión más restringida de la realidad. Esto explicaría que la tasa de conductas machistas tuviera mayor incidencia en el grupo de personas comprendidas entre 12 y 17 años y menor en el comprendido entre los 56 años en adelante, conforme se expresa en el siguiente cuadro<sup>715</sup>:

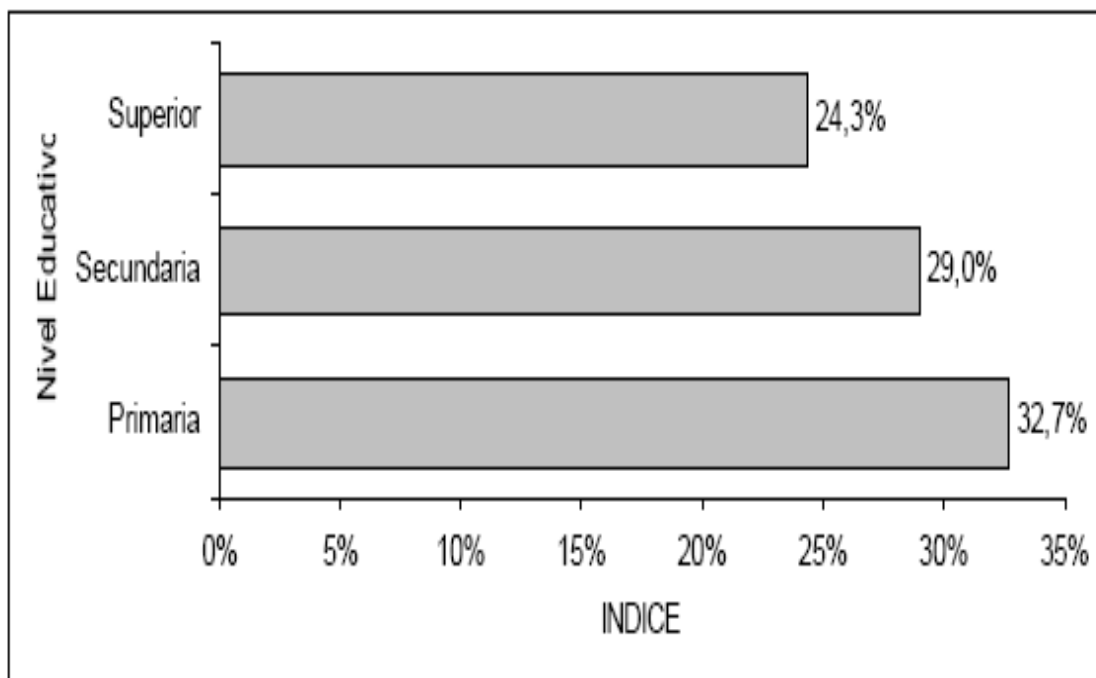


Como se refirió, Duque y Montoya efectuaron un análisis transversal de las variables machismo y nivel educativo, el cual reveló que las manifestaciones de machismo desaparecen en cuanto la persona acceda a niveles educativos superiores al primario, como son el secundario y el superior propiamente dicho. Este resultado permite, a su vez, explicar la relación entre las variables machismo y edad, pues, en la gran mayoría de los casos, la población comprendida entre 12 y 17 años es aquella que ha cursado estudios secundarios,

<sup>715</sup> Ibidem, p. 30.

siendo que aquella que supera dicha edad cursa estudios superiores, lo cuales le provee de conocimientos y de perspectivas que les permiten ampliar sus horizontes y contrastar la visión machista con la nueva que le es proporcionada a través de la educación.

La relación entre machismo y nivel educativo se explica en el siguiente cuadro<sup>716</sup>:



En consecuencia, el machismo es una práctica cultural que relega a la mujer de la esfera pública, ya que la concibe dentro de un rol “natural” perteneciente a la esfera privada o doméstica. En el estudio del machismo entra a tallar el **género**, definido como el “[c]onjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes”<sup>717</sup>, lo que determina que, “[e]l concepto género designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los sexos, es decir, se refiere a la construcción social del hecho de ser mujer y hombre, a la

<sup>716</sup> Ibidem, p. 31.

<sup>717</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA. Disponible en: [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=género](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=género).

interrelación entre ambos y las diferentes relaciones de poder/subordinación en que estas se interrelaciones se presentan”<sup>718</sup>.

En pocas palabras, **género es la categoría que considera a varones y a mujeres sobre la base de una serie de comportamientos “propios o inherentes” a su naturaleza, es decir, “papeles, espacios, características e identidades (...) en razón de su sexo biológico”**<sup>719</sup> (el sombreado es nuestro). Si bien el sexo es un factor preponderante para la asignación del género, la diferencia radica en que el sexo es inmutable, en tanto es una característica biológica, a diferencia del género que es la construcción de identidades sociales que pueden cambiarse. Así, pues, sobre la base del “género”, categoría creada y asumida por el imaginario popular como un concepto que engloba una serie de elementos que asumimos como “propios” (o “naturales”) de las mujeres que se configura la discriminación, al privarla de su realización plena y en igualdad de condiciones que los varones.

## **4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS**

### **4.2.1. Primera hipótesis específica**

***“El sexo constituye un factor que incide en la discriminación contra la mujer cuando esté asociado a estereotipos que pretenden explicar los roles de mujeres y varones”***

Si bien la hipótesis anterior explicó la relación entre machismo y roles de género, hemos considerado necesario incorporar la variable sexo a dicho análisis, lo cual nos permitirá apreciar con claridad cómo los roles de género se gestan a partir de los estereotipos asignados a los varones y a las mujeres. Para tales efectos, será necesario abordar el estudio de las variables sexo y estereotipos, a efectos de concatenarlas y acreditar las relación entre ambas.

---

<sup>718</sup> DE LA CRUZ, Carmen “Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo”. Editorial Grafo. Navarra, 1998, p. 16.

<sup>719</sup> Ibidem.

#### 4.2.1.1. Operacionalización de las variables

Antes de ingresar al desarrollo de la hipótesis, procederemos a operacionalizar las variables.

<b>Variable independiente</b>	<b>Indicador</b>	<b>Sistema de medición</b>	<b>Categorías</b>	<b>Dato</b>
<b>SEXO</b>	Clase	Nominal	Mujer Varón	(1) (2)

<b>Variable dependiente</b>	<b>Indicador</b>	<b>Sistema de medición</b>	<b>Categorías</b>	<b>Dato</b>
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Producción	Nominal	Sí No	(1) (2)

<b>Variable interfiriente</b>	<b>Indicador</b>	<b>Sistema de medición</b>	<b>Categorías</b>	<b>Dato</b>
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Existencia	Nominal	Sí No	(1) (2)

#### 4.2.1.2. Sexo

El estudio de esta variable se realizará sobre la base de su concepto y clasificación, lo cual nos permitirá comprender a cabalidad su incidencia en la configuración de la discriminación contra la mujer en nuestro país.

##### 4.2.1.2.1. Concepto

De acuerdo a la RAE, el sexo es definido como la “[c]ondición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas”<sup>720</sup>. Aunque de nuestra investigación se desprenda que la variable sexo será analizada a partir de las categorías femenina y masculina, es necesario realizar un estudio aún más profundo para comprender las categorías que se subsumen dentro de la definición biológica del sexo.

#### **4.2.1.2.2. Clasificación**

Conforme se expondrá, el sexo se clasifica en cromosomal y gonadal.

##### **a. Sexo cromosomal**

Antes de ingresar a definirlo, es necesario comprender la implicancia de los cromosomas en la configuración del sexo. De acuerdo a lo que señala Humboldt-Universität zu Berlin-Institutsserver de Alemania, “[e]l cuerpo humano consiste de células, y cada uno de sus células contiene 46 cromosomas (cromo: color; soma: cuerpo). Son partes en el interior de la célula con apariencia de cordones (en el núcleo de la célula). Llevan la información genética, y juegan también un papel decisivo al determinar el sexo de una persona”<sup>721</sup>.

Es precisamente el sexo cromosomal el que va a dar origen a las categorías de mujer y hombre. Así, “[l]as células en el cuerpo de la mujer contienen dos cromosomas X (XX)”<sup>722</sup> y “[l]as células en el cuerpo del hombre un cromosoma X y uno Y ( XY )”<sup>723</sup>. Ello determina que “[e]l desarrollo sexual de mujeres y hombres es grandemente influenciado por sus cromosomas y hormonas”<sup>724</sup>, pues “[s]i nueva célula fertilizada contiene dos

---

<sup>720</sup> RAE. Disponible en: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=sexo> (Revisado el 07 de junio de 2009).

<sup>721</sup> HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN- INSTITUTSSERVER. “Anatomía sexual humana y fisiología básica”. Disponible en: [http://www2.hu-berlin.de/sexology/ECS1/que\\_son\\_los\\_cromosomas.htm](http://www2.hu-berlin.de/sexology/ECS1/que_son_los_cromosomas.htm) (Revisado el 07 de junio de 2009).

<sup>722</sup> Ibidem. Disponible en: [http://www2.hu-berlin.de/sexology/ECS1/sexo\\_cromosomal.htm](http://www2.hu-berlin.de/sexology/ECS1/sexo_cromosomal.htm) (Revisado el 07 de junio de 2009).

<sup>723</sup> Loc.cit.

<sup>724</sup> Ibidem. Disponible en: [http://www2.hu-berlin.de/sexology/ECS1/el\\_rol\\_de\\_los\\_cromosomas.htm](http://www2.hu-berlin.de/sexology/ECS1/el_rol_de_los_cromosomas.htm) (Revisado el 07 de junio de 2009).

cromosomas X, el embrión formará finalmente ovarios. Sin embargo, si un cromosoma de Y esta presente, estimula las células de las gónadas indiferenciadas a desarrollarse en testículos. Los testículos, a su vez, producen la testosterona la hormona que promueve el proceso que convierte al embrión en un varón”<sup>725</sup>.

## **b. Sexo gonadal**

El sexo gonadal es el que define los caracteres fenotípicos a través de los cuales identificamos a los individuos como pertenecientes a determinado sexo. Es decir, son “las características sexuales primarias que corresponden a un individuo. Es decir, sus genitales tanto internos como externos. Las posibilidades aquí pasan por: genitales masculinos, genitales femeninos o diversos grados de intersexualidad (coexistencia total o parcial de caracteres de ambos sexos no provocados –hermafroditismo, pseudohermafroditismo, etc...- )”<sup>726</sup>.

Cabe precisar que el sexo gonadal se establece a partir de estructuras reproductivas internas y externas. En el primer caso, esta es apreciada en “[e]l cuerpo de la mujer (...) [a través de] oviductos, un útero, una vagina etc.”<sup>727</sup> y en el del varón en “conductos de esperma, vesículas seminales, una próstata etc.”<sup>728</sup>. Respecto a los signos externos, “[e]l cuerpo de la mujer tiene un clítoris, labias mayores (externas) y labias menores (internas) etc.”<sup>729</sup> y el del varón “un pene y un escroto”<sup>730</sup>.

Precisamente son tales signos externos los que determinan la construcción de estereotipos que pretenden explicar aspectos “naturales” o “propios” de los varones y de las mujeres y,

---

<sup>725</sup> Ibidem. Disponible en: <http://www2.hu-berlin.de/sexology/ECS1/seite040.HTM> (Revisado el 07 de junio de 2009).

<sup>726</sup> ASOCIACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES DE ALICANTE. “Entendamos la diversidad”. Alicante, 27 de mayo de 2003. Disponible en: <http://trans.decidet.org/informacion/documentos/05Documentacion%20e%20informacion%20propia/Articulo%20-%20Entendamos%20la%20diversidad.pdf> (Revisado el 07 de junio de 2009).

<sup>727</sup> HUMBOLT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN- INSTITUTSSERVER. Disponible en: [http://www2.hu-berlin.de/sexology/ECS1/estructuras\\_internas.htm](http://www2.hu-berlin.de/sexology/ECS1/estructuras_internas.htm) (Revisado el 07 de junio de 2009).

<sup>728</sup> Loc. cit.

<sup>729</sup> Loc. cit.

<sup>730</sup> Loc. cit.

sobre la base de tales aseveraciones, determinar los patrones de comportamiento “inherentes” a las personas de acuerdo a su sexo.

#### **4.2.1.3. Estereotipos**

Los estereotipos constituyen representaciones sociales de lo “propio” o “natural” de los diversos grupos humanos que permiten explicar la realidad. Como señala Gómez Carroza, los estereotipos son “sistemas de valores, ideas y prácticas que tienen una función doble: establecer un orden que permite a los individuos orientarse en su mundo social y facilitar la comunicación entre los individuos de una comunidad al proporcionarles un código para nombrar y clasificar los diversos aspectos de su mundo y su historia individual y de grupo”<sup>731</sup>.

##### **4.2.1.3.1. Estereotipos como simplificadores de la realidad**

A su vez, González Galiana considera que los estereotipos “sirven así como verdaderos ‘signos’ sociales capaces de concentrar toda una serie de conocimientos que no podrían recordarse o reconocerse con facilidad. Estos marcadores gruesos de la comunicación no tienen visos de extinguirse porque facilitan enormemente la adquisición y mantenimiento de saberes que, de otra forma no podrían reproducirse. Aunque esa misma simplificación los haga poco fiables e injustos, cumplen una función trascendental: evitar la ingrata labor no sólo de acumular y manejar conocimientos, sino también de tomar decisiones y aventurar juicios”<sup>732</sup>.

Las concepciones rígidas derivadas de los estereotipos condicionan la producción de conductas discriminadoras, ya que al presuntamente explicar la realidad, los estereotipos son patrones férreos que no pueden ser cambiados en la medida que ello significaría

---

<sup>731</sup> GÓMEZ CARROZA, Teresa. “Heteroestereotipos y autoestereotipos asociados a la vejez en Extremadura”. Tesis para optar el grado de Doctora en Psicología y Sociología de la Educación. Universidad de Extremadura. Cáceres, 2003, p. 121.

<sup>732</sup> GONZÁLEZ GALIANA, Rafael. “La construcción de estereotipos andaluces por los medios”. En: *Comunicar. Revista científica iberoamericana de comunicación y educación*. N° 12. Grupo Comunicar. Huelva, 1999, p. 102.



quebrantar el orden “natural” de las cosas y los roles “propios” de cada grupo humano en la sociedad, generándose una presunta situación de caos, al realizarse conductas distintas a las “debidas”.

Por ello, es que “dentro de las representaciones sociales uno de los conceptos que mayor interés ha despertado en la Psicología Social es el de los estereotipos sociales así como sus relaciones con los prejuicios y la discriminación. Pese a no existir acuerdo entre los distintos autores, no cabe duda que los estereotipos suponen una forma de economía y simplificación de la realidad, permitiendo reducir su complejidad derivada de lo particular a través de la categorización. Este concepto es capaz de enlazar procesos psicológicos, primordialmente, los motivacionales y los cognitivos, y procesos sociales, ya que los estereotipos son creencias referidas a grupos que se crean y se comparten en y entre los grupos dentro de una cultura. Sin ánimo de simplificar, diríamos, que los estereotipos son un conjunto de atributos o características asignados a un grupo social”<sup>733</sup>.

#### **4.2.1.3.2. Estereotipos aplicados sobre la mujer y el varón**

El Instituto Nacional de las Mujeres de México ha expresado algunas consideraciones en torno a los estereotipos aplicados sobre las mujeres y sobre los varones, las cuales parten desde el momento en que se conoce el sexo del recién nacido, momento en el cual “los padres, los familiares y la sociedad suelen asignarles atributos creados por expectativas prefiguradas”<sup>734</sup>.

##### **a. Estereotipos aplicados sobre la mujer**

Conforme expresa un estudio de la mencionada entidad de 2007, cuando una niña nace se espera “que sea bonita, tierna, delicada, entre otras características; y si es niño, que sea fuerte, valiente, intrépido, seguro y hasta conquistador (...). A las niñas se les enseña a ‘jugar a la comidita’ o a ‘las muñecas’, así desde pequeñas, se les involucra en actividades

---

<sup>733</sup> Ibidem, pp. 121-122.

<sup>734</sup> INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES). “El impacto de los estereotipos y los roles de género en México”. Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. México D.F., 2007, p. 1.

domésticas que más adelante reproducirán en el hogar. (...) Estos aprendizajes forman parte de la ‘educación’ que deben recibir las mujeres para cumplir con las tareas que la sociedad espera de ellas en su vida adulta”<sup>735</sup>.

#### **b. Estereotipos aplicados sobre el varón**

A diferencia de lo que sucede con las mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres de México expresa que los estereotipos inciden sobre los varones desde la infancia, ya que “a los niños se les educa para que sean fuertes y no expresen sus sentimientos, porque ‘llorar es cosa de niñas’, además de prohibirles ser débiles. Estas son las bases sobre las que se construyen los estereotipos de género, reflejos simples de las creencias sociales y culturales sobre las actividades, los roles, rasgos, características o atributos que distinguen a las mujeres y a los hombres. Los estereotipos son concepciones preconcebidas acerca de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres y los hombres”<sup>736</sup>.

#### **4.2.1.4. Relación entre sexo y estereotipos**

Sin perjuicio del punto anterior, consideramos necesario destacar la relación entre el sexo y los estereotipos, pues a través de ellos tendremos referentes concretos en torno a la construcción de los estereotipos que dificultan el pleno ejercicio de los derechos de mujeres y de varones.

La relación entre las variables sexo y estereotipos se da a través de la concepción del **género**, el cual es definido por Organización Panamericana de la Salud como “las características socialmente construidas que definen y relacionan los ámbitos del ser y del quehacer femeninos y masculinos, dentro de contextos específicos”<sup>737</sup>. En efecto, el género “se refiere a la red de símbolos culturales, conceptos normativos, patrones institucionales y elementos de identidad subjetivos que, a través de un proceso de construcción social,

---

<sup>735</sup> Ibídem, pp. 1-2.

<sup>736</sup> Ibídem, p. 2.

<sup>737</sup> ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. “Sexo y género”. Disponible en: <http://www.paho.org/Spanish/AD/GE/Workshosp-Module1.pdf> (Revisado el 07 de junio de 2009).

diferencia los sexos, al mismo tiempo que los articula dentro de relaciones de poder sobre los recursos”<sup>738</sup>.

Ello llevaría a afirmar que las creencias sobre los roles “no son elecciones conscientes que se puedan aceptar o rechazar de manera individual, sino que surgen del espacio colectivo, de la herencia familiar y de todos los ámbitos en que cada persona participe. Se trata de una construcción social que comienza a partir del nacimiento de los individuos, quienes potencian ciertas características y habilidades según su sexo e inhiben otras, de manera que quienes los rodean, les dan un trato diferenciado que se refleja en cómo se relacionan con ellos, dando lugar a la discriminación de género. No obstante, es mediante la interacción con otros medios que cada persona obtiene información nueva que la conduce a reafirmar o a replantear sus ideas de lo femenino y lo masculino”<sup>739</sup>.

Por tal motivo, se abordará el estudio de la identidad de género como condicionante de los estereotipos, ya que dicha condición repercute de manera negativa en el pleno ejercicio de los derechos de varones y de mujeres.

#### **4.2.1.4.1. La identidad de género como condicionante de los estereotipos**

El género “[e]s el conjunto de usos, maneras y comportamientos asociados culturalmente a un sexo determinado. Generalmente se adopta el rol de género que se asocia al propio sexo gonadal o identidad sexual, pero hay quienes, en mayor o menor grado, no cumplen esto. Se puede hablar pues de masculinidad y femineidad en el comportamiento social”<sup>740</sup>.

De lo dicho se desprende que la diferenciación de roles no está en relación a los caracteres sexuales que diferencian al varón y a la mujer, sino en la construcción social del género, es decir, como los roles asimilados como “propios” al varón y a la mujer. He allí el meollo del asunto y el objeto de nuestra investigación, ya que las rígidas categorías asumidas como

---

<sup>738</sup> Loc. cit.

<sup>739</sup> INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES). “El impacto de los estereotipos y los roles de género en México”. Op. cit., p. 2.

<sup>740</sup> ASOCIACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES DE ALICANTE. “Entendamos la diversidad”. Op. cit.

“naturales” a las personas pertenecientes al sexo femenino y masculino son las responsables de la ilegal diferenciación de la que las mujeres son objeto.

Ello permite construir la categoría de identidad de género, concebida por Fernández Dávila como aquella “definida tradicionalmente como masculinidad en hombres y femineidad en mujeres bajo el supuesto de diferencias sexuales. En base a ideales de hombre y mujer y de formas de relación supuestamente complementarias, se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad. Así, los estereotipos genéricos, es decir, las creencias generalizadas sobre cómo son o deben de ser las personas según su sexo, son los que definen roles, papeles distintos que deben desempeñar hombres y mujeres”<sup>741</sup>.

#### **4.2.1.4.2. Estereotipos de género**

Como señala Fernández Dávila, “para comprender cómo actúan los estereotipos de género señalaremos que éstos están compuestos (...) de cuatro componentes relativamente independientes: *características físicas, rasgos, roles y ocupaciones*. Sin embargo, (...) en ningún estudio se ha tomado en consideración estos componentes para comprender los estereotipos de género”<sup>742</sup> (las cursivas son nuestras).

##### **a. Características físicas**

La confluencia del sexo y de los estereotipos determina que las diferencias entre varones y mujeres se reducen al sexo gonadal, es decir, a los órganos sexuales que los distinguen. Cabe precisar que esta perspectiva trata de sustentarse en las definiciones propias del sexo cromosómico, ya que buscaría en él fundamentos científicos que establezcan las diferencias; no obstante, los caracteres físicos más saltantes constituyen el sustento inicial para la distinción y la posterior asignación de roles.

---

<sup>741</sup> FERNÁNDEZ DÁVILA, Rolando Percy. “Representaciones de La masculinidad em adolescentes de dos grupos de diferente estrato sócio-económico de Lima Metropolitana”. Tesis para optar por El Título de Licenciado en Psicología con mención en Psicología Clínica. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2004, p. 53.

<sup>742</sup> Loc. cit.

De acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres de México esto nos llevaría a la identificación del sexo, cuyo concepto “se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres; son características con las que se nace, universales e inmodificables”<sup>743</sup>.

## **b. Rasgos**

Los estereotipos de género también están compuestos por la asociación del pene a la fortaleza y de la vagina a la debilidad de la que se toma ventaja a través de la subyugación, ya que la fortaleza del pene constituye “el núcleo de la masculinidad porque ellas están basadas sobre las cualidades que son definidas como innatas e incambiables. Es así que las diferencias que se atribuyen a los géneros son señaladas como debido a una cuestión que tiene que ver con la naturaleza constitutiva de los sexos”<sup>744</sup>.

## **c. Roles**

Los roles constituyen aquel estadio de la construcción de los estereotipos en que las características físicas y los rasgos de los varones y de las mujeres permiten establecer de manera férrea los derechos y las obligaciones “connaturales” a la esencia de ambos grupos.

Por tal motivo, Fernández Dávila ha resumido tales roles en la idea de que “lo característico de ser hombre implica ser fuerte, tener más libertad que las mujeres y de realizar las cosas que más le gusta. (...) También se ha encontrado que, en la mayoría de la población, la visión del hombre y de sus tradicionales “virtudes naturales” se expresan y se relacionan con el poder, la destreza, la fuerza física, la agresividad, la valentía, el afán de emulación, la libertad, la determinación, la fortaleza y la frialdad emocional, etc. Pero, en general, es en

---

<sup>743</sup> INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES). “El impacto de los estereotipos y los roles de género en México”. Op. cit., p. 1.

<sup>744</sup> FERNÁNDEZ DÁVILA, Rolando Percy. “Representaciones de La masculinidad em adolescentes de dos grupos de diferente estrato sócio-económico de Lima Metropolitana”. Op. cit., p. 54.

la fuerza donde reside la diferencia entre los géneros. La fuerza es aquello que las mujeres no tienen”<sup>745</sup>.

Por otro lado, los roles de la mujer se explicarían a través de “su delicadeza y su afectividad al ser más cariñosas y sensibles que los hombres. Así, pues, la identidad femenina, en general, cifra sus características de género a partir de la fragilidad, mientras la identidad masculina lo hace a partir del poder. El concepto de feminidad se refiere a ideales tales como: sociabilidad, preocupación por los demás, capacidad de sufrir y soportar, expresividad, ternura, dulzura, fragilidad, pasividad, dependencia, sumisión, aceptación de los deseos y necesidad de satisfacer sexualmente al hombre, y ausencia de su propio placer erótico”<sup>746</sup>.

#### **d. Ocupaciones**

La configuración de los estereotipos de género concluye con la calificación de ocupaciones “propias” de varones y de mujeres. Así, pues, tenemos que sobre la base de la construcción de tales elementos y la calificación de las mujeres como débiles/sentimentales/maternales, la mujer fue en un primer momento encasillada en la ocupación doméstica, aún no reconocida como trabajo y mucho menos remunerada, para posteriormente incorporarse al trabajo externo en labores “propias” a su naturaleza, como sería la educación de niños/as y el cuidado de enfermos a través de la enfermería.

Si bien esta situación ha ido cambiando y la mujer se ha incorporado a ocupaciones que social e históricamente han sido asumidas como “propias” de los varones, la situación se revierte cuando esta se casa y tiene hijos, ya que al retornar a casa debe hacerse cargo de las ocupaciones “propias” de su sexo, como son el cuidado de sus hijos, del esposo y del hogar en general, mientras el varón sólo se encarga de ser el proveedor.

---

<sup>745</sup> Ibidem pp. 54-55.

<sup>746</sup> Ibidem pp. 57-58.

Ello lleva a asumir a Lamas que “el papel (rol) de género se configura con el conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino. Aunque hay variantes de acuerdo con la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta el estrato generacional de las personas, se puede sostener una división básica que corresponde a la división sexual del trabajo más primitiva: las mujeres paren a los hijos y, por lo tanto, los cuidan: ergo, lo femenino es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo masculino, que se identifica con lo público. La dicotomía masculino-femenino, con sus variantes establece estereotipos, las más de las veces rígidos, que condicionan los papeles y limitan las potencialidades humanas de las personas al estimular o reprimir los comportamientos en función de su adecuación al género”<sup>747</sup>.

#### **4.2.2. Segunda hipótesis específica**

**“La discriminación contra la mujer no se desvirtúa por la edad ni por la educación, pues incluso las jóvenes y aquellas con estudios superiores son discriminadas”**

##### **4.2.2.1. Operacionalización de las variables**

Antes de ingresar al desarrollo de esta hipótesis descriptiva, procederemos a operacionalizar las variables.

<b>Variable independiente</b>	<b>Indicador</b>	<b>Sistema de medición</b>	<b>Categorías</b>	<b>Dato</b>
<b>SEXO</b>	Clase	Nominal	Mujer - Varón	(1) (2)

<b>Variable dependiente</b>	<b>Indicador</b>	<b>Sistema de medición</b>	<b>Categorías</b>	<b>Dato</b>
-----------------------------	------------------	----------------------------	-------------------	-------------

<sup>747</sup> LAMAS, Martha. “La antropología feminista y la categoría género”. En: *Cuerpo, Diferencia Sexual y Género*. Taurus. México D.F., 2002, p. 33.

<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Producción	Nominal	Sí	(1)
			No	(2)

<b>Variable interfiriente</b>	<b>Indicador</b>	<b>Sistema de medición</b>	<b>Categorías</b>	<b>Dato</b>
<b>EDAD</b>	Clasificación	Nominal	Joven	(1)
			Adulto	(2)

<b>Variable interfiriente</b>	<b>Indicador</b>	<b>Sistema de medición</b>	<b>Categorías</b>	<b>Dato</b>
<b>EDUCACIÓN</b>	Nivel	Nominal	Básico	(1)
			Superior	(2)

#### **4.2.2.2. Edad**

Si bien en el extremo final de la explicación de la hipótesis relativa al machismo se expresó que la edad condiciona la producción de conductas machistas en cuanto al sujeto que realiza la ilegal conducta, debemos precisar que ella no es aplicable a la ahora propuesta, debido a que nos referiremos al grado de la edad en la configuración de la discriminación contra la mujer (originada por el machismo) sobre mujeres de diversas edades como potenciales víctimas de discriminación.

##### **4.2.2.2.1. Juventud y adultez**

El artículo 2° de la Ley del Consejo Nacional de la Juventud (Ley N° 27802), establece que se consideran jóvenes a las personas hasta 29 años de edad, por lo que hemos considerado



valernos de este concepto para desarrollar el estudio de la variable edad y definir como “jóvenes” al grupo antes descrito y “adultos” a las personas mayores de 29 años de edad.

Por tal motivo, a continuación expondremos consideraciones básicas en torno a la juventud y a la adultez, ya que dichos conceptos serán básicos para la identificación de ambos grupos como igualmente víctimas de discriminación por su sexo.

### **a. Juventud**

Como señala Horbath Corredor, “la noción de juventud es una categoría histórica que ha emergido a principios del siglo pasado. Su significado lejos está de permanecer idéntico a través de los años. En los últimos años han irrumpido productivos debates sobre si el hecho de compartir un rango de edad es criterio suficiente para hablar de los jóvenes como categoría analítica. Tales debates se han asentado en una larga tradición de estudios sobre culturas juveniles: los trabajos de la Escuela de Chicago sobre las pandillas juveniles, las reflexiones de Parsons sobre la transición a la adultez, los estudios sobre movimientos contraculturales de los sesenta y las investigaciones de la Escuela de Birmingham”<sup>748</sup>.

Otras apreciaciones, refiere Horbath Corredor, “se refieren al concepto de juventud como una construcción social determinada por un momento histórico específico y que presenta variaciones substantivas en cuanto a forma y contenidos, y que se asocia a la noción de culturas juveniles a partir de la formación de la sociedad industrial moderna<sup>749</sup>. Si se sigue a Feixa, por ejemplo, es posible diferenciar a través de la historia modelos diferentes, asociados a su vez, a diferentes modelos sociales: *púberes* en las sociedades primitivas sin estado; *efebos* en los Estados antiguos; *mozos* en las sociedades campesinas preindustriales;

---

<sup>748</sup> HORBATH CORREDOR, Jorge Enrique. “Las percepciones de las diferencias físicas en la ciudad de México: La discriminación que vive la población obesa, con discapacidad, con cicatrices, tatuada, con perforaciones en la piel, darketos, punkeros y personas cuya apariencia indica pertenecía indígena o a grupo religiosos, entre otros”. Op. cit., p. 28.

<sup>749</sup> BALARDINI, Sergio. “Jóvenes. Tecnología, participación y consumo. Ponencia 1 Seminario Europa-América Latina de Estudios sobre Juventud”. Lleida, 2002. Disponible en: [www.clacso.edu.ar/-libros/cyg/juventud/balardini](http://www.clacso.edu.ar/-libros/cyg/juventud/balardini) (Revisado el 10 de septiembre de 2007).

*muchachos* en la sociedad de la primera industrialización; y *jóvenes* en las sociedades modernas y postindustriales<sup>750,751</sup>.

## **b. Adultez**

“Durante mucho tiempo, la transición de la juventud a la edad adulta ha sido considerada como una serie de eventos independientes que ocurren en una secuencia normativa; explícitamente la salida de la escuela, el primer empleo, la salida del hogar, la primera unión y el nacimiento del primer hijo. (...) Sin embargo la transición de la juventud a la edad adulta, más que un conjunto de eventos que ocurren de manera ordenada a lo largo del curso de vida de los jóvenes, es un proceso en el cual cada joven elige, o se ve obligado a seguir, una trayectoria que finalmente lo convertirá en adulto.(...) Queda claro que la transición a la edad adulta no incluye los mismos componentes para todos, no sigue la misma secuencia y no ocurre conforme al mismo calendario”<sup>752</sup>.

Como podemos apreciar, el concepto de adultez es ciertamente difuso; sin embargo, para efectos de la presente investigación será considerado adulta la persona mayor de 29 años de edad. No obstante, consideramos que el estudio de los adultos ha dejado de lado a los adultos mayores, a quienes se asocia con la vejez. Sobre el particular, Gómez Carroza precisa que “normalmente se entiende por vejez la etapa de la vida que va desde los 65 años hasta la muerte. El inicio de la vejez, cifrado como acabamos de decir a los 65 años, coincide con una transición ecológica muy importante para la persona: la jubilación”<sup>753</sup>, por lo que “la vejez es consecuencia de un proceso biológico y el camino hacia el envejecimiento empieza en el mismo momento del nacimiento, pero la vejez también es una construcción socio-cultural (...) y una persona es vieja cuando las demás personas así

---

<sup>750</sup> FEIXA, Garles. “De jóvenes, bandas y tribus”. Ariel. Barcelona, 1998, pp. 288-289.

<sup>751</sup> HORBATH CORREDOR, Jorge Enrique. “Las percepciones de las diferencias físicas en la ciudad de México: La discriminación que vive la población obesa, con discapacidad, con cicatrices, tatuada, con perforaciones en la piel, dárketos, punkeros y personas cuya apariencia indica pertenencia indígena o a grupo religiosos, entre otros”. Op. cit., pp. 28-29.

<sup>752</sup> ECHARRI CÁNOVAS, Carlos Javier y PÉREZ AMADOR, Julieta. “En tránsito hacia la adultez: eventos en el curso de vida de los jóvenes en México” En: *Estudios Demográficos y Urbanos*. Volumen 22, N° 1. México D.F., 2007, p. 45.

<sup>753</sup> GÓMEZ CARROZA, Teresa. “Heteroestereotipos y autoestereotipos asociados a la vejez en Extremadura”. Op. cit., p. 11.

lo consideran y en consecuencia, empiezan a actuar con ella de tal forma que le van mostrando la imagen que presenta, ‘obligándola’ a adoptar comportamientos que sabe que se esperan de ella. Una persona se siente vieja a través de los otros, ya que la identidad no es sino la representación que nos hacemos de nosotros a través de la visión que otros tienen de nosotros”<sup>754</sup>.

#### 4.2.2.2.2. Victimización por edad

Gómez Carroza señala que “la edad, desde el punto de vista de la Psicología Evolutiva es una variable vacía, es decir, por sí misma no explica nada y el paso del tiempo por sí solo no aporta elementos que nos ayuden a comprender los procesos de desarrollo psicológico. Sin embargo, la edad tiene un indudable valor descriptivo, ya que suele ir asociada a una serie de circunstancias y cambios que sí tienen capacidad explicativa; determinados cambios son más característicos de unas edades que de otras, pero eso no significa que sea la edad la que produce por sí misma los cambios. La edad cronológica (años transcurridos desde el nacimiento de una persona) sólo nos serviría para ubicar a una persona en una determinada etapa o categoría”<sup>755</sup>.

No obstante, descartamos que la edad sea un condicionante para la configuración contra la mujer, pues como expresa “*la discriminación de género* es un fenómeno cultural, social, institucional, personal, cíclico, progresivo (en ocasiones mortal) que alude principalmente a niñas, jóvenes, mujeres adultas y mujeres adultas mayores. Algunos grupos son más vulnerables a sus efectos, por ejemplo las mujeres discapacitadas, migrantes, pobres, indígenas, desplazadas internas, lesbianas, etc. *Se presenta en todos los grupos sociales, edades, y posiciones socioeconómicas*. Tiene que ver con el condicionamiento, restricción o anulación de los derechos fundamentales y se expresa cotidianamente de formas diversas que van desde el piropo, el desprecio, el chantaje emocional, el sometimiento psicológico, agresión corporal, condicionamiento de dinero, y hasta las más dramáticas, que están

---

<sup>754</sup> Ibidem, p. 4.

<sup>755</sup> GÓMEZ CARROZA, Teresa. “Heteroestereotipos y autoestereotipos asociados a la vejez en Extremadura”. Op. cit., p. 14.

relacionadas con el encierro, la violencia física y los asesinatos”<sup>756</sup> (las cursivas son nuestras).

#### **4.2.2.3. Nivel educativo**

Si bien en el extremo final de la explicación de la hipótesis relativa al machismo se expresó que el nivel educativo condiciona la producción de conductas machistas en cuanto al sujeto que realiza la ilegal conducta, debemos precisar que ella no es aplicable a la ahora propuesta, debido a que nos referiremos al grado de incidencia de la discriminación contra la mujer (originada por el machismo) sobre mujeres que han alcanzado diversos niveles educativos como potenciales víctimas de discriminación.

##### **4.2.2.3.1. Educación**

La RAE define a la educación como la “[i]nstrucción por medio de la acción docente”<sup>757</sup>, concepto complementado por el Tribunal Constitucional como “la facultad de adquirir o transmitir información, conocimientos y valores a efectos de habilitar a las personas para sus acciones y relaciones existenciales y coexistenciales; amén de ser una guía, dirección u orientación para el desarrollo integral de la persona”<sup>758</sup>.

##### **4.2.2.3.2. Niveles educativos**

El artículo 13° de la Constitución nos ayuda a concatenar la educación con los niveles educativos, puesto que al procurar el desarrollo integral del ser humano, se parte de la premisa que la educación es un proceso continuo e ininterrumpido que se da a lo largo de la vida de las personas. Por lo tanto, los conocimientos impartidos tendrán en consideración a sus receptores, tomando en cuenta su edad y el acervo de conocimientos con el que

---

<sup>756</sup> SERRET BRAVO, Andrea. “Estrategia de prevención y sanción a la discriminación de género. Análisis y propuestas, a partir de la primera encuesta nacional sobre discriminación en México de Sedesol-Conapred”. Documento de trabajo N° E-12-2006. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). México D.F., 2006, p. 43.

<sup>757</sup> RAE. Disponible en: [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=educacion](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=educacion) (Revisado el 07 de junio de 2009).

<sup>758</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el Expediente N° 04232-2004-AA/TC.

cuentan. De esta manera, la educación adopta diferentes formas y dimensiones, que se traducirán en un **proceso de aprendizaje escalonado**, categoría en la que se encuentra el concepto de los **niveles educativos**. Cabe precisar que *el acceso a los diferentes niveles y, como se verá, etapas del proceso educativo será sólo posible en la medida que el Estado garantice la pluralidad de ofertas sobre la base de las condiciones socio-económicas de los diferentes sectores de nuestra sociedad*<sup>759</sup>. Así pues, dichas condiciones serán distintas en tanto nos refiramos a personas del área rural o urbana, del sector económico medio o alto, de una comunidad quechuahablante o de habla española, etc.

Los **niveles educativos** son definidos por el artículo 28°.b) de la Ley General de Educación (Ley N° 28044), como los “*períodos graduales del proceso educativo articulados en las etapas educativas*” (las cursivas son nuestras). Estas últimas son definidas por el literal a) del mismo artículo como “*períodos progresivos en que se divide el Sistema Educativo*” (las cursivas son nuestras). El artículo 29° establece que el Sistema Educativo comprende las etapas de la Educación Básica y la Educación Superior.

Los conceptos de etapa y nivel educativo refieren a los diferentes grados del mismo, en tanto se comprende que los beneficiarios de la política estatal educativa son una pluralidad de seres humanos que se encuentran en situaciones dispares, por lo que merecen ser beneficiarios de tal derecho de acuerdo a su grado presumido de conocimientos que es determinado por la aprobación de cada fase dentro del proceso.

A continuación veamos los diferentes niveles educativos en los que se haya estructurado nuestro sistema.

#### **4.2.2.2.3.1. Niveles educativos de la Educación Básica**

Conforme establece el artículo 36 de la Ley N° 28044, son tres los niveles que componen la Educación Básica: Educación Inicial, Primaria y Secundaria.

---

<sup>759</sup> GUTIERREZ CAMACHO, Walter (Coordinador). “La Constitución comentada”. Tomo I. Gaceta Jurídica. Lima, 2005, p.450.

#### **a. Nivel de Educación Inicial**

El artículo 36.a lo define como “el primer nivel de la Educación Básica Regular, atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 años en forma escolarizada. (...) [L]a Educación Inicial cumple la finalidad de promover prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo integral de los niños, tomando en cuenta su crecimiento socioafectivo y cognitivo, la expresión oral y artística y la sicomotricidad y el respeto de sus derechos”.

Como se aprecia, la definición dada por la ley se refiere a la educación básica regular, como aquella destinada a las personas comprendidas dentro del plan curricular, en consideración a ciertos factores, como la edad regular para cursar cada nivel y no encontrarse comprendido dentro de la población con necesidades educativas especiales que hagan imposible que el alumno se integre a los programas regulares de educación.

#### **b. Nivel de Educación Primaria**

El artículo 36°.b lo define como “el segundo nivel de la Educación Básica Regular (...) [que] [p]romueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de las habilidades necesarias para el despliegue de sus potencialidades, así como la comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural y social”.

#### **c. Nivel de Educación Secundaria**

El artículo 36°.c lo define como “el tercer nivel de la Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación científica, humanista y técnica. (...) Está orientada al desarrollo de competencias que permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente cambio. Forma para

la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio”.

A diferencia de lo que ocurría con nuestros anteriores textos constitucionales, como el de 1920 que en su artículo 53° establecía sólo a la educación primaria como gratuita, la Carta vigente considera a la educación secundaria dentro del beneficio de la gratuidad. Esta medida se fundamenta en la conciencia que el constituyente de 1993 tuvo respecto a la necesidad de implementar mecanismos dirigidos a la universalización de este nivel educativo.

#### **4.2.2.2.3.2. Educación Superior**

A diferencia del punto precedente, no se hace referencia a los niveles de la educación superior debido a que nuestra Ley General de Educación en ningún momento refiere la existencia de niveles dentro de esta etapa educativa. Por estas razones abordamos su tratamiento a partir del artículo 51° de la Ley al establecer una lista no excluyente de las instituciones que componen la educación superior: “[l]as instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y otros centros que imparten Educación Superior pueden ser públicos o privados y se rigen por ley específica”.

Cabe precisar que entre la Educación Básica y la Superior se establece una línea divisoria en cuanto a su acceso y gratuidad. Mientras que la primera etapa es obligatoria y gratuita, la Superior es gratuita sólo en los supuestos de rendimiento satisfactorio y escasez de recursos económicos, conforme establece el artículo 17° de la Constitución.

La educación universitaria, como alternativa dentro de la educación superior, ha sido abordada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tomando como referente el acceso a las universidades como manifestación del derecho a la educación. Sobre el particular ha dicho que “el derecho fundamental a la educación universitaria no sólo garantiza, entre otros, el derecho de acceso a la universidad en condiciones de igualdad (previo cumplimiento de los requisitos que razonablemente se impongan al respecto), sino

también el derecho a permanecer en ella libre de limitaciones arbitrarias mientras se desarrolle el estudio y la actividad de investigación, e incluso el derecho a la obtención del respectivo título universitario una vez cumplidos los requisitos académicos y administrativos correspondientes, estos contenidos también podrán ser objeto de tutela mediante el proceso de amparo”<sup>760</sup>.

La importancia de la educación superior –tanto en universidades como en institutos y escuelas- radica en que esta etapa de la educación se dirige a la formación profesional de los seres humanos, partiendo del presupuesto que tales centros se encuentran destinados a la investigación, en su calidad de proceso enriquecedor de las disciplinas impartidas y de sus alumnos.

#### **4.2.2.3.3. Victimización de la mujer de acuerdo a su nivel educativo**

Este punto del estudio se explicará a través de una situación que, si bien ya fue expuesta, resulta pertinente para acreditar que las mujeres son víctimas de discriminación aún cuando cuentan con estudios superiores.

Así pues, mientras las mujeres con estudios primarios perciben en promedio S/. 161.00 menos que los varones con el mismo nivel educativo, las mujeres con estudios secundarios perciben en promedio S/. 546.00 soles menos que los varones con el mismo nivel educativo, siendo mayor el promedio del margen en el caso de las mujeres con estudios superiores: en el caso de las que alcanzaron estudios superiores no universitarios, la diferencia es de S/. 863.00 y en las que alcanzaron estudios superiores universitarios es de S/. 1792.00<sup>761</sup>.

En consecuencia, se acredita que el nivel educativo de la mujer no la hace menos propensa a ser víctima de discriminación, ya que al estar sustentado tal fenómeno en parámetros

---

<sup>760</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el Expediente N° 04232-2004-AA/TC.

<sup>761</sup> VELAZCO PORTOCARRERO, Tatiana (Coordinadora). “La mujer en el mercado laboral peruano. Informe anual 2005”. Op. cit., p. 31.



culturales, estos son los que deben ser revertidos a efectos de que las mujeres puedan ejercer sus derechos plenamente.

## **5. TIPO DE INVESTIGACIÓN**

La complejidad de la presente investigación, determina que esta sea clasificada a través de las siguientes categorías:

### **5.1. Investigación descriptiva**

La presente investigación es descriptiva pues narra la realidad de la mujer en nuestro país. La clasificación en esta categoría obedece a que “requiere considerable conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas específicas que busca responder”<sup>762</sup>. Esto se corrobora en la exposición de la situación de la mujer en cuanto al ejercicio de sus DESC en el Perú, lo cual nos lleva a afirmar el carácter descriptivo de la investigación, ya que “los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o variables a los que se refieren (...). [Por ello,] la descripción puede ser más o menos profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno descrito”<sup>763</sup>.

### **5.2. Investigación correlacional**

A su vez, la presente investigación es correlacional debido a que se concatenan las diversas variables adoptadas a efectos de encontrar un grado de relación entre las mismas. Ello ocurre, conforme se ha expuesto, en el caso de la relación entre el nivel educativo de la madre y el grado de desnutrición del hijo.

A mayor abundamiento, Hernández Sampieri considera que “los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos

---

<sup>762</sup> HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. “Metodología de la investigación”. Mc Graw Hill. México D.F., 2003, p. 61.

<sup>763</sup> Loc. cit.

sujetos y después se analiza la correlación”<sup>764</sup>. Ello, a su vez, se acredita en la parte pertinente al estudio del resultado de las hipótesis propuestas, ya que en ellas se verá el grado de incidencia del machismo sobre la mujer en cuanto a la producción de la discriminación y si ella se mengua al incorporarse otras variables como son nivel educativo y edad.

### **5.3. Investigación exploratoria**

Esta clase de investigación es concebida como aquella cuyo objetivo “es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes”<sup>765</sup>. En lo que respecta a la presente investigación ello se acredita en lo que al trabajo no remunerado del ama de casa concierne, ya que no existe documentación oficial que se pronuncie sobre ello, tan sólo la mención de que el 29% de la PEA femenina realiza estas labores.

De ello brota la necesidad del investigador de explorar en la realidad a efectos de concatenar los diversos conocimientos jurídicos que regulan las características del trabajo y de las relaciones derivadas de la relación laboral. Por ello, Hernández Sampieri precisa que “estos estudios le servirán para ver cómo han abordado la situación de investigación y le sugerirán preguntas que puede hacer (...) [sirviendo] para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real”<sup>766</sup>.

### **5.4. Investigación explicativa**

Hernández Sampieri considera que “los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a las causas de los eventos físicos o sociales”<sup>767</sup>. De ello se desprende que la

---

<sup>764</sup> Ibidem, p. 62.

<sup>765</sup> Ibidem, p. 58.

<sup>766</sup> Ibidem, p. 59.

<sup>767</sup> Ibidem, p. 66.

presente tesis se provee de la investigación explicativa, ya que uno de sus objetivos es explicar las causas y las consecuencias de la discriminación contra la mujer en Perú.

## **6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN**

El diseño de la investigación se refiere al plan que por el que opta el investigador para realizar el estudio. En lo que respecta a la presente tesis, se ha optado por un **DISEÑO DE INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL TRANSVERSAL**.

El diseño de la investigación es **no experimental** de la tesis pues no se ejerce manipulación alguna sobre las variables de las que se extraen datos del universo de investigación, ya que deseamos saber si la concurrencia de dichas variables propicia la configuración de actos discriminadores en contra de la mujer. Como señala un material de estudio de la Universidad del Cauca, la investigación no experimental “es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Lo que se hace en una investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad. En estudio no experimental los sujetos ya pertenecían a un grupo o nivel determinado de la variable independiente por autoselección”<sup>768</sup>.

De igual manera, es **transversal** pues los datos han sido recogidos en un solo tiempo, lo que se acredita en las fichas de encuestas, en las que se corrobora que fueron tomadas en el Ilustre Colegio de Abogados del Callao el 08 de agosto de 2008. Sobre esta clase de investigación, la Universidad del Cauca señala que “los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento

---

<sup>768</sup> UNIVERSIDAD DEL CAUCA. “Capítulo 7. Diseños no experimentales de investigación”. Disponible en:

<http://www.prometeo.unicauca.edu.co/manzamb/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n/Archivos/Libro/Documentos%20pdf/CAPITULO%207.pdf> (Revisado el 28 de mayo de 2009).

dado. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores. Pero siempre, la recolección de datos se realiza en un momento único”<sup>769</sup>.

## **7. UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN. SELECCIÓN DE MUESTRA. UNIDAD DE ANÁLISIS**

El estudio de esta parte de la tesis ha sido disgregado en los siguientes puntos:

### **7.1. UNIVERSO (N)**

Se ha identificado como universo de investigación son las **mujeres y varones peruanos**, a efectos de establecer si han sido víctimas o no de discriminación.

### **7.2. UNIDAD DE ANÁLISIS (n)**

La unidad de análisis (n) para está constituida por **43 personas entrevistadas** en la provincia constitucional del Callao, específicamente a mujeres y varones que acuden a los eventos académicos que se realizan en el Ilustre Colegio de Abogados del Callao.

### **7.3. SELECCIÓN DE MUESTRA**

La muestra seleccionada ha sido realizada **al azar**. Está constituida por **39 personas**, cifra a la que se arribó a través de la **Fórmula Estadística de Proporciones de una Población Finita**.

Para calcular el tamaño de la muestra se ha utilizado la siguiente fórmula estadística:

---

<sup>769</sup> Loc. cit.

$$n = \frac{(Z)^2 (PQ N)}{(E)^2 (N-1) + (Z)^2 PQ}$$

Donde:

Z = Desviación estándar

E = Error de muestreo

P – Probabilidad de ocurrencia de los casos

Q = 1 – P

N = Tamaño del universo de población

Aplicando la fórmula, el resultado es el siguiente:

$$n = \frac{(1.96)^2 (0.5 \times 0.5) (43)}{[(0.05)^2 (43-1)] + [(1.96)^2 (0.5 \times 0.5)]}$$

$$n = \frac{(3.8416) (0.25) (43)}{[(0.0025) (42)] + [(3.8416) (0.25)]}$$

$$n = \frac{41.2972}{[0.105] + [0.9604]}$$

$$n = \frac{41.2972}{1.0654}$$

$$n = 38.76215505913272010512483542444$$

$$n = 39$$

Por otro lado, se utilizó la **Tabla de Selección Aleatoria de Números**<sup>770</sup> para identificar las 39 muestras que serían seleccionadas del total de personas entrevistadas. Considerando que la búsqueda se realiza en función a dos dígitos, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha; se ha podido determinar la siguiente tabla que identifican las unidades de información seleccionadas, las cuales han sido sombreadas:

10	09	73	25	33	76	52	01	35	86	34	67	35	48	76	80	95	90	91	17	39	29	27	49	45
37	54	20	48	05	64	89	47	42	96	24	80	52	40	37	20	63	61	04	02	00	82	29	16	65
08	42	26	89	53	19	64	50	93	03	23	20	90	25	60	15	95	33	47	64	35	08	03	36	06
99	01	90	25	29	09	37	67	07	15	38	31	13	11	65	88	67	67	43	97	04	43	62	76	59
12	80	79	99	70	80	15	73	61	47	64	03	23	66	53	98	95	11	68	77	12	17	17	08	33
66	06	57	47	17	34	07	27	68	50	36	69	73	61	70	65	81	33	98	85	11	19	92	91	70
31	06	01	08	05	45	57	18	24	06	35	30	34	26	14	86	79	90	74	39	23	40	30	97	32
85	26	97	76	02	02	05	16	56	92	68	66	57	48	18	73	05	38	52	47	18	62	38	85	79
63	57	33	21	35	05	32	54	70	48	90	55	35	75	48	28	46	82	87	09	83	49	12	56	24
73	79	64	57	53	03	52	96	47	78	35	80	83	42	82	60	93	52	03	44	35	27	38	84	35
98	52	01	77	67	14	90	56	86	07	22	10	94	05	58	60	97	09	34	33	50	50	07	39	98
11	80	50	54	31	39	80	82	77	32	50	72	56	82	48	29	40	52	42	01	52	77	56	78	51
83	45	29	96	34	06	28	89	80	83	13	74	67	00	78	18	47	54	06	10	68	71	17	78	17
88	68	54	02	00	86	50	75	84	01	36	76	66	79	51	90	36	47	64	93	29	60	91	10	62

<sup>770</sup> DIXON WJ, MASSEY FJ Jr, "Introduction to statistical analysis". 4° edición. McGraw-Hill. Nueva York, 1983.

99 59 46 73 48 87 51 76 49 69 91 82 60 89 28 93 78 56 13 68 23 47 83 41 13

65 48 11 76 74 17 46 85 09 50 58 04 77 69 74 73 03 95 71 86 40 21 81 65 44  
80 12 43 56 35 17 72 70 80 15 45 31 82 23 74 21 11 57 82 53 14 38 55 37 63  
74 35 09 98 17 77 40 27 72 14 43 23 60 02 10 45 52 16 42 37 96 28 60 25 55  
69 91 62 68 03 66 25 22 91 48 36 93 68 72 03 76 62 11 39 90 94 40 05 64 18  
09 89 32 05 05 14 22 56 85 14 46 42 75 67 68 96 29 77 88 22 54 38 21 45 98

91 49 91 45 23 68 47 92 76 86 46 16 28 35 54 94 75 08 99 23 37 08 92 00 48  
80 33 69 45 98 26 94 03 68 58 70 29 73 41 35 53 14 03 33 40 42 05 08 23 41  
44 10 48 19 49 85 15 74 79 54 32 97 92 65 75 57 60 04 08 81 22 22 20 54 13  
12 55 07 37 42 41 10 00 20 40 12 86 07 46 97 96 64 48 94 39 28 70 72 58 15  
63 60 64 93 29 16 50 53 44 84 40 21 95 25 63 43 65 17 70 82 07 20 73 17 90

61 19 69 04 46 26 45 74 77 74 51 92 43 37 29 65 39 45 95 93 42 58 26 05 27  
15 47 44 52 66 95 27 07 99 53 59 36 78 38 48 82 39 61 01 18 33 21 15 94 66  
94 55 72 85 73 67 89 75 43 87 54 62 24 44 31 91 19 04 25 92 92 92 74 59 73  
42 48 11 62 13 97 34 40 87 21 16 86 84 87 67 03 07 11 20 59 25 70 14 66 70  
23 52 37 83 17 73 20 88 98 37 68 93 59 14 16 26 25 22 96 63 05 52 28 25 62

04 49 35 24 94 75 24 63 38 24 45 86 25 10 25 61 96 27 93 35 65 33 71 24 72  
00 54 99 76 54 64 05 18 81 59 96 11 96 38 96 54 69 28 23 91 23 28 72 95 29  
35 96 31 53 07 26 89 80 93 54 33 35 13 54 62 77 97 45 00 24 90 10 33 93 33  
59 80 80 83 91 45 42 72 68 42 83 60 94 97 00 13 02 12 48 92 78 56 52 01 06  
46 05 88 52 36 01 39 09 22 86 77 28 14 40 77 93 91 08 36 47 70 61 74 29 41

32 17 90 05 97 87 37 92 52 41 05 56 70 70 07 86 74 31 71 57 85 39 41 18 38  
69 23 46 14 06 20 11 74 52 04 15 95 66 00 00 18 74 39 24 23 97 11 89 63 38  
19 56 54 14 30 01 75 87 53 79 40 41 92 15 85 66 67 43 68 06 84 96 28 52 07  
45 15 51 49 38 19 47 60 72 46 43 66 79 45 43 59 04 79 00 33 20 82 66 95 41  
94 86 43 19 94 36 16 81 08 51 34 88 88 15 53 01 54 03 54 56 05 01 45 11 76

## 8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Los datos que sustentan la presente investigación han sido recolectados de la siguiente manera:

### 8.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La técnica empleada ha sido la de la **encuesta**. A mayor abundamiento, Chávez de Paz señala que “en la Investigación Social y Jurídico Social, la recolección de datos se refiere al proceso de obtención de información empírica que permita la medición de las variables en las

unidades de análisis, a fin de obtener los datos necesarios para el estudio del problema o aspecto de la realidad social motivo de investigación”<sup>771</sup>.

En lo que concierne a la presente tesis, la encuesta contiene las 6 variables que componen las hipótesis (machismo, sexo, discriminación, nivel educativo, estereotipos y edad). A su vez, las personas encuestadas han elegido entre las alternativas ofrecidas como respuestas a cada una de las variables expuestas, tomando como criterio de elección su identificación frente a una de las dos alternativas propuestas.

**1. ¿Cuál es su **sexo**?**

- a.** Femenino
- b.** Masculino

**2. ¿Ha sido objeto de **discriminación**?**

- a.** Sí
- b.** No

**3. ¿Ha sido objeto de **machismo**?**

- a.** Sí
- b.** No

**4. ¿Ha sido objeto de **estereotipos**?**

- a.** Sí
- b.** No

---

<sup>771</sup> CHÁVEZ DE PAZ, Dennis. “Conceptos y técnicas de recolección de datos en la investigación jurídico social”. Université de Fribourg. Fribourg, p. 6. Disponible en: [http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a\\_20080521\\_56.pdf](http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_56.pdf) (Revisado el 28 de mayo de 2009).



**5. ¿Hasta qué nivel educativo ha cursado estudios?**

- a. Básico (primaria y/o secundaria)
- b. Superior (técnico o universitario)

**6. Edad**

- a. 0 a 29 años (Jóvenes)
- b. 30 a más años (Adultos)

## **8.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

Conforme señala Chávez de Paz, “el instrumento de recolección de datos es imprescindible para la construcción de la Matriz Tripartita de Datos o simplemente la Matriz de Datos; pues mediante el instrumento de recolección de datos se obtiene la información sobre las variables”<sup>772</sup>. En lo que concierne a la presente tesis, el instrumento de recolección de datos lo constituye la **matriz de datos**.

## **9. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS**

Para que las hipótesis se corroboren debe de existir una sincronía entre todas las alternativas (a) o (b) de cada una de las variables, lo cual se leería de la siguiente manera:

### **9.1. Respuestas con la alternativa (a):**

“Si su sexo es femenino sí ha sido objeto de una conducta machista, expresada en estereotipos, lo cual determina que haya sido víctima de discriminación, más aún si es joven y su nivel educativo es básico”.

### **9.2. Respuestas con la alternativa (b):**

---

<sup>772</sup> Ibidem, p. 5.

“Si su sexo es masculino no ha sido objeto de una conducta machista, no habiendo sido víctima de estereotipos, lo cual determina que no haya sido víctima de discriminación, tendencia que se acentúa en adultos cuyo nivel educativo es superior”.

## **10. ORDENAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS**

### **10.1. ORDENAMIENTO DE LOS DATOS**

Para analizar los datos, hemos considerado pertinente codificar las respuestas de acuerdo a la alternativa escogida:

- Si la respuesta escogida corresponde a la alternativa **(a)**, será **codificada con el número (1)**
- Si la respuesta escogida corresponde a la alternativa **(b)**, será **codificada con el número (2)**

Ello porque, como se explicó en el punto anterior, todas las alternativas (a) guardan relación para confirmar la hipótesis de que la mujer es objeto de discriminación sexual por causa del machismo. De igual manera, todas las alternativas (b) guardan relación para confirmar la discriminación sexual solo se produce en el varón, ya que este no es víctima del machismo.

Una vez obtenidos los datos y codificados, estos serán incorporados en una matriz, colocándose el dígito que corresponda según la respuesta dentro de la casilla perteneciente a las cuatro variables que guían la investigación.

A continuación, mostramos cómo quedan plasmados los resultados en la matriz, precisando que las unidades sombreadas en amarillo constituyen las muestras seleccionadas:

	<b>Machismo</b>	<b>Discriminación</b>	<b>Sexo</b>	<b>Estereotipos</b>	<b>Nivel educativo</b>	<b>Edad</b>
<b>Número de muestras</b>	<b>V1</b>	<b>V2</b>	<b>V3</b>	<b>V4</b>	<b>V5</b>	<b>V6</b>
1	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	1	2	2
3	2	2	2	2	2	2
4	1	1	1	2	2	2
5	2	2	2	2	2	2
6	2	1	2	1	2	2
7	2	2	1	2	2	2
8	2	2	2	2	2	2
9	2	2	2	2	2	2
10	2	1	2	2	2	2
11	1	1	1	1	2	2
12	2	1	2	2	2	2
13	2	1	2	1	2	2
14	1	2	1	2	2	2
15	1	2	1	1	2	2
16	1	2	1	1	2	2
17	1	1	2	1	2	2
18	2	2	2	2	2	2
19	2	2	2	2	2	2
20	1	2	2	1	2	2
21	1	1	1	1	2	2
22	2	2	2	2	2	2
23	2	2	1	1	2	2
24	1	2	1	1	2	2
25	1	2	1	1	2	2

26	1	1	2	2	2	2
27	2	2	1	2	2	2
28	2	2	1	2	2	2
29	2	2	2	2	2	2
30	2	1	2	2	1	2
31	1	1	1	1	2	2
32	2	2	2	2	2	2
33	2	2	2	2	2	2
34	2	2	1	2	2	2
35	2	2	2	2	2	1
36	2	2	1	1	1	1
37	2	1	2	2	2	1
38	1	2	1	2	1	1
39	1	2	1	2	1	1
40	2	2	1	2	2	1
41	2	2	1	2	1	1
42	2	2	1	2	1	1
43	1	2	1	2	2	1

## 10.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS

### 10.2.1. Aplicación de fórmula estadística

A continuación se determinará cómo inciden el machismo, el sexo, los estereotipos, la edad y el nivel educativo en la configuración de la discriminación. Para ello, se abordará el estudio de manera general y, posteriormente, a través de estudios diferenciados en los casos de varones y de mujeres.

Para llevar a cabo tal análisis, se utilizará la **Metodología del coeficiente de contingencia**, el cual quedará expresado en un plano cartesiano. En dicho plano, se identificarán las letras

“a” y “b” de la fórmula, donde “a” corresponde al casillero donde se cumple la hipótesis y “b” al casillero adyacente al que se cumple la hipótesis.

En segundo lugar, se aplicará la **Fórmula con relación a los porcentajes obtenidos**  $[r = (a-b)/(a+b)]$  y se graficará en la recta numérica la escala de correlación de la siguiente manera:

- **Rango entre 0.25 a 1:** La hipótesis se habrá confirmado.
- **Rango entre -0.25 a 0.25:** Será clasificada en la “escala del 0”; es decir, no existe relación entre las variables.
- **Rango entre -1 a -0.25:** El resultado será inverso a la hipótesis planteada.

#### 10.2.1.1. Relación entre machismo y discriminación

### **RELACIÓN ENTRE MACHISMO Y DISCRIMINACIÓN**

(Hipótesis 1)

	<b>Machismo</b>	<b>Discriminación</b>	<b>Sexo</b>
<b>Número de muestras</b>	<b>V1</b>	<b>V2</b>	<b>V3</b>
<b>1</b>	2	2	2
<b>2</b>	2	2	2
<b>3</b>	2	2	2
<b>4</b>	1	1	1
<b>5</b>	2	2	2
<b>6</b>	2	1	2
<b>7</b>	2	2	1
<b>8</b>	2	2	2
<b>9</b>	2	2	2
<b>10</b>	2	1	2
<b>11</b>	1	1	1
<b>12</b>	2	1	2
<b>13</b>	2	1	2
<b>14</b>	1	2	1

15	1	2	1
16	1	2	1
17	1	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	1	2	2
21	1	1	1
22	2	2	2
23	2	2	1
24	1	2	1
25	1	2	1
26	1	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	2	1	2
31	1	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	2	2	2
36	2	2	1
37	2	1	2
38	1	2	1
39	1	2	1
40	2	2	1
41	2	2	1
42	2	2	1
43	1	2	1

a. Cuadro cartesiano

		V1	
		MACHISMO	
		1	2
V2	1	6 43% a	6 24% b
	2	8	19
DISCRIMINACIÓN		14	25
		+ = 39	

b. Coeficiente de relación estadística

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

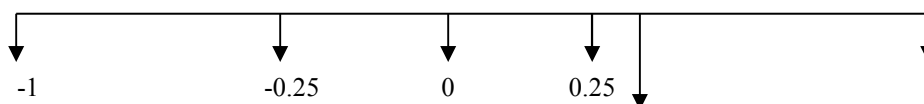
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{43-24}{43+24}$$

$$r = 0.28$$

c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

Coeficiente de relación machismo y discriminación
---



**0.28** (HIPÓTESIS CORROBORADA: El machismo es un factor que condiciona la discriminación de varones y mujeres)

#### **d. Explicación del coeficiente de relación estadística**

De los datos obtenidos se advierte que:

- **Se comprueba la hipótesis:** El machismo constituye un factor que condiciona la discriminación entre varones y mujeres.
- **Observación:** Sin perjuicio de estos resultados, cabe señalar que se realizará un estudio desgregado por sexo que nos permitirá establecer en cuál de los sexos se produce con mayor grado la discriminación originada por el machismo.

##### **10.2.1.1.1. El sexo como condicionante de la relación machismo y discriminación**

Se estudiará esta relación analizando la incidencia de discriminación en el caso de las mujeres y de los varones

##### **10.2.1.1.1.1. Relación entre machismo y discriminación en las mujeres**

#### **RELACIÓN ENTRE MACHISMO Y DISCRIMINACIÓN EN LAS MUJERES**

(Hipótesis 1)

	<b>Machismo</b>	<b>Discriminación</b>	<b>Sexo</b>
<b>Número de muestras</b>	<b>V1</b>	<b>V2</b>	<b>V3</b>
<b>1</b>	2	2	2
<b>2</b>	2	2	2
<b>3</b>	2	2	2
<b>4</b>	1	1	1
<b>5</b>	2	2	2
<b>6</b>	2	1	2
<b>7</b>	2	2	1
<b>8</b>	2	2	2
<b>9</b>	2	2	2
<b>10</b>	2	1	2



11	1	1	1
12	2	1	2
13	2	1	2
14	1	2	1
15	1	2	1
16	1	2	1
17	1	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	1	2	2
21	1	1	1
22	2	2	2
23	2	2	1
24	1	2	1
25	1	2	1
26	1	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	2	1	2
31	1	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	2	2	2
36	2	2	1
37	2	1	2
38	1	2	1
39	1	2	1
40	2	2	1
41	2	2	1
42	2	2	1
43	1	2	1

a. Cuadro cartesiano

		V1 MACHISMO	
		1	2
V2 DISCRIMINACIÓN	1	4 36% a	0 00% b
	2	7	7
		11	+ 07 = 18

b. Coeficiente de relación estadística

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

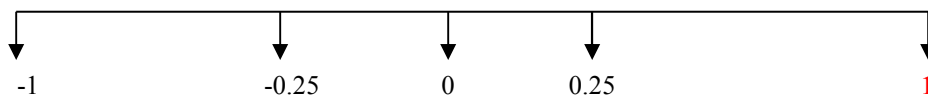
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{36-00}{36+00}$$

$$r = 1.00$$

c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

Coeficiente de relación machismo y discriminación en las mujeres



**1.00** (HIPÓTESIS CONFIRMADA: El machismo es un factor que condiciona la discriminación de las mujeres)

#### d. Explicación del coeficiente de relación estadística

De los datos obtenidos se advierte lo siguiente:

- **Se comprueba la hipótesis:** El machismo constituye un factor que condiciona la discriminación de las mujeres.
- **Observación:** No obstante, debe precisarse que la comprobación de esta hipótesis será analizada de manera transversal con los demás resultados que se alcancen en la relación de las demás variables con la producción de la discriminación.

#### 10.2.1.1.2. Relación entre machismo y discriminación en los varones

#### RELACIÓN ENTRE MACHISMO Y DISCRIMINACIÓN EN LOS VARONES

(Hipótesis 1)

	<b>Machismo</b>	<b>Discriminación</b>	<b>Sexo</b>
<b>Número de muestras</b>	<b>V1</b>	<b>V2</b>	<b>V3</b>
<b>1</b>	2	2	2
<b>2</b>	2	2	2
<b>3</b>	2	2	2
<b>4</b>	1	1	1
<b>5</b>	2	2	2
<b>6</b>	2	1	2
<b>7</b>	2	2	1
<b>8</b>	2	2	2
<b>9</b>	2	2	2
<b>10</b>	2	1	2
<b>11</b>	1	1	1
<b>12</b>	2	1	2
<b>13</b>	2	1	2
<b>14</b>	1	2	1
<b>15</b>	1	2	1

16	1	2	1
17	1	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	1	2	2
21	1	1	1
22	2	2	2
23	2	2	1
24	1	2	1
25	1	2	1
26	1	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	2	1	2
31	1	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	2	2	2
36	2	2	1
37	2	1	2
38	1	2	1
39	1	2	1
40	2	2	1
41	2	2	1
42	2	2	1
43	1	2	1

a. Cuadro cartesiano

		V1 MACHISMO	
		1	2
V2 DISCRIMINACIÓN	1	2 67% a	6 33% b
	2	1	12
		03	+ 18 = 21

b. Coeficiente de relación estadística

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

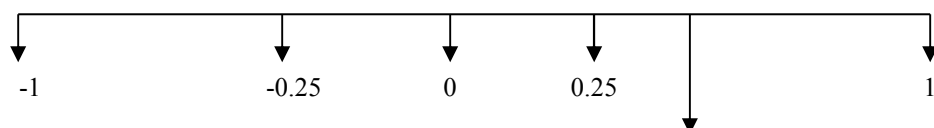
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{67-33}{67+33}$$

$$r = 0.34$$

c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

Coeficiente de relación machismo y discriminación
---



**0.34** (HIPÓTESIS CONFIRMADA: El machismo es un factor que condiciona la discriminación de los varones)

#### **d. Explicación del coeficiente de relación estadística**

- **Se comprueba la hipótesis:** El machismo constituye un factor que condiciona la discriminación contra los varones.
- **Observaciones:** Si bien desde el imaginario colectivo resulta un dato sorprendente, debemos dejar en claro que de la doctrina incluida en esta investigación, se ha determinado que el machismo condiciona la discriminación en aquellos casos que se quebrante el rol de género, siendo indiferente el sexo de la víctima.

#### **10.2.1.2. Relación entre sexo y discriminación**

##### **RELACIÓN ENTRE SEXO- DISCRIMINACIÓN**

(Hipótesis 2: Sexo como variable rectora)

	Sexo	Discriminación
Número de muestras	V3	V2
1	2	2
2	2	2
3	2	2
4	1	1
5	2	2
6	2	1
7	1	2
8	2	2
9	2	2
10	2	1
11	1	1
12	2	1
13	2	1
14	1	2
15	1	2
16	1	2
17	2	1

18	2	2
19	2	2
20	2	2
21	1	1
22	2	2
23	1	2
24	1	2
25	1	2
26	2	1
27	1	2
28	1	2
29	2	2
30	2	1
31	1	1
32	2	2
33	2	2
34	1	2
35	2	2
36	1	2
37	2	1
38	1	2
39	1	2
40	1	2
41	1	2
42	1	2
43	1	2

a. Cuadro cartesiano

		V1	
		SEXO	
		1	2
V2	1	a	b
	DISCRIMINACIÓN	4 22%	8 38%
	2	14	13
		18	21 = 39

## b. Coefficiente de relación estadística

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

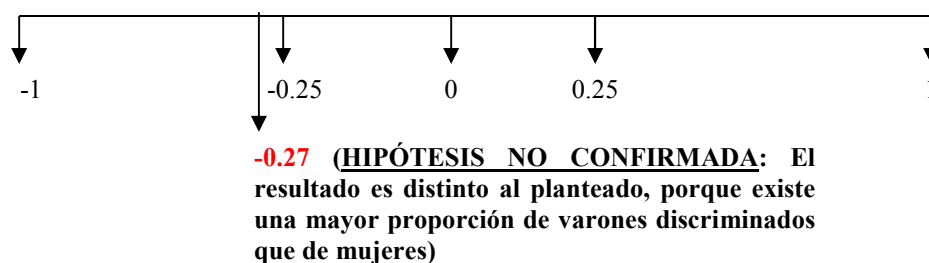
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{22-38}{22+38}$$

$$r = -0.27$$

## c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

Coeficiente de relación entre el sexo y discriminación en varones y mujeres



## d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- **No se comprueba la hipótesis:** Existe una mayor proporción de varones discriminados que de mujeres.
- **Observación:** El resultado podría revelar que las fuentes literarias sobre la materia no hayan recopilado información de campo que demostraría una tasa mayor de discriminación masculina que la registrada.

### 10.2.1.2.1. Relación entre sexo y discriminación en las mujeres



## **RELACIÓN ENTRE SEXO- DISCRIMINACIÓN EN LAS MUJERES**

(Hipótesis 2: Sexo como variable rectora)

	<b>Sexo</b>	<b>Discriminación</b>
<b>Número de muestras</b>	<b>V3</b>	<b>V2</b>
1	2	2
2	2	2
3	2	2
4	1	1
5	2	2
6	2	1
7	1	2
8	2	2
9	2	2
10	2	1
11	1	1
12	2	1
13	2	1
14	1	2
15	1	2
16	1	2
17	2	1
18	2	2
19	2	2
20	2	2
21	1	1
22	2	2
23	1	2
24	1	2
25	1	2
26	2	1
27	1	2
28	1	2
29	2	2
30	2	1
31	1	1
32	2	2
33	2	2
34	1	2
35	2	2
36	1	2

37	2	1
38	1	2
39	1	2
40	1	2
41	1	2
42	1	2
43	1	2

**a. Cuadro cartesiano**

		V1	
		SEXO	
		1	2
V2	1	a	b
	DISCRIMINACIÓN	4 22%	0 00%
	2	14	0
		18	+ 00 = 18

**b. Coeficiente de relación estadística**

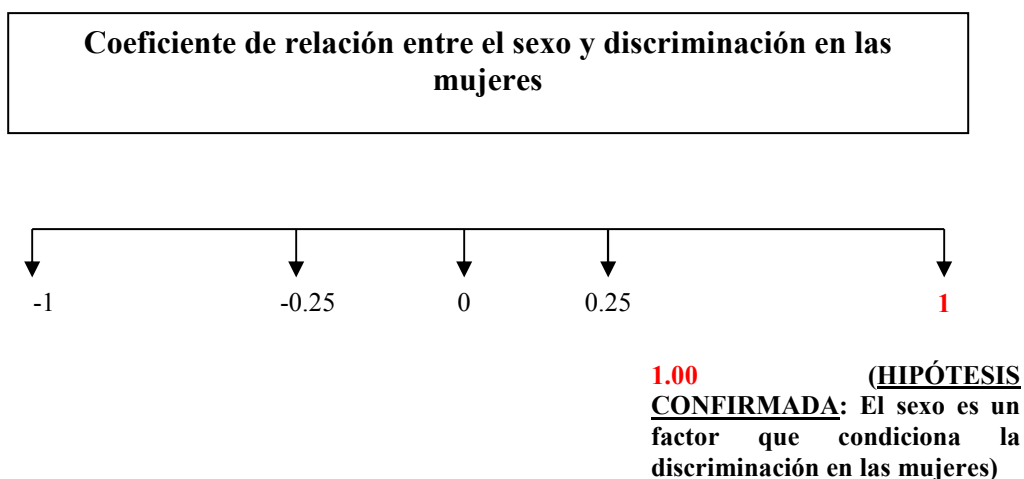
Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{(22-0)}{(22+0)}$$

$$r = 1.00$$

### c. Cuadro de coeficiente de relación estadística



### d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- **Se comprueba la hipótesis:** Existe relación entre las variables sexo y discriminación en el caso de las mujeres.
- **Observaciones:** Los factores que condicionan la discriminación se acentúan en el caso de las mujeres en razón de su sexo.

#### 10.2.1.2.2. Relación entre sexo y discriminación en los varones

##### RELACIÓN ENTRE SEXO- DISCRIMINACIÓN EN LOS VARONES (Hipótesis 2: Sexo como variable rectora)

	Sexo	Discriminación
Número de muestras	V3	V2
1	2	2
2	2	2
3	2	2
4	1	1
5	2	2

6	2	1
7	1	2
8	2	2
9	2	2
10	2	1
11	1	1
12	2	1
13	2	1
14	1	2
15	1	2
16	1	2
17	2	1
18	2	2
19	2	2
20	2	2
21	1	1
22	2	2
23	1	2
24	1	2
25	1	2
26	2	1
27	1	2
28	1	2
29	2	2
30	2	1
31	1	1
32	2	2
33	2	2
34	1	2
35	2	2
36	1	2
37	2	1
38	1	2
39	1	2
40	1	2
41	1	2
42	1	2
43	1	2

a. Cuadro cartesiano

		V1 SEXO	
		1	2
V2 DISCRIMINACIÓN	1	a 0 0%	b 7 33%
	2	0	14
		00	21 = 21

b. Coeficiente de relación estadística

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

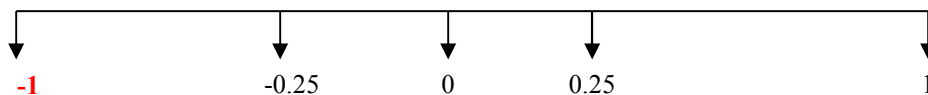
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{0-33}{0+33}$$

$$r = -1.00$$

c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

Coeficiente de relación sexo y discriminación en los varones



**-1.00** (HIPÓTESIS NO COMPROBADA: El resultado es inverso al planteado, ya que la tercera parte de varones ha sido discriminada)

#### d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- **No se comprueba la hipótesis:** La tercera parte de los varones ha sido discriminada.
- **Observaciones:** Debido a que la segunda hipótesis sugiere la relación entre las variables sexo y discriminación, siempre y cuando intervengan los estereotipos, posteriormente se procederá a verificar la correlación entre estas tres variables.

#### 10.2.1.3. Relación entre estereotipos y discriminación

#### RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y ESTEREOTIPOS

(Hipótesis 2: La variable estereotipos será la rectora)

	Estereotipos	Discriminación	Sexo
Número de muestras	V4	V2	V3
1	2	2	2
2	1	2	2
3	2	2	2
4	2	1	1
5	2	2	2
6	1	1	2
7	2	2	1
8	2	2	2
9	2	2	2
10	2	1	2
11	1	1	1
12	2	1	2
13	1	1	2
14	2	2	1
15	1	2	1
16	1	2	1
17	1	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	1	2	2
21	1	1	1

22	2	2	2
23	1	2	1
24	1	2	1
25	1	2	1
26	2	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	2	1	2
31	1	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	2	2	2
36	1	2	1
37	2	1	2
38	2	2	1
39	2	2	1
40	2	2	1
41	2	2	1
42	2	2	1
43	2	2	1

a. Cuadro cartesiano

		V1	
		ESTEREOTIPOS	
		1	2
V2	1	a	b
	DISCRIMINACIÓN	6 43%	6 24%
	2	8	19
		14	+ 25 = 39

## b. Coefficiente de relación estadística

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

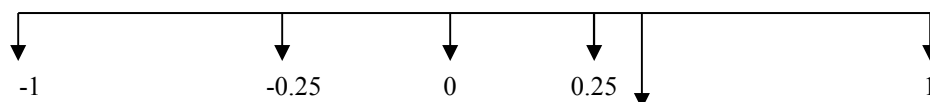
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{43-24}{43+24}$$

$$r = 0.28$$

## c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

<p align="center"><b>Coefficiente de relación entre estereotipos y discriminación en mujeres y varones</b></p>
--



**0.28 (HIPÓTESIS COMPROBADA:**

**Los estereotipos constituyen un factor que condiciona la discriminación contra mujeres y varones)**

## d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- **Se comprueba la hipótesis:** Los estereotipos constituyen un factor que condiciona la discriminación contra mujeres y varones.
- **Observaciones:** Sin perjuicio de los resultados obtenidos, se disgregará la incidencia de los estereotipos en las mujeres y en los varones para determinar si producen conductas discriminadoras.

### 10.2.1.3.1. El sexo como condicionante de la relación estereotipos y discriminación



### 10.2.1.3.1.1. Relación entre estereotipos y discriminación en las mujeres

#### RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y ESTEREOTIPOS EN LAS MUJERES

(Hipótesis 2: La variable estereotipos será la rectora)

Número de muestras	Estereotipos V4	Discriminación V2	Sexo V3
1	2	2	2
2	1	2	2
3	2	2	2
4	2	1	1
5	2	2	2
6	1	1	2
7	2	2	1
8	2	2	2
9	2	2	2
10	2	1	2
11	1	1	1
12	2	1	2
13	1	1	2
14	2	2	1
15	1	2	1
16	1	2	1
17	1	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	1	2	2
21	1	1	1
22	2	2	2
23	1	2	1
24	1	2	1
25	1	2	1
26	2	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	2	1	2
31	1	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	2	2	2
36	1	2	1
37	2	1	2

38	2	2	1
39	2	2	1
40	2	2	1
41	2	2	1
42	2	2	1
43	2	2	1

**a. Cuadro cartesiano**

		V1	
		ESTEREOTIPOS	
		1	2
V2 DISCRIMINACIÓN	1	<div>a</div> <div>3</div> <div>33%</div>	<div>b</div> <div>1</div> <div>11%</div>
	2	6	8
		09	+ 09 = 18

**b. Coeficiente de relación estadística**

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

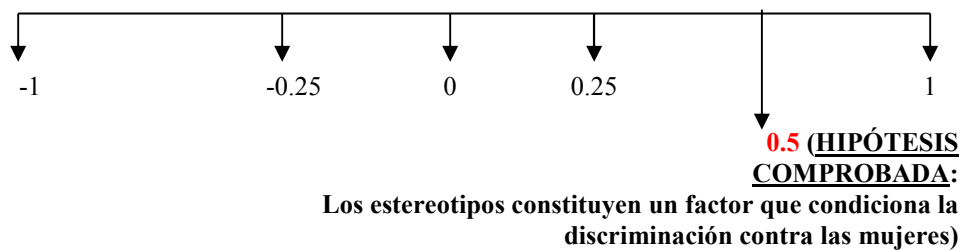
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{33-11}{33+11}$$

$$r = 0.5$$

### c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

Coeficiente de relación entre estereotipos y discriminación en mujeres



### d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- **Se comprueba la hipótesis:** Los estereotipos constituyen un factor que condiciona la discriminación contra las mujeres.
- **Observaciones:** Sin perjuicio del resultado, se aprecia la producción de discriminación sobre las mujeres que niegan haber sido víctimas de estereotipos.

#### 10.2.1.3.1.2. Relación entre estereotipos y discriminación en los varones

#### RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y ESTEREOTIPOS EN VARONES

(Hipótesis 2: La variable estereotipos será la rectora)

	Estereotipos	Discriminación	Sexo
Número de muestras	V4	V2	V3
1	2	2	2
2	1	2	2
3	2	2	2
4	2	1	1
5	2	2	2
6	1	1	2
7	2	2	1

8	2	2	2
9	2	2	2
10	2	1	2
11	1	1	1
12	2	1	2
13	1	1	2
14	2	2	1
15	1	2	1
16	1	2	1
17	1	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	1	2	2
21	1	1	1
22	2	2	2
23	1	2	1
24	1	2	1
25	1	2	1
26	2	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	2	1	2
31	1	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	2	2	2
36	1	2	1
37	2	1	2
38	2	2	1
39	2	2	1
40	2	2	1
41	2	2	1
42	2	2	1
43	2	2	1

**a. Cuadro cartesiano**

		V1 ESTEREOTIPOS	
		1	2
V2 DISCRIMINACIÓN	1	3 60% a	5 31% b
	2	2	11
		05	+ 16 = 21

**b. Coeficiente de relación estadística**

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

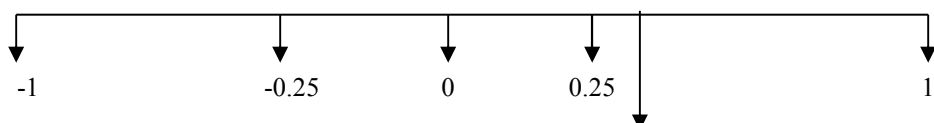
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{60-31}{60+31}$$

$$r = 0.31$$

**c. Cuadro de coeficiente de relación estadística**

Coeficiente de relación entre estereotipos y discriminación en varones



**0.31 (HIPÓTESIS COMPROBADA:**  
Los estereotipos constituyen un factor que condiciona la discriminación contra los varones)

#### d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- **Se comprueba la hipótesis:** Los estereotipos constituyen un factor que condiciona la discriminación contra los varones.
- **Observaciones:** Sin perjuicio del resultado, se aprecia la producción de discriminación sobre los varones que niegan haber sido víctimas de estereotipos.

#### 10.2.1.4. Relación entre edad y discriminación

##### RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y EDAD

(Hipótesis 3: Edad como variable rectora)

	Edad	Discriminación	Sexo
Número de muestras	V6	V2	V3
1	2	2	2
2	2	2	2
3	2	2	2
4	2	1	1
5	2	2	2
6	2	1	2
7	2	2	1
8	2	2	2
9	2	2	2
10	2	1	2
11	2	1	1
12	2	1	2
13	2	1	2
14	2	2	1
15	2	2	1
16	2	2	1
17	2	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	2	2	2
21	2	1	1

22	2	2	2
23	2	2	1
24	2	2	1
25	2	2	1
26	2	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	2	1	2
31	2	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	1	2	2
36	1	2	1
37	1	1	2
38	1	2	1
39	1	2	1
40	1	2	1
41	1	2	1
42	1	2	1
43	1	2	1

a. Cuadro cartesiano

		V1	
		EDAD	
		1	2
V2	1	a	b
	DISCRIMINACIÓN	1 14%	10 31%
	2	6	32
		07	+ 32 = 39

b. Coeficiente de relación estadística

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

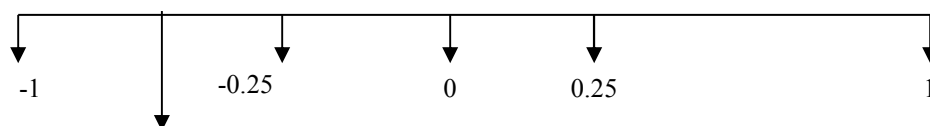
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{14-31}{14+31}$$

$$r = -0.41$$

### c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

Coeficiente de relación entre la edad y la discriminación en varones y mujeres



**-0.41 (HIPÓTESIS NO COMPROBADA:** La edad no desvirtúa la discriminación, pues tanto personas jóvenes como adultas son discriminadas. Sin embargo, los adultos son más discriminados que los jóvenes)

### d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- **No se comprueba la hipótesis:** La edad no desvirtúa la discriminación.
- **Observaciones:** Tanto personas jóvenes como adultas son discriminadas; sin embargo, los adultos son más discriminados que los jóvenes.

#### 10.2.1.4.1. Relación con la discriminación de acuerdo a la clasificación de la edad

##### 10.2.1.4.1.1. Relación entre juventud y discriminación



## **RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y JUVENTUD**

(Hipótesis 3: Edad como variable rectora)

	<b>Edad</b>	<b>Discriminación</b>	<b>Sexo</b>
<b>Número de muestras</b>	<b>V6</b>	<b>V2</b>	<b>V3</b>
1	2	2	2
2	2	2	2
3	2	2	2
4	2	1	1
5	2	2	2
6	2	1	2
7	2	2	1
8	2	2	2
9	2	2	2
10	2	1	2
11	2	1	1
12	2	1	2
13	2	1	2
14	2	2	1
15	2	2	1
16	2	2	1
17	2	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	2	2	2
21	2	1	1
22	2	2	2
23	2	2	1
24	2	2	1
25	2	2	1
26	2	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	2	1	2
31	2	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	1	2	2
36	1	2	1
37	1	1	2

38	1	2	1
39	1	2	1
40	1	2	1
41	1	2	1
42	1	2	1
43	1	2	1

a. Cuadro cartesiano

		V1	
		EDAD	
		1	2
V2	1	a	b
	2		
DISCRIMINACIÓN			
	1	0	
	14%	31%	
	6	0	
	07	+	00
			= 07

b. Coeficiente de relación estadística

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

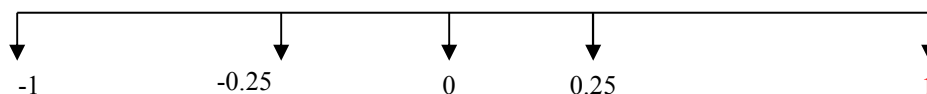
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{14-0}{14+0}$$

$$r = 1$$

### c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

Coeficiente de relación entre juventud y discriminación en varones  
y mujeres



**1 (HIPÓTESIS COMPROBADA:**

La edad no desvirtúa la discriminación en el caso de las  
personas jóvenes)

### d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- Se comprueba la hipótesis: La edad no desvirtúa la discriminación en el caso de las personas jóvenes.
- **Observaciones:** Sin perjuicio del resultado, habrá que verificar si dicha tendencia se produce en el caso de los adultos.

#### 10.2.1.4.1.2. Relación entre adultez y discriminación

#### RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y ADULTEZ

(Hipótesis 3: Edad como variable rectora)

	Edad	Discriminación	Sexo
Número de muestras	V6	V2	V3
1	2	2	2
2	2	2	2
3	2	2	2
4	2	1	1
5	2	2	2
6	2	1	2

7	2	2	1
8	2	2	2
9	2	2	2
10	2	1	2
11	2	1	1
12	2	1	2
13	2	1	2
14	2	2	1
15	2	2	1
16	2	2	1
17	2	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	2	2	2
21	2	1	1
22	2	2	2
23	2	2	1
24	2	2	1
25	2	2	1
26	2	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	2	1	2
31	2	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	1	2	2
36	1	2	1
37	1	1	2
38	1	2	1
39	1	2	1
40	1	2	1
41	1	2	1
42	1	2	1
43	1	2	1

a. Cuadro cartesiano

		V1	
		EDAD	
		1	2
V2	1	a	b
	DISCRIMINACIÓN	0 00%	11 34%
	2	0	21
		00	32
		+ = 32	

b. Coeficiente de relación estadística

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

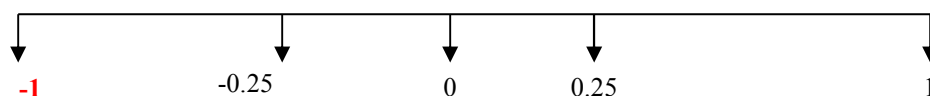
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{0-34}{0+34}$$

$$r = -1$$

c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

Coeficiente de relación entre adultez y discriminación en varones y mujeres



**-1 (LA HIPÓTESIS NO SE COMPRUEBA:** La edad no desvirtúa la discriminación sobre las personas adultas, ya que tson discriminadas incluso en mayor grado que en las personas jóvenes)

#### **d. Explicación del coeficiente de relación estadística**

- **No se comprueba la hipótesis:** La edad no desvirtúa la discriminación en el caso de las personas adultas.
- **Observaciones:** Las personas adultas también son discriminadas, incluso en mayor grado que en las personas jóvenes.

#### **10.2.1.4.2. El sexo como condicionante de la relación edad y discriminación**

##### **10.2.1.4.2.1. Relación entre edad y discriminación en las mujeres**

##### **10.2.1.4.2.1.1. Relación entre juventud y discriminación en las mujeres**

#### **RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y JUVENTUD EN LAS MUJERES** (Hipótesis 3: Edad como variable rectora)

	<b>Edad</b>	<b>Discriminación</b>	<b>Sexo</b>
<b>Número de muestras</b>	<b>V6</b>	<b>V2</b>	<b>V3</b>
<b>1</b>	2	2	2
<b>2</b>	2	2	2
<b>3</b>	2	2	2
<b>4</b>	2	1	1
<b>5</b>	2	2	2
<b>6</b>	2	1	2
<b>7</b>	2	2	1
<b>8</b>	2	2	2
<b>9</b>	2	2	2
<b>10</b>	2	1	2
<b>11</b>	2	1	1
<b>12</b>	2	1	2
<b>13</b>	2	1	2
<b>14</b>	2	2	1
<b>15</b>	2	2	1

<b>16</b>	2	2	1
<b>17</b>	2	1	2
<b>18</b>	2	2	2
<b>19</b>	2	2	2
<b>20</b>	2	2	2
<b>21</b>	2	1	1
<b>22</b>	2	2	2
<b>23</b>	2	2	1
<b>24</b>	2	2	1
<b>25</b>	2	2	1
<b>26</b>	2	1	2
<b>27</b>	2	2	1
<b>28</b>	2	2	1
<b>29</b>	2	2	2
<b>30</b>	2	1	2
<b>31</b>	2	1	1
<b>32</b>	2	2	2
<b>33</b>	2	2	2
<b>34</b>	2	2	1
<b>35</b>	1	2	2
<b>36</b>	1	2	1
<b>37</b>	1	1	2
<b>38</b>	1	2	1
<b>39</b>	1	2	1
<b>40</b>	1	2	1
<b>41</b>	1	2	1
<b>42</b>	1	2	1
<b>43</b>	1	2	1

a. Cuadro cartesiano

		V1	
		EDAD	
		1	2
V2	1	<div> <div>a</div> <div>5</div> <div>100%</div> </div>	<div> <div>b</div> <div>0</div> <div>0%</div> </div>
	2	0	0
DISCRIMINACIÓN		05	00
		+ = 05	

b. Coeficiente de relación estadística

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

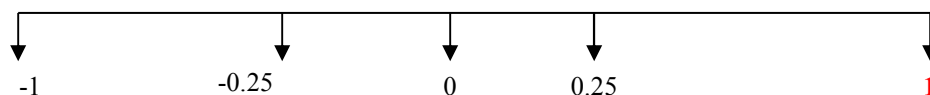
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{100-0}{100+0}$$

$$r = 1$$

c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

Coeficiente de relación entre juventud y la discriminación en mujeres



**1 (HIPÓTESIS COMPROBADA:**  
 La edad desvirtúa la discriminación, ya que las mujeres jóvenes no son objeto de discriminación)



#### d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- Se comprueba la hipótesis: La edad desvirtúa la discriminación en el caso de las mujeres jóvenes.
- **Observaciones:** Sin perjuicio del resultado, habrá que comprobar si la tendencia se mantiene en el caso de las mujeres adultas.

#### 10.2.1.4.2.1.2. Relación entre adultez y discriminación en las mujeres

##### RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y ADULTEZ EN LAS MUJERES

(Hipótesis 3: Edad como variable rectora)

	Edad	Discriminación	Sexo
Número de muestras	V6	V2	V3
1	2	2	2
2	2	2	2
3	2	2	2
4	2	1	1
5	2	2	2
6	2	1	2
7	2	2	1
8	2	2	2
9	2	2	2
10	2	1	2
11	2	1	1
12	2	1	2
13	2	1	2
14	2	2	1
15	2	2	1
16	2	2	1
17	2	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	2	2	2
21	2	1	1
22	2	2	2

23	2	2	1
24	2	2	1
25	2	2	1
26	2	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	2	1	2
31	2	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	1	2	2
36	1	2	1
37	1	1	2
38	1	2	1
39	1	2	1
40	1	2	1
41	1	2	1
42	1	2	1
43	1	2	1

a. Cuadro cartesiano

		V1	
		EDAD	
		1	2
V2	1	a	b
	DISCRIMINACIÓN	0 00%	04 31%
	2	0	09
		00	13
		+ = 13	

b. Coeficiente de relación estadística

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

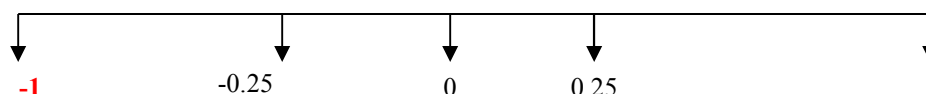
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{0-31}{0+31}$$

$$r = -1$$

### c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

<p align="center"><b>Coeficiente de relación entre la adultez y la discriminación en mujeres</b></p>
--



**-1** (NO SE COMPRUEBA LA HIPÓTESIS: Las mujeres adultas son más discriminadas que las mujeres jóvenes)

### d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- **No se comprueba la hipótesis:** La edad no desvirtúa la discriminación en el caso de las mujeres adultas.
- **Observaciones:** La producción de este resultado podría denotar falta de respeto y de consideración hacia las mujeres adultas.

#### 10.2.1.4.2.2. Relación entre edad y discriminación en los varones

##### 10.2.1.4.2.2.1. Relación entre juventud y discriminación en los varones

## **RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y JUVENTUD EN LOS VARONES**

(Hipótesis 3: Edad como variable rectora)

	<b>Edad</b>	<b>Discriminación</b>	<b>Sexo</b>
<b>Número de muestras</b>	<b>V6</b>	<b>V2</b>	<b>V3</b>
1	2	2	2
2	2	2	2
3	2	2	2
4	2	1	1
5	2	2	2
6	2	1	2
7	2	2	1
8	2	2	2
9	2	2	2
10	2	1	2
11	2	1	1
12	2	1	2
13	2	1	2
14	2	2	1
15	2	2	1
16	2	2	1
17	2	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	2	2	2
21	2	1	1
22	2	2	2
23	2	2	1
24	2	2	1
25	2	2	1
26	2	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	2	1	2
31	2	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	1	2	2
36	1	2	1
37	1	1	2

38	1	2	1
39	1	2	1
40	1	2	1
41	1	2	1
42	1	2	1
43	1	2	1

a. Cuadro cartesiano

		V1	
		EDAD	
		1	2
V2	1	a	b
	2		
DISCRIMINACIÓN			
	1	1 50%	0 0%
	2	1	0
		02	+ 00 = 02

b. Coeficiente de relación estadística

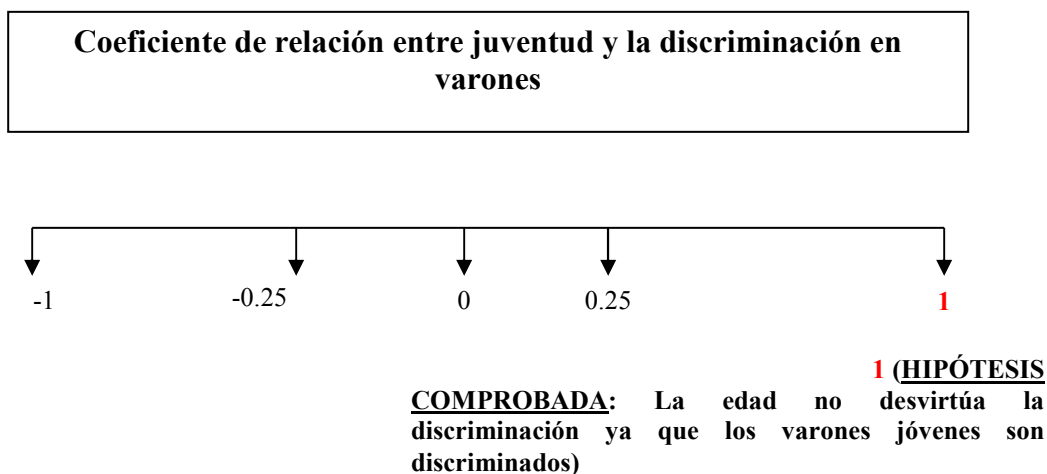
Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{50-0}{50+0}$$

$$r = 1$$

### c. Cuadro de coeficiente de relación estadística



### d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- **No se comprueba la hipótesis:** La edad no desvirtúa la discriminación en el caso de los varones jóvenes.
- **Observaciones:** Deberá corroborarse si la tendencia se mantiene en los varones adultos.

#### 10.2.1.4.2.2.2. Relación entre adultez y discriminación en los varones

#### RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y ADULTEZ EN LOS VARONES (Hipótesis 3: Edad como variable rectora)

	Edad	Discriminación	Sexo
Número de muestras	V6	V2	V3
1	2	2	2
2	2	2	2
3	2	2	2

4	2	1	1
5	2	2	2
6	2	1	2
7	2	2	1
8	2	2	2
9	2	2	2
10	2	1	2
11	2	1	1
12	2	1	2
13	2	1	2
14	2	2	1
15	2	2	1
16	2	2	1
17	2	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	2	2	2
21	2	1	1
22	2	2	2
23	2	2	1
24	2	2	1
25	2	2	1
26	2	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	2	1	2
31	2	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	1	2	2
36	1	2	1
37	1	1	2
38	1	2	1
39	1	2	1
40	1	2	1
41	1	2	1
42	1	2	1
43	1	2	1

**a. Cuadro cartesiano**

		V1	
		EDAD	
		1	2
V2	1	a	b
	DISCRIMINACIÓN	0 00%	7 37%
	2	0	12
		00	19
		+ = 19	

**b. Coeficiente de relación estadística**

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

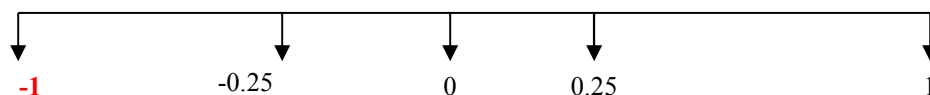
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{0-7}{0+7}$$

$$r = -1$$

**c. Cuadro de coeficiente de relación estadística**

Coeficiente de relación entre adultez y la discriminación en varones



**-1 (HIPÓTESIS NO COMPROBADA:** La edad no desvirtúa la discriminación sobre los varones adultos. Poco más de la tercera parte de los varones adultos son objeto de discriminación)



d. **Explicación del coeficiente de relación estadística**

- **No se comprueba la hipótesis:** La edad no desvirtúa la discriminación en el caso de los varones adultos.
- **Observaciones:** Poco más de la tercera parte de los varones adultos son objeto de discriminación.

**10.2.1.5. Relación entre nivel educativo y discriminación**

**RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y NIVEL EDUCATIVO**  
(Hipótesis 3: Nivel educativo como variable rectora)

	Nivel educativo	Discriminación	Sexo
Número de muestras	V5	V2	V3
1	2	2	2
2	2	2	2
3	2	2	2
4	2	1	1
5	2	2	2
6	2	1	2
7	2	2	1
8	2	2	2
9	2	2	2
10	2	1	2
11	2	1	1
12	2	1	2
13	2	1	2
14	2	2	1
15	2	2	1
16	2	2	1
17	2	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2

20	2	2	2
21	2	1	1
22	2	2	2
23	2	2	1
24	2	2	1
25	2	2	1
26	2	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	1	1	2
31	2	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	2	2	2
36	1	2	1
37	2	1	2
38	1	2	1
39	1	2	1
40	2	2	1
41	1	2	1
42	1	2	1
43	2	2	1

a. Cuadro cartesiano

		V1	
		NIVEL EDUCATIVO	
		1	2
V2	1	a	b
	DISCRIMINACIÓN	1 20%	11 32%
	2	4	23
		05	+ 34 = 39

## b. Coefficiente de relación estadística

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

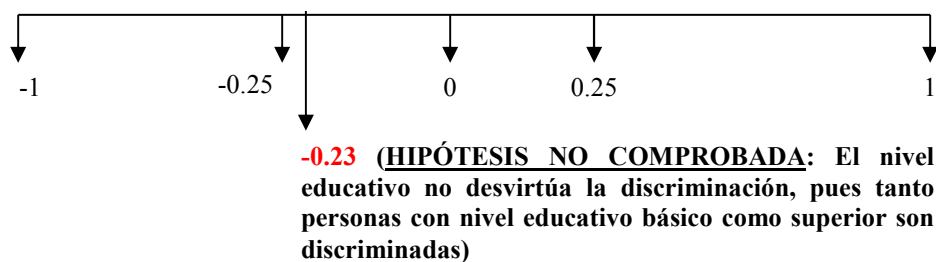
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{20-32}{20+32}$$

$$r = -0.23$$

## c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

Coefficiente de relación entre el nivel educativo y la discriminación en varones y mujeres



## d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- **No se comprueba la hipótesis:** El nivel educativo no desvirtúa la discriminación en varones y mujeres.
- **Observaciones:** Tanto personas con nivel educativo básico como superior son discriminadas.

### 10.2.1.5.1. Relación con la discriminación de acuerdo al nivel educativo

#### 10.2.1.5.1.1. Relación entre nivel educativo básico y discriminación

### RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y NIVEL EDUCATIVO BÁSICO

(Hipótesis 3: Nivel educativo como variable rectora)

	Nivel educativo	Discriminación	Sexo
Número de muestras	V5	V2	V3
1	2	2	2
2	2	2	2
3	2	2	2
4	2	1	1
5	2	2	2
6	2	1	2
7	2	2	1
8	2	2	2
9	2	2	2
10	2	1	2
11	2	1	1
12	2	1	2
13	2	1	2
14	2	2	1
15	2	2	1
16	2	2	1
17	2	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	2	2	2
21	2	1	1
22	2	2	2
23	2	2	1
24	2	2	1
25	2	2	1
26	2	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	1	1	2
31	2	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2

34	2	2	1
35	2	2	2
36	1	2	1
37	2	1	2
38	1	2	1
39	1	2	1
40	2	2	1
41	1	2	1
42	1	2	1
43	2	2	1

**a. Cuadro cartesiano**

		V1	
		NIVEL EDUCATIVO	
		1	2
V2	1	a	b
	DISCRIMINACIÓN	1 20%	0 0%
	2	4	0
		05	+ 00 = 05

**b. Coeficiente de relación estadística**

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

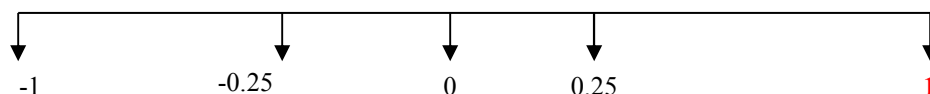
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{20-0}{20+0}$$

$$r = 1$$

### c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

**Coeficiente de relación entre el nivel educativo básico y la discriminación en varones y mujeres**



#### **1.0 (HIPÓTESIS COMPROBADA:**

El nivel educativo no desvirtúa la discriminación, pues las personas con nivel educativo básico son discriminadas, aunque en una proporción baja)

### d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- **No se comprueba la hipótesis:** El nivel educativo básico no desvirtúa la discriminación en varones y mujeres.
- **Observaciones:** Las personas con nivel educativo básico son discriminadas, aunque en una proporción baja.

#### **10.2.1.5.1.2. Relación entre nivel educativo superior y discriminación**

#### **RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR**

(Hipótesis 3: Nivel educativo como variable rectora)

<b>43</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	<b>Nivel educativo</b>	<b>Discriminación</b>	<b>Sexo</b>
<b>Número de muestras</b>	<b>V5</b>	<b>V2</b>	<b>V3</b>
<b>1</b>	2	2	2
<b>2</b>	2	2	2
<b>3</b>	2	2	2
<b>4</b>	2	1	1

5	2	2	2
6	2	1	2
7	2	2	1
8	2	2	2
9	2	2	2
10	2	1	2
11	2	1	1
12	2	1	2
13	2	1	2
14	2	2	1
15	2	2	1
16	2	2	1
17	2	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	2	2	2
21	2	1	1
22	2	2	2
23	2	2	1
24	2	2	1
25	2	2	1
26	2	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	1	1	2
31	2	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	2	2	2
36	1	2	1
37	2	1	2
38	1	2	1
39	1	2	1
40	2	2	1
41	1	2	1
42	1	2	1

a. Cuadro cartesiano

		V1 NIVEL EDUCATIVO	
		1	2
V2 DISCRIMINACIÓN	1	0 0%	11 32%
	2	0	23
		00	34
		+ = 34	

b. Coeficiente de relación estadística

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

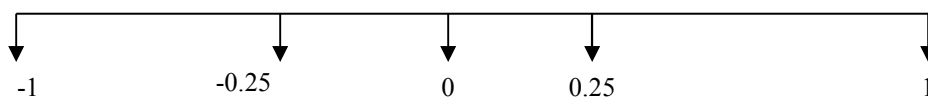
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{0-32}{0+32}$$

$$r = -1.00$$

c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

Coeficiente de relación entre el nivel educativo superior y la discriminación en varones y mujeres



**-1.00 (HIPÓTESIS NO COMPROBADA:** Las personas adultas son menos susceptibles de ser discriminadas que las personas jóvenes. Las dos terceras partes de personas adultas no son discriminadas)



#### d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- **No se comprueba la hipótesis:** Las personas adultas son menos susceptibles de ser discriminadas que las personas jóvenes.
- **Observaciones:** Las dos terceras partes de personas adultas no son discriminadas.

#### 10.2.1.5.2. El sexo como condicionante de la relación nivel educativo y discriminación

##### RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y NIVEL EDUCATIVO EN LAS MUJERES

(Hipótesis 3: Nivel educativo como variable rectora)

	Nivel educativo	Discriminación	Sexo
Número de muestras	V5	V2	V3
1	2	2	2
2	2	2	2
3	2	2	2
4	2	1	1
5	2	2	2
6	2	1	2
7	2	2	1
8	2	2	2
9	2	2	2
10	2	1	2
11	2	1	1
12	2	1	2
13	2	1	2
14	2	2	1
15	2	2	1
16	2	2	1
17	2	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	2	2	2
21	2	1	1

22	2	2	2
23	2	2	1
24	2	2	1
25	2	2	1
26	2	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	1	1	2
31	2	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	2	2	2
36	1	2	1
37	2	1	2
38	1	2	1
39	1	2	1
40	2	2	1
41	1	2	1
42	1	2	1
43	2	2	1

a. Cuadro cartesiano

		V1	
		NIVEL EDUCATIVO	
		1	2
V2	1	a	b
	DISCRIMINACIÓN	0 0%	4 29%
	2	4	10
		04	+ 14 = 18

b. Coeficiente de relación estadística

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

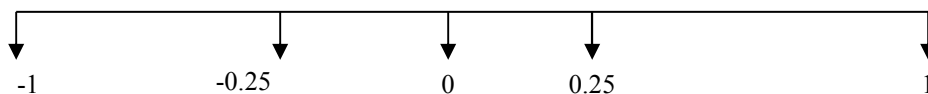
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{(0-29)}{(0+29)}$$

$$r = -1.00$$

### c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

Coeficiente de relación entre el nivel educativo y la discriminación  
en mujeres



**-1.00 (HIPÓTESIS NO COMPROBADA:** El nivel educativo desvirtúa la discriminación contra la mujer, ya que se aprecia que las mujeres con nivel educativo superior son menos discriminadas que las que sólo alcanzaron el nivel básico)

### d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- **No se comprueba la hipótesis:** El nivel educativo desvirtúa la discriminación contra la mujer.
- **Observaciones:** Se aprecia que las mujeres con nivel educativo superior son menos discriminadas que las que sólo alcanzaron el nivel básico.

#### 10.2.1.5.2.1. Relación entre nivel educativo y discriminación en las mujeres

##### 10.2.1.5.2.1.1. Relación entre nivel educativo básico y discriminación en las mujeres

#### RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y NIVEL EDUCATIVO BÁSICO EN LAS MUJERES

(Hipótesis 3: Nivel educativo como variable rectora)

	Nivel educativo	Discriminación	Sexo
Número de muestras	V5	V2	V3
1	2	2	2
2	2	2	2
3	2	2	2
4	2	1	1
5	2	2	2
6	2	1	2
7	2	2	1
8	2	2	2
9	2	2	2
10	2	1	2
11	2	1	1
12	2	1	2
13	2	1	2
14	2	2	1
15	2	2	1
16	2	2	1
17	2	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	2	2	2
21	2	1	1
22	2	2	2
23	2	2	1
24	2	2	1
25	2	2	1
26	2	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	1	1	2
31	2	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	2	2	2
36	1	2	1
37	2	1	2

38	1	2	1
39	1	2	1
40	2	2	1
41	1	2	1
42	1	2	1

**a. Cuadro cartesiano**

		V1	
		NIVEL EDUCATIVO	
		1	2
V2	1	a	b
	DISCRIMINACIÓN	0 0%	0 29%
	2	4	0
		04	+ 00 = 04

**b. Coeficiente de relación estadística**

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{(0-0)}{(0+0)}$$

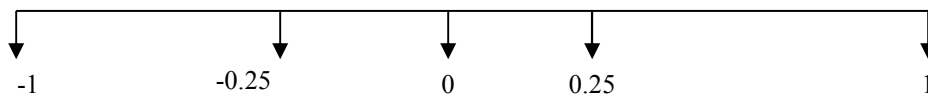
$$r = 0$$

c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y NIVEL EDUCATIVO BÁSICO EN LAS MUJERES

(Hipótesis 3: Nivel educativo como variable rectora)

Coefficiente de relación entre el nivel educativo básico y la discriminación en mujeres



**0 (HIPÓTESIS NO COMPROBADA:** No existe relación entre la categoría “básica” de la variable educación con la discriminación. Las mujeres con nivel educativo básico no son víctimas de discriminación)

d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- **No se comprueba la hipótesis:** Las mujeres con nivel educativo básico no son víctimas de discriminación.
- **Observaciones:** No existe relación entre la categoría “básica” de la variable educación con la discriminación.

**10.2.1.5.2.1.2. Relación entre nivel educativo superior y discriminación en las mujeres**

RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR EN LAS MUJERES

(Hipótesis 3: Nivel educativo como variable rectora)

	Nivel educativo	Discriminación	Sexo
Número de muestras	V5	V2	V3
1	2	2	2

2	2	2	2
3	2	2	2
4	2	1	1
5	2	2	2
6	2	1	2
7	2	2	1
8	2	2	2
9	2	2	2
10	2	1	2
11	2	1	1
12	2	1	2
13	2	1	2
14	2	2	1
15	2	2	1
16	2	2	1
17	2	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	2	2	2
21	2	1	1
22	2	2	2
23	2	2	1
24	2	2	1
25	2	2	1
26	2	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	1	1	2
31	2	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	2	2	2
36	1	2	1
37	2	1	2
38	1	2	1
39	1	2	1
40	2	2	1
41	1	2	1
42	1	2	1
43	2	2	1

a. Cuadro cartesiano

		V1	
		NIVEL EDUCATIVO	
		1	2
V2	1	0 0%	4 29%
	2	0	10
DISCRIMINACIÓN		00	14 = 14

b. Coeficiente de relación estadística

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

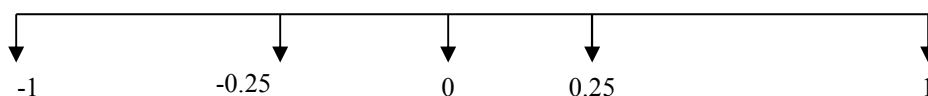
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{0-29}{0+29}$$

$$r = -1.00$$

c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

Coeficiente de relación entre el nivel educativo superior y la discriminación en mujeres



**-1.00 (HIPÓTESIS NO COMPROBADA:** El nivel educativo desvirtúa la discriminación contra la mujer, pues las mujeres con nivel educativo superior tienen menor probabilidad de ser discriminadas)



#### d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- **No se comprueba la hipótesis:** Las mujeres con nivel educativo superior tienen menor probabilidad de ser discriminadas.
- **Observaciones:** El nivel educativo desvirtúa la discriminación contra la mujer.

#### 10.2.1.5.2.2. Relación entre nivel educativo y discriminación en los varones

#### RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y NIVEL EDUCATIVO EN LOS VARONES

(Hipótesis 3: Nivel educativo como variable rectora)

	Nivel educativo	Discriminación	Sexo
Número de muestras	V5	V2	V3
1	2	2	2
2	2	2	2
3	2	2	2
4	2	1	1
5	2	2	2
6	2	1	2
7	2	2	1
8	2	2	2
9	2	2	2
10	2	1	2
11	2	1	1
12	2	1	2
13	2	1	2
14	2	2	1
15	2	2	1
16	2	2	1
17	2	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	2	2	2
21	2	1	1
22	2	2	2
23	2	2	1

24	2	2	1
25	2	2	1
26	2	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	1	1	2
31	2	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	2	2	2
36	1	2	1
37	2	1	2
38	1	2	1
39	1	2	1
40	2	2	1
41	1	2	1
42	1	2	1
43	2	2	1

a. Cuadro cartesiano

		V1	
		NIVEL EDUCATIVO	
		1	2
V2 DISCRIMINACIÓN	1	a 1 100%	b 7 35%
	2	0	13
		01	+ 20 = 21

b. Coefficiente de relación estadística

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

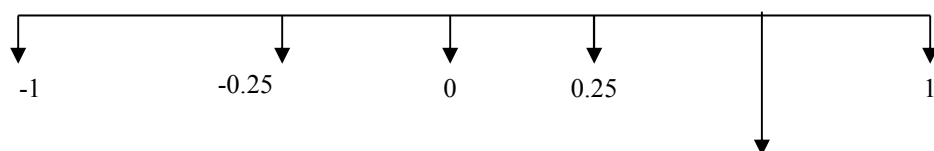
$$r = a - b / a + b$$

$$r = (100 - 35) / (100 + 35)$$

$$r = 0.48$$

### c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

Coeficiente de relación entre el nivel educativo y la discriminación en varones



**0.48 (HIPÓTESIS COMPROBADA:**  
**El nivel educativo es un factor que no desvirtúa la discriminación**  
**contra los varones, pues tanto los que poseen nivel educativo básico**  
**como superior son discriminados)**

### d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- **Se comprueba la hipótesis:** El nivel educativo es un factor que no desvirtúa la discriminación contra los varones.
- **Observaciones:** Tanto los varones que poseen nivel educativo básico como superior son discriminados.

#### 10.2.1.5.2.2.1. Relación entre nivel educativo básico y discriminación en los varones

#### RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y NIVEL EDUCATIVO BÁSICO EN LOS VARONES

(Hipótesis 3: Nivel educativo como variable rectora)

	Nivel educativo	Discriminación	Sexo
Número de	V5	V2	V3

<b>muestras</b>			
1	2	2	2
2	2	2	2
3	2	2	2
4	2	1	1
5	2	2	2
6	2	1	2
7	2	2	1
8	2	2	2
9	2	2	2
10	2	1	2
11	2	1	1
12	2	1	2
13	2	1	2
14	2	2	1
15	2	2	1
16	2	2	1
17	2	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	2	2	2
21	2	1	1
22	2	2	2
23	2	2	1
24	2	2	1
25	2	2	1
26	2	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	1	1	2
31	2	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	2	2	2
36	1	2	1
37	2	1	2
38	1	2	1
39	1	2	1
40	2	2	1
41	1	2	1
42	1	2	1
43	2	2	1

a. Cuadro cartesiano

		V1	
		NIVEL EDUCATIVO	
		1	2
V2	1	1 100% a	0 0% b
	2	0	0
DISCRIMINACIÓN		01	00
		+ = 1	

b. Coeficiente de relación estadística

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

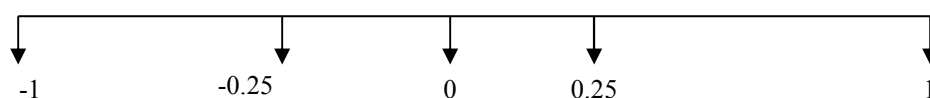
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{100-0}{100+0}$$

$$r = 1$$

c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

Coeficiente de relación entre el nivel educativo básico y la discriminación en varones



**1.0 (HIPÓTESIS COMPROBADA:**

Los varones con nivel educativo básico son propensos a ser discriminados)

**d. Explicación del coeficiente de relación estadística**

- **Se comprueba la hipótesis:** El nivel educativo es un factor que desvirtúa la discriminación contra los varones en aquellos que sólo han concluido el nivel básico.
- **Observaciones:** Cabe anotar que la muestra es mínima. Sólo se trató de un participante, razón que dificulta el arribo a la conclusión.

**10.2.1.5.2.2.2. Relación entre nivel educativo superior y discriminación en los varones**

**RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN Y NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR EN  
LOS VARONES**

(Hipótesis 3: Nivel educativo como variable rectora)

	Nivel educativo	Discriminación	Sexo
Número de muestras	V5	V2	V3
1	2	2	2
2	2	2	2
3	2	2	2
4	2	1	1
5	2	2	2
6	2	1	2
7	2	2	1
8	2	2	2
9	2	2	2
10	2	1	2
11	2	1	1
12	2	1	2
13	2	1	2
14	2	2	1
15	2	2	1
16	2	2	1
17	2	1	2
18	2	2	2
19	2	2	2

20	2	2	2
21	2	1	1
22	2	2	2
23	2	2	1
24	2	2	1
25	2	2	1
26	2	1	2
27	2	2	1
28	2	2	1
29	2	2	2
30	1	1	2
31	2	1	1
32	2	2	2
33	2	2	2
34	2	2	1
35	2	2	2
36	1	2	1
37	2	1	2
38	1	2	1
39	1	2	1
40	2	2	1
41	1	2	1
42	1	2	1
43	2	2	1

a. Cuadro cartesiano

		V1	
		NIVEL EDUCATIVO	
		1	2
V2	1	a	b
	DISCRIMINACIÓN	0 0%	7 35%
	2	0	13
		00	+ 20 = 20

b. Coefficiente de relación estadística

Para hallar el coeficiente de relación estadística, se sigue la siguiente fórmula:

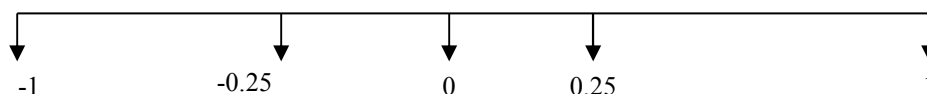
$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{(0-35)}{(0+35)}$$

$$r = -1.00$$

### c. Cuadro de coeficiente de relación estadística

Coeficiente de relación entre el nivel educativo superior y la discriminación en varones



**-1.00** (HIPÓTESIS NO COMPROBADA: El nivel educativo desvirtúa la discriminación en las personas que cuentan con el nivel educativo superior: Los varones con nivel educativo superior son menos propensos a ser discriminados que los varones con nivel educativo básico)

### d. Explicación del coeficiente de relación estadística

- **No se comprueba la hipótesis:** El nivel educativo desvirtúa la discriminación en las personas que cuentan con el nivel educativo superior:
- **Observaciones:** Los varones con nivel educativo superior son menos propensos a ser discriminados que los varones con nivel educativo básico.

## 11. ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL

La elaboración del informe final contiene los siguientes resultados:



### **11.1. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LA DOCTRINA**

Los aportes de la investigación a la doctrina se traducen en premisas jurídicas que reflejarán los resultados sobre el machismo, la discriminación contra la mujer y el nivel educativo de las víctimas.

**11.1.1.** Ello, permitirá contrastar los resultados con la doctrina vigente, a efectos de determinar:

- Si la doctrina fue construida o no sobre la base de una previa investigación empírico-social.
- En caso de existir concordancia entre los resultados y la doctrina, se concluirá que la doctrina se amparó no solo en estudios legales, sino empírico-sociales, por lo que las premisas jurídicas obtenidas de nuestra investigación reforzarán la doctrina propuesta.
- En caso de no existir concordancia entre los resultados y la doctrina, se concluirá que la doctrina no se amparó no solo en estudios legales. Por ello, propondremos premisas jurídicas que contendrán las referencias empírico-sociales que nos permitirán erigir doctrinas que sean, en primer lugar, resultado de la realidad y que se dirijan a establecer propuestas para solucionar los problemas identificados en la realidad.

**11.1.2.** De los resultados preliminares de las muestras analizadas con motivo de la investigación, hemos obtenido lo siguiente:

HIPÓTESIS	RESULTADO	DATOS
<p><b>“El machismo constituye el principal factor que determina la discriminación contra la mujer debido a que impone roles de género que limitan el pleno ejercicio de sus derecho”</b></p>	<p><b>HIPÓTESIS COMPROBADA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las mujeres son objeto de <u>machismo</u>.</li> <li>- Los varones son objeto de machismo en una menor proporción.</li> </ul>
<p><b>“El sexo constituye un factor que incide en la discriminación contra la mujer cuando esté asociado a estereotipos que pretenden explicar los roles de mujeres y varones”</b></p>	<p><b>HIPÓTESIS COMPROBADA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las mujeres son <u>discriminadas por su sexo</u>.</li> <li>- Los varones son discriminados aunque en menor proporción.</li> <li>- Las mujeres son objeto de <u>estereotipos</u>.</li> <li>- Los varones son objeto de <u>estereotipos</u> en una menor proporción.</li> </ul>
<p><b>“La discriminación contra la mujer no se desvirtúa por la edad ni por la educación, pues incluso las jóvenes y aquellas con estudios superiores son discriminadas”</b></p>	<p><b>HIPÓTESIS NO COMPROBADA</b></p> <p>1. <u>La edad desvirtúa la discriminación</u></p> <p>Mayor discriminación en adultos que en jóvenes</p> <p>2. <u>El nivel educativo desvirtúa la discriminación</u></p> <p>Mayor discriminación en quienes sólo terminaron el nivel educativo básico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las mujeres jóvenes <u>no son discriminadas, mientras que las adultas sí</u>.</li> <li>- Los varones jóvenes no son discriminados, mientras que los adultos sí.</li> <li>- Las mujeres con <u>nivel educativo superior son menos discriminadas que las que sólo completaron el básico</u>.</li> <li>- Los varones con nivel educativo superior son menos discriminados que los que sólo completaron el básico.</li> </ul>

**11.1.3.** Por lo tanto, estos datos nos permiten **formular premisas jurídicas que constituyen aportes a la doctrina jurídica:**

- **El estudio jurídico de la discriminación sexual no debe restringirse solo a la mujer**, pues también el varón es objeto de discriminación por su sexo, aunque en menor proporción que la mujer.
- **El machismo resquebraja la cláusula de igualdad**, consagrada en el artículo 2º inciso 1 de la Constitución, debido a que tanto la mujer como el varón son víctimas de ella debido a que existen patrones de género que el machismo pretende imponerles, lo cual impide que puedan realizarse plenamente como seres humano, vulnerando así la defensa del ser humano como fin supremo de la sociedad y del Estado, conforme reconoce el artículo 1º de la Carta Política.
- **Los estereotipos condicionan la discriminación de la mujer** aunque en mayor grado en la mujer, ya que los roles de género delimitan los ámbitos que socialmente son permitidos.
- **La edad y el nivel educativo condicionan la discriminación**, pues las personas jóvenes (hasta 29 años) y con nivel educativo superior son menos discriminadas que las adultas y que aquellas sólo han completado el nivel educativo básico.
- Sobre la base de las cuatro premisas expuestas, **la discriminación genera la vulneración de otros derechos distintos a la igualdad**, debido a que al aplicarse los estereotipos en todo tipo de relación, estos extienden su ámbito sobre el acceso a todo tipo de prestaciones, como son a la educación, a la salud y al trabajo, conforme se constató en el diagnóstico de la situación de la mujer en Perú.
- De igual manera, **no es adecuada la dación de una Ley Antidiscriminatoria a favor de la mujer**, pues se constata que el varón es víctima de discriminación. Sin

perjuicio de ello, se hace necesaria la inclusión de políticas de género en los programas educativos para revertir la discriminación en contra de varones y de mujeres.

## **11.2. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LA LEGISLACIÓN**

El resultado de la presente investigación incide sobre nuestra legislación vigente, debido a que determina, en primer lugar, su análisis y, en segundo lugar, la asunción de nuevos criterios que deberán ser tomados en cuenta por el legislador:

### **11.2.1. Artículo 2º.2 de la Constitución**

a. El **artículo 2º inciso 2 de la Constitución** consagra el derecho a la igualdad a través del siguiente enunciado:

*“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:*

*(...)*

*2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole” (el subrayado es nuestro)*

b. Si bien el extremo final de este inciso proscribire la discriminación por cualquier razón distinta a las antes mencionadas, somos conscientes de que **el legislador deberá de incorporar a la cultura como factor a ser abordado a través de políticas educativas dirigidas a dar plena eficacia a los cuerpos normativos ya existentes que establecen lineamientos sobre el resguardo de la cláusula constitucional de igualdad.**

### **11.2.2. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Ley N° 28983)**

A fin de dar cumplimiento a esta propuesta, hemos identificado que el 16 de marzo de 2007, fue publicada en el diario oficial “El Peruano” la **Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Ley N° 28983)**.

a. El **artículo 1** de la Ley N° 28983 establece su objeto y ámbito de aplicación de la siguiente forma:

*“Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto **establecer el marco normativo**, institucional y de políticas públicas **en los ámbitos nacional, regional y local**, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada, propendiendo a la plena igualdad”.*

Sin embargo, vemos que **el ámbito de acción de esta ley es limitado, pues sólo se dirige a tutelar la igualdad de oportunidades en el ámbito público, mas no en el privado**, situación que evidencia el error del legislador de no extender su ámbito de acción hacia el sector privado, donde también se manifiestan conductas discriminadoras en contra de la mujer.

b. El **artículo 6** de la Ley N° 28983 establece los **lineamientos que el gobierno deberá de asumir para garantizar la plena igualdad del varón y de la mujer**.

*“Artículo 6°.- De los lineamientos del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales: El Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales, en todos los sectores, adoptan políticas, planes y programas, integrando los principios de la presente Ley de manera transversal. Para tal efecto, son lineamientos:*

*a) Promover y garantizar la participación plena y efectiva de mujeres y hombres en la consolidación del sistema democrático.*

*b) Garantizar la participación y el desarrollo de los mecanismos de vigilancia ciudadana para el cumplimiento de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.*

*c) Desarrollar políticas, planes y programas para la prevención, atención y eliminación de la violencia en todas sus formas y en todos los espacios, en especial la ejercida contra las mujeres.*

*d) Fomentar el acceso a recursos productivos, financieros, científico-tecnológicos y de créditos para la producción y titulación de tierras, particularmente a las mujeres en situación de pobreza, teniendo en cuenta la diversidad geográfica, étnico-cultural, lingüística y las zonas afectadas por la violencia política.*

*e) Promover la participación económica, social y política de las mujeres rurales, indígenas, amazónicas y afroperuanas así como su integración en los espacios de decisión de las organizaciones comunitarias, asociativas, de producción y otras, garantizando su acceso a una remuneración justa, indemnizaciones, beneficios laborales y de seguridad social, de acuerdo a ley, en igualdad de condiciones con los hombres.*

*f) Garantizar el derecho a un trabajo productivo, ejercido en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, incorporando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral, entre mujeres y hombres, en el acceso al empleo, en la formación, promoción y condiciones de trabajo, y en una idéntica remuneración por trabajo de igual valor. Se incluye entre los derechos laborales la protección frente al hostigamiento sexual y la armonización de las responsabilidades familiares y laborales”.*

Si bien el artículo 6 establece que a través de políticas transversales se deberán de guiar los lineamientos del gobierno para la consecución de la igualdad de oportunidades, **ninguno de sus incisos mencionan el establecimiento de políticas educativas dirigidas a prevenir la discriminación contra la mujer.** En efecto, *siendo la cultura el factor que determina la discriminación contra la mujer, a través de la implementación de políticas educativas*

*dirigidas a identificar las prácticas culturales y los estereotipos que orillan a la discriminación se podrá erigir una política nacional con la demarcación de sus respectivos objetivos a ser cumplidos a mediano o largo plazo.*

### **11.3. ANTEPROYECTO DE LEY**

La consecuencia necesaria de la investigación es formular un proyecto de ley que incorpore la perspectiva de género en la educación.

## **PROYECTO DE LEY DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN**

Francisco Alberto Gómez Sánchez Torrealva, en ejercicio de su derecho a la iniciativa legislativa, contemplado en el artículo 2° inciso 17 de la Constitución Política del Estado, presenta el siguiente proyecto de ley.

### **I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

#### **1. Antecedentes normativos**

El 28 de julio de 2003 se publicó en el diario oficial “El Peruano” la **Ley General de Educación (Ley N° 28044)**, la cual se rige sobre la base de los principios contenidos en su artículo 8° (entre los cuales se encuentran la ética, la equidad, la inclusión, la calidad, la democracia, la interculturalidad, la conciencia ambiental, la creatividad y la innovación), cuya aplicación permitirá la realización del ser humano y la consolidación de una sociedad democrática que supere todo plano de inequidad, conforme establece su artículo 9°.

Ello será posible en la medida que, de acuerdo al artículo 11°, exista una articulación intersectorial que permita resguardar la universalización (artículo 12°), la calidad (artículos 13° al 16°) y la equidad en la educación (artículos 17° al 20°), para lo cual será necesaria la

participación del Estado y de la sociedad civil (artículos 21° al 24°) en las diferentes etapas del sistema educativo, como son la básica y la superior (artículo 29°).

Si bien se observa que dicha ley contempla la consecución de la equidad y la desaparición de la exclusión a través de políticas específicas como la educación intercultural (artículo 8° inciso f), la educación de los pueblos indígenas (artículo 19°) y la educación bilingüe (artículo 20°), *no se observa en la Ley General de Educación la identificación de otros grupos que si bien no son excluidos del acceso a la educación, ven limitados el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales como resultado de concepciones culturales que no son contrarestadas por políticas descritas sobre la base de particulares perspectivas que se orientan a generar y a difundir contenidos educativos que identifiquen a tales grupos como igualmente titulares de derechos que aquellos que no han visto restringido el ejercicio de tales atributos.*

## **2. Fundamento del Proyecto de Ley**

Uno de los grupos que encuentra restringido el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales es el de *las mujeres*, quienes si bien son beneficiarias del principio de equidad (artículo 8° literal b) y de las medidas de equidad (artículo 18°), *no cuentan con líneas de acción educativas definidas por una perspectiva de género que aborde su particular situación y las medidas concretas a ser ejecutadas en aras de revertir la serie de restricciones que enfrentan en los diferentes ámbitos sociales.*

La necesidad de incorporar perspectivas de género en las diferentes etapas educativas responde a que la educación constituye el presupuesto esencial para el desarrollo del ser humano, en el que la incorporación de contenidos relativos a la diversidad propiciará la consecución de una perspectiva de tolerancia de los/as educandos/as frente a aquellas personas que considere diferentes, pero igualmente dignas que sí mismos/as.

Tal argumento constituye el fundamento por el cual la Ley de incorporación de la perspectiva de género en la educación debe integrarse a nuestro ordenamiento jurídico, ya



que permitirá la construcción de una sociedad más tolerante y equitativa, en la que se parta del presupuesto de que las diferencias existentes entre las mujeres y los varones constituyen rasgos que las/os hacen únicas/os e irrepetibles, pero iguales en cuanto a su titularidad de derechos que les permitirán desarrollar su particular proyecto de vida.

### 3. Diagnóstico sobre la situación de la mujer en Perú

La actual situación de la mujer en nuestro país es el resultado de una evolución que ha implicado profundas transformaciones sociales recogidas por historiadoras como María Rostworowski<sup>773</sup> -en lo que al estudio de la mujer prehispánica obedece-, pasando por el rol preeminentemente servil durante la colonia<sup>774</sup> -apuntado por Patrucco-, el invisible en el proceso independentista<sup>775</sup>, el contestatario durante la república decimonónica<sup>776</sup> y el libertario de mediados del siglo pasado<sup>777</sup>.

Esta transición de lo invisible hacia lo visible es explicada por Ana Aguado, al expresar que la mujer inició el camino hacia la igualdad material en una cultura donde “la articulación de la esfera pública y su ‘necesario’ correlato, la esfera privada, [eran concebidas] como dos realidades dicotómicas y diferentes; pero sobre todo, connotadas genéricamente, de tal manera que lo ‘público’ –la política, la ciudadanía, el poder, las formas más ‘prestigiadas’ de sociabilidad y de cultura- se vinculará ‘naturalmente’ –es decir, por entendido por ‘naturaleza’- a la identidad social masculina; en tanto lo ‘privado’ –entendido como ‘doméstico’ y no ‘civilizado’ ni civil en el caso de las mujeres- iba a identificarse con lo femenino”<sup>778</sup>.

---

<sup>773</sup> ROSTWOROWSKI, María. “La mujer en el Perú prehispánico”. Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Lima, 1995, pp. 5 y sgts.

<sup>774</sup> PATRUCCO, Sandro. “El Perú virreinal. Sociedad, economía y arte”. Editores Lexus. Barcelona, 2000, p. 19.

<sup>775</sup> VALDIVIESO, Magdalena. “Las mujeres y la política a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX en Venezuela”. En: *Otras miradas*. Volumen 7, N°1. Universidad de los Andes. Caracas, 2007, pp. 197-198.

<sup>776</sup> VARGAS LLOSA, Mario. “Prólogo. Flora Tristán y Paul Gauguin”. En: *Peregrinaciones de una paria*. Flora Tristán. Fondo editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 2003, p. 17.

<sup>777</sup> VILLANUEVA CHÁVEZ, Victoria y HERRERA GARCÍA, Elizabeth. “50 años del voto de las mujeres”. Manuela Ramos. Lima, 2005, p. 9.

<sup>778</sup> AGUADO, Ana. “Ciudadanía, mujeres y democracia”. En: *Historia Constitucional*. N° 6. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2005, p. 13.

Las transformaciones sufridas durante el siglo pasado hicieron posible el paulatino cambio de la humanidad en relación a diversos grupos, entre los que se encuentra la mujer. Muestra de ello la encontramos en intelectuales como Mariátegui<sup>779</sup>, al igual que en medidas legales relativas al reconocimiento del sufragio de la mujer (Ley N° 12391) y a la igualdad (artículo 2° inciso 2 de la Constitución de 1979).

No obstante, desde entonces han transcurrido décadas que no han reflejado la concordancia que debería existir entre el reconocimiento jurídico de la igualdad de la mujer y la consecución de la igualdad material, especialmente en lo que se refiere al ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Por tal motivo, expondremos brevemente las limitaciones con las que las mujeres de Perú se han topado durante el período 2000-2009 para acceder a adecuadas prestaciones de salud, educación y de trabajo.

### 3.1. Salud

El reconocimiento de la salud como derecho fundamental en el artículo 7° de la Constitución Política del Estado no ha encontrado correlato en el acceso de las mujeres a adecuadas prestaciones de salud que resguarden dicho atributo.

Ello se puede apreciar en lo que a la **atención prenatal** concierne, ya que conforme rescató el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) durante 2004, “en el quintil más pobre el 12% de las mujeres no se practicó control médico durante el embarazo y el 13% recibió control de personas con menor calificación. En el extremo opuesto, todas las mujeres recibieron atención y de personal calificado”<sup>780</sup>.

Asimismo, no se han establecido adecuadas políticas que prevean la atención a la mujer **durante el parto**, ya que el área de residencia de esta condiciona el acceso a prestaciones

---

<sup>779</sup> “Uno de los acontecimientos sustantivos del siglo veinte es la adquisición por la mujer de los derechos políticos del hombre. Gradualmente hemos llegado a la igualdad política y jurídica de ambos sexos. La mujer ha ingresado en la política, en el parlamento y en el gobierno. Su participación en los negocios públicos ha dejado de ser excepcional y extraordinaria” (VILLANUEVA CHÁVEZ, Victoria y HERRERA GARCÍA, Elizabeth. “50 años del voto de las mujeres” Op. cit., p. 10).

<sup>780</sup> BRAVO BARJA, Rosa. “Presupuesto por resultados. Indicadores de género: educación, salud y programa juntos”. Manuela Ramos. Lima, 2007, p. 21.

en tal momento, tal como señala la Defensoría del Pueblo, al precisar que “si la madre vive en área urbana o rural, la cifra de partos realizados en establecimientos salud es de 91% y 45%, respectivamente. En esa línea, el parto en un servicio de salud es tres veces más si se trata de madres que pertenecen al quintil de riqueza superior frente a las que se encuentran en el quintil inferior”<sup>781</sup>.

De igual manera, se constata que las políticas de salud pública no han brindado la importancia a la **atención postnatal**, lo cual incide en mayor proporción sobre aquellas que no dieron a luz en un establecimiento médico, ya que el 62% de dicho sector no accede a tales prestaciones, presentándose un cuadro más grave cuando esta situación se da en el caso de las mujeres que no cuentan con educación, alcanzando al 69% de las mujeres que sólo cuentan con educación primaria.

Por otro lado, se continúa restringiendo el **derecho de la mujer a ejercer libremente su sexualidad**, ya que la práctica de las esterilizaciones no consentidas, generalizada durante la década pasada, se ha revertido en una negativa adoptada por determinadas entidades de salud pública, pues conforme revela la Defensoría del Pueblo a través de un estudio realizado durante 2002, se presentaron casos de usuarias que, informadas del procedimiento de esterilización, fueron impedidas de ser beneficiarias de tal procedimiento por parte de autoridades sanitarias, tal como lo corroboran los 60 casos presentados en el Hospital de Chulucanas<sup>782</sup>.

En lo que respecta a las prestaciones de **salud mental** a favor de la mujer, el Estado peruano ha desconocido pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los que se deja constancia que “el género se erige en determinante estructural de la salud mental y de la enfermedad mental”<sup>783</sup>, pues como constató la Defensoría del Pueblo durante

---

<sup>781</sup> ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER. “Derecho a una maternidad segura: Supervisión nacional a los servicios de ginecología y obstetricia del MINSA”. Informe Defensorial N° 138. Defensoría del Pueblo. Lima, 2009, p. 8.

<sup>782</sup> ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER. “La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos III Casos investigados por la Defensoría del Pueblo”. Informe N° 69. Defensoría del Pueblo. Lima, 2002, p. 137.

<sup>783</sup> “*Gender is conceptualized as a structural determinant of mental health and mental illness that runs like a fault line*” (DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE DEPENDENCE. “Gender

2004, “la situación de especial vulnerabilidad que afrontan las mujeres con discapacidad por enfermedad mental, origina que se presenten restricciones a derechos fundamentales como el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho al cuidado de la salud reproductiva, incluida la planificación familiar, el derecho al cuidado de los hijos menores de edad, entre otros”<sup>784</sup>.

### 3.2. Educación

A pesar de que la Constitución Política reconoce al derecho a la educación como presupuesto para el desarrollo humano, se constata que las mujeres son más propensas a no acceder a adecuadas prestaciones educativas.

Ello se constata en el índice de **analfabetismo femenino**, pues como se refiere en un estudio realizado durante 2006, en Perú la tasa de analfabetismo masculina es de 6.5%, mientras la femenina es de 17.8%, es decir, que la diferencia de 11.4% revela una clara situación de inequidad en el acceso de las mujeres a los programas básicos de educación que les permitirían el aprendizaje de la lectura y de la escritura<sup>785</sup>.

En lo que se refiere a las barreras para el **acceso a la educación**, las mujeres acceden en menor proporción que los varones a los diferentes niveles educativos. Así, por ejemplo, de acuerdo al censo realizado por INEI durante 2007, de la población comprendida entre 15 y 24 años, se “muestra que el 10,8% de las mujeres no tiene ningún nivel de educación, siendo tres veces mayor que lo observado en los hombres (3,9%)”<sup>786</sup>.

---

disparities in mental health”. Organización Mundial de la Salud, p. 2. Disponible en: [http://www.who.int/mental\\_health/media/en/242.pdf](http://www.who.int/mental_health/media/en/242.pdf) (Revisado el 28 de abril de 2009).

<sup>784</sup> DEFENSORÍA DEL PUEBLO. “Salud mental y derechos humanos: La situación de los de las en establecimientos de derechos personas internadas salud mental”. Informe Defensorial N° 102. Lima, 2005, p. 141.

<sup>785</sup> ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA. “Iberoamérica: territorio libre de analfabetismo. Plan iberoamericano de alfabetización y educación básica de personas jóvenes y adultas 2007-2015. Documento base”. Montevideo, 2006, p. 13.

<sup>786</sup> INEI. “Perfil sociodemográfico del Perú”. INEI, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y PNUD. Lima, 2008, p. 89.

De igual manera, la Defensoría del Pueblo corroboró que “el porcentaje de población de tres a cinco años que asistió a Programas de Educación Inicial, al 2005, según sexo era el 57.2% en el caso de las niñas y el 57.7% en el de los niños”<sup>787</sup>. Sobre el acceso a la educación primaria, el INEI ha comprobado que de la población comprendida entre 15 y 24 años de edad, el 22.1% de varones han accedido a la educación primaria, en comparación del 24.3% de mujeres que también ha accedido a dicha educación, lo cual determinaría un total de 2’069,330 varones y de 2’353,518 mujeres<sup>788</sup>.

Sin embargo, esta situación no es propia del acceso al nivel educativo, pues en el mencionado universo el INEI ha comprobado que mientras el 41.9% de varones han tenido acceso a dicho nivel educativo, sólo el 34.6% de mujeres lo han hecho, lo cual determinaría un total de 3’926,159 varones y de 3’348,738 mujeres<sup>789</sup>. En cuanto al acceso a la educación superior, INEI corroboró que en dicho universo, mientras. De igual manera, el INEI constató que de la población comprendida entre 15 y 24 años de edad, el 32.0% de varones accedía, en el caso de las mujeres el porcentaje ascendía al 30.2% de mujeres, lo cual determinaría un total de 2’996,418 varones y de 2’926,256 mujeres<sup>790</sup>.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha constatado que el **rol de la mujer en los contenidos educativos** es sesgado, recomendando “como objetivos generales la eliminación de los patrones culturales y de los estereotipos basados en la inferioridad de alguno de los sexos en las metodologías de enseñanza; la eliminación de las funciones que se asignan tradicionalmente a mujeres y hombres en los textos, publicaciones y planes de estudio; así como la capacitación del personal docente respecto a la identificación de prácticas que coadyuvan a prevenir cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres”<sup>791</sup>.

---

<sup>787</sup> ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER. “Segundo reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (enero-diciembre 2008)”. Informe N° 001-2009-DP/ADDM. Defensoría del Pueblo. Lima, 2009, p. 202.

<sup>788</sup> INEI. “Perfil sociodemográfico del Perú”. Op. cit., p. 89.

<sup>789</sup> Loc. cit.

<sup>790</sup> Loc. cit.

<sup>791</sup> ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER. “Segundo reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (enero-diciembre 2008)”. Op. cit., p. 39.

### 3.3. Trabajo

A pesar de que la Constitución Política del Estado consagra derechos laborales, estos no son resguardados adecuadamente, existiendo mayor incidencia de vulneración en el caso de las mujeres.

Un indicador de esta situación ha sido constatado por una investigadora del INEI durante 2006 al abordar el **estudio comparativo de la remuneración de las mujeres y de los varones tomando como referente el nivel educativo**. Así, de la población económicamente activa (PEA) con estudios primarios, se constató que mientras los varones perciben un promedio de S/. 606, las mujeres con el mismo nivel educativo reciben una retribución de S/. 445, es decir, una diferencia de S/. 161<sup>792</sup>.

De igual manera, de la PEA con estudios secundarios se corrobora que mientras los varones perciben en promedio S/. 863, las mujeres perciben aproximadamente S/. 546, es decir, casi 40% menos que sus compañeros varones<sup>793</sup>. En lo que respecta a la PEA con estudios superiores no universitarios, se acreditó que mientras el ingreso promedio de los varones asciende a S/. 1,062, el de las mujeres a S/. 863, es decir, 19% menos<sup>794</sup>. Asimismo, en la PEA con estudios superiores universitarios, se corroboró que mientras los varones perciben en promedio S/. 3,193, las mujeres tan sólo S/. 1,401, es decir S/. 1,792 menos, el índice más bajo en relación al nivel educativo alcanzado.

## 4. Explicaciones preliminares sobre la situación de la mujer en Perú

Los datos obtenidos del diagnóstico sobre la situación de la mujer en Perú nos conducen a explicarla a través de consideraciones jurídicas y sociológicas.

### 4.1. Explicación jurídica

---

<sup>792</sup> VELAZCO PORTOCARRERO, Tatiana (Coordinadora). “La mujer en el mercado laboral peruano. Informe anual 2005”. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Lima, 2006, p. 31.

<sup>793</sup> Loc. cit.

<sup>794</sup> Loc. cit.

Conforme se ha constatado, las mujeres en Perú encuentran restringido el ejercicio de sus derechos a la salud, educación y al trabajo, ya que de la comparación de su situación con la de los varones, el panorama de la mujer resulta ser desventajoso en cuanto al ejercicio de los mencionados derechos.

Esto revela la existencia de un plano social de inequidad, cuya subsistencia carece de justificación jurídica debido a que si los varones y las mujeres son diferentes, pero igualmente titulares de derechos fundamentales, se debería constatar la igualdad material en el ejercicio de sus derechos.

Al no darse esta situación, se configura un panorama de **discriminación contra la mujer** en Perú, la cual quebranta el mandato contenido en el artículo 2º inciso 2 de la Constitución Política del Estado y es definida como “una conducta, culturalmente fundada, y sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja innecesaria, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales”<sup>795</sup>.

#### **4.2. Explicación sociológica**

La constatación de que las mujeres en Perú no encuentran las condiciones adecuadas para el ejercicio de sus derechos a la salud, educación y al trabajo no sólo debe determinar el quebrantamiento de la cláusula de igualdad, sino que debe trascender el plano jurídico a efectos de encontrar las causas que originan dicha situación.

Para ello es importante acudir a la sociología, la cual remite la configuración de este fenómeno a la **cultura**, en tanto dicha variable es entendida como “el patrón de significados incorporados en formas simbólicas, incluyendo allí expresiones lingüísticas, acciones y

---

<sup>795</sup> RODRÍGUEZ ZEPÉDA, Jesús. “Construcción de un marco teórico sobre la discriminación: La discusión académica y la acción institucional”. Documento de Trabajo No. E-8-2005. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). México D.F., 2006, p. 18.

objetos significativos, a través de los cuales los individuos se comunican y comparten experiencias”<sup>796</sup>.

La identificación de la cultura como causa de la discriminación de la mujer conduce a Marín Hernández a sostener que “las representaciones femeninas se encuentran íntimamente ligadas a los discursos monocentrados patriarcales, a sus procesos de existencia y a las consecuencias acarreadas por la implicación de la idea de la mujer dentro de conceptos como la fragilidad o la belleza femenina, al igual que el reciclaje o la reivindicación de su memoria por medio de los oficios permitidos, todo esto unido a la perentoria necesidad de ubicar su pensamiento en el cómo entender su posición dentro de espacios marginales, privados y lejanos de la acción pública”<sup>797</sup>.

Por tal motivo, Martínez sustenta esta situación como el producto de un proceso en el que “una de las claves para entender el papel secundario de la mujer en la sociedad según el análisis feminista, era su reclusión en el seno de la familia causada por la división sexual del trabajo que le adjudicaba lo doméstico o interior, mientras que a los hombres se les adjudicaba lo social o exterior”<sup>798</sup>.

## **5. Estudio de campo realizado sobre un universo de mujeres y varones**

Consciente de las causas que configuran la discriminación contra la mujer, quien formula el presente proyecto de ley consideró necesario desarrollar un estudio empírico, el cual fue llevado a cabo el 08 de agosto de 2008 en el Ilustre Colegio de Abogados del Callao.

La elección de dicho escenario para la investigación obedeció a las especiales características de la mencionada localidad, expresadas por la Defensoría del Pueblo en el

---

<sup>796</sup> LARRAIN, Jorge. “El concepto de identidad”. En: *Famecos*. N° 21. Pontificia Universidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2003, p. 31.

<sup>797</sup> MARÍN HERNÁNDEZ, Elizabeth. “Pensar en femenino: la mujer y su aparecer en la modernidad: Teresa de la Parra, Tarsila do Amaral, Frida Kahlo, Amalia Peláez”. En: *Presente y Pasado. Revista de Historia*. Año 11, N° 22. Facultad de Humanidades y Educación Universidad de Los Andes. Mérida, 2006, p. 142.

<sup>798</sup> MARTÍNEZ, Remedios. “Trabajo, cultura y género”. En: *La difusión del conocimiento en los estudios de las mujeres. Actas del II Congreso Internacional del Audem*. Universitat d’ Alicante. Alicante, 2001, p. 336.



Informe sobre Violencia contra la Mujer en el Callao<sup>799</sup>, a través del cual se expresaron rasgos culturales que resultaron interesantes para el investigador a efectos de realizar el estudio sobre dicho ámbito.

De igual manera, la elección del Ilustre Colegio de Abogados del Callao se realizó en mérito de que siendo abogados y estudiantes de Derecho las personas que concurren a los seminarios jurídicos organizados por dicha entidad, el universo de investigación tendría mayores conocimientos que el resto de la población en torno a la igualdad de la mujer y a la discriminación debido a que la formación jurídica aborda tales temas en el desarrollo de las asignaturas de Derechos Humanos y Derecho Constitucional en la cátedra universitaria de pregrado.

Por tal motivo, 43 personas fueron entrevistadas, aplicándoseles una encuesta consistente en seis variables que debían ser objeto de identificación a través de la categoría que el entrevistado considere como propia. Las variables utilizadas fueron sexo, machismo, estereotipos, discriminación, educación y edad. Sobre las cinco primeras, los/as participantes contaron con dos categorías excluyentes de las cuales debían elegir aquella con la cual se identificaban<sup>800</sup>, mientras que en relación a la variable edad, esta no contenía categoría alguna, debiendo el/la participante dejar constancia de los años de edad con los que contaba a la fecha de la realización de la encuesta.

### **5.1. El machismo como variable rectora en el análisis de la discriminación**

Los datos obtenidos en la encuesta permitieron identificar que tanto mujeres como varones fueron objeto de conductas machistas, aunque se apreció una mayor tendencia en las mujeres.

### **5.2. El sexo como variable rectora en el análisis de la discriminación**

---

<sup>799</sup> DEFENSORÍA DEL PUEBLO. “Violencia familiar contra la mujer en el Callao”. Lima, 2004, pp. 238.

<sup>800</sup> En cuanto a la variable sexo, las categorías eran “femenino” y “masculino”; en las variables machismo, discriminación y estereotipos, las categorías fueron “sí he sido objeto” y “no he sido objeto”; mientras que en educación fueron “nivel educativo básico concluido” y “nivel educativo superior concluido”.

De igual manera se determinó que mujeres como varones fueron víctimas de discriminación, aunque existe una mayor tendencia de las mujeres de ser objeto de ella.

### **5.3. Los estereotipos como variable rectora en el análisis de la discriminación**

Los estereotipos condicionan la producción del machismo, el cual repercute sobre varones y mujeres, aunque en mayor grado sobre estas últimas.

### **5.4. El nivel educativo como variable rectora en el análisis de la discriminación**

El nivel educativo desvirtúa la discriminación, pues se constata que las mujeres y los varones que han alcanzado el nivel superior son menos discriminados que aquellas personas que sólo completaron el nivel educativo básico, aunque se aprecia una mayor proporción de discriminación en las mujeres con educación superior que en sus pares hombres.

### **5.5. La edad como variable rectora en el análisis de la discriminación**

La edad constituye un factor que condiciona la discriminación debido a que las personas jóvenes son menos discriminadas que las adultas, aunque se aprecia una mayor proporción de discriminación en las mujeres jóvenes que en sus pares hombres.

## **6. Explicación de los resultados**

Como se ha podido acreditar, los estereotipos y el machismo condicionan la discriminación de las mujeres y de los varones, aunque en mayor grado sobre las primeras. Sin perjuicio de ello, la edad y la educación repercuten en su configuración, ya que del universo investigado, **la población joven que ha alcanzado estudios superiores es la menos propensa a ser discriminada**, existiendo una mayor tendencia de vulneración en las mujeres de dicho grupo.

Si bien estos resultados revelan que la educación constituye un factor que desvirtúa la discriminación, **ello no encuentra su correlato sobre las personas que han alcanzado el nivel educativo básico ni sobre la totalidad de aquellos con estudios superiores –en especial sobre las mujeres–**, motivo por el cual se hace necesario garantizar que la totalidad de la población se encuentre exenta de ser víctima de discriminación en razón de su sexo. Por tal razón, **es imprescindible incorporar programas educativos fundados en la igualdad, la tolerancia y la perspectiva de género**.

A efectos de sustentar dicho argumento, debe precisarse que la educación ha sido definida por el Tribunal Constitucional como un servicio público –es decir, de una “prestación pública que explicita una de las funciones-fines del Estado, de ejecución per se o por terceros bajo fiscalización estatal”<sup>801</sup>– que tiene por finalidad “desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, enmarcada en una visión latinoamericana y universal”<sup>802</sup>.

Sobre la base de lo expuesto, el Tribunal Constitucional recuerda que la educación es un derecho prestacional, ya que “[e]l Estado la asume como función indeclinable y está obligado a invertir en todos sus niveles y modalidades. (...) [L]a dimensión prestacional, [es aquella] en cuya virtud el Estado debe procurar la mayor efectividad del derecho a la educación”<sup>803</sup>. Tal afirmación surge de la necesidad del Estado de tutelar que se cumpla adecuadamente con la impartición de educación, ya que ello asegura el desarrollo del ser humano, pues como ha considerado el colegiado, “la educación implica un proceso de incentivación del despliegue de las múltiples potencialidades humanas cuyo fin es la capacitación del hombre para la realización de una vida existencial y coexistencial genuina

---

<sup>801</sup> Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 04232-2004-AA, Fundamento Jurídico N° 11.

<sup>802</sup> Ibidem, Fundamento Jurídico N° 10.

<sup>803</sup> Loc. cit.

y verdaderamente humana; y, en su horizonte, permitir la cristalización de un ‘proyecto de vida’”<sup>804</sup>.

Vemos que el contenido de los extractos glosados se concatenan a encaminar a la educación hacia el desarrollo del ser humano, con lo cual se estaría cumpliendo con uno de los fines del Estado, determinados por los artículos 3º y 51º de la Constitución Política; nos referimos a la vida en dignidad, la cual es asegurada siempre y cuando el individuo pueda realizarse eficazmente y acceda a condiciones decorosas de existencia en la medida que su nivel educativo le permita satisfacer las exigencias que nuestra sociedad le impone para incorporarse como elemento productivo de ella.

Sin embargo, se acredita que no se ha cumplido con implementar adecuadas políticas educativas que incorporen la igualdad, la tolerancia y la perspectiva de género en sus contenidos, lo cual revela a su vez el desconocimiento de las personas encargadas de implementar las referidas políticas que los patrones de conducta que pretenden ser impuestos sobre varones y mujeres y que restringen el pleno ejercicio de sus derechos constituyen manifestaciones de discriminación, las cuales tienen una “causa madre”, muy enraizada dentro de nuestra sociedad, cual es el machismo y que debe ser revertido a través de la incorporación de la igualdad, la tolerancia y la perspectiva de género en las políticas educativas.

### **6.1. Ausencia de contenidos educativos inspirados en la igualdad entre varones y mujeres**

Debemos señalar que esta situación no se produce únicamente en nuestro sistema educativo, pues la Cooperación Peruana de Cooperación y la UNESCO han reconocido que el rol de la mujer en los contenidos educativos es sexista<sup>805</sup>, ya que “las características propias de cada sexo también se presentan de forma estereotipada: a los hombres se los

---

<sup>804</sup> Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 04232-2004-AA, Fundamento Jurídico N° 10.

<sup>805</sup> MICHEL, Andrée. “Los estereotipos sexistas en la escuela y en los manuales escolares”. En: *Educere*. Año 5, N° 12. Universidad de los Andes. Mérida, 2001, p. 69.

describe principalmente como valientes, inteligentes, patriotas, dotados del sentido de mutua colaboración; a las mujeres como obedientes y sacrificadas”<sup>806</sup>. Por otro lado, dentro del hogar, “se presenta a las mujeres ocupadas lavando, cocinando, cuidando a los/as niños/as, mientras los hombres descansan y ayudan a los/as niños/as a hacer los deberes. Se describe la casa como el lugar de las mujeres por excelencia; así, de 100 textos que describen una casa, 70 representan a mujeres y 30 a hombres”<sup>807</sup>.

Sin embargo, lo más alarmante sería que incluso los/as propios/as docentes avalan esta situación, pues aunque se condena el machismo, “temen que poner en entredicho los roles tradicionales de los sexos pueda socavar los valores éticos, que asocian a una concepción tradicional de la familia y de la mujer, considerada como ‘el puntal del hogar’”<sup>808</sup>.

Si bien la investigación mencionada fue realizada hace veintiséis años, se acredita que dicha situación no ha cambiado mucho, ya que la Defensoría del Pueblo ha recomendado “como objetivos generales la eliminación de los patrones culturales y de los estereotipos basados en la inferioridad de alguno de los sexos en las metodologías de enseñanza; la eliminación de las funciones que se asignan tradicionalmente a mujeres y hombres en los textos, publicaciones y planes de estudio; así como la capacitación del personal docente respecto a la identificación de prácticas que coadyuven a prevenir cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres”<sup>809</sup>, lo cual revela la subsistencia de la discriminación contra la mujer en esta esfera.

## **6.2. Analfabetismo funcional en la concepción de la igualdad entre varones y mujeres**

El analfabetismo es concebido como un “fenómeno donde el analfabeto (persona que no sabe leer) lo es por circunstancias de no haber precisado de la lectura (sociedades orales) y

---

<sup>806</sup> Ibidem, p. 72.

<sup>807</sup> Loc. cit.

<sup>808</sup> Ibidem, p. 69.

<sup>809</sup> ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER. “Segundo reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (enero-diciembre 2008)”. Op. cit., p. 39.

en otras por habersele negado el derecho de leer, representa la cara injusta, la de las consecuencias negativas y constituye un problema ético, social y político”<sup>810</sup>.

No obstante, dicho concepto corresponde al analfabetismo lineal, el cual es tomado como objetivo por nuestra política educativa, sin que se aborde el analfabetismo funcional, es decir, aquel desconocimiento sobre aquellos ejes que permiten el pleno desarrollo del ser humano. En lo que concierne a la situación de los varones y de las mujeres, se constata el analfabetismo funcional en su concepción sobre la igualdad material y en la identificación de las causas de la discriminación, lo cual revela la necesidad de incorporar dichos contenidos en la educación peruana.

## **II. EFECTO DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL**

La expedición de la “Ley que incorpora la perspectiva de género en la educación” constituye la concreción de la cláusula de igualdad, consagrada en el artículo 2° inciso 2 de la Constitución Política y desarrollado por el Tribunal Constitucional a través del fundamento 9 de la sentencia recaída en el Expediente N° 00606-2004-AA/TC, que establece lo siguiente:

*“La igualdad, en tanto principio, es uno de los pilares del orden constitucional que permite la convivencia armónica en sociedad. Por su parte, la igualdad, en tanto derecho, implica una exigencia individualizable que cada persona puede oponer frente al Estado para que este lo respete, proteja o tutele”.*

En tal sentido, la implementación del proyecto de ley repercute positivamente sobre nuestro ordenamiento jurídico debido a que constituye un mecanismo que permite materializar la igualdad material.

---

<sup>810</sup> JIMÉNEZ DEL CASTILLO, Juan. “Redefinición del analfabetismo: El analfabetismo funcional”. En: *Revista de educación*. N° 338. Instituto de Evaluación. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Madrid, 2005, p. 282.

### **III. FÓRMULA LEGAL**

El proyecto de ley se dará a través del siguiente texto:

#### **“LEY QUE INCORPORA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN**

*La Constitución Política ha consagrado en el inciso 2 de su artículo 2° la igualdad ante la ley de toda persona, la cual no podrá ser quebrantada por razón de ninguna índole. Sin embargo, se observa en la realidad una serie de situaciones relativas a la restricción del pleno ejercicio de las mujeres a sus derechos económicos, sociales y culturales (DESC)<sup>811</sup> de los que se desprende que dicho mandato constitucional no encuentra correlato en los hechos.*

*Este panorama revela que la consecución de la plena igualdad entre varones y mujeres está condicionada por factores culturales, donde variables como los estereotipos y el machismo inciden de manera gravitante en el establecimiento de patrones de comportamiento que son impuestos a varones y a mujeres y que restringen el ejercicio de sus derechos al no encuadrarse sus acciones a los referidos patrones, con lo cual se genera una situación generalizada de intolerancia hacia lo que no es concebido como propio de los roles de género, limitándose el libre el desarrollo de los seres humanos.*

*La reversión de este panorama sólo puede ser asumido a través de la inclusión de políticas educativas sustentadas en contenidos dirigidos desde la igualdad y la tolerancia, las cuales serán eficaces a partir de la incorporación de la perspectiva de género en la educación.*

*Por tal motivo, el Congreso de la República expide la siguiente ley:*

#### **LEY QUE INCORPORA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN**

---

<sup>811</sup> Conforme se expresara en la parte expositiva de los antecedentes del presente proyecto, diversos estudios realizados por entidades estatales revelan la restricción de las mujeres a prestaciones de salud prenatales, durante el parto, postnatales, al ejercicio de sus derechos sexuales y a prestaciones de salud. De igual manera, la mayor cifra de analfabetismo y de restricción a los diferentes niveles educativos, como también una menor remuneración en comparación a los varones.

### ***Artículo 1º.- Objeto y ámbito de aplicación de la ley***

*La presente ley tiene por objeto incorporar contenidos dirigidos desde la igualdad y la tolerancia, las cuales serán eficaces a partir de la incorporación de la perspectiva de género en la educación, con el propósito de revertir el panorama de restricción del pleno ejercicio de los derechos de varones y de mujeres, sustentados en los patrones de comportamiento que socialmente se imponen a dichos grupos, limitando su libre desarrollo.*

### ***Artículo 2º.- Perspectiva de género***

*Con el propósito de alcanzar la tolerancia y la igualdad material, las políticas educativas deben incorporar contenidos orientados por la perspectiva de género, debido a que parte de la constatación de la situación de las mujeres y de los varones en la realidad de nuestro país, es decir, desde la subordinación de la mujer dentro del imperante orden patriarcal, la división sexual del trabajo –en categorías como la productiva, comunitaria (asignadas al varón) y reproductiva-, diferente acceso y control sobre recursos y beneficios, y la exclusión de la mujer en la toma de decisiones, como en la restricción del varón en la realización de labores que han sido identificadas como propias de la mujer.*

### ***Artículo 3º.- Objetivos de la perspectiva de género***

*A través de la perspectiva de género se erigirá la política destinada al cambio de los patrones sociales que componen los roles de género impuestos al varón y a la mujer, lo cual será llevado a cabo a través de la constatación de la realidad, la planificación de políticas, su ejecución y posterior evaluación, a fin de alcanzar un sistema social equitativo, justo y solidario*

### ***Artículo 4º.- Principios de la ley***



*La presente ley está orientada bajo dos principios que permitirán incorporar la perspectiva de género en la educación.*

#### **4.1. Tolerancia**

*De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, la tolerancia es el “respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”<sup>812</sup>. La incorporación de la tolerancia a los contenidos educativos implica la identificación de la diversidad como propio de la naturaleza humana y, en consecuencia, el respeto de las diferencias con el propósito de asegurar a los diversos grupos humanos su pleno desarrollo. Ello propiciará la consecución de una cultura de paz, en el que todas las perspectivas sean asumidas como manifestación de la diversidad, propia de la especie humana.*

#### **4.2. Igualdad**

*La igualdad constituye un principio rector que trasciende la igualdad legal o formal y se dirige a la consecución de la igualdad material o de hecho, para lo cual será necesario previamente incorporar contenidos educativos en los que se aprecien a los distintos grupos –entre ellos, varones y mujeres- como ejecutores de diferentes acciones destinadas a su libre desarrollo como personas.*

#### **Artículo 5º.- Incorporación de la perspectiva de género en la educación**

*La incorporación de la perspectiva de género en la educación se dará a través de los siguientes lineamientos:*

**5.1. Establecimiento de estrategias de desarrollo, que permitan involucrar a varones y mujeres como agentes decisores de su propio desarrollo, incrementando su acceso a los**

---

<sup>812</sup> Real Academia Española de la Lengua (RAE). Disponible en: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=tolerancia> (Búsqueda realizada el 06 de junio de 2009).

recursos, opciones y poder político, es decir, **transformando las relaciones de género**, lo cual determina la consecución de la igualdad en el impacto del proyecto y en el beneficio obtenido.

**5.2. Planteamiento de acciones de desarrollo**, a través del análisis de género y de las relaciones de poder en la comunidad, las cuales se realizan por medio de consultas con varones y mujeres, a fin de identificar la condición, posición, necesidades prácticas e intereses de ambos grupos para abordar los intereses estratégicos de la comunidad en pos de fortalecerla económica y políticamente.

**5.3. Reformular los contenidos educativos** en los textos académicos como en la impartición de clases e implementar nuevos contenidos destinados a identificar a las mujeres y a los varones como partícipes del cambio social.

*El desarrollo de estos lineamientos traerá como consecuencia el cumplimiento del objetivo de la perspectiva de género: el desarrollo sostenible, equitativo y participativo de varones y mujeres.*

#### **Artículo 6º.- Cumplimiento de la ley**

*El cumplimiento de la presente ley estará a cargo del Ministerio de Educación, como ente rector de coordinar y vigilar su aplicación en los diferentes niveles educativos en coordinación directa con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.*

### **DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS**

#### **Primera.- Ejecución de la ley**

*La ejecución del contenido de la presente ley será paulatina. Para ello, se iniciará a través de la implementación de un plan piloto en El Callao, a efectos de medir sus resultados en el ejercicio educativo siguiente al de su incorporación y evaluar su eficacia. Ello servirá de*

*sustento para incorporar la presente ley al año siguiente dentro de las capitales de departamento y evaluar su eficacia, lo cual permitirá determinar los aspectos positivos y negativos de su ejecución, para rediseñarla e implementarla en el resto del país.*

*Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.*

## **12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

A través de la exposición del marco teórico de la investigación, nos hemos propuesto formular dos hipótesis que han que han sido contrastadas con la realidad de la mujer en el acceso a la justicia, en la participación en cargos políticos, en la remuneración laboral y en el trato que se les da a las mujeres de comunidades nativas y originarias y nos han permitido corroborar nuestras hipótesis, tal como exponemos en la conclusión de esta investigación:

### **12.1. CONCLUSIONES**

**12.1.1. EL SEXO NO CONDICIONA LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER:** Tanto mujeres como varones son discriminados, aunque en menor proporción estos últimos.

**12.1.2. LOS ESTEREOTIPOS CONDICIONAN LA PRODUCCIÓN DEL MACHISMO:** Tanto mujeres como varones son objeto de estereotipos y, en consecuencia, de machismo, aunque en mayor grado en la mujer, ya que los roles de género delimitan los ámbitos que socialmente son permitidos.

**12.1.3. LA EDAD Y EL NIVEL EDUCATIVO CONDICIONAN LA DISCRIMINACIÓN:** Las personas jóvenes (hasta 29 años) y aquellas con nivel educativo superior son menos propensas a ser discriminadas que las adultas y que aquellas sólo han completado el nivel educativo básico.

#### **12.1.4. EN LA CULTURA SUBYACEN LOS CONDICIONANTES DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER:**

Al ser el machismo el principal factor que configura la discriminación contra la mujer y, al corroborarse la incidencia del nivel educativo en su configuración, se revela que el factor preponderante en la producción de la discriminación en contra de la mujer es la cultura, categoría en la que se encuentra insertada el machismo.

- El análisis jurídico de este fenómeno debe valerse de disciplinas como la sociología a fin de complementar el cabal estudio de la materia e identificar el factor determinante en la configuración de la discriminación. Así pues, y tomando en consideración que la discriminación es el trato diferenciado y realizado sobre la base de parámetros subjetivos, dicho fenómeno se construye sobre la base de la comparación con un referente conocido como “el otro”.
- Siendo este el término de comparación, la construcción del “otro” se sustenta en factores culturales que originan estereotipos asumidos como propios y naturales de ciertos grupos, razonamiento que –como resulta evidente- se encuentra enraizado en el imaginario popular, de tal manera que se convierten en paradigmas que entorpecen el cabal ejercicio de los derechos y libertades en igualdad de condiciones con aquellos grupos histórica y culturalmente “privilegiados”.
- Al condicionar la cultura al machismo, este se expresa a través del trato que se brinda a las mujeres. En tal sentido, la identificación de conductas discriminadoras se ubica inmediatamente en el trato del que son objeto, como en el acceso a oportunidades de desarrollo. Siendo que el trato no es uniforme –sino que responde a conductas que obedecen en relación directa a conceptos previamente establecidos como naturales y propios a determinados colectivos-, el trato del que es objeto la mujer obedece directamente a factores culturales.

- De la misma manera, las oportunidades de desarrollo a las que la mujer puede acceder se encuentran sustentadas en la concepción que reside en el imaginario colectivo sobre el rol de la mujer en la esfera pública, donde podrá desplegarse a efectos de desarrollarse educativa, laboral y personalmente. Siendo así, resulta evidente que la generación de oportunidades de desarrollo de la mujer se encuentra condicionada a factores culturales, que obedecerán a la particular realidad del universo de donde se tomará la muestra para la investigación.
  
- El factor cultural es condicionante de la discriminación contra la mujer, por lo que *el Derecho Constitucional debe tomar en consideración la particular realidad peruana como fuente del problema, a efectos de sustentar propuestas que resulten efectivas en aras del cabal ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres.*

**12.1.5. LA DISCRIMINACIÓN GENERA LA VULNERACIÓN DE OTROS DERECHOS DISTINTOS A LA IGUALDAD:** Al encontrarse presente los estereotipos en todo tipo de relación, estos extienden su ámbito sobre el acceso a todo tipo de derechos y, en consecuencia, sobre las prestaciones que permiten efectivizarlos, como son las relativas a la educación, a la salud y al trabajo. Ello restringe el pleno desarrollo del humano, vulnerando así la defensa del ser humano como fin supremo de la sociedad y del Estado, conforme reconoce el artículo 1º de la Carta Política.

**12.1.6. NO ES ADECUADA LA DACIÓN DE UNA LEY ANTIDISCRIMINATORIA A FAVOR DE LA MUJER:** Se planteó como objetivo de investigación determinar su idoneidad, la que ha sido descartada, pues se constata que el varón es víctima de discriminación. Por tal motivo, se hace necesaria la inclusión de políticas de género en los programas educativos para revertir la discriminación en contra de varones y de mujeres, ya que los primeros también son discriminados aunque en menor proporción que la mujer, siendo más alto el índice en las personas que sólo concluyeron el nivel educativo básico.

## 12.2. RECOMENDACIONES

### 12.2.1. VISIBILIZAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO MECANISMO PARA CONCRETAR LA IGUALDAD MATERIAL DE LA MUJER

Son tres las clases de políticas diseñadas para abordar la equidad desde esta perspectiva<sup>813</sup>:

#### - Políticas específicas

Como su nombre lo señala, estas políticas se dirigen a la consecución de una finalidad precisa. Puede entenderse que su campo de acción es limitado, pero también que es efectivo, en tanto se centra en un aspecto concreto. Estas políticas están destinadas para proyectos en los que las mujeres son las participantes y el grupo objetivo; por ejemplo, “[l]as mujeres tienen mayor desventaja para acceder al crédito y por lo tanto hay que crear mecanismos de crédito específicos para ellas”<sup>814</sup>. Estas políticas serán apropiadas cuando se prive a la mujer de participación, opinión e inserción laboral y cuando deban asumir nuevos roles como producto de la migración masculina.

Si bien existe una serie de ventajas en los resultados –atención a las necesidades de las mujeres, inclusión en la toma de decisiones, asunción de iniciativas en esferas ajenas al ámbito doméstico y creación de redes femeninas de apoyo-, se corre el riesgo de dar una imagen de bienestar, descuidando la construcción de la equidad de la mano con el varón, pues paradójicamente, se lo excluye en la implementación de estos programas. Ello resulta contraproducente, pues no se altera el orden doméstico de subordinación.

---

<sup>813</sup> La información consignada en este punto se basa en la propuesta por un informe de la OIT de 1991 que Carmen De La Cruz pone a disposición en “Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo”. Emankude. Editorial Grafo. Navarra, 1998. Sin embargo, la autora obvia colocar mayores datos respecto a la ubicación del citado informe.

<sup>814</sup> Ibidem, p. 37.

## - Políticas neutrales

Las políticas neutrales toman en consideración el orden comunitario existente; no pretenden cambiarlo, sino trabajar sobre la base de la estructura existente para el desarrollo de la mujer. Estas políticas son empleadas en los proyectos que tienen un “componente de mujer”, es decir, en casos en que “[l]as mujeres y los hombres contribuyen al ingreso doméstico y, por lo tanto, hay que buscar el acceso al crédito para ambos (...) [a través de] una actividad específica dirigida a las mujeres”<sup>815</sup>.

Estas políticas son apropiadas cuando las mujeres desean conseguir metas propias, siendo positivas pues tienen acceso a los recursos y actividades principales del proyecto; sin embargo, no son ventajosas pues no producen cambios profundos en el cambio de la perspectiva de género, al mantener intacto el rol en la esfera doméstica.

## - Políticas redistributivas

Como hemos señalado, es necesaria la participación del varón en la construcción de un nuevo concepto de género femenino. En efecto, “[l]os hombres son parte de la ecuación que a la larga conducirá a la igualdad de género. Por lo tanto, *involucrar a los hombres es una medida pragmática de esfuerzos para lograr los derechos de las mujeres*, así como una medida táctica dirigida a alcanzar la meta de los derechos humanos para todos. Al trabajar sólo con mujeres, estamos tratando de mejorar sus vidas, pero influyendo muy poco en las transformaciones institucionales, sociales y estructurales necesarias para lograr una verdadera igualdad de género”<sup>816</sup> (las cursivas son nuestras).

---

<sup>815</sup> Ibidem, p. 39.

<sup>816</sup> Association for Women’s Rights in Development (AWID)... Trabajando con los hombres a favor de los derechos de las mujeres; Febrero de 2004; Google; <http://www.awid.org/publications/primers/waysmeansp2.pdf>; 8 de julio de 2007.

AWID considera necesario de trabajar el concepto de género con los varones, expandir la comprensión actual de las relaciones y del impacto del poder en la desigualdad de género. Esto se llevará a través de la *capacitación en sensibilización al género* que “[permite a los hombres reflexionar sobre sus propios puntos de vista y actitudes (...) [promoviendo] las creencias, prácticas y valores culturales que refuerzan la responsabilidad compartida por la igualdad de género y deberían centrarse en cambios de actitudes y transformaciones de conductas”<sup>817</sup>. Asimismo, se deberá *movilizar a los hombres como agentes del cambio*, lo que implica reconocer la ventaja del género masculino en la toma de decisiones a fin de constituirlo en un factor decisivo al momento de plantear que alce su voz para propugnar el cambio de la estructura del género femenino. Estos dos factores serán pertinentes en tanto se creen estrategias con otros movimientos sociales que buscan la equidad entre todos los seres humanos, pues creará espacios para el diálogo.

Como se ve, la perspectiva de género es un punto de tema de suma importancia si es que deseamos dotar al análisis de la discriminación contra la mujer de un elemento que servirá para la construcción de la equidad entre varones y mujeres.

### **12.2.2. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN**

El panorama que ha sido expuesto revela un cuadro de discriminación contra la mujer en el acceso a prestaciones educativas. Si bien el marco legal vigente contenido en la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece una serie de principios rectores en su artículo 8° que son pertinentes para superar esta situación de inequidad, consideramos que este debe ser complementado a través de la incorporación de la perspectiva de género en la educación.

#### **12.2.2.1. Equidad desde la perspectiva de género**

---

<sup>817</sup> Ibidem.



El literal b) del artículo 8° de la Ley N° 28044 reconoce a la equidad como principio educativo, definiéndolo como aquel que “garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad”. Sin embargo, una realidad tan compleja como la de la mujer en Perú nos obliga a reconsiderar la realización de este principio, más aun si es que la serie de brechas antes reveladas hace inviable incluso el acceso a la prestación misma.

Frente a esta situación, la implementación de políticas educativas erigidas sobre la base del conocimiento de la realidad de la mujer y de la **implementación de la perspectiva de género en la educación** en nuestro país hará posible la consecución de la equidad cuando considere que “el concepto de equidad educativa aparece relacionado con contenidos y tipos de aprendizajes que se deben intencionar en los alumnos; con los resultados concretos de esos aprendizajes logrados y la articulación de lo propiamente educativo con otros aspectos del servicio público, tales como vivienda, salud y prevención social. Así, y en el discurso social de estos actores la equidad aparece asociada a: i) calidad educativa; ii) oportunidades educativas en el acceso y egreso y iii) igualdad de recursos e insumos. Es desde estos marcos, que analizan las implicancias de la (...) normativa, sus posibilidades y límites para la equidad del sistema”<sup>818</sup>.

#### **12.2.2.2. Inclusión desde la perspectiva de género**

Cabe señalarse que el literal c) del artículo 8° de la Ley N° 28044 reconoce a la inclusión como principio orientador de la educación, al considerar que este principio debe orientar sus alcances “a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades”.

---

<sup>818</sup> ROMÁN, Marcelo y CARRASCO, Álvaro. “Los niveles intermedios del sistema escolar chileno: Posibilidades y limitaciones para la equidad”. En: *Revista electrónica iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en la educación*. Volumen 5, N° 1. Red Iberoamericana de investigación sobre el cambio y eficacia escolar. Madrid, 2007, p. 17. Disponible en: <http://www.rinace.net/arts/vol5num1/art1.pdf> (Revisado el 29 de abril de 2009).

Los alcances de este literal alcanzan a las mujeres, pues se procura extender su acceso a la educación. Ello será posible en la medida que se incorpore la **perspectiva de género en la educación peruana**, por lo que Blanco condiciona su viabilidad a la producción de “una transformación radical en los paradigmas educativos vigentes pasando desde un enfoque basado en la homogeneidad a una visión de la educación común basada en la heterogeneidad. Las diferencias son una condición intrínseca a la naturaleza humana, como especie todos tenemos ciertas características que nos asemejan y otras que nos diferencian, de tal forma que no hay dos personas idénticas, sin embargo, existe una tendencia a considerar la diferencia como aquello que se distancia o desvía de la ‘mayoría’, de lo ‘normal’ o ‘frecuente’, es decir, desde criterios normativos”<sup>819</sup>.

#### **12.2.2.3. Democracia desde la perspectiva de género**

Como señala Álvarez Massi, la democracia en la educación constituye un principio rector en el pleno acceso de la mujer a las prestaciones educativas debido a que fomenta “la participación real de los miembros de una determinada comunidad educativa para el bien de todos sus integrantes, sin crear ningún tipo de discriminación”<sup>820</sup>. Sin embargo, la consecución de este principio, reconocido por el literal e) del artículo 8° de la Ley General de Educación, no ha sido efectivo en la medida que no se ha incorporado la **perspectiva de género**.

Para ello sería necesario que la idea de “democratizar supondría (...) hacer posible que ese concepto de democracia penetre, y, de alguna forma, sea asumido por todos aquellos que forman parte de esa comunidad educativa. Porque seguimos entendiendo que no se aprende sino que lo que el alumnado haga suyo a través de

---

<sup>819</sup> BLANCO, Rosa. “La equidad y la inclusión social: Uno de los desafíos de la educación y la escuela hoy”. En: *Revista electrónica iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en la educación*. Volumen 4, N° 3. Red Iberoamericana de investigación sobre el cambio y eficacia escolar. Madrid, 2006, p. 10. Disponible en: <http://www.rinace.net/arts/vol4num3/art1.pdf> (Revisado el 29 de abril de 2009).

<sup>820</sup> ÁLVAREZ MASSI, Pablo. “Una educación experiencial para desarrollar la democracia en las instituciones educativas”. En *Revista Iberoamericana de Educación*. N° 8. Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura (OEI). Madrid, 1995, p. 10.

sus acciones e indagaciones, y la escuela sólo podrá educar en la democracia, si a partir de su propia estructura, ella misma se organiza como una unidad de convivencia democrática y, por tanto, el alumnado quede incorporado de forma natural a un contexto donde el espíritu democrático se viva desde los propios procesos del aula, es decir, en la propia manera de aprender»<sup>821</sup>.

La democratización de la educación se engarza a la inclusión de la mujer en la educación, resultando que la implementación de políticas erigidas sobre la perspectiva de género que conjuguen adecuadamente ambos principios tenderá al reconocimiento de las mujeres como titulares del derecho a la educación.

### **12.2.3. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA SALUD**

Si bien la incorporación de la perspectiva de género en la educación es fundamental para la consecución de la igualdad material de los varones y de las mujeres, resulta importante que la atención de la salud de las mujeres en nuestro país se lleve a cabo a partir de dicha perspectiva. Por tal motivo, expondremos algunas recomendaciones dirigidas a alcanzar la equidad de las mujeres en el acceso a las prestaciones de salud en nuestro país.

#### **12.2.2.3.1. La eficacia como principio rector de la perspectiva de género**

Aunque nuestra Constitución Política no desarrolla el principio de eficacia, ello no significa que las actuaciones estatales no se vean revestidas de él, puesto que resulta inherente a la consecución de los fines del Estado, más aún en la resolución de conflictos en los que los derechos fundamentales se encuentran en juego. Al amparo de la legislación comparada, el artículo 103°.1 de la Constitución española se erige en argumento que refuerza la inherente eficacia que se desprende de las prestaciones de salud, al establecer que “[l]a administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,

---

<sup>821</sup> Loc cit.

descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.

Al ser inherente a todo acto o servicio proporcionado por el aparato gubernamental, el principio de eficacia se proyecta sobre las prestaciones de salud brindadas a favor de la mujer. La aplicación de este principio se evalúa al medirse los resultados de la actuación estatal y al satisfacerse el interés público, para lo cual será imprescindible la incorporación de la **perspectiva de género**, ya que ella tendrá en consideración el especial panorama de la mujer en el acceso a las prestaciones de salud en nuestro país, pues, tal como precisa el fundamento 11 de la STC N° 0090-2004-AA, “[s]u satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización administrativa”. Implícitamente, a continuación desarrolla el principio de eficacia y lo enlaza al concepto del interés público al considerar que “[l]a administración estatal, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, asume el cumplimiento de los fines del Estado teniendo en cuenta la pronta y eficaz satisfacción del interés público”.

#### **12.2.2.3.2. Adecuada distribución del presupuesto a partir de la perspectiva de género**

Como precisa Ortiz de Elguea, la obligación estatal sobre la salud “abarca el ámbito de la denominada ‘salud pública’, contemplando todas las medidas que un Estado debe desarrollar para preservar la salud de su ciudadanía; de otra, comprende las acciones a adoptar para garantizar la asistencia sanitaria que cada ciudadano puede llegar a precisar”<sup>822</sup>.

Sin embargo, sobre las prestaciones de salud implementadas a favor de las mujeres pesa la nefasta sombra –y, en muchas oportunidades, la excusa– del magro presupuesto que hace imposible la satisfacción de las más elementales necesidades

---

<sup>822</sup> ORTÍZ DE ELGEA GOICOECHEA, Pablo José. “La asistencia sanitaria en la Unión Europea y la libre circulación de usuarios”. En: *Derecho y salud*. N° 1. Asociación Juristas de la Salud. Madrid, 2003, p. 63.

en materia de salud pública. Sin embargo, tal argumento no es del todo coherente debido a que el problema reside en la **inadecuada distribución del presupuesto** asignado al Ministerio de Salud para la satisfacción de las necesidades de salud de las mujeres peruanas.

De acuerdo a la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2009 (publicada el 11 de diciembre de 2008), setenta y dos mil trescientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y cuatro y 00/100 nuevos soles (S/. 72,355,497,884.00) han sido asignados como presupuesto público para 2009, del cual corresponderían 5,853 millones de soles al Ministerio de Salud, conforme solicitó su titular en octubre de 2008<sup>823</sup>, lo cual constituiría tan sólo el 3.60% del presupuesto para 2009.

La inadecuada distribución del presupuesto determina que las mujeres se vean privadas del acceso a prestaciones efectivas de salud debido a que no se han erigido adecuados planes de salud pública que respondan a las reales necesidades de dicho sector de nuestra población. Por ello se hace necesaria la adopción de acciones concretas por parte del Estado a través de la **incorporación de la perspectiva de género**, pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional, “si bien es cierto que en el caso de países en desarrollo, como el nuestro, resulta difícil exigir una atención y ejecución inmediata de las políticas sociales para la totalidad de la población, [...] tal justificación es válida solo cuando se observen concretas acciones del Estado para el logro de resultados; de lo contrario, esta falta de atención devendría en situaciones de inconstitucionalidad por omisión”<sup>824</sup>.

Por lo tanto, toda referencia a las prestaciones de salud a favor de la mujer implícitamente contiene la ejecución de acciones inmediatas y adecuadas. Para obtener servicios adecuados destinados a la protección de este derecho, el Estado

---

<sup>823</sup> ANDINA. Agencia Peruana de Noticias. “Ministerio de Salud solicita presupuesto de S/. 5,853 millones para el año 2009”. Lima, 29 de octubre de 2008. Disponible en: <http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=QWnfMQS1U20=> (Revisado el 26 de abril de 2009).

<sup>824</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02949-2003-AA, Fundamento Jurídico N° 39.

deberá invertir una serie de recursos, lo que necesariamente involucra un proceso que irá perfeccionándose a través de la ejecución de las decisiones adoptadas. Sin embargo, este proceso no se sustenta exclusivamente en factores económicos, sino también en los recursos humanos que componen la infraestructura de toda organización. Por ello, si bien el Estado deberá implementar programas a largo plazo, no podrá desatender las prestaciones de salud a favor de las mujeres a las cuales se encuentra obligado, como tampoco el nivel del servicio deberá ser ineficaz frente a la preservación de la salud de la mujer que acude a él.

#### **12.2.2.3.3. Medidas preventivas a partir de la perspectiva de género**

Si bien las prestaciones de salud deben ser prodigadas bajo la orientación de una actuación eficaz, para Acedo Penco “ha de contener tanto la adopción de medidas preventivas para gozar de buena salud, como la más amplia asistencia médica para recuperar la salud cuando se pierda, y también el deber del Estado de impedir que ningún ciudadano pueda sufrir alguna alteración de la salud como consecuencia del uso o consumo de productos”<sup>825</sup>.

Al respecto, la OMS considera que “[a] fin de reducir el aumento creciente de la carga de los trastornos mentales y evitar los años de vida con discapacidad o la muerte prematura, debe darse prioridad a la prevención y promoción en salud mental. Estrategias preventivas y de promoción pueden ser usadas por clínicos con relación a pacientes individuales, y por planificadores de programas de salud pública en relación con grupos de poblaciones. La integración de la prevención y la promoción en salud mental dentro de las estrategias de salud pública permitirán evitar muertes prematuras, disminuir el estigma que rodea a las personas con trastornos mentales y mejorar el ambiente económico y social”<sup>826</sup>. Tal es la importancia de la prevención que “la OMS está haciendo circular tecnologías

---

<sup>825</sup> ACEDO PENCO, Ángel. “El derecho a la protección de la salud, la seguridad, la calidad de vida y el medio ambiente: Perspectiva comunitaria, constitucional y autonómica. Su proyección en la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura”. En: *Anuario de la Facultad de Derecho*. N° 21. Extremadura, 2003, p. 365.

<sup>826</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. “Invertir en salud mental”. Op. cit., p. 26.

relacionadas con la salud mental y conocimientos que permiten la capacitación de los países con relación al desarrollo de medidas preventivas y el fomento de tratamientos apropiados para los trastornos mentales”<sup>827</sup>.

La tutela que merece este derecho se sustenta en su carácter de fundamental que, a decir de Castillo Córdova, lo es “en la medida que la ausencia de salud puede llegar a suponer situaciones de existencia indignas y, en todo caso, situaciones que entorpecen el pleno desarrollo de la persona humana (...) [pues esta] sólo podrá alcanzar su pleno desarrollo en una existencia digna, es decir, en una existencia saludable”<sup>828</sup>.

La aplicación de medidas preventivas de salud a favor de la mujer implica la realización de campañas de salud, lo cual determina la **incorporación de políticas de género** orientadas a partir de la distribución de información relativa a los males que podrían padecer las integrantes de este grupo de no tomar las medidas pertinentes, mismas que deberán de ser reveladas a través de un lenguaje simple, debido a que gran parte de la población no se encuentra familiarizada con el empleo de términos médicos.

#### **12.2.4. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL TRABAJO**

De acuerdo a lo que señalan Mingorance, Ballesteros, Peceño y Balbás, deben tomarse en cuenta cuatro campos temáticos para la estrategia de incorporación efectiva de la mujer al empleo, que serían las siguientes:

##### **12.2.4.1. El empleo desde la perspectiva de género**

---

<sup>827</sup> Ibidem, p. 41.

<sup>828</sup> CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “Comentarios al Código Procesal Constitucional”. Tomo II. Palestra editores. Lima, 2006, p. 859.

La inclusión de este rasgo desde la perspectiva de género implica “facilitar el acceso al mercado de trabajo para aquellas personas que tienen dificultades de inserción o reinserción en el mercado de trabajo, que debe estar abierto a todos; y combatir (...) [la discriminación] en relación con el mercado de trabajo”<sup>829</sup>.

#### **12.2.4.2. Capacidad de emprendimiento desde la perspectiva de género**

La capacidad de emprendimiento determina que, desde la perspectiva de género, se fomente la “creación de empresas y la identificación y explotación de nuevas posibilidades de creación de empleo en áreas urbanas y rurales; y fortalecer la economía social (tercer sector), en particular los servicios de interés para la comunidad, prestando especial atención a la adaptabilidad”<sup>830</sup>.

#### **12.2.4.3. Adaptabilidad desde la perspectiva de género**

Desde la perspectiva de género se implementa la política de adaptabilidad laboral, cuyo objetivo es “promover la formación a lo largo de la vida y las prácticas de inclusión laboral que fomenten el empleo entre aquellos que sufren discriminación y desigualdad en el mercado de trabajo; y apoyando la adaptabilidad de empresas y de sus empleados a los cambios económicos estructurales y el uso de tecnologías de la información y de otras nuevas tecnologías”<sup>831</sup>.

#### **12.2.4.4. Igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género**

Como señalan Mingorance, Ballesteros, Peceño y Balbás, “la situación aún de desigualdad real de hombres y mujeres hace que necesitemos pensar y crear soluciones a las paradojas del mundo actual. En esta búsqueda de ideas y de prácticas que mejoren la sociedad y el mundo laboral hay que contar con todas las

---

<sup>829</sup> MINGORANCE, Pilar, BALLESTEROS, Miguel, PECEÑO, Carmen y BALBÁS, María Jesús. “El principio de igualdad de oportunidades en la formación”. En: *Educación*. N° 38. Universidad de Sevilla. Sevilla, 2006, p. 153.

<sup>830</sup> Loc. cit.

<sup>831</sup> Loc. cit.



capacidades y formas de ser, y con las dos miradas, la de los hombres y la de las mujeres, para ir avanzando en una nueva cultura que acoge y valora las competencias para desarrollar un trabajo, y tomar decisiones adecuadas, en todos los espacios, públicos y privados por encima, o al margen, del sexo de la persona que las posee. Y en esta tarea de promover cambios culturales tiene un papel importante la educación, y la educación que reflexiona sobre las nuevas realidades con las dos miradas, hombres y mujeres en colaboración, para construir juntos una imagen del futuro en igualdad, porque no hay otra manera de que cambien y adquieran sentido las prácticas y las leyes, y éste es nuestro objetivo específico para este curso”<sup>832</sup>.

A partir de la perspectiva de género, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres “supone reconciliar a la familia con la vida profesional, además de la integración de hombres y mujeres que han dejado el trabajo, desarrollando formas más efectivas y flexibles de organización del trabajo y de servicios de apoyo; así como reducir la brecha existente entre los sexos y apoyar la abolición de la segregación laboral”<sup>833</sup>.

---

<sup>832</sup> MINGORANCE, Pilar, BALLESTEROS, Miguel, PECEÑO, Carmen y BALBÁS, María Jesús. “El principio de igualdad de oportunidades en la formación”. Op. cit., p. 155.

<sup>833</sup> MINGORANCE, Pilar, BALLESTEROS, Miguel, PECEÑO, Carmen y BALBÁS, María Jesús. “El principio de igualdad de oportunidades en la formación”. Op. cit., p. 153.

## **BIBLIOGRAFÍA**

**ACEDO PENCO**, Ángel. “El derecho a la protección de la salud, la seguridad, la calidad de vida y el medio ambiente: Perspectiva comunitaria, constitucional y autonómica. Su proyección en la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura”. En: *Anuario de la Facultad de Derecho*. N° 21. Extremadura, 2003.

**ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER**. “Anticoncepción oral de emergencia. Informe Defensorial N° 78”. Defensoría del Pueblo. Lima, 2004.

**ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER**. “Derecho a una maternidad segura: Supervisión nacional a los servicios de ginecología y obstetricia del MINSA”. Informe Defensorial N° 138. Defensoría del Pueblo. Lima, 2009.

**ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER**. “La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos III Casos investigados por la Defensoría del Pueblo”. Informe N° 69. Defensoría del Pueblo. Lima, 2002.

**ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER**. “Segundo reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (enero-diciembre 2008)”. Informe N° 001-2009-DP/ADDM. Defensoría del Pueblo. Lima, 2009.

**AGUADO**, Ana. “Ciudadanía, mujeres y democracia”. En: *Historia Constitucional*. N° 6. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2005, p. 13.

**ALVA LEÓN**, Verna. “Intervención de la mujer en la medicina”. En: *Historia de la medicina peruana en el siglo XX*. Tomo II. DELGADO MATAALLANA, Gustavo (Compilador). Fondo editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 2000.

**ÁLVAREZ MASSI**, Pablo. “Una educación experiencial para desarrollar la democracia en las instituciones educativas”. En *Revista Iberoamericana de Educación*. Nº 8. Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura (OEI). Madrid, 1995.

**ANDINA**. Agencia Peruana de Noticias. “Ministerio de Salud solicita presupuesto de S/. 5,853 millones para el año 2009”. Lima, 29 de octubre de 2008. Disponible en: <http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=QWnfMQS1U20=> (Revisado el 26 de abril de 2009).

**ARBELÁEZ**, Mónica, “La protección constitucional del derecho a la salud: la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana”. En: *Derecho y salud*. Nº 2. Asociación Juristas de la Salud. Madrid, 2006.

**ANTOÑANZAS**, Fernando, **RODRÍGUEZ MONGUIÓ**, Rosa y **ROVIRA**, Joan. “Conjunto de prestaciones de salud. Objetivos, diseños y aplicación”. Organización Panamericana de la Salud. Washington D.C., 2003.

**ASSEMBLEE NATIONALE FRANÇAISE**. «Constitution of 4 October 1958 ». Disponible en : <http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp> (Revisado el 31 de mayo de 2009).

**ASOCIACIÓN FANUCAS**. “Las madres que trabajan en casa, discriminadas”. En: *Forum Libertas*. Madrid, 2005. Disponible en: [http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id\\_noticia=4225](http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=4225) (Revisado el 06 de mayo de 2009).

**BALAREZO GAMARRA**, Manuel. “Código civil peruano”. Editorial Juris. Lima, 1974.

**BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES**. “Constitución de 1823”. Fundación Cervantes Virtual. Madrid, 2007. Información que se halla disponible en:

<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01482074789055978540035/index.htm>. (Disponible el 18 de abril de 2009).

**BLANCO**, Rosa. “La equidad y la inclusión social: Uno de los desafíos de la educación y la escuela hoy”. En: *Revista electrónica iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en la educación*. Volumen 4, N° 3. Red Iberoamericana de investigación sobre el cambio y eficacia escolar. Madrid, 2006. Disponible en: <http://www.rinace.net/arts/vol4num3/art1.pdf> (Revisado el 29 de abril de 2009).

**BRAMONT-ARIAS**, Luis y **GARCÍA CANTIZANO**, María del Carmen. “Manual de Derecho penal. Parte especial”. Editorial San Marcos. 4° edición. Lima, 1998.

**BRAVO BARJA**, Rosa. “Presupuesto por resultados. Indicadores de género: educación, salud y programa juntos”. Manuela Ramos. Lima, 2007.

**BRASLAVSKY**, Bertha. “¿Qué se entiende por alfabetización?”. En: *Lectura y vida. Revista latinoamericana de lectura*. Año 24, N° 2. Asociación internacional de lectura. Buenos Aires, 2003.

**BUSTAMANTE**, Cecilia. “Intelectuales peruanas de la generación de José Carlos Mariátegui” Colección Ensayo. Editorial Letralia. Lima, 2005.

**CASTILLO CÓRDOVA**, Luis. “Comentarios al Código Procesal Constitucional”. Tomo II. Palestra editores. Lima, 2006.

**CERNA MORILLAS**, Dora. “Protección frente a la violencia familiar”. Diapositivas de la Defensoría del Pueblo. Lima, 2008.

**CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ**. “Las primeras parlamentarias peruanas”. Lima, 2004.

**CONSULADO DE BOLIVIA EN BILBAO.** “Nueva Constitución Política del Estado”. Disponible en: <http://gregor.padep.org.bo/documentos/BolNuevcons.htm> (Revisado el 31 de mayo de 2009).

**CORNEJO QUESADA,** Carlos. “Presencia e imagen del periodismo femenino en el siglo XIX”. Asociación Peruana de Facultades de Comunicación Social. Lima, p. 12. Disponible en: [http://www.apfacom.org/articulos\\_pdf/las\\_mujeres\\_periodistas.pdf](http://www.apfacom.org/articulos_pdf/las_mujeres_periodistas.pdf) (Revisado el 20 de abril de 2009).

**CORNEJO,** Gustavo. “Comentarios al Código Civil de 1852”. Tomo I. Dionisio Mendoza, Librería y Casa Editorial. Chiclayo, 1921.

**DEL AMO DEL AMO,** María Cruz. “La familia y el trabajo femenino en España durante la segunda mitad del siglo XIX”. Tesis para optar el grado de doctor en la Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2008.

**DE LA LAMA,** Miguel Antonio. “Código de Comercio del Perú”. Librería, imprenta y encuadernación Gil. Lima, 1897.

**DE LA VEGA,** Garcilaso. “Comentarios reales de los Incas”. Tomo I. Fondo de Cultura Económica. Lima, 1991.

**DE MIGUEL,** Elvira. “El ama de casa, ‘La mal pagá’”. En: *El Mundo*. Semanario de economía familiar, consumo y empleo. N° 29. Madrid, 5 de mayo de 1996.

**DEFENSORÍA DEL PUEBLO.** “Anticoncepción quirúrgica voluntaria I. Casos investigados por la Defensoría del Pueblo”. Informe Defensorial N° 7. Lima, 1998.

**DEFENSORÍA DEL PUEBLO.** “Salud mental y derechos humanos: La situación de los de las en establecimientos de derechos personas internadas salud mental”. Informe Defensorial N° 102. Lima, 2005.

**DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE DEPENDENCE.** “Gender disparities in mental health”. Organización Mundial de la Salud. Disponible en: [http://www.who.int/mental\\_health/media/en/242.pdf](http://www.who.int/mental_health/media/en/242.pdf) (Revisado el 28 de abril de 2009).

**DERECHOS, INVESTIGACIÓN Y ABOGACÍA EN SALUD, SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN (DIASSERE).** “The World’s Women 2000: Trends and Statistics”. Disponible en: <http://www.diassere.org.pe/nuevo/genero7.htm> (Revisado el 19 de abril de 2009).

**DÍAZ DE LA CRUZ,** Francisco. “Salud mental en la isla de Tenerife: un estudio epidemiológico”. Universidad de La Laguna. Tenerife, 2001.

**DÍAZ,** Héctor. “Primera médica peruana, Dra. Laura Esther Rodríguez Dulanto (1872 – 1919)”. En: *Anales de la Facultad de Medicina*. Volumen 68, N° 2. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 2007.

**DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS.** “Norma técnica para la atención del parto vertical con adecuación intercultural. NT N° 033-MINSA/DGSP-V.01”. Ministerio de Salud. Lima, 2005.

**DIRECTOR GENERAL DE LA OIT.** “La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean”. OIT, Ginebra, 2007, p. 122.

**ESCUDERO GONZALES,** Luis. “Código de Procedimientos Civiles”. EDDILI editores. Lima, 1992.

**FARAH,** Ivonne. “La mujer en Bolivia”. Disponible en: <http://www.prodiversitas.bioetica.org/mujerbolivia.htm> (Revisado el 31 de mayo de 2009).

**FORGUES**, Roland. “Apuntes sobre el discurso ‘feminista’ de Flora Tristán”. En: *Libro virtual: Historia de las mujeres*. Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina (CEMHAL). 1997. Disponible en: [http://webserver.rcp.net.pe/cemhal/capitulo5.html#\\_ftnref11](http://webserver.rcp.net.pe/cemhal/capitulo5.html#_ftnref11) (Revisado el 20 de abril de 2009).

**FORO DE LA FAMILIA DE CASTILLA Y LEÓN**. “El Foro de la Familia exige remunerar el trabajo de la mujer dentro del hogar”. Valladolid, 25 de abril de 2009. Disponible en: <http://www.larazon.es/noticia/el-foro-de-la-familia-exige-remunerar-el-trabajo-de-la-mujer-dentro-del-hogar> (Revisado el 3 de mayo de 2009).

**FORO LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS**. “Día internacional de la alfabetización”. N° 37. 2007. Disponible en: [http://www.foro-latino.org/info\\_flape/info\\_pdf/info-flape\\_37.pdf](http://www.foro-latino.org/info_flape/info_pdf/info-flape_37.pdf) (Revisado el 29 de abril de 2009).

**GARZA RODRÍGUEZ**, José Luis. “El derecho a la integridad personal”. En: *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*. N° 120. Universidad Autónoma de México (UNAM). México D.F., 2007.

**GEORGETOWN UNIVERSITY**, Political Database of the Americas... Constitución Política de la República de Costa Rica (1949); Google; <http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Costa/costarica49.html>; 15 de julio de 2007.

**GHERSI**, Ericka. “Las otras voces del siglo XIX. Mujeres intelectuales”. En: *Identidades*. N° 47. Editora Perú. Lima, 20 de octubre de 2003.

**GILA**, Juana y **GUIL**, Ana. “La mujer actual en los medios: estereotipos cinematográficos”. En: *Comunicar*. N° 12. Grupo Comunicar. Huelva, 1999.

**GLAVE**, Luis Miguel. “Dama de sociedad. Trinidad María Enríquez, Cusco 1846-1891. En: *Libro virtual: Historia de las mujeres*. Centro de Estudios La Mujer en la Historia de

América Latina (CEMHAL). 1997. Disponible en: [http://webserver.rcp.net.pe/cemhal/capitulo5.html#\\_ftnref11](http://webserver.rcp.net.pe/cemhal/capitulo5.html#_ftnref11) (Revisado el 21 de abril de 2009).

**GONZÁLEZ MORÁN**, Luis. “Protección de la salud y la seguridad de los consumidores y usuarios”. En: *Derechos de los consumidores y usuarios*. DE LEÓN, Alicia y GARCÍA GARCÍA, María (Coordinadores). Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, 2000, p. 679.

**GRUPO TEMÁTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**. “Análisis de las Buenas Prácticas”. GTN-IO. Madrid, 2003.

**GUTIERREZ CAMACHO**, Walter (Coordinador). “Código Civil Comentado”. Tomo I. Gaceta Jurídica. Lima, 2003.

**HAYES**, María Yamile. “Constituciones Políticas y género. Análisis comparado en América Latina”. Eclac. Disponible en: [http://www.eclac.cl/mujer/reuniones/Bolivia/Yamile\\_Hayes.pdf](http://www.eclac.cl/mujer/reuniones/Bolivia/Yamile_Hayes.pdf) (Revisado el 31 de mayo de 2009).

**HURTADO POZO**, José. “Manual de Derecho Penal. Parte Especial”. Idemsa. Lima, 1994, p. 59.

**INAMUJER**. “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)”. Disponible en: <http://www.inamujer.gov.ve/documentos/constitucion.pdf> (Revisado el 31 de mayo de 2009).

**INEI**. “Perfil sociodemográfico del Perú”. INEI, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y PNUD. Lima, 2008.

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER DE COSTA RICA (INAMU)**. Derechos de las mujeres. Votos constitucionales y otras sentencias constitucionales. Disponible en:



<http://www.inamu.go.cr/derechos-de-las-mujeres/votos.php> (Revisado el 15 de julio de 2007).

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER DE COSTA RICA (INAMU).** “Ley de promoción de la igualdad social de la mujer”. Disponible en: <http://www.inamu.go.cr/derechos/leyes/ley7142.doc> (Revisado el 31 de mayo de 2009).

**INTERNATIONAL CONSTITUTIONAL LAW.** « Poland- Constitution 1952 (Extracts) ». Disponible en : [http://www.servat.unibe.ch/law/icl/pl01000\\_.html](http://www.servat.unibe.ch/law/icl/pl01000_.html) (Revisado el 31 de mayo de 2009).

**JIMÉNEZ DEL CASTILLO, Juan.** “Redefinición del analfabetismo: El analfabetismo funcional”. En: *Revista de educación*. N° 338. Instituto de Evaluación. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Madrid, 2005.

**LEÓN, María** (Coordinadora) “Plan de igualdad para las mujeres. Venezuela 2004-2009”. Instituto Nacional de la Mujer. Caracas, 2004.

**LONDOÑO VEGA, Patricia.** “Educación de la mujer durante la época colonial”. En: *Boletín Cultural y Bibliográfico*. N° 37, Volumen XXXI. Banco de la República de Colombia. Bogotá, 1994. Disponible en: [http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/bol37/rese2\\_1.htm](http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/bol37/rese2_1.htm) (Revisado el 19 de abril de 2008).

**LÓPEZ HERNÁNDEZ, Lilia Julieta.** “Historia de la mujer en México”. En: *Mujeres, derecho y sociedad*. Año 3, N° 5. Federación Mexicana de Universitarias. México D.F., 2007.

**MACASSI LEÓN, Ivonne** (Coordinadora). “Informe alternativo al sexto informe periódico del Estado Peruano al Comité de la CEDAW”. Flora Tristán. Lima, 2006.

**MANUELA RAMOS.** “Derechos Humanos relacionados con los Derechos Sexuales y Reproductivos”. En: *El Cuarto Femenino*. Año 3, N° 10. Lima, 2001.

**MARÍN HERNÁNDEZ,** Elizabeth. “Pensar en femenino: la mujer y su aparecer en la modernidad: Teresa de la Parra, Tarsila do Amaral, Frida Kahlo, Amalia Peláez”. En: *Presente y Pasado. Revista de Historia*. Año 11, N° 22. Facultad de Humanidades y Educación Universidad de Los Andes. Mérida, 2006.

**MARTÍNEZ,** Remedios. “Trabajo, cultura y género”. En: *La difusión del conocimiento en los estudios de las mujeres. Actas del II Congreso Internacional del Audem*. Universitat d’Alicant. Alicante, 2001.

**MINGORANCE,** Pilar, **BALLESTEROS,** Miguel, **PECEÑO,** Carmen y **BALBÁS,** María Jesús. “El principio de igualdad de oportunidades en la formación”. En: *Educación*. N° 38. Universidad de Sevilla. Sevilla, 2006.

**MINISTERIO DE IGUALDAD DE ESPAÑA.** “Mujeres en el mundo”. Gobierno de España. Madrid, 2004.

**MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL.** “Día Internacional de la Mujer”. Gobierno del Perú. Lima, 2009.

**MINISTERIO DE TRABAJO DE VENEZUELA.** “Ley de igualdad de oportunidades para la mujer”. Disponible en: <http://www.mintra.gov.ve/legal/leyesordinarias/loportunidadesparalamujer.html> (Revisado el 31 de mayo de 2009).

**MICHEL,** Andrée. “Los estereotipos sexistas en la escuela y en los manuales escolares”. En: *Educere*. Año 5, N° 12. Universidad de los Andes. Mérida, 2001.

**MONGE TALAVERA**, Luz. “Deber de fidelidad y asistencia”. En: *Código Civil comentado*. Tomo II. Gaceta Jurídica. Lima, 2007.

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. “Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: France. 27/01/93”. Disponible en: [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/A.48.38,paras.327-358.Sp?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.48.38,paras.327-358.Sp?Opendocument) (Revisado el 31 de mayo de 2009).

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA. “Iberoamérica: territorio libre de analfabetismo. Plan iberoamericano de alfabetización y educación básica de personas jóvenes y adultas 2007-2015. Documento base”. Montevideo, 2006.

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)**. “Improving methods of emergency contraception”. En: *Progress in reproductive health research*. N° 51. 1999. Disponible en: [http://www.who.int/reproductive-health/hrp/progress/51/news51\\_1.en.html](http://www.who.int/reproductive-health/hrp/progress/51/news51_1.en.html) (Revisado el 27 de abril de 2009).

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)**. “Por la salud mental en el mundo. Sí a la atención, no a la exclusión”. Ginebra, 2001. Disponible en: [www.who.int/mental\\_health/media/en/391.pdf](http://www.who.int/mental_health/media/en/391.pdf) (Revisado el 25 de abril de 2009).

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA (OMCT)**. “Polonia. Informe presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Disponible en: [http://www.omct.org/pdf/VAW/Publications/2002/ESP\\_2002\\_04\\_Polonia.pdf](http://www.omct.org/pdf/VAW/Publications/2002/ESP_2002_04_Polonia.pdf) (Revisado el 31 de mayo de 2009).

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)**. “Invertir en salud mental”. Ginebra, 2004, p. 7. Disponible en: [http://www.who.int/mental\\_health/advocacy/en/spanish\\_final.pdf](http://www.who.int/mental_health/advocacy/en/spanish_final.pdf) (Revisado el 25 de abril de 2009).

**ORTÍZ DE ELGEA GOICOECHEA**, Pablo José. “La asistencia sanitaria en la Unión Europea y la libre circulación de usuarios”. En: *Derecho y salud*. Nº 1. Asociación Juristas de la Salud. Madrid, 2003.

**PAMO-REYNA**, Óscar. “Una visión histórica de la participación femenina en la profesión médica”. En: *Revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna*. Volumen 20, Nº 3. Sociedad Peruana de Medicina Interna. Lima, 2007.

**PATRUCCO**, Sandro. “El Perú virreinal. Sociedad, economía y arte”. Editores Lexus. Barcelona, 2000.

**PEREA QUESADA**, Rogelio, “La educación para la salud, reto de nuestro tiempo”. En: *Educación XXI: Revista de la Facultad de Educación*. Nº 4. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Madrid, 2002.

**PÉREZ ROYO**, Javier. “Curso de Derecho Constitucional”. 10ª edición. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 2005.

**PIMENTEL**, Silvia. “Derechos reproductivos. Fragmentos de reflexiones”. En: *Derechos sexuales, derechos reproductivos, derechos humanos*. III Seminario Regional. CLADEM. Lima, 2002.

**PROGRAMA SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DEL EMPLEO**. “Working Time Around the World: Principales hallazgos e implicaciones para las políticas”. En: *Hoja Informativa*. Nº 20. OIT. Ginebra, 2007.

**PROYECTO CLÍO**. “Sufragismo y feminismo: la lucha por los derechos de la mujer (1789-1945)”. Disponible en: <http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/femeespana2.htm> (Revisado el 31 de mayo de 2009).

**RAMOS NÚÑEZ**, Carlos Augusto. “Historia del Derecho civil peruano: Siglos XIX y XX”. Tomo V. Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2005.

**REÁTEGUI CARRILLO**, Félix (Coordinador). “Hatun Willakuy. Versión abreviada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional.” Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima, 2004.

**RIVERA ARAUJO**, Genara (Coordinadora) “Situación de los indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio Perú, 2006. Primer semestre”. INEI. Lima, 2006.

**RODRÍGUEZ KAUTH**, Ángel, **MARÍN DE MAGALLANES**, Leticia y **LEONE DE QUINTANA**, María. “El machismo en el imaginario social”. En: *Revista latinoamericana de psicología*. Volumen 25, N° 2. Fundación Universitaria Honrad Lorenz. Bogotá, 1993.

**ROMÁN**, Marcelo y **CARRASCO**, Álvaro. “Los niveles intermedios del sistema escolar chileno: Posibilidades y limitaciones para la equidad”. En: *Revista electrónica iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en la educación*. Volumen 5, N° 1. Red Iberoamericana de investigación sobre el cambio y eficacia escolar. Madrid, 2007. Disponible en: <http://www.rinace.net/arts/vol5num1/art1.pdf> (Revisado el 29 de abril de 2009).

**ROSSEAU**, Jean Jacques. “El Emilio”.

**ROSTWOROWSKI**, María. “La mujer en el Perú prehispánico”. Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Lima, 1995.

**SALAZAR BONDY**, Sebastián. “Lima, la horrible”. Peisa. Lima, 1975.

**SÁNCHEZ MUÑOZ**, Cristina. “La difícil alianza entre ciudadanía y género”. En **PÉREZ CANTÓ**, Pilar (Coordinadora). *También somos ciudadanas*. Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2000.

**SCHIAPPA-PIETRA, Óscar.** “El problema del acceso a la justicia en el Perú”. En: *Acceso a la justicia*. Poder Judicial. Lima, 1997.

**SECRETARÍA DE LA MUJER DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.** “Igualdad y derechos entre mujeres y hombres”. Disponible en: [http://www.mujer.gov.py/uploads/areasaccion/I\\_igualdad\\_de\\_derechos\\_entre\\_mujeres\\_y\\_hombres.pdf](http://www.mujer.gov.py/uploads/areasaccion/I_igualdad_de_derechos_entre_mujeres_y_hombres.pdf) (Revisado el 31 de mayo de 2009).

**SEOANE, José Antonio.** “Derecho y salud mental. Capacidades, derechos, justicia”. En: *Cuadernos de psiquiatría comunitaria*. N° 1. Asociación asturiana de neuropsiquiatría y salud mental. Oviedo, 2006.

**SCHILLING, Andrea.** “Experiencia chilena con el uso de un anticonceptivo oral combinado de acetato de clormadinona/etinilestradiol: estudio no intervencional”. En: *Revista chilena de obstetricia ginecológica*. Volumen 73, N° 5. Santiago de Chile, 2008.

**TOTANA ONLINE.** “Las amas de casa conmemoran el día nacional de este colectivo con numerosos actos celebrados en el centro sociocultural ‘La cárcel’”. Murcia, 2007. Disponible en: <http://www.totanaonline.com/totana-noticia.asp?id=6522> (Revisado el 7 de mayo de 2009).

**UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA).** “Paraguay: Information by country: Human Rights”. Disponible en: [http://www.unfpa.org/derechos/paraguay\\_eng.htm](http://www.unfpa.org/derechos/paraguay_eng.htm) (Revisado el 31 de mayo de 2009).

**UNIVERSIDAD DE CHILE.** “Perú”. Blog de la Universidad de Chile. Disponible en: [http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/filosofia\\_y\\_humanidades/vitale/obras/sys/fmu/b/c10.pdf](http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/filosofia_y_humanidades/vitale/obras/sys/fmu/b/c10.pdf) (Revisado el 22 de abril de 2009).

**VALDIVIESO**, Magdalena. “Las mujeres y la política a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX en Venezuela”. En: *Otras miradas*. Volumen 7, N°1. Universidad de los Andes. Caracas, 2007.

**VARGAS LLOSA**, Mario. “Prólogo. Flora Tristán y Paul Gauguin”. En: *Peregrinaciones de una paria*. Flora Tristán. Fondo editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 2003.

**VÁSQUEZ ZAWADSKY**, Martha Lucía (Coordinadora). “Mujeres constructoras de paz y desarrollo”. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Bogotá, 2007 Disponible en: [http://www.prsidencia.gov.co/equidad/documento\\_politica.pdf](http://www.prsidencia.gov.co/equidad/documento_politica.pdf) (Revisado el 31 de mayo de 2009).

**VELAZCO PORTOCARRERO**, Tatiana (Coordinadora). “La mujer en el mercado laboral peruano. Informe anual 2005”. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Lima, 2006.

**VILLANUEVA CHÁVEZ**, Victoria y **HERRERA GARCÍA**, Elizabeth. “50 años del voto de las mujeres”. Manuela Ramos. Lima, 2005.

**VILLANUEVA**, Rocío (Coordinadora) “A un año de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Defensorial N° 86”. Defensoría del Pueblo. Lima, 2004.

**WEBLOG VENEZOLANO**. “Hasta 3 años de prisión para ‘la mujer adúltera’ en Venezuela”. Disponible en: <http://www.venezolano.web.ve/archives/523-Hasta-2anos-de-prision-para-la-mujer-adultera-en-Venezuela.html> (Revisado el 31 de mayo de 2009).

**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**. Sentencias expedidas entre 1996 y 2009.

# **ANEXOS**



## **I. ANÁLISIS PORCENTUAL**

## **1. RESULTADOS GENERALES**

### **a. Descripción**

De los resultados generales se desprende que 43 personas participaron en la encuesta, de los cuales 21 son mujeres y 22 son varones, lo cual corresponde al 48.83% y 51.16%, respectivamente. Asimismo, del total de participantes 15 han sido víctimas de machismo, mientras 28 consideran que no, lo cual corresponde al 34.88% y 65.11%, respectivamente.

Por otro lado, 14 de los participantes manifiestan haber sido víctimas de estereotipos, mientras 09 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 32.55% y 20.93%, respectivamente. De igual manera, 12 de los participantes consideran haber sido víctimas de discriminación, mientras 31 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 27.90% y 72.09%, respectivamente.

En cuanto al nivel educativo de los participantes, 06 afirman haber concluido el nivel básico, mientras 37 el superior, lo cual corresponde al 13.95% y 86.09%, respectivamente. En lo que respecta a la edad, 34 participantes manifiestan tener 30 ó más años de edad, mientras 09 ser menor de 30 años, lo cual corresponde al 79.06% y 20.93%, respectivamente.

### **b. Explicación**

De los resultados expuestos, se acredita que si bien 15 personas consideran haber sido víctimas de machismo, sólo 12 consideran haber sido víctimas de discriminación, lo cual revela que el universo investigado no identifica la relación que existe entre el machismo y la discriminación. De igual manera, 14 personas consideran haber sido víctimas de estereotipos, mientras 15 de machismo, de lo que se desprende que casi la totalidad de los encuestados identifica que el machismo se produce como consecuencia de los estereotipos asignados a los varones y a las mujeres. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia del nivel educativo ni de la edad como condicionantes del machismo ni de la discriminación.

## RESULTADOS GENERALES

VARIABLE	CATEGORÍA	RESULTADO	
<b>SEXO</b>	Mujeres	21	48.83%
	Varones	22	51.16%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	15	34.88%
	No ha sido víctima	28	65.11%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	14	32.55%
	No ha sido víctima	09	20.93%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	12	27.90%
	No ha sido víctima	31	72.09%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	06	13.95%
	Superior concluido	37	86.04%
<b>EDAD</b>	30 años ó más	34	79.06%
	Menor de 30 años	09	20.93%
<b>TOTAL</b>		43 personas	100.00%

## **2. EL SEXO COMO VARIABLE RECTORA EN EL ANÁLISIS**

### **2.1. Mujeres**

#### **a. Descripción**

La aplicación de la variable “sexo” como variable rectora a las 21 mujeres participantes de la encuesta ha revelado que 12 se consideren víctimas de machismo, mientras 09 consideran que no, lo cual corresponde al 57.14% y 42.85%, respectivamente.

Por otro lado, 09 de las participantes manifiestan haber sido víctimas de estereotipos, mientras 12 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 42.85% y 57.14%, respectivamente.

De igual manera, 04 de las participantes consideran haber sido víctimas de discriminación, mientras 17 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 19.04% y 80.95%, respectivamente.

En cuanto al nivel educativo de las participantes, 05 afirman haber concluido el nivel básico, mientras 16 el superior, lo cual corresponde al 23.80% y 76.19%, respectivamente. En lo que respecta a la edad, 14 participantes manifiestan tener 30 ó más años de edad, mientras 07 ser menor de 30 años, lo cual corresponde al 66.66% y 33.33%, respectivamente.

## **b. Explicación**

De los resultados expuestos, se acredita que si bien 12 mujeres consideran haber sido víctimas de machismo, sólo 04 consideran haber sido víctimas de discriminación, lo cual revela que el universo investigado no identifica la relación que existe entre el machismo y la discriminación. De igual manera, 09 personas consideran haber sido víctimas de estereotipos, mientras 12 de machismo, de lo que se desprende que gran parte de las encuestadas identifica que el machismo se produce como consecuencia de los estereotipos asignados a los varones y a las mujeres. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia del nivel educativo ni de la edad como condicionantes del machismo ni de la discriminación.

### **SEXO COMO VARIABLE RECTORA (MUJERES)**

<b>VARIABLE</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>SEXO</b>	Mujeres	21	100.00%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	12	57.14%
	No ha sido víctima	09	42.85%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	09	42.85%
	No ha sido víctima	12	57.14%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	04	19.04%

	No ha sido víctima	17	80.95%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	05	23.80%
	Superior concluido	16	76.19%
<b>EDAD</b>	30 años o más	14	66.66%
	Menor de 30 años	07	33.33%
<b>TOTAL</b>		21 personas	100.00%

## 2.2. Varones

### a. Descripción

La aplicación de la variable “sexo” como variable rectora a los 22 varones participantes de la encuesta ha revelado que 03 se consideren víctimas de machismo, mientras 19 consideran que no, lo cual corresponde al 13.63% y 86.36%, respectivamente.

Por otro lado, 05 de los participantes manifiestan haber sido víctimas de estereotipos, mientras 17 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 22.72% y 77.27%, respectivamente. De igual manera, 08 de los participantes consideran haber sido víctimas de discriminación, mientras 14 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 36.36% y 63.63%, respectivamente.

En cuanto al nivel educativo de los participantes, 01 afirman haber concluido el nivel básico, mientras 21 el superior, lo cual corresponde al 4.54% y 95.45%, respectivamente. En lo que respecta a la edad, 20 participantes manifiestan tener 30 ó más años de edad, mientras 02 ser menor de 30 años, lo cual corresponde al 90.90% y 09.09%, respectivamente.

### b. Explicación

De los resultados expuestos, se acredita que si bien 03 varones consideran haber sido víctimas de machismo, 08 consideran haber sido víctimas de discriminación. Esto revela

que en el caso de los varones, el machismo no es la única causa de discriminación, por lo que resultaría interesante identificar los factores que originan dicho fenómeno; al respecto, nos atrevemos a pensar que su discriminación estaría condicionada por las diferentes identidades que socialmente construyen al varón, lo cual sería explicado a través de la transversalidad. De igual manera, 05 personas consideran haber sido víctimas de estereotipos, mientras 03 de machismo y 08 de discriminación, de lo que se desprende que gran parte de los encuestados identifica que la discriminación se produce como consecuencia de los estereotipos asignados a las personas. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia del nivel educativo ni de la edad como condicionantes del machismo ni de la discriminación.

### **SEXO COMO VARIABLE RECTORA (VARONES)**

<b>VARIABLE</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>SEXO</b>	Varones	22	100.00%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	03	13.63%
	No ha sido víctima	19	86.36%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	05	22.72%
	No ha sido víctima	17	77.27%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	08	36.36%
	No ha sido víctima	14	63.63%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	01	04.54%
	Superior concluido	21	95.45%
<b>EDAD</b>	30 años o más	20	90.90%
	Menor de 30 años	02	09.09%
<b>TOTAL</b>		22 personas	100.00%

### **3. EL MACHISMO COMO VARIABLE RECTORA EN EL ANÁLISIS**

### 3.1. Resultados generales:

#### a. Descripción

La aplicación de la variable “machismo” como variable rectora a las 15 personas que se consideran víctimas del machismo revela que 12 son mujeres y 03 son varones, lo cual corresponde al 80.00% y 20.00%, respectivamente. Asimismo, de este universo, 09 de los participantes manifiestan haber sido víctimas de estereotipos, mientras 06 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 60.00% y 40.00%, respectivamente.

En lo que respecta al nivel educativo, 02 participantes manifestaron haber concluido el nivel educativo básico, mientras 13 el superior, lo cual corresponde al 13.33% y 86.66%, respectivamente. En lo concerniente a la edad, 12 participantes manifestaron tener 30 ó más años de edad, mientras 03 ser menor de 30 años, lo cual corresponde al 80.00% y 20.00%, respectivamente.

#### b. Explicación

De los resultados expuestos, se acredita que coincide la cifra de víctimas del machismo y de la discriminación en 15 personas, lo cual revela la identificación de ambos fenómenos. De igual manera, 09 personas consideran haber sido víctimas de estereotipos, de lo que menos de la mitad de los encuestados identifica que el machismo se produce como consecuencia de los estereotipos asignados a los varones y a las mujeres. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia del nivel educativo ni de la edad como condicionantes del machismo ni de la discriminación.

#### **MACHISMO COMO VARIABLE RECTORA (VÍCTIMAS DEL MACHISMO- RESULTADOS GENERALES)**

<b>VARIABLE</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>SEXO</b>	Mujeres	12	80.00%

	Varones	03	20.00%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	15	100.00%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	09	60.00%
	No ha sido víctima	06	40.00%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	06	40.00%
	No ha sido víctima	09	60.00%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	02	13.33%
	Superior concluido	13	86.66%
<b>EDAD</b>	30 años o más	12	80.00%
	Menor de 30 años	03	20.00%
<b>TOTAL</b>		15 personas	100.00%

### 3.2. Mujeres víctimas del machismo

#### a. Descripción

La aplicación de la variable “machismo” como variable rectora a las 12 mujeres que afirman haber sido víctimas de machismo, determina que 07 de las participantes manifiestan haber sido víctimas de estereotipos, mientras 05 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 58.33% y 41.66%, respectivamente.

En lo que respecta a la discriminación, 04 participantes consideran haber sido víctima de ella y 08 no, lo cual corresponde al 33.33% y 66.66%, respectivamente. En cuanto al nivel educativo, 02 participantes manifestaron haber concluido el nivel educativo básico, mientras 10 el superior, lo cual corresponde al 16.66% y 83.33%, respectivamente. En lo concerniente a la edad, 09 participantes manifestaron tener 30 ó más años de edad, mientras 03 ser menor de 30 años, lo cual corresponde al 75.00% y 25.00%, respectivamente.

#### b. Explicación



De los resultados expuestos, se acredita que si bien 12 mujeres consideran haber sido víctimas de machismo, sólo 04 consideran haber sido víctimas de discriminación, lo cual revela que el universo investigado no identifica la relación que existe entre el machismo y la discriminación. De igual manera, 07 personas consideran haber sido víctimas de estereotipos, de lo que se desprende que poco más de la mitad de las encuestadas identifica que el machismo se produce como consecuencia de los estereotipos asignados a los varones y a las mujeres. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia del nivel educativo ni de la edad como condicionantes del machismo ni de la discriminación.

**MACHISMO COMO VARIABLE RECTORA**  
**(MUJERES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DEL MACHISMO)**

<b>VARIABLE</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>SEXO</b>	Mujeres	12	100.00%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	12	100.00%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	07	58.33%
	No ha sido víctima	05	41.66%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	04	33.33%
	No ha sido víctima	08	66.66%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	02	16.66%
	Superior concluido	10	83.33%
<b>EDAD</b>	30 años o más	09	75.00%
	Menor de 30 años	03	25.00%
<b>TOTAL</b>		12 personas	100.00%

### 3.3. Varones victimas del machismo

#### a. Descripción

La aplicación de la variable “machismo” como variable rectora a los 03 varones que afirman haber sido víctimas de machismo, determina que 02 de los participantes manifiestan haber sido víctimas de estereotipos, mientras 01 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 66.66% y 33.33%, respectivamente.

En lo que respecta a la discriminación, 02 participantes consideran haber sido víctima de ella y 01 no, lo cual corresponde al 66.66% y 33.33%, respectivamente. En cuanto al nivel educativo, 00 participantes manifestaron haber concluido el nivel educativo básico, mientras 03 el superior, lo cual corresponde al 00.00 y 100.00%, respectivamente. En lo concerniente a la edad, 03 participantes manifestaron tener 30 ó más años de edad, mientras 00 ser menor de 30 años, lo cual corresponde al 100.00 y 00.00%, respectivamente.

#### **b. Explicación**

De los resultados expuestos, se acredita que si bien 03 varones consideran haber sido víctimas de machismo, 02 consideran haber sido víctimas de discriminación, lo cual revela que el universo investigado identifica la relación que existe entre el machismo y la discriminación. De igual manera, 02 personas consideran haber sido víctimas de estereotipos, de lo que se desprende que casi la totalidad de los encuestados identifica la relación entre los estereotipos y el machismo. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia del nivel educativo ni de la edad como condicionantes del machismo ni de la discriminación.

#### **MACHISMO COMO VARIABLE RECTORA (VARONES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DEL MACHISMO)**

<b>VARIABLE</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>SEXO</b>	Varones	03	100.00%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	03	100.00%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	02	66.66%
	No ha sido víctima	01	33.33%

<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	02	66.66%
	No ha sido víctima	01	33.33%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	00	00.00%
	Superior concluido	03	100.00%
<b>EDAD</b>	30 años o más	03	100.00%
	Menor de 30 años	00	00.00%
<b>TOTAL</b>		03 personas	100.00%

#### **4. LOS ESTEREOTIPOS COMO VARIABLE RECTORA EN EL ANÁLISIS**

##### **4.1. Víctimas de estereotipos**

###### **a. Descripción**

La aplicación de la variable “estereotipos” como variable rectora a las 14 personas que se consideran víctimas de tal, revela que 09 son mujeres y 05 son varones, lo cual corresponde al 64.28% y 35.71%, respectivamente. Asimismo, de este universo, 09 de los participantes manifiestan haber sido víctimas de machismo, mientras 05 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 64.28% y 35.71%, respectivamente.

En lo que respecta a discriminación, 06 participantes afirman haber sido víctimas, mientras 08 sostienen no haberlo sido, lo cual corresponde al 42.85% y 57.14%, respectivamente. En cuanto al nivel educativo, 01 participantes manifestaron haber concluido el nivel educativo básico, mientras 13 el superior, lo cual corresponde al 07.14% y 92.85%, respectivamente. En lo concerniente a la edad, 13 participantes manifestaron tener 30 ó más años de edad, mientras 01 ser menor de 30 años, lo cual corresponde al 92.85% y 07.14%, respectivamente.

###### **b. Explicación**

De los resultados expuestos, se acredita que de las 14 personas consideran haber sido víctimas de estereotipos, siendo que la mayor incidencia se da sobre las mujeres. Por otro lado, se constata que sólo 09 personas consideran haber sido víctimas de machismo y 06 de discriminación, lo cual revela que el universo investigado no identifica plenamente la relación entre dichas variables. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia del nivel educativo ni de la edad como condicionantes del machismo ni de la discriminación.

**ESTEREOTIPOS COMO VARIABLE RECTORA**  
**(VÍCTIMAS DE ESTEREOTIPOS- RESULTADOS GENERALES)**

<b>VARIABLE</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>SEXO</b>	Mujeres	09	64.28%
	Varones	05	35.71%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	09	64.28%
	No ha sido víctima	05	35.71%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	14	100.00%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	06	42.85%
	No ha sido víctima	08	57.14%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	01	07.14%
	Superior concluido	13	92.85%
<b>EDAD</b>	30 años o más	13	92.85%
	Menor de 30 años	01	07.14%
<b>TOTAL</b>		14 personas	100.00%

#### **4.2. Mujeres víctimas de estereotipos**

##### **a. Descripción**

La aplicación de la variable “estereotipos” como variable rectora a las 09 mujeres que se consideran víctimas de tales, revela que 07 manifiestan haber sido víctimas de machismo, mientras 02 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 77.77% y 22.22%, respectivamente.

En lo que respecta a discriminación, 03 participantes afirman haber sido víctimas, mientras 06 sostienen no haberlo sido, lo cual corresponde al 33.33% y 66.66%, respectivamente. En cuanto al nivel educativo, 01 participantes manifestaron haber concluido el nivel educativo básico, mientras 08 el superior, lo cual corresponde al 11.11% y 88.88%, respectivamente. En lo concerniente a la edad, 08 participantes manifestaron tener 30 ó más años de edad, mientras 01 ser menor de 30 años, lo cual corresponde al 88.88% y 11.11%, respectivamente.

#### **b. Explicación**

De los resultados expuestos, se acredita que de las 09 mujeres que consideran haber sido víctimas de estereotipos, 07 personas consideran haber sido víctimas de machismo y 03 personas consideran haber sido víctimas de discriminación, lo cual revela que el universo investigado no identifica la relación entre las variables discriminación y estereotipos. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia del nivel educativo ni de la edad como condicionantes del machismo ni de la discriminación.

### **ESTEREOTIPOS COMO VARIABLE RECTORA (MUJERES VÍCTIMAS DE ESTEREOTIPOS)**

<b>VARIABLE</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>SEXO</b>	Mujeres	09	100.00%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	07	77.77%
	No ha sido víctima	02	22.22%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	09	100.00%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	03	33.33%
	No ha sido víctima	06	66.66%

<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	01	11.11%
	Superior concluido	08	88.88%
<b>EDAD</b>	30 años o más	08	88.88%
	Menor de 30 años	01	11.11%
<b>TOTAL</b>		09 personas	100.00%

#### 4.2.3. Varones víctimas de estereotipos

##### a. Descripción

La aplicación de la variable “estereotipos” como variable rectora a los 05 varones que se consideran víctimas de tales, revela que 02 manifiestan haber sido víctimas de machismo, mientras 03 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 40.00% y 60.00%, respectivamente.

En lo que respecta a discriminación, 03 participantes afirman haber sido víctimas, mientras 02 sostienen no haberlo sido, lo cual corresponde al 60.00% y 40.00%, respectivamente. En cuanto al nivel educativo, 00 participantes manifestaron haber concluido el nivel educativo básico, mientras 05 el superior, lo cual corresponde al 00.00% y 100.00%, respectivamente. En lo concerniente a la edad, 05 participantes manifestaron tener 30 ó más años de edad, mientras 00 ser menor de 30 años, lo cual corresponde al 100.00% y 00.00%, respectivamente.

##### b. Explicación

De los resultados expuestos, se acredita que de los 05 varones que se consideran haber sido víctimas de estereotipos, 02 personas consideran haber sido víctimas de machismo y 03 personas consideran haber sido víctimas de discriminación, lo cual revela que el universo investigado no identifica la relación entre las mencionadas variables. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia del nivel educativo ni de la edad como condicionantes del machismo ni de la discriminación.

**ESTEREOTIPOS COMO VARIABLE RECTORA  
(VARONES VÍCTIMAS DE ESTEREOTIPOS)**

VARIABLE	CATEGORÍA	RESULTADO	
<b>SEXO</b>	Varones	05	100.00%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	02	40.00%
	No ha sido víctima	03	60.00%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	05	100.00%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	03	60.00%
	No ha sido víctima	02	40.00%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	00	00.00%
	Superior concluido	05	100.00%
<b>EDAD</b>	30 años o más	05	100.00%
	Menor de 30 años	00	00.00%
<b>TOTAL</b>		05 personas	100.00%

## **5. LA DISCRIMINACIÓN COMO VARIABLE RECTORA EN EL ANÁLISIS**

### **5.1. Resultados generales:**

#### **a. Descripción**

La aplicación de la variable “discriminación” como variable rectora a las 12 personas que se consideran discriminadas revela que 04 son mujeres y 08 son varones, lo cual corresponde al 33.33% y 66.66%, respectivamente. Asimismo, de este universo 06 han sido víctimas de machismo, mientras 06 consideran que no, lo cual corresponde al 50.00% y 50.00%, respectivamente.

Por otro lado, 06 de los participantes manifiestan haber sido víctimas de estereotipos, mientras 06 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 50.00% y 50.00%, respectivamente.

En lo que respecta a la edad, 11 participantes manifestaron tener 30 ó más años de edad, mientras 01 ser menor de 30 años, lo cual corresponde al 91.66% y 08.33%, respectivamente.

## **b. Explicación**

De los resultados expuestos, se acredita que de las 12 personas que consideran haber sido víctimas de discriminación, existe mayor índice en el caso de los varones. De igual manera, 06 personas consideran haber sido víctimas de machismo y 06 de estereotipos, lo cual revela que si bien la discriminación no necesariamente se da por machismo, sí se configura por estereotipos, lo cual nos lleva a la conclusión de que el universo de personas discriminadas no identifica la relación entre las variables estereotipos y discriminación. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia del nivel educativo ni de la edad como condicionantes del machismo ni de la discriminación.

### **DISCRIMINACIÓN COMO VARIABLE RECTORA (PERSONAS DISCRIMINADAS- RESULTADOS GENERALES)**

<b>VARIABLE</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>SEXO</b>	Mujeres	04	33.33%
	Varones	08	66.66%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	06	50.00%
	No ha sido víctima	06	50.00%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	06	50.00%
	No ha sido víctima	06	50.00%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	12	100.00%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	01	08.33%



	Superior concluido	11	91.66%
<b>EDAD</b>	30 años o más	11	91.66%
	Menor de 30 años	01	08.33%
<b>TOTAL</b>		12 personas	100.00%

## 5.2. Mujeres discriminadas

### a. Descripción

La aplicación de la variable “discriminación” como variable rectora a las 04 mujeres que se consideran discriminadas revela que 04 han sido víctimas de machismo, mientras 00 consideran que no, lo cual corresponde al 100.00% y 00.00%, respectivamente.

Por otro lado, 03 de las participantes manifiestan haber sido víctimas de estereotipos, mientras 01 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 75.00% y 25.00%, respectivamente. En lo referente al nivel educativo, 00 señalan haber concluido el básico, mientras 04 el superior, lo cual corresponde al 00.00% y 100.00%, respectivamente.

En lo que respecta a la edad, 04 participantes manifestaron tener 30 ó más años de edad, mientras 00 ser menor de 30 años, lo cual corresponde al 100.00% y 00.00%, respectivamente.

### b. Explicación

De los resultados expuestos, se acredita que de las 04 mujeres que consideran haber sido víctimas de discriminación, 04 personas consideran haber sido víctimas de machismo y 03 de estereotipos, lo cual revela que en dicho universo se identifica la relación entre las mencionadas variables. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia del nivel educativo ni de la edad como condicionantes del machismo ni de la discriminación.

**DISCRIMINACIÓN COMO VARIABLE RECTORA  
(MUJERES DISCRIMINADAS)**

VARIABLE	CATEGORÍA	RESULTADO	
<b>SEXO</b>	Mujeres	04	100.00%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	04	100.00%
	No ha sido víctima	00	00.00%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	03	75.00%
	No ha sido víctima	01	25.00%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	04	100.00%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	00	00.00%
	Superior concluido	04	100.00%
<b>EDAD</b>	30 años o más	04	100.00%
	Menor de 30 años	00	<b>VÍCTIM</b>
<b>TOTAL</b>		04 personas	100.00%

### 5.3. Varones discriminados

#### a. Descripción

La aplicación de la variable “discriminación” como variable rectora a los 08 varones que se consideran discriminados revela que 02 han sido víctimas de machismo, mientras 06 consideran que no, lo cual corresponde al 25.00% y 75.00%, respectivamente.

Por otro lado, 03 de los participantes manifiestan haber sido víctimas de estereotipos, mientras 05 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 37.50% y 62.50%, respectivamente. En lo referente al nivel educativo, 01 señala haber concluido el básico, mientras 07 el superior, lo cual corresponde al 12.50% y 87.50%, respectivamente.

En lo que respecta a la edad, 07 participantes manifestaron tener 30 ó más años de edad, mientras 01 ser menor de 30 años, lo cual corresponde al 87.50% y 12.50%, respectivamente.

## **b. Explicación**

De los resultados expuestos, se acredita que de los 08 varones que consideran haber sido víctimas de discriminación, 02 personas consideran haber sido víctimas de machismo y 03 de estereotipos, lo cual revela que en dicho universo no se identifica la relación entre las mencionadas variables. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia del nivel educativo ni de la edad como condicionantes del machismo ni de la discriminación.

### **DISCRIMINACIÓN COMO VARIABLE RECTORA (VARONES DISCRIMINADOS)**

<b>VARIABLE</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>SEXO</b>	Varones	08	100.00%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	02	25.00%
	No ha sido víctima	06	75.00%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	03	37.50%
	No ha sido víctima	05	62.50%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	08	100.00%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	01	12.50%
	Superior concluido	07	87.50%
<b>EDAD</b>	30 años o más	07	87.50%
	Menor de 30 años	01	12.50%
<b>TOTAL</b>		08 personas	100.00%

## **6. EL NIVEL EDUCATIVO COMO VARIABLE RECTORA EN EL ANÁLISIS**

## **6.1. Resultados generales en el nivel educativo básico**

### **a. Descripción**

La aplicación de la variable “nivel educativo” como variable rectora a las 06 personas con estudios básicos concluidos (pero que no han concluido el superior) revela que 05 son mujeres y 01 es varón, lo cual corresponde al 83.33% y 16.16%, respectivamente. Asimismo, de este universo 02 han sido víctimas de machismo, mientras 04 consideran que no, lo cual corresponde al 33.33% y 66.66%, respectivamente.

Por otro lado, 01 de los participante manifiesta haber sido víctima de estereotipos, mientras 05 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 16.66% y 83.33%, respectivamente. De igual manera, 01 participante considera haber sido víctimas de discriminación, mientras 05 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 16.66% y 83.33%, respectivamente.

En lo que respecta a la edad, 01 participante manifiesta tener 30 ó más años de edad, mientras 05 ser menor de 30 años, lo cual corresponde al 16.66% y 83.33%, respectivamente.

### **b. Explicación**

De los resultados expuestos, se acredita que 06 personas han completado el nivel básico de educación, mas no así el superior, el mayor índice corresponde a las mujeres. De tal universo se desprende que 02 personas consideran haber sido víctimas de machismo, 01 de estereotipos y 01 de discriminación, mientras 04 niegan haberlo sido de machismo y 05 de estereotipos y discriminación. Ello revela que entre las personas que sólo han concluido el nivel básico de educación existe una mayor tendencia a no sentirse víctimas de estereotipos, de discriminación ni de machismo. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia de la edad como condicionantes del machismo ni de la discriminación.

**NIVEL EDUCATIVO COMO VARIABLE RECTORA  
(NIVEL BÁSICO- RESULTADOS GENERALES)**

<b>VARIABLE</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>SEXO</b>	Mujeres	05	83.33%
	Varones	01	16.66%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	02	33.33%
	No ha sido víctima	04	66.66%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	01	16.66%
	No ha sido víctima	05	83.33%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	01	16.66%
	No ha sido víctima	05	83.33%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	06	100.00%
<b>EDAD</b>	30 años o más	01	16.66%
	Menor de 30 años	05	83.33%
<b>TOTAL</b>		06 personas	100.00%

## 6.2. Resultados generales en el nivel educativo superior

### a. Descripción

La aplicación de la variable “nivel educativo” como variable rectora a las 37 personas con estudios superiores concluidos revela que 16 son mujeres y 21 son varones, lo cual corresponde al 43.24% y 56.75%, respectivamente. Asimismo, de este universo 12 han sido víctimas de machismo, mientras 25 consideran que no, lo cual corresponde al 32.43% y 67.56%, respectivamente.

Por otro lado, 13 de los participantes manifiestan haber sido víctimas de estereotipos, mientras 24 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 35.13% y 64.86%, respectivamente.

De igual manera, 11 participantes consideran haber sido víctimas de discriminación, mientras 26 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 29.72% y 70.27%, respectivamente.

En lo que respecta a la edad, 34 participantes manifestaron tener 30 ó más años de edad, mientras 03 ser menor de 30 años, lo cual corresponde al 91.89% y 08.10%, respectivamente.

## **b. Explicación**

De los resultados expuestos, se acredita que 37 personas han completado el nivel superior de educación, siendo el mayor índice correspondiente a los varones. De tal universo se desprende que 12 personas consideran haber sido víctimas de machismo, 13 de estereotipos y 11 de discriminación, mientras 25 niegan haberlo sido de machismo y 24 de estereotipos y discriminación. Ello revela que entre las personas que han concluido el nivel superior de educación existe una mayor tendencia a no sentirse víctimas de estereotipos, de discriminación ni de machismo. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia de la edad como condicionantes del machismo ni de la discriminación.

### **NIVEL EDUCATIVO COMO VARIABLE RECTORA (NIVEL SUPERIOR- RESULTADOS GENERALES)**

<b>VARIABLE</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>SEXO</b>	Mujeres	16	43.24%
	Varones	21	56.75%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	12	32.43%
	No ha sido víctima	25	67.56%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	13	35.13%
	No ha sido víctima	24	64.86%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	11	29.72%
	No ha sido víctima	26	70.27%

<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Superior concluido	37	100.00%
<b>EDAD</b>	30 años o más	34	91.89%
	Menor de 30 años	03	08.10%
<b>TOTAL</b>		37 personas	100.00%

### 6.3. Mujeres:

#### 6.3.1. Nivel educativo básico

##### a. Descripción

La aplicación de la variable “nivel educativo” como variable rectora a las 05 mujeres con estudios básicos concluidos revela que 02 han sido víctimas de machismo, mientras 03 consideran que no, lo cual corresponde al 40.00% y 60.00%, respectivamente.

Por otro lado, 01 de las participantes manifiesta haber sido víctimas de estereotipos, mientras 04 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 20.00% y 80.00%, respectivamente. De igual manera, 00 participantes consideran haber sido víctimas de discriminación, mientras 05 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 00.00% y 100.00%, respectivamente.

En lo que respecta a la edad, 00 participantes manifestaron tener 30 ó más años de edad, mientras 05 ser menor de 30 años, lo cual corresponde al 00.00% y 100.00%, respectivamente.

##### b. Explicación

De los resultados expuestos, se acredita que 05 mujeres han completado el nivel básico de educación, mas no así el superior. De tal universo se desprende que 02 personas consideran haber sido víctimas de machismo, 01 de estereotipos y 00 de discriminación, mientras 03

niegan haberlo sido de machismo, 04 de estereotipos y 05 de discriminación. Ello revela que entre las personas que sólo han concluido el nivel básico de educación existe una mayor tendencia a no sentirse víctimas de estereotipos, de discriminación ni de machismo. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia de la edad como condicionantes del machismo ni de la discriminación.

### NIVEL EDUCATIVO COMO VARIABLE RECTORA (NIVEL BÁSICO-MUJERES)

VARIABLE	CATEGORÍA	RESULTADO	
<b>SEXO</b>	Mujeres	05	100.00%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	02	40.00%
	No ha sido víctima	03	60.00%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	01	20.00%
	No ha sido víctima	04	80.00%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	00	00.00%
	No ha sido víctima	05	100.00%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	05	100.00%
<b>EDAD</b>	30 años o más	00	00.00%
	Menor de 30 años	05	100.00%
<b>TOTAL</b>		05 personas	100.00%

#### 6.3.2. Nivel educativo superior

##### a. Descripción

La aplicación de la variable “nivel educativo” como variable rectora a las 16 mujeres con estudios superiores concluidos revela que 09 han sido víctimas de machismo, mientras 07 consideran que no, lo cual corresponde al 56.25% y 43.65%, respectivamente.



Por otro lado, 08 de las participantes manifiestan haber sido víctimas de estereotipos, mientras 08 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 50.00% y 50.00%, respectivamente. De igual manera, 04 participantes consideran haber sido víctimas de discriminación, mientras 12 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 25.00% y 75.00%, respectivamente.

En lo que respecta a la edad, 14 participantes manifestaron tener 30 ó más años de edad, mientras 02 ser menor de 30 años, lo cual corresponde al 87.50% y 12.50%, respectivamente.

## **b. Explicación**

De los resultados expuestos, se acredita que 16 mujeres han completado el nivel superior de educación. De tal universo se desprende que 09 personas consideran haber sido víctimas de machismo, 08 de estereotipos y 04 de discriminación, mientras 07 niegan haberlo sido de machismo, 08 de estereotipos y 12 de discriminación. Ello revela que entre las personas que han concluido el nivel superior de educación existe una mayor tendencia a no sentirse víctimas de estereotipos, de discriminación ni de machismo. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia de la edad como condicionantes del machismo ni de la discriminación.

### **NIVEL EDUCATIVO COMO VARIABLE RECTORA (NIVEL SUPERIOR-MUJERES)**

<b>VARIABLE</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>SEXO</b>	Mujeres	16	100.00%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	09	56.25%
	No ha sido víctima	07	43.65%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	08	50.00%
	No ha sido víctima	08	50.00%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	04	25.00%
	No ha sido víctima	12	75.00%

<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Superior concluido	16	100.00%
<b>EDAD</b>	30 años o más	14	87.50%
	Menor de 30 años	02	12.50%
<b>TOTAL</b>		16 personas	100.00%

## 6.4. Varones

### 6.4.1. Nivel educativo básico

#### a. Descripción

La aplicación de la variable “nivel educativo” como variable rectora al único participante varón con estudios básicos concluidos revela que este ha sido víctima de machismo, lo cual corresponde al 100.00%.

Por otro lado, manifiesta haber sido víctima de estereotipos, lo cual corresponde al 100.00%. De igual manera, considera haber sido víctima de discriminación, lo cual corresponde al 100.00%. En lo que respecta a la edad, manifiesta tener 30 ó más años de edad, lo cual corresponde al 100.00%.

#### b. Explicación

De los resultados expuestos, se acredita que 01 varón ha completado el nivel básico de educación, mas no así el superior. De tal universo se desprende que 00 personas consideran haber sido víctimas de machismo, 00 de estereotipos y 01 de discriminación, mientras 01 niegan haberlo sido de machismo, 01 de estereotipos y 00 de discriminación. Ello revela que entre las personas que sólo han concluido el nivel básico de educación existe una mayor tendencia a no sentirse víctimas de estereotipos, de discriminación ni de machismo. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia de la edad como condicionantes del machismo ni de la discriminación.

**NIVEL EDUCATIVO COMO VARIABLE RECTORA  
(NIVEL BÁSICO-VARONES)**

<b>VARIABLE</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>SEXO</b>	Varones	01	100.00%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	00	00.00%
	No ha sido víctima	01	100.00%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	00	00.00%
	No ha sido víctima	01	100.00%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	01	100.00%
	No ha sido víctima	00	00.00%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	01	100.00%
<b>EDAD</b>	30 años o más	01	100.00%
	Menor de 30 años	00	00.00%
<b>TOTAL</b>		01 personas	100.00%

#### 6.4.2. Nivel educativo superior

##### a. Descripción

La aplicación de la variable “nivel educativo” como variable rectora a los 21 varones con estudios superiores concluidos revela que 03 han sido víctimas de machismo, mientras 18 consideran que no, lo cual corresponde al 14.28% y 85.71%, respectivamente.

Por otro lado, 05 de los participantes manifiestan haber sido víctimas de estereotipos, mientras 16 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 23.80% y 76.19%, respectivamente. De igual manera, 07 participantes consideran haber sido víctimas de discriminación, mientras 14 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 33.33% y 66.66%, respectivamente.

En lo que respecta a la edad, 20 participantes manifestaron tener 30 ó más años de edad, mientras 01 ser menor de 30 años, lo cual corresponde al 95.23% y 04.76%, respectivamente.

## **b. Explicación**

De los resultados expuestos, se acredita que 21 varones han completado el nivel superior de educación. De tal universo se desprende que 03 personas consideran haber sido víctimas de machismo, 05 de estereotipos y 07 de discriminación, mientras 18 niegan haberlo sido de machismo, 16 de estereotipos y 14 de discriminación. Ello revela que entre las personas que han concluido el nivel superior de educación existe una mayor tendencia a no sentirse víctimas de estereotipos, de discriminación ni de machismo. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia de la edad como condicionantes del machismo ni de la discriminación.

### **NIVEL EDUCATIVO COMO VARIABLE RECTORA (NIVEL SUPERIOR-VARONES)**

<b>VARIABLE</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>SEXO</b>	Varones	21	100.00%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	03	14.28%
	No ha sido víctima	18	85.71%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	05	23.80%
	No ha sido víctima	16	76.19%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	07	33.33%
	No ha sido víctima	14	66.66%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Superior concluido	21	100.00%
<b>EDAD</b>	30 años o más	20	95.23%
	Menor de 30 años	01	04.76%
<b>TOTAL</b>		21 personas	100.00%

## **7. LA EDAD COMO VARIABLE RECTORA EN EL ANÁLISIS**

### **7.1. Resultados generales:**

#### **7.1.1. Personas de 30 ó más años de edad**

##### **a. Descripción**

La aplicación de la variable “edad” como variable rectora a las 34 personas de 30 ó más años de edad, revela que 14 son mujeres y 20 son varones, lo cual corresponde al 41.17% y 58.82%, respectivamente. Asimismo, de este universo, 12 de los participantes manifiestan haber sido víctimas de machismo, mientras 22 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 35.29% y 64.70%, respectivamente.

En lo que respecta a los estereotipos, 13 participantes consideran haber sido víctimas de ellos, mientras 21 sostienen que no, lo cual corresponde al 38.23% y 61.76%, respectivamente. Respecto a la discriminación, 11 participantes afirman haber sido víctimas, mientras 23 sostienen no haberlo sido, lo cual corresponde al 32.35% y 67.64%, respectivamente. En cuanto al nivel educativo, 01 participante manifestó haber concluido el nivel educativo básico, mientras 33 el superior, lo cual corresponde al 02.94% y 97.05%, respectivamente.

##### **b. Explicación**

De los resultados expuestos, se acredita que 34 personas tienen 30 ó más años de edad, correspondiendo el mayor número de casos a los varones. De tal universo se desprende que 12 personas consideran haber sido víctimas de machismo, 13 de estereotipos y 11 de discriminación, mientras 22 niegan haberlo sido de machismo, 21 de estereotipos y 23 de discriminación. Ello revela que entre las personas de 30 ó más años de edad existe una mayor tendencia a no sentirse víctimas de estereotipos, de discriminación ni de machismo.

Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia del nivel educativo como condicionante del machismo ni de la discriminación.

**EDAD COMO VARIABLE RECTORA**  
**(PERSONAS DE 30 Ó MÁS AÑOS DE EDAD- RESULTADOS GENERALES)**

VARIABLE	CATEGORÍA	RESULTADO	
<b>SEXO</b>	Mujeres	14	41.17%
	Varones	20	58.82%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	12	35.29%
	No ha sido víctima	22	64.70%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	13	38.23%
	No ha sido víctima	21	61.76%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	11	32.35%
	No ha sido víctima	23	67.64%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	01	02.94%
	Superior concluido	33	97.05%
<b>EDAD</b>	30 años o más	34	100.00%
<b>TOTAL</b>		34 personas	100.00%

### 7.1.2. Personas menores de 30 años de edad

#### a. Descripción

La aplicación de la variable “edad” como variable rectora a las 09 personas menores de 30 años de edad, revela que 07 son mujeres y 02 son varones, lo cual corresponde al 77.77% y 22.22%, respectivamente. Asimismo, de este universo, 03 de los participantes manifiestan haber sido víctimas de machismo, mientras 06 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 33.33% y 66.66%, respectivamente.

En lo que respecta a los estereotipos, 01 participante considera haber sido víctima de ellos, mientras 08 sostienen que no, lo cual corresponde al 11.11% y 88.88%, respectivamente. Respecto a la discriminación, 01 participante afirma haber sido víctima, mientras 09 sostienen no haberlo sido, lo cual corresponde al 11.11% y 88.88%, respectivamente. En cuanto al nivel educativo, 05 participantes manifestaron haber concluido el nivel educativo básico, mientras 04 el superior, lo cual corresponde al 55.55% y 44.44%, respectivamente.

## **b. Explicación**

De los resultados expuestos, se acredita la presencia de 09 personas menores de 30 años de edad, correspondiendo el mayor número de casos a las mujeres. De tal universo se desprende que 03 personas consideran haber sido víctimas de machismo, 01 de estereotipos y 01 de discriminación, mientras 06 niegan haberlo sido de machismo, 08 de estereotipos y 08 de discriminación. Ello revela que entre las personas menores de 30 años de edad existe una mayor tendencia a no sentirse víctimas de estereotipos, de discriminación ni de machismo. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia del nivel educativo como condicionante del machismo ni de la discriminación.

### **EDAD COMO VARIABLE RECTORA**

#### **(PERSONAS MENORES DE 30 AÑOS DE EDAD- RESULTADOS GENERALES)**

<b>VARIABLE</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>SEXO</b>	Mujeres	07	77.77%
	Varones	02	22.22%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	03	33.33%
	No ha sido víctima	06	66.66%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	01	11.11%
	No ha sido víctima	08	88.88%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	01	11.11%
	No ha sido víctima	08	88.88%
<b>NIVEL</b>	Básico concluido	05	55.55%

<b>EDUCATIVO</b>			
	Superior concluido	04	44.44%
<b>EDAD</b>	Menores de 30 años	09	100.00%
<b>TOTAL</b>		09 personas	100.00%

## 7.2. Mujeres:

### 7.2.1. Mujeres de 30 ó más años de edad

#### a. Descripción

La aplicación de la variable “edad” como variable rectora a las 14 mujeres de 30 ó más años de edad, revela que 09 participantes manifiestan haber sido víctimas de machismo, mientras 05 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 64.28% y 35.71%, respectivamente.

En lo que respecta a los estereotipos, 08 participantes consideran haber sido víctimas de ellos, mientras 06 sostienen que no, lo cual corresponde al 57.14% y 42.85%, respectivamente. Respecto a la discriminación, 04 participantes afirman haber sido víctimas, mientras 10 sostienen no haberlo sido, lo cual corresponde al 28.57% y 71.42%, respectivamente. En cuanto al nivel educativo, 00 participante manifestó haber concluido el nivel educativo básico, mientras 14 el superior, lo cual corresponde al 00.00% y 100.00%, respectivamente.

#### b. Explicación

De los resultados expuestos, se acredita que 14 mujeres tienen 30 ó más años de edad. De tal universo se desprende que 09 personas consideran haber sido víctimas de machismo, 08 de estereotipos y 04 de discriminación, mientras 05 niegan haberlo sido de machismo, 06 de estereotipos y 00 de discriminación. Ello revela que entre las mujeres de 30 ó más años de edad existe una mayor tendencia a sentirse víctimas de machismo y de estereotipos, pero no de discriminación, de lo que se desprende la inexistencia de asociación entre dicha



población del machismo y de los estereotipos con la discriminación. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia del nivel educativo como condicionante del machismo ni de la discriminación.

**EDAD COMO VARIABLE RECTORA  
(MUJERES DE 30 Ó MÁS AÑOS DE EDAD)**

<b>VARIABLE</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>SEXO</b>	Mujeres	14	100.00%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	09	64.28%
	No ha sido víctima	05	35.71%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	08	57.14%
	No ha sido víctima	06	42.85%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	04	28.57%
	No ha sido víctima	10	71.42%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	00	00.00%
	Superior concluido	14	100.00%
<b>EDAD</b>	30 años o más	14	100.00%
<b>TOTAL</b>		14 personas	100.00%

### 7.2.2. Mujeres menores de 30 años de edad

#### a. Descripción

La aplicación de la variable “edad” como variable rectora a las 07 mujeres menores de 30 años de edad, revela que 03 participantes manifiestan haber sido víctimas de machismo, mientras 04 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 42.85% y 57.14%, respectivamente.

En lo que respecta a los estereotipos, 01 participante considera haber sido víctima de ellos, mientras 06 sostienen que no, lo cual corresponde al 14.28% y 85.71%, respectivamente.

Respecto a la discriminación, 00 participantes afirman haber sido víctimas, mientras 07 sostienen no haberlo sido, lo cual corresponde al 00.00% y 100.00%, respectivamente. En cuanto al nivel educativo, 05 participantes manifestaron haber concluido el nivel educativo básico, mientras 02 el superior, lo cual corresponde al 71.42% y 28.57%, respectivamente.

## **b. Explicación**

De los resultados expuestos, se acredita que 07 mujeres menores de 30 años de edad. De tal universo se desprende que 03 personas consideran haber sido víctimas de machismo, 01 de estereotipos y 00 de discriminación, mientras 04 niegan haberlo sido de machismo, 06 de estereotipos y 07 de discriminación. Ello revela que entre las mujeres menores de 30 años de edad existe una mayor tendencia a no sentirse víctimas de estereotipos, de discriminación ni de machismo. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia del nivel educativo como condicionante del machismo ni de la discriminación.

### **EDAD COMO VARIABLE RECTORA (MUJERES MENORES DE 30 Ó MÁS AÑOS DE EDAD)**

<b>VARIABLE</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>SEXO</b>	Mujeres	07	100.00%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	03	42.85%
	No ha sido víctima	04	57.14%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	01	14.28%
	No ha sido víctima	06	85.71%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	00	00.00%
	No ha sido víctima	07	100.00%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	05	71.42%
	Superior concluido	02	28.57%
<b>EDAD</b>	Menores de 30 años	07	100.00%

<b>TOTAL</b>	07 personas	100.00%
--------------	-------------	---------

### **7.3. Varones:**

#### **7.3.1. Varones de 30 ó más años de edad**

##### **a. Descripción**

La aplicación de la variable “edad” como variable rectora a los 20 varones de 30 ó más años de edad, revela que 03 participantes manifiestan haber sido víctimas de machismo, mientras 17 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 15.00% y 85.00%, respectivamente.

En lo que respecta a los estereotipos, 05 participantes consideran haber sido víctimas de ellos, mientras 15 sostienen que no, lo cual corresponde al 25.00% y 75.00%, respectivamente. Respecto a la discriminación, 07 participantes afirman haber sido víctimas, mientras 13 sostienen no haberlo sido, lo cual corresponde al 35.00% y 65.00%, respectivamente. En cuanto al nivel educativo, 01 participante manifestó haber concluido el nivel educativo básico, mientras 19 el superior, lo cual corresponde al 05.00% y 95.00%, respectivamente.

##### **b. Explicación**

De los resultados expuestos, se acredita que 20 varones tienen 30 ó más años de edad De tal universo se desprende que 03 personas consideran haber sido víctimas de machismo, 05 de estereotipos y 07 de discriminación, mientras 17 niegan haberlo sido de machismo, 15 de estereotipos y 13 de discriminación. Ello revela que entre los varones de 30 ó más años de edad existe una mayor tendencia a no sentirse víctimas de estereotipos, de discriminación ni de machismo. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia del nivel educativo como condicionante del machismo ni de la discriminación.

#### **EDAD COMO VARIABLE RECTORA**

(VARONES DE 30 Ó MÁS AÑOS DE EDAD)

VARIABLE	CATEGORÍA	RESULTADO	
SEXO	Varones	20	100.00%
MACHISMO	Sí ha sido víctima	03	15.00%
	No ha sido víctima	17	85.00%
ESTEREOTIPOS	Sí ha sido víctima	05	25.00%
	No ha sido víctima	15	75.00%
DISCRIMINACIÓN	Sí ha sido víctima	07	35.00%
	No ha sido víctima	13	65.00%
NIVEL EDUCATIVO	Básico concluido	01	05.00%
	Superior concluido	19	95.00%
EDAD	30 años o más	20	100.00%
TOTAL		20 personas	100.00%

### 7.3.2. Varones menores de 30 años de edad

#### a. Descripción

La aplicación de la variable “edad” como variable rectora a los 02 varones menores de 30 años de edad, revela que 00 participantes manifiestan haber sido víctimas de machismo, mientras 02 niegan haberlo sido, lo cual corresponde al 00.00% y 100.00%, respectivamente.

En lo que respecta a los estereotipos, 00 participantes consideran haber sido víctimas de ellos, mientras 02 sostienen que no, lo cual corresponde al 00.00% y 100.00%, respectivamente. Respecto a la discriminación, 01 participante afirma haber sido víctimas, mientras 01 sostiene no haberlo sido, lo cual corresponde al 50.00% y 50.00%, respectivamente. En cuanto al nivel educativo, 00 participante manifestó haber concluido el

nivel educativo básico, mientras 02 el superior, lo cual corresponde al 00.00% y 100.00%, respectivamente.

## **b. Explicación**

De los resultados expuestos, se acredita que 02 varones tienen menos de 30 años de edad. De tal universo se desprende que 00 personas consideran haber sido víctimas de machismo, 00 de estereotipos y 01 de discriminación, mientras 02 niegan haberlo sido de machismo, 02 de estereotipos y 01 de discriminación. Ello revela que entre los varones menores de 30 años de edad existe una mayor tendencia a no sentirse víctimas de estereotipos, de discriminación ni de machismo. Cabe precisar que en este punto del análisis no se corrobora la incidencia del nivel educativo como condicionante del machismo ni de la discriminación.

### **EDAD COMO VARIABLE RECTORA (VARONES MENORES DE 30 AÑOS DE EDAD)**

<b>VARIABLE</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>SEXO</b>	Varones	02	100.00%
<b>MACHISMO</b>	Sí ha sido víctima	00	00.00%
	No ha sido víctima	02	100.00%
<b>ESTEREOTIPOS</b>	Sí ha sido víctima	00	00.00%
	No ha sido víctima	02	100.00%
<b>DISCRIMINACIÓN</b>	Sí ha sido víctima	01	50.00%
	No ha sido víctima	01	50.00%
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	Básico concluido	00	00.00%
	Superior concluido	02	100.00%
<b>EDAD</b>	Menores de 30 años	02	100.00%
<b>TOTAL</b>		02 personas	100.00%

